

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA



TESIS DOCTORAL

Elecciones y partidos políticos de Puerto Rico : 1809-1898

MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR
PRESENTADA POR

José María López Domínguez

Madrid, 2015



UNIVERSIDAD COMPLUTENSE



5327102689

TE;
1752

ELECCIONES Y PARTIDOS POLITICOS DE PUERTO RICO: 1809 - 1898

VOLUMEN I

Tesis elaborada para optar al Grado de Doctor en Ciencias Políticas por José María López Domínguez

Puerto Rico, Abril de 1976

INDICE

INDICE

PAGINAS

INTRODUCCION.....	2
I.- Naturaleza y motivación del trabajo	2
II.- Fuentes	6
III.- Clasificación de los datos	7
IV.- Estructura y Metodología	9
V.- Los sistemas de legalidad electoral en Puerto Rico	12
NOTAS Y ANEXOS	16
CAPITULO PRELIMINAR: DESARROLLO HISTORICO DE PUERTO RICO	32
NOTAS	43
PRIMER PERIODO: DESDE 1809 HASTA 1836:	
A.- Visión de conjunto	53
B.- Las tendencias políticas de Puerto Rico durante este período	54
C.- La Elección de Vocal ante la Junta Suprema..	56
NOTAS	58
1.1. LA ELECCION GENERAL DE 1810:	
A.- La Convocatoria	62
B.- Proceso electoral y resultados	62
C.- Las Instrucciones al Diputado	63
NOTAS	65

1.2. LA ELECCION GENERAL DE 1812-1813

A.- La Convocatoria.....	68
B.- Proceso electoral y resultados	69
C.- Comentarios	70
NOTAS Y ANEXOS	72

1.3. LA ELECCION PARTICULAR DE 1813-1814

A.- La Convocatoria	83
B.- Proceso electoral y resultados	83
C.- El regreso de Fernando VII y la restauración del Absolutismo	84
NOTAS Y ANEXOS	87

1.4. LA ELECCION GENERAL DE 1820

A.- El Pronunciamiento de Riego	94
B.- La Convocatoria	94
C.- Proceso electoral y resultados	95
D.- Comentarios	97
NOTAS Y ANEXOS	99

1.5. LA ELECCION GENERAL DE 1820-21

A.- La Convocatoria	112
B.- Proceso electoral y resultados	112
C.- Comentarios	113
NOTAS Y ANEXOS	115

1.6. LA ELECCION PARTICULAR DE 1822-23

A.- La Convocatoria	126
B.- Proceso electoral y resultados	127

-III-

C.- Segunda vuelta al régimen absolutista	127
NOTAS	130
1.7. LA ELECCION GENERAL DE 1834	
A.- La Promulgación del Estatuto Real	133
B.- La Convocatoria	134
C.- Proceso electoral y resultados	134
D.- Las Instrucciones a los Procuradores	135
NOTAS	136
1.8. LA ELECCION GENERAL DE 1836 (Primera)	
A.- La situación política de la Península	139
B.- La Convocatoria	140
C.- Proceso electoral y resultados	140
D.- Comentarios	140
NOTAS	141
1.9. LA ELECCION GENERAL DE 1836 (Tercera)	
A.- La situación política en la Península	143
B.- La Convocatoria	144
C.- Proceso electoral y resultados	144
NOTAS	146
EPILOGO: LA PERDIDA DE LA REPRESENTACION EN LAS CORTES	
A.- Los Antecedentes	148
B.- La discusión del Dictámen	150
C.- Conclusión	159
NOTAS Y ANEXOS	162

II PERIODO

2.1. LA ELECCION GENERAL DE 1869

A.- La situación política en la Península:	
1.- La Revolución de Septiembre	169
2.- La readmisión de los representantes de Puerto Rico	171
3.- El Decreto sobre sufragio universal y la convocatoria de elecciones	172
B.- La Convocatoria de elecciones en Puerto Rico ...	175
C.- Ambiente preelectoral: actividades de los grupos liberal y conservador.....	176
D.- Los Resultados	177
E.- Comentarios	179
NOTAS Y ANEXOS	181

2.2. LA ELECCION GENERAL DE 1871

A.- La situación política en la Península:	
1.- La proclamación del Duque de Aosta como Rey de España	194
B.- La situación político-partidista en Puerto Rico:	
1.- La aparición de los primeros partidos po- líticos	195
2.- La fundación del Partido Liberal Reformis- ta	198
3.- La fundación del Partido Liberal Conserva- dor	200
C.- La Convocatoria de elecciones en Puerto Rico.- La Campaña electoral	202

1.- El Partido Liberal Conservador	203
2.- El Partido Liberal Reformista	205
D.- Los Resultados	207
E.- Comentarios	208
NOTAS Y ANEXOS	210
2.3. LA ELECCION GENERAL DE 1872 (Primera)	
A.- La situación política en la Península	237
B.- La situación político-partidista en Puerto Rico:	
1.- El Pacto del Partido Liberal Reformista de Puerto Rico con el Democrático de Ruiz Zorrilla	237
2.- La Liga Nacional contra las Reformas y los Centros Hispano-Ultramarinos	241
C.- La Convocatoria de elecciones en Puerto Rico.- La Campaña electoral	242
1.- El comienzo de la manipulación electoral y del cunerismo en Puerto Rico	243
2.- La Campaña electoral	244
D.- Los Resultados	246
E.- Comentarios	246
NOTAS Y ANEXOS	248
2.4. LA ELECCION GENERAL DE 1872 (Segunda)	
A.- La situación política en la Península: La caída del Gobierno de Sagasta y la formación de uno nuevo por Ruiz Zorrilla	267
B.- La situación político-partidista en Puerto Rico.	267

C.- La Convocatoria de elecciones en Puerto Rico.- La Campaña electoral:	
1.- El asunto de la candidatura del Ministro de la Guerra	268
2.- La Asamblea del Partido Conservador	269
3.- El reemplazo de Corregidores y de Alcaldes.	271
D.- Los Resultados	271
E.- Comentarios	272
NOTAS Y ANEXOS	275

2.5. LA ELECCION GENERAL DE 1873

A.- La situación política en la Península	
1.- La Abdicación de Amadeo I y la proclama- ción de la República	290
2.- La Ley de 11 de Marzo de 1873	291
B.- La situación político-partidista en Puerto Rico..	291
C.- La convocatoria de elecciones en Puerto Rico.- La Campaña electoral	293
1.- El Partido Liberal Reformista	294
2.- El Partido Español sin condiciones	294
D.- Los Resultados	295
E.- Comentarios	295
NOTAS Y ANEXOS.....	299

2.6. LA ELECCION GENERAL DE 1876

A.- La situación política en la Península	
1.- La Restauración	311
2.- Las bases del sistema canovista	312

-VII-

B.- La situación político-partidista en Puerto Rico:	
1.- La política de la Restauración en Ultra-	
mar	314
2.- El segundo gobierno del general Sanz y Po-	
sse: retroceso en el desarrollo político	
de Puerto Rico	315
C.- La convocatoria de elecciones.- La campaña elec-	
toral	318
1.- El Partido Liberal Reformista	319
2.- El Partido Incondicional	319
D.- Los resultados	320
E.- Comentarios	320
NOTAS Y ANEXOS	324

2.7. LA ELECCION GENERAL DE 1879

A.- La situación política en la Península: Gobierno	
de Martínez Campos	340
B.- La situación político-partidista en Puerto Rico..	340
C.- La convocatoria de elecciones.- La campaña elec-	
toral	341
1.- La coalición electoral de conservadores y	
liberales	342
2.- La candidatura de conciliación	342
D.- Los Resultados	343
E.- Comentarios	344
NOTAS Y ANEXOS	346

2.8. LA ELECCION GENERAL DE 1881

A.- La situación política en la Península: La inicia-	
---	--

-VIII-

ción del turno pacífico de los partidos	359
B.- La situación político-partidista en Puerto Rico:	
1.- El problema de la legalidad vigente en Puerto Rico	360
2.- El Partido Liberal Reformista	361
3.- El Partido Incondicional	363
C.- La convocatoria de elecciones.- La campaña elec- toral	363
1.- El Partido Incondicional	364
2.- El Partido Liberal Reformista	364
D. Los resultados	365
E.- Comentarios	365
NOTAS Y ANEXOS	368
2.9. LA ELECCION GENERAL DE 1834	
A.- La situación política en la Península	390
B.- La situación político-partidista en Puerto Rico:	
1.- El Partido Liberal Reformista	390
2.- El Partido Español sin condiciones	392
C.- La convocatoria de elecciones.- La campaña elec- toral	393
D.- Los resultados	394
E.- Comentarios	394
NOTAS Y ANEXOS	397

FIN DEL PRIMER VOLUMEN

SEGUNDO VOLUMEN

2.10. LA ELECCION GENERAL DE 1886

A.- La situación política en la Península: la muerte de Alfonso XII y Gobierno de Sagasta	410
B.- La situación político-partidista en Puerto Rico:	
1.- El Partido Liberal Reformista: la crisis de la tendencia asimilista	410
2.- El Partido Español sin condiciones	415
C.- La convocatoria de elecciones.- La campaña electoral	416
D.- Los resultados	417
E.- Comentarios	417
NOTAS Y ANEXOS	420

2.11. LA ELECCION GENERAL DE 1891

A.- La situación política en la Península	
1.- El Partido Conservador en el poder	434
2.- El Proyecto de Ley Electoral para Cuba y Puerto Rico	434
B.- La situación político-partidista en Puerto Rico:	
1.- La fundación del Partido Autonomista Puer- torriqueño:	
a). Los antecedentes	435
b). La Asamblea Autonomista de Ponce..	437
c). Los primeros tiempos del Partido Autonomista	438

2.- El Partido Incondicional	440
3.- Los sucesos de "El Año Terrible"	440
C.- La convocatoria de elecciones.- La campaña electoral	443
D.- Los resultados	444
E.- Comentarios	444
NOTAS Y ANEXOS	446
2.12. LA ELECCION GENERAL DE 1893	
A.- La situación política en la Península	
1.- Crisis en el Partido Conservador y nuevo Gobierno de Sagasta	472
2.- El Decreto Electoral de 27 de Diciembre de 1892	472
B.- La situación político-partidista en Puerto Rico:	
1.- El Partido Autonomista	473
2.- El Partido Incondicional	476
C.- La convocatoria de elecciones.- La campaña electoral	477
D.- Los resultados	478
E.- Comentarios	478
NOTAS Y ANEXOS	481
2.13. LA ELECCION GENERAL DE 1896	
A.- La situación política en la Península	
1.- División en el Gobierno de Sagasta y formación de uno nuevo por Cánovas	508
2.- Los proyectos autonomistas	509

B.- La situación político-partidista en Puerto Rico.	512
1.- Desarrollo del Partido Autonomista	512
2.- El Partido Incondicional	514
C.- La convocatoria de elecciones.- La campaña electoral	515
D.- Los resultados	517
E.- Comentarios	517
NOTAS Y ANEXOS	522

2.14. LA ELECCION GENERAL DE 1898

A.- La situación política en la Península	
1.- La política autonomista del Gobierno: nuevos decretos	537
2.- Muerte de Cánovas.- Gobierno de Sagasta ..	538
B.- La situación político-partidista de Puerto Rico	
1.- La fusión del Partido Autonomista con el Liberal-Fusionista de Sagasta	539
2.- La subida del Partido Liberal al poder.- Repercusión en Puerto Rico	541
3.- El Acta Autonómica de Puerto Rico	542
4.- La organización del primer Gobierno Auto- nómico	543
5.- La fusión de los dos partidos autonomis- tas	544
C.- La convocatoria de elecciones.- La campaña electoral	544
D.- Los resultados	546
E.- Comentarios	546

-XII-

NOTAS Y ANEXOS	548
CONCLUSIONES	560
A.- Consideraciones y conclusiones sobre los partidos políticos de Puerto Rico durante el siglo XIX:	
1.- El fundamento de la estructura bipartidista	562
2.- Estructura y organización	563
3.- Trayectoria de los partidos	564
B.- Las Elecciones: consideraciones generales	565
1.- La legalidad electoral	565
2.- La actitud del Gobierno ante los partidos y los procesos electorales	565
C.- Las Elecciones: Conclusiones generales	566
D.- Las Elecciones: Consideraciones y conclusiones relativas a las variables electorales	
1.- La Población	568
2.- Etapas en el desarrollo de los procesos electorales	568
3.- Las variables electorales: nivel distrital	
a). Niveles de participación	571
b). La concentración de los votos	573
CUADROS Y GRAFICAS	574
APENDICES:	
APENDICE I: LEYES, DECRETOS, INSTRUCCIONES Y REGLAMENTOS ELECTORALES RELATIVOS A ULTRAMAR	591

APENDICE II: RESULTADOS POR COLEGIOS Y SECCIONES DE LAS ELEC- CIONES PARA DIPUTADOS A CORTES POR LA PROVINCIA DE PUERTO RICO (1869 - 1898)	704
--	-----

- INTRODUCCION -

I.- Naturaleza y motivación del trabajo.-

Como consecuencia de mi incorporación al Claustro de Profesores de la Universidad Católica de Puerto Rico en el año 1971 y teniendo conocimiento con anterioridad de las investigaciones que dos profesores de la Facultad de Ciencia Política y Sociología de Madrid estaban realizando sobre los procesos electorales de España, no me tomó mucho tiempo elegir el que sería tema de mi tesis doctoral. Y esta elección se fortaleció al profundizar en el estudio de la bibliografía histórico-política de Puerto Rico.

En efecto, pude comprobar que la mayor parte de los autores centran su atención y el tema de sus trabajos en la actuación de los diferentes Gobernadores de la isla y en el análisis de la política del Gobierno peninsular, sin aludir más que de forma tangencial al desarrollo de los procesos político-parlamentarios.

Interesado en profundizar algo más en el tema de los procesos electorales que se llevaron a cabo en Puerto Rico a lo largo del pasado siglo y en la repercusión que hubieran podido tener dentro del desarrollo político insular, inicié algunas investigaciones preliminares en la propia isla. Pronto, sin embargo, llegué a un callejón sin salida, puesto que comprobé que no existía aquí el material documental básico e imprescindible para elaborar un trabajo de esta naturaleza. Unicamente en la Universidad de Río Piedras existe una muy nutrida y bastante completa "Colección de Puerto Rico", con multitud de libros sobre todo del siglo pasado y de éste sobre la isla y, lo que era para mí tanto o más importante, con una magnífica colección de periódicos del siglo XIX, la más extensa y completa que existe.

Pero pensando que el comienzo debía ser por otra parte, pedí y obtuve de la Universidad Católica una licencia y una beca

para permanecer un tiempo en España y poder recorrer los diferentes Archivos y Bibliotecas en los que se conservan los documentos y obras relacionados con Ultramar. Mi búsqueda se centró principalmente en cuatro lugares: Archivo General de Indias, Archivo Histórico Nacional, Archivo de las Cortes y Biblioteca Nacional.

En el Archivo de Indias conseguí los datos correspondientes a la primera mitad del siglo XIX; en el Archivo Histórico Nacional la continuación de los mismos hasta la terminación del período; en el Archivo de las Cortes las copias de las Actas electorales que se conservan en la Sección de Expedientes; allí mismo conseguí extensas referencias al desarrollo de los procesos electorales y de los partidos políticos de la isla contenidos en el Diario de Sesiones y por último, una interesante colección bibliográfica de la época sobre el mismo tema. Finalmente, en la Sección de Manuscritos de la Biblioteca Nacional encontré datos históricos y políticos complementarios, y en la Hemeroteca de la misma Biblioteca varios periódicos de Puerto Rico del siglo pasado (1).

Una vez en mi poder toda esta información, regresé a Puerto Rico, en donde pude completar la misma con material documental y bibliográfico obtenido fundamentalmente en cuatro lugares: el Archivo General de Puerto Rico, en San Juan, donde se están reuniendo poco a poco la mayor parte de los documentos históricos de la isla; el Archivo Histórico de Ponce, también en fase de formación, pero que ya reúne bastantes documentos interesantes, relacionados sobre todo con la historia de la parte sur de la isla; la Colección de Puerto Rico de la Biblioteca de la Universidad Católica y sobre todo la Colección, ya mencionada, de la Universidad de Río Piedras, donde encontré la mayor parte de los periódicos y obras utilizados en este trabajo.

Si es cierto que no tuve mayores dificultades en la localización y en el acceso a los diferentes fondos documentales, no

es menos cierto que la búsqueda y selección de los datos que me interesaban ocupó una gran parte de mi tiempo; sobretodo en el Archivo General de Indias, donde solamente existe un Índice temático muy general acompañado de otro meramente cronológico. Por otra parte, los documentos relativos a Puerto Rico no forman colección, sino que se encuentran distribuidos en otras, como se puede ver en el Anexo correspondiente de esta Introducción (2).

La segunda parte de mi trabajo consistió en introducir todo este cúmulo de información en un esquema general del mismo, previamente elaborado. En esta fase me sirvieron de referencia y de gran ayuda los trabajos ya mencionados de los profesores Martínez Cuadrado y Cases Méndez-Vigo, por cuanto los mismos se referían a un tema similar, pero referido a la Península. Naturalmente, dada la especificidad de mi tema, la estructura y tratamiento del mismo tenía que ser bastante diferente; no obstante, he seguido hasta donde me ha sido posible una forma similar a la de sus obras, con el fin de lograr cierto grado de homogeneidad.

Mi intención ha sido, pues, realizar una descripción y análisis socio-político de los procesos electorales y del desarrollo de los partidos políticos insulares que lo acompañó, en Puerto Rico a lo largo de todo el siglo XIX y que sirviera de complemento a los trabajos de los referidos profesores. Una razón de peso avalaba, a mi modo de ver, el interés de este proyecto: el hecho de que Puerto Rico, desde 1809, fue considerado por la Metrópoli como una provincia española más, en pie de igualdad con el resto de las provincias peninsulares. Desde ese momento, Puerto Rico seguirá las mismas vicisitudes de la Península, exceptuando el período comprendido entre 1836 y 1868, en el que se vió privada de la representación parlamentaria y del resto de los derechos conseguidos.

Desde luego que esta afirmación de la igualdad de Puerto Ri

co debe ser matizada en muchos puntos, y así lo hago en cada caso a lo largo de este trabajo; sirve aquí, y en este sentido se hace, para justificar el tema, ya que Puerto Rico tuvo el derecho de representación parlamentaria lo mismo que las demás provincias de la Península.

Dada esta igualdad de representación parlamentaria, me pareció sumamente interesante averiguar el efecto esta situación jurídica y política en ambas partes: en Puerto Rico con relación a su proceso de desarrollo histórico y en la Península con relación a la repercusión y consecuencias de este cambio de consideración de los territorios de Ultramar.

II.- Fuentes

Dos han sido fundamentalmente las fuentes utilizadas: documentación inédita sobre los procesos electorales y sobre el desarrollo político y partidista de Puerto Rico, y la bibliografía de la época y actual sobre el tema y sobre la historia de la isla.

La primera de las fuentes consiste sobretodo en datos extraídos de los diferentes Archivos de España y de Puerto Rico y de la prensa periódica de la época. Esta ha constituido la fuente principal del trabajo, no por prurito de originalidad, sino por necesidad muchas veces y por el deseo de utilizar datos de primera mano, exentos, por tanto, de interpretaciones o de mutilaciones (3).

Como complemento de esta fuente he empleado la bibliografía histórica y político-partidista de la época y de este siglo. La de la época, escrita en bastantes ocasiones al hilo de los acontecimientos, por estimar que tiene el valor de lo inmediato y espontáneo y porque permite detectar la reacción que los hechos políticos y los resultados electorales tuvieron sobre los personajes de aquel tiempo, muchos de ellos directamente implicados

en los propios procesos. La de la actualidad, porque desde la perspectiva y más amplia visión que proporciona el tiempo se pueden detectar e interpretar con más serenidad y desapasionamiento los hechos.

Muchos han sido los documentos consultados en los diferentes archivos y bibliotecas; bastante menos los seleccionados y mínimos los que he incluido en el texto; no he tenido más guía para la selección y utilización que el sentido y propósito de la misma investigación. En algunos casos -pocos, por suerte- no he logrado encontrar todos los datos requeridos y así lo dejo consignado; en otros, he tenido que dejar fuera documentos, sin duda interesantes, pero que hubieran alargado excesivamente el texto, sin aportar nuevos o diferentes elementos de juicio a los ya incorporados.

III.- Clasificación de los datos.-

El material documental contenido en los diferentes Archivos consultados no está, lógicamente, ordenado tal y como lo requería mi trabajo; por esta razón me fue preciso realizar una clasificación de los datos recopilados, de acuerdo con la estructura de este trabajo. Brevemente y ordenada de acuerdo a la estructura que tienen los diferentes capítulos, la clasificación de los datos utilizados es la siguiente:

- 1.- Datos y obras de historia, tanto sobre la Península como sobre Puerto Rico, para dar a cada una de las elecciones estudiadas el trasfondo histórico indispensable. En el caso de la Península, los datos incluidos han sido mínimos y exclusivamente los que de una forma directa e inmediata se relacionaron con la disolución de las Cámaras anteriores y la convocatoria de las nuevas (4).

En cuanto a los datos históricos sobre Puerto Ri-

co, si bien es cierto que abundan las obras históricas sobre el siglo pasado, no lo es menos que bastantes de ellas encierran una interpretación excesivamente crítica de la política del Gobierno metropolitano en la isla. Esto me ha obligado a una cuidadosa selección de las opiniones y juicios, aceptando como propias únicamente aquellas que concuerdan con los datos documentales utilizados. Desde luego, que también incluyo los otros, como pruebas de un determinado estado de la opinión, de visiones distintas o simplemente de errores de apreciación.

- 2.- Fuentes jurídicas para establecer la legalidad electoral vigente en cada período. He utilizado la obra de Antonio Gamoneda, aunque la misma no incluye algunos decretos y leyes específicamente elaboradas para Ultramar, como es el caso del Real Decreto de 1 de Abril de 1871 y la Ley Electoral de 1892; colecciones legislativas como las de Fermín Martín de Balmaseda y Joseph María de Nieva; la obra de José María Zamora Coronado especialmente dedicada a la legislación ultramarina, pero que solo alcanza hasta el año 1845 y, a nuestros propósitos, hasta 1836.

El resto de los textos legales de carácter electoral no contenidos en las fuentes anteriores lo hemos obtenido de la "Gaceta de Puerto Rico", órgano oficial del Gobierno de la isla (5).

- 3.- Datos oficiales de los resultados electorales que se conservan en el Archivo de las Cortes y en numerosos documentos, aunque de forma incompleta, en el resto de los Archivos y en la Gaceta de Puerto Rico.

Para los resultados electorales de las elecciones correspondientes al primer período -1809 - 1836- hemos acudido sobre todo al Archivo General de Indias y al Archivo General de Puerto Rico para conseguir

los resultados de las elecciones de Parroquia y de Partido, que lógicamente no se encuentran en el Archivo de las Cortes.

- 4.- Para los comentarios sobre cada una de las elecciones he utilizado sobre todo la prensa periódica de la isla, el Diario de Sesiones de las Cortes en el que se contienen interesantes referencias a la forma en que se desarrollaron los diferentes procesos electorales, y la bibliografía correspondiente; a esto he añadido las conclusiones que un análisis cualitativo y cuantitativo de la estadística electoral me ha permitido hacer al respecto.

IV.- Estructura y Metodología.-

Con el fin de facilitar la exposición del trabajo, lo he dividido en dos períodos: el primero, que comprende desde 1809 hasta 1836, y el segundo, desde 1869 hasta 1898.

Además de una razón de tipo metodológico, existen otros motivos que aconsejaron esta división. En efecto; en 1836 se cierra un primer período en la vida parlamentaria de Puerto Rico, bien en contra de su voluntad, desde luego. Nos referimos a la exclusión, decidida por las Cortes, de los representantes de Cuba y de Puerto Rico del seno de las mismas, exclusión que durará hasta 1868. En segundo lugar, el carácter de los procesos electorales posteriores a 1868 fue completamente diferente al de los anteriores, no sólo por cuanto varía sensiblemente el contenido y la forma de los mismos, sino también porque se produce un cambio radical en la vida política de la isla con la aparición de los primeros grupos políticos, seguida casi de inmediato por la de los primeros partidos.

Por lo que se refiere a la manera de llevar a cabo el estu-

dio de cada una de las elecciones, hice todo lo posible por uniformar al máximo el tratamiento de todas ellas, con el fin de poder realizar las comparaciones pertinentes. Este deseo tropezó sobre todo con el obstáculo ya señalado de la diferente forma y contenido de los dos períodos electorales: el de sufragio indirecto y el de sufragio directo, motivo por el que solamente ha sido posible unificar la estructura y tratamiento de las elecciones correspondientes al segundo período.

He dedicado un capítulo a cada una de las Elecciones Generales que tuvieron lugar en Puerto Rico desde 1810, numerándolos en forma correlativa, dentro de cada período. Dentro del segundo -1869 - 1898- coinciden exactamente con las celebradas en la Península; no así en el primero, en el que por causas peculiares de Puerto Rico se efectuaron dos elecciones generales más que en la Península (6).

Por lo que se refiere a la estructura de los capítulos correspondientes al segundo período, es el siguiente:

- A.- Situación política en la Península. Como ya apunté más atrás, solamente se mencionan en este apartado los hechos acaecidos en la Península que determinaron la disolución de unas Cámaras y la convocatoria de las siguientes y también se incluyen decisiones del Gobierno Metropolitano relacionadas específicamente con Puerto Rico.
- B.- Situación político-partidista de Puerto Rico. En éste se pasa revista a los principales acontecimientos políticos, sociales y partidistas ocurridos en la isla desde la elección anterior hasta la convocatoria de la siguiente, haciendo hincapié sobre todo en la actividad de los grupos o partidos políticos.
- C.- Convocatoria de elecciones.- Campaña electoral. El contenido de este epígrafe se extiende desde el momento en que se publica la convocatoria de la elección, hasta el

momento en que se celebra. Se refiere fundamentalmente a la actuación del Gobierno y de los partidos políticos desplegada en torno al proceso electoral y se estudian los decretos, reglamentos, circulares, manifiestos, declaraciones, proclamas y cuantos documentos se elaboraron relativos al mismo, así como la actitud asumida por cada partido frente al proceso.

D.- Resultados. Unicamente se ofrecen en forma muy breve los de cada elección, haciendo una simple referencia a la afiliación partidista de los elegidos.

E.- Comentarios. Se analizan las reacciones y repercusiones de los resultados tanto a nivel del Gobierno como de los partidos políticos; se estudian los comentarios y reflexiones de todos los elementos implicados en el proceso, las repercusiones del proceso y de los resultados en las Cortes; la forma pacífica o violenta de desarrollarse el proceso electoral y finalmente, un análisis estadístico de los resultados.

Como complemento a los epígrafes y, aparte de los Anexos que acompañan a cada capítulo conteniendo información documental relacionada con el proceso electoral o con la actividad político-partidista, se incluyen en cada elección dos Cuadros: uno con los resultados electorales por distritos, con el número de electores, votantes, y otras variables electorales, y el otro con una relación de los diputados elegidos agrupados por partidos. Finalmente, se incluyen dos Mapas electorales: uno con la distribución de los elegidos según su afiliación política y el otro con el porcentaje de abstenciones en cada distrito.

Al final del trabajo he incluido dos tipos de Apéndices: uno conteniendo la legislación electoral aplicada a Puerto Rico a lo largo de todo el siglo XIX y el segundo con los resultados electorales por Colegios o Secciones (7).

V.- Los Sistemas de Legalidad electoral en Puerto Rico.-

En su obra "Elecciones y Partidos políticos de España, 1868-1931", el Profesor Miguel Martínez Cuadrado hace una descripción de las diferentes etapas por las que ha pasado en España el régimen liberal-constitucional, inaugurado con los Decretos de la Junta Central y el Consejo de Regencia de 1808 a 1810; asimismo enumera los distintos tipos de normatividad a través de los que se articuló la legislación electoral (8).

En líneas generales, seguimos aquí al Profesor Martínez Cuadrado, si bien es preciso para este estudio introducir en el mismo ciertas matizaciones por lo que se refiere tanto al régimen liberal-constitucional, como a los tipos de normatividad electoral que se aplicaron a Puerto Rico.

En efecto, por lo que se refiere al primer punto, en Puerto Rico no existió sufragio universal hasta la Elección General de 1898, última de las efectuadas en la isla bajo la soberanía española; en todas las anteriores rigió la fórmula del sufragio restringido, si bien es cierto que en algunas ocasiones la cuota exigida fue mínima.

Por lo que se refiere a los tipos de normatividad, también existen ciertas variantes, ya que tanto los decretos como las leyes y reglamentos electorales generales hacían una consideración especial de los territorios ultramarinos. Por otra parte, algunos de los decretos y disposiciones electorales fueron objeto de alteraciones tanto en el Ministerio de Ultramar, como por parte de algunos Gobernadores de la isla. En este sentido, tiene perfecta aplicación lo que comenta el Profesor Martínez Cuadrado respecto a la importancia de la "normatividad electoral secundaria", es decir, de los reglamentos, instrucciones, órdenes y circulares que se elaboraban para facilitar la aplicación de la normatividad electoral fundamental, pero que en no pocos casos, produjeron la desnaturalización de la misma (9).

En general, se puede decir que en Ultramar la normatividad electoral fue mucho más exigente que en la Península, limitando grandemente la participación de los naturales en los procesos electorales. Esta limitación fue duramente criticada a lo largo de todo el período por los órganos de información y por los representantes liberales de la isla. Ya en las Cortes Extraordinarias de 1810 encontramos varias intervenciones de diputados americanos, entre ellos el representante de Puerto Rico, D. Ramón Power, para solicitar que, aparte de la igualdad de representación, se conceda la del número de representantes a las provincias de Ultramar (10). Más adelante, esta misma desigualdad dará origen a las más duras críticas al Gobierno por parte del Partido Reformista y posteriormente del Autonomista, utilizando en señal de protesta la práctica del abstencionismo.

Teniendo en cuenta estas observaciones, podemos establecer los siguientes sistemas de legalidad electoral en Puerto Rico, a lo largo del siglo XIX:

Primero: Período de sufragio inórgánico, según el sistema del Antiguo Régimen, vigente entre 1808 y 1810.

Segundo: Período de sufragio universal indirecto, entre 1810 y 1833.

Tercero: Período de sufragio censitario indirecto, entre 1834 y 1836. Aquí se produce un corte en la trayectoria liberal-parlamentaria de la isla, por lo que no aplican los sistemas vigentes en la Península desde este momento hasta 1868,

Cuarto: Período de sufragio censitario directo, entre 1868 y 1896. Dentro de este período hay que destacar la elección de abril de 1873, llevada a cabo de acuerdo a lo que hemos denominado "sufragio censitario mínimo directo", ya que la Ley de 11 de marzo de

1873 determinaba que en Puerto Rico podrían participar como electores todos las mayores de 25 años que pagasen "cualquier cuota de contribución al Estado".

Quinto: Período de sufragio universal directo, que sirvió únicamente para las últimas elecciones llevadas a cabo en la isla en 1898.

Contrariamente a lo que sucedió en la Península, la tercera Elección General de 1836, que en Puerto Rico se celebró durante los meses de octubre y noviembre, no se llevó a cabo de acuerdo a los preceptos de la Constitución de 1812, por determinación expresa del Gobierno de la Península. En efecto, los Reales Decretos de 13 y 21 del mes de agosto de 1836 determinaban que en Ultramar se llevasen a cabo las elecciones "del mismo modo que se hicieron las de procuradores a las Cortes convocadas en virtud del Estatuto Real y Reales Ordenes posteriores" (11).

Por lo que se refiere a la legislación electoral y a su articulación en normas concretas, es aplicable a nuestro caso la clasificación que hace el Profesor Martínez Cuadrado, en su ya citada obra, si bien es preciso destacar la importancia mayor que en Puerto Rico tuvo el primer tipo de normatividad que describe este autor: las leyes y decretos electorales aprobadas por el Gobierno, del que es un buen ejemplo el Real Decreto de 1 de Abril de 1871 (12).

Resumiendo lo que llevamos expuesto acerca de la legalidad electoral en Puerto Rico, podríamos condensarlo en los dos puntos siguientes:

1.- Una consideración diferencial en sentido restrictivo de los territorios de Ultramar y concretamente de Puerto Rico, recogida en la mayor parte de los decretos y leyes electorales. En algunas ocasiones, esta consideración especial llegará al extremo de introducir diferencias entre los diferentes

territorios, como será el caso de la cuota contributiva que daba derecho al voto en Cuba y en Puerto Rico, en diversos momentos a partir de 1868 (13).

2.- Una frecuente manipulación electoral y alteración de las disposiciones legales relativas a los procesos electorales, tanto por parte de algunos Ministros de Ultramar, como de Gobernadores de la isla. En algunos casos se utilizó también la mala práctica de retrasar todo lo posible la convocatoria de las elecciones, con el aparente propósito de que los diputados de la isla llegasen tarde al Congreso.

Por lo demás, y como lo exponemos a lo largo del trabajo, los procesos electorales tuvieron en Puerto Rico las mismas vicisitudes que en la Península, y se vieron afectados por los mismos vicios, corruptelas y malas artes: cunerismo, ministerialismo, caciquismo y pucherazo. Indudablemente, y esto es más importante, también representaron un extraordinario medio de educación política del pueblo y un catalizador de las tendencias políticas insulares en torno a su propia situación y a la forma de mejorar su relación con la Metrópoli a todos los niveles.

En Puerto Rico concretamente, este proceso fue especialmente importante y positivo, logrando el país un alto nivel de concientización política, demostrada entre otras cosas, por el elevado nivel de participación que se produjo a lo largo de todo el período, y que desvió la atención de la mayor parte del pueblo y de sus líderes de procedimientos y medios más radicales, al contrario de lo que sucedió en Cuba.

Por todo ello, es indudable que el balance de los noventa años de procesos electorales fue altamente positivo para la isla y la dejó en condiciones óptimas para una vida autónoma. El azar impidió, sin embargo, que pudiera demostrar todo el provecho que había sabido obtener de su aprendizaje democrático.

NOTAS

- 1.- Dado el limitado tiempo de que disponía en relación con el ingente volumen de datos seleccionados en los cuatro Archivos mencionados, me ví obligado a fotocopiar y microfilmear la mayor parte de ellos, logrando de esta forma reunir una pequeña, pero pienso que interesante colección de documentos sobre el tema de este trabajo que al final se elevaba a los 10,000.
- 2.- En los diferentes Anexos a este Capítulo he recogido la serie de documentos inéditos utilizados, distribuidos por Archivos, con la numeración correspondiente.
- 3.- Algunos periódicos y algunos documentos relacionados con el trabajo han desaparecido o no se encontraban disponibles por diversas circunstancias en el momento en que realicé la investigación. En estos casos he tenido necesidad de recurrir a otras fuentes, bibliográficas sobre todo, que recogen los citados documentos.
- 4.- Basándome en la limitación de mi propósito a este respecto, no he creído imprescindible utilizar una bibliografía histórica extensa. Escogí como obra de consulta básica a este respecto la de Fernández Almagro "Historia Política de la España contemporánea", en tres volúmenes, porque, además de ser relativamente actual, abarcaba todo el período aquí estudiado, conteniendo interesantes referencias a la situación y vicisitudes de los territorios de Ultramar.
- 5.- Pueden verse los diferentes textos legales que regularon los procesos electorales a lo largo de todo el período en el APENDICE A, al final del trabajo.
- 6.- Aunque lo explicamos más adelante, dejo aquí constancia de que en Puerto Rico se llevaron a cabo elecciones en 1813-14 la primera y en 1822-23 la segunda.
- 7.- Desgraciadamente, el segundo Apéndice no es completo, ya que todos mis esfuerzos para conseguir los datos correspondientes no han dado resultado. Nos prometemos, sin embargo, continuar la búsqueda en los archivos y bibliotecas municipales de las capitales de distrito de la isla, en los que, tal vez, se hallen todavía copias de los mismos u otro tipo de documentos que per-

mitan completar los mismos.

- 8.- MARTINEZ CUADRADO, Miguel: "Elecciones y Partidos políticos de España, 1868-1931", (Madrid, Taurus Ediciones, S. A., 1969), págs. 38 y 39.
- 9.- Ibidem, pág. 40.
- 10.- Diario de Sesiones de las Cortes Extraordinarias, 1811, pág. 382 y sgts.
- 11.- NIEVA, Joseph María de: "Leyes, Reales Decretos y Ordenes de las Cortes que se han rehabilitado en el presente año", (Madrid, Imprenta Real, 1836), pág. 331.
- 12.- Gaceta de Puerto Rico, 1871, número 66.
- 13.- Aunque no hemos encontrado una explicación clara que pueda justificar esta desigual consideración, es posible que la misma se basara en la línea de argumentación expuesta ya en 1811 por el Presidente de las Cortes, precisamente en respuesta a la petición mencionada del representante de Puerto Rico, D. Ramón Power, para que se concediera a las provincias de Ultramar el mismo número de representantes que a la Península:

"Es bien sabido que la representación de los ciudadanos para la formación de las leyes se ha arreglado en todas las repúblicas y Estados por los principios que cada uno tuvo por más adecuados a sus circunstancias, con consideración al número, a los capitales, instrucción, mérito o clase de los individuos de la Nación". Cf.: Diario de Sesiones de las Cortes Generales y Extraordinarias, 1811, pág. 348.

ANEXO I

Archivo General de Indias

Nota: No existe en este Archivo un fondo documental sobre Puerto Rico, sino que los documentos sobre la isla se hallan dispersos en varias Secciones. En relación con este trabajo, las que contienen los datos más importantes son: la Sección 10, Ultramar; la Sección 5, Audiencia de Santo Domingo y la de Indiferente general.

Los documentos de este Archivo utilizados en el trabajo han sido los siguientes:

Sección 10: Ultramar.-

Legajos 411 - 423 - 425 - 426 - 428 - 433 - 435 - 443 -
448 - 450 - 405 - 409 - 457 - 406 - 407 - 451 -
452 - 453 - 454 - 456 - 458.

Sección 5: Audiencia de Santo Domingo.-

Legajos 2329 - 2406 - 2341 - 2342 - 2325 - 2328 - 2331 -
2336 - 2339 - 2340 - 2350.

Sección Indiferente general.-

Legajo 1523

- - - - -

B.- Archivo Histórico Nacional

Nota: De todos los Archivos consultados, creemos que éste es el mejor organizado. Aparte de un Inventario de la Sección de Ultramar, existen inventarios impresos de los fondos relativos a Puerto Rico, habiéndose publicado hasta ahora los correspondientes a Gobierno, Fomento y Gracia y Justicia. Para este trabajo hemos utilizado casi exclusivamente el primero. En el mismo se contienen, por orden cronológico, noticias de muy diversa índole aunque relacionadas con el aspecto político, y a nuestros efectos, contiene censos de población, resultados de las elecciones, no completos, correspondencia entre los Gobernadores y el Gobierno de la Península, etc.

Los documentos utilizados correspondientes al inventario de la serie Gobierno de Puerto Rico han sido los siguientes:

Legajos 5066 - 5068 - 5069 - 5071 - 5075 - 5082 - 5084 - 5093 -
5094 - 5095 - 5096 - 5098 - 5099 - 5101 - 5102 - 5103 -
5104 - 5105 - 5106 - 5107 - 5109 - 5110 - 5111 - 5113 -
5114 - 5117 - 5119 - 5120 - 5121 - 5122 - 5123 - 5126 -
5129 - 5143 - 5144 - 5145 - 5146.

- - - - -

C.- Archivo y Biblioteca de las Cortes.-

Nota: Varios y muy valiosas son las colecciones de documentos que se conservan en este Archivo de carácter privado, pero que hemos podido consultar. Destacan entre los documentos la colección de Actas electorales de la Sección de Expedientes, donde se conservan todas las de las elecciones de Puerto Rico, con excepción de las dos ya mencionadas más atrás.

Además de esto, en la Biblioteca magníficamente dotada, pudimos revisar la colección del Diario de Sesiones, de donde obtuvimos valiosa información acerca de los resultados, desarrollo de los procesos electorales y comentarios acerca de la política y los partidos de Puerto Rico.

Finalmente, allí mismo pudimos obtener parte de la bibliografía del pasado siglo sobre política ultramarina.

La relación de documentos utilizados correspondientes a la Sección de Expedientes es ésta:

<u>Legajo</u>	<u>Número</u>	<u>Contenido</u>
3	35	Resultados Elección de 1810
5	37	Idem de 1813-14.
7	24	Idem de 1820
7	39	Expediente formado en 1820 sobre aumento de Diputados suplentes para las Cortes de aquella época.
7	40	Exposición hecha por varios americanos pidiendo la nulidad de las elecciones de Diputados suplentes nombrados para las Cortes de aquella época.
7	38	Poderees de varios diputados por las provin-

		cias de Ultramar para las Cortes de 1820-21
7	41	Proposiciones sobre la representación de las provincias de Ultramar en las Cortes de 1820-21.
7	37	Acuerdo de la Junta preparatoria de las Cortes de 1821 sobre la continuación en sus funciones de los Diputados suplentes por Ultramar.
9	30	Resultado elección de 1821
11	6	Idem de 1834
14	17	Expediente sobre admisión de los Diputados a Cortes por las provincias de Ultramar para las Cortes Constituyentes de 1836-37.
51	18	Actas electorales de 1869
62	1	Dictámenes sobre las Actas anteriores
65	4	Actas electorales de 1871
66	13	Dictámenes
69	5	Actas electorales de Abril de 1872
70	10	Dictámen y Expediente general
72	16	Actas electorales de Agosto de 1872
73	11	Dictámen y Expediente general
75	1	Resultados elección de 1873
78	16	Resultados elección de 1876
85	9	Resultados elección de 1879
91	9	Resultados elección de 1881
96	8	Resultados elección de 1884
103	6	Resultados elección de 1886
105	39	Resultados elección de 1891
107	42	Resultados elección de 1893
109	42	Resultados elección de 1896
111	42	Resultados elección de 1898

- - - - -

D.- Biblioteca Nacional: Sección de Manuscritos.-

Nota: En esta Sección se encuentra un reducido pero interesante número de documentos sobre la historia y el gobierno de Puerto Rico. Hemos utilizado únicamente cuatro de estos manuscritos, por ser los únicos con datos relacionados con el tema, entre los que destaca la Memoria -manuscrita- de Pedro Tomás de Córdova y una nutrida correspondencia entre diversos Gobernadores de la isla y el Gobierno de la Península, sobre elecciones y partidos políticos.

En la Hemeroteca encontramos también varias colecciones de periódicos de Puerto Rico, pero solamente dos de ellos bastante completos, que utilizamos.

Los manuscritos utilizados han sido los siguientes:

Manuscrito 13845: "Apuntes sobre Puerto Rico". Es anónimo y sin fecha, pero según parece debió escribirse hacia 1870 o 71.

Manuscrito 13860: "Memoria sobre todos los ramos de la Administración de la isla de Puerto Rico, por el Coronel de Infantería D. Pedro Tomás de Córdova, Secretario del Gobierno y Capitanía General de la misma Isla" (1837).

Manuscrito 18634-27: Exposiciones y propuestas presentadas en el Ministerio de Ultramar referentes a reformas en las Antillas (1869).

Manuscrito 20128: Sucesos de Puerto Rico durante el Gobierno de los generales Marchesi, Pavía, Sanz y Baldrich. (1866-1871)

Periódicos:

"El Correo de las Antillas"

"El Progreso"

E.- Archivo General de Puerto Rico.-

Nota: Como ya queda indicado en el texto, este Archivo, que solo cuenta con tres años de existencia, intenta centralizar todos los documentos existentes en los distintos archivos, depósitos y bibliotecas de la isla sobre la historia de Puerto Rico. De momento, pues, se encuentra en una fase de acumulación y adquisición de material documental, por lo que la organización del mismo todavía no está bien lograda. Así, por ejemplo, apenas hemos tenido acceso a una Colección hasta hace poco privada y hoy en poder del Archivo, pero que se encuentra totalmente desorganizada y por tanto, apenas manejable.

Otra Colección sumamente importante y hasta hace pocos años en poder de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos es la titulada "Records of the Spanish Governors of Puerto Rico", en donde hemos obtenido todos los resultados de las elecciones a nivel de Parroquia y de Partido hasta 1823, expedientes sobre sucesos electorales, y datos sobre censos electorales y de población. Desgraciadamente, la clasificación tampoco es muy buena, por lo que apenas podemos ofrecer más datos que la referencia a la Colección correspondiente.

Colecciones de documentos utilizados del Archivo General de Puerto Rico:

Colección "Gobernadores de Puerto Rico"

Colección de la Diputación provincial.

Colección particular Junghans

Fondo de la Audiencia Territorial

Actas del Cabildo de San Juan Bautista de Puerto Rico

F.- Hemeroteca de la Universidad de Rio Piedras.-

Nota: Esta Hemeroteca, que se encuentra adscrita a la Colección de Puerto Rico de dicha Universidad, contiene la colección más extensa y completa de periódicos de la isla, y en ella hemos revisado la casi totalidad de los mismos. También nos ha permitido consultar muchas de las obras sobre el siglo pasado que se citan en el texto. Por lo que se refiere a la prensa periódica, hemos utilizado los siguientes periódicos publicados en la isla:

"Gaceta de Puerto Rico"

"Boletín Mercantil"

"El Progreso"

"La Razón"

"El Agente"

"El Buscapié"

"El Clamor del País"

"La Revista de Puerto Rico"

"La Democracia"

"La Correspondencia de Puerto Rico"

"El Imparcial"

G.- Archivo Histórico de Ponce.-

Nota: Este Archivo, dependiente del Municipio de Ponce, es de carácter y contenido meramente local, aunque posee una colección bastante buena de la Gaceta de Puerto Rico. Es, sobre todo, interesante la colección de documentos relacionados con las elecciones realizadas a partir de 1869, aunque todos ellos se refieren al Distrito del que era cabeza esta ciudad. Nos ha proporcionado datos sobre censos electorales, resultados y expedientes promovidos con motivo de inclusiones y exclusiones de las listas electorales

Hay que advertir, además, que gran parte del material se encuentra aún sin organizar, por lo que es posible que más adelante pueda proporcionar un cuadro mucho más completo del tema que aquí se trata.

Con relación a nuestro trabajo, hemos consultado los Legajos 60 al 80, en los que se encuentra toda la documentación que hasta el momento está organizada sobre elecciones.

- - - - -

ANEXO II

BIBLIOGRAFIA

- ABBAD Y LASIERRA, Fray Iñigo "Historia geográfica, civil y política de San Juan Bautista de Puerto Rico", (Barcelona, Ediciones S. Juan de Puerto Rico, 1971)
- ARANA-SOTO, Salvador "Defensa de los Capitanes Generales españoles y Nueva interpretación del siglo XIX puertorriqueño" (San Juan, s.e., 1968).
- ARTOLA, Miguel "La Burguesía revolucionaria", (Madrid, Ediciones Alfaguara, 1971)
- BALDORIOTY DE CASTRO, Román "Asuntos de Puerto Rico", (Madrid s.e., 1869).
- BLANCO HERRERO, Miguel "La Política de España en Ultramar" (Madrid, Imprenta de Francisco G. Pérez, 1890).
- BRAU Y ASENSIO, Salvador "Puerto Rico y su Historia", (Barcelona, Editorial IV Centenario San Juan de Puerto Rico, 1972).
- CARR, Raymond "España, 1808-1936", (Barcelona, Ediciones Ariel, 1969).
- CELIS AGUILERA, José de "Mi grano de arena para la Historia de Puerto Rico", en "Boletín Histórico", Tomo IX.
"Mi honradez política", en "Boletín Histórico", Tomo IX.

- CRUZ MONCLOVA, Lidio "Historia de Puerto Rico", (Barcelona, Editorial Universitaria, 1969), 6 volúmenes.
- DUVERGER, Maurice "Sociología política", (Barcelona, Ediciones Ariel, 1968).
- FERNANDEZ MENDEZ, Eugenio "Crónicas de Puerto Rico", (Barcelona, Editorial Universidad de Rio Piedras, 1973).
- FERNANDEZ ALMAGRO, Melchor "Historia política de la España contemporánea", (Madrid, Alianza Editorial, 1969).
- GAMONEDA, Antonio "Le es electorales y Proyectos de Ley", (Madrid, Hijos de J.A. García, 1906).
- GOMEZ, Juan G. y SENDRAS BURIN, Antonio "Bosquejo de la Historia de Puerto Rico", (San Juan, Editorial S. Juan, 1972).
- GOMEZ ACEVEDO, Labor "Sanz, promotor de la conciencia separatista", (San Juan, Ediciones de la Universidad de Puerto Rico, 1968).
- CONZALEZ MIYARES, Fernando "Noticias particulares de la isla y plaza de San Juan Bautista de Puerto Rico", (San Juan, Editorial Universitaria, 1954).
- GONTAN, José Antonio "Historia olítico-social de Puerto Rico", (San Juan, Editorial Esther, 1945).
- HOSTOS, Eugenio María de "Obras Completas", (La Habana, s. e., 1939).

- IGLESIAS PAGAN, Igualdad "El obrerismo en Puerto Rico: época de Santiago Iglesias (1896-190 (Palencia, Ediciones Juan Ponce de León, 1973).
- IGLESIAS PANTIN, Santiago "Luchas emancipadoras Crónicas de Puerto Rico)", (San Juan, s.e., 1958).
- LABRA, Rafael María de "La cuestión colonial: (1871-1896 1898)", (Madrid, Tipografía de Alfredo Alonso, 1898).
- "Los Diputados americanos en las Cortes de Cádiz", en "Es aña y América, 1812-1912", (Madrid, Tipografía del "Sindicato de Publicidad", 1912).
- "América la Constitución de 1812 en "España y América".
- "La pérdida de las Américas", en "España y América".
- "La República y las libertades de Ultramar", (Madrid, Establecimiento tipográfico de Alfredo Alonso, 1897).
- "Mi primer discurso parlamentario" (Madrid, Tipografía Sindicato de Publicidad, 1915).
- "La política colonial y la Revolución española de 1868", (Madrid, Tipografía Sindicato de Publicaciones, 1915).

- LABRA (Cont.)
- "Una campaña parlamentaria", (Madrid, Imprenta de M.G. Hernández, 1873).
- "Mi campaña en las Cortes de 1881 a 1883", (Madrid, Tipografía Sindicato de Publicidad, 1884).
- "La Autonomía colonial en España" (Madrid, Sucesores de Cuesta, 189
- LEBRON RODRIGUEZ, Ramón
- "El problema obrero en Puerto Rico" (San Juan, Tipografía El Compás, 1924).
- LEDRU, André Pierre
- "Viaje a la Isla de Puerto Rico", (San Juan, Ediciones del Instituto de Cultura Puertorriqueña, 1957
- MARTIN DE BALMASEDA, Fermín
- "Colección Legislativa", (Madrid, Imprenta Real), varios volúmenes.
- MARTINEZ CUADRADO, Miguel
- "Elecciones y Partidos políticos de España, 1868-1931", (Madrid, Taurus Ediciones, S.A., 1969).
- "La Burguesía conservadora", (Madrid, Alianza Editorial, 1974).
- MEJIA, Félix
- "De la crisis económica del 86 al Año Terrible del 87", (San Juan, Editorial Puerto, 1972).
- MORALES CARRION, Arturo
- "Albores históricos del capitalismo en Puerto Rico", (San Juan, Editorial Universitaria, 1974).
- "Ojeada al proceso histórico de Puerto Rico", (San Juan, Editorial del Departamento de Instrucción

- Pública, 1956).
- NIEVA, Joseph María de "Colección Legislativa", (Madrid, Imprenta Real), varios volúmenes.
- ORMAECHEA, Darío de "Memoria acerca de la agricultura el Comercio y las Rentas Internas de la Isla de Puerto Rico", en "Boletín Histórico", Tomo II.
- PAGAN, Bolívar "Procerato puertorriqueño del Siglo XIX", (Barcelona, s.e., 1973)
- PEDREIRA, Antonio Salvador "El periodismo en Puerto Rico", (Rio Piedras, Editorial Edil, 1969).
- "Insularismo", (Rio Piedras, Editorial Edil, 1973).
- RAMIREZ DE ARELLANO, Rafael "Las Instrucciones al Diputado D. Ramón Power Giralt", (San Juan, Editorial Universidad de Rio Piedras, 1936).
- RIVES TOVAR, Federico "Historia cronológica de Puerto Rico", (New York, Plus Ultra Educational Publishers, Inc., 1973).
- ROMERAL, Ramón del "Santiago Iglesias: su biografía en el movimiento obrero de Puerto Rico", (Puerto Rico, Tipografía de L. Ferreras, 1901).
- RUIZ BELVIS, Segundo, ACOSTA Y CALVO, José J., QUIRONES, Francisco Mariano "Proyecto para la abolición de la esclavitud en Puerto Rico", (San Juan, Instituto de Cultura Puertorriqueña, 1959).

- SANCHEZ ORTIZ, Modesto y
BERASTEGUI, Fermín "Las primeras Cámaras de la Regencia", (Madrid, Imprenta de Enrique Ruviños, 1886).
- TUÑON DE LARA, Manuel "La España del Siglo XIX", (Barcelona, Editorial Laia, 1974).
- TIERNO GALVAN, Enrique "Leyes Políticas españolas Fundamentales", (Madrid, Editorial Tecnos, 1968).
- VILAR, Pierre "Historia de España", (París, Librairie Spagnole, 1963).
- ZAMORA CORONADO, José M. "Biblioteca de Legislación Ultramarina", (Madrid, Imprenta de J. Martín Alegría, 1843-45), 6 volúmenes.
- DIEZ DEL CORRAL, Luis "El Liberalismo Doctrinario", (Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1956).
- SANCHEZ AGESTA, Luis "Historia del Constitucionalismo español", (Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1964).

Capítulo preliminar: Desarrollo histórico de Puerto Rico

1.- Desde su descubrimiento hasta mediados del siglo XVIII

La isla de Puerto Rico fue descubierta por Cristóbal Colón en su segundo viaje en 1493, y conquistada por Juan Ponce de León en 1509, pero su colonización no comenzó hasta dos años más tarde.

Estaba poblada por los indios "taínos", en número aproximado de 30,000, según los cálculos más modernos (1). Hacia 1530, no obstante, habían desaparecido por completo, en parte por haber perecido en las luchas de conquista, en los trabajos de minería, o por haber huído a otras islas cercanas.

La tierra se repartió desde un principio entre los conquistadores, pero como éstos eran pocos, recibieron grandes extensiones de terreno, que quedaron incultas en su mayor parte, a causa de la atracción que ejercía sobre ellos la explotación de minas de oro y por la carencia de esclavos y de útiles adecuados para la roturación y cultivo de las tierras (2).

Así pues, la primera actividad a la que se dedicaron los conquistadores fue la extracción de metales preciosos, para lo cual emplearon la mano de obra nativa. Pero, no acostumbrados los indios a trabajos tan pesados, pronto dieron señales de agotamiento y muchos de ellos sucumbieron, se suicidaron o huyeron a los montes de la isla. Por este motivo, los españoles se vieron obligados a introducir esclavos negros en la isla ya desde

(1813) (3).

Pero la riqueza aurífera de Puerto Rico no resultó tan grande como se había supuesto y hacia 1526 comenzó a decaer su producción (4). Por otra parte, el descubrimiento de yacimientos mucho más ricos y extensos en Méjico y Perú, junto con la actitud hostil de los indios "caribes", que saqueaban con frecuencia la parte oriental de la isla, y los efectos destructivos de los huracanes que la azotaba, produjeron el abandono casi total de ella hacia 1530 (5).

1513

En esta forma se cierra el primer período de la colonización de Puerto Rico, con un balance francamente negativo respecto de la actuación de sus primeros pobladores peninsulares (6).

La actividad agrícola, que en la primera etapa había sido relegada a un lugar secundario, comienza a considerarse a partir de 1530 como alternativa obligada, para evitar el total despoblamiento de la isla. En 1536 el Gobierno de la Metrópoli autoriza un empréstito de 4,000 pesos para establecer en Puerto Rico dos ingenios azucareros, y en 1540 se eleva hasta 6,000, prohibiéndose al mismo tiempo ejecutar por deudas en los esclavos, artefactos y demás instrumentos necesarios para el funcionamiento de los mismos (7).

Comienza de esta forma una segunda etapa en el desarrollo de la isla, orientada a la implantación de un sistema de monocultivo latifundista -la caña de azúcar- basado en la esclavitud y con protección e incentivos estatales (8). Como complemento de esta actividad se ensaya la cría de ganado, aprovechando los extensos pastos naturales de la isla. Sin embargo, ambos experimentos fracasan fundamentalmente por la insuficiencia de capitales y por la inexistencia de un sistema flexible de comercio que permitiera beneficios razonables a los productores,

"... y la isla, no obstante la feracidad de su suelo y lo privilegiado de su posición geográfica, permaneció estacionaria durante siglos. La agricultura no podía desarrollarse donde la legislación prohibía muchos cultivos apropiados al clima, donde la población disminuía y donde los mercados estaban cerrados por la opresión de los monopolios" (9).

Se llega así al siglo XVIII y con él a la asignación de un nuevo papel a la isla: el de baluarte de resistencia contra los ataques de piratas y corsarios extranjeros que pretendían conquistarla o destruirla,

"... porque varias naciones manifestaron la más terrible envidia por las hazañas y buena suerte de los españoles" (10).

Lo cierto era que tanto los ingleses como los holandeses se habían percatado del valor estratégico de Puerto Rico dentro del sistema de comunicaciones de la Península con sus posesiones de América y de lo reducido de sus defensas, extremos ambos que la hacían sumamente apetecible y asequible.

En 1595 Drake saqueó la Capital, San Juan; en 1598 Cumberland se apoderó de ella, pero tuvo que abandonarla a causa de una epidemia que se desató en la isla. En 1615 los holandeses, al mando de Balduino Enrico, tomaron San Juan; pero la ocupación duró poco tiempo, porque un heroico contraataque dirigido por el capitán Juan de Amézquita logró arrojar a los invasores de la isla (11).

Estos ataques y el fracaso de los mismos hicieron tomar conciencia a la Metrópoli de la ventajosa posición de Puerto Rico como enclave estratégico para defender las vías de comunicación marítimas, al mismo tiempo que para hostigar el comercio clandestino de las naciones extranjeras (12). Así pues, la isla pasa de la defensa al ataque: de baluarte se convierte en ariete. Llegan a la isla arrojados e intrépidos marineros vascos con patentes de corso, y enseñan a los insulares las tácticas de interceptar y apresar o destruir las naves enemigas.

Esta actividad predatoria inaugura en la isla una etapa de superficial e inestable desarrollo económico, impulsado como los anteriores por el elemento oficial: si a lo largo de la etapa anterior los habitantes se surtían de los artículos necesarios a través de los barcos extranjeros que arribaban clandestinamente a las costas, ahora será el propio Gobernador el que abastecerá los mercados locales con las presas efectuadas a ingleses y holandeses, monopolizando junto con algunos nativos el comercio y obteniendo del mismo pingües beneficios (13).

Pero sin actividad económica productiva, la Hacienda de la isla no podía obtener los recursos necesarios para los gastos militares que le imponía su condición, y para obtenerlos, la Metrópoli arbitró el sistema de "situar" unos fondos en la Tesore-

ría del rico Virreinato de Méjico (14). Esta dependencia fiscal durará hasta 1810 año en que, como consecuencia del movimiento secesionista de Tierra Firme, se interrumpirá el flujo monetario y al mismo tiempo la dependencia (15).

A lo largo de este período se irá forjando la sociedad puertorriqueña; no en la Capital, donde la conexión con la cultura de la Metrópoli es muy estrecha, sino en el resto de la isla. Se va formando una sociedad rústica, en la que se mezclan todas las razas; sociedad que, obligada a sobrevivir con sus propias fuerzas, tendrá que forjar sus propias normas de convivencia y que, por tanto, no se va a relacionar tanto con la Capital como con la costa más cercana, donde consigue por medio del contrabando lo que ni la Capital ni la Metrópoli son capaces de proporcionarle (16).

Así llega Puerto Rico a la segunda mitad del siglo XVIII, con una economía muy atrasada: ausencia absoluta de actividad industrial; agricultura exangüe (17), y comercio apenas existente, pero sustituido en toda la isla por un contrabando a gran escala (18).

2.- Situación de Puerto Rico a principios del siglo XIX

La modernización de la estructura estatal comienza en la Península con la llegada de los Borbones, y su obra se extiende a los dominios de Ultramar. Felipe V y sus consejeros y funcionarios, algunos de ellos traídos de Francia, comienzan por sustituir los numerosos e inoperantes Consejos por los Departamentos o Ministerios, al mismo tiempo que emprenden una labor de centralización política y administrativa (19).

Fernando VI continúa la obra de su antecesor, concretando su esfuerzo en la liberalización del comercio que, como dice Pierre Vilar, representa "la gran conquista del siglo" (20). A este respecto cabe mencionar en relación con Puerto Rico la concesión regia hecha a la Compañía Barcelonesa en 1757 para comer-

ciar con la isla (21). También pertenece al reinado de Fernando VI la Real Orden de 22 de agosto sobre reforma del sistema de tenencia de la tierra, que produjo en gran parte el progreso de la isla en los últimos años del siglo XVIII (22).

Pero fue en el reinado de Carlos III cuando las reformas se plantearon de una manera total y sistemática. Con relación a Ultramar, las reformas fueron precedidas de una serie de "Informes" acerca del estado moral y material de las colonias, entre los que merecen destacarse las memorias de los marinos Jorge Juan y Antonio Ulloa; de Virreyes como el del Duque de Linares; de alegaciones reservadas de altos funcionarios como la de Gasca. Dos informes sobresalen, sin embargo, sobre los demás que se elaboran en la segunda mitad del siglo XVIII: el del Mariscal O'Reilly, escrito hacia 1765 y el de D. José de Gálvez, Marqués de la Sonora, algunos años más tarde (23).

El Mariscal O'Reilly describe un vivo cuadro de la precaria situación económica de Puerto Rico y de la desastrosa condición del erario público; al mismo tiempo, propone las medidas que a su juicio incrementarían la actividad económica, el comercio y la recaudación de impuestos y tributos, al tiempo que combatirían el contrabando (24).

El Marqués de la Sonora, por su parte, viajó a América como comisionado de Carlos III para informar al Monarca del estado de cosas existente. La situación que contempló fue tan deprimente, que le afectó de manera profunda:

"Tales cosas pasaban -comenta Labra- y tales resistencias y disgustos produjeron el descubrimiento de abusos y su reforma, que Gálvez llegó a perder la razón" (25).

A pesar de ello, las reformas de Carlos III se llevaron a cabo y se extendieron a las colonias. Ocuparía demasiado espacio mencionar todas y cada una de las medidas que se aprobaron a partir de 1765; sólo a título de ejemplo mencionaremos algunas de las más significativas. En 1765 y con el fin de facilitar el co-

mercio entre la Metrópoli y Ultramar, se expidieron varios Decretos por los que se aumentaba el número de puertos autorizados para el tráfico mercantil: trece en la Península y veintidós en América. En 1775 se creó el Ministerio Universal de Indias, en sustitución del Consejo de Indias. En 1778 se expidió la Ordenanza del Comercio de Indias, por la que se reducían los aranceles y se liberalizaba el intercambio de mercancías entre las colonias y algunos países extranjeros. En 1786 se aprobó la Ordenanza de Intendentes, encaminada a sanear las finanzas públicas. A estos decretos habría que añadir algunos otros sobre población, comercio, minas, etc., que formaban un cuadro completo de la voluntad reformadora en las colonias (26).

Desgraciadamente, todas ellas tuvieron una vida efímera: algunas no se llegaron a aplicar (27); otras se modificaron sustancialmente, y hasta se aprobaron más adelante algunas que iban en sentido totalmente contrario. Al ilustrado Carlos III sucedió el mediocre Carlos IV y sobre todo el inepto válido Godoy. A finales del siglo XVIII había ganado la corriente anti-ilustrada, encarnada en el Ministro Caballero, perseguidor de Jovellanos y de Olavide, y en 1805 se promulgaba la "Novísima Recopilación", en cuyo cuerpo legal se consagraba "el absolutismo monárquico en las formas y maneras más deplorables y vergonzosas" (28).

Llegamos así al final de este brevísimo recorrido a través de la historia de Puerto Rico hasta los comienzos del siglo XIX; sólo nos resta por describir, en forma también sucinta, la situación de la isla en los primeros años del siglo XIX.

La estructura política de Puerto Rico estaba montada en torno a la figura de los Gobernadores, representantes de la Metrópoli y que asumían también las funciones de Capitán General, Intendente de Real Hacienda y Vicepatrono Real. Todos estos poderes convertían en figuras prácticamente omnipotentes (29).

Si es cierto que en el plano militar todos ellos demostraron poseer sobradas dotes de mando y sentido estratégico, muchos de ellos, sin embargo, carecieron de las condiciones adecuadas

para regir los destinos de la isla (30). Como tendremos ocasión de comprobar a lo largo de este trabajo, aceptaban por disciplina las reformas liberales, pero retornaban con gusto a formas más autoritarias de gobierno. Preocupados la mayoría de ellos hasta la obsesión por la conservación de las colonias, veían por todas partes peligros de insurrección e intentos separatistas y a sofocarlos dedicaban sus mayores esfuerzos y a prevenirlos grandes contingentes de tropas (31). De ahí que en los presupuestos de gastos de Puerto Rico los de Guerra y Marina absorbiesen la mayor parte de los fondos (32).

Como ya hemos apuntado más atrás, la economía de la isla era bastante precaria. Aceptada por la Metrópoli la teoría mercantilista, el comercio con las colonias se consideraba como un monopolio exclusivo de España, que se reservaba enteramente el tráfico e intercambio de productos con sus colonias. Regía, pues en ellas un sistema prohibitivo de comercio, que incluía un control riguroso de los puertos habilitados para el tráfico mercantil; múltiples impuestos a la producción, y la prohibición de exportar determinados productos, siendo así que la isla estaba obligada a importar no solo la totalidad de los productos manufacturados, sino también algunos productos agrícolas de primera necesidad que podían cultivarse en la propia isla (33).

A finales del siglo XVIII cobró auge el comercio de Puerto Rico, debido sobre todo a las dificultades que encontraba la Metrópoli en hacer frente a las necesidades de sus colonias, a causa de la guerra que sostenía con Inglaterra. A partir de 1778, se dictan varias ordenanzas permitiendo el comercio de las colonias con las naciones neutrales (34). De esta fecha datan los primeros intercambios entre la isla y los Estados Unidos, intercambios que irán progresivamente intensificándose a lo largo de todo el siglo XIX.

Aunque el suelo y el clima de Puerto Rico se prestaban a una serie de producciones que no se podían obtener en la Penín-

sula, no se explotaban, dado que algunas estaban prohibidas y otras no podían dedicarse a la exportación. El resto de los productos estaba sometido a múltiples y variados tributos, entre los que se contaban los de tierra, de primicias, de alcabala, de estola y de abasto forzoso (35).

Por lo que se refiere a la industria, apenas eran dignas de destacarse otras actividades que no fueran las relacionadas con el procesamiento de la caña de azúcar. Existía, además, un corto número de pequeñas fábricas de tipo artesanal, en las que se elaboraban objetos de alfarería, ebanistería, aperos de montura y carga, curtido de cueros, tabaco y rapé.

En la restricción de actividades industriales influyó poderosamente el deseo de mantener ciertos monopolios de la Península, con el fin de evitar la competencia de los productos insulares, más baratos a causa de los salarios más bajos. Un ejemplo típico lo constituía la elaboración de ron, gravado con multitud de tributos y hasta prohibida su destilación en algunas ocasiones, a fin de que no pudiera hacer la competencia a los aguardientes de la Península. De esta producción decía el Padre Abad que si se permitiese su exportación a Tierra Firme, la Hacienda de la isla obtendría un ingreso mayor que por los derechos de aduana y tierra juntos (36).

No puede extrañar, por lo descrito hasta ahora, que la situación de la Hacienda Pública de Puerto Rico fuera crónicamente deficitaria. Dado el poco desarrollo de las fuentes de producción y de la limitación de los intercambios comerciales, amén de la sangría impositiva que representaba el contrabando, el erario público apenas lograba recaudar una mínima parte de lo que representaban sus necesidades, enjugando este déficit con mayor o menor regularidad y fortuna a base de los fondos del situado de Méjico.

No era éste, sin embargo, el único mal que aquejaba a la Hacienda insular, pues a la exigua recaudación había que añadir la desorganización que padecía la gestión administrativa. A los

empleados públicos se les dejaba a veces a medio sueldo; no se sabía con certeza el rendimiento de cada partida fiscal; no se liquidaban las cuentas y en fin, muchas de las partidas cobradas no se anotaban en los libros correspondientes (37). Sólo a partir de la toma de posesión del Intendente D. Alejandro Ramírez en 1813 la Hacienda de la isla comenzó a funcionar de manera eficiente.

La enseñanza y las obras públicas se encontraban bastante desatendidas, debido sobretodo a la falta de medios materiales para atenderlas. Por lo que se refiere a la enseñanza, era grave ante todo el elevado índice de analfabetismo, que alcanzaba aproximadamente en 1797 las dos terceras partes de la población (38). Ello se debía a la carencia casi absoluta de escuelas de escuelas de primeras letras. La enseñanza secundaria se impartía únicamente en dos escuelas de San Juan, y la superior se limitaba al Colegio de Santo Tomás, cuyos estudios tenían solo validez académica para los eclesiásticos, por lo que los estudiantes que deseaban seguir estudios superiores, se veían obligados a salir de la isla (39).

Las obras públicas no se encontraban en mejor estado: los caminos que existían en la isla eran prácticamente intransitables y apenas se consignaban cantidades en los presupuestos no ya para abrir otros nuevos, sino para la conservación de los existentes (40).

La población, que en el año 1800 era de 155,426 habitantes, se encontraba desparramada por los campos, llevando una vida bastante miserable (41). Sólo en la Capital se disfrutaba de un relativo bienestar, monopolizado por un grupo reducido de personas formado por los terratenientes, comerciantes y funcionarios del Gobierno. El grueso de la población carecía de participación en el plano político y de los incentivos adecuados para una superación económica y cultural (42). Por debajo de estos dos sectores de población se encontraban los esclavos, cuyo número a principios del siglo XIX era en Puerto Rico de unos 22,000; ade-

más de carecer de todo significado social, se encontraban de hecho a merced de amos poco escrupulosos a la hora de aplicar los castigos.(43).

.

Hemos presentado en apretada síntesis la trayectoria histórica de Puerto Rico hasta la segunda década del siglo XIX. Dado el retraso y desatención en que se encontraba en aquellos momentos, no puede menos de admirar el orden y mesura con que acogió y utilizó los decretos electorales de 1809 en adelante, así como el interés con que se siguieron las actuaciones de los representantes y el nivel intelectual en el que éstos últimos actuaron en el seno de las Cortes, en las que algunos de ellos consiguieron cargos de prestigio y responsabilidad.

NOTAS

- 1.- MORALES CARRION, Arturo: "Ojeada al proceso histórico de Puerto Rico", (San Juan, Editorial del Departamento de Instrucción Pública, 1956), pág. 5.
El Manuscrito 13845 de la Sección de Manuscritos de la Biblioteca Nacional de Madrid, titulado "Apuntes sobre Puerto Rico", de autor anónimo y escrito hacia 1870, dice que cuando se descubre la isla "estaba tan poblada de gente como una colmena", pág. 50.
Fray Iñigo Abbad y Lasierra, en su "Historia geográfica, civil y política de San Juan Bautista de Puerto Rico", afirma que el número de indios a la llegada de los españoles era de 600,000. (Barcelona, Ediciones S. Juan de Puerto Rico, 1971), pág. 170.
Agustín Sardá y Llavería, refiriéndose a la cifra de Fray Iñigo, dice que le parece exagerada y aduce en prueba de ello el que en 1511, con motivo de una sublevación de los indios, se presentan solamente en el campo de Yagüeca 11,000. Cf.: "La isla de Puerto Rico", (Madrid, Establecimiento tipográfico de Evaristo Sánchez, 1889), pág. 10.
- 2.- ABBAD Y LASIERRA, Fray Iñigo. Op.Cit., pág. 151. También CORDOVA, Pedro Tomás de: "Memoria sobre todos los ramos de la Administración de la isla de Puerto Rico", (Biblioteca Nacional de Madrid. Sección de Manuscritos, Ms. 13860), págs. 14 y 15.
- 3.- El permiso de introducir esclavos fue concedido por la Real Cédula de 22 de julio de 1513. Cf.: Ms. 13845, pág. 60.
- 4.- MORALES CARRION, Arturo. Op.Cit., pág. 4.
- 5.- Biblioteca Nacional, Ms. 13845. Dice textualmente: "En el período de 1521 a 1530 junto con la disminución del número de habitantes y de las divisiones de los encargados del mando, había otras muchas causas de ruina y atraso: porque a los ataques de los caribes siguieron los asaltos de corsarios y piratas extranjeros, causando también estragos los huracanes del 4 de octubre de 1526 y de agosto de 1530", pág. 66. Y más adelante: "Se observa por consiguiente en todo el período muchas quejas contra los Gobernadores, falta de seguridad, pobreza de población por el aniquilamiento de los indígenas, cuyo vacío se intentaba disminuir importando negros y por último escasez de recursos con que fomen-

tar el cultivo para lo cual pedían préstamos al Tesoro". Págs. 67 y 68. También CORDOVA, Pedro Tomás de. Op.Cit., pág. 13.

- 6.- MORALES CARRION, Arturo. Op.Cit., pág. 4, y del mismo autor: "Albores históricos del capitalismo en Puerto Rico", (San Juan, Editorial Universitaria, 1974), pág. 65.
- 7.- MORALES CARRION, Arturo: "Ojeada...", pág. 5, y también Ms. 13845, pág. 73.
- 8.- Ms. 13845, pág. 74, y también MORALES CARRION, Arturo: "Ojeada...", pág. 5.
- 9.- Ms. 13845, pág. 74.
- 10.- CORDOVA, Pedro Tomás de. Op.Cit., pág. 13.
- 11.- Ms. 13845, págs. 70 y 71; y sigue el texto: "Siguieron contra Puerto Rico otros muchos ataques y tal cúmulo de calamidades que aniquilaron su población, cultivo y comercio, quedando la isla en un total abandono hasta el año de 1763, que empezó a repoblarse".
- 12.- En 1641 Felipe III ya lo acreditaba así, al considerar a Puerto Rico como "frente y vanguardia de todas mis Indias Occidentales y respecto de sus consecuencias la más apreciada de ellas y codiciada de los enemigos". Cita de Fernando Miyares González en "Noticia particular de la isla y plaza de San Juan Bautista de Puerto Rico", escrita en 1776, (San Juan, Editorial Universitaria de Puerto Rico, 1954), págs. 24 y 25. También ABBAD Y LASIERRA, Fray Iñigo. Op.Cit., pág. 174.
- 13.- MORALES CARRION, Arturo. "Ojeada...", pág. 7. También, LEDRU, André Pierre: "Viaje a la isla de Puerto Rico", escrita en 1797, (Puerto Rico, Ediciones del Instituto de Cultura Puertorriqueña, 1957), pág. 120. Dice este autor al respecto: "Desde que España está en paz con la Francia y ambas naciones en guerra con la Inglaterra, nuestros intrépidos corsarios han conducido a los distintos puertos de la isla más de doscientas presas hechas a su común enemigo: la venta de esos buques ha surtido al país de toda clase de mercancías, y puesto en circulación gran cantidad de dinero: esta riqueza accidental morirá con la paz, a menos que el Gobierno no rompa las trabas que mantienen estacionaria la prosperidad real de las colonias". Para las normas que regulaban el curso, puede verse el Título V del Tratado sexto de las "Ordenanzas dadas a la Real Armada", de 1748, sobre todo el artículo 11. Cf.: ZAMORA CORONADO, José María: "Biblioteca de Legislación Ultramarina", 6 Volúmenes, (Madrid, Imprenta de J. Martín Alegría, 1843-45), Tomo V, pág. 129.

- 14.- Fray Iñigo, en su ya mencionada obra, dice refiriéndose al presupuesto de 1776: "La Real Hacienda... tiene que suplir sobre lo que percibe de la Isla 487,858 pesos y siete reales de plata, que se llevan todos los años desde Méjico, cuya cantidad no es suficiente algunos años", pág. 175. La misma cifra da Miyares González en su obra, pág. 60. André Pierre Ledrú, (Op.Cit., pág. 107), calcula para 1788 el monto del situado en 2.439,290 libras. Juan Gualberto Gómez y Antonio Sendras Burín en su: "Bosquejo de la Historia de Puerto Rico", (San Juan, Editorial San Juan, 1972), pág. 39, afirman que el situado era la principal fuente de riqueza insular a principios del siglo XIX.
- 15.- La generalidad de los historiadores coinciden en considerar el situado como la principal causa del retraso en el desarrollo insular. En efecto, asegurados mal que bien los fondos necesarios para los gastos de tipo militar, ni el Gobierno de la Península ni el de la isla se preocuparán excesivamente por desarrollar la Hacienda Pública de la isla. Como consecuencia, al cesar el situado en 1810, se producirá una profunda crisis fiscal, que obligará al Gobierno de la isla a echar mano de toda clase de fondos para atender las necesidades más urgentes.
- 16.- Dice a este respecto Fray Iñigo: "La distancia de los principales pueblos de esta Isla a la Capital (único puerto habilitado para registros), lo fragoso de los caminos, la falta de puentes y barcas para el paso de los ríos, dificultan la conducción de los frutos por tierra y duplican su precio. Un peón gana cuatro reales diarios, un caballo ocho, y solo carga cuatro arrobas de café, cuyo valor se estima a 12 reales por arroba, que importan 48 reales. Supongamos que la conducción es de dos jornadas de la Capital: dos días de llevarlo, uno de mansión para la venta y otros dos de regreso, importan 60 reales. Ya se ve que solo la conducción a la Capital duplica con exceso el valor intrínseco de los frutos. Esta sola razón basta para que el comerciante español no pueda tomarlos por el ningún lucro que le dejará su conducción, aun después de la libertad de los derechos reales que S.M. le ha concedido. El vecino de Puerto Rico, no hallando medio físico para dar salida a su cosecha, la vende a menos precio y a cambio de ropas al primero que se presenta en la costa". Pág. 169.
- 17.- Ibidem, pág. 159. "La agricultura -comenta Fray Iñigo- que es la primera de las artes y la verdadera riqueza de un estado, está muy a los principios en esta Isla. Por

la mayor parte se reduce al cultivo de las legumbres y frutos de primera necesidad, sin ofrecer al comercio objeto digno de atención".

18.- Respecto al comercio y al contrabando, comenta el mismo Fray Iñigo: "El comercio de Puerto Rico con España es ninguno, y el que tiene con otras provincias de la Corona es tan limitado que no merece memoria. Algunos barriles de café, malagueta y los pocos cueros que sacan los correos, componen todo el giro, que quizá no ascenderá a 10,000 pesos al año. El de España con esta Isla está reducido a surtir a la Capital de vinos, aceite y ropas y algunas otras manufacturas de lujo. El ramo de harinas y negros corre por cuenta de la Compañía, que se provee en las islas extranjeras y suele introducir al mismo tiempo muchas cosas de contrabando. El resto de la isla poco o nada consume de España; los extranjeros les llevan a sus costas todo cuanto apetecen a cambio de sus producciones y de la plata que corre en ella". Págs. 167 y 168.

19.- CARR, Raymond: "España, 1808-1836", (Barcelona, Ediciones Ariel, 1969), pág. 72 y sgts. Por lo que se refiere a las colonias, la tesis de Carr es que las reformas de los Borbones, si bien consiguieron una mejoría en la calidad de la Administración y favorecieron la prosperidad local, hicieron al mismo tiempo más vivo "el sentimiento que tenía la gente hispanoamericana de las desventajas implícitas en el vínculo que la unía a España", pág. 77. La tesis del profesor Carr parece confirmarse, si consideramos que los liberales de Cádiz, herederos de los ilustrados del Siglo XVIII, no consiguieron conservar las colonias, pese al reconocimiento de la igualdad de todos los españoles "de uno y otro lado del Atlántico", y la concesión de los mismos derechos y libertades a los españoles americanos.

Por su parte, Labra considera como causa principal del movimiento secesionista el hecho de haberse interrumpido las reformas en tiempos de Carlos IV y la vuelta "a la inmoralidad administrativa colonial.. precisamente cuando la propaganda revolucionaria democrática y crítica de Francia y de los Estados Unidos se llevaba de mil modos a todas partes y se afirmaba de mil modos la emancipación de las colonias americanas". Cf.: "Los Diputados americanos en las Cortes de Cádiz", en "España y América, 1812-1912", (Madrid, Tipografía del Sindicato de Publicaciones, 1912), págs. 321 y 322.

20.- "Historia de España", (París, Librairie Spagnole, 1963), pág. 68.

- 21.- Actas del Cabildo de San Juan, (1730-1760), Folio 175.
- 22.- Ibidem, Folios 161 a 172. El promotor de la reforma del sistema de tenencia de la tierra en Puerto Rico fue el Gobernador D. Felipe Remíres de Estenós. Puede verse su "Relación de la reforma de tierras que promueve Don Felipe Remíres de Estenós, Gobernador de Puerto Rico", en: FERNANDEZ MENDEZ, Eugenio: "Crónicas de Puerto Rico", (Barcelona, Editorial Universidad de Puerto Rico, 1973), páginas, 225 a 235.
- 23.- MORALES CARRION, Arturo: "Ojeada...", pág. 7. También en LABRA, Rafael María de. Op.Cit., pág. 319.
- 24.- Arturo Morales comenta acerca del informe de O'Reylly: "Con O'Reylly se formula el programa de la Ilustración para la Isla, programa que no alcanza claro desarrollo orgánico, aunque sí se logran reformas de limitada importancia, particularmente en el régimen comercial y en las prácticas inmigratorias. La Cédula Real de 1778 admite bajo severas restricciones al extranjero y esboza una política agraria que no ha de lograr, sin embargo, eficaz implantación". Cf.: "Ojeada...", pág. 8. El Informe de O'Reylly puede verse también en la obra ya mencionada de Eugenio Fernández Méndez, páginas 237 a 270.
- 25.- Op.Cit., págs. 318 y 319.
- 26.- Tanto el Reglamento de Comercio libre de 12 de octubre de 1778, como la Ordenanza de Intendentes pueden verse en la obra de Zamora Coronado, Tomo I, páginas 244 y siguientes, y Tomo III, páginas 371 a 379.
- 27.- LABRA, Rafael María de. Op.Cit., pág. 321. También CARR, Raymond. Op.Cit., pág. 83.
- 28.- LABRA, Rafael María de. Op.Cit., pág. 321.
- 29.- Entre las atribuciones de los Gobernadores figuraban: Como tales Gobernadores entendían en cuestiones de policía y seguridad; en la promulgación de cuantos decretos y bandos estimaren convenientes y en la ejecución de las leyes. Como Capitanes generales tenían poderes militares, dirigiendo las Milicias y la Marina. Como Intendentes de Real Hacienda dirigían los negocios de la misma. Como Jueces Superiores intervenían en la administración de justicia. Como Vicepatronos Reales participaban en la administración de la Iglesia. Cf.: ABBAD Y LASIERRA, Fray Iñigo. Op.Cit., pág. 146 y sgts. También LEDRU, André Pierre. Op.Cit., pág. 103 y sgts. Biblioteca Nacional de Madrid. Sección de Manuscritos. Ms. 13845, capítulo IX. Las disposiciones de las "Leyes de Indias" relativas a los Gobernadores pueden verse en

la obra ya citada de José María Zamora y Coronado, Tomo III, páginas 357 a 366, y una descripción de sus poderes en el Tomo II, página 175.

30.- El juicio crítico de Fray Iñigo a este respecto es incisivo pero certero: "La autoridad y gobierno depositados en un militar padece sus alteraciones, según la mayor instrucción y modo de pensar del que gobierna. Todos tienen el carácter de capitanes generales y se inclinan a esta jurisdicción más naturalmente que a la política. Acostumbrados a mandar con ardor y a ser obedecidos sin réplica, se detienen poco en las formalidades establecidas para la administración de justicia, tan necesarias para conservar el derecho de las partes. Este sistema hace odiosos a algunos, que no conociendo que el interés del gobierno debe ser el bien del pueblo y que jamás hará éste progreso en la industria ni en las artes mientras no tenga confianza y amor al que gobierna, ha entibiado los ánimos y la aplicación de estos isleños, que por su carácter piden un gobierno dulce y moderado. Cualquiera que sea la causa, la isla está muy lejos de tener el feliz estado que pudiera haber adquirido bajo el mando de gobernadores ilustrados y patrióticos, siendo aun hoy muy gravosa para el Estado, cuando podía y debía utilizarse de muchas maneras". Op.Cit., pág. 149.

31.- Un ejemplo típico de esta forma de actuar la encontramos en el Gobernador D. José Laureano Sanz y Posse que, junto con los generales Gómez Pulido y Romualdo Palacio, formó la trilogía de gobernadores "duros" de la isla. Y sin embargo, el general Sanz y Posse fue enviado a Puerto Rico a finales de 1868 por el Gobierno revolucionario para implantar en la isla las reformas de la Gloriosa. Aparentemente, el general Sanz, que en la Península pasaba por ser un liberal moderado, quedó sumamente impresionado por una abortada insurrección que había tenido lugar en Puerto Rico poco antes de su llegada, y que se conoce con el nombre de "EL Grito de Lares". Para un estudio analítico de la figura del general Sanz puede verse la obra de Labor Gómez Acevedo: "Sanz, promotor de la conciencia separatista", (San Juan, Ediciones de la Universidad de Puerto Rico, 1956)

Para una justificación de la actuación de los Gobernadores de Puerto Rico a lo largo del siglo XIX, Cf ARANA-SOTO, Salvador: "Defensa de los Capitanes Generales españoles. Nueva interpretación del siglo XIX puertorriqueño", (San Juan, s.e., 1968). La tesis del Dr. Arana-Soto se basa en que la política dura de los gobernadores estaba sobradamente justificada, teniendo en cuenta las continuas tentativas de los Estados Uni-

dos y de los revolucionarios de las antiguas colonias españolas para anexionar o independizar a la Isla.

- 32.- En el presupuesto de 1836, por ejemplo, de unos gastos totales de 979,334 pesos, 703,544 estaban destinados a las necesidades de Guerra y Marina, mientras que el resto de las atenciones del Gobierno tenían que repartirse los 275,790 pesos sobrantes. Cf.: Archivo Histórico Nacional (Madrid). Sección de Ultramar, Legajo 3418/4.
- 33.- El caso típico lo constituían las harinas, cuya producción estaba prohibida en Puerto Rico. Para una descripción de los turbios manejos que se realizaban en la isla en torno al abasto de este producto de primera necesidad, puede verse la obra del Dr. Morales Carrión: "Albores históricos del capitalismo en Puerto Rico", sobre todo las páginas 114 a 121.
- 34.- Para lograr el permiso de importación de harinas del extranjero, los Gobernadores de Puerto Rico recurrían a todo tipo de artimañas y argumentos, incluyendo los de carácter patético, religioso y sentimental: que no había pan ni siquiera para los enfermos de los hospitales o que no había harina para hacer las hostias. Cf.: MORALES CARRION, Arturo: "Albores históricos...", pág. 90 y sgts.
- 35.- Especialmente funesto era éste último, que consistía en la obligación de todo agricultor y ganadero de entregar una res de cada cuatro para el consumo de carne de la capital. Para evadir esta obligación, muchos ganaderos abandonaron la cría de ganado. Cf.: ABBAD Y LASIERRA, Fray Inigo. Op.Cit., pág. 316.
- 36.- Op.Cit., pág. 178. Por su parte, dice Labra refiriéndose a la situación de las colonias a finales del siglo XVIII "No debe prescindirse de que hasta 1778 las prohibiciones mercantiles habían llegado hasta lo imposible. Por supuesto, los extranjeros estaban absolutamente incapacitados para comerciar con las Américas; los españoles sólo podían hacerlo por el puerto de Cádiz, bajo la inspección de la casa de Sevilla y por medio de los famosos galeones, y las no menos célebres ferias de Jalapa y Panamá; y hasta las mismas provincias americanas no podían comerciar entre sí. Después de los Decretos de Carlos III subsistió sólo la primera de estas prohibiciones: traba que alguna vez (como en Buenos Aires en 1809) tuvieron que levantar temporalmente las autoridades españolas: que las Juntas americanas suprimieron a poco de constituirse y que a la postre abolió Fernando VII en 1818 respecto a Cuba y

Puerto Rico, para que estas islas prosperaran. En cuanto a los estancos (que eran de sal, de plomo, de la pólvora y del azogue y sus compuestos, así como del tabaco y de los naipes) hay que advertir que recaían sobre unos pueblos gravados ya por un sinnúmero de impuestos indirectos tan enojosos como el quinto del oro y plata extraídos, los tributos de indios, el almojarifazgo, las alcabalas sobre el pulque y aguardientes de caña, la lotería, los dos novenos del diezmo, las bulas, etc., etc., amén de las prohibiciones en materia de cultivo, industria y pesca.

- 37.- Cide a este respecto André Pierre Ledrú, en su ya citada obra, refiriéndose al presupuesto de gastos e ingresos para 1788: "No presento como auténtico el anterior estado. La Administración Pública en Puerto Rico está envuelta en tantas sombras y misterio que apenas puede un extranjero penetrarlos", pág. 107. Por su parte, Pedro Tomás de Córdova en su "Memoria", pág. 161, describe del siguiente modo el caos administrativo imperante en la Isla: "La cuenta y razón se llevaba con indecible informalidad; era difícilísimo saber el rendimiento de cada ramo; extraordinario el monopolio que se hacía por los empleados en los puertos habilitados; las cuentas de éstos no se liquidaban e iban aglomerándose en la Contaduría; el contrabando era el más escandaloso y en connivencia con los que debían celarlo; todo esto ofrecía abusos y dilapidaciones las más criminales".
- 38.- LEDRU, André Pierre. Op.Cit., pág. 23. Ledrú da esta cifra para el año 1797. El mismo juicio negativo sobre la enseñanza lo encontramos en Córdova. Op.Cit., pág. 121
- 39.- CRUZ MONCLOVA, Lidio: "Historia de Puerto Rico", 6 Volúmenes, (Barcelona, Editorial Universitaria, 1969), Tomo I, pág. 16.
- 40.- CORDOVA, Pedro Tomás. Op.Cit., págs. 14 y 15. Como ejemplo demostrativo del estado deplorable de los caminos de la isla, narra el siguiente suceso: "En 1785 el Capitán general Dabán intentó visitar la isla y solo pudo hacerlo por la costa, sin que lograra penetrar al interior por la maleza y espesura de los bosques y por la falta absoluta de caminos".
- 41.- Ibidem, pág. 106.
- 42.- Dice Miyares González, refiriéndose al incremento en las entradas de dinero en el erario público: "La circulación de éstos (caudales) y demás proporciones que exige el mayor comercio dio fomento a varios vecinos que se aprovecharon del primer tiempo para adquirir cau-

dales, pues aunque no pasan de cuatro los sobresalientes, son muchos los de 10 a 20,000 pesos". Op.Cit, pág. 60.

43.- CRUZ MONCLOVA, Lidio. Op.Cit., Tomo I, pág. 17.

PRIMER PERIODO: DESDE 1809 HASTA 1836

A.- Visión de conjunto.-

Se abre este período, que representa la inauguración de una nueva época en la historia de España, con el Decreto de la Junta Suprema de 22 de mayo de 1809, por el que se restablecía la representación legal de la Monarquía española en las Cortes (1). En el mes de Octubre del mismo año la Junta Suprema expedía un Manifiesto y un Decreto sobre los días en que habían de convocarse y abriese las Cortes Generales, fijándolo para el 1 de enero y 1 de marzo de 1810 respectivamente (2). Finalmente, los días 1 de enero y 14 de febrero expedía sendas Instrucciones para la elección de diputados a Cortes en la Península y en América y Asia (3).

Las Cortes Generales y Extraordinarias, reunidas en la isla de León y posteriormente en Cádiz, elaboran, discuten y aprueban la Constitución de 1812, primer texto constitucional español que estuvo vigente, salvo en los períodos de vuelta al régimen absolutista, hasta que se promulgó la Constitución de 1837. Con arreglo a los decretos mencionados y a la Constitución de 1812, los habitantes de los dominios españoles quedaron convertidos en ciudadanos, con plenos derechos y en igualdad de condiciones que los nacidos en la Península. Por su parte, los dominios pasaban a ser considerados provincias y no colonias.

Este hecho marcará una dirección irreversible en el proceso de desarrollo histórico de Puerto Rico, en el sentido de su incorporación a la vida y avatares políticos de la Península, incorporación que la obligará a seguir los vaivenes, avances y retrocesos que se produzcan en la misma. La única diferencia que cabe señalar consiste en la exclusión ya mencionada, de los representantes de Puerto Rico en 1836, exclusión que privaría a la isla de estar presente en la vida parlamentaria peninsular durante treinta y dos años, hasta su readmisión en 1868.

Consideraremos esta primera etapa como un período de tanteo y prueba en cuanto a las posibilidades e implicaciones de la

concesión de voz y voto en el seno del más alto cuerpo legislativo de la Nación a los representantes de los territorios ultramarinos. A puerto Rico esta experiencia le sirvió como un medio perfectamente adecuado para aquilatar las posibilidades que en el orden de su desarrollo le brindaba la representación parlamentaria y aceptó sin problemas ni sacudidas bruscas el nuevo orden de cosas. Por ello no es de extrañar que a ningún sector político de la isla satisficiera la decisión adoptada por las Cortes de 1836 de excluir de su seno a los representantes de Ultramar, sin que sirviera para amortiguar el golpe la promesa, recogida en la Constitución de 1837, de dar a la isla leyes especiales, decisión que algunos políticos insulares interpretaron en el sentido de obtener un gobierno autónomo (4). Bien pronto, sin embargo, se disiparon los equívocos, pues ni siquiera se llegaron a aprobar tales leyes. Solo en 1865, es decir, 28 años después de recogido el principio, se creó una Junta de Información cuyos trabajos, sobre todo en torno al problema de la esclavitud, tuvieron amplia resonancia, pero ningún resultado práctico en el momento.

B.- Las tendencias políticas de Puerto Rico durante este periodo.-

A pesar de que en esta primera etapa aun no existían partidos políticos en la isla, ni tan siquiera grupos organizados de diferentes aspiraciones, se deja sentir ya la presencia de las dos tendencias que más adelante configurarán los primeros partidos políticos insulares: la conservadora, partidaria a ultranza de la integridad territorial de España y del "statu quo" colonial, poco dispuesta en consecuencia a aceptar cambios políticos, pero deseosa de reformas económicas y sociales que favoreciesen y reforzasen su posición. Sostenían esta postura los grandes propietarios agrícolas, con honrosas y contadas excepciones, los comerciantes mayoristas, los dueños de las pocas industrias locales y los funcionarios públicos. A partir de 1823 se sumarán a esta tendencia los emigrados de Tierra firme, que hufan de la vorágine revolucionaria (5).

La otra tendencia -reformista o liberal- aspiraba a introducir reformas de todo tipo en Puerto Rico, hasta conseguir una situación política, económica y social semejante a la de la Metrópoli. Militaban en este sector el grupo de pequeños propietarios agrícolas, pequeños comerciantes, maestros, algunos oficiales del ejército y la mayoría de los insulares distinguidos. A todos estos habría que añadir algunos españoles peninsulares.

Más adelante, sobre todo a partir de la independencia de las colonias españolas de Tierra firme, comenzó a tomar cuerpo otra tendencia más radical, cuyo propósito era el de lograr la completa separación de la isla respecto de la Metrópoli, siguiendo el ejemplo tanto de las colonias españolas, como de los Estados Unidos. Esta tendencia que, lógicamente, nunca fue aceptada por el Gobierno, tuvo una actuación clandestina en la isla y en distintas ocasiones se materializó en conatos de movimientos revolucionarios en general fácilmente controlados por el Gobierno insular.

Finalmente, unas anotaciones sobre los representantes elegidos en este primer período: de las nueve elecciones para diputados a Cortes realizadas a lo largo del mismo, ocho de los elegidos fueron de tendencia liberal, y solamente uno de la conservadora (6). En general, todos los representantes que llegaron a participar en los debates de las Cortes dieron sobradas muestras de su cultura política y de su amplitud de criterio, lo que les permitió destacar en muchas de sus intervenciones y ocupar varios puestos de responsabilidad en el seno de las mismas (7).

Otro tanto habría que decir del espíritu que impregnaba las diferentes "Instrucciones" dadas por los Ayuntamientos de la isla a los diputados; en ellas se examinaban de forma crítica los diversos ámbitos de la vida insular, fundamentalmente el político, el económico y el social, proponiendo al mismo tiempo soluciones prácticas, en general perfectamente compatibles con la política general de la Metrópoli. Algunas Instrucciones, como la del Ayuntamiento de San Germán de 1809 y repetida en 1812,

iban más allá en sus peticiones, hasta el punto de que el representante, D. Ramón Power, no se atrevió a presentarlas; decía así en su primer punto la mencionada Instrucción:

"Primeramente debe protestar que esta Villa reconoce y se sujeta a dicha Junta Suprema Central ahora y en todo tiempo que gobierne en nombre de Nuestro muy Amado, Augusto y Dignísimo Rey, el Señor Don Fernando Séptimo y su Dinastía; pero si por disposición Divina (lo que Dios no permita) se destruyese ésta y perdiera la Península de España, quede independiente esta Isla y en libre arbitrio de elegir el mejor medio de la conservación y subsistencia de sus habitantes en paz y religión cristiana" (8).

C.- La Elección de Vocal ante la Junta Suprema.-

Con fecha 22 de enero de 1809, la Junta Suprema y Gubernativa de España e Indias procedía a expedir un Decreto, en virtud del cual se reconocía a todas las colonias, juntamente con la consideración de parte integrante de la Monarquía española, el derecho de representación en el seno de la propia Junta (9).

Recibido que fue el mismo por el Gobernador y Capitán General de Puerto Rico, D. Toribio Montes, éste procedió a enviar un Oficio a los cinco Ayuntamientos que en aquel momento estaban constituidos en la isla, a saber: San Juan, San Germán, Aguada, Arecibo y Coamo. En dicho Oficio, el General Montes glosaba el Decreto de 22 de enero y excitaba a los Alcaldes a su exacto cumplimiento (10).

Segun las instrucciones del Oficio, cada uno de los cinco Ayuntamientos debería elegir tres individuos "de notoria probidad, talento e instrucción, exentos de toda nota que pueda menoscabar su opinión pública". Continuaba recomendando que en la elección se prescindiese "del espíritu de partido que suele dominar en tales casos y sólo atendiendo al riguroso mérito de justicia vinculado a las cualidades que constituyen un buen ciudadano y un celoso patricio" (11).

En el mes de mayo de 1809 y en sucesivas fechas, fueron elegidos los distintos candidatos, tanto para vocales ante la Junta Suprema como para formar parte de la Junta Electoral que lleva-

ría a cabo el nombramiento en la Capital. Los cinco candidatos elegidos para Vocal ante la Junta Suprema fueron:

Por el Ayuntamiento de San Juan: D. José Ignacio Valdeyuli (12).

Por el de San Germán: D. José Gutierrez del Arroyo (13).

Por el de la Aguada: Ilmo.Sr.D. Juan Alejo de Arizmendi (14)

Por los de Coamo y Arecibo: D. Ramón Power Giralt y D. Jacinto Santana (15).

El día 15 de julio se reunió en el Palacio de La Fortaleza, residencia oficial del Gobernador, y bajo su presidencia la Junta Electoral, la cual procedió a efectuar el sorteo entre los cinco candidatos, de acuerdo a los preceptos del Decreto de 22 de enero. A primera suerte salió elegido el Teniente de Navío, D. Ramón Power Giralt, que en aquellos momentos se encontraba en Santo Domingo, tomando parte en la guerra que en esa isla mantenía España contra los franceses. Power regresó de inmediato a Puerto Rico, en donde fue acogido con grandes manifestaciones de júbilo y simpatía (16).

Pero el azar impidió, sin embargo, que Power, al igual que el resto de los Vocales elegidos para la Junta Suprema, desempeñara su misión ya que poco después, y como consecuencia del creciente descontento que produjeron en la Península las derrotas sufridas por las tropas españolas, la Junta Suprema se disolvía, abdicando su poder en un Consejo de Regencia compuesto de cinco miembros, el cual quedó instalado el día 5 de octubre de 1810 (17).

Con la desaparición de la Junta Suprema quedaron sin efecto las elecciones de Vocales, por expresa decisión del Consejo de Regencia, contenida en la Real Orden de 17 de marzo de 1810 (18).

NOTAS

- 1.- Por lo que se refiere a Ultramar, este "restablecimiento" de las Cortes podría referirse a lo que disponía el Título VIII, Libro 4º de la Recopilación de Indias, dedicado a las "Ciudades y Villas y sus preeminencias". Aparecen en él varias leyes de finales del siglo XVI que determinan se celebren Consejos en las Ciudades y Villas "por mandato del Rey". De estos Consejos salieron peticiones y aún protestas elevadas al Rey, sobre asuntos de muy diverso carácter. Cf.: Zamora y Coronado, José María. Op.Cit., Tomo II pág. 121
- 2.- GAMONEDA, Antonio: "Leyes electorales y proyectos de ley", (Madrid, Imprenta Hijos de J.A. García, 1906), págs. 1 a 12.
- 3.- Ibidem, págs. 15 a 55
- 4.- En efecto, el artículo 2º adicional de la Constitución de 1837 decía textualmente: "Las provincias de Ultramar serán gobernadas por leyes especiales". La Constitución de 1845 recogió íntegro el texto anterior en su artículo 80, así como también la Constitución no promulgada de 1856, en su artículo 86. Cf.: TIERNO GALVAN, Enrique: "Leyes políticas españolas fundamentales (1808-1936)", (Madrid, Editorial Tecnos, 1968), pág. 82 y sgts.
- 5.- MORALES CARRION, Arturo: "Ojeada...", pág. 8. El Dr. Morales destaca el odio de los refugiados de Tierra firme al movimiento insurreccional del que huían, experiencia que les empujó a adherirse en la isla a la tendencia conservadora. Sin embargo, reconoce que representaron en otros órdenes una aportación positiva al desarrollo económico y cultural de Puerto Rico.
- 6.- Durante el periodo que se extiende desde 1809 hasta 1836 se realizaron en Puerto Rico dos elecciones más que en la Península. La razón fue doble: en primer lugar, porque la Constitución preceptuaba que en Ultramar se efectuasen con bastante más antelación que en la Península -15 meses, de acuerdo con el artículo 37 de la Constitución de 1812- y en segundo lugar, por la tardanza con que se recibían en la isla las noticias de los sucesos y cambios políticos ocurridos en la Metrópoli.
- 7.- Comenta Labra a este respecto: "Porque desde el primer momento, los diputados americanos se presentaron a

"la misma altura y con la misma competencia que el resto de los diputados de la Nación. Y éstos, desde el primer al último día de la vida de aquellas Cortes dedicaron a sus compañeros de América la consideración más exquisita, prodigándoles, si así puede decirse, las simpatías, los respetos y los honores". Cf.: "Los diputados americanos en las Cortes de Cádiz" (Madrid, Tipografía del Sindicato de Publicaciones, 1912), pág. 267.

- 8.- Archivo General de Indias. Sección de Ultramar. Legajo 450.
- 9.- CONDE DE TORENO: "Historia del Levantamiento, Guerra y Revolución de España", (Madrid, Editorial Atlas, 1956), Tomo II, Apéndice al capítulo 8.
- 10.- Actas del Cabildo de San Juan, (1809-1810), pág. 33
- 11.- Ibidem.
- 12.- Fue elegido en la sesión celebrada el día 4 de mayo. Cf.: Actas del Cabildo de San Juan, (1809-10), págs. 34 y 35.
- 13.- Archivo General de Indias, Sección 10, Ultramar, Legajo 450.
- 14.- Ibidem, Legajo 428.
- 15.- Ibidem, Sección 5, Audiencia de Santo Domingo, Legajo 2339.
No hemos podido identificar cuál de los dos candidato correspondió a cada Ayuntamiento, ya que el documento no lo especifica.
- 16.- Ibidem, Legajos 2325 y 2326.
- 17.- Los cinco miembros fueron los siguientes: El Obispo de Orense, el General Castaños, el Consejero de Estado Saavedra, el General D. Antonio Escaño y D. Miguel de Lardizábal, éste último en representación de los territorios de Ultramar.
Comentando Labra el carácter y ejecutoria del Consejo de Regencia, decía al respecto:

"La Regencia que en 1810 vino a la vida no fue más discreta ni obtuvo mayores glorias que la Central. Pensaba, como ahora también se dice hablando de nuestras provincias ultramarinas, cierta fatalidad sobre América; pues que le cupo ser representada en aquel cuerpo por la persona más refractaria a toda idea nueva y menos competente para acometer las reformas radicales que exigía el estado de aquellas colonias. Fue esta persona el Sr. Lardizábal, de temperamento reaccionario, y a quien circunstancias muy excepcionales le habían llevado a la Regencia. Así que en ésta fue siempre el mayor enemigo de las libertades que apuntaban de las Cortes, que tan a despecho tuvo la Regencia que reunir. Hombre de incontestable talento, literato ap

ciado, y bien que nacido en América, preocupado exclusivamente de la política peninsular, dejábase influir mucho en las cosas de aquellas lejanas tierras por el grupo de monopolizadores que en Cádiz existían, y singularmente por los comerciantes, que aun allí tanto interés debían tener en que subsistiesen ciertas estrecheces e intolerancias que redundaban en porvecho de su bolsillo. Por tanto, poco era de esperar de la Regencia". Cf.: "La pérdida de las Américas", en "Es aña y América, 1812-1912", (Madrid, Tipografía del Instituto de Publicaciones, 1912), pág. 191.

- 18.- Archivo General de Indias. Sección 5, Audiencia de Santo Domingo, Legajo 2325.

1.1. LA ELECCION GENERAL DE 1810

A.- La convocatoria

El día 31 de enero de 1810 quedaba instalado el Consejo de Regencia, el cual no veía con buenos ojos la convocatoria de Cortes hecha por la Junta Suprema con fecha 1 de enero del mismo año (1). En efecto, los miembros de la Regencia estimaban más importante en aquellos momentos la acción militar que la parlamentaria y constitucional, y si finalmente continuaron la línea política de la Junta, ello se debió a la presión ejercida por el ambiente gaditano, plagado de elementos avanzados (2).

El día 14 de febrero publicaba la Regencia una "Instrucción para las elecciones por América y Asia", a la que acompañaba un Real Decreto de la misma fecha (3). En la Instrucción se decía entre otras cosas:

"Tened presente en consecuencia, que al pronunciar o al escribir el nombre del que ha de venir a representaros en el Congreso Nacional, vuestros destinos ya no dependen ni de los ministros, ni de los virreyes ni de los gobernadores; están en vuestras propias manos".

El Real Decreto, por su parte, determinaba que Puerto Rico tendría un representante, elegido por el Ayuntamiento de la Capital mediante sorteo, de entre los tres candidatos que hubieran obtenido el mayor número de votos (4). No obstante, se reconocía que ésta era una forma provisional de elección, y anunciaba que en las mismas Cortes Extraordinarias se establecería "la forma constante y fija en que debe procederse a la elección de Diputados de esos dominios para las que hayan de celebrarse en lo sucesivo" (5).

B.- Proceso electoral y resultados

El Gobernador y Capitán General de Puerto Rico, D. Salvador Meléndez Bruna, que había sustituido al General Montes, procedió con fecha 27 de febrero de 1810 a publicar un Oficio glo-

sando la Real Orden de la Junta Suprema de 7 de enero del mismo año, en el que explicaba la forma de elegir al representante a Cortes (6). Por su parte, el Ayuntamiento de San Juan citaba a los capitulares para que concurrieran a Cabildo el día 17 de abril, con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones del Real Decreto de 14 de febrero (7).

Reunido, en efecto, el Ayuntamiento de San Juan y practicada la votación inicial, resultó que habían obtenido votos los siguientes candidatos:

D. Ramón Power Giral	7 votos
D. Juan Alejo Aritmendi	5 "
D. José Ignacio Valdeyuli	4 "
D. Antonio Jiménez	3 "
D. Diego Pizarro	2 "
D. Jacinto Santana	1 voto
D. Manuel García	1 "
D. Nicolás Quiñones	1 " (8).

Acto seguido se procedió al sorteo entre los tres candidatos que habían obtenido mayor número de votos, y a primera suerte salió D. Ramón Power, a quien se proclamó Diputado a Cortes por la provincia de Puerto Rico (9).

Power se embarcó para Cádiz a finales de abril y llegó a España el 31 de mayo. Por esta rapidez en el proceso electoral y en su llegada a la Península en el Decreto del Consejo de Regencia de 8 de septiembre de 1810 sobre elección de suplentes se hace notar expresamente que Puerto Rico no debería elegirlo, toda vez que su diputado ya se encontraba en la plaza (10). El propio Power informa en su correspondencia al Ayuntamiento de San Juan que ha llegado a Cádiz incluso antes que algunos diputados de la propia Península (11).

C.- Las Instrucciones al Diputado

De acuerdo con lo que estipulaba el Real Decreto de 14 de febrero de 1810 relativo a las instrucciones que deberían darse al representante elegido los Ayuntamientos que así lo acor-

dasen, en Puerto Rico varios de ellos redactaron una serie de "Instrucciones" para que Power las presentase a las Cortes. Estos documentos, a la vez que nos informan sobre los problemas que la sociedad puertorriqueña tenía planteados en ese momento, nos sirven para comprobar la conciencia que los distintos Ayuntamientos tenían de los mismos, y sobre la forma que juzgaban más adecuada para resolverlos.

Se conservan actualmente los de cuatro Ayuntamientos de la isla: San Juan, Coamo, Aguada y San Germán, aunque hay indicios de que otros Ayuntamientos redactaron otras. Los temas abordados en ellas abarcan realmente todos los aspectos de la sociedad, desde la instrucción pública hasta la prevención de la delincuencia, pasando por la sanidad, las obras públicas, agricultura e industria, la Administración, el comercio, el sistema contributivo y la igualdad de oportunidades para los nativos (12)

En cuanto a las soluciones que se proponen, son muchas y todas ellas basadas en criterios pragmáticos y modernos: para extender y elevar el nivel cultural de los habitantes se pide el fomento de la Instrucción pública y el establecimiento de una Universidad; para el fomento de la agricultura se pide sobre todo la eliminación del "abasto forzoso" de la Capital; que se levante la prohibición de sembrar trigo en la isla; rebaja de los impuestos que pesaban sobre la agricultura y la libre importación de aperos agrícolas. Para fomentar la ganadería, se pedía sobretodo la libertad de exportación. Finalmente, para incrementar la industria, solicitaban la abolición del derecho de saca que gravaba la destilación del ron.

NOTAS

- 1.- GAMONEDA, Antonio. Op.Cit., págs. 19 a 45.
- 2.- TUÑON DE LARA, Manuel: "La España del Siglo XIX", (Barcelona, Editorial Laia, 1974), págs. 22 y 23.
- 3.- A pesar de lo que consignaba la convocatoria hecha por la Regencia, con fecha 1 de enero de 1810, en el sentido de que los dominios de América formaban parte integrante y esencia de la Monarquía española, y que como a tales les correspondían los mismos derechos y prerrogativas que a la Metrópoli, lo cierto es que la forma de elegirse los diputados fue diferente a uno y otro lado del Atlántico. En efecto, la base electoral en la Península la constituían todos los ciudadanos mayores de 25 años, con casa abierta, así como todos los eclesiásticos seculares, a razón de 1 diputado por cada 50,000 almas. Por el contrario, en Ultramar, los diputados serían solamente 1 por cada capital cabeza de partido, y, por otra parte, la elección correría a cargo del Ayuntamiento de cada capital, sin que en la misma tuviera intervención ningún elemento representativo, puesto que ni siquiera los Cabildos eran de elección popular. Cf.: GAMONEDA, Antonio. Op. Cit., pág. 47 y sgts.
- 4.- Ibidem, pág. 54.
- 5.- Ibidem, pág. 55. Varios diputados americanos intervinieron en las Cortes para protestar contra esta diferencia de normatividad electoral, que contradecía, en su opinión, las declaraciones de igualdad de los distintos decretos, tanto de la Junta Central como del Consejo de Regencia. El representante de Puerto Rico, D. Ramón Power, se refería a este punto en su intervención del día 16 de enero de 1811, pidiendo al mismo tiempo se igualase totalmente el principio de la representación y proponiendo se eligiesen en Ultramar un número adicional de diputados para conseguir la misma proporción que en la Península. Cf.: Diario de Sesiones de las Cortes, 1811, págs. 382 y sgts.
- 6.- Actas del Cabildo de San Juan, (1809-1810), pág. 136.
- 7.- Ibidem, pág. 147.
- 8.- Ibidem, págs. 150 a 152.
- 9.- Archivo de las Cortes. Sección de Expedientes, Legajo 3, número 35.

- 10.- GAMONEDA, Antonio. Op.Cit., pág. 74.
 - 11.- Archivo General de Puerto Rico (San Juan). Colección Junghans.
 - 12.- RAMIREZ DE ARELLANO, Rafael W.: "Las Instrucciones al Diputado D. Ramón Power Giral", (San Juan, Editorial Universidad de Río Piedras, 1936). En esta obra se recogen las Instrucciones de los Ayuntamientos de San Juan, Coamo y Aguada, así como el Informe dado por el Alcalde D. Pedro Irisarry (sic) al Ayuntamiento de la Capital y que, en opinión de Ramírez de Arellano, sirvió para la redacción de las Instrucciones de Coamo. Advierte en su obra que las de las de San Germán y Arecibo no aparecen por ninguna parte. Posteriormente sin embargo, aparecieron las de San Germán, pero siguen sin aparecer las de Arecibo. Cf.: Archivo General de Indias. Sección 10, Ultramar, Legajo 450.
-

1.2. LA ELECCION GENERAL DE 1812-1813

A.- La Convocatoria.-

Las Cortes Generales y Extraordinarias concluyeron sus sesiones el día 14 de septiembre de 1813, pero ya el día 23 de mayo anterior habían expedido un Decreto por el cual se convocaba a las próximas Cortes, que tendrían el carácter de ordinarias (1). Los dos puntos más sobresalientes del texto del Decreto era, en primer lugar, el retraso en la apertura de las mismas -1 de octubre en lugar del 1 de marzo- (artículo 2º), y en segundo, la prohibición de reelegir a los diputados de las anteriores (artículo 5º) (2).

Acompañaban a este Decreto dos Instrucciones: una para las elecciones en la Península e islas adyacentes y la otra para las provincias de Ultramar (3). De esta última cabe destacar la formación de una "Junta Preparatoria de Elecciones", cuya finalidad sería la de facilitar la elección de los diputados (artículo 1º); dicha Junta estaría formada por el Jefe Superior, el Obispo de la Diócesis, el Intendente donde lo hubiere, el Alcalde más antiguo y "de dos hombres buenos, vecinos de la misma provincia, y nombrados por las personas arriba indicadas" (artículo 2º) (4). El artículo 4º determinaba que se elegiría un diputado por cada 70,000 personas "de las comprendidas en el artículo 29 de la Constitución" (5). Por último, la Junta debería efectuar "para este solo efecto, la división más cómoda del territorio en provincias y designará en cada una de ellas la ciudad donde deban reunirse los electores de los partidos para elegir los diputados de Cortes" (6).

La Junta Preparatoria de Puerto Rico se aplicó rápidamente a las tareas que la Instrucción le encomendaba y así, en su primera reunión, celebrada el 3 de agosto de 1812, fueron elegidos los dos "hombres buenos", el Presbítero D. Antonio Sánchez Bustamante y D. Alonso Cangas Llanos (7). En la segunda

se estudió el Censo de población de la isla, que había sido formado ese mismo año (8). Se desprendía del mismo que había en Puerto Rico 79,662 personas de las comprendidas en el artículo 29, lo cual daba derecho a elegir un solo Diputado. También se trató en esta reunión de la división más conveniente del territorio en Partidos, acordándose finalmente su división en cinco, a saber: Partido Primero, Capital; Partido Segundo, San Germán; Partido Tercero, San Blas de Coamo; Partido Cuarto, San Francisco de Asís de la Aguada; Partido Quinto, San Felipe Apóstol de Arecibo (9).

En la tercera reunión se acordaron las fechas de las distintas elecciones, señalándose para las de Parroquia el domingo tercero del mes de octubre, día 18 de 1812; para las de Partido, el domingo tercero de noviembre, día 15, y para las de Provincia el domingo tercero de diciembre, día 20 (10). En la cuarta reunión se tomaron decisiones acerca de algunas dudas relacionadas con algunas operaciones de la Junta. En la quinta y última, a la que asistió el primer Intendente nombrado en la isla, D. Alejandro Ramírez, se acordó no disolver la misma hasta el comienzo de las elecciones, con el fin de poder resolver las dudas que pudieran suscitarse. También se acordó nombrar una Comisión compuesta por los tres vocales, D. Francisco Pimentel, D. Antonio Sánchez y D. Alonso de Cangas Llanos, para formar un proyecto comprensivo de todos los trabajos y ocupaciones a que se había dedicado la Junta (11).

B.- Proceso electoral y resultados.-

De acuerdo con lo dispuesto por la Junta Electoral, el día 18 de octubre se celebraron en toda la isla las elecciones de Parroquia. No hemos podido conseguir más que los datos de algunos resultados del Partido de la Capital; los demás parecen haber desaparecido en los avatares históricos de la isla (12). Por lo que se refiere a la forma en que se desarrolló el proceso electoral, se produjeron algunas dificultades debidas a la inexperiencia de los electores y a ciertas disensiones que ya comenzaron a producirse entre los elementos conservadores y li-

berales de la isla (13).

El día 15 de noviembre tuvieron lugar las elecciones de Partido; en éstas debemos destacar los incidentes producidos en el de San Germán, con motivo de varias acusaciones formuladas contra dos electores, D. Mateo Peña y D. Joaquín Ramírez, acusaciones que motivaron la repetición de dicha elección y el retraso consiguiente de la de Provincia (14). Los resultados de la Elección de Partido fueron, finalmente, los siguientes:

Partido de la Capital: D. Emigdio de Andino

Partido de San Germán: D. Ildefonso Sepúlveda

Partido de Coamo: D. José Colón Ortiz

Partido de Aguada: D. Nicolás Cardona

Partido de Arecibo: D. Jacinto Santana (15).

Las elecciones de Provincia, que, como hemos dicho, estaban dispuestas para el día 20 de diciembre, tuvieron que retrasarse primero hasta el 17 de enero de 1813 y después hasta el 21 de febrero, con el fin de dar tiempo a la celebración de la elección del Partido de San Germán (16). Celebradas finalmente, resultó elegido por mayoría de votos D. José María Quiñones, de ideas liberales, y para suplente D. José Antonio Torralbo (17).

C.- Comentarios.-

Los incidentes electorales de San Germán y los posteriores de la Capital dieron lugar a la formación de un Expediente de 24 cuadernos que se enviaron a las Cortes; en dicho Expediente se incluían varios recursos de nulidad, pruebas de infracción de la Constitución, varias representaciones del Gobernador y Capitán General de Puerto Rico contra algunos miembros de la Junta Electoral del Partido de San Germán, de éstos contra el Gobernador y finalmente, las quejas de los electores excluidos y la del Ayuntamiento de Mayagüez, con la petición de que las Cortes declarasen la nulidad de la elección de San Germán y en consecuencia la de la Provincia (18).

Este Expediente dió lugar a un dictámen de la Comisión de Constitución de las Cortes y a un voto particular de uno de sus miembros. El dictámen de la Comisión daba por válida la elec-

ción de Puerto Rico, si bien aconsejaba introducir algunas variaciones en cuanto a la división electoral del territorio, en el sentido de aumentar el número de Partidos. Por su parte, el voto particular era más duro y pedía se condenase la actuación de los miembros de la Junta Electoral, así como la del Fiscal, D. José Ignacio Valdeyuli, por haberse prestado a proporcionar a la Junta de Partido documentos ilegales contra electores (19).

La decisión final de las Cortes fue acordar el encausamiento de los miembros de la Junta, pero dando al propio tiempo por válida la elección de D. José María Quiñones (20).

NOTAS

- 1.- GAMONEDA, Antonio. Op.Cit., pág. 77 y sgts.
- 2.- En el caso de Puerto Rico era abligada la elección de otro diputado, además por otro motivo. En efecto, el 10 de junio de 1813 había fallecido D. Ramón Power como consecuencia de un brote de fiebre amarilla que azotó la ciudad de Cádiz. Cf.: Diario de Sesiones de las Cortes Generales y Extraordinarias, 1813, pág. 5,485. También: Actas del Cabildo de San Juan, (1812-1814), págs. 135 y 136. Entresacamos del Acta correspondiente al día 27 de julio de 1813 el siguiente comentario del Ayuntamiento:
"Al recibirla (la noticia de su muerte), el ayuntamiento ha quedado penetrado del justo dolor que ha debido causarle la lamentable pérdida de este digno ciudadano, que desde el momento de su elección no ha cesado de trabajar con constancia y con honor por el bien y felicidad del pueblo, a quien mereció la mayor confianza en el uso de sus derechos. Merece, pues, el justo tributo del reconocimiento, y que su memoria sea eterna en los corazones de sus compatriotas".
- 3.- GAMONEDA, Antonio. Op.Cit., pág. 79 y sgts.
- 4.- En cumplimiento de este artículo, la Junta Preparatoria de Elecciones quedó compuesta por las siguientes personas: Gobernador y Capitán General, D. Salvador Meléndez Bruna; Obispo, Dr.D. Juan Alejo de Aritmendi; Alcalde de Primer Voto, Dr.D. Francisco Pimentel; el Regidor más antiguo (por enfermedad del Decano), Licenciado Auditor de Marina, D. Juan Antonio Mexía; el Síndico Provincial, D. Francisco Antonio Hernández y los dos "hombres buenos", elegidos por todos los anteriores, el Presbítero D. Antonio Sánchez Bustamante y el Comisario de Guerra Honorario, D. Alonso de Cangas Llanos. Cf.: Archivo General de Indias. Sec-10, Ultramar, Legajo 426. La Junta Preparatoria comenzó sus reuniones el día 3 de agosto, haciéndolo todos los martes hasta el 17 de febrero.
- 5.- El artículo 29 determinaba que la base para la representación sería la compuesta de los naturales "que por ambas líneas sean originarios de los dominios españoles". Cf.: MARTIN DE BALMASEDA, Fermín: "Colección de Decretos y Ordenes que han expedido las Cortes Generales y Extraordinarias desde su instalación en 24 de

septiembre de 1810 hasta igual fecha de 1812", (Madrid Imprenta Nacional, 1813), Tomo I, págs. 98 a 164.

- 6.- El artículo 83 de la Constitución determinaba que si a una provincia le correspondía solamente un diputado, deberían elegirle "a lo menos cinco electores" (de Partido).
- 7.- Archivo General de Indias. Sección 10, Ultramar, Legajo 426.
D. Antonio de Cangas Llanos era, además, Secretario jubilado. Ibidem, Legajo 435.
- 8.- Puede verse el Estado formado por la Junta en el Anexo I.
- 9.- En el Anexo II se recoge la división en Partidos realizada en la isla, con expresión del número de ciudadanos, compromisarios y electores parroquiales de cada una.
- 10.- Archivo General de Indias. Sección 10, Ultramar, Legajo 426
- 11.- Ibidem
- 12.- Al igual que sucede en la Península, bastantes documentos relacionados con las elecciones se encuentran diseminados por los distintos Archivos y Ayuntamientos de la isla. Desde hace cuatro años, el Archivo General de Puerto Rico, organismo dependiente del Instituto de Cultura Puertorriqueña, está tratando de recoger y organizar todos los documentos que existen en la isla sobre este periodo.
- 13.- Diario de Sesiones de las Cortes, 1813. págs. 5544 y sgts.
- 14.- Archivo General de Indias. Sección 5, Audiencia de Santo Domingo, Legajo 2329. En este Legajo se recogen las decisiones adoptadas por el Gobernador de Puerto Rico en cumplimiento de las resoluciones de las Cortes con motivo de los incidentes electorales.
- 15.- Archivo General de Indias. Sección 10, Ultramar, Legajo 426. En la elección del Partido de San Germán celebrada el 15 de noviembre resultó electo el Dr. D. Nicolás Quiñones. Pero D. Mateo Peña alegó en la Junta Electoral de Provincia celebrada el 17 de enero de 1813 que D. Nicolás Quiñones no podía ser elector por hallarse enjuiciado por indicios de infidencia. La Junta aceptó la alegación y ordenó se celebrase una nueva elección en San Germán. Después de varias reuniones, resultó electo para sustituir al Dr. Quiñones el Presbítero D. Ildefonso Sepúlveda.
- 16.- La elección se llevó a cabo el día 6 de febrero de 1813.
Cf.: Diario de Sesiones de las Cortes, 1813, pág. 5,545.
- 17.- Archivo de las Cortes. Sección de Expedientes. Legajo 5, N° 37. También en Archivo General de Indias. Sección

10, Ultramar, Legajo 426.

18.- Diario de Sesiones de las Cortes, 1813, pág. 5,544

19.- Ibidem, págs. 5,545 y 5,546.

20.- D. José María Quiñones se encontraba en Cuba en el momento de su elección. De allí se trasladó a Puerto Rico y finalmente a Cádiz el 28 de agosto de 1813. Cf.: Archivo General de Indias. Sección 10, Ultramar, Legajo 426.

ANEXO I

Estado que manifiesta el número de habitantes en la isla de San Juan de Puerto Rico, de la clase que en él se expresa, deducido del Censo general de su población.

Habitantes blancos				
Parroquias	Padres de familia	Madres de familia	Hijos	Hijas
Ciudad de Puerto Rico	907	751	820	884
Guainabo	98	100	214	190
Bayamón	560	770	469	490
Toa-alta	273	301	411	417
Vega-alta	45	43	117	103
Toa-baja	85	95	318	264
Corozal	85	87	247	224
Vega-baja	150	148	339	355
Manatí	775	822	1,740	1,724
Arecibo	485	562	1,194	1,331
Camuy	44	42	68	78
Utuado	305	359	777	815
Tuna	405	448	1,076	1,100
Pepino	518	536	1,241	1,162
Moca	449	464	989	988
Aguadilla	716	799	1,595	1,534
Aguada	662	691	1,499	1,252
Rincón	520	489	868	965
Añasco	645	471	1,191	1,119
Mayagüez	685	730	1,260	1,200
Cabo-rojo	325	318	761	730
San Germán	551	590	1,166	1,168
Yauco	276	305	659	606
Peñuelas	185	190	442	460
Ponce	712	404	1,124	901
Juana Díaz	129	123	225	194
Coamo	210	270	268	259
Guayama	66	80	264	288
Patillas	112	124	250	103
Barranquitas	140	160	200	210
Cidra	84	82	178	167
Cayey	88	105	222	203
Hato grande	104	100	225	223
Caguas	400	409	1,250	1,340
Juncos	133	159	202	297
Piedras	55	47	150	114

Parroquias	Padres de familia	Madres de familia	Hijos	Hijas
Maunabo	66	68	111	82
Yabucoa	174	179	375	301
Humacao	352	298	536	612
Naguabo	216	129	261	257
Pajardo	352	370	832	731
Luquillo	48	42	78	107
Loysa	92	88	156	138
Trujillo	83	80	182	149
Rio Piedras	69	72	134	139
Cangrejos	13	14	26	16
Totales	13,447	13,514	26,711	25,990

RESUMEN

Padres de familia	13,447
Madres de familia	13,514
Hijos	26,711
Hijas	25,990
Total general	79,662

Puerto Rico, 11 de agosto de 1812

Fuente: Archivo General de Indias. Sección 10, Ultramar. Legajo 426.

ANEXO II

Estado que presenta la Comisión a la Junta Preparatoria, demostrativo del número de electores parroquiales que corresponden a la población de la isla de San Juan de Puerto Rico, con expresión de los Partidos en que se divide en conformidad de lo acordado por la misma Junta, consecuente a la letra de los artículos 5, 6 y 7 de la Instrucción respectiva, como única Provincia que debe nombrar un solo Diputado de Cortes y otro Suplente con arreglo al Censo último de la misma población, al artículo 4º de la propia Instrucción y a la Constitución política de la Monarquía española.

PARTIDO PRIMERO

Ciudad de San Juan de Puerto Rico

Parroquia	Número de Ciudadanos	Idem de Compromis.	Idem de Elect. Parroquiales
Ciudad de Puerto Rico...	907	31	5
Vega-alta	45	2	
Toa-baja	85	4	10
Corozal	85	4	
Vega-baja	150	11	1
Toa- alta	273	11	1
Bayamón	560	31	3
Guainabo	98	5	
Rio Piedras	69	9	1
Cangrejos	13	82	4
Trujillo	83	4	
Loisa	93	5	11
Luquillo	48	2	
Fajardo	352	21	2
Naguabo	216	11	1
Humacao	352	21	2
Maunabo	66	3	
Barranquitas	140	7	10
Piedras	55	3	
Juncos	133	7	10
Caguas, cuya población es de 400 ciudadanos, a que se agrega la de Hato grande contante de 104 por no estar aun erigida en parroquia.....	504	31	3

PARTIDO SEGUNDO

Villa de San Germán

San Germán	551	31	3
Yauco	276	11	1
Cabo-rojo	325	21	2
Mayagüez	685	31	3
Añasco	645	31	3

PARTIDO TERCERO

Villa de San Blas de Coamo

Coamo	210	11	...	17	2
Juana Díaz	129	6	...			
Ponce	712	31			4
Peñuelas	185	11			1
Cayey, cuya población es de 88 ciudadanos, a que se agrega la de Cidra contante de 84 por no estar aun erigida en parroquia.....							
.....	172	11			1
Guayama	66	3	...	9	1
Patillas	112	6	...			
Yabucóa	174	11			1

PARTIDO CUARTO

Villa de San Francisco de Asís de la Aguada

Aguada	662	31			3
Aguadilla	716	31			4
Moca	449	21			2
Rincón	520	31			3
Pepino	518	31			3

PARTIDO QUINTO

Villa de San Felipe Apóstol de Arecibo

Arecibo, cuya población es de 485 Ciudadanos a que se agrega la de Camuy y constante de 44 por no estar aun erigida en parroquia.....							
.....	529	31			3
Utüado	305	21			2
Tuna	405	21			2
Manatí	775	31			4

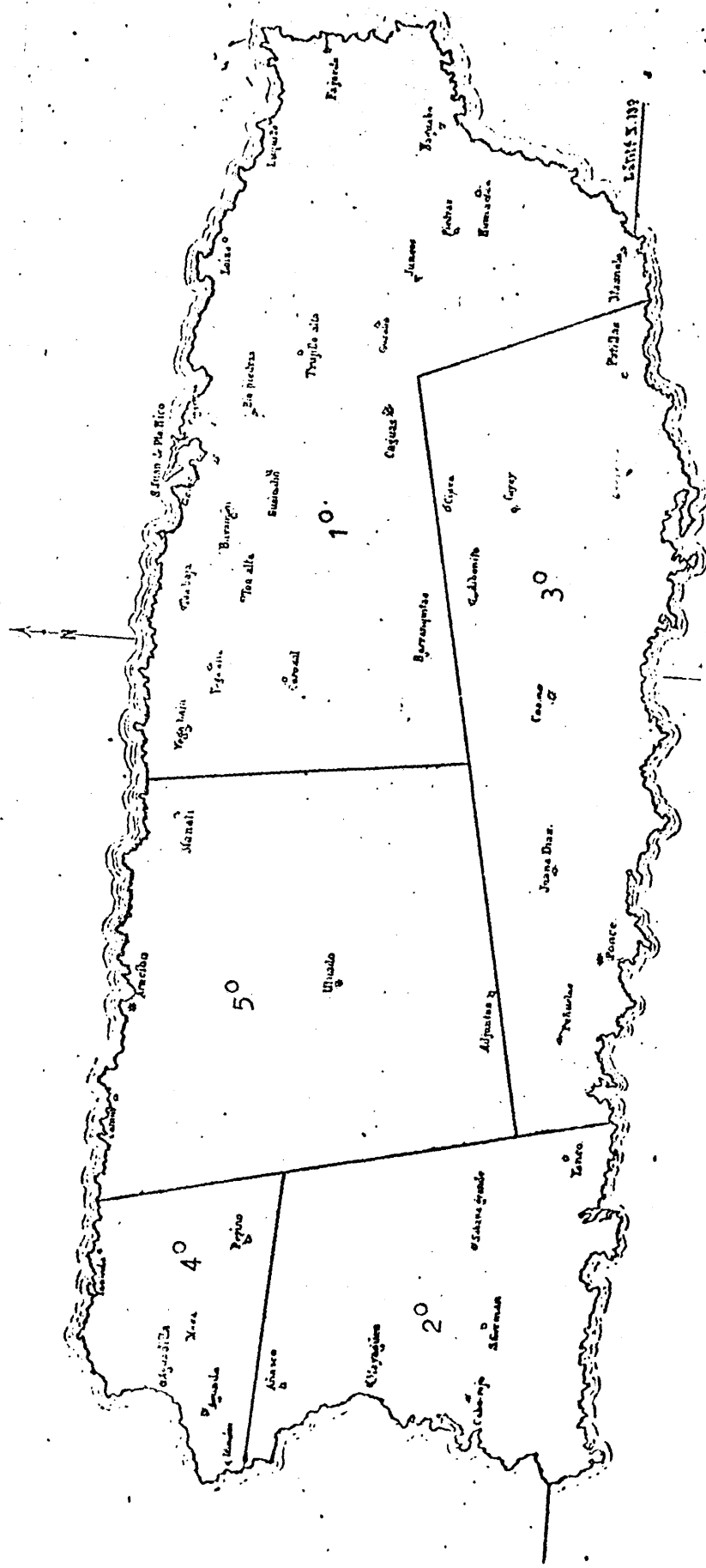
Nota: Asciende el número de ciudadanos constante en este Estado a trece mil cuatrocientos quarenta y siete y es el mismo que resulta del Censo general presentado a la Junta preparatoria por disposición del Sr. Presidente de ella y Gefe Superior de la Provincia.

RESUMEN

<u>PARTIDO</u>	<u>PUEBLOS</u>	<u>HABITANTES</u>	<u>CIUDADANOS</u>
Capital	22	63,779	4,327
San Germán	5	46,043	2,482
Coamo	9	29,706	1,760
Aguada	5	22,360	2,865
Arecibo	<u>5</u>	<u>21,101</u>	<u>2,014</u>
Totales	46	182,101	13,448

Fuente: Archivo General de Indias. Sección 5, Audiencia de Santo Domingo, Legajo 2329.

(1812)



ANEXC III

RESULTADOS DE LAS ELECCIONES DE PARROQUIA

Partido de la Capital

(18 de octubre de 1812)

<u>PARROQUIA</u>	<u>ELEGIDOS</u>	<u>PROFESION O CARGO</u>
Capital	Pbro.D. Miguel de Andino Coronel D. Lorenzo Ortiz D. Alonso de Cangas Llanos Tte. de Navío D. Joseph M. Vertiz Capitán D. Andrés Vizcarrondo Pbro.D. José Matías Santaella D. Juan Ruiz y Peña D. Rafael Ramírez de Arellano Pbro.Dr.D. José M. Ruiz y Peña Dr.D. Sebastián Jiménez D. Juan Rodríguez Calderón D. Francisco A. Hernández Pbro.D. Francisco Torres D. Mariano Zepero D. Nicolás Vizcarrondo D. Vicente Santana D. Francisco Sanz de León Pbro.D. Joseph M. Martínez Pbro. D. Francisco Pimentel Pbro.D. Tomás Ortiz de Peña D. Benito Ramos Capitán D. Francisco Fernández Capitán D. Luis de Sola	Prebendado de la Sta. Iglesia Catedral Comandante de Milicias Disciplinarias Comisario de Guerra Honorario Comandante Militar de Marina Cuerpo Nacional de Artillería Cura Párroco Alcalde Alcalde Cura Párroco Alcalde Alcalde Vecino Cura Párroco Regidor Vecino Vecino Vecino Cura Párroco Cura Párroco Cura Párroco Vecino Cuerpo de Milicias Disciplinarias Cuerpo de Milicias Disciplinarias
Bayamón		
Caguas		
Toa baja		
Vega baja		
Rio Piedras		
Loisa		
Fajardo		
Naguabo		
Toa alta		
Juncos		
Barranquitas		
Humacao		
4		

Fuente: Archivo Histórico de Puerto Rico (San Juan). Sección "Gobernadores de Puerto Rico". Legajo 186 Box 48.

1.3. LA ELECCION PARTICULAR DE 1813-14

En cumplimiento de una de las recomendaciones de la Comisión de Constitución de las Cortes, con motivo de los sucesos electorales de San Germán y de la Capital, el Gobernador de la isla comisionó a la Diputación provincial para que estudiase y propusiera una nueva partición del territorio (1). A su vez, la Diputación encargó al Presbítero D. Antonio Sánchez y a D. Manuel Pizarro la realización del trabajo. El día 9 de junio de 1813 daban su primer informe y el 6 de julio era aprobado en todas sus partes el proyecto presentado (2).

Los puntos más importantes del proyecto consistían en una división de la isla en siete Partidos electorales y en otra de dos a efectos del nombramiento de Jueces Letrados (3). Aunque el proyecto, como hemos dicho, se aprobó por la Diputación provincial, de momento no se aplicó, continuando la división electoral anterior de los cinco Partidos (4).

A.- La Convocatoria de elecciones.-

Esta elección de diputado a Cortes, que no se realizó en la Península, se llevó a cabo en Puerto Rico a tenor de lo preceptuado por el artículo 37 de la Constitución de 1812. De acuerdo con el mismo, el Gobernador de la isla procedió a mediados del mes de noviembre a publicar la convocatoria para la elección del diputado para el bienio 1814-1815 (5). De acuerdo con los datos del Censo electoral elaborado por la Diputación provincial, resultó que, a pesar de haber aumentado la población blanca en 24,989 personas, los electores habían disminuído en 1,023 (6).

B.- Proceso electoral y resultados.-

El domingo día 1 de diciembre de 1813 dieron comienzo las elecciones a nivel de Parroquia (7). En enero de 1814 se celebraron las de Partido, en las que resultaron elegidos los siguientes candidatos:

Por el Partido de la Capital: Pbro.D. Antonio Sánchez

Por el Partido de San Germán: D. Paulino del Toro

Por el Partido de Coamo: D. Antonio Vázquez

Por el Partido de Aguada: D. Nicolás Cardona

Por el Partido de Arecibo: D. Gregorio Despiau (8).

Finalmente, el 13 de marzo de 1814 comenzaron en la Capital las elecciones de Provincia, con la presentación por parte de los electores de sus respectivas credenciales, para su examen por la Junta Electoral de Provincia. El lunes, día 14, continuó el proceso, y concluida la votación, resultó elegido por pluralidad absoluta de todos los votos D. Gabriel de Ayesa para Diputado y D. Buenaventura Quiñones como suplente (9).

Desgraciadamente, ni el uno ni el otro pudieron desempeñar sus funciones, ya que con el retorno de Fernando VII se instauró de nuevo en la Península el régimen absolutista.

C.- El regreso de Fernando VII y la restauración del absolutismo.-

Por el Tratado de Valençay de 11 de diciembre de 1813 Napoleón restituía a Fernando en el Trono de España, iniciándose de este modo un nuevo período en la historia de España del siglo XIX. Pero Fernando, rígido absolutista en sus principios políticos, aunque tímido a la hora de tomar decisiones, no sabe de momento qué postura adoptar ante el régimen constitucional surgido en la Península durante su ausencia y en su nombre (10). Lo único que se le ocurre es ganar tiempo y por eso, en lugar de dirigirse directamente a Madrid, se desvía por Valencia, esperando que se produzca alguna reacción. Esta llega, en efecto, en forma de un Manifiesto -el llamado "De los Persas"- en el cual se critica de forma sistemática toda la labor política realizada en la Península desde 1808. Al mismo tiempo, ensalza la figura del monarca absoluto como la única forma "de prescribir a los súbditos todo lo que mira al interés y obligar a la obediencia a los que se niegan a ella" (11).

Sintiéndose más seguro al contar con este grupo de diputa-

dos -69 en total- y de una gran parte del ejército, Fernando procede a firmar en Valencia varios decretos fechados el 4 de mayo, pero que no se hicieron públicos hasta después de su entrada triunfal en Madrid el día 10 del mismo mes. Por ellos, se retractaba de lo prometido a Napoleón en el Tratado de Valençay y declaraba "nulos y de ningún valor ni efecto" tanto la Constitución de 1812 como el resto de los decretos expedidos por las Cortes, considerando reos de lesa Majestad a los que tratasen de hecho, escrito o palabra de restablecerlos (12).

Si en opinión de Tuñón de Lara el país volvía así al régimen de la Edad Media, no debe sorprender que Puerto Rico se viera arrastrado a la misma situación, una vez que comenzaron a llegar a la isla las primeras noticias del golpe de Estado. En efecto, informado el Gobernador Meléndez Bruna el día 30 de junio de lo ocurrido en la Península publicó, junto con el Real Decreto de 4 de mayo, una Proclama suya en la que anunciaba el restablecimiento en Puerto Rico de la soberanía absoluta de Fernando VII (13).

Sucesivamente fueron publicados una serie de decretos encaminados a dejar sin efecto toda la labor de las Cortes en favor de la isla: uno de ellos con fecha 24 de marzo ordenaba al recién electo diputado suspender su viaje a la Península; otro de fecha 15 de junio disponía que los Ayuntamientos se arreglasen a las leyes que los regían en 1808 (14). Llegó a publicarse un decreto prohibiendo se utilizasen los términos "liberal" y "servil" con los que se designaban las dos tendencias políticas que se habían desarrollado en la Península durante la ausencia del Rey (15).

La vuelta al régimen absolutista significó para Puerto Rico la pérdida de su consideración como parte integrante de la Monarquía española; los habitantes de la isla perdieron al mismo tiempo la ciudadanía y los 39 Ayuntamientos electivos, surgidos al calor de la Constitución, fueron eliminados. En este sentido, podemos decir que en Puerto Rico se sintió con más intensidad la restauración del absolutismo, sobre todo por ser la primera

vez que sus habitantes habían disfrutado de las primicias del régimen liberal.

Sin embargo, al igual que sucedió en la Península, no todos se sintieron defraudados por el cambio: el sector conservador de la isla acogió con muestras de satisfacción el giro de los acontecimientos, en tanto que los liberales tuvieron que plegar sus velas, confiando en que el futuro les deparase tiempos y circunstancias mejores (16). Dice a este respecto el historiador Cruz Monclova:

"... buena parte del pueblo insular, espoleada por un elan vital intuitivo, que había cobrado impulso al calor de las franquicias del régimen constitucional, supo conservar vivos y firmes en el espíritu, los principios que había puesto en juego la lucha política de este período: el sentido de un gobierno por consentimiento como contrapolo de un régimen de fuerza; el sentido de la democracia, como contrapolo de un orden de jerarquía; y el sentido de la libertad, como contrapolo de un régimen de privilegio. Y, con todos estos elementos, la determinación de no conformarse más con el mero papel de comparsa en su propia tierra" (17).

NOTAS

- 1.- Archivo General de Indias. Sección 5, Audiencia de Santo Domingo, Legajo 2329.
 - 2.- Ibidem
 - 3.- En el Anexo I se recoge la nueva distribución de la isla en Partidos aprobada por la Diputación; en el Anexo II la efectuada para el nombramiento de Jueces Letrados, en cumplimiento del artículo 273 de la Constitución de 1812. En realidad, lo que establecía este artículo era que debería nombrarse uno en cada Partido, pero la Diputación estimó que esto sería sumamente costoso para Puerto Rico. Cf.: Archivo General de Indias, Sección 5, Audiencia de Santo Domingo, Legajo 2329.
 - 4.- La división de la isla en siete Partidos a efectos electorales no se aplicó hasta la elección de 1820-1821.
 - 5.- Actas del Cabildo de San Juan, (1812-1814), pág. 195.
 - 6.- En el Anexo III se recoge una relación de habitantes y ciudadanos correspondiente a esta elección.
 - 7.- No hemos logrado encontrar los resultados de las elecciones a nivel de Parroquia.
 - 8.- Archivo General de Indias. Sección 10, Ultramar Legajo 426.
 - 9.- Ibidem
 - 10.- Carr, Raymond: "España, 1808-1936", (Barcelona, Ediciones Ariel, 1969), pág. 128.
 - 11.- "Manifiesto que al Señor Don Fernando VII hacen en 12 de abril de 1814, los que suscriben, como diputados en las actuales Cortes ordinarias...". Citado por Miguel Artola: "La Burguesía revolucionaria", (Madrid, Ediciones Alfaguara, 1974), pág. 42.
 - 12.- Ibidem, pág. 43.
 - 13.- Actas del Cabildo de San Juan, (1814), págs. 99 y 100. También Gaceta de Puerto Rico, 1814, Vol. 9 N. 23.
 - 14.- Ibidem.
 - 15.- Archivo General de Indias. Sección 5, Audiencia de Santo Domingo, Legajo 2329
 - 16.- Ibidem, Legajo 2330. También, Sección 10, Ultramar, Legajos 405 y 452.
 - 17.- Op.Cit., Tomo I, pág. 72
-

ANEXO I

"División de Partidos que para el nombramiento de Diputado a Cortes propone la Comisión a fin de que en lo sucesivo concurren siete electores con lo que se completaría el número de otros tantos individuos que deben componer la Diputación provincial viniendo uno de cada Partido"

PARROQUIAS	VECINOS	TOTAL DE VECINOS POR PARTIDO
Puerto Rico	1,582	
Vega alta	129	
Vega baja	161	
Corozal	200	
Toa baja	363	
Toa alta	584	
Bayamón	1,370	6,419
Guainabo	335	
Rio Piedras	213	
Cangrejos	112	
Trujillo	172	
Loisa	377	
Caguas	821	
Humacao	702	
Luquillo	178	
Fajardo	522	
Naguabo	334	2,441
Piedras	199	
Yabucoa	307	
Juncos	199	
Guayama	308	
Patillas	162	
Hato grande	229	1,333
Cidra	143	
Cayey	379	
Ponce	1,863	
Peñuelas	564	
Barranquitas	227	3,414
Juana Díaz	318	
Coamo	442	
San Germán	2,208	
Yauco	815	
Sabana grande	---	
Cabo rojo	613	6,272
Mayagüez	1,402	
Añasco	1,234	

<u>PARROQUIAS</u>	<u>VECINOS</u>	<u>VECINOS POR PARTIDO</u>
Aguada	782	
Aguadilla	812	
Moca	457	3,158
Pepino	542	
Rincón	565	
	<hr/>	
Arecibo	668	
Tuna	422	
Utuaado	384	2,541
Camuy	164	
Manaty	885	
	<hr/>	

RESUMEN

Partido de la Capital	6,419
Partido de Humacao	2,441
Partido de Guayama	1,333
Partido de Ponce	3,414
Partido de San Germán	6,272
Partido de Aguada	3,158
Partido de Arecibo	<u>2,541</u>
Total general	25,578

Fuente: Archivo General de Indias. Sección 5, Audiencia de Santo Domingo, Legajo 2329

ANEXO II

"División de Partidos a que la Comisión reduce los de toda la Isla para el nombramiento de Jueces Letrados, con presencia de los dos Estados que acompañan sacados de la Secretaría de Gobierno y por las razones que expondrán al acto de su presentación"

<u>PARTIDO DE LA CAPITAL</u>	<u>VECINOS</u>	<u>PARTIDO DE SAN GERMAN</u>	<u>VECINOS</u>
Puerto Rico	1,582	San Germán	2,208
Coamo	442	Juana Díaz	318
Barranquitas	227	Ponce	1,863
Cidra	143	Peñuelas	564
Cayey	379	Yauco	564
Guayama	308	Cabo rojo	815
Patillas	112	Mayagüez	1,402
Hato grande	229	Añasco	1,234
Maunabo	162	Rincón	565
Yabucoa	307	Aguada	782
Caguas	821	Aguadilla	812
Juncos	199	Moca	457
Piedras	199	Pepino	542
Humacao	334	Tuna	422
Naguabo	334		
Fajardo	522	Suma	12,597
Luquillo	178		
Loisa	377		
Trujillo	172		
Rio Piedras	213		
Cangrejos	112		
Guainabo	335		
Bayamón	1,370		
Toa baja	363		
Toa alta	584		
Corozal	200		
Vega alta	129		
Vega baja	161		
Manatí	885		
Utuado	384		
Camuy	164		
Arecibo	668		
Suma	12,981		

Fuente: Archivo General de Indias. Sección 5, Audiencia de Santo Domingo, Legajo 2329

ANEXO III

RELACION DE HABITANTES, VECINOS Y CIUDADANOS POR PARROQUIAS
(1813)

<u>PARROQUIAS</u>	<u>HABITANTES</u>	<u>VECINOS</u>	<u>CIUDADANOS</u>
Puerto Rico	8,706	1,582	907
Vega alta	1,531	129	48
Vega baja	1,381	161	150
Corozal	1,550	200	85
Toa baja	3,385	363	85
Toa alta	3,344	584	273
Bayamón	7,411	1,370	560
Guainabo	2,649	335	98
Rio Piedras	2,335	213	82
Cangrejos	808	112	--
Trujillo	2,579	172	83
Loisa	2,916	377	92
Luquillo	1,414	178	48
Fajardo	1,194	522	352
Naguabo	1,916	334	216
Humacao	4,179	702	352
Maunabo	1,293	162	66
Barranquitas	1,309	227	113
Piedras	1,290	199	55
Juncos	1,493	199	133
Caguas	6,426	821	400
Hato grande	1,670	229	104
San Germán	16,523	2,208	551
Yauco	6,004	815	276
Cabo rojo	6,134	613	325
Mayagüez	9,634	1,402	685
Añasco	7,748	1,234	645
Coamo	2,876	442	210
Juana Díaz	1,831	318	129
Ponce	9,838	1,863	712
Peñuelas	3,564	564	185
Cayey	2,612	379	88
Cidra	1,117	143	84
Guayama	2,519	308	66
Patillas	2,833	360	112
Yabucoa	2,516	307	174
Aguada	5,395	782	662
Aguadilla	6,196	812	717
Moca	3,356	1,457	449
Rincón	3,536	565	520
Pepino	3,877	542	518
Arecibo	6,608	686	485

<u>parroquias</u>	<u>habitantes</u>	<u>vecinos</u>	<u>ciudadanos</u>
Camuy	1,013	164	44
Utuado	3,241	384	305
Tuna	3,562	422	405
Manatí	<u>6,677</u>	<u>885</u>	<u>775</u>
Sumas	182,989	25,578	12,424

Fuente: Archivo General de Indias. Sección 5, Audiencia de Santo Domingo, Legajo 2329

1.4. LA ELECCION GENERAL DE 1820

A.- El Pronunciamiento de Riego.-

El día 1 de enero de 1820 el Comandante Riego, que mandaba el Batallón de Asturias concentrado en Cádiz y dispuesto a embarcar hacia América, proclamó en Cabezas de San Juan la Constitución de 1812. Tras unos momentos de incertidumbre respecto a la suerte de este pronunciamiento, acabó por triunfar al extenderse el movimiento al Norte y Este de la Península. El resultado fue obligar a Fernando VII no solo a la convocatoria de Cortes, a lo que ya se había comprometido el día 6 -aunque a la antigua usanza-, sino también a jurar la Constitución de 1812, acto que realizó el día 9 de marzo de 1820, es decir, ocho años después de haber sido promulgada (1).

La noticia de la restauración del régimen constitucional llegó a Puerto Rico en el mes de mayo, y de forma inmediata el nuevo Gobernador de Puerto Rico, Brigadier Vasco de Pascual, procedió a publicar una proclama, declarando de nuevo vigente en la isla la Constitución de 1812 (2).

La reacción de los diferentes sectores políticos fue esta vez una imagen en negativo de la de 1814: mientras los elementos conservadores manifestaron su descontento, los liberales, llenos de júbilo, realizaron múltiples manifestaciones públicas sobre todo en la Capital, aclamando a la Constitución y a las Cortes (3).

B.- La convocatoria de elecciones.-

El día 22 de marzo de 1820 expidió Fernando VII un Real Decreto convocando a Cortes ordinarias para el bienio 1820-21, "con arreglo a lo prevenido en la Constitución política de la Monarquía española" (4). Continuaba el Real Decreto señalando el día 9 de julio como fecha de apertura de las Cortes, dada la imposibilidad material de hacerlo en la fecha indicada en la propia Constitución (5). Los artículos 10 al 19 se referían

a la elección de diputados suplentes por las provincias de Ultramar. Esta fórmula de emergencia iba encaminada a lograr la presencia de representantes de aquellos territorios desde el momento de la apertura de las Cortes; posteriormente, y a medida que fueran llegando a la Península los propietarios, irían aquellos cesando en sus funciones. También se determinaba el número de suplentes por todas las provincias de Ultramar, que se fijó en treinta, las calidades requeridas y la forma de realizarse la elección (6).

A este Real Decreto acompañaban dos Instrucciones: una para la Península e islas adyacentes y la otra para Ultramar. Los puntos más importantes de esta última eran: la formación de una nueva Junta Preparatoria de Elecciones en cada una de las Capitales de provincia y la enumeración de sus cometidos, que eran prácticamente los mismos que los de las Juntas de 1812 y 1813 (7).

El día 24 de marzo, La Junta Provisional Consultiva de la Península publicaba un escrito justificando una serie de disposiciones que había tomado, y se refería entre ellas al expediente de los diputados suplentes como la mejor forma de dar participación a los representantes de Ultramar en el seno de las próximas Cortes (8).

C.- Proceso electoral y resultados.-

Antes de publicar el Decreto de convocatoria de las elecciones, el Brigadier Vasco de Pascual procedió a constituir la Junta Preparatoria con fecha 24 de junio de 1820 (9). La Junta se dedicó de inmediato a la labor de rectificar la distribución electoral de 1813, tomando como base el censo de población de 1818. El día 11 de julio presentaba la nueva estadística electoral, distribuida por Partidos (10).

Estando ya todo preparado para que pudieran llevarse a cabo las elecciones, el Gobernador procedió con fecha 15 de julio a expedir el Decreto convocatoria de las elecciones, fijando en el mismo las fechas en que habrían de celebrarse cada una de ellas:

el 30 de julio las de Parroquia; el 6 de agosto las de Partido y el 20 de agosto las de Provincia (11). En una Circular que acompañaba al Decreto el Gobernador describía las cualidades que debería tener el representante de Puerto Rico:

"Ha llegado el tiempo en que los habitantes de esta isla manifiesten a la faz del mundo sus sentimientos nobles y el punto hasta donde estos sentimientos los conducen por la guía de la justicia y del patriotismo. Va a procederse a la elección del representante de Puerto Rico en el Augusto Congreso Nacional, del representante que reunido a los demás ilustres compañeros en el areópago español sea una fuerte roca contra el despotismo, un escollo contra la arbitrariedad, un defensor de la ley, de los derechos del pueblo, y de Puerto Rico en particular. Tal es el hombre, el Ciudadano, el Puerto-rriqueño en que deben recaer vuestros sufragios. No busqueis, pues, otras cualidades en la persona que trateis de elegir, huyendo siempre de la intriga, la cábala, el coeCHO y la vil adulación".

De acuerdo con lo establecido, el domingo 30 de julio se celebraron en toda la isla las elecciones de Parroquia (12). En el mes siguiente se llevaron a cabo las de Partido, cuyos resultados fueron los siguientes:

Por el Partido de la Capital: D. Buenaventura Quiñones

Por el Partido de San Germán: Pbro.Dr.D. Lorenzo Cestero

Por el Partido de Coamo: D. Salvador Blanch

Por el Partido de Aguada: D. Manuel García

Por el Partido de Arecibo: Pbro.D. José Domínguez (13).

La Gaceta de Puerto Rico insertaba el día 19 de agosto, es decir, la víspera de las elecciones de Provincia, un artículo titulado "A los electores de Partido", en el que les aconsejaba honradez y prudencia en la decisión:

"... Correspondez, pues, a la confianza de un modo que os haga dignos del aprecio universal: consultad la opinión pública que debe ser el barómetro de vuestras elecciones; meditad detenidamente este delicado asunto puesto que de él depende la gloria y prosperidad de vuestros comitentes y de la Nación española, o el volvernos a las duras cadenas de un bárbaro despotismo"(14)

Finalmente, los días 20 y 21 de agosto se celebraron en la Capital las elecciones de Provincia. Concluida la votación, resultaron electos con todos los votos, D. Demetrio O'Daly, Maris-

cal de Campo de los Ejércitos Nacionales para Diputado y D. José María Quiñones para suplente, ambos de ideas liberales (15).

Tanto O'Daly como Quiñones se encontraban en la Península, donde el primero desempeñaba el cargo de diputado suplente por la isla desde el 10 de julio de ese mismo año.

D.- Comentarios.-

En el mes de junio de 1820 se fundaba en San Juan un periódico de tendencia liberal con el nombre de "El Investigador"; sus promotores habían sido los miembros de una sociedad nacida en ese mismo año al calor del régimen constitucional restaurado: "Liberales Amantes de la Patria". En dicho periódico aparecieron numerosos artículos de propaganda liberal, en los que se ensalzaba la Constitución y se criticaba duramente el régimen absolutista.

Pues bien, en el número 19 apareció un Manifiesto de los miembros de la citada sociedad, que se considera como el primer de los dirigidos a los electores en la historia de Puerto Rico. En él se recomendaba a los electores dar sus votos a personas identificadas con el sistema constitucional, y dispuestos a proponer medidas para sacar a la isla de la crisis total en que se hallaba; también les recomendaba huir de la intriga, del egoísmo y del despotismo (16).

Una vez terminado el proceso electoral, el nuevo Gobernador de la isla, Brigadier González de Aróstegui, publicó una proclama alabando el orden y la corrección con que se habían desarrollado las elecciones, exaltando al propio tiempo la figura del Mariscal O'Daly del que afirmaba ser la persona más capacitada para proponer las medidas encaminadas a lograr la felicidad de la isla (17).

D.- Las Instrucciones al Diputado.-

Por su parte, el nuevo diputado, que había recibido la noticia de su nombramiento en propiedad con gran entusiasmo, se

apresuró a pedir las Instrucciones correspondientes al Ayuntamiento de San Juan. El Cabildo de éste comisionó a los señores D. Fernando Fernández, D. José Javier Arazamendi y D. Francisco Matheu para que las redactaran (18).

En ellas se encomendaba al diputado que gestionara la extensión del permiso de libre comercio con los países extranjeros; que se obligara a todos los barcos que arribaran a la isla a tocar primero en el puerto de San Juan para su inspección; la reducción del interés sobre los capitales impuestos a censo del 5 al 3 %; la fundación de un hospital de caridad, una casa de beneficencia y un lazareto. Por último, el establecimiento de más escuelas primarias y secundarias y la fundación de una universidad en San Juan (19).

NOTAS

- 1.- El día 10 de marzo Fernando VII daba a la publicidad el famoso "Manifiesto del Rey a la Nación española", en el que se contenía la frase: "Marchemos francamente, y yo el primero, por la senda constitucional". Cf.: Artola, Miguel, Op.Cit., págs. 45 y 46.
- 2.- Archivo General de Indias. Sección 5, Audiencia de Santo Domingo, Legajo 2331.
- 3.- Gaceta de Puerto Rico, 1820, Ns. 1 y 4.
- 4.- GAMONEDA, Antonio. Op.Cit., pág. 90 y sgts.
- 5.- Ibidem, artículo 4º., pág. 91
- 6.- El artículo 10 determinaba que se elegirían suplentes de acuerdo a lo establecido por el Consejo de Regencia en 8 de septiembre de 1810. El artículo 11 determinaba que con arreglo al mismo Decreto el número de suplentes por todas las provincias de Ultramar sería de 30, de los cuales correspondía uno a Puerto Rico.

Contra esta decisión elevaron una protesta al Rey un considerable número de diputados americanos, considerando que no había razón para invocar el Decreto del Consejo de Regencia, toda vez que la Constitución determinaba ya de forma clara la proporción de habitantes por cada diputado y que esa proporción era la misma en la Península y en Ultramar: "Los suplentes nombrados en Cádiz -exponían los Diputados- por Decreto de la Regencia para las Cortes Extraordinarias de 1810 son el único apoyo de su determinación; pues como entonces no nombraron más que treinta, deslumbrados con este exemplar, juzgó que otros tantos debían nombrarse también ahora". Sin embargo, argüían, eran diferentes las circunstancias en uno y otro caso: "Si en Cadiz no se eligieron entonces sino treinta sujetos, fue entre otras razones porque a la América no se le había pedido determinado número de diputados, sino uno por cada provincia, dexando a discreción de las Audiencias el señalamiento de las provincias que mereciesen este concepto... Mas la Junta ha podido cerciorarse del número de diputados elegidos en América para las Cortes ordinarias de 1813". Cf.: Archivo General de Indias. Sección Indiferente General, Legajo 1523. También se encuentran abundantes datos sobre este asunto en el Archivo de las Cortes. Sección de Expedientes, Legajo 7 Ns. 38, 39, 40 y 41.

El artículo 13 explicaba la forma en que debe-

rían elegirse los diputados suplentes: "Las elecciones se harán reuniéndose todos los ciudadanos naturales de aquellos países que se hallen en esta Capital en Junta presidida por el Jefe Supremo de esta Provincia y remitiendo al mismo sus votos los que residan en los demás puntos de la Península, a fin de que examinados por el Presidente, Secretario y Escrutadores que la misma Junta eligiere, resulten nombrados los que tuvieren mayor número de votos". Por la Provincia de Puerto Rico resultó electo D. Demetrio O'Daly, Mariscal de los Ejércitos Nacionales. Cf.: Diario de Sesiones de las Cortes, 1820, páginas 21 y 135.

- 7.- La Instrucción que acompañaba al Real Decreto de 22 de marzo era una transcripción casi al pie de la letra de la de 23 de mayo de 1812. Cf.: MARTIN DE BALMASEDA, Fermín. Op.Cit., págs. 217 a 220 y GAMONEDA, Antonio. Op.Cit., págs. 99 a 104.
- 8.- Archivo General de Indias. Sección 5, Audiencia de Santo Domingo, Legajo 2339.
- 9.- Gaceta de Puerto Rico, 1820, número 14. También Archivo General de Indias. Sección 5, Audiencia de Santo Domingo, Legajo 2339.
- 10.- Ibidem. En el Anexo I se recoge el Censo de la población blanca de 1818, que sirvió de base para las elecciones de 1820. En el Anexo II figura la distribución de electores por Partidos, con el número correspondiente de compromisarios y de electores parroquiales.
- 11.- Gaceta de Puerto Rico, 1820, número 75.
- 12.- Los resultados de las elecciones de Parroquia pueden verse en el Anexo III.
- 13.- Archivo General de Indias. Sección 10, Ultramar, Legajo 423 y Sección 5, Audiencia de Santo Domingo, Legajo 2331.
Las profesiones y cargos de los candidatos elegidos eran los siguientes: D. Buenaventura Quiñones era hacendado del pueblo de Trujillo; el Presbítero D. Lorenzo Cestero era Párroco de San Germán; D. Salvador Blanch, era Capitán del Puerto de Ponce; D. Manuel García, Secretario del Ayuntamiento de la Aguada, y finalmente, el Presbítero D. José Domínguez, Párroco de Arecibo. Ibidem, Sección 5, Audiencia de Santo Domingo, Legajo 2329 y Sección 10, Ultramar, Legajo 423.
A la elección de Partido de la Capital no se presentó el elector de Parroquia de Barranquitas.
- 14.- Gaceta de Puerto Rico, 1820, número 31.
- 15.- Archivo de las Cortes. Sección de Expedientes, Legajo 7, nú-

mero 24. Gaceta de Puerto Rico, 1820, número 32.

16.- Puede verse el Manifiesto en el Anexo IV.

"El Investigador" comenzó a publicarse en San Juan el 19 de junio de 1820 y se ignora el momento en que dejó de publicarse. En el prospecto que anunciaba su salida figuraba bajo el título de "El Espía de Puerto Rico", pero las suspicacias que desató el mismo hicieron que cambiara el nombre. Cf.: PEDREIRA, Antonio Salvador. Op.Cit., págs. 53 a 68 y 469-470.

17.- Archivo General de Indias. Sección 10, Ultramar, Legajo 423
Gaceta de Puerto Rico, 1820, número 33.

18.- Actas del Cabildo de San Juan, (1820-1821), Tomo I, folio 165 y Tomo II, folios 1 a 34.

19.- Ibidem.

ANEXO I

"Estado que manifiesta el número de habitantes en la Isla de San Juan de Puerto Rico de la clase que en él se expresa, deducido del censo de su población, hecho en el año de 1818":

PARROQUIAS	PADRES DE FAMILIA	MADRES DE FAMILIA	HIJOS	HIJAS
Ciudad de Puerto Rico	1,125	931	1,017	1,096
Guainabo	109	114	276	236
Bayamón	489	485	625	436
Toa alta	261	265	527	541
Toa baja	154	291	322	327
Vega alta	123	117	250	228
Corozal	199	214	432	414
Vega baja	254	252	574	546
Manatí	844	1,012	1,928	1,935
Arecibo	613	665	1,234	1,327
Canuy	319	333	754	695
Utuado	323	358	729	816
Tuna	661	660	126	144
Pepino	603	601	1,316	1,500
Moca	599	608	1,279	1,215
Aguadilla	764	782	1,433	1,456
Aguada	532	520	1,122	1,143
Hincón	221	230	488	625
Añasco	612	606	1,281	1,352
Mayagüez	900	941	1,742	1,446
Cabo rojo	437	921	439	744
San Germán	808	828	1,847	2,095
Yauco	348	553	784	731
Peñuelas	188	169	292	265
Ponce	864	911	1,688	1,811
Juana Díaz	175	175	253	231
Coamo	312	298	576	552
Guayama	119	111	260	175
Patillas	171	127	123	130
Barranquitas	182	196	407	422
Cidra	63	68	83	85
Cayey	366	407	747	798
Hato grande	192	141	251	239
Caguas	281	334	709	793
Juncos	191	203	467	358
Piedras	80	83	243	228
Maunabo	81	85	157	122
Yabucoa	281	282	612	542
Humacao	354	314	630	711
Naguabo	147	159	332	309
Fajardo	610	423	999	1,016

<u>parroquias</u>	<u>padres de familia</u>	<u>madres de familia</u>	<u>hijos</u>	<u>hijas</u>
Luquillo	90	99	180	199
Loisa	177	157	262	278
Trujillo	164	162	260	202
Rio Piedras	173	127	147	266
Cangrejos	19	17	17	23
Adjuntas	61	63	188	151
Gurabo	53	46	100	107
Sabana grande	75	75	154	176
Totales	16,767	17,222	30,562	31,237

RESUMEN

PADRES DE FAMILIA	16,767
MADRES DE FAMILIA	17,222
HIJOS	30,562
HIJAS	31,237
Total general	95,788

Puerto Rico 11 de julio de 1820

FUENTE: Archivo General de Puerto Rico (San Juan). Colección "Gobernadores de Puerto Rico". RG. 146, Box N° 48. También: Archivo General de Indias. Sección 5, Santo Domingo, Legajo 2339.

ANEXO II

"Estado que presenta la Comisión a la Junta Preparatoria, demostrativo del número de electores parroquiales que corresponden a la isla de San Juan de Puerto Rico con expresión de los Partidos en que se divide, consecuente a la letra de los artículos 5º, 6º y 7º de la Instrucción respectiva, como única provincia que debe nombrar un solo diputado de Cortes y otro suplente con arreglo al censo del año 1812 de la misma población, al artículo 4º de la Instrucción, y a la Constitución de la Monarquía española":

PARTIDO PRIMERO

Ciudad de Puerto Rico

Parroquias	Número de Ciudadanos	Número de Compromis.	Nº de Elect. parroquiales
Ciudad de Puerto Rico	1,125	31	6
Vega alta	123	6	
Toa baja	154	8	14
Corozal	199	11	1
Vega baja	254	11	1
Toa alta	261	11	1
Bayamón	489	21	2
Guainabo	109	5	
Rio Piedras	173	9	14
Cangrejos	19		
Trujillo	164	11	1
Loisa	177	11	
Luquillo	90	5	16
Fajardo	610	31	3
Naguabo	147	7	
Humacao	354	21	28
Maunabo	81	4	
Barranquitas	182	9	13
Piedras	80	4	
Juncos	191	10	14
Caguas, cuya población es de 28 ciudadanos, a que se agrega la de Gurabo de 53, por no estar erigida en parroquia	334	17	1

PARTIDO SEGUNDO

Villa de San Germán

San Germán	308	28	
Sabana grande	75	3	31
Yauco	348	21	2

<u>parroquias</u>	<u>ciudadanos</u>	<u>compromis.</u>	<u>elect. parroq.</u>
Cabo rojo	437	21	2
Mayagüez	900	31	4
Añasco	610	31	3

PARTIDO TERCERO

Villa de San Blas de Coamo

Coamo	312	21	2
Juana Díaz	175	11	1
Ponce	864	31	4
Peñuelas	188	11	1
Cayey	366	18	2
Cidra	63	3	2
Patillas	119	5	1
Guayama	171	8	1
Yabucoa	281	11	1

PARTIDO CUARTO

Villa de San Franciaco de la Aguada

Aguada	532	31	3
Aguadilla	764	31	4
Moca	599	31	3
Rincón	221	11	1
Pepino	603	34	3

PARTIDO QUINTO

Villa de San Felipe Apóstol de Arecibo

Arecibo, cuya población
es de 613 ciudadanos a
que se agrega la de Ca
muy de 319 por no estar

erigida en parroquia...	932	31	5
Utuaado	323	16	2
Adjuntas	61	3	3
Tuna	661	31	3
Manatí	344	31	4

Puerto Rico, 11 de julio de 1820

Fuente: Archivo General de Indias. Sección Indiferente General,
Legajo 1523 y Sección 5, Audiencia de Santo Domingo, Le-
gajo 2339.

ANEXO III

RESULTADOS DE LAS ELECCIONES DE PARROQUIA
(30 de julio de 1820)

<u>PARTIDO</u>	<u>PARROQUIA</u>	<u>CANDIDATOS ELEGIDOS</u>	<u>PROFESION O CARGO</u>
Capital	San Juan	D. Pedro Vassallo	Tte. Coronel Com. de Granada
"	"	D. Juan Guillermet	Tesorero
"	"	D. Francisco Arroyo	Capitán de Milicias
"	"	D. Aniceto Ruiz	Director de Amortización
"	"	D. Manuel Arroyo	Alcalde 1º
"	"	D. José Navarro	Comandante de Ingenieros
"	Fajardo	D. Antonio Villavicencio	Administrados de Aduanas
"	"	D. Juan Miguel Carbonell	Cura Propio del Partido
"	"	D. Julio García	Escribano
"	Caguas	D. José Paul	Vecino
"	"	D. José Manuel Pérez	Cura Párroco
"	Hato grande	D. Mateo García Pagán	Cura Párroco
"	Corozal	D. Andrés de Rivera	Vecino
"	Humacao y Naguabo	D. Miguel Berríos	Vecino
"	"	D. Valentín González	Capitán de Puerto
"	"	D. Juan López	Vecino
"	Bayamón	D. Francisco Ruiz	Alcalde 1º
"	"	D. Pablo Martínez	Cura propio
"	Toa alta	D. Lorenzo Cabrera	Vecino
"	Vega baja	D. Antonio Dávila	Alcalde Constitucional
"	Trujillo	D. Manuel Díaz	Sargento Mayor
"	Loisa	D. Juan de Mata	Alcalde
"	Piedras y Juncos	D. Francisco Castañón	Cura Propio
"	Rio Piedras y Guain.	D. Antonio Dalmau	Alcalde
"	Toa baja	D. José Casimiro Marrero	Cura propio
San Germán	San Germán y	D. Juan Milán	
"	Sabana grande	D. José Ramón Ramírez	
"	"	Dr.D. Nicolás de Quiñones	
"	"	Dr.D. Lorenzo Cestero	

San Germán	Mayagüez	D. Cayetano Pulido	Cura
"	"	D. Manuel García Cazuela	
"	"	D. Pedro José Benítez	
"	"	D. Magín Raldivi	
"	Añasco	D. Francisco Pimentel	
"	"	D. Juan Irizarri	
"	"	D. Domingo Quijano	Cura
"	Cabo rojo	D. Antonio Vélez	
"	"	D. Manuel del Toro	Cura
"	Yauco	D. Manuel Capacete	Cura
"	"	D. José Pacheco	
Coamo	Coamo	D. José Colón Ortiz	
"	"	D. José Colón de Torres	
"	Juana Díaz	D. Ramón Perdomo	Cura
"	Ponce	D. Juan Nepomuceno Ximenez	Cura
"	"	D. José Ortiz de la Renta	
"	"	D. Salvador Blanch	
"	"	D. Benito Paz	
"	Peñuelas	D. Juan Guillermo Jordán	Cura
"	Patillas y Guayama	D. Juan José Lasala	
"	Yabucoa	D. Vicente de la Fuente	
"	Cayey y Cidra	D. Antonio Vázquez	
"	"	D. Manuel Vázquez Rodríguez	
Aguada	Aguada	D. Pedro Pablo de Acevedo	Cura Vicario
"	"	D. Manuel Calvas	Teniente
"	"	D. Manuel García	
"	Aguadilla	D. José Antonio Mayoral	
"	"	D. Nicolás Cardona	
"	"	D. José Domenech	
"	"	D. José Manuel Sus	
"	Pepino	D. Agustín Cabal	
"	"	D. Bartolomé de Medina	
"	"	D. Francisco Vélez del Rosario	
"	Moca	D. Francisco de Nieves	

Aguada	Moca	Dr.D. Ildefonso Sepúlveda	Cura
"	"	D. Martín Lorenzo de Acevedo	
"	Rincón	D. Antonio Porto-Carrero	
Arecibo	Arecibo	D. José Domínguez	
"	"	D. Bernardo Zeno	
"	"	D. Miguel Balseiro	Capitán
"	"	D. Manuel Antonio Zeno	Subteniente
"	"	D. Esteban Colón	
"	Manatí	D. Calixto Vélez	Cura
"	"	D. Francisco Aldao	Tte. de Milicias Nac. de Cabal.
"	"	D. Martín Menéndez	
"	"	D. Francisco Santana	
"	Isabela	D. Domingo Prieto	Cura
"	"	D. Miguel Augusto	Capitán Mil. Nac. de Infantería
"	"	D. Feliciano Román	
"	Utua	D. Pedro José Ortiz	
"	"	D. Ramón de Rivera	

Fuente: Archivo General de Indias. Sección 10, Ultramar, Legajo 423/16

ANEXO IV

Manifiesto de los "Liberales Amantes de la Patria" a los electores de la isla:

"Ciudadanos electores: Si todas las naciones del mundo han dedicado momentos que perpetúan la memoria de los héroes que se sacrifican ya con sus luces, ya con sus servicios y ya con su valor, a la felicidad pública, una decidida adhesión de un pueblo os ha elegido para dar principio a la de Puerto Rico.

De este acto está pendiente, no lo dudéis (el pueblo entero); es necesario graduar que si os ha nombrado y depositado su representación es para que correspondáis con la elección; así se hace preciso que ésta recaiga en personas que por su naturaleza tengan la opinión general de sus conciudadanos, que su adhesión al Sistema Constitucional sea decidida, que sea uno de los primeros que se hayan manifestado en su restablecimiento y apoyo, atendiendo igualmente a las circunstancias en que está la isla por la estrecha crisis en que yace.

Ved que un Pueblo entero se halla en expectación huya de vosotros la intriga y lejos de personalidades escuchad la razón, con el objeto de proporcionar la prosperidad a ciudadanos que han depositado en vosotros el más arduo encargo, bajo la confianza de la buena fe y de la probidad.

Si acertais con el voto general, esta Isla y aún la Nación, os considerará como aquellos que prontos a derramar su sangre en defensa de su hogar, hacen huir de él a sus enemigos, y conseguireis la estimación de todos vuestros patricios; pero si lo practicais sólo consultando la conveniencia particular, estad seguros de la justa indignación y de ser mirados como enemigos de vuestro sagrado sistema.

Así, pues, haced como el sabio Ulises, cerrad vuestros oídos a las lisonjeras sugerencias del egoísta, del hipócrita, del amigo, del despotismo, del intrigante y del ignorante conocido, y elegid para entregarle la confianza que habéis merecido aquellos que además de las circunstancias indicadas reúnan las virtudes sociales, patriotismo acendrado, amor a la Nación y al Rey Constitucional.

Vivid ciertos que si vuestros pasos fueren justos, los "Liberales Amantes de la Patria" procuraremos elevar vuestro mérito del modo más positivo y os agradeceremos el beneficio de vuestros corazones si obráis con sinceridad".

FUENTE: "El Investigador", 1820, número 19.

1.5. LA ELECCION GENERAL DE 1820-21

A.- La convocatoria de elecciones.-

De acuerdo con lo preceptuado por la Constitución de 1812, el Gobernador de Puerto Rico, Brigadier D. Gonzalo de Aróstegui, procedió con fecha 8 de noviembre de 1820 a publicar un Decreto convocando a la elección para diputado a Cortes y suplente para la Legislatura de 1822 a 23 (1).

Con este motivo, la Junta Preparatoria de Elecciones dispuso una nueva distribución del territorio insular a efectos electorales, cumpliendo así finalmente la recomendación que en este sentido había hecho en 1813 la Comisión de Constitución de las Cortes, a causa de los incidentes producidos en la elección de 1812 (2). A estos efectos, procedió a elaborar un nuevo Censo electoral y una nueva división de la isla en siete Partidos, en lugar de los cinco que había tenido hasta entonces (3).

B.- Proceso electoral y resultados.-

El día 3 de diciembre comenzaron las elecciones a nivel de Parroquia (4). Los días 7 y 8 de enero de 1821 se celebraron las de Partido, cuyos resultados fueron los siguientes:

Partido de la Capital: D. Lorenzo Cabrera

Partido de Manaty: D. Manuel A. Zeno (Subteniente de Milicias).

Partido de Aguadilla: D. Andrés de la Rosa

Partido de San Germán: D. Simón María Oramas (Alcalde 1º de Mayagüez)

Partido de Ponce: D. Tiburcio Rodríguez

Partido de Humacao: Pbro.D. Juan Manuel Carbonell (Cura Párroco).

Partido de Caguas: Pbro.D. José Manuel Pérez (Cura Párroco (5)).

Finalmente, los días 11 y 12 del mes de marzo de 1821 se efectuó en la Capital la elección de Provincia, con la ausencia de los electores de los Partidos de Aguadilla y Ponce, que

no pudieron tomar parte en la elección por motivos de salud (6). Efectuada la votación, resultaron electos D. José María Quiñones como diputado y D. Antonio Veguer, como suplente, ambos de tendencias liberales (7).

C.- Comentarios.-

El proceso electoral se desarrolló sin mayores dificultades, excepto en la elección parroquial de Mayagüez, en la que una serie de irregularidades motivó la formación del oportuno expediente gubernativo (8).

Según hemos podido constatar por la lectura del mismo, el problema surgió como consecuencia de haberse formado dos facciones opuestas -al parecer por rencillas personales- una de las cuales intentó por todos los medios derrotar por completo a la otra. Con tal fin, repartió entre los electores parroquiales una serie de "boletos" (papeletas) con los nombres de los compromiarios ya escritos en ellas. Más adelante, D. Pedro Mestre desafió a un duelo a D. Magín Raldiris, con señalamiento de lugar; afortunadamente, el Alcalde Segundo de Mayagüez y el Secretario lograron disuadir de su intención a los contendientes. Finalmente, y contra la petición de D. José María Ramírez que solicitó se enviasen las papeletas de la elección al Gobernador, éstas fueron quemadas en la plaza.

El suceso en sí no tuvo mayor importancia ni consecuencias y el Gobernador ordenaba en el mes de febrero de 1821 que se concluyeran todos los expedientes iniciados,

"...convencido de que todos los sucesos no tienen otro origen que desavenencias particulares, hijas de genios poco afectos a la paz, pero que hay en todos bastante preparación a restablecerla y olvidar resentimientos" (9).

Sin embargo, el hecho era sintomático, y venía a demostrar que, si en la isla había personas bien preparadas para recibir los beneficios del sistema democrático, había también elementos dispuestos a anteponer sus intereses particulares al bien común. Así lo expresaba, con certero juicio, el Alcalde Primero de Ma-

yagüez, D. Cayetano Pulido, en el Informe que rindiera al Gobernador con motivo de estos sucesos:

"En verdad Sr. Capitán General que es un dolor ver convertido el benéfico orden y sistema constitucional en facciones y partidos forjados por el amor propio y por las miras interesadas de cada uno. Quiera Dios llegue el día en que los pueblos convencidos de sus derechos sepan redimirse de las intrigas y de los artificios. Y ojalá bajo el Gobierno de V.S. veamos providencias capaces de exterminarlos" (10).

NOTAS

- 1.- Actas del Cabildo de San Juan, (1820-21), Folio 117
- 2.- Pueden verse los comentarios a esta recomendación en la elección de 1812-13.
- 3.- En el Anexo I se recoge el nuevo Censo electoral y en el Anexo II la nueva distribución de la isla en siete Partidos electorales.
- 4.- En el Anexo III se recogen los resultados completos de las elecciones de Parroquia
- 5.- Archivo General de Indias. Sección 5, Audiencia de Santo Domingo, Legajo 2339 y 2340.
- 6.- Ibidem, Legajo 2340
- 7.- Archivo de las Cortes. Sección de Expedientes, Legajo 9, N° 30.
- 8.- Archivo General de Puerto Rico. Colección "Gobernadores de Puerto Rico", R.G. 186, Box N. 48. El documento se titula: "Expediente instruido sobre lo ocurrido en las elecciones parroquiales celebradas en este pueblo el 3 de diciembre de 1820".
- 9.- Ibidem. Efectivamente, el Expediente está incompleto, pues falta el Informe del Cura Párroco de Mayagüez, que había sido pedido por el Gobernador al iniciarse la investigación.
- 10.- Ibidem. El Informe del Alcalde Primero de Mayagüez lleva la fecha de 18 de diciembre de 1820.

ANEXO I

Estado que demuestra el número de habitantes de Puerto Rico de la clase que en él se expresa, deducido del Censo general de su población, hecho en el año de 1820:

<u>PARROQUIAS</u>	<u>PADRES DE FAMILIA</u>	<u>MADRES DE FAMILIA</u>	<u>HIJOS</u>	<u>HIJAS</u>
Ciudad de Puerto Rico	598	746	746	871
Luquillo	165	98	228	232
Loisa	103	97	122	123
Rio Piedras	177	122	156	181
Cangrejos	14	11	6	9
Guainabo	170	160	304	158
Bayamón	502	48	740	778
Toa baja	171	256	360	234
Toa alta	334	315	549	586
Manatí	368	510	1,059	977
Corozal	364	228	411	422
Vega alta	167	169	236	110
Vega baja	240	233	513	459
Arecibo	604	720	1,274	1,348
Utuado	381	382 (*)	800	800
Camuy	444	467	610	445
Aguadilla	1,024	1,085	1,464	1,421
Isabela	1,022	1,022	146	209
Moca	520	674	1,271	1,330
Pepino	522	489	1,818	1,730
Aguada	652	670	1,400	1,516
Rincón	303	301	1,107	870
Añasco	665	613	1,240	1,073
San Germán	1,421	1,354	1,921	1,930
Mayagüez	1,123	1,481	2,224	1,737
Cabo rojo	847	813	1,657	1,437
Sabana grande	122	123	219	249
Ponce	640	1,035	1,153	1,049
Yauco	324	331	816	740
Peñuelas	232	214	395	412
Adjuntas	55	61	190	150
Juana Díaz	188	176	230	204
Coamo	506	528	548	708
Guayama	170	133	239	186
Humacao	367	326	695	783
Patillas	353	342	829	746
Maunabo	91	96	157	130
Yabucoa	297	296	594	527
Naguabo	147	159	332	309
Fajardo	630	458	907	1,007

<u>parroquias</u>	<u>padres de familia</u>	<u>madres de familia</u>	<u>hijos</u>	<u>hijas</u>
Piedras	126	126	273	273
Caguas	678	766	893	789
Barranquitas	198	202	363	339
Cayey	444	448	802	851
Cidra	183	181	340	293
Gurabo	109	111	172	180
Juncos	163	177	334	363
Hato grande	258	159	360	115
Trujillo	164	162	260	202
Totales	19,546	19,048	33,263	31,471

Puerto Rico, 8 de Noviembre de 1820

Fuente: Archivo Histórico de Puerto Rico (San Juan). Colección
"Gobernadores de Puerto Rico", Legajo 186 Box 48

ANEXO II

NUEVA DIVISION DE LA ISLA EN PARTIDOS A EFECTOS ELECTORA-
LES:

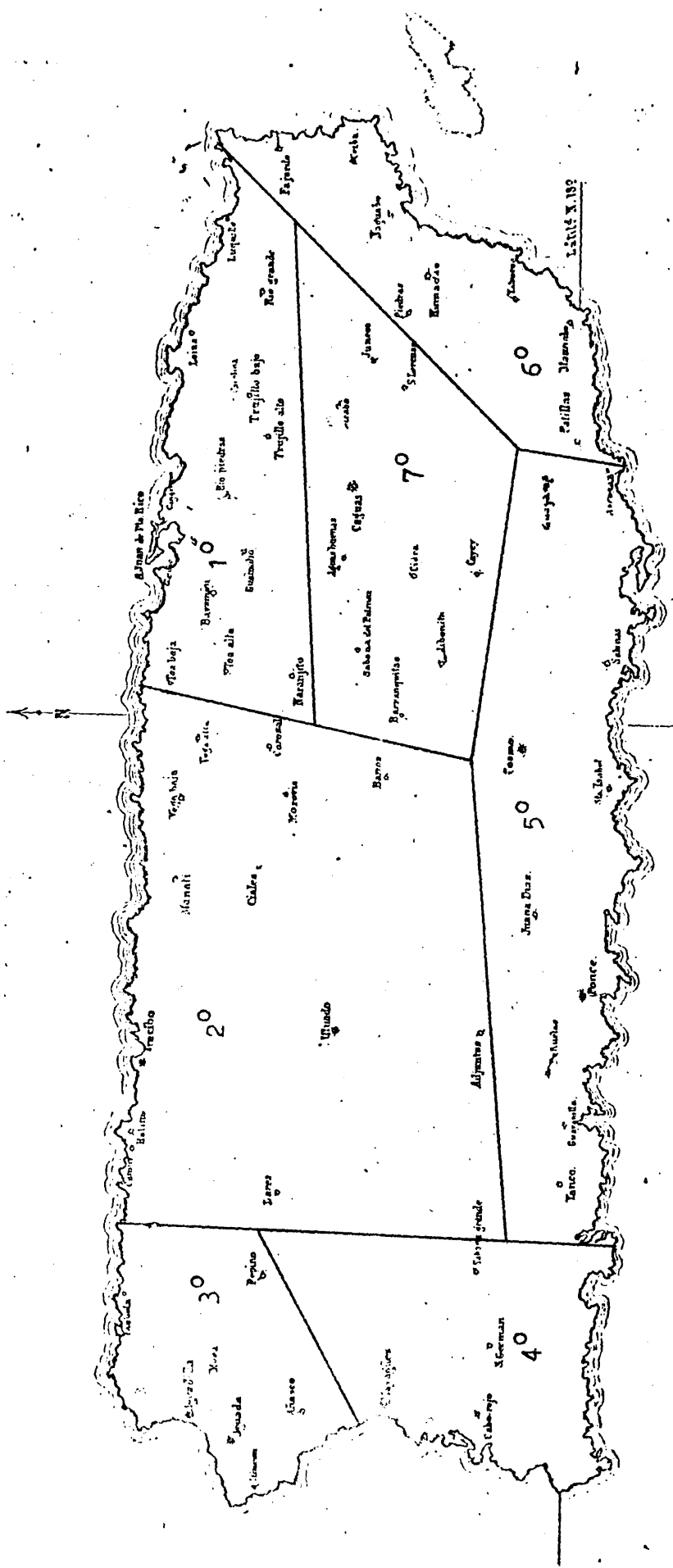
<u>PARTIDO</u>	<u>PARROQUIAS</u>	<u>CIUDADANOS</u>	<u>ELECTORES PARROQUIA.</u>
Capital	San Juan	598	
"	Luquillo	165	
"	Loisa	103	
"	Rio Piedras	177	
"	Cangrejos	14	12
"	Guainabo	170	
"	Bayamón	502	
"	Toa baja	171	
"	Toa alta	334	
Manatí	Manatí	368	
"	Corozal	364	
"	Vega alta	167	
"	Vega baja	240	13
"	Arecibo	604	
"	Utuado	381	
"	Adjuntas	55	
"	Camuy	444	
Aguadilla	Aguadilla	1,024	
"	Aguada	652	
"	Isabela	1,022	
"	Moca	250	26
"	Pepino	522	
"	Rincón	303	
"	Añasco	665	
San German	San Germán	1,421	
"	Sabana grande	122	12
"	Mayagüez	1,123	
"	Cabo rojo	847	
Ponce	Ponce	640	
"	Yauco	324	
"	Peñuelas	292	
"	Juana Díaz	188	11
"	Coamo	506	
"	Guayama	170	
Humacao	Humacao	367	
"	Patillas	353	
"	Maunabo	91	

<u>partido</u>	<u>parroquias</u>	<u>ciudadanos</u>	<u>electores parroquia</u>
Humacao	Yabucoa	297	
"	Fajardo	629	
"	Las Piedras	126	10
"	Naguabo	147	
Caguas	Caguas	678	
"	Barranquitas	198	
"	Cayey	444	
"	Cidra	183	
"	Gurabo	109	
"	Juncos	163	10
"	Hato grande	258	
"	Trujillo alto	164	

Fuente: Archivo General de Indias. Sección 10, Ultramar, Legajo 425.

NUEVA DIVISION ELECTORAL DE PUERTO RICO

(1820)



ANEXO III
RESULTADOS DE LAS ELECCIONES DE PARROQUIA
(3 de diciembre de 1820)

<u>PARTIDO</u>	<u>PARROQUIA</u>	<u>CANDIDATOS ELEGIDOS</u>	<u>PROFESION O CARGO</u>
Capital	San Juan	D. Buenaventura de Quiñones	Diputado provincial
"	"	D. Francisco de Arroyo	Capitán de Milicias
"	"	D. Juan Bautista Tammy	Oficial de Secret. de Gob.
"	Bayamón	D. Francisco Rius	Vecino
"	"	Pbro.D. Pablo Martínez	Padre cura
"	"	D. Alonso Dávila	Teniente de Milicias
"	Rio Piedras	D. Antonio Dalmau	Vecino
"	Loisa	Pbro.D. Manuel S. Roberto	Cura
"	Toa alta	D. Lorenzo Cabrera	Vecino
"	"	D. Joaquín Velilla	Teniente de Milicias
"	Guainabo	Pbro.D. Andrés A. Román	Vecino
"	Toa baja	D. Fernando del Toro	Teniente de Milicias
Manatí	Manatí	Pbro.D. Francisco Menéndez	Cura
"	"	D. Nicolás de Acosta	Vecino
"	Arecibo	D. Miguel Balseiro	Capitán
"	"	D. Bernardo Zeno	Vecino
"	"	Pbro.D. José Domínguez	Cura
"	"	Dr.D. Esteban Colón	
"	Utuaado	D. Juan Tomás de Rivera	
"	"	D. Matías Ortíz	
"	Vega alta	D. Feliciano Pobentud	
"	Vega baja	Pbro.D. Francisco de la Torre	Cura
Aguadilla	Aguadilla	D. Francisco Ugarte	
"	"	D. José Manuel Sus	
"	"	D. José Domenech	
"	"	D. Nicolás Cardona	
"	"	D. José Antonio Mayoral	

<u>partido</u>	<u>parroquia</u>	<u>candidatos elegidos</u>	<u>profesión o cargo</u>
Aguadilla	Aguada	D. Manuel García	
"	"	D. Pedro Pablo Acevedo	
"	"	D. Juan Morales	
"	Rincón	D. José del Río	
"	"	D. Andrés (*)	
"	Añasco	D. José Leocicio Combián	
"	"	D. Manuel Ramírez de Arellano	
"	"	D. Manuel Isidro Morales	
"	Moca	D. Ildefonso Sepúlveda	
"	"	D. Martín Lorenzo Acevedo	
"	"	D. Juan de Nieves	
"	Pepino	D. Juan Pablo Luciano	
"	"	D. José Sotomayor	
"	"	D. Manuel Ramos	
"	Isabela	D. Raimundo Román	
"	"	D. José Alfomín	
"	"	D. Gregorio González	
"	"	D. Francisco Ramos	
"	"	D. Gregorio de la Fuente	
San Germán	San Germán	D. José Milán	
"	"	Dr.D. Nicolás de Quiñones	
"	"	D. Vicente Mariano de Quiñones	
"	"	D. José Román Ramírez	
"	"	D. José Barrientos	
"	"	D. Esteban Vilanova	
"	"	Dr.D. Felipe de Quiñones	
"	"	D. Mariano A. Ponce de León	
"	Mayagüez	D. Roque Crespo	
"	"	D. Vicente de Rivera	
"	"	D. José Eusebio de Rivera	
"	"	D. Antonio Romero	
"	"	D. Simón María Oramas	
"	"	D. Pedro Mestre	
"	Cabo rojo	Pbro. Bachiller D. Antonio Vélez	

<u>partido</u>	<u>parroquias</u>	<u>candidatos elegidos</u>	<u>profesión o cargo</u>
San Germán	Cabo rojo	Pbro.D. José Vicente del Toro	
"	"	D. José Mendoza	
"	"	D. Bernardo Pabón Dávila	
Ponce	Ponce	Pbro.D. Juan Nepomuceno Ximénez	
"	"	D. Salvador Blanch	
"	"	D. José Ortiz de la Renta	
"	Yauco	Pbro.D. Manuel Capacete	
"	"	D. Narciso Valdés	
"	Peñuelas	D. Juan Saurí	
"	Juana Díaz	D. Francisco de Torres	
"	Coamo (**)	Pbro.Dr.D. Francisco Xavier de Ayesa	
"	"	D. Paulino de Rivera	
"	Guayama	D. Andrés Antonio Hernández	Subteniente de Milicias
Humacao	Humacao	D. Francisco Fernández	
"	"	D. Pio Rivas	
"	Patillas	D. Juan José Lasala	
"	"	D. Juan Ortiz	
"	Yabucoa y Maunabo	Pbro.D. Andrés de Reina	
"	"	D. Matías Berríos	
"	Fajardo	Pbro.D. Juan Manuel Carbonell	
"	"	D. Carlos Benítez	
"	"	D. Miguel García	
"	Naguabo y Piedras	Pbro.D. Mariano Castañón	
Caguas	Caguas	D. Marcos Jiménez	
"	"	D. Antonio Guadalupe Colón	
"	"	Pbro.D. José Manuel Pérez	
"	Barranquitas	D. José María Pérez	
"	Cayey	Pbro.D. Felipe González	
"	Cidra	D. Wenceslao Vázquez	
"	Gurabo y Juncos	D. Tiburcio Durán de Villafina	
"	Hato grande	D. Juan Soler	

<u>partido</u>	<u>parroquia</u>	<u>candidatos elegidos</u>	<u>profesión o cargo</u>
Caguas	Trujillo alto	D. José Santana	
"	"	D. Ildefonso Rivera	

Fuente: Archivo General de Indias. Sección 5, Audiencia de Santo Domingo, Legajo 2340 y Archivo Histórico de Puerto Rico (San Juan), Colección "Gobernadores de Puerto Rico", Legajo 186, Box 48.

1.6. LA ELECCION PARTICULAR DE 1822-23

A.- La convocatoria de la Elección.-

A principios del mes de noviembre de 1822 publicaba el nuevo Gobernador de Puerto Rico, D. Francisco González de Linares, el Decreto de convocatoria para elegir al diputado y suplente de la isla para la Legislatura de 1824-25, Decreto que había sido publicado en la Gaceta de Madrid con fecha 7 de septiembre de ese mismo año (1).

Varios días más tarde, publicaba el Gobernador un Manifiesto solicitando de los electores orden y sensatez a lo largo del proceso electoral:

"Se acerca el día en que deben principiar las elecciones, y el Gobierno se apresura a recordaros vuestros deberes y vuestros intereses. Vosotros los conocéis; el Gobierno no lo duda; pero identificado con vosotros, desea hablaros el lenguaje de la conveniencia pública.

Espera que, convencidos de ella, concurriréis a dar vuestros sufragios con aquella sensatez con que hasta ahora lo habéis hecho siempre; y llevareis como hasta aquí presente que vais a poner vuestros destinos en manos que deben ser adornadas con todas las virtudes posibles" (2).

Sin embargo, en esta ocasión se agudizó la tensión que en mayor o menor grado había estado latente en las elecciones anteriores, con motivo de la publicación de dos cartas en el periódico "El Eco": la primera del periodista liberal D. José Andino Amézquita, en la que recomendaba a los electores votaran sobre todo por candidatos nacidos en la isla (3). Esta carta dio lugar a una inmediata réplica por parte del Teniente Coronel D. Pedro Vassallo y que apareció en el mismo periódico días más tarde. En ella afirmaba que Andino había faltado al respeto a personas ilustres de la isla, al tiempo que criticaba la división implícita que hacía Andino entre españoles peninsulares e insulares (4).

B.- Proceso electoral y resultados.-

A mediados del mes de diciembre se celebraron las elecciones de Parroquia (5). En los primeros días del mes de enero de 1823 se llevaron a cabo las de Partido; en éstas resultaron elegidos los siguientes candidatos:

Por el Partido de la Capital: D. Aniceto Ruiz Peña

Por el Partido de Manatí: D. Bernardo Zeno

Por el Partido de Aguadilla: Pbro.D. Ildefonso Sepúlveda.

Por el Partido de San Germán: D. Pascasio Cardona

Por el Partido de Ponce: D. José Pacheco

Por el Partido de Humacao: D. Juan Pedro Martínez

Por el Partido de Caguas: D. José Manuel Pérez (6).

El día 7 de marzo se celebró en la Capital la elección de Provincia, resultando elegidos el Presbítero D. Ildefonso Sepúlveda como diputado y D. José María Medina como suplente (7).

El nuevo Diputado procedió a solicitar del Ayuntamiento de San Juan, por carta de 17 de julio, las Instrucciones pertinentes, al tiempo que anunciaba se encontraba preparado para emprender el viaje hacia la Península. El día 11 de agosto le contestó el Ayuntamiento había nombrado una comisión compuesta por los señores D. José Power, D. Francisco Chico y D. Francisco Otaloza para redactarlas (8). Sin embargo, D. Ildefonso Sepúlveda no llegó a ocupar su puesto en las Cortes, por los acontecimientos que se desarrollaron en la Península durante ese mismo año.

C.- Segunda vuelta al régimen absolutista.-

El día 7 de abril de 1823 un ejército francés al mando del Duque de Angulema atravesó la frontera española y comenzó la invasión de la Península, sin previa declaración de guerra (9). Pese a la resistencia de Riego en Andalucía y de Mina en Cataluña, las tropas francesas se hacían dueñas de la situación a finales de agosto, quedando solamente algunos focos aislados

de resistencia en Cataluña, Cartagena y Alicante. Riego, héroe del pronunciamiento de Cabezas de San Juan de 1820, fue hecho prisionero y entregado a los absolutistas; juzgado el 27 de septiembre por un tribunal de excepción, fue condenado a muerte y ejecutado en Madrid; Mina tuvo más suerte y logró huir a Inglaterra (10).

De esta forma se inauguraba en España una nueva etapa en la desgraciada trayectoria del reinado de Fernando VII, apoyado esta vez por las potencias de la Santa Alianza que veían en el régimen liberal de la Península un peligro potencial de movimientos revolucionarios en sus propios territorios. Fernando VII y su camarilla absolutista se entregaron desde el mes de agosto a una labor de eliminación sistemática de todos los elementos liberales del país, mucho más enconada que en 1814. En el mes de noviembre el Rey promulgaba un Decreto que comenzaba con estas significativas palabras: "Con el fin de que desaparezca para siempre del suelo español hasta la más remota idea de que la soberanía reside en otro que en mi real persona..." (11).

Al recibirse en Puerto Rico las primeras noticias sobre la invasión del ejército francés, la reacción de las autoridades fue unánime en condenar la intervención; pero cuando en diciembre de 1823 se recibieron las noticias del triunfo definitivo de las tropas invasoras, acompañadas de los decretos de 1 y 4 de octubre, que el Rey había promulgado en Puerto de Santa María y Jerez de la Frontera respectivamente, las reacciones fueron dispares (12).

El Gobernador González Linares tuvo que abandonar su cargo el día 4 de diciembre y el Capitán General, Mariscal de la Torre, se convirtió en gobernante único de la isla. Olvidándose de que poco antes había criticado la invasión, publicó un Decreto el día 4 de diciembre glosando el de Fernando VII de 4 de octubre, al tiempo que derogaba la Constitución de 1812 en la isla y restablecía la autoridad absoluta del Monarca (13).

Posteriormente publicó otra serie de decretos que, al igual que en la Península, se referían desde la disolución de

agrupaciones patrióticas, de francmasonería y sociedades políticas, hasta la prohibición de hablar de la Constitución (14).

Las consecuencias de estos sucesos fueron para Puerto Rico las mismas que en 1814: pérdida de la consideración de parte integrante de la Monarquía española y de la ciudadanía para los puertorriqueños. La reacción de los diversos sectores políticos de la isla fue también semejante: mientras los conservadores no ocultaron su alegría y entusiasmo, los liberales se limitaron a adoptar una actitud de paciente espera.

Se inaugura desde este momento en España lo que se conoce como la "Década ominosa", que se extenderá hasta 1833, fecha en que, como consecuencia de la muerte de Fernando VII y del comienzo de la guerra carlista, la Reina Regente tendrá que inclinarse y apoyarse en el sector más liberal; tras la caída de Cea Bermúdez, volverá a restablecerse la representación en Cortes por medio del Estatuto Real (15).

NOTAS

- 1.- Gaceta de Puerto Rico, 1822, Volumen 3, número 84.
D. Francisco González de Linares fue el primer mandatario civil que tuvo Puerto Rico, y había sido nombrado de acuerdo con el Decreto de las Cortes de 25 de abril de 1820, por el que quedaban separados el Gobierno General de la isla de la Capitanía militar.
El proyecto de este decreto fue presentado por el representante de Puerto Rico, D. Demetrio O'Daly.
Cf.: Diario de Sesiones de las Cortes, 1820, pág. 202
- 2.- Gaceta de Puerto Rico, 1822, Volumen 3, número 87.
- 3.- PEDREIRA, Antonio Salvador. Op.Cit., pág. 73.
"El Eco" fue el segundo periódico diario que existió en Puerto Rico. El primer número salió el día 1 de septiembre de 1822 y dejó de publicarse al año siguiente.
- 4.- PEDREIRA, Antonio Salvador: "Insularismo", (Barcelona, Editorial Edil, 1973), págs. 121 y 122. Pedreira considera a D. José Andino como el primer periodista puertorriqueño:
"El nombre de don José Andino de Amézquita inicia el sistema nervioso de nuestro periodismo, defensor desde su nacimiento, de nuestra personalidad. Como Bonilla y como Power, Andino ya descubre la índole criolla". Ibidem, pág. 122.
- 5.- No hemos podido encontrar los resultados de las elecciones de Parroquia correspondientes a esta Elección, a pesar de todos nuestros esfuerzos.
- 6.- Archivo General de Indias. Sección 10, Ultramar, Legajo 422
- 7.- Ibidem.
- 8.- Actas del Cabildo de San Juan, (1822-1823), folio 339 y vuelto.
- 9.- TUÑÓN DE LARA, Manuel. Op.Cit., pág. 56.
- 10.- Ibidem, pág. 59.
- 11.- Citado por Manuel Tuñón de Lara. Op.Cit., pág. 59.
- 12.- MARTIN DE BALMASEDA, Fermín: "Decretos de la Junta Provisio-

nal, Regencia del Reino y los expedidos por S.M.",
(Madrid, Imprenta Real, 1824), págs. 147 a 149 y 254
a 257.

Por el primero consideraba "nulos y de ningún valor" todos los actos del Gobierno Constitucional desde el día 7 de marzo de 1820 hasta el día 1 de octubre de 1823. Por el de 25 de diciembre del mismo año dirigido a los dominios de Indias, tomaba una serie de disposiciones concretas encaminadas igualmente a borrar toda la obra del "Trienio constitucional".

- 13.- Archivo General de Indias. Sección 5, Audiencia de Santo Domingo, Legajo 2332.
- 14.- Ibidem.
- 15.- CARR, Raymond. Op.Cit., pág. 160 y sgts.

1.7. LA ELECCION GENERAL DE 1834

A.- La promulgación del Estatuto Real.-

El día 29 de septiembre de 1833 moría Fernando VII, dejando confiado el Trono a su esposa María Cristina, hasta la mayoría de edad de su hija Isabel. Con el fin de reforzar la posición de ésta última frente a las apetencias de los partidarios de D. Carlos, hermano de Fernando VII, la Reina Regente procuró atraerse a los elementos liberales de la Nación, sacrificando al Primer Ministro, Cea Bermúdez, figura típica del Despotismo Ilustrado (1).

El día 15 de enero de 1834 llevaba a cabo la sustitución de Cea por Martínez de la Rosa, bajo la presión de los generales Llauder y Quesada, a los que secundó gran parte de la población de Barcelona (2).

Las noticias de estos hechos, que comenzaron a llegar a Puerto Rico a mediados del mes de noviembre de 1833 y sobre todo el nombramiento de Martínez de la Rosa llenaron de entusiasmo a los liberales de la isla, confiados en que pondría de inmediato en vigor la Constitución de 1812. Sin embargo, lo cierto era que Martínez de la Rosa había derivado hacia un liberalismo de tipo doctrinario, por lo que, en lugar de restablecer la Constitución, elaboró una especie de ley electoral de tipo conservador, encaminada a conseguir para la Corona el apoyo tanto de la aristocracia como el de un amplio sector de la alta burguesía liberal; nos referimos al Estatuto Real (3).

Los puntos más destacados del Estatuto, y que al mismo tiempo demuestran su carácter conservador, eran: el establecimiento de una segunda cámara, el Estamento de Próceres; la reserva de la iniciativa parlamentaria exclusivamente a la Corona; el régimen electoral censitario y finalmente el alargamiento del mandato parlamentario a tres años (4).

B.- La convocatoria de las elecciones.-

El día 20 de mayo del mismo año promulgaba María Cristina otros dos decretos: el uno convocando y mandando reunir las Cortes Generales y el otro dictando una serie de disposiciones electorales (5). Por lo que se refería a los territorios de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, únicas posesiones que en estos momentos conservaba España de su antiguo imperio colonial, el Real Decreto de 20 de mayo les dedicaba un artículo que decía textualmente:

"Por lo respectivo a las islas de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, se reunirá una Junta electoral en la ciudad de Santiago de Cuba, otra en la Habana, otra en Puerto Príncipe, otra en Puerto Rico, y otra en Manila, compuesta cada una de ellas de los individuos del Ayuntamiento de las expresadas capitales, y de un número igual de las personas más pudientes, elegidas de antemano por el mismo Ayuntamiento; y la Junta electoral así formada, y presidida por el respectivo Capitán General o por la autoridad en que éste delegare sus facultades, procederá a la elección de los procuradores a Cortes por el método y forma prescritos en este Real Decreto" (6).

A continuación, y en un estado adjunto al mismo, en el que se especificaba el número de procuradores que correspondía a cada provincia, se adjudicaban dos representantes a Puerto Rico.

De acuerdo con estas disposiciones, el Gobernador y Capitán General de Puerto Rico procedía el 19 de junio a publicar el Estatuto Real, juntamente con un Decreto convocando elecciones para procuradores a Cortes por la isla (7).

C.- Proceso electoral y resultados.-

Los miembros del Ayuntamiento de la Capital se reunieron el 4 de julio para proceder a la elección de "electores pudientes", resultando elegidos los siguientes candidatos: Presbítero D. José Gutierrez del Arroyo, D. Ramón Soler, el Marqués de Piedrabuena, D. Manuel Tejada, D. Lorenzo Cayol, D. Nicolás del Valle, D. Félix García de la Torre, D. Rafael Mangual, D. Gregorio Medina, D. Esteban Domenech, D. José Francisco Díaz, D.

Jacinto Tequidor, D. Juan Verdaguer y D. José Saldaña (8).

Finalmente, el día 20 de julio se efectuó la elección de los dos representantes al Estamento de Procuradores, en los salones del Ayuntamiento de San Juan. Resultaron elegidos el Coronel D. José Saint Just y D. Esteban de Ayala, Administrador General de Correos en la Península, ambos naturales de Puerto Rico y de ideas liberales (9).

D.- Las Instrucciones a los Procuradores.-

Algunos días después de celebrada la Elección, Saint Just solicitaba del Ayuntamiento de la Capital las Instrucciones pertinentes y el día 21 se le hacía entrega de las mismas por duplicado, con el fin de que entregara una copia a su compañero que se encontraba en la Península (10).

Los puntos más destacados de estas Instrucciones eran, en primer lugar, la petición de que se concediera a la isla un régimen político recto y justo; libertad de comercio; reforma del sistema contributivo; expansión de la agricultura y de la industria; difusión de las artes y de las ciencias y la extensión de la Instrucción pública; establecimiento de vías de comunicación y el incremento de la inmigración blanca en Puerto Rico (11).

NOTAS

- 1.- CARR, Raymond. Op.Cit., pág. 161 y sgts. TUÑON DE LARA, Manuel. Op.Cit., pág. 70.
- 2.- Ibidem.
- 3.- NIEVA, Joseph María de: "Decretos de la Reina Nuestra Señora Doña Isabel II, dados en su Real Nombre, por su Augusta Madre la Reina Gobernadora...", (Madrid, en la Imprenta Real, 1835), págs. 187 a 194.
- 4.- El sentido y justificación del principio censitario dentro del sistema liberal-parlamentario significa, en opinión del Profesor Díez del Corral, la manera en que la burguesía instalada ya en el poder, intenta aplicar el principio de la igualdad en una forma racional y ordenada:

"El "tercer estado" partía del derecho reconocido a todas las personas para participar igualmente en la formación de la voluntad estatal, pero todos no podían dominar al mismo tiempo. Es preciso efectuar una selección destacando a los mejores y más influyentes; es decir, a aquellos que dispongan de los medios conducentes al mayor perfeccionamiento propio y la más eficaz ayuda a los demás. Estos medios son evidentemente la más alta capacidad para dirigir la vida de relación entre los hombres, la inteligencia y la instrucción. Pero para adquirir tales condiciones es imprescindible la propiedad; sin ella no es posible alcanzar un alto desarrollo espiritual ni influjo material. La propiedad es, por tanto, condición que debe discriminar entre los que se encuentran igualmente cualificados por naturaleza a aquellos que dirijan la vida del Estado". Cf.: "El Liberalismo doctrinario", (Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1956).

Pero esta selección representó en la práctica una nueva forma de segregación de ciertos estratos sociales del acceso al poder político:

"La auténtica burguesía, poseedora e ilustrada, después de extender sus fronteras con conceptos abstractos para expulsar del mando social a los antiguos estamentos privilegiados, restringía

así la nueva titularidad para el ejercicio del poder político, una vez realizada aquella operación, a sus características propias y distintivas, consistentes en la instrucción intelectual y la propiedad desvinculada. Desaparecidas las viejas diferencias estamentales surge otra clasista, ya no determinada por el complejo vital que constituye el tipo de noble o clérigo, sino por un hecho fundamentalmente económico: la propiedad. La traducción política formal de esta diferencia social es el censo". Ibidem, pág. 119.

Para un estudio del Estatuto Real, así como del sistema electoral censitario puede verse también la obra de Luis Sánchez Agesta: "Historia del Constitucionalismo español", (Madrid, Instituto de Estudios políticos, 1964), págs. 209 a 222.

- 5.- NIEVA, Joseph María de. Op.Cit., págs. 270 a 284.
- 6.- Ibidem, pág. 282; corresponde al artículo 48.
- 7.- Gaceta de Puerto Rico, 1834, número 228.
- 8.- Ibidem, número 236.
- 9.- Archivo de las Cortes. Sección de Expedientes, Legajo 11, número 6. Una descripción detallada de esta elección se encuentra en el número 242 de la Gaceta de Puerto Rico, correspondiente al día 22 de julio.
- 10.- Actas del Cabildo de San Juan, (1834-35), folios 67 a 71 y 130.
- 11.- Ibidem.

1.8. LA ELECCION GENERAL DE 1836 (primera)

A.- La situación política de la Península

La primera Legislatura de 1834-35 terminó el 29 de mayo de 1835 y el 28 de septiembre la Reina Gobernadora expedía, a petición de Mendizábal, Presidente interino del Consejo de Ministros, un Real Decreto de convocatoria de Cortes (1).

En el preámbulo del mismo se justificaba la convocatoria en base a la necesidad de revisar el Estatuto Real "para asegurar de una manera estable y permanente el entero cumplimiento de las antiguas leyes fundamentales de la Monarquía; desenvolver los principios de gobierno... que he tenido a bien aprobar y (que) en fin, constituirán definitivamente la gran sociedad española" (2).

Esta labor la encomendaba el Decreto a unas Cortes "convocadas segun un sistema electoral que represente los intereses sociales con más amplitud que el que rige actualmente", pero, reconociendo la urgencia de reunir las Cortes "no solo para establecer el sistema electoral, segun el cual se han de reunir las que las sucederán inmediatamente, sino también para deliberar sobre otros puntos de la mayor urgencia", ordenaba la reunión de los Estamentos el 16 de noviembre de 1835.

Abiertas de nuevo las Cortes, el Gobierno presentó al Estamento de Procuradores un proyecto de Ley Electoral y el 28 de diciembre la Comisión parlamentaria encargada de dar su dictámen sobre el mismo lo presentó al Estamento, pronunciándose por un sistema electoral indirecto, opuesto al que se contenía en el proyecto del Gobierno. Sin embargo, el dictámen no pudo discutirse porque el mismo, viendo su proyecto rechazado, pidió y obtuvo de la Reina Gobernadora un Decreto de disolución de los Estamentos con fecha 27 de enero de 1836 (3). En el mis-

mo Decreto se convocaban elecciones de Procuradores con arreglo al Real Decreto de 20 de mayo de 1834.

B.- La convocatoria de elecciones

El Real Decreto de convocatoria de elecciones llegó a Puerto Rico a finales de febrero de 1836 e inmediatamente, según lo disponía el propio Decreto, el Gobernador y Capitán General de la isla, D. Simón de la Torre, procedió a su publicación y a los preparativos para las elecciones (4).

C.- Proceso electoral y resultados

El día 16 de marzo se realizó la elección de los "electores pudientes", que recayó en los siguientes candidatos: D. Francisco Fernández, D. Ramón Soler, D. Juan Francisco Pérez, D. Manuel Antonio Zeno, D. Ildefonso del Toro, D. Juan Macaya, D. José María de Escoriaza, D. Rafael Mangual, D. José Ortiz Renta, D. Jacinto Tejedor, D. Juan Verdaguer, D. Antonio Vázquez y D. José Francisco Díaz (5).

La elección de los dos representantes se llevó a cabo en La Fortaleza el día 5 de abril y efectuada la votación, resultaron elegidos D. Francisco Pérez y D. José Francisco Díaz (6).

C.- Comentarios.-

Poca importancia tuvo la elección de abril, ya que Las Cortes fueron disueltas el 23 de mayo y los procuradores de Puerto Rico apenas tuvieron tiempo de tomar posesión de su cargo. En efecto, las únicas noticias que figuran en el Diario de Sesiones de las Cortes se refieren solo al dictámen de la Comisión de Poderes sobre el Acta de Puerto Rico y a la aprobación del mismo y consiguiente aceptación de los representantes por las Cortes (7).

NOTAS

- 1.- GAMONEDA, Antonio. Op.Cit., pág. XVIII
 - 2.- Ibidem. Este preámbulo recogía las principales ideas contenidas en una comunicación previa que había dirigido a la Reina Gobernadora Mendizábal y que llevaba fecha del mismo día 28 de septiembre.
 - 3.- Ibidem, págs. XXVIII y XIX.
 - 4.- Gaceta de Puerto Rico, 1836, Vol. 6, N° 19
 - 5.- Ibidem, N° 24
 - 6.- Actas del Cabildo de San Juan, (1836-37), Libro 1º, folios 18, 19 y 27 vto.
 - 7.- Diario de Sesiones de las Cortes, 1836, págs. 879 y 927.
-

1.9. LA ELECCION GENERAL DE 1836 (tercera)

A.- La situación política en la Península.-

Como consecuencia de un voto de censura del Estamento de Procuradores al Gobierno de Istúriz, éste respondió el 23 de mayo con un nuevo Decreto de disolución de las Cortes (1). El día 24 del mismo mes la Reina Gobernadora expedía un Real Decreto "para la elección de Procuradores a las Cortes generales del Reino", que contenía el proyecto de Ley Electoral presentado por el Gobierno de Mendizábal en 1835 y cuya discusión había ocasionado su caída(2). A este Decreto acompañaba otro de la misma fecha por el que se convocaban Cortes para el día 20 de agosto (3).

Este último Decreto, que nunca llegó a aplicarse en Puerto Rico, contenía varias disposiciones relativas a las provincias de Ultramar: el artículo 1º determinaba que "las islas de Cuba, Puerto Rico y Filipinas nombrarán por ahora, ocho diputados la primera, cinco la segunda y cuatro las últimas". El artículo 59 disponía que si la Ley Electoral no pudiera ejecutarse en Ultramar, podrían verificarse las elecciones de acuerdo con la legislación vigente, a propuesta del Gobierno y en tanto que las Cortes decidían lo más conveniente.

Tampoco se llevaron a cabo en Puerto Rico las elecciones de julio de 1836, ya que los acontecimientos de la Península se precipitaron y no dieron tiempo a que llegaran a la isla los diferentes decretos expedidos a tal fin.

En efecto, como consecuencia de una serie de incidentes que condujeron a la formación de numerosas Juntas Provinciales en la mayor parte de la Península, el 12 de agosto de 1836 se produjo la llamada "Sublevación de los Sargentos de la Granja", quienes obligaron a la Reina Gobernadora a firmar un Decreto por el que se restablecía la Constitución de 1812. Por Real Decreto de 13 de agosto María Cristina accede a ello: "Como Reina Gobernadora de España ordeno y mando que se publique la Constitu-

ción del año de 1812, en el ínterin que reunida la Nación en Cortes, manifieste expresamente su voluntad, o dé otra Constitución, conforme a las necesidades de la misma" (4).

B.- La convocatoria de las elecciones.-

En virtud de este Real Decreto y de otro publicado el día 21 del mismo mes, se convocaban elecciones para Cortes Constituyentes que habían de reunirse el 24 de octubre (5). Los artículos 20 y 21 del Decreto de 21 de agosto determinaban la forma de efectuarse las elecciones en Ultramar. Con el pretexto nada convincente de "facilitar las elecciones", determinaba que se realizasen "del mismo modo que se hicieron las de Procuradores a las Cortes convocadas en virtud del Estatuto Real y Reales Ordenes posteriores". De esta forma, y contrariamente a lo que establecía la Constitución de 1812, se aplicaba a Ultramar el principio censitario. No solo eso, sino que en lo relativo al número de representantes, establecía que sería "el mismo que se nombró para las Cortes de los años de 1820 y 1822", con lo cual se rebajaba el número de representantes que había otorgado el Estatuto Real a los territorios de Ultramar. Tampoco se tuvo en cuenta el precedente del Real Decreto de 24 de mayo de 1836 que adjudicaba cinco representantes a Puerto Rico (6).

De acuerdo con todas estas disposiciones, el Gobernador y Capitán General de Puerto Rico, general de la Torre, procedió a publicar una Circular ordenando la publicación de la Constitución de 1812, acto que se llevó a cabo con extraordinaria solemnidad y grandes muestras de júbilo por parte de la población (7). El día 10 de octubre procedía a publicar otro Decreto convocando a elecciones, y en consonancia con el artículo 20 del Real Decreto de 21 de agosto, determinaba que la elección se llevaría a cabo de acuerdo con las disposiciones del Estatuto Real en cuanto al procedimiento a seguirse (8).

C.- Proceso electoral y resultados.-

El día 19 de octubre se reunió el Ayuntamiento de la Capi-

tal, bajo la presidencia del propio Gobernador y se procedió a la elección de los "electores pudientes", que recayó en los siguientes candidatos:

Por la Capital: D. Andrés Vizcarrondo Martínez, D. Juan Hernández y D. Pedro Prado.

Por Arecibo: D. Miguel Balseiro y D. Francisco Ulanga

Por Aguadilla: D. Antonio Mayoral y D. Juan Macaya

Por Mayagüez: D. Rafael Arroyo, D. Lorenzo Vigo y D. Antonio Ruiz.

Por Ponce: D. Juan de Dios Conde y D. Jerónimo Rabasa

Por Humacao: D. Martín Izquierdo y D. José María Ríos

Por Caguas: D. Manuel Suárez Valdés y D. Marcos Jiménez (9)

El día 6 de noviembre se realizó la reunión conjunta de miembros del Ayuntamiento y electores pudientes y una vez practicada la votación, resultó elegido diputado por la isla D. Juan Bautista Becerra y García y como suplente D. Alejandro Oliván Borrúel (10).

Poco tiempo después Becerra solicitaba de varios Ayuntamientos el envío de Instrucciones, con el fin de poder desempeñar mejor su cargo. Para cumplimentar esta petición, el de San Juan nombró una Comisión compuesta por los señores D. José Power, D. Domingo García, D. Santos Puentes y D. Francisco de la O. Pacheco, los cuales decidieron transmitirle las mismas que se habían redactado para 1834, encareciéndole consiguiera el restablecimiento de la Diputación provincial y la mejora de todos los ramos de la Administración (11).

Becerra García se embarcó para la Península a principios de diciembre, llegando a Cádiz a finales del mismo mes. En enero de 1837 presentó sus credenciales a la Comisión de Poderes del Congreso, siendo aprobadas el día 7 (12). A pesar de todo, no llegó a tomar asiento en las Cortes, al igual que el resto de los diputados de Ultramar por los motivos que se detallan a continuación.

NOTAS

- 1.- ARTOLA, Miguel. Op.Cit., pág. 194 y sgts. El origen de la crisis del Gobierno de Mendizábal se relacionaba precisamente con el proyecto de Ley Electoral, rechazado por las Cortes, pero que sirvió para las elecciones de julio de 1836. Se produce una disidencia en las filas progresistas encabezada por Istúriz, Alcalá Galiano y el Duque de Rivas, que se pasan a las filas del moderantismo. En mayo la Reina Gobernadora, que se había asegurado la colaboración y apoyo de los moderados que seguían a Istúriz, se negó a firmar una combinación de mandos militares, obligando a dimitir al Gobierno progresista de Mendizábal, y llamando a Istúriz.
 - 2.- TIERNO GALVAN, Enrique: "Leyes Políticas españolas Fundamentales", (Madrid, Editorial Tecnos, 1968), pág. 237 y sgts.
 - 3.- GAMONEDA, Antonio. Op.Cit., pág. XXVII
 - 4.- NIEVA, Joseph María de: "Apéndice a Leyes, Reales Decretos y Ordenes de las Cortes que se han rehabilitado en el presente año", (Madrid, Imprenta Real, 1836), pág. 331.
 - 5.- Ibidem, págs. 337 a 344.
 - 6.- Esta decisión tenía un gran parecido con la de 1820 respecto a los diputados "suplentes" y parece denotar un matiz de reserva por parte del Gobierno hacia la representación de las provincias de Ultramar.
 - 7.- Archivo General de Indias, Sección 5, Audiencia de Santo Domingo, Legajo 2337.
 - 8.- Actas del Cabildo de San Juan, (1836-37), Libro 1º, Folio 111 vto.
 - 9.- Ibidem, Folios 118-119 y 137-38.
 - 10.- Archivo General de Indias. Sección 5, Audiencia de Santo Domingo, Legajo 2336.
 - 11.- Actas del Cabildo de San Juan, (1836-37), Folios 131, 138, 150 y 159.
 - 12.- Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes, 1837, págs. 879 y 927.
-

EPILOGO: LA PERDIDA DE LA REPRESENTACION EN CORTES

A.- Los antecedentes.-

Como consecuencia de una dificultad surgida en el seno de la Comisión de Poderes de las Cortes, al examinar los de los diputados de Puerto Príncipe (Cuba) en 1837, D. Vicente Sancho propuso una moción incidental el día 16 de enero en sesión secreta para que se nombrara una comisión especial que dictaminara sobre este asunto. Al propio tiempo hizo saber que, en su opinión, las leyes de la Península no podían servir ni regir en Ultramar. Según palabras del propio Sr. Sancho, la Comisión era del mismo parecer (1).

Las Cortes nombraron una Comisión especial formada por las de Ultramar y de Constitución para que diera un dictámen al respecto. Fruto de sus trabajos fue el dictámen que se presentó a la consideración del Congreso el día 12 de febrero de 1837, y que en su parte propositiva decía así:

"No siendo posible aplicar la Constitución que se adopte en la Península e islas adyacentes a las provincias ultramarinas de América y Asia, serán éstas regidas por leyes especiales y análogas a su respectiva situación y circunstancias, y propias para hacer su felicidad, y que en su consecuencia no tomarán asiento en las Cortes actuales Diputados por las expresadas provincias". (2).

Aunque la motivación era diferente, este dictámen coincidía con el pensamiento liberal autonomista que desde hacía algún tiempo se había desarrollado en Puerto Rico. En efecto, los autonomistas, apoyándose también en la diferencia de circunstancias de todo tipo que existían a uno y otro lado del Atlántico, eran partidarios, frente al grupo conservador y aun de otros liberales, de una legislación propia y específica que, en su opinión, obviaría los inconvenientes y desventajas para la isla de la legislación común.

Nada, pues, se podía objetar al dictámen de la Comisión en este sentido; pero, analizando este Dictámen y la discusión pos-

terior en torno al mismo, así como la política seguida por el Gobierno desde entonces con respecto a los territorios de Ultramar, creemos que la decisión no se relacionó en absoluto con ese tipo de ideas. Para comprobar esto debemos profundizar un poco en el espíritu que animaba esta medida.

Tres diferentes propósitos podían haber impulsado al Gobierno para tomar una medida de esta naturaleza: el deseo de impulsar al máximo el desarrollo moral y material de las colonias en beneficio de las mismas; o se trataba de un intento de frenar una situación pre-revolucionaria -manifestada, por otra parte, exclusivamente en Cuba- ante la supuesta ineficacia de la legislación liberal anterior, o finalmente, se buscaban una serie de objetivos concretos, a corto plazo, ante la crítica situación por la que atravesaba la Península, azotada por los problemas de la guerra civil.

Todas estas alternativas se dejan traslucir en las intervenciones que se producen en pro y en contra del dictámen. Por supuesto que la argumentación de sus defensores se apoya en el primer grupo de motivaciones. Sin embargo, tanto el comportamiento del Gobierno respecto a la forma de llevarse a cabo las últimas elecciones en Ultramar como su actuación posterior estaban en contradicción con tales propósitos (3).

Los opositores al dictámen, por su parte, utilizan frente al primer tipo de argumentos, otros más específicos, intentando encontrar en la situación crítica por la que atravesaba la isla de Cuba, así como en ciertas instituciones de las colonias, la motivación real que había orientado a los miembros de la Comisión y al propio Gobierno.

Finalmente, algunos diputados expresan claramente los temores y ansiedades que inquietaban a un sector de la población de las colonias ante un posible y fatal -para sus intereses- cambio del statu quo y no encuentran otra solución para impedirlo que una interpretación "dura" del concepto de leyes especiales.

Por la indudable importancia que esta decisión tuvo para

Puerto Rico y para Cuba, así como porque nos permite ver las diferentes posturas que entre los diputados peninsulares había ante "el problema colonial" en esta época, vamos a presentar en apretada síntesis, algunas de las más caracterizadas intervenciones en torno al dictámen.

B.- La discusión del dictámen.--

Ante todo conviene aclarar un punto preliminar en esta cuestión y es que en ningún momento, a lo largo del debate, se menciona el nombre de Puerto Rico. Es preciso tener esto muy en cuenta a la hora de hacer el balance de la situación en los territorios de Ultramar. Más aun; el Diputado Sr. López Santa-ella, en su intervención a favor del dictámen, dice expresamente que "el objeto más importante de la discusión es la Isla de Cuba", ya que reconoce que en Puerto Rico "hay elementos menos heterogéneos" (4). Y es preciso tenerlo en cuenta porque Puerto Rico en estos momentos, además de encontrarse en una etapa de crecimiento económico, no tenía ni fermentos revolucionarios ni problemas relacionados con la esclavitud.

La argumentación más clara a favor del dictámen es la de Arquelles y la desarrolla en la siguiente forma:

1.- La legislación colonial elaborada en la Península desde la instauración de la Junta Central, pasando por la del Consejo de Regencia y la de las Cortes Extraordinarias de 1810 fue un compromiso político, ante la agitación creciente de las colonias.

2.- Aparte de haber sido un compromiso político, se ha demostrado que dicha legislación liberal no ha dado los resultados apetecidos, ya que la mayoría de las colonias españolas se independizaron de la Metrópoli.

3.- Por consiguiente, es preciso variar las leyes y hasta el enfoque dado hasta el momento a los asuntos de Ultramar, para salvar los restos de 17 millones de españoles y hacer que continúen unidos a la madre Patria.

4.- Los legisladores del pasado no se dieron cuenta

de que, habiendo circunstancias diferentes en ambos lados del Atlántico, las leyes no podían ser iguales. Y las circunstancias fundamentales, el fenómeno diferencial por antonomasia, es la existencia de la esclavitud en Cuba y Puerto Rico. Este hecho condiciona, - en opinión de Argüelles - la labor de cualquier Gobierno. Y como reconoce abiertamente que no se puede abolir, la única solución que existe es variar las leyes, ya que Cuba está atravesando por este motivo unos momentos de creciente agitación. (5)

Esta línea de argumentación es completada por las intervenciones de los Diputados Srs. Sancho y López Santaella. El primero trata de demostrar que las leyes especiales son la única forma de resolver el hecho diferencial colonial y menciona, en apoyo de su aserto, las opiniones de Montesquieu, Rousseau y Bentham. Coincide con Argüelles en que el hecho diferencial principal es la esclavitud, hecho que no puede ni desconocerse ni eliminarse.

Dar una nueva constitución a Cuba significaría darle más libertad y más igualdad a sus habitantes. Pero en realidad significará poner un puñal en las manos de unos asesinos. Darle la independencia a Cuba significará entregársela a los negros, porque "¿cómo podrán los raquíticos europeos, enervados por el calor, resistir a los hijos del sol, acostumbrados a soportar y aún a desafiar sus ardores?" (6).

Por su parte, el Sr. López Santaella explicita los temores que experimenta una parte de la población de Cuba ante la política de ampliar las libertades de su población. "Aquella población - añade - está sobre un volcán que arderá al menor desliz (...) en aquellas provincias existe un germen que tal vez podrá comprometerlas de un modo que les sea funesto. Bien, señores, este germen no se contiene sino con la mano fuerte de un Gobierno que, al mismo tiempo que satisfaga las necesidades del país, sepa castigar a los delincuentes" (7).

En contra del dictámen se pronuncian Los Diputados Sres. Vermejo, Gozález Alonso y Nuñez. La argumentación del Sr. Ver-

mejo se basa en el siguiente razonamiento: o las leyes que hasta ese momento ha tenido Cuba han producido el floreciente estado de la isla que se describe en el preámbulo del dictamen, o no han sido las leyes las que han ocasionado tal resultado. Si ha sido efecto de las leyes, habiendo sido hasta ahora semejantes a las de la Península, no parece aconsejable cambiarlas por otras. Si, por el contrario, no han sido las leyes la causa del progreso, significa que no hay relación entre las dos variables y de nada servirá entonces elaborar leyes especiales.

Opina que las causas del progreso de Cuba han sido sus condiciones físicas, junto con la institución de la esclavitud. Pero esa felicidad, ese bienestar, ese progreso, ese estado floreciente no lo disfrutaban todos sus habitantes, sino solamente una parte pequeña, porque:

"Cuba solo hace consistir la suya en el codiciado metal que sirve de signo y garantía en los contratos; luego no es esencialmente feliz: y ;cómo lo ha de ser, cuando este resultado lo obtiene a costa de la infelicidad de una porción inocente de la especie humana, degradada solo por el empeño que en ello han puesto gentes de otro color! A este fatal empeño es debido ese aumento de población de Cuba, pues para satisfacer las necesidades de la agricultura Cubana y la molicie de sus sibaritas moradores se han importado en 60 años más de 600,000 negros, acumulando de este modo la desmesurada codicia de los hombres los materiales de la destrucción de la isla; y ahora, espantados de su misma obra, no encuentran otro modo de conjurar la tormenta que les amenaza, que multiplicar los medios de opresión, e inducir al Gobierno supremo que niegue la libertad y representación a que tiene derecho la inmensa mayoría de aquellos ciudadanos" (8).

La argumentación del Sr. González Alonso en contra del dictamen se base fundamentalmente en que el mismo restringe la li-

bertad, en lugar de ampliarla, obedeciendo, por tanto, a un impulso contrario a la corriente histórica:

"Digo que la circunscribe, porque todo lo que tiende a dar leyes especiales a unos pueblos que están unidos en los intereses generales con la madre Patria, entiendo que si no son leyes excepcionales, no son al menos tan generosas como las que nosotros tenemos, y en esta mi opinión e inteligencia digo que debe considerarse que circunscribe" (9).

Más adelante se refiere a un artículo aparecido en la "Revista Nacional" y cita una afirmación del mismo: "en esa isla (Cuba) no puede haber Diputaciones provinciales, porque éstas relajan las costumbres de aquellos habitantes." Comenta González Alonso:

"Señor, esto destruye toda idea de un gobierno benéfico, filantrópico, que considera al género humano como hermano, que se halla confraternizando con todos los hombres.

Esta idea es al contrario: mira el aislamiento, el silencio del supulcro; y esto se corrobora más todavía con concluir diciendo que la disciplina y subordinación militar son las bases del gobierno que conviene en aquella isla. ¡La subordinación militar, Señor; ¿En este predicamento a un pueblo que de sesenta años a esta parte ha acumulado una riqueza extraordinaria, y ciertamente no ha contribuido el Gobierno a ello, porque éste, de treinta años a esta parte, como dijo muy bien el Sr. Argüelles días pasados, no ha estado en condiciones de hacer prosperar aquel país?" (10)

¿Qué sucederá, - se pregunta el Sr. González Alonso, - si se aprueba el dictamen?

"Tenemos, pues, a la isla de Cuba con leyes especiales; tenemos, pues, que sus diputados no tienen derecho a sentarse en este Congreso para tomar parte en la adopción o deliberación acerca de cuáles deben ser esas

leyes especiales que allí deben regir; y tendremos, Señor, con el tiempo un seminario a donde irán nuestros prohombres, como van los ingleses a sus posesiones del Oriente y de la India, a traer las costumbres de los opresores respecto de los oprimidos y a traer aquella práctica del usar del látigo continuamente, para dar el más extraño ejemplo a un pueblo lleno de filantropía, como lo han dado muchos de los venidos de aquellas regiones, donde son pocos los opresores y muchos los oprimidos, donde estos últimos no conocen derecho ninguno y sí solo deberes, donde se ve a un amo con el látigo en la mano hacerse obedecer siempre a la fuerza y nunca con la razón" (11)

Finalmente interviene el Sr. Nuñez en contra del dictámen. Apoya sus razones en dos líneas de argumentación histórica: por una parte estudia el comportamiento de Inglaterra en relación con sus colonias y afirma que, si bien llegó a caer en el error de explotarlas, ha sabido rectificar esa política:

"Pero los ingleses, señores, que no pueden menos de pagar un tributo a los tiempos, como todos los hombres, empezaron a dudar si sería más conveniente emancipar los esclavos de la India occidental que mentenerlos en la esclavitud. Esta cuestión se agitó mucho tiempo en Inglaterra hasta que el año de 1834, por un bill pasado en el Parlamento, se acordó la emancipación de aquellos esclavos; y aunque su número excede de 700, 000, sin embargo, el Parlamento inglés tuvo el valor necesario para emanciparlos. Mas para conciliar los clamores de la humanidad con los de la justicia, votó una suma de 2,000 millones de reales para indemnizar a los colonos." (12)

Por otra parte estudia la legislación española desde la instauración de la Junta Central hasta 1823 y la considera positiva tanto en el aspecto político como en el económico, y concluye su argumento:

"Después de haber hecho tanto por esos hombres, ¿Queremos reducirlos al sistema absoluto? ¿Es posible esto? ¿Cuál es el delito de los americanos? En 1812 ¿no se sometieron a la Constitución? En 14 ¿hicieron otra cosa que someterse al yugo del despotismo como la madre Patria? En 20 ¿no juraron la Constitución como nosotros? El 23 ¿no doblaron la cerviz al absolutismo como la Península? Y por fin el 34 ¿no juraron el Estatuto? (13)

Termina tratando de imaginar lo que sucedería en Cuba, caso de producirse allí una revolución:

"¿Qué medios tenemos nosotros para sofocarla? Tiéndase la vista por la Península, y que se me conteste después. El Sr. Sancho hizo presente el otro día que aquellos hombres están rodeados de una porción de repúblicas, y que están en comunicación continua con la opulenta ciudad de Nueva-Orleans.

La grandeza de aquel país ¿no pone delante de sus ojos un ejemplo muy seductor? Si del Mediodía pasamos al Norte y fijamos la vista en Nueva-York, que también esta en comunicación con lo que nos queda de América ¿no conocemos que pueden caer en una funesta tentación? Pues qué, Nueva-York no es capaz de seducir al pueblo más apático? Nueva-York que como Nueva-Orleans, posee una inmensa navegación interior y cuando realice su plan de canalización del Hudson, que ya está unido al lago Ontario y al lago Erie, lo quedará al Ohio, y por consecuencia al Misissipi y al golfo mejicano:. (14)

Simple intentos de conseguir por medio de la aprobación del dictámen objetivos particulares, los vemos defendidos por el Sr. Mendizabal, a la sazón Secretario del Despacho de Hacienda, del Sr. Araujo y aun de los mismos señores diputados que defienden el dictamen por razones de más altos y genéricos intereses. Así, dice el Sr. Mendizábal:

"Es menester no perder de vista que hace unos quince

o veinte años era materialmente una carga para la madre Patria la isla de Cuba, la de Puerto Rico y las Filipinas. Doce millones se enviaban de Nueva España para la Habana o isla de Cuba, 4 para Filipinas y 6 para Puerto Rico; y en el año anterior, estas posesiones han contribuido a sostener la lucha en que estamos empeñados con 50,000,000, y en el año presente es de esperar que contribuyan con otra igual cantidad. Yo recordaría esto con amargura, y el Sr. González Alonso me acompañaría en el sentimiento, si prevaleciendo sus opiniones, fuese la consecuencia de ellas que dentro de dos o tres años no pudiese contar la madre Patria con estos recursos considerables, con que hoy contribuyen aquellos países al alivio de sus necesidades" (15)

El Diputado Sr. Araujo ve peligroso, por su parte que se discuta este asunto porque esto irritará las pasiones y producirá malísimos resultados. Añade más adelante:

"Se sabe que la isla de Cuba está sobre un volcán y que la parte ilustrada de ella, los grandes propietarios y lo que constituye la riqueza del país, desean y claman porque se adopten medidas capaces de evitar el mal que se prevé" (16)

El Sr. López Santaella deja entrever que sus intereses están al lado de la clase propietaria de Cuba al afirmar:

"Señores, el propietario que está acostumbrado a obtener sus productos de la esclavitud no puede tener aquellos hábitos que garantizan las leyes que tenemos en nuestro país, y que transplantadas allá, acaso los tendrían en un vaivén y una posición que fuera funesta para ellos mismos" (17)

El propio Argüelles dice, cerrando con ello su intervención:

"A otra de las circunstancias a que yo creo que no puede menos de llamarse la consideración del Congreso, es

hacia lo necesaria que es la prudencia y circunspección para proceder en este asunto, a fin de no comprometer los grandes intereses de los naturales y residentes en la isla de Cuba" (18)

Para facilitar la votación, el dictámen de la Comisión se dividió en dos partes: la primera se refería a si los territorios de Ultramar debían ser regidos por leyes especiales. Fue aprobada por 150 votos a favor por 2 en contra. La segunda se refería a si los representantes de Ultramar no debían tomar asiento en aquellas y en las sucesivas Cortes. También fue aprobada por 90 votos contra 65 (19)

El abultado margen de votos con que fue aprobada la primera parte nos demuestra que los diputados quedaron plenamente convencidos de la conveniencia de establecer una legislación especial para los territorios de Ultramar, adaptada a sus condiciones y necesidades. Sin embargo, el apretado margen de la segunda votación (58 % a favor y 42 % en contra) nos revela que por lo menos había una duda razonable en el seno de las Cortes respecto a la exclusión de los representantes Ultramarinos. Más aún; creemos que esta diferencia en ambas votaciones nos demuestra la honradez de los representantes en su decisión, ya que si hubieran deseado simplemente quitarse de encima la cuestión colonial, hubiesen coincidido los resultados de ambas votaciones.

Por el contrario, el escaso margen de votos que obtuvo la segunda proposición se puede interpretar como un rechazo a la política de privar de representación parlamentaria a los territorios de Ultramar como algo contrario a la tradición española, a la corriente política general y al mismo principio de las leyes especiales. En efecto, malamente podrían acertar los gobernantes peninsulares a promulgar leyes "adaptadas a su respectiva situación y circunstancias y propias para hacer su felicidad" si previamente se las privaba de sus legítimos y más autorizados

portavoces, que serían los más indicados para hacer llegar hasta el Gobierno sus necesidades y deseos.

El tiempo vino a confirmar este fallo, ya que a lo largo de los 32 años que transcurrieron hasta que fueron llamados de nuevo los representantes de Ultramar, apenas se aprobó una ley que pudiera ser considerada como propia para hacer la felicidad de los habitantes de Ultramar.

Fuera del Gobierno, las reacciones que provocó esta decisión fueron de diversa índole, aunque por lo general se polarizaron, cosa que sucedía con mucha frecuencia frente a los asuntos Ultramarinos: mientras algunos la aplaudieron como la única forma de hacer frente al caos político y legislativo que desde las Cortes de Cádiz se había producido en Ultramar, otros la censuraron duramente como un acto de injusticia y de mala política. Los defensores se apoyaban también en la necesidad en que se entraba la Península de concentrar toda su atención en el problema de la guerra carlista, evitando cualquier motivo de distracción de fuerzas y de desunión de criterios en el Gobierno y en las Cortes (20). Si la decisión fue o no acertada en este sentido, es cuestión difícil de precisar; pero la repercusión negativa que tuvo en las Antillas es algo perfectamente comprobado.

Paradójicamente, tanto en Cuba como en Puerto Rico los elementos liberales acogieron en un primer momento al decreto con entusiasmo, viendo en él una consolidación de la línea política iniciada en las Cortes de 1822, en las que el representante de Puerto Rico, D. José María Quiñones, presentó un proyecto de ley de marcado cariz autonomista. (21) Posteriormente, en 1823, el mismo Quiñones, en unión de dos diputados cubanos presentaba otro proyecto en la misma línea de "leyes especiales", que tuvo buena acogida en las Cortes. (22)

No es, pues, extraño que en 1837, esos mismos elementos acogieran con renovada esperanza la decisión de las Cortes. Solo al pasar el tiempo y comprobar que no llegaban las leyes prometidas, algunos de esos elementos abandonaron la vía legal

y se dedicaron a preparar diversos planes para separar a las Antillas del dominio de España (23).

C.- Conclusión.-

De esta forma se cerraron las puertas del más alto cuerpo legislativo de la Nación a los representantes de Ultramar. No solo eso, sino que al aprobarse el principio de la legislación diferencial, se les marginaba del progreso jurídico y parlamentario de la Metrópoli. Con esta decisión se cierra también una etapa de la historia constitucional de los territorios ultramarinos. En el caso de Puerto Rico, habrán de pasar treinta y dos años hasta que sus representantes puedan sentarse de nuevo en el hemiciclo de las Cortes; y diez años más en el caso de Cuba.

Entretanto, se abre un compás de espera, durante el cual las tendencias políticas surgidas al calor de Cádiz, se mantienen latentes, en estado de hibernación; sólo agitarán levemente la opinión pública dos hechos que en el fondo no tuvieron repercusión inmediata: el primero, la visita a la isla en diciembre de 1839 de una Comisión Regia, integrada por los señores D. Agustín Rodríguez, D. Miguel Cabrera de Navares y el General D. Juan Bautista Topete (24). Esta Comisión había sido encargada de hacer un estudio de las condiciones de la isla para la preparación de las leyes especiales prometidas en la Constitución de 1837. El único resultado práctico que obtuvo la isla de esta visita fue la remoción del Gobernador, Mariscal López de Baños (25).

La segunda noticia fue la convocatoria en 1865 de una Junta de Información, que tenía el mismo propósito que la Comisión Regia, pero que esta vez se compoⁿdría de representantes de las colonias, elegidos mediante un procedimiento similar al de los diputados de 1836 (26). Durante casi dos años esta Junta celebró numerosas reuniones en Madrid, hasta que en abril de 1867 se clausuraron sus sesiones, volviendo los comisionados a sus respectivos lugares de origen, y sin que tampoco se utilizase de momento la información suministrada por los comisionados (27).

Así pues, a lo largo de todo este período Puerto Rico se vió sometido de nuevo a un régimen que, si no era exactamente igual al que regía en la isla antes de 1809, tampoco tenía ninguna semejanza con el de la Península, ni siquiera con el prometido de las leyes especiales. En lo político, junto a las Leyes de Indias mencionadas por la Real Orden de 22 de abril de 1837, varios Gobernadores de esta época expidieron diversos "bandos de policía y buen gobierno" o pusieron en vigor otros de épocas anteriores. Estos decretos iban encaminados a impedir el desarrollo de movimientos separatistas, pero "de facto" significaron la pérdida por parte de los habitantes de la isla de todos los derechos democráticos: libertad de movimiento, derechos de reunión y asociación, de libertad de trabajo, etc., etc. (28).

En lo económico, la isla pasó por diferentes etapas de prosperidad y decadencia, de acuerdo a la política fiscal y arancelaria que imponía el Gobierno de Madrid y la coyuntura internacional del mercado de productos agrícolas. Así, la Ley de Aranceles de 1835, de carácter extractivo, junto a diversas erogaciones hechas por el Gobierno de la Península para hacer frente a la guerra que sostenía contra los carlistas, dejaron en estado precario no solo el erario de la isla y las obras públicas, sino también el desarrollo de su actividad económica (29). Sólo el azúcar y el algodón de Puerto Rico gozaron de cierta prosperidad debido a la paz que reinaba en Europa y a la creciente demanda del mercado de los Estados Unidos.

Finalmente, a lo largo de este período la cultura de la isla va mejorando poco a poco con el establecimiento de nuevos centros de primera enseñanza, muchos de ellos debidos a la iniciativa privada. No obstante, el índice de analfabetismo era todavía sumamente elevado, calculándose para mediados de siglo en un 90 % (30.). La prensa diaria se vió afectada adversamente, por cuanto el punto 4º de la Real Orden de 22 de abril requería de los Gobernadores una atención especial respecto a lo que se publicaba dentro de la isla y lo que entraba procedente de la Península y otros países. Únicamente la Gaceta de Puerto Rico

y el Boletín Mercantil, periódico de carácter conservador, siguieron publicándose sin problemas, pero el resto languidecía, y fueron muy pocos los nuevos periódicos que aparecieron (31).

NOTAS

- 1.- Diario de Sesiones de las Cortes, 1836, pág.
- 2.- Ibidem, Pág.
- 3.- El día 5 de abril de 1836 el Sr. Sancho, en la continuación decía así: "Pasando enseguida a la cuestión de América, ¿qué es lo que se resolvió por el Gobierno?. Primero, que no rigiese allí la Constitución hasta que las Cortes determinasen; segundo, que no viniesen diputados, sino en el menor número posible; y así, sólo se llamó un número igual al que vino a las Cortes del 20 al 21, es decir, ocho en vez de diez y siete. El Gobierno por su parte hizo cuanto estuvo en su mano para disminuir una calamidad como ésta; pero no se atrevió a decir: yo resuelvo definitivamente que la Constitución no se ha de poner; únicamente lo suspendió, conociendo que la opinión estaba decidida y que la de todos los hombres prácticos que tienen ideas exactas acerca del estado de aquellos países era uniforme, absolutamente uniforme en aconsejar esta medida, cuya necesidad solo son incapaces de reconocer los que estan en una ignorancia absoluta de la situación de aquellas regiones". Cf.: Diario de Sesiones de las Cortes (1837, pág. 2,512.
- 4.- Ibidem, pág. 2,310.
- 5.- Ibidem, págs. 2,697 a 2,700.
- 6.- Ibidem, pág. 2,508
- 7.- Ibidem, pág. 2,311
- 8.- Ibidem, pág. 2,308
- 9.- Ibidem, pág. 2,312
- 10.- Ibidem, pág. 2,313
- 11.- Ibidem, pág. 2,314
- 12.- Ibidem, pág. 2,695
- 13.- Ibidem, pág. 2,696
- 14.- Ibidem
- 15.- Ibidem, págs. 2,314 y 2,315
- 16.- Ibidem, pág. 2,061
- 17.- Ibidem, pág. 2,310
- 18.- Ibidem, pág. 2,699

- 19.- Ibidem, pág. 2,800 y 2,801. En los anexos I y II se recogen el Decreto aprobado por las Cortes y la Real Orden que lo desarrolla. También Zamora y Coronado, José María: Op. Cit., Tomo IV, págs. 150 a 155.
- 20.- Ver, por ejemplo, la opinión de Miguel Blanco Herrero en: "La política de España en Ultramar" (Madrid, imprenta de Francisco G. Pérez, 1890), págs. 356 y sgts, y 545 y sgts,
- 21.- Pueden verse ambos proyectos en: Diario de Sesiones de las Cortes, (1822), pág. 1,813 y sgts., y págs. 2,241 y sgts.
- 22.- Ibidem, (1823), págs. 21, 48, 95 y 100.
- 23.- En Puerto Rico, un grupo de liberales, puesto en contacto con elementos separatistas, comenzó a elaborar un plan para independizar a la isla. Entre ellos figuraban: D. Andrés Vizcarrondo Martínez, militar y político que había ocupado diversos cargos de importancia en la isla; D. Buenaventura Valentín Quiñonez, D. Santiago Dalmau; D. Juan Vizcarrondo; D. Florentino Gimbernat; D. Santiago Bacaro y D. José Escuté, Cf.: Cruz Monclova. Op. Cit., Tomo I, pág. 230.
- 24.- Ibidem, págs. 238 y 239.
- 25.- Ibidem
- 26.- El 25 de noviembre de 1865 expedía D. Antonio Cánovas del Castillo, a la sazón Ministro de Ultramar, un Real Decreto convocando a Madrid representantes de Cuba y Puerto Rico para informar al Gobierno de los problemas que ambas islas tuvieran planteados. El artículo 22 determinaba que Puerto Rico elegiría 6 comisionados: 2 San Juan y uno cada uno de los cuatro primeros Ayuntamientos de la isla. Por lo que se refiere al procedimiento, es interesante mencionar que, aunque el Decreto establecía que la elección sería hecha por cada Ayuntamiento, el Gobernador de la isla, general Marchesi, creyó que deberían participar también un número igual de mayores contribuyentes, con el fin de que el proceso fuese más representativo. Resultaron elegidos: Por San Juan, D. Manuel Valdés Linares, conservador templado, y D. José Julián Acosta y Calvo, liberal. Por Ponce, D. Antonio Becerra Delgado, conservador templado. Por San Germán, D. Francisco Mariano Quiñonez, liberal. Por Arecibo, D. Manuel de Jesús Zeno Correa, conservador puro. Por Maya-

guez, D. Segundo Ruiz Belvis.

La labor llevada a cabo por los comisionados de Puerto Rico ante la Junta fue verdaderamente notable. Los comisionados liberales presentaron tres informes: el primero, sobre la esclavitud y su abolición, el segundo, sobre el problema económico y el tercero, sobre el problema político. De los tres sobresale por su planteamiento, por su grandeza y por su valentía el primero. Cf.: Cruz Monclova. Op. Cit., Tomo I, págs. 388 y 428. El informe sobre la esclavitud puede verse íntegro en: Ruiz Belvis, Segundo, Acosta, José Julián, Quiñonez, Francisco Mariano: "Proyecto para la abolición de la esclavitud en Puerto Rico" (San Juan, Instituto de Cultura Puertorriqueña, 1959).

- 27.- Solamente en 1873 la Asamblea Nacional aprobaba la abolición de la esclavitud en Puerto Rico, con indemnización a los dueños de los esclavos. Cf.: Diario de Sesiones de la Asamblea Nacional, (1873), págs.
- 28.- Los que se aprobaron o pusieron de nuevo en vigor a lo largo de este periodo fueron: el del Mariscal de la Torre de 1824. Cf.: Archivo General de Indias. Sección de Ultramar. Legajo 455. El del Mariscal López de Baños. Ibidem. Legajo 416 y finalmente el del general de la Pezuela. Cf.: Gaceta de Puerto Rico, 1849 (19 y 21 de diciembre), Nos. 154 y 156.
- 29.- Pedreira, Antonio Salvador. Op.Cit., págs. 321 y 322. En los 33 años que van desde 1836 a 1869 se fundaron únicamente 34 nuevos periódicos en Puerto Rico; en comparación, en la década de los 70 a los 80 aparecieron 106.
- 29.- Cruz Monclova, Lidio. Op.Cit., pág. 246
- 30.- Ibidem, pág. 349.
- 31.- PEDREIRA, Antonio Salvador. Op.Cit., pág. 75 y sgts. Entre 1822 y 1838, no aparece ningún nuevo periódico y solamente continuó publicándose la Gaceta, desapareciendo todos los demás.

ANEXO I

LEY

mandando que las Provincias de Ultramar se rijan por Leyes Especiales

Madrid, Abril 18 de 1837

"Las Cortes, usando de la facultad que les concede por la Constitución han declarado: No siendo posible aplicar la Constitución que se adopte para la Península e Islas adyacentes a las provincias ultramarinas de América y Asia, y serán éstas regidas y administradas por leyes especiales análogas a su respectiva situación y circunstancias, y propias para hacer su felicidad; en su consecuencia no tamarán asiento en las Cortes actuales diputados por las expresadas provincias.- Palacio de las mismas, 18 de abril de 1837.- Pedro Antonio Acuña, Presidente.- Tomás Fernández de Vallejo, Diputado Secretario.- Francisco Javier Ferro Montaos, Diputado Secretario. Por tanto, Mandamos a todos los Tribunales.....- Yo, La Reina Gobernadora.

Fuente: Boletín Histórico de Puerto Rico
Tomos 3 y 4, pág. 29.

ANEXO II

Real Orden comunicada a los Gobernadores de Cuba y Puerto Rico, participándoles que los dominios de Ultramar se regirán por leyes especiales.

Madrid, 22 de Abril de 1837

"S.M. la Reina Gobernadora ha tenido a bien resolver que al remitir a V.E. la adjunta Real Orden del 19 del presente mes, en que se manda publicar y circular la disposición de las Cortes para que las provincias de América y Asia sean regidas por leyes especiales y análogas a su respectiva situación y circunstancias, y propias para hacer su felicidad, y que en su consecuencia no tomen asiento en las Cortes actuales diputados por las expresadas provincias, hace a V.E. las prevenciones siguientes:

- 1.- S.M. teniendo presente la opinión y deseos de la mayor parte de esos habitantes, manifestados en todas ocasiones y muy singularmente en la multitud de exposiciones hechas por resultados de los acontecimientos de Santiago de Cuba, no puede dudar de que generalmente será aplaudida y satisfactoria la adopción de la expresa medida; mas como tampoco puede dudarse de que será de penoso disgusto para los malévolos, que con la apariencia de apetecer una libertad que no entienden, aspiran a otro objeto execrable y perjudicial a su misma seguridad e intereses, quiere S.M. que V.E. redoble en esta ocasión su vigilancia, como más conduzca a la tranquilidad y seguridad del país, obrando con tanta discreción como energía y siempre con arreglo de las leyes segun las cuales, si los malcontentos diesen algun paso criminal que pueda conducir a alterar el sosiego público, deberán ser sujetos al juicio de los tribunales competentes.
- 2.- Que debiendo considerarse una consecuencia precisa de la enunciada disposición de las Cortes, que esas provincias sigan gobernándose por las Leyes de Indias, por los Reglamentos y por las Reales Ordenes comunicadas para su observancia, y por las

que se vayan dando, como se crea más conducente a la prosperidad del país, debe cumplirse muy exactamente lo determinado en las referidas leyes y en órdenes posteriores acerca de que no se ponga en ejecución disposición alguna que se adopte en la Península, y que no se comuniqué a V.E. por el correspondiente Ministerio con el expreso objeto de que tenga ejecución y cumplimiento en esa isla.

3.- Que debiendo ésta ser regida y administrada por leyes especiales, análogas a su situación y propias para hacer su ventura, las autoridades superiores deben auxiliar al Gobierno de S.M. proponiendo en sus respectivos ramos aquellas que conceptúan puedan producir tan importantes objetos.

4.- Que respecto a no regir en ese país las leyes de libertad de imprenta ni las de periódicos, V.E. cuide mucho de que se aplique con la mayor discreción la censura, en términos que ni se impida la publicación de escritos que sirvan a la ilustración pública, ni se permita las de los que en cualquier sentido puedan perjudicar a la tranquilidad y seguridad del país, al buen crédito del Gobierno español y a la justa causa nacional; entendiéndose esta misma vigilancia a la introducción y circulación de folletos, periódicos y papeles impresos en otros puntos. S.M. se promete del acreditado celo de V.E. el buen uso que sabrá hacer de estas prevenciones que de su Real Orden le comunico. Lo traslado a V.E. de orden de S.M. para su inteligencia y efectos convenientes.- El Secretario de Marina, de Comercio y Gobernación de Ultramar.- Lo traslado a V.S. para su cumplimiento y puntual observancia.- Madrid, 25 de Abril de 1837.- Facundo Infante.- Sr. Capitán General de Puerto Rico

Fuente: Boletín Histórico de Puerto Rico.
Tomos 3 y 4, págs. 29 a 31

2.1. LA ELECCION GENERAL DE 1869

A.- La situación política en la Península.-

1. La Revolución de Septiembre

El 16 de agosto de 1866 se reunían en Ostende (Bélgica) representantes de dos partidos políticos peninsulares, Progresista y Demócrata, y firmaban un acuerdo en orden a coordinar sus esfuerzos para derrocar a Isabel II y convocar una Asamblea constituyente, elegida por sufragio universal, con el fin de dar un nuevo rumbo a la política del país (1). Con la muerte de O'Donnell, jefe del partido Unión Liberal, ocurrida en noviembre de 1867, desaparecía el último obstáculo para lograr un entendimiento entre este partido y los otros dos, con lo que la alianza contra el trono de Isabel pudo abarcar un amplio frente político que incluía desde partidos de derecha hasta las izquierdas republicanas.

El día 19 de septiembre de 1868 se sublevaba en Cádiz la escuadra española, al mando del Almirante Topete y los dirigentes de la insurrección dirigen desde allí su primera proclama al país:

"Españoles: la ciudad de Cádiz, puesta en armas con toda su provincia, con la Armada anclada en su puerto y todo el departamento marítimo de la Carraca, declara solemnemente que niega su obediencia al Gobierno que reside en Madrid, seguro de que es leal intérprete de los ciudadanos que en el dilatado ejercicio de la paciencia no hayan perdido el sentido de la dignidad, y resuelta a no deponer las armas hasta que la Nación recobre su soberanía manifieste su voluntad y se cumpla" (2).

Rápidamente la revolución se extiende por Málaga, Almería, Cartagena y Sevilla con Serrano a la cabeza. Cataluña también se levanta, sin que el general de la Pezuela, Capitán General de la plaza, pueda hacer nada por sofocar la insurrección. Finalmente, el general Serrano, que avanzaba con sus tropas sobre Madrid, derrota a Novaliches en la batalla del Puente de Alco-

lea, con lo que el tambaleante régimen de Isabel acaba por derribarse. El día 30 de septiembre la Reina atravesaba la frontera de Francia, dejando así el campo libre a los revolucionarios. De esta forma se abre en España una etapa que se extenderá hasta la restauración de la Monarquía con el pronunciamiento de Martínez Campos en Sagunto. Etapa agitada que no dará un momento de reposo ni a los gobernantes, ni a los partidos ni al pueblo, todos los cuales terminarán agotados al final del periodo y aceptarán sin mayor dificultad el sistema canovista, menos auténtico, pero indudablemente mucho más tranquilo.

Pero la Revolución de Septiembre que, como hemos visto, logró en dos años liquidar el régimen político existente, no fue, sin embargo capaz de encontrar una alternativa que arrastrase a las masas peninsulares. Durante cinco años los protagonistas de la revolución se debatirán en medio de problemas internos y externos, intentando encontrar una salida que no fuera ni una vuelta a la dinastía borbónica ni la instauración de una república. El fracaso de la Revolución se probará en el hecho de que ambas soluciones serán las que en definitiva se acepten, si bien la fórmula republicana resultará un ensayo efímero, que apenas durará el tiempo suficiente para hacerse aborrecible a la mayor parte del país, incluidos la mayoría de sus defensores.

Las rivalidades personales, secuela inevitable de un malestar más profundo, producen la inestabilidad de los diferentes gobiernos, que se sustituirán ininterrumpidamente en ciclos cada vez más cortos; casi en secuencia cinematográfica pasarán por el poder Serrano, Prim, Ruiz Zorrilla, Malcampo, Sagasta, Figueras, Pi y Margall, Salmerón, Castelar, Zavala y Sagasta. Diez personalidades que formarán diez y siete gobiernos en un periodo de seis años.

Si de los gobernantes pasamos a las formas de gobierno, encontraremos idéntica inestabilidad: Gobierno Provisional, Regencia, Monarquía Parlamentaria, República y finalmente una ambigua forma de República interina. Por lo que se refiere a los procesos electorales durante este periodo, encontramos una rei-

teración abusiva de las consultas al país, que terminarán por agotarlo: cinco elecciones generales en menos de cinco años era un ritmo verdaderamente agotador para un país que acababa de estrenar el sistema electoral.

En lo relativo a Ultramar, los asuntos no fueron mejor: once ministros diferentes al frente del Ministerio en el mismo período. Sin embargo, en el plano de la política ultramarina este período fue sumamente positivo para Puerto Rico; no así para Cuba y Filipinas, que quedaron al margen de las reformas por problemas internos (3). En este sentido, tenemos que mencionar dos conquistas de la Revolución para Puerto Rico: el llamamiento de los representantes de la isla al seno de las Cortes que no se hacía desde 1836 y la concesión de una Ley Electoral de base censitaria, pero mucho más liberal que todas las anteriores. Por lo primero, Puerto Rico podrá enviar once representantes a las Cortes de 1869 y 15 a partir de 1871; por lo segundo, la población electoral será de 4,000 electores en 1869 y cerca de 45,000 en las elecciones de 1873 (4).

Etapas doradas del parlamentarismo puertorriqueño, sus representantes liberales brillarán a gran altura en sus intervenciones parlamentarias y conseguirán para la isla una serie de reformas sustanciales que harán desaparecer las desconfianzas del elemento criollo y de los políticos de tendencias más avanzadas, desviando la atención y hasta los deseos tanto del separatismo como del autonomismo (5). Solamente el retroceso que en la línea reformista significará la Restauración hará volver los ojos de algunos de sus más destacados políticos hacia soluciones propias, que sin embargo nunca traspasarán los cauces legales.

2.- La readmisión de los representantes de Puerto Rico

Comienza la obra de la Revolución, por lo que se refiere a Ultramar, con dos declaraciones de la Junta Superior Revolucionaria fechadas ambas el día 15 de octubre de 1868. Las dos fueron redactadas por Labra y presentadas a la Junta por Nico-

lás María Rivero (6). La primera se refería al problema de la esclavitud y la segunda sobre la readmisión de los representantes de Ultramar en las Cortes. Esta última decía así:

"La Junta Superior Revolucionaria, a propuesta de varios de sus miembros, acordó por aclamación proponer al Gobierno que llame a la representación de las próximas Cortes Constituyentes a las provincias de Ultramar" (7).

Diez días más tarde, el 25 de octubre, el Gobierno Provisional publicaba un "Manifiesto a la Nación", de tono liberal aunque más moderado que las declaraciones precedentes. Refiriéndose a los territorios ultramarinos decía el Manifiesto:

"De las ventajas y beneficios de la Revolución gozarán también nuestras queridas provincias de Ultramar, que forman parte de la gran familia española, y tienen derecho a intervenir con su inteligencia y su voto en las arduas cuestiones políticas, administrativas y sociales planteadas en su seno" (8).

Por su parte, el Ministro de Ultramar, Sr. López de Ayala, procedía con fecha 27 de octubre a expedir una Circular, en la que explicaba a las autoridades de Cuba y Puerto Rico los propósitos del Gobierno relativos a Ultramar:

"La Revolución actual que se ha captado la simpatía de propios y extraños por su templanza y espíritu justiciero, no aplicará a las provincias de Ultramar medida alguna violenta, ni atropellará derechos adquiridos al amparo de las leyes, no dará tampoco nueva sanción a inveterados abusos ni a manifiestas trasgresiones de la ley natural. Acepta en el orden político todo lo que tiende a aumentar las inmunidades de las provincias ultramarinas, sin relajar los lazos que las unen al centro de la Patria; admite en el orden todo lo que conspira a un fin humanitario y civilizador, pero sin alterar de un modo brusco y ocasionado a grandes conflictos para ella misma y la condición de la población agrícola de nuestras Antillas" (9).

A continuación y en la línea de la legislación especial para Ultramar recogida en el artículo 2º adicional a la Constitución de 1837, el Gobierno anunciaba estar estudiando la forma electoral más adecuada a la diversidad del estado social en aquellas provincias y que al definirlos tendría muy en

cuenta las naturales diferencias y condiciones de los habitantes de las Antillas. Finalmente, la Circular prometía adoptar un sistema electoral tan amplio como fuera posible. La referencia al problema de la esclavitud es clara en este texto, así como el tono conciliador y moderado como propone abordar este espinoso tema, sin duda para no enajenarse la simpatía del elemento terrateniente de ambas islas, que sería el más afectado por una decisión del Gobierno.

2. El Decreto sobre Sufragio universal y la convocatoria de elecciones.-

El día 9 de noviembre de 1868 el Gobierno Provisional expedía un Decreto sobre Sufragio universal y sobre la forma de elegir los Ayuntamientos, las Diputaciones provinciales y los Diputados a Cortes (10). En el Preámbulo de este Decreto se justifica la readmisión de los representantes de Ultramar con las siguientes palabras:

"La inmensa gravedad de las cuestiones que han de someterse a las Cortes aconsejan también una medida de muy trascendentes consecuencias; y el Gobierno, al adoptarlas, dando representación a las provincias de Ultramar que puedan tenerla en la próxima Asamblea constituye, satisface un deseo común a todas las parcialidades políticas, que se unieron para llevar a cabo la Revolución y cumple a la vez con un deber de altísima justicia, que elevará nuestra consideración ante la Europa, estrechando de un modo indisoluble los lazos que unen las colonias a la madre Patria (11).

Más adelante, el Decreto inserta una disposición especial, trasladando al Ministro de Ultramar un Decreto, que fue publicado en Puerto Rico el día 28 de enero de 1869 (12). En su parte expositiva decía así:

"El establecimiento del censo, como base electoral, ha sido uno de los puntos más difíciles y delicados que ha tenido que resolver el Ministro que suscribe. La aplicación del Sufragio Universal hubiera sido arriesgado en aquellas provincias por razones políticas y sociales, que se ofrecen a primera vista y a poco que se pare la atención. No se pasa repentinamente sin hondas perturbaciones en el

orden político desde un estado de tutela completa y absoluta al más amplio ejercicio de los derechos del ciudadano.

(...) La determinación del número de diputados que deben mandar a las Cortes constituyentes las islas de Cuba y Puerto Rico ha sido otro de los asuntos que con más empeño han ocupado la atención del Ministro que suscribe. Teniendo en cuenta el desarrollo de la población y la riqueza han alcanzado allí desde el año 1836 hasta el presente ha creído que debía aumentar la representación de aquellas provincias de trece diputados que entonces nombraron a los diez y ocho que por este Decreto se les asigna (13).

(...) Deseoso de que las elecciones se verifiquen con entera libertad, ha suspendido el uso de la Real Orden de 28 de mayo de 1825 por la cual se conceden facultades extraordinarias, exentas de responsabilidad, a las autoridades superiores de aquellas islas y tendrán que concretarse estrictamente, durante el periodo electoral, a las que les confieren las Leyes de Indias" (14).

En la parte dispositiva el Decreto determinaba que Puerto Rico elegiría siete diputados (artículo 1º); que la isla quedaría dividida en tres circunscripciones a efectos electorales: Capital, Naguabo y Guayama, la primera; Aguadilla y Arecibo, la segunda y Mayagüez y Ponce, la tercera (artículo 3º). El artículo 7º se refería a las calidades de elector y llegó a la isla redactado en la siguiente forma: (15).

"artículo 7º: Para ser elector se requiere ser español, en pleno goce de derechos y mayor de 25 años. Pagar un impuesto territorial o por subsidio industrial o de Comercio la cuota de _____ escudos" (15).

En 1870 el diputado liberal por Puerto Rico, Sr. Escoriaza, denunciaba ante las Cortes la arbitrariedad que había supuesto dejar en blanco el monto de la cuota de contribución, ya que eso había dado lugar a que, mientras en Cuba el Gobernador la estableció en 500 reales, el de Puerto Rico la elevó a 2,000. Le contestó el Sr. Romero Robledo que esto se había debido a que el Gobierno decidió que fueran los respectivos Gobernadores, como más informados de la situación económica de cada isla, los que determinaran el censo (16).

El mismo día 14 de diciembre expidió el Gobierno Provisional una Circular sobre el ejercicio de la libertad de imprenta, publicada en Puerto Rico el día 3 de enero de 1869 (17). Aunque en este Decreto se decía expresamente que los periódicos podrían "discutir los asuntos relativos a la Administración económica y política, en el Reglamento que publicó el Gobernador de Puerto Rico, general Sanz y Posse, para la publicación del Decreto sobre elecciones interpretó en forma restrictiva este artículo:

"Ya comprenderéis -decía- que la libertad de imprenta ha de tener hoy por principal objeto ilustrar a la opinión, tanto de los electores como de los elegibles, sobre las materias que darán ocasión a los debates del Congreso constituyente y defender los derechos de aquellos y la legalidad de las elecciones: (18).

Por su parte, la Circular sobre libertad de reunión se encaminaba también, en interpretación del Gobernador, solamente a "concertar los medios de asegurar el mayor acierto en la elección; y como el modo de conseguir tal objeto es el orden y la parsimonia en las discusiones, comprenderéis también que no conviene la concurrencia de otra clase de personas que las expresamente autorizadas para ello por el derecho electoral" (19).

La interpretación restrictiva que el Gobernador había hecho de algunos decretos del Gobierno Provisional y la que éste mismo había hecho respecto a los de la Península produjeron múltiples reacciones en contra de los mismos, tanto en la Península como en Puerto Rico. Por Madrid circularon a lo largo de los meses de octubre, noviembre y diciembre una serie de "exposiciones" de peninsulares, de cubanos y puertorriqueños, casi todas pidiendo al Gobierno Provisional hiciera extensivos a Cuba y Puerto Rico los mismos derechos que a la Península y que decretara de inmediato la "libertad de vientre" (20). Pero ninguna de estas peticiones fue atendida por el Gobierno, excepto la comentada del Sr. Conde de Vegamar.

Más adelante, en el mes de febrero de 1869, una comisión

formada por los puertorriqueños señores D. Eugenio María de Hostos, D. Manuel Pacheco y D. Santiago Oppenheimer se presentó al general Serrano para exponerle su deseo de una reforma amplia del régimen existente en Puerto Rico, así como algunas consideraciones sobre los decretos dados últimamente para las elecciones. Algunos días más tarde, fueron recibidos de nuevo por Serrano, con el fin de comentar algunos extremos de sus peticiones (21). Como consecuencia de estas entrevistas, el Gobierno procedió a publicar un Decreto de fecha 10 de febrero enmendando el de 14 de diciembre de 1868 en lo relativo al número de representantes por Puerto Rico - 11 en lugar de 8 - y rebajando la cuota contributiva requerida para poder ser elector de 200 a 50 escudos (22).

El día 13 de febrero publicaba el Gobernador una Circular sobre formación de las Listas electorales y el día 18 otra dirigida a todos los Alcaldes y Corregidores de la isla ordenándoles la no inscripción en las Listas de los deudores a los fondos públicos (23).

B.- La convocatoria de elecciones en Puerto Rico.-

El día 6 de diciembre de 1868 el Gobierno Provisional de la Península expedía un Decreto, publicado en la "Gaceta Oficial" del día 7, fijando las fechas del 15 al 18 de enero de 1869 para la celebración en la Península e islas adyacentes de las elecciones para diputados a Cortes; también fijaba la apertura de las mismas para el 11 de febrero. Sin embargo, en Puerto Rico pasaba el tiempo y no se publicaba el decreto correspondiente. Por último, con motivo de una protesta formulada al Gobierno Provisional por varios insulares residentes en Madrid, éste ordenó al General Sanz que publicara de inmediato la convocatoria. Por Decreto del 31 de abril el Gobernador fijaba las elecciones para los días 30 de mayo y 1 de junio (24). Este retraso determinó que los representantes de Puerto Rico no pudieran tomar asiento en las Cortes hasta finales del mes de Julio, con lo cual no pudieron intervenir en la discusión de la nueva Constitución, que fue promulgada el día 1 de junio de

1869 (25).

C.- Ambiente pre-electoral: actividades de los grupos liberal y conservador.-

El sector conservador de la isla, al que las medidas restrictivas del Gobernador favorecían, se lanzó a la campaña electoral con gran empuje, imprimiendo numerosas hojas y manifiestos, sobre todo en el "Boletín Mercantil", uno de los periódicos más antiguos de la isla y que desde este momento se convierte en portavoz del pensamiento y programa conservadores. Los liberales, utilizando el mismo sistema, publicaron también artículos de propaganda en varios periódicos, si bien su labor se veía entorpecida por los requisitos de la censura previa y la de los directores coartada por el de la fianza, que desalentaba la inserción de artículos de crítica al Gobierno (26).

Aunque todavía las tendencias políticas de la isla no se encontraban organizadas, sus ideas básicas estaban netamente perfiladas y diferenciadas: por una parte, el grupo conservador, compuesto casi en su totalidad por españoles peninsulares; funcionarios y empleados del Gobierno, terratenientes y hacendados, grandes comerciantes e industriales, ejército y clero. También había algunos criollos ricos y los que aspiraban a conseguir algunos honores y prebendas del Gobierno de la Metrópoli (27). Por otra, el grupo liberal, en cuyas filas militaba el grueso de la población criolla; pequeños comerciantes y artesanos, maestros, pequeños terratenientes, además de la mayor parte de los intelectuales del país. Aquí deben incluirse algunos peninsulares que por convicción abrazaron la causa reformista en Puerto Rico (28).

No existiendo aún estructura formal de partidos, ni programas ni credos u orientaciones, se hacía difícil concretar la propaganda de las respectivas tendencias. Pese a todo, se llevó a cabo una activa propaganda por medio de hojas volantes y artículos en diversos periódicos; también se celebraron algunas reuniones, comenzando los conservadores con la que tuvo lugar el día 21 de febrero de 1869 en el Ayuntamiento de San Juan y a

la que acudieron "todos los electores, el Ejército, la marina, los empleados de Hacienda y demás civiles, las artes, las ciencias, el clero alto y parroquial de todos y cada uno de los pueblos de la circunscripción" (29). Posteriormente llevaron a cabo otras reuniones en el resto de la isla.

Por su parte, los liberales intentaron llevar a cabo varias reuniones, pero el Gobernador impidió su celebración con diferentes pretextos y artimañas (30).

Ya hemos mencionado que el día 18 de febrero el Gobernador publicó una Circular ordenando la exclusión de las listas a todos los deudores de fondos públicos. Esta medida, que tenía por base el apartado 6º del Decreto sobre Sufragio universal de 9 de noviembre de 1868, ocasionó el que muchos profesionales y pequeños terratenientes y algunos industriales y comerciantes que simpatizaban con las ideas liberales quedasen excluidos de las listas (31). Sin embargo, los liberales no se dieron por vencidos, si bien ante el temor de no conseguir ninguna candidatura en las elecciones, lanzaron la idea de una coalición con el grupo conservador. La propuesta fue recogida por el periódico reformista "El Porvenir" en un artículo editorial (32). A los pocos días prestaba su apoyo a la misma idea D. Román Baldority de Castro, líder del grupo liberal. El propósito de la coalición era conseguir que en las Cortes estuvieran representadas todas las tendencias políticas de la isla y terminaba así: "Liberales y conservadores: votad unidos en un mismo espíritu de alta concordia, de abnegación y de fraternidad verdadera" (33). Pero los conservadores no aceptaron la coalición, sintiéndose más fuertes que sus opositores y viendo en la propuesta un síntoma de la debilidad del grupo liberal.

D.- Los resultados.-

Del día 30 de mayo al 4 de junio se llevaron a cabo las elecciones, que se desarrollaron con bastante tranquilidad; no obstante, algunos periódicos de tendencia liberal denunciaron ciertos manejos de las autoridades, sobre todo en la Circunscripción tercera - Ponce y Mayaguez - en donde se llevaron

a cabo varias detenciones de supuestos separatistas. También se alegó que los oficiales del vapor del Gobierno "Sirena" votaron en Mayagüez, después de haberlo hecho el día anterior en San Juan (34.).

De los 11 diputados, siete eran de tendencia conservadora y los otros cuatro de tendencia liberal. En cuanto al reparto por circunscripciones, los conservadores sacaron todos sus candidatos en la primera -Capital- y tres de los cuatro en la tercera -Mayagüez- y Ponce-, mientras que los liberales triunfaban por completo en la segunda -Aguadilla, Arecibo, y uno de sus candidatos, D. José Escoriza y Cardona, salía también por la segunda. Por esta razón hubo de celebrarse posteriormente elección parcial y hecha la correspondiente convocatoria el 27 de enero de 1870, se llevó a cabo la elección durante los días 26 a 28 de febrero (35). Resultó triunfador con apretado margen de votos el candidato liberal, D. Román Baldorioty de Castro, frente al candidato conservador, el peninsular D. Carlos Navarro Rodrigo (36). Este último, patrocinado por el Duque de la Torre, había recibido el endoso del general Sanz, que trabajó personalmente en su candidatura (37).

En esta elección parcial tanto los conservadores como los liberales se echaron en cara numerosas acusaciones de malas artes electorales. Así, en carta dirigida por el Gobernador al Presidente del Consejo de Ministros, decía a este respecto:

"En resumen, una prueba evidentísima de la desafección de un número considerable de naturales de este país está en la lucha titánica empeñada en la tercera circunscripción durante el periodo electoral.

El soborno, la amenaza, la difamación, todos los medios a que se apela en los países más corrompidos para lograr el triunfo de una candidatura en las urnas, se han empleado aquí para ver sentado en el Congreso de Diputados al radical D. Román Baldorioty y de Castro, a quien la opinión pública designa como jefe de los separatistas, demostrando así descaradamente sus aspiraciones de independencia" (38).

Por su parte, los periódicos liberales de la isla

acusaban al Gobernador de excluir arbitrariamente de las listas electorales a elementos liberales, y a los conservadores de tratar de confundir la opinión pública, presentando a Navarro Rodrigo como un hombre de ideas progresistas y partidario de las reformas (39).

E.- Comentarios.-

Tanto el proceso electoral como los resultados de esta primera consulta al cuerpo electoral, después de 32 años sin elecciones, contradijeron rotundamente los temores expresados por el Gobierno. En primer lugar, porque quedó demostrado que había en la isla una serie de hombres perfectamente preparados para llevar a cabo un proceso democrático de este tipo; en segundo, porque el proceso se llevó a cabo en un ambiente de orden y participación altamente satisfactorios, a pesar de estar aún muy cercanos los sucesos revolucionarios de septiembre del año anterior, sucesos a los que tanto temían algunos diputados de la península y los elementos conservadores de la propia isla (40). Finalmente, porque Puerto Rico contaba ya con una prensa periódica que, si no era todavía muy nutrida, se caracterizaba por su ardor, combatividad y entusiasmo ante los acontecimientos políticos.

Los resultados nos muestran una mayoría conservadora casi en la proporción de dos a uno, pero al mismo tiempo, una desigual distribución, o lo que es lo mismo, una concentración tanto de las mayorías conservadoras como de las liberales. Esta distribución prefigura lo que será posteriormente una constante en los resultados: mayorías conservadoras en la zona norte y liberales en la parte sur.

La inexperiencia y falta de una campaña metódica de propaganda electoral queda demostrada por la gran cantidad de personas que obtuvieron votos y por los errores cometidos al escribir los nombres de los candidatos, prueba de que algunos de ellos no eran muy conocidos. Hemos contado más de cien candida-

tos que obtuvieron votos, si bien es cierto que la mayor parte de ellos no pasó de dos o tres.

Finalmente, algunas consideraciones sobre el censo electoral. El Decreto de 14 de diciembre de 1868, enmendado por el de 10 de febrero de 1869, exigía una cuota contributiva bastante elevada, sin que esta exigencia viniera templada por la admisión del concepto de capacidades. Puerto Rico tenía en 1869 612,233 habitantes; excluyendo de esta cantidad las personas que no podrían votar de ninguna manera: menores, mujeres, esclavos y extranjeros residentes, podríamos calcular en 200,000 el número de electores, si las condiciones hubieran sido las mismas que en la Península, es decir, con sufragio universal. Pero al introducir el censo, esa cantidad quedó reducida a 3,718 personas, cifra que representaba el 0.60 % de la población total (41).

NOTAS

- 1.- Tuñón de Lara, Manuel. Op.Cit., pág. y sgts.
- 2.- Fernández Almagro, Merchor: "Historia política de la España contemporánea" (Madrid, Alianza Editorial, 1969), págs. 14 y 15
- 3.- El día 10 de octubre de 1868 había comenzado en Cuba un movimiento secesionista de gran envergadura, que ha pasado a la historia con el nombre de "El Grito de Yara", capitaneado por Céspedes, culto y rico propietario de Cuba. Cf.: Carr, Raymond. Op.cit., pág. 300. Por este motivo, y de acuerdo con un artículo adicional al Decreto de 28 de enero de 1869, se aplazó la celebración de elecciones para diputados en Cuba hasta que terminara la guerra, cosa que sucedió diez años más tarde mediante la Paz del Zanjón. Cf.: Labra, Rafael María de: "La República y las libertades de Ultramar" (Madrid, Establecimiento Tipográfico de Alfredo Alonso, 1897), pág. 65. También, del mismo autor: "América y la Constitución de 1812" (Madrid, Tipografía del "Sindicato de Publicidad", 1912) pág. 456.
- 4.- La Elección general de Mayo de 1873 se llevó a cabo en Puerto Rico de acuerdo con el sistema que hemos denominado "sufragio censitario mínimo directo", fórmula que solamente se aplicó en aquella ocasión.
- 5.- Labra, Rafael María de: "Mi primer discurso parlamentario" (Madrid, Tipografía "Sindicato de Publicidad", 1915), pág. 19
- 6.- Labra, Rafael María de: "La República...", pág. 61
- 7.- Ibidem y también del mismo autor: "La pérdida de las Américas" (Madrid, Tipog. del Sindicato de Publicaciones, 1912), pág. 240.
- 8.- Citado por Bolívar Pagán: "Procerato puertorriqueño del Siglo XIX" (Barcelona, s.e., 1971), pág. 140
- 9.- Labra, Rafael María de: "La República...", págs. 63 y 64
- 10.- Gamoneda, Antonio. Op.Cit., pág. 245 y sgts.

- 11.- Ibidem, págs. 250 y 251
- 12.- Gaceta de Puerto Rico, 1869, (28 de enero) N° 28
- 13.- En 1869 tenía Puerto Rico 600,233 habitantes; si la relación hubiera sido como en la Península de 1 diputado por cada 45,000 habitantes, le hubieran correspondido elegir 13 diputados, y no los siete que le asignaba el artículo 1°. Posteriormente se corrigió esta irregularidad, aunque sólo se le asignaron 11.
- 14.- Archivo Histórico Nacional. Sección de Ultramar. Legajo 5111/31-32
- 15.- Ver distribución de la isla en Anexo I
- 16.- Ibidem
- 17.- Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes (1869-71), pág. 6,815. Curiosamente, una de las "exposiciones" que se enviaron al Gobierno Provisional en los últimos meses de 1868 y que llevaba la firma del Excmo. Sr. Conde de Vega-mar, decía lo siguiente: "El Conde de Valdemar en comunicación de 5 de diciembre manifiesta que consideraba peligroso el hacer extensivo a la isla de Cuba el Sufragio universal y que creía más conveniente se concediese el derecho electoral a todo español blanco, nacido o vecindado en la Isla, que pagase una cuota módica de contribución, por ejemplo 25 duros, on en todo caso que se dejase a la discreción del G.S.C. electo el fijar allí la cuota que creyese prudente". Biblioteca Nacional. Sección de Manuscritos: Ultramar, Legajo 18634, N°. 27. El subrayado es nuestro. Para una justificación del censo diferencial, Ct. Miguel Blanco Herrero. Op.Cit., págs. 547 a 551
- 18.- Archivo Histórico Nacional. Sección de Ultramar. Legajo 5111/31-32. También, Gaceta de Puerto Rico, 1869 (28 de enero), No. 28
- 19.- Archivo Histórico Nacional. Sección de Ultramar. Legajo 5111/31-32
- 20.- Ibidem
- 21.- Biblioteca Nacional. Sección de Manuscritos: Ultramar.

Legajo 18634, No. 27. Se recogen todas ellas relativas a Cuba y Puerto Rico.

- 22.- Hostos, Eugenio María de: Obras Completas (La Habana, , 1939), Tomo I, pág. 95
- 23.- Archivo Histórico Nacional. Sección de Ultramar. Legajo 5111/31-32
- 24.- Gaceta de Puerto Rico, 1869 (13 y 18 de febrero), Nos. 19 y 21
- 25.- Archivo Histórico Nacional. Sección de Ultramar. Legajo 5110
- 26.- El artículo 108 del Título X se refería a las provincias de Ultramar y estaba redactado en la forma siguiente: "Las Cortes Constituyentes reformarán el sistema actual del gobierno de las provincias de Ultramar, cuando hayan tomado asiento los diputados de Cuba o Puerto Rico, para hacer extensivas las mismas, con las modificaciones que se creyeren necesarias, los derechos consignados en la Constitución". La condición recogida en este artículo dió lugar posteriormente a largos debates en las Cortes, siendo utilizada por los que se oponían a las reformas para no considerarlas hasta la llegada de los diputados de Cuba. Es posible pensar que si hubieran estado ya presentes los representantes de Puerto Rico al discutirse este artículo, su redacción final hubiera sido diferente.
- 27.- La publicación periódica más antigua de Puerto Rico era la Gaceta del Gobierno, que comenzó a publicarse en 1806 y salía los miércoles y sábados. En 1823 comenzó a salir diariamente. Cf.: "El periodismo en Puerto Rico; bosquejo histórico desde su iniciación hasta el 1930", (La Habana, Imprenta Ucar, García y Cía., 1941), pág. 393. Esta obra constituye una fuente extraordinaria de datos acerca de la prensa periódica de Puerto Rico durante todo el siglo XIX.
- 28.- Labra, Rafael María de: "La pérdida de las Américas", (Madrid, Tipografía del Sindicato de Publicaciones, 1912), págs. 184 y 185. También, Cruz Monclova, Ladio. Op.Cit., Tomo II, pág. 68.
- 29.- Pagán, Bolívar. Op.Cita., págs. 152 y 153. Rafael María de Labra coloca al lado de estos dos grupos, el de los separatistas, del cual comenta: "En

Ultramar, pues, había isurgentes, por lo general entre los criollos, y singularmente en las clases de letrados y hombres de estudios, formados como decía Humbolt de vuelta de América "por los franceses e ingleses". Y a este grupo se acercaba por instinto sin darse de ello cuenta, cierta parte del clero parroquial, harto desatendido y hasta maltratado en Ultramar". Cf.: "La pérdida de las Américas", pág. 184 y 185.

30.- Algunos autores ven en esta reunión el acto fundacional del que luego se llamaría Partido Liberal Conservador. Vid.: Ribes Tovar, Federico: "Historia cronológica de Puerto Rico", (New York, Plus Ultra Educational Publishers, Inc., 1973), pág. 313. También, Gómez, Gualberto y Sendras Burín, Antonio: "Bosquejo de la Historia de Puerto Rico", (San Juan, Editorial San Juan, 1972), pág. 104.

31.- Biblioteca Nacional de Madrid. Sección de Manuscritos. Ultramar. Legajo 20128. En carta dirigida por el Gobernador de Puerto Rico, general Sanz, al Presidente del Consejo de Ministros, general Serrano, le decía: "El domingo pasado citaron por medio de la prensa con el nombre de Liberales puros, los que con este manto quieren ocultar sus ideas filibusteras, por lo que indiqué, desde aquí, acudiesen a dicho llamamiento todos los electores que son buenos españoles, dando por resultado que al ver quinientos votantes que no eran filibusteros, desistieron por medio de aviso de la expresada reunión... Tengo aviso que tratan de provocar otra reunión con el nombre de republicanos; les buscaré otra treta y serán derrotados también. Así pues, no tenga U. cuidado que yo los conozco bien; me he hecho mucho partido y les tengo puesto el pie encima".

32.- La cuestión de las listas electorales fue, sin duda, la más ardua de estas elecciones, dado que era la primera vez que se confeccionaban. Hemos encontrado multitud de expedientes con motivo de la no inclusión en las listas de numerosos individuos, la mayor parte de ellas en concepto de incapacidades. Cf.: Archivo Histórico de Ponce (P.R.), Legajos 70, 71 y 72.

33.- "El Porvenir", 1869. N° 40-

- 34.- Ibidem, N° 43
- 35.- "La Razón", 1869 N°s 17, 22 y 47.-
- 36.- Coll y Toste, Cayetano: "Boletín Histórico", Tomo II, pág. 189.
- 37.- Archivo de las Cortes. Sección de Expedientes. Legajo 61 N° 18. Baldorioty obtuvo 579 votos, frente a 481 de Navarro Rodrigo.
- 38.- Biblioteca Nacional de Madrid. Sección de Manuscritos. Ultramar. Legajo 20128. En carta del general Sanz a López de Ayala dice ha trabajado en la excursión que ha hecho a los departamentos de la isla, la candidatura de D. Antonio (sic) Navarro Rodrigo a instancia del Duque de la Torre.
- 39.- Ibidem. Subrayado en el original.
- 40.- Ambas imputaciones no carecían por completo de veracidad. Baldorioty se había declarado partidario de la autonomía para Puerto Rico, si bien por el momento favorecía una política de reformas para la isla que la colocase a la altura de la Metrópoli. También era cierto que Navarro Rodrigo había denunciado el peligro que entrañaba para la conservación de las Antillas la existencia en ellas de un régimen de fuerza, pero después había ido evolucionando hacia posiciones más moderadas.
- 41.- En efecto; en el mes de septiembre de 1868 se producía en Puerto Rico la más extensa y mejor organizada revolución contra el Gobierno preparada hasta ese momento. Descubierta por una delación, los conjurados no pudieron terminar sus preparativos ni contar con el factor sorpresa, por lo que fueron batidos con facilidad por las fuerzas del Gobierno. Juzgados los principales jefes de la misma, varios de ellos fueron condenados a muerte, condena que les fue conmutada y que más adelante quedó sin efecto por el Decreto de amnistía expedido por el Gobierno Provisional, con motivo de la Revolución de Septiembre. Cf.: CRUZ MONCLOVA, Lidio. Op.Cit., Tomo I, págs. 440 y sgts.
- 42.- Cifras obtenidas de los resultados.

ANEXO I

DIVISION TERRITORIAL DE PUERTO RICO
a efectos electorales

Decreto del Gobierno Provisional de fecha 14 de Diciembre de 1868

- 1^a Circunscripción: San Juan.- Bayamón.- Carolina.- Dorado.-
Guainabo.- Loiza.- Rio Grande.- Rio Piedras.- Toa baja.-
Trujillo alto.- Caguas.- Aguas Buenas.- Cayey.- Cidra.-
Gurabo.- Hato Grande.- Juncos.- Sabana del Palmar (Comerio)
- 2^a Circunscripción: Arroyo.- Maunabo.- Patillas.- Humacao.-
Ceiba.- Pajardo.- Luquillo.- Naguabo.- Las Piedras.-
Yabucoa.- Vieques.- Arecibo.- Barros.- Camuy.- Ciales.-
Corozal.- Hatillo.- Manatí.- Morovis.- Naranjito.- Que-
bradillas.- Toa Alta.- Utuado.- Vega Alta.- Vega Baja.-
Aguadilla.- Aguada.- Isabela.- Lares.- Moca.- Pepino (San
Sebastián).
- 3^a Circunscripción: Mayagüez.- Añasco.- Cabo Rojo.- Rincón.-
Sabana Grande.- San Germán.- Ponce.- Adjuntas.- Aibonito.-
Barranquitas.- Coamo.- Guayanilla.- Juana Díaz.- Peñuelas.-
Salinas.- Santa Isabel.- Yauco.
-

Puente: A.H.N. - Sec. de Ultramar.- Legajo 5111/31-32

[illegible]

(Decreto de 14 de Diciembre de 1868)

<u>CIRCUNSCRIPCION</u>	<u>DISTRITOS</u>	<u>HABITANTES</u>	<u>DIPUTADOS</u>	<u>DIPUTADOS *</u>
CAPITAL	Capital	202,881	2	4
	Naguabo			
	Guayama			
ARECIBO	Arecibo	197,853	2	3
	Aguadilla			
MAYAGUEZ	Mayagüez	211,708	3	4
	Ponce			
	TOTALES	612,442	7	11

FUENTES: Archivo Histórico Nacional. Sección de Ultramar, Legajo 5111/31-32. Gaceta de Puerto Rico, 1869 (28 de enero).

* Aumento en el número de diputados por Circunscripción determinado por Decreto de 10 de febrero de 1869.

(1869)

<u>CIRCUNSCRIP.</u>	<u>POBLACION</u>	<u>ELECTORES</u>	<u>RELACION Hab/Elec</u>	<u>VOTANTES</u>	<u>ABST.</u>	<u>CANDIDATOS ELEGIDOS</u>	<u>VOTOS</u>
CAPITAL	202,881	1,511	134	1,035	31.5	VALDES LINARES, Manuel FERNANDEZ, José Ramón MACHICOTE, Juan Bautista PUIG, Juan Antonio	777 743 725 700
ARECIBO	197,853	834	237	631	24.3	HERNANDEZ ARVIZU, Juan A. ESCORIAZA, José María PADIAL, Luis Ricardo	390 381 373
MAYAGUEZ	211,708	1,373	154	914	33.4	ESCORIAZA, José María BECERRA DELGADO, Luis A. VAZQUEZ OLIVA, Francisco de P. PLAJA Y VIDAL, Sebastián	545 530 515 487
TOTALES	612,442	3,718	164 (M)	2,580	29.7 (M)		
MAYAGUEZ (parcial)		1,415		1,062	24.9	BALDORIOTY DE CASTRO, Román	579

FUENTE: Archivo de las Cortes. Sección de Expedientes, Legajo 61, número 18. Archivo Histórico Nacional (Madrid). Sección de Ultramar, Legajo 5111/31-32. Gaceta de Puerto Rico, 1869, (28 de enero).

CUADRO II

(1869)

RESULTADOS POR PARTIDOS

CONSERVADORES:

VALDES LINARES, Manuel.....	Capital
FERNANDEZ MARTINEZ, José Ramón.....	"
MACHICOTE IRIZARRY, Juan Bautista.....	"
PUIG Y MONSERRAT, Juan A. (Pbro.).....	"
VAZQUEZ OLIVA, Luis Antonio.....	Mayagüez
BECERRA Y DELGADO, Luis Antonio.....	"
PLAJA Y VIDAL, Sebastián.....	"

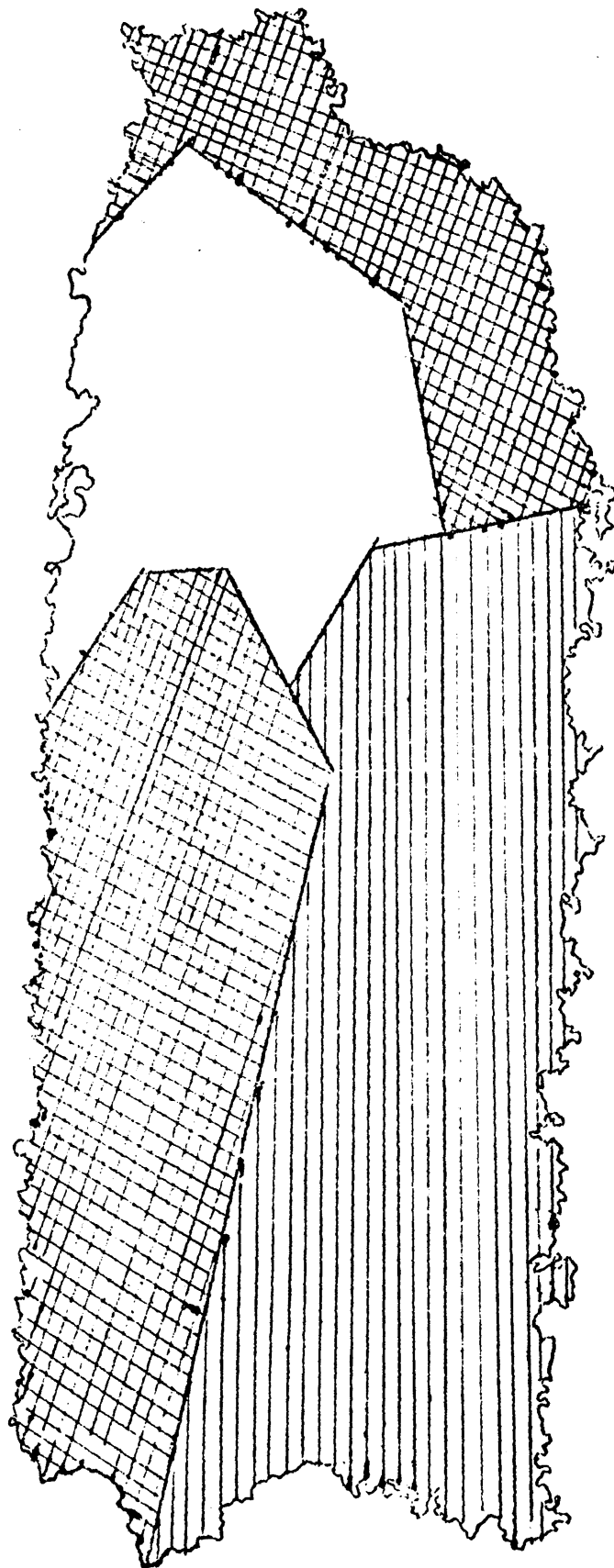
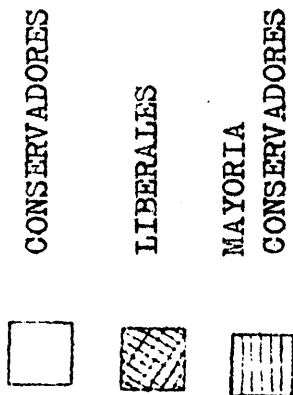
LIBERALES:

PADIAL Y VIZCARRONDO, Luis.....	Arecibo
HERNANDEZ ARVIZU, Juan.....	"
ESCORIAZA CARDONA, José de.....	"
ESCORIAZA CARDONA, José de.....	Mayagüez

- - - - -

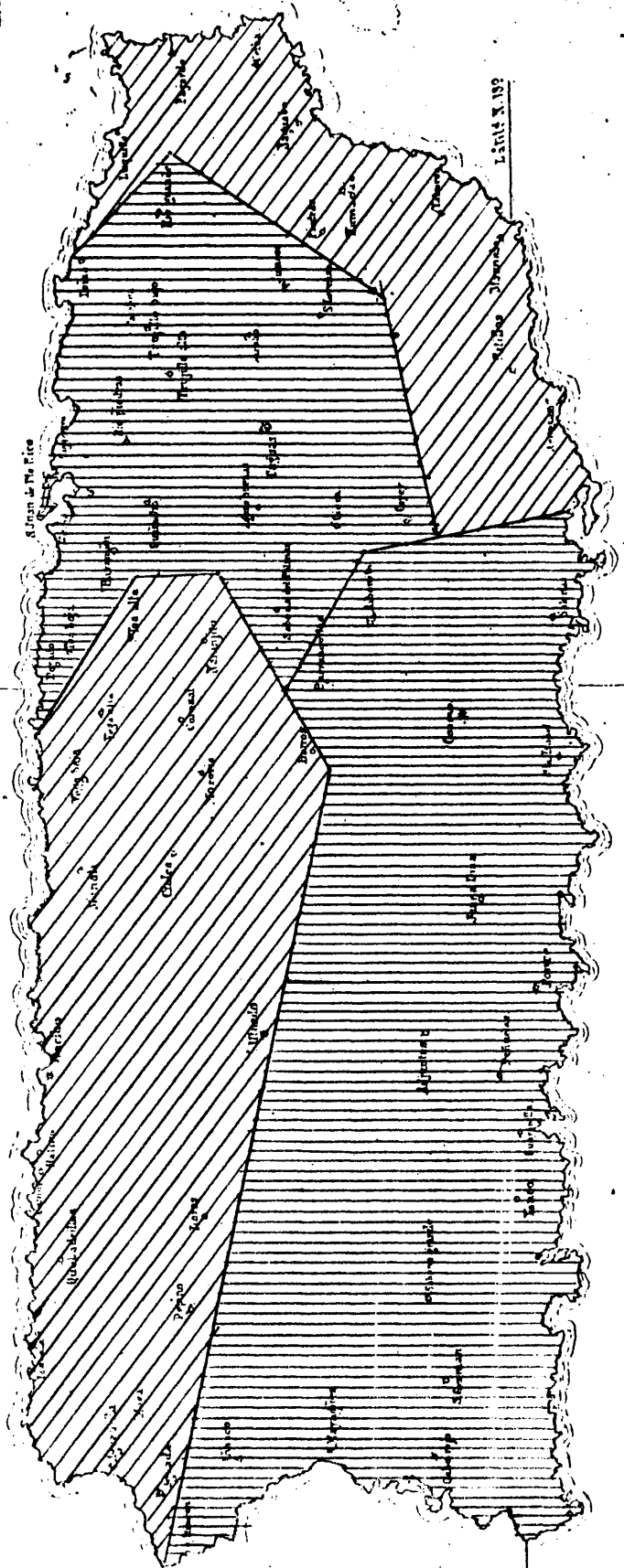
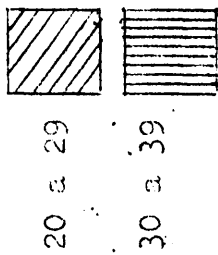
MAPA ELECTORAL

(1869)



2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

(6901)

Media: 29.73 %

2.2. LA ELECCION GENERAL DE 1871

A.- La situación política en la Península.-

1. La Proclamación del Duque de Aosta como Rey de España

En junio de 1869 Serrano era elegido Regente y Prim nombrado jefe de Gobierno. A partir de octubre del mismo año su mayor preocupación será la de encontrar un rey que fuera aceptable para las principales tendencias políticas del país. Se inicia, en consecuencia, una peregrinación por las diferentes Cortes de Europa, negociando las condiciones y los candidatos, parte de forma pública y parte en secreto.(1)

Después de muchas gestiones, Prim propone a las Cortes la candidatura del Duque de Aosta; el 16 de noviembre las Cortes aceptaban su candidatura, proclamándolo rey con el nombre de Amadeo I.

No careció de dificultades la instauración de la nueva dinastía: a la exigua mayoría que obtuvo su candidatura en las Cortes -191 votos de 309 emitidos- se añadió lo que en opinión de los historiadores marcaría el fracaso "a priori" de la nueva dinastía: la muerte de Prim ocurrida el 30 de diciembre, suceso que privaría a Don Amadeo de su apoyo más decidido.

El día 2 de enero de 1871 hacía su entrada en Madrid Amadeo I e inmediatamente prestaba juramento ante las Cortes. Al día siguiente éstas se disolvían, cumplida su etapa constituyente (2). El Gobierno dimite y Don Amadeo llama a Serrano para que forme otro en el que entrasen elementos de la coalición revolucionaria: progresistas, unionistas y demócratas. Serrano lo forma el 4 de enero, y al mes siguiente expide el decreto convocando a Cortes ordinarias (3). Las elecciones se fijaban para comenzar el día 8 de marzo y la apertura de las Cortes para el 3 de abril.

B.- La situación político-partidista en Puerto Rico

1.- La aparición de los primeros partidos políticos.-

En el capítulo anterior hemos hablado de la concrección, ante el proceso electoral de 1869, de las tendencias políticas de Puerto Rico en dos grupos netamente diferenciados: el conservador y el liberal. Ciertamente que ambas tendencias no nacían en ese momento, sino que, como actitudes, arrancaban de una etapa anterior.

Podemos fijar la aparición de las tendencias políticas de la isla hacia 1810, coincidiendo con un proceso paralelo que se produce en la Península, ante el anuncio de la convocatoria de Cortes. Poco más adelante se consolida en el seno de las propias Cortes, al discutirse el proyecto de Constitución y el resto de la obra legislativa, quedando desde ese momento delineadas las dos tendencias tanto en la Península como en Puerto Rico.

Al igual que en la Península, una de estas tendencias se inclinó en la isla desde el primer momento hacia el orden de cosas existente en la isla y se adhirió al régimen establecido intentando, si no perpetuar el "statu quo" colonial, sí, al menos, mantener a la isla en una situación de total dependencia respecto de la Metrópoli, a cambio de la consecución de ciertas ventajas de tipo económico o de la concesión de libertades meramente formales que, por otra parte, desaparecían al menor síntoma de agitación interior.

Frente a este grupo surgió otro que, asentado en las nuevas corrientes ideológicas de finales del siglo XIX, pretendía sustituir el antiguo orden político y social por otro nuevo, basado en un concepto diferente de las relaciones de poder. Juzgando que la raíz de los males que afligían a las colonias eran fundamentalmente el absolutismo y el centralismo, sus esfuerzos se encaminaron a destruirlos, solicitando una mayor participación de los naturales en su propio gobierno, en el

proceso de toma de decisiones, y una mayor diversificación de los centros decisorios.

En una colonia era relativamente fácil la aparición de estos dos grupos: uno al lado de la autoridad metropolitana y el otro al lado de los intereses del propio país, desde el momento en que éste toma conciencia de su personalidad y visualiza su existencia como algo diferente a la de la Metrópoli (4).

Inmediatamente, ambas tendencias acudieron a la formulación de argumentos típicos en que basar sus respectivas posturas: los conservadores, al concepto de desigualdad natural, reforzada en el caso de Puerto Rico por la relación colonial, la existencia de diferentes razas y muy distintos niveles culturales entre blancos peninsulares, criollos, negros libres y esclavos. Una situación como ésta de desigualdad racial y cultural se prestaba de maravilla para que las personas de tendencia conservadora apoyasen en ella el principio de autoridad, con el fin de "mantener la civilización contra la presión permanente que las masas incultas y bárbaras hacen sobre ella" (5). Desigualdad y autoridad serán, pues, los dos principios básicos de la tendencia conservadora en Puerto Rico.

Por su parte, la tendencia liberal partía del principio de la igualdad natural de todos los hombres, del que inferían como consecuencia lógica e inmediata que "si todos los hombres son iguales, ninguno puede mandar a los otros, a menos de estar encargado por el conjunto de la comunidad" (6). En el caso de los liberales de Puerto Rico aún aceptando este principio, estaban conscientes de que la institución de la esclavitud representaba en la isla un serio obstáculo al principio de la igualdad; por esta razón, sus primeros esfuerzos se encaminaron a lograr su abolición, como requisito "sine qua non" para un posterior desarrollo político y social de la isla (7).

Alarmados ante esta actitud que consideraban antipatriótica, los conservadores reaccionarán elaborando su slogan más tí-

pico y profusamente utilizado: "la libertad perdió las colonias" slogan que seguirán repitiendo con envidiable tesón y censurable falta de lógica hasta después del 98. Los liberales adoptarán, frente al mismo, su lema de que "sin más libertades, se perderán los restos del Imperio".

Posturas antagónicas, irreconciliables, que mantendrán totalmente distanciados primero a los grupos y posteriormente a los dos partidos; separados y enfrentados en una situación rayada en el conflicto. Por desgracia, todos los Gobernadores de la isla a lo largo del siglo XIX cometerán el error de tomar decidida postura ante los dos partidos, aunque con notable ventaja numérica a favor del conservador, dando así motivo para enajenarse la enemiga del otro partido. Este favoritismo oficial por una parte y la diferente legalidad electoral que tuvo Puerto Rico a lo largo de todo el siglo constituyeron las dos fuentes de discordia y de problemas político-partidistas. La consideración del abstencionismo como represalia por la política del Gobierno de la Península o por la actuación del Gobernador de la isla estuvo casi siempre presente en todas las asambleas de uno u otro partido; las amenazas públicas de no participar en las elecciones fueron numerosas y en tres de las elecciones uno los dos partidos no acudió a las urnas.

Estas son, a grandes rasgos, las características de los dos partidos políticos que, con algunos cambios de nombre y de contenido doctrinal, se extenderá a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX; falta por describir el nacimiento y organización de ambos partidos.

De los documentos y obras que hemos consultado parece desprenderse que ambos grupos iniciaron su etapa de organización simultáneamente, con motivo de las elecciones de 1869; grupos de conservadores y de liberales celebraron diversas reuniones con fines propagandísticos y de tanteo en cuanto a la posibilidad y viabilidad de su estructuración formal. Ya hemos aludido

a estas actividades en el capítulo anterior. Los conservadores, bajo los auspicios del Gobernador, general Sanz y Posse, se reunieron por primera vez en febrero de 1869 en los salones del Ayuntamiento de San Juan, y más adelante en otros lugares de la isla. Su jefe más destacado en estos primeros momentos fue D. Manuel Valdés Linares, que ocupó un escaño en el Congreso en la Legislatura de 1869-71.

2.- La fundación del Partido Liberal Reformista.-

Los liberales tuvieron dificultades para su organización, debido a las maniobras utilizadas por el Gobernador para impedir que celebraran reuniones, tachando a los organizadores de "filibusteros", "laborantes" y "separatistas encubiertos". Por este motivo, sus primeras reuniones fueron casi clandestinas. Pero en el mes de mayo de 1870 el general Sanz y Posse fue sustituido en el mando por el Mariscal de Campo D. Gabriel Baldrich Pallau, hombre de ideas más liberales; este hecho facilitó la labor de los liberales, que encontraron así un ambiente más propicio para su organización.

También en el caso de los liberales el motivo o causa próxima que les impulsó a la organización de sus fuerzas fue la convocatoria que hizo el Gobernador para la elección parcial de un diputado por la segunda Circunscripción, debido a la renuncia del incumbente, D. José Escoriaza Cardona (8). Reunidos alrededor de 150 electores liberales el día 20 de noviembre de 1870, nombraron un Comité Consultivo para fomentar la organización de comités locales en diversos pueblos de la isla y para atender y resolver las cuestiones políticas de interés común. Fue elegido presidente de dicho Comité el Dr. Gerónimo Goico Sabanetas; vocales D. José Julián Acosta, D. Nicolás Aldea, D. Julián Blanco y Sosa y D. José María Porrata; como Secretario D. José Francisco Díaz (9).

El día 24 de noviembre se reunió el Comité Consultivo para elaborar el programa del Partido, pero inmediatamente surgió en

el seno de este Comité una aguda discrepancia entre "asimilistas" y "autonomistas" (10). Como consecuencia de ello, el Comité se limitó por el momento a redactar un Manifiesto, publicado en "El Progreso" (11); en él se aclaraba que el nombre del Partido era "Liberal Reformista"; que en el mismo podían militar todos los que estuvieran de acuerdo con la política del Gobierno Provisional de la Península, el cual ya había comenzado a plantear reformas en la Administración de la isla, reformas que continuarían hasta equiparar en derechos a Puerto Rico con el resto de las provincias peninsulares. Finalmente hacía resaltar que el propósito del Comité Consultivo no era otro que el de apoyar al candidato liberal y aclarar todas las dudas al respecto.

Como fase final de la organización del Partido Liberal Reformista, el día 28 de noviembre adoptó su programa, que había sido redactado por D. Julián Blanco y Sosa (12). En dicho programa el nuevo Partido adoptaba oficialmente una postura favorable a la tendencia asimilista, aunque inclinándose hacia el autonomismo en las cuestiones administrativas (13).

Hemos dicho ya que la asimilación era la política adoptada por el Gobierno Provisional para los territorios de Ultramar; sin embargo, ambas posturas diferían en cuanto al desarrollo de dicha tendencia, puesto que mientras la del Gobierno se encaminaba a lograr una eventual incorporación de Puerto Rico a la Metrópoli en pie de igualdad con el resto de las provincias, la idea de los liberal-reformistas consistía en ir logrando paulatinamente una mayor descentralización administrativa que pudiera conducir con el tiempo a una total autonomía. Tal era, por ejemplo, la postura del diputado José de Celis Aguilera, de Pablo Morales, de Juan Hernández Arvizu y Manuel Corchado Juarbe en la isla, y la de Rafael María de Labra en la Península (14). La postura autonomista contaba con pocos adeptos en estos momentos, pudiendo considerar como tales únicamente a D. Román Baldorioty

de Castro y a D. Luis Padial y Vizcarrondo (15).

3.- La fundación del Partido Liberal Conservador.-

Por su parte, el sector conservador no lograba encontrar una fórmula que sirviese de núcleo aglutinante a los españoles peninsulares y a los criollos que no aceptaban el programa del Partido Liberal Reformista. Por otra parte, en el seno de este grupo se habían perfilado también dos tendencias netamente diferenciadas: los conservadores "puros", defensores a ultranza del "statu quo" colonial y que no estaban dispuestos a admitir más reformas que las puramente encaminadas a perfeccionar el sistema económico de la isla, y los conservadores moderados, los cuales, a pesar de que aceptaban en principio el régimen establecido, entendían y admitían la necesidad de introducir ciertas reformas políticas y administrativas, con el fin de lograr una equiparación de la isla al resto de las provincias de la Península.

Fue este último grupo el que primero se puso en marcha para lograr la organización de las huestes conservadoras, publicando el día 25 de noviembre de 1870 un Manifiesto, en el que se invitaba a una reunión que se celebraría el 27, a todas las personas que estuviesen dispuestas a aceptar los cuatro puntos siguientes:

"1.- aceptar ser conveniente que se trate y resuelva sobre todas las reformas en los ramos de la Administración política, económica, administrativa y social de la isla.

"2.- aceptar el principio de asimilación en política con la Madre Patria, en cuanto sea posible, atendida la situación geográfica y el estado social hoy de esta provincia.

"3.- aceptar el mismo principio de asimilación en la gestión económico-administrativa de los pueblos, a que obedecen igualmente en esencia las leyes de Gobierno, Diputación Provincial y Municipal en vías de planteamiento, si bien con la mayor suma de facultades concedidas a dichas corporaciones o que convenga concederse, según lo exija el bien general.

"4.- aceptar la necesidad de que se resuelva cuanto antes

el problema social, sin obedecerse a principios exagerados, conciliándose en cuanto sea posible los intereses generales y particulares y el porvenir de los protegidos" (16).

También se cursó invitación al Comité Consultivo Liberal para estudiar la posibilidad de una fusión de ambos grupos, en caso de que aceptara los cuatro puntos anteriores. Aunque efectivamente había cierta semejanza de principios entre las bases programáticas de ambas tendencias, las del grupo conservador eran más vagas e imprecisas que las de los reformistas. Fundándose en este motivo, los reformistas rechazaron el ofrecimiento (17).

Los moderados celebraron una reunión en los salones de la Intendencia, en la Capital, encaminada a lograr la creación de un partido que hiciera suyos e intentara conseguir los cuatro puntos del Manifiesto del 25 de noviembre. Sin embargo, el intento fracasó totalmente por la intervención en contra de varias personas de tendencia conservadora radical, las cuales no veían con buenos ojos la posibilidad de que se crease otro partido reformista, aunque fuese moderado (18).

No arredró este fracaso a los dirigentes del grupo moderado quienes, aprovechando la convocatoria para las elecciones de diputados provinciales -17 de enero de 1871- volvieron a convocar otra reunión en el mismo lugar, con el propósito de organizar sus fuerzas para dichas elecciones. Sin embargo, nuevamente Valdés Linares sufrió una amarga derrota, pues a la reunión acudieron en mayoría conservadores "puros", logrando que se aprobase una propuesta de abstención electoral. Como consecuencia de esta nueva derrota, Valdés Linares quedó prácticamente marginado del sector conservador (19).

Finalmente, los conservadores "puros" celebraron una reunión en San Juan, en marzo de 1871, para tratar de su organización antes de las elecciones de diputados a Cortes. En esta ocasión sí lograron ponerse de acuerdo todos los asistentes y

se eligió un Comité Central, que tendría a su cargo la dirección del nuevo partido, cuya denominación acordada fue la de "Partido Liberal Conservador". D. José Ramón Fernández Martínez fue elegido Presidente de dicho Comité, con D. Bartolomé Borrás como Vicepresidente; D. Pablo Ubarri Capetillo, D. José Cuchí, D. Manuel Fernández Capetillo, D. Romualdo Chávarri, D. Antonio Arzuaga, D. Eduardo Palau, D. Miguel Sáinz, D. Gerardo Soler, D. Francisco Barceló y D. José María Caracena como vocales y D. Francisco Larroca y D. Fermín Martínez Villamil como Secretarios (20).

Acto seguido, el Comité Central aprobó una serie de medidas, entre las que destacaban la expulsión de D. Manuel Valdés Linares del seno del nuevo partido, junto con algunos de sus correligionarios; la compra por D. Pablo Ubarri del "Boletín Mercantil" para convertirlo en órgano oficial del partido; la publicación de un Manifiesto con el programa del partido y finalmente, el acuerdo de participar en las elecciones de diputados a Cortes (21).

De esta forma se constituyeron los dos primeros partidos de Puerto Rico. Ambos tuvieron una larga existencia, que en el caso del Partido Conservador se extenderá hasta 1898, sin que cambiara apenas ni su contenido doctrinal ni su ejecutoria.

C.- La convocatoria de elecciones en Puerto Rico.- La campaña electoral.-

Desde el mes de marzo de 1871 comenzaron a publicarse en la isla una serie de decretos y circulares del Gobernador, relacionados con las elecciones de diputados. Así, el día 18 de marzo insertaba la Gaceta un decreto sobre formación de listas electorales y una nueva distribución de la isla en distritos, que venía a sustituir a la anterior de circunscripciones (23). El 1 de

abril insertaba un "Reglamento para la elección de Senadores y Diputados a Cortes de la Isla de Puerto Rico", que llevaba fecha del 26 de marzo (24). Algunos días después aparecía una Circular conteniendo una serie de reglas para acelerar el proceso de formación de las listas electorales (25).

Sin embargo, el proceso de formación de las listas fue muy lento, ya que hasta el mes de junio no expidió el Gobernador el Decreto de convocatoria de las elecciones: con fecha 3 de ese mes y de acuerdo con el artículo 1º adicional de la Ley de 1 de enero de 1871, el Mariscal Baldrich fijaba las elecciones para comenzar el 20 de junio (26). De acuerdo con el Decreto de convocatoria, las elecciones deberían regirse por el Decreto del Gobierno Provisional de 14 de diciembre de 1868, luego convertido en Ley; por el de 4 de febrero de 1871 y por el Decreto de 1 de abril del mismo año; éste último enmendaba algunos extremos del Decreto de 14 de diciembre, que consistían fundamentalmente en el aumento del número de diputados por la isla de once a quince; una nueva distribución del territorio insular, de tendencia conservadora, en quince Distritos uninominales, en lugar de la anterior en tres Circunscripciones plurinominales, y finalmente, una rebaja en la cuota contributiva que daba derecho al voto: 16 escudos de contribución directa, en lugar de 50 (27).

1.- El Partido Liberal Conservador.-

Desde el momento en que comenzaron a aparecer en la Gaceta los primeros decretos electorales, los periódicos de tendencia conservadora mostraron en sus artículos una profunda preocupación ante lo que no dudaban en calificar como actitud "imprudente" del Gobierno metropolitano, del Ministro de Ultramar y del Gobernador de la isla. En este sentido se pronunciaba, por ejemplo, "El Correo de las Antillas", revista de tendencia conservadora que acababa de fundarse en Madrid. En su segundo número y bajo la firma de D. Ignacio Guasp, insertaba un artículo en el

que se mostraba contrario a las recientes reformas del Gobierno que ampliaban la base electoral en la isla, por considerar dicha ampliación como una medida sumamente arriesgada:

"Con un censo electoral tan prudente como el del Decreto de 14 de diciembre de 1868, el Partido Conservador, es decir, el partido español, triunfó en dos de los tres distritos electorales, aunque después, a consecuencia de la doble elección del Sr. Escoriza, los reformistas continuaron, aprovechándose de la circunstancia de ser para ellos de grandes simpatías el distrito en que ocurrió la vacante, sacar al Sr. Baldorioty, encarnación genuina de la idea más avanzada de Puerto Rico.

De los 11 diputados que envió entonces la isla, solo fueron elegidos por el Partido Conservador 7, y ese número sufrió un descalabro con el quiebro del Sr. Valdés Linares, que no respondió a la confianza que en él depositaron sus electores.

Compárese ahora el nuevo decreto con el antiguo y se verá que por lo pronto se han aumentado cuatro diputados y vendrán de nuevo cuatro senadores, para que no falten en ninguna Cámara los discursos lastimeros y para que la frase "queremos a España, pero a la España liberal", se esculpa en las salas de sesiones a fuerza de herir las bóvedas con sus apasionados acentos" (28).

En otro artículo, escrito por el mismo Guasp, se planteaba la cuestión más o menos en los mismos términos:

"Hay dos enemigos que combatir en América: los enemigos francos y los encubiertos e hipócritas a quienes se ha designado con el gráfico nombre de "laborantes". Para los primeros, nos sobran nuestros intrépidos soldados y bizarros voluntarios; para derrotar a los segundos necesitamos al frente del Ministerio de Ultramar un hombre ilustrado, enérgico y decidido a sacrificar su cartera antes que ceder un ápice a encubiertas o maliciosas influencias. Para triunfar de los primeros tenemos hombres y fusiles; para poner en fuga a los segundos bastarían pocos, muy pocos decretos" (29).

Abundando en el mismo tema, el "Boletín Mercantil", órgano oficial del Partido Liberal Conservador, decía en un artículo editorial del día 6 de junio:

"Si por una reacción irreflexiva hacia las instituciones más avanzadas, huyendo del sistema colonial, nos lanzamos sin gradación, sin preparación, en el sistema radical democrático transformando así súbitamente todo nuestro organismo político; si abandonamos todo lo práctico, tod

lo conocido, para lanzarnos tras el falso ideal que ha trastornado la Francia, que ha despoblado y empobrecido a Méjico, que ha envilecido a Santo Domingo y ensangrentado a Cuba; si la marcha progresiva que ha costado dos siglos a Inglaterra la queremos nosotros hacer en un día, entonces no culpemos a nadie si nos hundimos en el remolino revolucionario que trata de absorber, aniquilándolas todas las sociedades; en este remolino fatídico que lo mismo tiende a arrebatarnos tronos que amenaza arrebatarnos la religión de nuestros padres" (30).

Después de pintar un cuadro bastante oscuro de las consecuencias que ha tenido en Europa la revolución, incluida la Península, y de las que Puerto Rico ha logrado verse libre por fortuna, pasa el artículo a hacer una especie de resumen de lo que constituyan las aspiraciones del Partido Conservador:

"No va el Comité a hacer un nuevo programa económico-político. Consignado tiene en su manifiesto del día 23 de marzo último que reconoce conveniente la descentralización municipal, la propagación y organización de la enseñanza, la construcción de caminos, la creación de un gran banco (cuya constitución sería facilísima tan pronto como cesare la incertidumbre que retrae un tanto los capitales); todas las mejoras que contribuir puedan al bienestar de esta provincia en lo económico, en lo político, la Constitución de la Monarquía española con las modificaciones que las especiales circunstancias de este país hagan necesarias y, en tiempos normales, la supresión de las facultades amnódadas que tienen aquí los gobernadores superiores civiles.

Este sencillo programa nuestro tiene la ventaja sobre el del Partido contrario que, si después de puesto en práctica resultara probado que es insuficiente, tiempo hay siempre para hacerlo más liberal; pero tras las radicales reformas que son el ideal de nuestros adversarios de buena fe, no podría venir otra cosa, después del empobrecimiento, de la aniquilación de este suelo, que una reacción despótica, que es lo que ha acaecido en todos los pueblos que han pasado repentinamente de un sistema político restrictivo a otro de ilimitada expansión. Es como si a un ciego de nacimiento que acabase de recobrar la vista se le expusiera de repente a la luz del medio día" (31).

2.- El Partido Liberal Reformista.-

Animado por el espíritu liberal de los decretos electorales promulgados por el Gobierno, se lanzó a la lucha, dispuesto a

sacar todo el provecho posible de los mismos. Los liberales hicieron circular hojas sueltas y proclamas; realizaron giras por el país, dando a conocer los nombres y las ideas de sus candidatos; celebraron reuniones para la designación de los mismos y, naturalmente, publicaron numerosos artículos en sus periódicos, sobre todo en "El Progreso" y "La Razón", ambos recién fundados (32). Del primero destacamos un artículo aparecido el 16 de junio, porque resumía la postura de los liberales-reformistas ante las elecciones:

"Los intereses de Puerto Rico son los mismos que los del resto de España: que no triunfe ni la reacción ni la anarquía. La reacción nos arrancaría en flor nuestras esperanzas; la anarquía engendraría, por una ley indeclinable, la reacción, y así, por uno u otro camino, más o menos brevemente, se afirmaría la esclavitud política, que es la muerte de todo sentimiento generoso y levantado y de toda dignidad personal.

La historia atestigua lo ciegas y vengativas que son las reacciones ;¡Ay entonces de todos los que confiados en la fe pública hubiésemos tomado parte en el movimiento!

Son éstas las convicciones del Partido Liberal Reformista de Puerto Rico; éstas y no otras las que irán a sostener sus candidatos si triunfasen en las urnas, en el augusto recinto de los cuerpos colegisladores.

Bien sabemos que no reposan en su daño fortísimas pasiones y que la calumnia los hiere de continuo. Pero ésta fue el lote en las épocas de regeneración social de los partidarios del derecho y de la justicia, porque está escrito que no se puede servir a dos amos. Esperamos confiados que con su patriótica conducta sabrán poner siempre de manifiesto la santidad de sus principios y la alta conveniencia nacional de sus aspiraciones" (33).

Por su parte, el Gobernador de la isla, que veía polarizarse peligrosamente las dos tendencias, intentó llegar a un compromiso con los dos partidos, proponiendo que cada uno de ellos designara cinco candidatos y dejando que el Gobierno designara otros cinco (34). Pero a esta propuesta se opuso el Comité Conservador de San Juan, que estaba presidido por el Marqués de la Esperanza.

Se puede entender la actitud del Comité sabiendo que los

candidatos elegidos por el Gobernador pertenecían a la facción de los conservadores moderados, los "tibios" de Valdés Linares, a los cuales se les había expulsado del Partido Liberal Conservador. Así pues, el Mariscal Baldrich se encontró en la incómoda alternativa de tener que escoger entre un partido que en su opinión era reaccionario, y otro que iba demasiado lejos, disyuntiva que no le agradaba, tratándose de un hombre de ideas liberales moderadas.

Abandonada por la fuerza de las circunstancias la candidatura de conciliación, al Gobierno no le quedaba más recurso que aconsejar sensatez y serenidad a los electores, intentando conseguir de ellos lo que no había logrado de sus líderes. A tal efecto, publicaba una alocución en la Gaceta del día 3 de junio, en la que decía entre otras cosas:

"Faltaría yo a mis principales deberes de todo gobierno si al aproximarse el día en que habéis de depositar vuestros sufragios en las urnas para la elección de diputados a Cortes, no os dirigiera la palabra, ajena a todo interés político, y encaminada a recordaros cuáles son vuestros deberes como españoles y como electores... Vosotros no ignorais la legalidad que ha creado la Revolución de Septiembre; que por virtud de esta revolución que ha cambiado totalmente el aspecto político de la Nación española, nuestra amada Patria, fuisteis llamados a la participación de los derechos políticos que ennoblecen la personalidad humana.

Vosotros no desconocéis que las pasiones violentas de los partidos militantes amenazan destruir la obra de la Revolución de Septiembre, cuyos cimientos se amasaron con sangre española, con el sacrificio de la preciosa sangre de hombres ilustres, para quienes guarda la posteridad mármoles y libros...

Ante estos peligros, habitantes de esta provincia, escuchad la voz del Gobierno, que es la voz de la Patria y llevad a las urnas a los hombres que por sus antecedentes y acendrado españolismo vayan al Congreso y al Senado a trabajar en beneficio de la Nación, para que no triunfen ni la reacción ni la anarquía" (35).

D.- Los resultados.-

Como estaba previsto, las elecciones dieron comienzo el día 20 de junio y se extendieron hasta el 23. El triunfo, por abru-

madora mayoría, correspondió al Partido Liberal Reformista, que sacó vencedores a todos sus candidatos, excepto en el Distrito de la Capital, donde el ex-Gobernador de la isla, general Sanz y Posse, se impuso a D. Antonio Vida y Palacios (36).

El orden y la tranquilidad con que se desarrollaron estas elecciones, excepto algunos problemas que surgieron en la Capital, hicieron que el Gobernador se sintiera obligado a dirigir una felicitación al cuerpo electoral por su envidiable comportamiento; al propio tiempo, les pedía a todos que olvidaran rencores y dieran muestras de prudencia y camaradería: "generosidad en los vencedores y prudencia en los vencidos". Finalmente, les recordaba que todos pertenecían a una misma Madre Patria y a una misma nacionalidad (37).

E.- Comentarios.-

Si es cierto que el Gobernador se sintió satisfecho por la forma pacífica y ordenada en que se desarrollaron estas elecciones, no lo es menos que se sintió defraudado por los resultados; así al menos lo expresaba en sendas cartas reservadas, dirigidas la una al Presidente del Consejo de Ministros y la otra al Ministro de Ultramar. En la primera acusaba a los conservadores de no haber apoyado la candidatura de D. Antonio Vida y Palacios, candidato por el Distrito de la Capital, en donde los conservadores dieron sus votos al general Sanz y Posse, "el hombre más antipático a la inmensa mayoría de estos habitantes sin distinción de procedencia" (38). En la segunda, después de repetir las mismas acusaciones contra el Partido Conservador, añadía:

"Este Gobierno se persuade de día en día de que es necesario combatir aquí las tendencias peligrosas; la tendencia manifiesta de desacreditar en las Antillas todo sistema liberal de gobierno, todo principio de reforma, a cuya labor se han entregado los hombres del Comité Conservador y la tendencia de los radicales, la política niveladora de los hombres que militan en las filas de los Baldorioty y Goicos, cuyas opiniones se reducen a salvar

la pureza de los principios, aunque se pierdan las colonias, como si en estos países tan alejados del centro de la Patria, no hubiese ~~dificultades prácticas insuperables~~ para establecer de lleno ciertas reformas, sin exponer al país a todo género de convulsiones sociales" (39).

Finalmente, un análisis estadístico de los resultados nos da los siguientes datos: de una población de aproximadamente 600,000 habitantes que tenía la isla en este año, se inscribieron en las listas electorales 19,789 personas; 5,866 en concepto de contribuyentes y 14,965 en el de capacidades. Acudieron a las urnas 15,940 electores, es decir, el 81.42 % del total de electores, cifra verdaderamente alta de participación, concentrándose las abstenciones en la parte oeste de la isla, aunque en ninguno de los Distritos pasaron del 30 %.

En cuanto al reparto de los votos, fue el siguiente por Partidos: 10,782 para los reformistas, equivalente al 67.64 % del total de votantes; 4,109 para los conservadores, es decir, el 25.77 %, y finalmente, 893 votos para los moderados de Valdés Linares, que representaban el 5.60 % del total.

NOTAS

- 1.- TUNON DE LARA, Manuel. Op.Cit., pág. 209 y sgts.
- 2.- MARTINEZ CUADRADO, Miguel,: "Elecciones...", pág. 95
- 3.- Gaceta de Madrid, 1871, 16 de febrero
- 4.- Para Cruz Monclova, el hecho que marca en Puerto Rico la aparición de su "conciencia de pueblo" diferente al de la Metrópoli, es la serie de discursos pronunciados en la Catedral de San Juan en 1809, con motivo de la elección de D. Ramón Power como Vocal ante la Junta Suprema, sobre todo el del propio Power y el del Obispo de San Juan, D. Juan Alejo de Aritmendi, de origen puertorriqueño. Ambos se refieren repetidamente en sus discursos a "nuestra patria" y a "nuestros compatriotas los puertorriqueños", así como a los "justos derechos" de los naturales de la isla. Cf.: CRUZ MONCLOVA, Lidio. Op.Cit., Tomo I, págs. 20 y 21.
- 5.- DUVERGER, Maurice,: "Sociología política", (Barcelona, Ediciones Ariel, 1968), pág. 337.
- 6.- Ibidem, pág. 336.
- 7.- Como se indicó más atrás , en la Junta de Reformas, creada en 1865, los comisionados liberales de Puerto Rico pidieron la abolición inmediata y to al de la esclavitud "con indemnización o sin ella", demostrando así que era en su opinión el mayor obstáculo para el desarrollo democrático de la isla.
- 8.- Gaceta de Puerto Rico, 1870, N° 131.
- 9.- PAGAN, Bolívar, Op.Cit., pág. 161.
- 10.- Se llamaban "asimilistas" los que aspiraban a que Puerto Rico se desarrollara dentro de la Nación española, bajo las mismas instituciones que regían en la Península, asimilando la isla todo lo que fuera modo de vida en el ámbito de gobierno. El autonomismo, por su parte, tendía a obtener para Puerto Rico, mediante legislación especial de las Cortes, un sistema autónomo o de "Home Rule" insular, con cámaras legislativas con plenas facultades en asuntos de Puerto Rico, para que pudiera desarrollar una vida propia, regional, y laborar su propio progreso y destino, manteniéndose la soberanía española sobre la isla. Cf.: Bolívar Pagán. Op.Cit., págs. 164 y 165.

- 11.- Año 1870, número 36. Este periódico se había fundado en este mismo año y se publicaba los miércoles, viernes y domingos. De inspiración decididamente liberal, fue vocero del Comité Consultivo Reformista y luego del Partido, hasta su desaparición en 1874. Cf.: PEDREIRA, Antonio Salvador. Op.Cit., págs. 101 a 108 y 514.

Este mismo autor considera que "El Progreso" fue el primer periódico puertorriqueño auténticamente de partido. También sobre este periódico: RIVES TOVAR, Federico: "Historia cronológica de Puerto Rico", (New York, Plus Ultra Educational Publishers, Inc., 1973), pág. 318.

- 12.- PAGAN, Bolívar. Op.Cit., págs. 163 y 164. Pueden verse las Bases del Partido Liberal Reformista en el Anexo I.
- 13.- LABRA, Rafael María de: "Mi primer discurso parlamentario", (Madrid, Tipografía "Sindicato de Publicidad", 1915), pág. 27.
- 14.- PAGAN, Bolívar. Op.Cit., págs. 164 y 165.
- 15.- CRUZ MONCLOVA, Lidio. Op.Cit., Tomo II, págs. 58 a 61.
- 16.- Archivo Histórico Nacional (Madrid). Sección de Ultramar, Legajo 5109/51. Puede comprobarse el gran parecido que había entre los principios del Partido Liberal Reformista y los cuatro puntos de este Manifiesto. La razón es que éste último sirvió de modelo a D. Julián Blanco y Sosa para redactar las Bases del Partido Reformista.
- 17.- "La Razón", 1870, número 14. Esta revista, que salía semanalmente, había comenzado a publicarse en el mes de octubre de ese mismo año, y al igual que "El Progreso" era de tendencia reformista asimilista. Cf.: PEDREIRA, Antonio Salvador. Op.Cit., págs. 101 a 108 y 523. También RIVES TOVAR, Federico. Op.Cit., pág. 318.
- 18.- Un testigo presencial de esta reunión describe así el desarrollo de la misma:

"Hizo uso de la palabra en aquella reunión D. Manuel Valdés Linares, manifestando que, debiendo creer que todos los concurrentes estaban de acuerdo con el pensamiento expresado, debía proceder a la elección de un comité provincial, y hechas algunas aclaraciones sobre el programa, a petición del Sr. Fontán, tomó la palabra D. José Cuchí, diciendo: que extrañaba mucho que la Junta convocadora estuviera formada de cuatro insulares y de cuatro peninsulares pertenecientes al partido peninsular. Expresiones que fueron acogidas con disgusto por la numerosa concurrencia y provocaron gran vocerío entre los concurrentes que pedían la pa-

labra. Concedida ésta al Sr. Valdés Linares, respondió al Sr. Cuchí y lo hizo convocando los fueros de la amistad y apelando a su patriotismo le preguntó si era justo y oportuno provocar excisiones en el seno del cuerpo electoral allí reunido, lo cual conmovió vivamente al auditorio.

El Sr. Cuchí replicó que sentí que invocando la libertad no se le concediese a él la suficiente para exponer sus opiniones, pues las manifestaciones que acababa de oír solo tendían a cohibirlo y añadiendo que había concurrido allí por deferencia, no porque estuviese conforme con las bases del programa y que se alegraba mucho de las manifestaciones de españolismo que había oído, en la hipótesis de que aquellos sentimientos fuesen verdaderos.

Seguidamente manifestó D. Bartolomé Borrás con acento conmovido que iba a hablar no como autoridad local sino como elector, y dijo: "no nos acordemos del día de ayer ni del de anteayer. Yo ruego al Sr. Presidente que dé por terminado este incidente y la discusión, procediéndose a votar desde luego".

Al empezar la votación se salieron a la calle D. Pedro Arana y otros; convocaron a varios electores que no sabían lo que había pasado en la reunión y que más que amigos de la concordia lo eran de llevar la perturbación al seno de aquella asamblea, los cuales se propusieron alterar la redacción de la candidatura hasta el punto de demostrar en muchas papeletas una intransigencia muy ajena del objeto de la reunión y hasta se vieron consignadas en algunas de ellas palabras indecorosas y calificaciones repugnantes.

Del escrutinio resultó mayor número de papeletas que de votantes, y entre ellas 47 ininteligibles y sujetas a discusión. A la hora de verificar este acto, apenas había 40 individuos en el local, pues la falange preparada contra el pensamiento de la conciliación, una vez conseguido el objeto, había abandonado el campo.

Estos hechos obligaron al Sr. Fontán a proponer se acordase la nulidad del acto, y se acordó así por aclamación". Cf.: Biblioteca Nacional (Madrid). Sección de Manuscritos, Ms. 20128.

En otra carta, ésta de D. Carlos Rojas, se aclara un poco más el trasfondo de las motivaciones que hicieron fracasar este primer intento de organizarse el sector conservador de la isla: "... el general Baldrich acaba de publicar una proclama, llamamiento a la concordia para que se depusieran antiguos rencores ante el bien de la provincia y de España; pero que no

produjo el efecto que esperaba.- Que Valdés Suárez (Linares) y Becerra, diputados, expresaron el pensamiento de fundir los elementos insulares y peninsulares que profesaban unos mismos principios, en un partido liberal, de orden, de progreso, conservador para España; y que con tal fin hubo una muy consurrida reunión para nombrar un centro directivo del partido de orden y de gobierno, invencible en todos los terrenos; pero una mísera cuestión de persona malogró el plan, quedando los ánimos más excitados y peor que antes de la reunión.

... Un partido liberal español sería fuerte, potente, grande, invencible y este partido se hubiera formado si la voz vetusta de un hombre intransigente (se refiere al Sr. Cuchí) no hubiese sonado para producir desconfianzas ya olvidadas, en la reunión celebrada en la Intendencia, lo cual también se hubiera evitado con la abnegación personal inficiente del que presidía (se refiere a Valdés Linares), objeto principal de la discordia, por lo mismo que lo sabía pudo haber asistido como uno de los autores del pensamiento pero sin tomar la presidencia. El resultado de la reunión puede asegurarse que fue funesto, porque con el ejemplo de la Capital, es imposible la fusión en los departamentos, y las cosas solo han llegado a la organización y existencia de un solo partido que es el que menos puede convenir al Gobierno español". Ibidem

19.- En carta del Mariscal Baldrich al Ministro de Ultramar y comentando los resultados de las elecciones de diputados provinciales celebradas ese mismo año, consignaba: "Desde el primer instante, bajo el nombre de liberales reformistas, a quienes sus adversarios llaman hoy radicales, trataban de organizarse y disciplinarse los más avanzados en política. Hombres más presuntuosos y osados que profundos en ciencia y dotados de méritos, se apoderaron de la dirección del partido que al principio solo se componía de los más ignorantes y pobres de los electores, si bien no hay motivo alguno para dudar del amor de los más de éstos al orden y la legalidad.

Este partido no habría llegado a formar una mayoría, sin la intemperancia en la conducta de los que se llamaban conservadores que con sus calificaciones calumniosas generales y su intransigencia, hicieron imposible la conciliación que se intentó entre ellos y una parte considerable, granado (sic) e importante de la población...

Los llamados conservadores que han querido aparentar no ser enemigos de las reformas, no han logrado convencer a nadie; porque además de hallarse sus actos en contradicción con sus palabras, nunca han

formulado un credo político concreto y determinado que contuviese las bases de una constitución ni de las leyes orgánicas que querían para esta provincia". Cf.: Archivo Histórico Nacional (Madrid). Sección de Ultramar, Legajo 5096/54. Subrayado en el original.

20.- "Boletín Mercantil", 1871, número 33. Este periódico que, como hemos dicho, fue el órgano oficial del Partido Liberal Conservador, había aparecido por vez primera en 1839. Salía los miércoles y los sábados; desapareció en 1918. Cf.: PEDREIRA, Santonio S. Op.Cit., págs. 81 a 89 y 406.

21.- Reproducimos algunos de los párrafos más significativos del Manifiesto:

"Somos liberales conservadores; liberales, porque lejos de ser reaccionarios y retrógrados, como se nos ha pintado, queremos el progreso en todo lo que contribuir pueda al adelanto efectivo de esta provincia, al desenvolvimiento de su riqueza moral y material.

Queremos que se creen bancos que nivelen y regulen el crédito. Queremos carreteras, puentes, caminos y si fueren posible ferrocarriles, que faciliten la circulación de nuestros frutos, dando impulso a la agricultura, valor a las fincas y aumento a los jornales de esa clase trabajadora que tratan de engañar haciéndola entender que son sus enemigos los propietarios, siendo así que son sus naturales protectores. El capital y el trabajo son hermanos...

Queremos, en resumen, en lo económico-administrativo, cuantas reformas tiendan a desenvolver la riqueza general y particular de este suelo privilegiado, cuantas reformas haya sancionado la experiencia como conducentes al bienestar, prosperidad e ilustración de todos los habitantes...

Respecto a la política, las Cortes soberanas han dispuesto ya que se reforme nuestro sistema de gobierno, como en efecto ha empezado a hacerse y nosotros, partidarios consecuentes del principio de autoridad, no nos hemos opuesto ni nos opondremos a que se cumpla la voluntad del poder soberano.

Para conservar estas provincias el relativo floreciente estado en que se encuentran y el más próspero a que pudieran llegar, es que deseamos mucho tacto, prudencia y proceder sin precipitación, a fin de que al decretar cualesquiera derechos políticos se tenga presente que hay unos cuantos ambiciosos, ávidos de aprovecharse con refinada astucia de nuestra imprevisión para llevar a cabo sus planes de independencia. La autoridad debe tener en tiempos anormales todas las

facultades necesarias para reprimir cualquier atentado que contra el orden se intente.

Liberales, pues, en lo económico-administrativo, liberales también en lo político hasta donde las especialísimas circunstancias lo permitan sin peligro del orden, solo somos conservadores de nuestra gloriosa nacionalidad, de nuestras sabias leyes, de nuestro rico idioma y de nuestros usos y costumbres. Hombres de nuestra época, nosotros no rechazamos el progreso, españoles por convicción y por conveniencia, nosotros posponemos todo a aquella calidad de tales". Cf.: "Boletín Mercantil", 1872, número 36.

22.- Ibidem.

23.- Gaceta de Puerto Rico, 1871, número 33. Puede verse la nueva distribución del territorio en distritos en el Anexo II.

24.- Ibidem, 1871, número 39.

25.- Ibidem, 1871, número 47: Circular número 24.

26.- Ibidem, 1871, número 66. En relación con el tema ya apuntado de la tardanza en publicar en la isla los decretos de convocatoria de elecciones, decía Labra en un discurso pronunciado en el Congreso en ese mismo año:

"El 16 de febrero se convocaban las Cortes ordinarias. Pues bien, el Sr. Ministro de Ultramar solo el 22 de febrero envía un Decreto a Puerto Rico... para que se dé principio a los preparativos en aquella isla, siendo de advertir que este Decreto... se envió como telegrama por Cuba, tardando 21 días en llegar a Puerto Rico, esto es, cerca del doble de lo que tarda el correo ordinario de Cádiz". Cf.: "La Política colonial y la Revolución española de 1868", (Madrid, Tipografía "Sindicato de Publicidad, 1915), pág. 45.

27.- Con esta última modificación, el número de electores en la isla pasó de los 3,718 en la elección de 1869 a 19,789 que alcanzó en ésta de 1871. A pesar de esta rebaja de la cuota y del mayor número de diputados, este cambio de circunscripciones plurinominales a distritos uninominales tenía el mismo propósito que en la Península: dar ventaja a los conservadores, aunque por diferente causa: en la isla favorecía a los conservadores porque éstos podían contar en cada distrito con los votos de los funcionarios del Gobierno, con los de los propietarios y comerciantes, para equilibrar los de los pequeños propietarios, detallistas y jornaleros, que votaban en general por los liberales.

28.- "El Correo de las Antillas", 1871, número 2.

29.- Ibidem. Continuaba el artículo: "Solo atravesando un período tan febril y ardiente como el que dominó desde el triunfo de la Revolución de Septiembre hasta principios del corriente año, podría explicarse que a raíz de los movimientos de Yara y Lares se decretase, arrastrado el Ministro de Ultramar por la corriente revolucionaria, la elección de diputado a Cortes en Puerto Rico... Y aunque a todos los hombres de un criterio imparcial y de un espíritu patriótico no satisface aquel paso político que sumía a la isla, aun no completamente tranquila de su pasada calaverada, en luchas completamente nuevas y siempre peligrosas, amortiguó aquella mala impresión el espíritu y letra del Decreto de elecciones y la acreditada personalidad del entonces Capitán General que no transigía con ninguno de los que de buena o mala fe querían reformas precipitadas.

Pero desde junio de 1869 a nuestros días han transcurrido dos años; la rebelión de Cuba sigue y seguirá; en Puerto Rico dominan los Acostas, Castros, Quifiones y Vizcarrondos. Algo debíamos haber aprendido, y sin embargo, se decretan nuevas elecciones y el Ministro de Ultramar, que a raíz de la Revolución de Septiembre supo sobreponerse a todo, es quien decreta estas elecciones y quien modifica la ley de esta manera que casi hemos dudado un instante si decía Becerra o Adelardo López de Ayala".

30.- "Boletín Mercantil", 1871, número 68.

31.- Ibidem. Este Manifiesto incluía la candidatura oficial del Partido Liberal Conservador, que era la siguiente: Capital: D. José Laureano Sanz y Posse; Vega baja: Sr. Marqués de Casa Caracena; Arecibo: Sr. Marqués de la Esperanza; Quebradillas: no presentó candidato; Aguadilla: Dr.D. José Planas; Mayagüez: Excmo.Sr.D. Esteban Nadal; San Germán: Excmo.Sr.D. Carlos Fajardo; Sabana grande: Sr.D. José María Molinas y Brotons; Ponce: Sr.D. Juan Prats; Guayama: Sr.D. Eugenio López Bustamante; Humacao: Sr.D. Pedro López Sánchez; Río Piedras: Ilmo.Sr.D. Francisco Xavier de Oteyza; Caguas Excmo.Sr.D. Bartolomé Borrás; Coamo: Sr.D. Pedro Diz Romero; Utuado: Sr.D. Sebastián Plaja.

32.- "El Progreso", periódico político, literario y de noticias, fue fundado a finales de 1870 por José Julián Acosta y desapareció en el mes de febrero de 1874. En opinión de Pedreira "fue el primer periódico verdaderamente de partido que se publicó en Puerto Rico". Op.Cit., págs. 102 a 105 y 514. Fue órgano oficial del Partido Liberal Reformista desde su fundación y en sus páginas

apareció el programa de este Partido. Ibidem, pág. 105

33.- "El Progreso", 1871, número 66. En el número 71, correspondiente al viernes 23 de junio, incluía la candidatura oficial del Partido Reformista: Primer Distrito: D. Luis María Pastor; Segundo: D. José Álvarez Peralta; Tercero: D. Luis Padial; Cuarto: D. Juan Antonio Hernández Arvizu; Quinto: D. Eurípides Escoriaza; Sexto: D. Manuel Corchado y Juarbe; Séptimo: D. José Julián Acosta y Calvo; Octavo: no presentó candidatura; Nove-no: D. Román Baldorioty de Castro; Décimo: D. José Fa-cundo Cintrón; Undécimo: D. Joaquín María Sanromá; Duo-décimo: D. Francisco Mariano Quiñones; Trece: D. Julián E. Blanco y Sosa; Catorce: D. Luis Padial; Quince: D. Gregorio Ledesma y Navajas.

34.- Archivo Histórico Nacional (Madrid). Sección de Ultramar, Legajo 5104/27. Por estimar que se trata de un documen-to sumamente interesante para hacerse idea de la opi-nión del Gobierno sobre la situación político-partidista de Puerto Rico en estos momentos, transcribimos a continuación una carta reservada del Mariscal Baldrich al Ministro de Ultramar, de fecha 19 de agosto de 1871:

"Excmo. Sr.: Terminadas las elecciones y remitidas ya al Departamento del digno cargo de V.E. las actas respectivas, cumple al deber político de este Gobierno Superior Civil hacer una narración fiel de los hechos anteriores a la elección de diputados y senadores.- Este Gobierno confiaba en que habrían de ir a ambas Cámaras personas de antecedentes liberales, hombres de orden, dispuestos a apoyar todas las creaciones de la Revolución de Septiembre; hombres que, al discutirse la Constitución de Puerto Rico, comprendiesen que la consagración de todos los derechos políticos sin leyes orgánicas que regulasen su ejercicio habría de compro-meter en un plazo más o menos lejano el reposo públi-co y tal vez la integridad del territorio.- La creen-cia de que irían a las Constituyentes hombres de estas ideas se fundaba, por una parte, en el deseo aquí uni-versal de todas las clases de una ley fundamental y por otra, en la persuasión de que todos los elementos de orden habían de cumplir las reiteradas promesas he-chas al Gobierno en materia de candidatos.- Pero llega el momento de designar de un modo público las personas que habían de obtener los sufragios de los electores y entonces se falta a todos los compromisos precisamente por aquellos que, profesando principios conservadores, se han gloriado siempre de estar al lado del Gobierno sin reserva alguna.- Para conciliar todos los ánimos, para reducir a una sola todas las voluntades, yo pude

influir particularmente con mis amigos a fin de que el Partido Conservador designara cinco candidatos, otros cinco el Partido Liberal, dejando cinco distritos para el Gobierno, por si era de necesidad sacar triunfantes algunos candidatos de recomendación ministerial. Esta solución satisfacía a todos menos a los hombres de la autonomía colonial; menos a aquellos que intentan que este pueblo pase de un sistema de gobierno personal al régimen de todas las libertades más amplias que las que se gozan en los Estados Unidos.- Este Gobierno no podía contar, pues, con la influencia moral de ese grupo de hombres que en 1866 pidieron en Madrid una forma de gobierno parecida a la del Canadá y hoy, por una evolución política más hábil que lógica, proclaman la necesidad de que se consagren aquí los derechos todos de la Constitución de 1869.- Pero si no podía contar con esos hombres, algunos de ellos enemigos de la soberanía española en América, a mi lado estaban todas las fuerzas vivas del país, los hombres de la inteligencia, de la riqueza, los que gozan de verdadero prestigio en los Departamentos.- Con estos elementos, con estas simpatías, el Gobierno no podía menos de dar todas las seguridades de que las elecciones de diputados y senadores correspondería a los fines legítimos de la Revolución de Septiembre y al objeto de reformar el sistema de gobierno de esta Antilla de modo y forma que no peligrasen jamás ni por excesiva centralización ni por plétora de liberalismo los intereses morales y políticos de esta provincia.- Empero el llamado Comité Conservador de esta Capital, que por sus intransigencias siempre ha visto con recelo todo lo que procede de la Revolución de Septiembre, buscó y obtuvo un pretexto en los momentos en que este Gobierno se hallaba disponiendo los ánimos en los pueblos más importantes para que la elección de diputados y senadores se verificara bajo el pensamiento de una conciliación patente y sincera, pretexto irracional, absurdo, para romper todo género de relaciones políticas con mi autoridad.- D. Fernando Vida y Palacios, D. José Gualberto Ballesteros, D. Félix Borrell, D. José Elías y Carbonell, D. Pedro Mata. Estos eran los candidatos del Gobierno y como V.E. comprenderá, los antecedentes políticos de estos hombres eran aceptables por todos los elementos más conservadores del país; ellos hubieran triunfado como triunfaron los señores Sanromá, Arvizu, Escoriaza y Ledesma en sus respectivos distritos, a no haberse interpuesto a última hora la perniciosa influencia del Comité Conservador de la Capital, presidido por el Marqués de la Esperanza.- Y

no crea V.E. que ese Comité tiene a su favor la opinión del país ni que mantiene relaciones políticas con los elementos conservadores de la Provincia. Para demostrar que están solos, que solo pueden obtener su fin dividiendo todos los ánimos y dando con su conducta el triunfo a los principios radicales, baste recordar a V.E. que solos únicamente han podido vencer en la Capital, valiéndose del soborno, calumniando a D. Fernando Vida, calificándolo de separatista y convirtiendo a los soldados de este ejército en dóciles instrumentos de toda iniquidad.- Otro testimonio claro, evidente como la luz del día, es el hecho de que, reunidos en la Capital todos los compromisarios para la elección de senadores, los hombres de este Comité Conservador solamente obtuvieron los votos de los tres compromisarios de esta Capital. Este hecho da la medida del prestigio de esos hombres en los pueblos de la Provincia.- Este Gobierno se persuade de día más de que es necesario combatir aquí las tendencias peligrosas, la tendencia manifiesta de desacreditar en las Antillas todo sistema liberal de gobierno, todo principio de reforma a cuya obra se han entregado los hombres del Comité Conservador y la tendencia de los radicales, la política niveladora de los hombres que militan en las filas de los Baldorioty y Goicos, cuyas opiniones se reducen a salvar la pureza de los principios, aunque se pierdan las colonias, como si en estos países tan alejados del centro de la patria, no hubiese dificultades prácticas insuperables para establecer de lleno ciertas reformas, sin exponer al país a todo género de convulsiones sociales.- El país no quiere esa ilimitación de libertades; los hombres de la inteligencia, de la propiedad y del trabajo quieren reformas liberales, quieren una constitución que les ponga a cubierto de las arbitrariedades y de los peligros del gobierno personal. Pero no quieren que el ejercicio de esas libertades produzca el tumulto de las masas y que a cada paso se vea al país en el duro trance de ver suprimidas las garantías constitucionales por los abusos que los hombres de los partidos extremos podrían cometer halagando con mentidas promesas los sentimientos de las masas, peligro que si en todos los pueblos deben tener en cuenta todos los gobiernos cuando se trata de constituir una legislación fundamental, en las Antillas ese peligro toma inmensas proporciones porque la falta de costumbres públicas y sobre todo la división de razas serán por mucho tiempo un obstáculo patente al planteamiento de todas las libertades.- Reducir a la impotencia a los partidos extremos, ésta ha sido la

obra del Gobierno.- Pero los Conservadores, alentados por sus correligionarios de Madrid, y los Radicales confiados también en las promesas hechas por ciertos elementos peninsulares que en la prensa y en la Cámara proclaman la libertad absoluta para las Antillas; unos y otros, radicales y conservadores no pueden ver con benevolencia los actos de un Gobierno que no puede, que no debe coadyuvar al logro de sus propósitos. De aquí el que los periódicos de Madrid, de filiación conservadora y radical impugnen la política de este Gobierno procediendo los unos con injusticia notoria y los otros con evidente ingratitud.- Los actos de este Gobierno no han comprometido con soluciones los intereses conservadores, porque jamás se ha visto este país en estado más floreciente y hace muchos años que el Tesoro no posee los cuantiosos sobrantes que hoy posee, ni los radicales tenían derecho a esperar de este Gobierno el planteamiento de ciertas reformas, derivación del pensamiento que presidió a la redacción del proyecto constitucional, obra del antecesor de V. E. Hé aquí por qué existe injusticia en los unos e ingratitud en los otros, cuando censuran los actos de este Gobierno, así en los periódicos de Madrid como de esta Provincia.- En resumen, Excmo.Sr., todo Gobierno que en estos países combata a los partidos extremos, impugne así la reacción como el radicalismo, no tendrá jamás en su apoyo ni las simpatías del Comité Conservador ni la de los Autonomistas. Este Gobierno no aspira hoy ni ha aspirado jamás ni a los plácemes de los conservadores ni a los elogios de los radicales.- Solo le satisface ver que a su lado están los hombres de la política del justo medio; lo único que puede en el presente y en el porvenir salvar la dignidad del Gobierno, la paz de la tierra y la honra de la nación.- Lo que tengo la honra de manifestar a V.E. para su conocimiento".

35.- Gaceta de Puerto Rico, 1871, número 66.

36.- Archivo de las Cortes. Sección de Expedientes, Legajo 65, número 4. Pueden verse los resultados en los Cuadros y mapas electorales adjuntos.

37.- Gaceta de Puerto Rico, 1871, número 76.

38.- Creemos que esta carta, dirigida por el Gobernador de Puerto Rico al Presidente del Consejo de Ministros, recoge con bastante fidelidad el comportamiento del Partido Conservador en las elecciones de 1871, por lo que a continuación la transcribimos íntegramente.

"Excmo.Sr.: En 9 de abril último tuve el honor de dirigir a V.E. una carta oficial exponiéndole la ver-

dadera situación del país y de los partidos que en él militan. Hacía resaltar en ella el hecho real y positivo de ser el partido llamado liberal conservador de esta Capital, en esencia reaccionario, inspirado por los más intransigentes de la Isla de Cuba, el que mayores obstáculos procuraba oponer a la gobernación normal de esta Provincia. Y aseguraba en conclusión, como aseguro hoy, que la tranquilidad pública no se alterará, pues sobre carecer ese Partido de fuerza y prestigio suficientes para lograrlo, es para ello un obstáculo invencible la índole especial de estos habitantes, que mientras tengan confianza en la justicia del Gobierno sufrirán con la mayor calma e impasibilidad las provocaciones de los enemigos de las reformas. Hoy, Excmo.Sr., puedo decir a V.E. que los hechos han venido a confirmar todas mis palabras y previsiones; y eso sería para mí una satisfacción, si pudiera agregar que estos conservadores o reaccionarios, reconociendo errores y deponiendo imaginarios agravios se habían unido a mi Autoridad para facilitar el cumplimiento de las determinaciones del Gobierno. Siento manifestar a V.E. que han sido vanos todos mis esfuerzos. Sin inclinarme a ninguno de los partidos políticos; tratándolos a todos con la imparcialidad que debía guiar a un Gobernador, todos mis esfuerzos han tendido a acortar las distancias entre los extremos, a fin de constituir el gran partido medio, sensato y moderado en sus aspiraciones que allanan el camino de las reformas. Ya he dicho a V.E. que la mayoría de los hombres de verdadera importancia en el país se hallan acordes en ese pensamiento; pero a él siguen oponiéndose con marcada y reprensible tenacidad los mal llamados liberales conservadores de esta Capital, que si tienen partidarios en otras poblaciones de la Isla, especialmente en el primer Distrito electoral, son tan pocos que no ejercen influencia alguna en la opinión pública.- En el resto de la Provincia, en las principales poblaciones, como Mayagüez, Ponce y alguna otra, existen también hombres de representación, de ideas verdaderamente liberales conservadoras, pero amigos del Gobierno en su mayor parte. Todos se hallan, sin embargo, desacreditados ante los ojos del país a causa de los manejos y desaciertos de los que en esta capital llevan igual denominación y que por odio a las reformas y a los reformistas, no aspiran a otra cosa que a derribar de su propio puesto al que tiene la honra de suscribir con la ilusión, esperanza que le reemplace otro que dé oídos a sus mentidos temores y a sus locas aspiraciones.- Que ese es el fin al que tienden, que

ante él para nada entra en sus planes y en sus actos, a no se como pretexto, la idea de nacionalidad, ni ninguna otra noble, lo han probado en las elecciones de diputados a Cortes que con la mayor tranquilidad y el orden más perfecto acaban de efectuarse en el resto de la Provincia, no habiendo pasado de falsa alarma difundida por ellos mismos para ahuyentar a los amigos del Gobierno, el desasosiego que en algunos momentos se ha notado en esta Capital.- Agotados todos los esfuerzos imaginables para que se acordase entre las personas influyentes de todos los partidos una candidatura de conciliación: rotas bruscamente las negociaciones por los conservadores, que tenían la pretensión de que todos los candidatos o poco menos, fueran de su partido, y precisamente los hombres que más se han distinguido por su conducta opuesta a las reformas y que más han calumniado la lealtad de la Provincia y de su primera autoridad, no por eso dejaron los amigos de ésta de seguir proponiendo y apoyando cinco candidatos de ese partido, en quienes no concurrían las tachas indicadas.- Los cinco eran aceptados por los refractarios a toda transacción, y natural parecía que para dar una prueba de imparcialidad, juicio y buena fe, después de romper abiertamente con este Gobierno, como lo expusieron en una circular, continuaran figurando en sus candidaturas.- No lo hicieron así; excluyeron a uno para sustituirlo con el nombre más antipático a la inmensa mayoría de estos habitantes sin distinción de procedencia. No califico esa antipatía: no diré a V.E. si es merecida o no; bástame exponer que es cierto, y que apoyar tal candidatura era lanzar un cartel de desafío al país entero, con harta torpeza por cierto, porque hago al candidato la justicia de creer, como creo firmamente, que no está dispuesto a seguir a sus proponentes en la marcha de rebelión contra el Gobierno y contra la autoridad que han emprendido.- El candidato excluido por esos obcecados es el Ilmo.Sr.D. Fernando Vida, funcionario digno e inteligente, que ha servido siempre en el ramo de Ultramar hasta la categoría de Subsecretario, y que conociendo perfectamente estas provincias, sus aspiraciones y sus necesidades, hubiera sido el Diputado más útil y más conveniente para dar a las reformas el giro moderado y prudente que exigen, tan propio del carácter del Sr. Vida, que estoy seguro hubiera allanado algunas dificultades en tan espinosa tarea.- Pues bien, Excmo.Sr., a ese funcionario perteneciente a un partido medio y a quien no puede imputársele exageración ni extravío en sus ideas a ese intachable hombre público, que siempre ha practi-

cado las doctrinas que, para engañar ilusos, aparentan defender de cuando en cuando ~~estos reaccionarios~~ en sus órganos públicos; a ese hombre es a quien han declarado la guerra más encarnizada, valiéndose para vencerlo de medios ilícitos e inicuos.- Contábase para el triunfo de la candidatura del Sr. Vida con sobrado número de votos, que la deslealtad ha logrado corromper en su mayor parte, exponiendo al país y a la autoridad a serios conflictos.- Cuenta este primer Distrito 2,709 electores, de los cuales era de suponer hubiesen votado a no introducir coacciones y ~~engaños~~, lo menos 2,400. De esos hubieran sido para el Sr. Vida 1,200 por lo bajo, en la forma siguiente: 800 pertenecientes al Ejército, Armada y todas las otras clases de funcionarios públicos, y 400 de particulares. Los otros 1,200 se hubieran dividido probablemente entre reaccionarios y liberales avanzados, correspondiendo unos 400 a los primeros y el resto a los últimos.- Para destruir las fundadas esperanzas de los hombres sensatos que creían asegurada una candidatura formal y juiciosa, a que prestaba su conformidad este Gobierno, en la medida que podía hacerlo, se fraguó una conspiración execrable por los hombres que han figurado a su cabeza.- No ignoraba el que tiene la honra de suscribir que el Excmo. Sr. Brigadier D. Francisco Izquierdo, Segundo Cabo de esta Provincia y Gobernador militar de esta plaza, llevaba frecuentes relaciones con los más marcados de entre los reaccionarios y enemigos personales de la primera Autoridad de la Isla. Pero jamás pude imaginar que llegara su deslealtad a unirse con ellos para auxiliar los inicuos planes de oposición y menos aún, hasta el extremo de abusar de su autoridad para arrastrar a sus subordinados inmediatos, Jefes, Oficiales y clases del Ejército a oponerse a las indicaciones y los deseos del Capitán General de la Provincia.- Todas las precauciones que tomó este Gobierno aconsejadas por la prudencia para evitar coacciones en la tropa se han estrellado ante la incomprensible osadía de ese Jefe que, siempre presente en el Colegio electoral autorizaba el cambio de las papeletas por medio de los hombres más caracterizados del partido conservador, que deponiendo toda consideración de honra y amor propio personal y arrastrando por los suelos títulos, categorías y distinciones, se confundían con la tropa para ejercer la coacción, de acuerdo con no pocos sargentos y oficiales con tal osadía y calor, que a no ser por algunos Jefes y Oficiales que se han distinguido por su fidelidad y adhesión, se hubieran ganado todos los electores del Ejército.- Ha llegado la escandalosa conducta del Sr. Izquierdo hasta el punto de que el

Presidente de la mesa se vió en la necesidad imperiosa de expulsarlo dos veces del salón.- El que tiene la honra de suscribir, Excmo.Sr., no calificaría de graves estos hechos, ni los elevaría al superior conocimiento de V.E. a no concurrir varias circunstancias que reclaman pronto y eficaz remedio. No tardará en aplicarlo el que suscribe en lo que de él dependa y le permitan sus facultades: pero se requiere la acción del Gobierno Supremo para lo demás y esa es la que imploro respetuoso y espero confiado, a fin de dejar en su lugar el nombre y el prestigio de la Autoridad Superior de esta Provincia.- Esas circunstancias son la calidad de las personas que han ejercido y autorizado la coacción; la de los individuos sobre los que se ha ejercido: el pretexto alegado públicamente para ejercerla en comparación con las condiciones del Candidato rechazado; y el germen de indisciplina e insubordinación que se ha introducido en este Ejército. Respecto a la primera nada diría si los ciudadanos particulares afiliados en el bando conservador hubieran sido los principales o únicos agentes para atraer los votos militares a favor de sus candidatos y por medios que no propendiesen a la indisciplina. Esa es práctica admitida a las luchas electorales, y en todo caso, Jefes y Oficiales, cumpliendo su deber, hubieran sabido evitar todo acto desmoralizador. Mas no ha sido así por desgracia. Los que más han trabajado e influido en el mal, han sido precisamente no pocos de los Jefes y Oficiales impulsados y dirigidos como públicamente se ha visto por la segunda Autoridad militar de la Provincia. Excuso decir más a V.E. sobre este asunto.- Acerca del segundo también guardaría silencio, a no haber reclamación de parte interesada, si la coacción se hubiere ejercido sobre otra clase de electores; pero ya comprenderá V.E. que habiendo influido en las clases inferiores del Ejército y hecha o consentida por sus Jefes inmediatos, eso no puede tener lugar sin que se relaje la rigurosa disciplina militar y el hecho no puede pasar desapercibido. La tercera circunstancia envuelve un propósito y una intención que pudiera calificarse hasta de criminal. Bien comprendieron los enemigos declarados de la Autoridad que por más inmediata y directa que fuese su influencia sobre las clases de tropa, no era fácil separarlas de la senda del honor y del deber, si no intervenía para ello una causa de un orden supremo, que cuando son ciertas explican los extravíos ya que no logran excusarlos, tratándose de la milicia.- En el mismo Colegio electoral y fuera de él se circulaba

en voz alta y con ademanes expresivos que la candidatura que a todo trance se proponía sacar triunfante el partido conservador era la única nacional, la única española, calificándose de separatistas las demás. Esto se decía públicamente y públicamente se oía a los soldados exclamar, españoles antes que todo; somos o no somos españoles.- Simple ardid electoral hubiera podido llamarse hasta cierto punto esa falsa especie si los candidatos combatidos hubieran sido sospechosos: explicada sería respecto al propuesto por el partido liberal avanzado, no ciertamente por las condiciones de la persona, que está muy distante de toda sospecha deshonrosa, sino por la idea que los intransigentes conservadores tienen formada de todos los hombres del partido proponente.- Mas tratándose del candidato aceptado en un principio por los propios conservadores y sostenido siempre por los más adictos al Gobierno, de un candidato intachable para ellos mismos por todos conceptos y que pertenece al propio partido que el propuesto por ellos, sin el grave inconveniente que en éste concurre, ese pretexto envuelve una imputación gravísima y un propósito declarado de rebelión contra la primera Autoridad que ésta no teme porque tiene medios para reprimirlo y castigarlo, pero que tampoco debe pasar desapercibido.- Por último, Excmo. Sr., si así se engaña y seduce el Ejército, si en esos actos incalificables figura una autoridad militar, jefes y oficiales que se ponen de frente a su Jefe superior inmediato, no obstante sus desleales protestas de adhesión, ya comprenderá V.E. la gravedad relativa del suceso, sino para el orden y la paz general de la Provincia, que estoy seguro sabría cumplir como bueno, para la disciplina de este Ejército y el ejemplo de esos pocos obcecados que en vano pretenden perturbar el país con perjuicio de sus propios intereses.- No aspira el que tiene la honra de suscribir a conservar el puesto, ya lo ha dicho. Solo se dirige a que quede bien sentado el principio de autoridad. Al efecto, además de los cambios y combinaciones que en uso de sus atribuciones haga desde luego y de las demás propuestas que eleve al Gobierno de S.M. (q.D.g.), ruego y espero que se acceda desde luego y sin demora a la solicitada separación de este Segundo Cabo.- Una vez corregidos con prudente energía todos esos actos, síntomas de otros más graves: desengañados así los ilusos reaccionarios de que la autoridad no está, no es posible que esté a su disposición, ya se puede acordar impunemente y sin consecuencias sobre la persona del que tiene la honra de suscribir, que no titubearía desde

luego en presentar la dimisión del cargo con que se le ha enaltecido, si ese acto no significare hoy por hoy el triunfo de una insurrección en proyecto y un deseo que no se realizará porque carece de fuerza, pero aún así tanto más funesto, cuanto que se cubre con el to de la honra y la integridad nacional que en realidad rebaja y mancha al oponerse ciegamente, no y a las aspiraciones temerarias de unos cuantos exagerados que conocemos todos, sino a las leales, juiciosas y sensatas de la inmensa mayoría de esta población, que estará siempre al lado del Gobierno de S.M. (q.D.g.) y de su primera Autoridad, mientras represente el principio de justicia que siempre ha guiado en todos sus actos al que tiene la honra de reiterar a V.E. las protestas de su más distinguido respeto y subordinación.- Dios guarde a V.E. muchos años. Puerto Rico Junio 26 de 1871.- Excmo.Sr. Gabriel Baldrich.- Excmo.Sr. Presidente del Consejo de Ministros.

39.- Ibidem, número 30.

40.- Estadística obtenida de las Actas electorales.

ANEXO I

BASES DEL PARTIDO LIBERAL REFORMISTA

- 1.- Aceptan ser conveniente se trate y se resuelva con el criterio liberal, a la luz de los principios proclamados por la Revolución de septiembre sobre todas las reformas en los ramos de la Administración, pública, económica, económica-administrativa y social de esta isla.
- 2.- Aceptan el principio de asimilación en política con la Madre Patria; pero asimilación completa, haciendo extensivo a esta isla en todos sus artículos el Título I de la Constitución de la Monarquía que trata de los derechos individuales, sin otra diferencia que lo relativo al sufragio, pues están conformes con el que establecen los proyectos de Ley Municipal y sobre gobierno y Diputación provincial de esta isla, o sea que solo tenga derecho electoral los que pagan cualquier cuota de contribución al Estado o sepan leer y escribir. Bien entendido que si admiten esta modificación, no es atendiendo a circunstancias de localidad, sino porque en los principios del Partido Liberal Reformista está que esa misma modificación sería conveniente en la Metrópoli.
- 3.- Conformes los liberales reformistas con el programa del Sr. Diputado D. José Pascasio de Escoriaza, no ocultan que preferieren la autonomía en lo administrativo a la vez que la asimilación en política según queda indicado; pero en defecto de aquella, la autonomía.
- 4.- Aceptan el mismo principio de asimilación en la cuestión económica-administrativa, siempre que esa administración sea completa y concediendo mayor suma de facultades a la Diputación y Ayuntamientos de esta Antilla, como está en el pensamiento del Gobierno, atendida la distancia para que puedan resolver aquellas cuestiones de exclusivo interés de la Provincia y los Municipios.
- 5.- Aceptan no solo la necesidad, sino la conveniencia y la justicia, de que se resuelva definitivamente y cuanto antes el problema social, conciliando los intereses generales de la Nación y del país con los particulares de ambas partes directamente interesadas en la cuestión, sobre la cual confían en la sabiduría de las Cortes.

San Juan, Puerto Rico, noviembre 28 de

1870.

Fuente: PAGAN, Bolívar. Op.Cit., págs. 163 y 164

ANEXO II

NUEVA DIVISION ELECTORAL DE PUERTO RICO

<u>DISTRITOS</u>	<u>COLEGIOS</u>	<u>HABITANTES</u>
1	Capital.....	17,805
"	Sabana del Palmar.....	5,462
"	Naranjito.....	3,846
"	Bayamón.....	9,690
"	Toa baja.....	<u>3,219</u>
		40,022
2	Vega baja.....	8,459
"	Vega alta.....	5,290
"	Morovis.....	7,846
"	Corozal.....	9,726
"	Toa alta.....	5,130
"	Dorado.....	<u>3,004</u>
		39,455
3	Arecibo.....	20,884
"	Manatí.....	12,424
"	Ciales.....	<u>6,662</u>
		39,870
4	Quebradillas.....	6,014
"	Moca.....	10,456
"	Camuy.....	8,334
"	Pepino.....	10,892
"	Hatillo.....	<u>7,061</u>
		42,757
5	Aguadilla.....	13,101
"	Aguada.....	9,063
"	Rincón.....	5,496

.../...

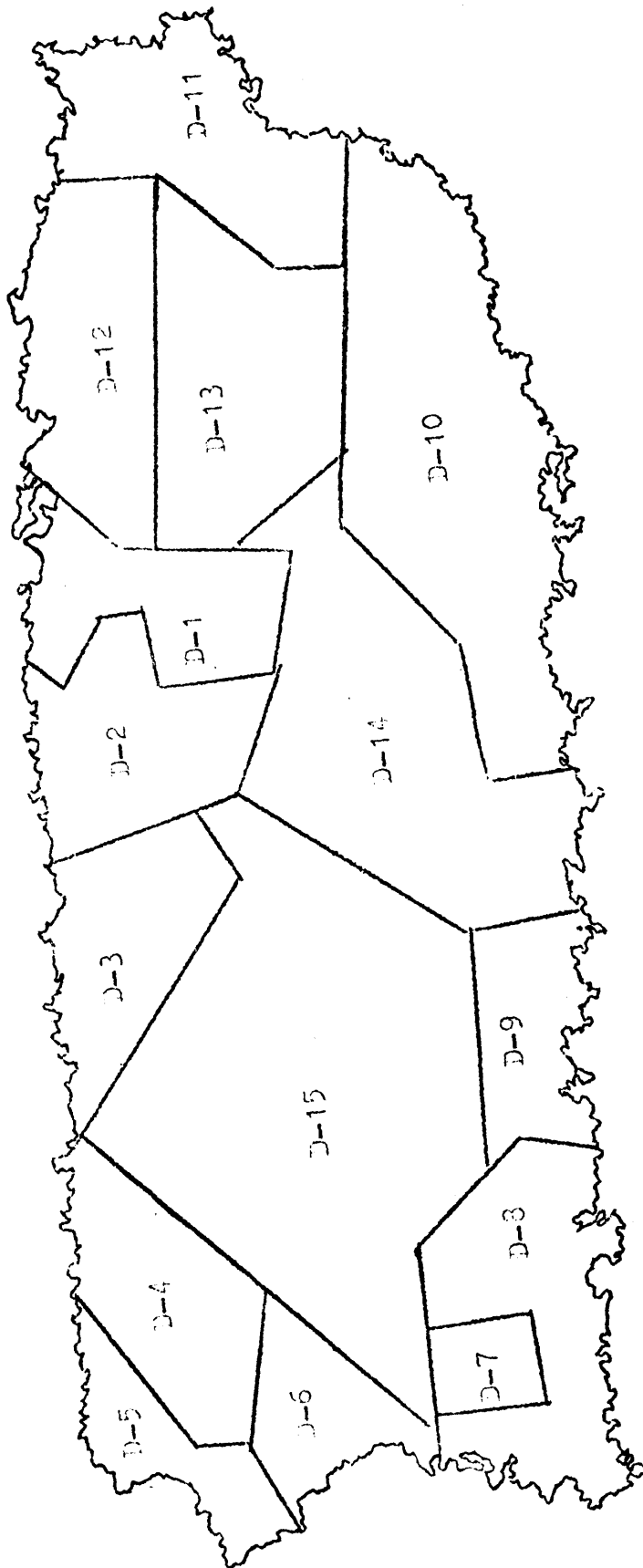
	Isabela.....	<u>12,586</u>
		40,246
6	Mayagüez.....	29,127
"	Añasco.....	<u>13,189</u>
		42,316
7	San Germán.....	<u>42,399</u>
		42,399
8	Sabana grande.....	8,461
"	Yauco.....	15,404
"	Cabo rojo.....	<u>15,437</u>
		39,302
9	Ponce.....	24,959
"	Peñuelas.....	9,177
"	Guayanilla.....	<u>6,283</u>
		40,419
10	Guayama.....	5,899
"	Salinas.....	2,336
"	Cayey.....	7,445
"	Arroyo.....	3,934
"	Patillas.....	7,666
"	Maunabo.....	3,200
"	Yabucoa.....	8,948
"	Santa Isabel.....	<u>1,721</u>
		41,149
11	Humacao.....	8,251
"	Luquillo.....	3,949
"	Piedras.....	7,217
"	Naguabo.....	7,474
"	Ceiba.....	3,333
"	Fajardo.....	7,021

.../...

	Vieques.....	<u>4,282</u>
		41,527
12	Rio Piedras.....	5,915
"	Guainabo.....	5,783
"	Trujillo alto.....	3,973
"	Trujillo bajo.....	6,288
"	Carolina.....	2,694
"	Loiza.....	7,768
"	Rio grande.....	<u>5,726</u>
		38,147
13	Caguas.....	12,764
"	Aguas buenas.....	6,656
"	Hato grande.....	9,783
"	Gurabo.....	4,556
"	Juncos.....	<u>6,160</u>
		39,919
14	Coamo.....	6,176
"	Barros.....	6,703
"	Barranquitas.....	5,326
"	Juana Díaz.....	15,006
"	Aibonito.....	2,968
"	Cidra.....	<u>7,023</u>
		43,202
15	Utua.....	19,547
"	Lares.....	14,467
"	Adjuntas.....	<u>8,243</u>
		42,257

FUENTE: Gaceta de Puerto Rico, 1871, número 33

(1371)



CUADRO I

RESULTADOS

(1971)

<u>DISTRITO</u>	<u>POBLACION</u>	<u>ELECTORES</u>	<u>RELACION Hab/Elec</u>	<u>VOTANTES</u>	<u>ABST.</u>	<u>CANDIDATOS ELEGIDOS</u>	<u>VOTOS</u>
CAPITAL	40,022	2,700	14.32	2,144	20.59	SANE Y POJSE, Laureano	1,004
VEGA BAJA	39,455	729	54.12	705	3.29	ALVARO FERRAZ, José A.	634
ARECIBO	39,370	1,179	33.31	936	15.52	PADIAL, Luis Ricardo	597
QUEBRADILLAS	42,757	1,090	39.22	840	22.94	HERNANDEZ ARVIZU, José A.	313
AGUADILLA	40,246	1,426	28.22	1,188	16.69	ESCORIAZA, Eufemides	1,046
MAYAGUEZ	42,315	1,954	21.65	1,502	23.13	CORCHADO Y JUAREZ, Manuel	948
SAN GERMAN	42,399	1,341	31.61	947	29.38	ACOSTA Y CALVO, José J.	778
SABANA GRANDE	39,302	876	44.86	673	22.60	BALDORIOY DE CASTRO, Román	540
PONCE	40,419	2,069	19.53	1,636	20.92	BALDORIOY DE CASTRO, Román	1,072
GUAYAMA	40,149	1,313	30.46	1,125	14.64	CINTRON, José Facundo	634
HUMACAO	41,527	1,274	32.59	1,020	19.94	SANCHEZ, Joaquín María	879
RIO PIEDRAS	38,147	770	49.54	646	16.10	QUINONES, Francisco Mariano	360
CAGUAS	39,919	897	44.50	761	15.16	BLANCO Y SOSA, Julián	446
COMO	43,202	1,043	41.42	899	13.31	PADIAL, Luis Ricardo	465
UTUADO	42,257	1,123	37.62	953	24.04	LEDESMA Y NAVAJAS, Gregorio	649
	611,927	19,789	34.93	15,340	18.53		

FUENTES: Archivo de las Cortes. Sección de Expedientes, Legajo 65, número 4. Archivo Histórico Nacional. Sección de Ultramar, Legajo 5104/26.

CUADRO II

(1871)

RESULTADOS POR PARTIDOS

LIBERALES:

ESCORIAZA CARDONA, José de.....	Aguadilla
ALVAREZ PERALTA, José A.....	Vega baja
BLANCO Y SOSA, Julián.....	Caguas
CORCHADO Y JUARBE, Manuel.....	Mayagüez
HERNANDEZ ARVIZU, Juan.....	Quebradillas
ACOSTA Y CALVO, José Julián.....	San Germán
SANRONA, Joaquín María.....	Humacao
QUIÑONES, Francisco Mariano.....	Rio Piedras
CINTRON, José Facundo.....	Guayama
LEDESMA Y NAVAJAS, Enrique.....	Utuado
BALDORIOTY DE CASTRO.....	Ponce y Sabana grande.

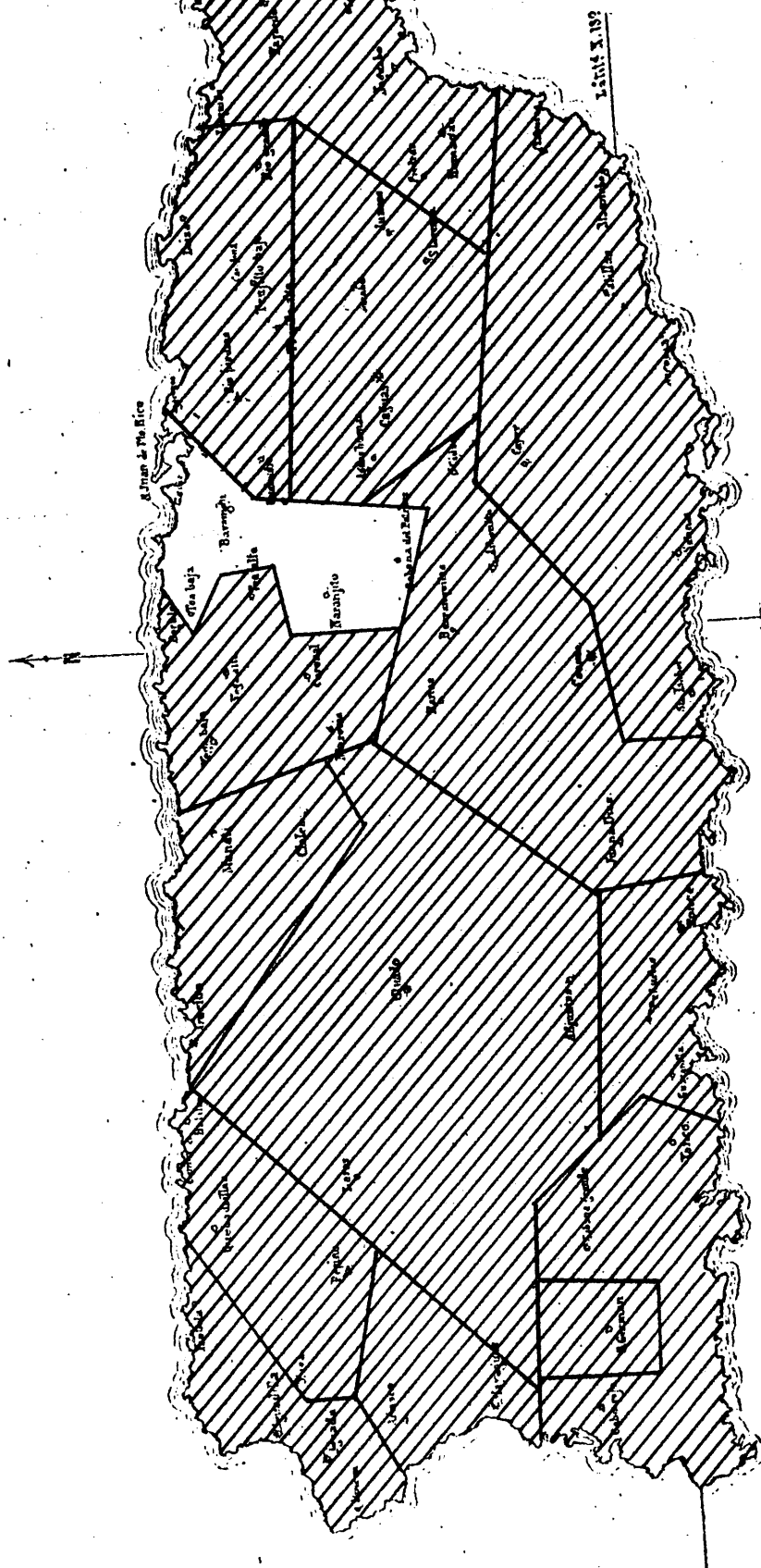
CONSERVADORES:

SANZ Y POSSE, José Laureano.....	San Juan
----------------------------------	----------

- - - - -



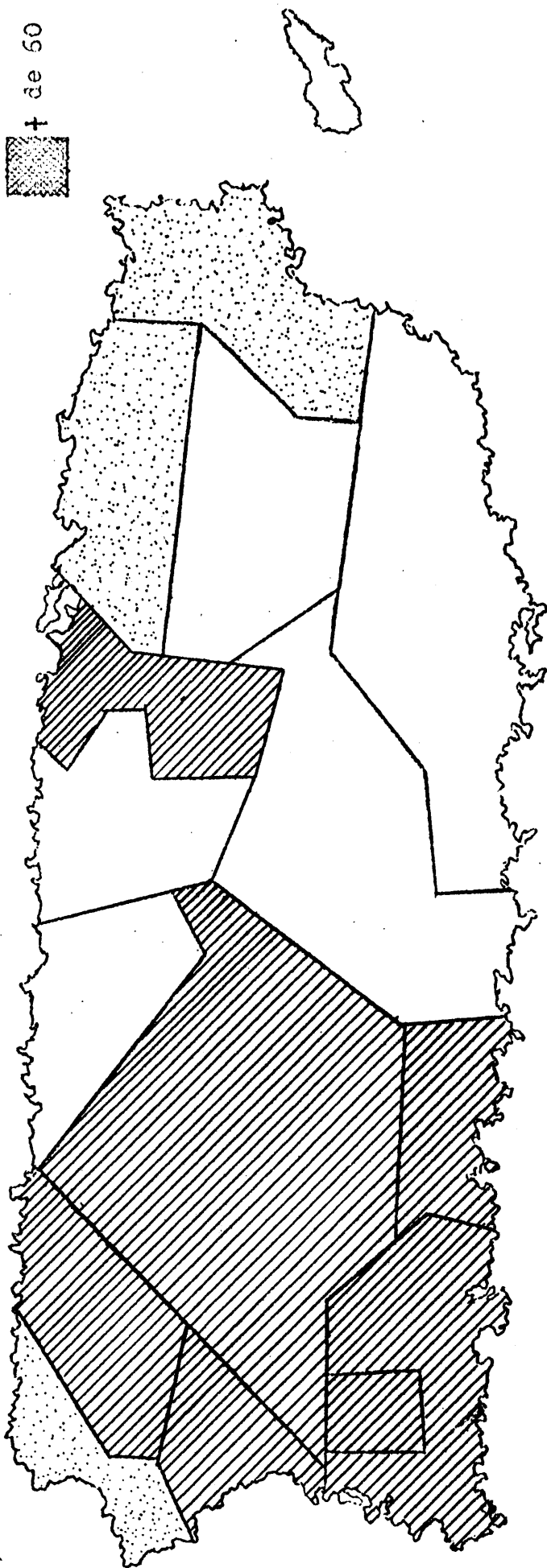
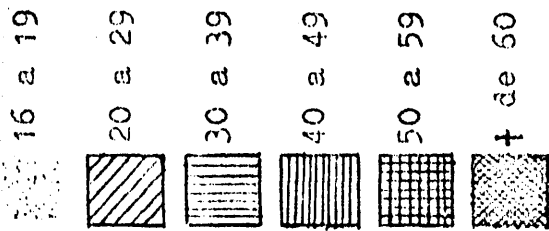
← 2 →



ABSTENCIONES

(1871)

Media: 18.58



2.3. LA ELECCION GENERAL DE 1872 (primera)

A.- La situación política en la Península.-

Los problemas políticos peninsulares iban aumentando cada día y las crisis de gobierno se sucedían con más frecuencia. En primer lugar, crisis dentro del Partido Progresista, en el que las dos fracciones de Ruiz Zorrilla -radical- y de Sagasta -conservadora- acaban por romper su coalición. Y también crisis de gabinetes: a Serrano le sucede en la jefatura del Gobierno Ruiz Zorrilla; viene a continuación Malcampo y finalmente Sagasta. Este último solicita del Rey y obtiene el Decreto de disolución de las Cortes, después que éstas negaran su confianza al Gobierno (1).

Sagasta se lo juega todo a estas elecciones, considerando que era la última oportunidad para la consolidación del trono de Amadeo. No es, pues, de extrañar que intentase ganarlas a toda costa y que, ante los escrúpulos expresados por el Rey en cuanto a la forma de llevarlas a cabo, contestase el propio Sagasta: "Serán todo lo sinceras que puedan serlo en España" (2).

El 24 de enero de 1872 obtenía Sagasta el Real Decreto de disolución de las Cortes; por el mismo se convocaban las nuevas para comenzar sus sesiones el 24 de abril, mientras que las elecciones se fijaban para celebrarse del 2 al 5 de abril, tanto en la Península como en Puerto Rico (3).

B.- La situación político-partidista en Puerto Rico

1.- El Pacto del Partido Liberal Reformista de Puerto Rico con el Progresista Democrático de Ruiz Zorrilla.-

En el mes de febrero de 1871 y con motivo del resonante triunfo que habían alcanzado los liberal-reformistas en las elecciones para diputados provinciales (4), aparecieron en la prensa reformista varios artículos proponiendo el establecimiento de

relaciones más estrechas entre los partidos liberal-reformistas de Cuba y Puerto Rico. El propósito que guiaba esta propuesta era el de unir las fuerzas de ambas Antillas para conseguir más rápidamente las reformas que anhelaban ambas agrupaciones.

Este proyecto logró enseguida simpatizantes y críticos en Puerto Rico, pero más de los segundos que de los primeros. Y es interesante hacerlo notar, porque será una constante a lo largo de todo el siglo XIX la postura de los políticos y representantes de Puerto Rico en las Cortes y en los escritos de propaganda hacer una diferenciación clara entre los asuntos, problemas y reformas de ambas islas, no obstante reconocer y aceptar la proximidad ideológica en que se movían ambos partidos.

La razón era obvia: tanto los conservadores peninsulares como los insulares se oponían a las reformas utilizando el argumento de una situación anómala y conflictiva en Cuba, situación que, en su opinión, también existía en Puerto Rico, si bien aquí de forma encubierta o latente. Por otra parte, partiendo del principio de que a más libertades más conflicto, se oponían a cualquier reforma, que visualizaban como una manera de dar facilidades a los separatistas de ambas islas.

Por su parte, los liberales de Puerto Rico argüían que la isla se encontraba histórica y socialmente muy lejos de Cuba, ya que en ella no se había producido la situación conflictiva que aquejaba a Cuba; por tanto, concluían, no existía peligro alguno en conceder a Puerto Rico reformas que, por otra parte, iban encaminadas hacia la asimilación y no hacia la separación.

Hemos explicado este punto porque en las Cortes se producirán frecuentes y largos debates en torno al mismo, si bien acabará por aceptarse esta última teoría de los liberales. Pues bien, los críticos de la alianza se opusieron con suavidad, para evitar rencores, a tal proyecto, alegando precisamente la diferencia de situaciones en que se encontraban ambas islas:

"No creo conveniente que siga Puerto Rico la buena o mala suerte de Cuba; siga ésta su camino; nosotros tenemos el nuestro, fácil y franco. Los pavorosos

problemas que encierra el porvenir de Cuba son de fácil solución entre nosotros. Cuba despreció las leyes y desafió la lógica inflexible del porvenir acrecentando las dificultades en la solución del problema social. Puerto Rico, más sensato y previsor, cerró las puertas a la tentadora ambición y Dios premia hoy su inspirada virtud. Registrad la estadística y ved que no hay entre ambas islas lazo ninguno que las ate" (5).

Estas líneas de una carta de Julio Vizcarrondo resumen la postura contraria a la alianza; pero el propio Vizcarrondo, en la misma, proponía a continuación concertar un pacto con el Partido Progresista de la Península, el cual representaba, en su opinión, los más altos valores de la democracia. Sin embargo, el proyecto engendró críticas por parte de "El Progreso" que en varios artículos combatió la propuesta de Vizcarrondo:

"La Nación entera nos debe justicia y jamás haremos depender la suerte de nuestra Provincia de la suerte de un partido político por digno, por grande que sea.

...La pretensión de afiliarnos hoy, colonos todavía, no ciudadanos españoles, en los partidos nacionales, sería digna de que se ridiculizara con la frase vulgar en esta provincia, pero muy expresiva, diciéndonos que "peleamos por los cocos, antes de comprar la vaca". Sepan nuestros detractores que conocemos la diferencia que existía entre espartanos, lacedemonios e ilotas" (6).

Y en el número correspondiente al 19 de marzo del mismo año refiriéndose precisamente a la filiación progresista del Diputado por Puerto Rico, Sr. Escoriaza, decía:

"Aunque por nuestra parte rechazamos toda idea de afiliación a ningún partido de los que en la Península se disputan la supremacía de sus doctrinas, porque vemos aún a nuestro país sin su Constitución ofrecida, la cual ha encontrado defensores y enemigos encarnizados a la vez en individuos de todos los matices políticos..." (7).

Sin embargo, no habían pasado más que unos meses, cuando se planteó de nuevo la conveniencia de reconsiderar una alianza con algún partido de la Península. En este momento -octubre de 1871- el Partido Progresista se había excindido en dos facciones, a causa de las divergencias temperamentales, políticas y de riva-

lidades entre los dos personajes más caracterizados del mismo: Sagasta y Ruiz Zorrilla. Este último fundó el Partido Progresista Democrático, en tanto que Sagasta hacía lo propio con el Partido Progresista Constitucional (8). Con este motivo, Ruiz Zorrilla publicó un "Manifiesto al Partido Progresista Democrático y a la Nación", en el que, después de hacer historia de la Revolución de Septiembre, afirmaba era llegado el tiempo de constituir un sistema de partidos claramente diferenciados, aunque no contrarios, con el fin de poder efectuar el juego parlamentario. A continuación, exponía brevemente las bases de un partido "progresista", y con relación a Ultramar afirmaba:

"... extinguir a todo trance la rebelión de Cuba y asegurar a toda costa la integridad nacional, sin hacer para ello concesiones que el honor de España no consiente, ni transacciones que el patriotismo de nuestro Partido rechaza; y una vez restablecida la paz, entrar para aquella isla en el camino de las reformas que la Constitución de 1869 ha ofrecido libremente a nuestros ciudadanos de Ultramar, y que han rechazado y han comenzado a plantearse en Puerto Rico, donde la tranquilidad no se ha perturbado y donde el complemento de estas reformas y la abolición de la esclavitud no han de influir para que se turbe" (9).

El Comité consultivo del Partido Liberal Reformista hizo suyo este Manifiesto, formalizando al propio tiempo un pacto o acuerdo de colaboración mutua entre ambos partidos. Este pacto consistiría fundamentalmente en un apoyo que el Partido Liberal Reformista de Puerto Rico se comprometía a dar al Partido Progresista Democrático Radical de la Península, en tanto que éste último haría lo propio en las Cortes y desde el Gobierno, para que se introdujeran en la isla las reformas que el Partido Liberal Reformista estimaba necesarias. Las principales reformas que solicitaba el Partido Liberal y que se recogían en el acuerdo, eran: la asimilación; la aplicación a la isla de la Constitución de 1869; la implantación de los derechos individuales; el sufragio universal; la separación de mandos en la isla; la Ley de Ayuntamientos y la abolición de la esclavitud (10).

2.- La Liga Nacional contra las Reformas y los Centros Hispano-Ultramarinos.-

El auge que desde la fundación del Partido Reformista iban logrando en Puerto Rico las ideas liberales, los triunfos obtenidos por el Partido en varias elecciones para diputados a Cortes y provinciales, así como el Pacto con el Partido Progresista Democrático Radical produjeron inquietud entre los elementos conservadores tanto de la isla como de la Metrópoli, y no tardaron mucho en reaccionar, tomando algunas medidas encaminadas a evitar continuase la política de reformas iniciada en 1868.

A tal efecto, se reunían en Madrid a finales de noviembre de 1871 un grupo de personalidades insulares y peninsulares, residentes en Madrid, para estudiar la forma de atajar los males que, en su opinión, estaban produciendo las reformas en Ultramar. De estas reuniones surgió la "Liga Nacional contra las Reformas", cuya directiva estaba integrada por relevantes personalidades del conservadurismo peninsular y por algunos insulares. Entre los principales figuraban D. Antonio Cánovas del Castillo, D. Adelardo López de Ayala, D. Francisco Romero Robledo, D. Pedro Antonio de Alarcón, D. Carlos Navarro Rodrigo (11).

Al mismo tiempo, D. Práxedes Mateo Sagasta, trabajando en la misma línea, fomentaba la fundación de "Centros Hispano-Ultramarinos", en varias de las principales capitales de provincia españolas que tenían especiales relaciones políticas o económicas con las Antillas: Madrid, Sevilla, Barcelona, Cádiz, Valencia y algunas otras.

Naturalmente que los conservadores insulares se prestaron de inmediato para colaborar con sus correligionarios de la Península, y al efecto contribuyeron con fondos a la propagación de los fines de la Liga Nacional, al tiempo que fundaban en la isla diversos Centros Hispano-Ultramarinos. El primero de ellos lo fue el de San Juan, el día 2 de enero de 1872, y su directiva estaba compuesta por la plana mayor del conservadurismo insular (12).

C.- La convocatoria de elecciones en Puerto Rico.- La campaña electoral.-

El general Gómez Pulido, hombre de ideas sumamente conservadoras, que había sustituido al Mariscal Baldrich en el gobierno de la isla en septiembre de 1871, publicó en Puerto Rico el Decreto sobre elecciones el día 4 de marzo (13). De acuerdo con él, las elecciones se llevarían a cabo con arreglo al Real Decreto de 1 de abril de 1871, y al Reglamento sobre elecciones que insertaba la misma Gaceta del día 5 de marzo.

Sagasta que, como hemos dicho, se había propuesto ganar a toda costa estas elecciones en la Península, quiso también asegurarse el triunfo de los elementos adictos al Gobierno en Puerto Rico, con el fin de fortalecer su posición en el Congreso. A tal efecto, el Ministro de Ultramar, Sr. Martín de Herrera, enviaba con fecha 12 de marzo una carta al Gobernador de Puerto Rico en estos términos:

"Respecto a la misma cuestión electoral, que es tan interesante, espera de V. el Gobierno todos los esfuerzos que quepan dentro de la ley para evitar la repetición del resultado de las anteriores, que sería de manera deplorable para nuestros altos intereses en Ultramar" (14).

Pero a esta petición se había adelantado ya el Gobernador, en carta fechada el 11 del mismo mes, en la que le aseguraba que no se repetiría ese resultado, es decir, que el Partido Conservador obtuviera un solo diputado electo: "Yo sacaré más y tranquilamente", aseguraba Gómez Pulido (15). Y más adelante, contestando a la ya citada carta del Sr. Martín de Herrera, le decía:

"Se trabaja con entereza y sin cuidado, porque nada me importa ni persona, con tal de que preste mi servicio. Cuente Ud. conmigo para todo y espero el apoyo de V. en cuanto le propongo, que será todo en beneficio de este País y de la Madre Patria.

La gente filibustera, cubierta con la máscara del radicalismo, me ha arrojado el guante y yo, hombre de lucha, lo he recogido; y venceré por la razón o por fuerza" (16).

1.- El comienzo de la manipulación electoral y del cunerismo en Puerto Rico.-

Siguiendo el ejemplo de los diferentes gobiernos de la Península, aunque lógicamente con distinto propósito, a partir de estas elecciones comienza en la isla la práctica de forzar las elecciones, con el fin de que el Gobierno de la Península pudiera obtener la mayoría en las Cortes. En el caso de Puerto Rico, el propósito era más fácil, habiendo como había dos únicos partidos. Cuando el Gobernador era de tendencia liberal *, el Partido Reformista tenía grandes posibilidades de obtener mayoría de candidatos electos, por la sencilla razón -estadísticamente comprobable- de tener más adeptos y simpatizantes. Cuando, por el contrario, el Gobernador era de tendencia conservadora, los resultados se inclinaban invariablemente hacia el Partido Conservador, aunque para lograrlo tuviera que echar mano "de la razón o de la fuerza" como decía Gómez Pulido. En cualquier caso, en Puerto Rico se cumplía también el principio de que el Gobierno que hacía las elecciones, obtenía mayoría de diputados (15).

Por lo que se refiere al cunerismo, la práctica del mismo había comenzado en 1869 en la isla y lo utilizaron ambos partidos, si bien con más asiduidad el Conservador, debido a su vinculación con el Gobierno. Esta práctica, como otras muchas del parlamentarismo, no era en sí ni buena ni mala; todo dependía del uso que se pretendiera hacer de ella. En este sentido nos parece acertada la postura adoptada por "El Progreso" en un artículo en el que se defendía precisamente de un ataque de la prensa conservadora por una propuesta de candidatos peninsulares:

"Gratuito e injustificado es el cargo que se nos hace porque los Srs. Padial y Baldorioty han estimulado a varios prohombres de la Península para que se presenten como candidatos en esta Provincia para las próximas elecciones de diputados y senadores. Las personas que recomiendan los Srs. Baldorioty y Padial son de un saber no común y en nuestro concepto dignísimos por más que diga un colega que amenazan graves peligros

al país y a la nación si resultan electos... Nuestros amigos Baldorioty y Padial están en su más perfecto derecho recomendando las personas que según su criterio crean apropiadas para representar al país y esas personas obran también dentro de la legalidad presentándose como candidatos.

Devaneos de imaginaciones calenturientas, exasperadas por crueles desengaños y esperanzas ilusorias muertas son los cargos que se hacen a los Srs. Baldorioty y Padial por haber presentado estos candidatos, como si ellos necesitaran permiso y poderes de nadie para obrar libremente como electores y elegibles en el presente caso" (16).

Otro era el caso cuando el Gobierno de la Península imponía al Gobernador la obligación de sacar ciertos individuos que ni conocían, ni tenían el más mínimo interés en las cuestiones de Puerto Rico, y que simplemente se limitaban a votar con el Gobierno. De ambos tipos se dieron numerosos ejemplos en Puerto Rico, como tendremos ocasión de apuntar.

2.- La campaña electoral.-

Fue ésta, sin duda alguna, la más dura de las que se habían llevado a cabo en la isla y en ella tomaron parte no solo los dos partidos políticos, sino también el propio Gobernador, ayudado por funcionarios, parientes y agentes contratados (17).

Los liberales, aun reconociendo la desventaja que para ellos y su causa representaba la actitud contraria del Gobernador, se lanzaron a la lucha electoral por medio de la prensa adicta, dispuestos a hacer por lo menos difícil la victoria de sus oponentes (18).

Los conservadores se limitaron a insistir una y otra vez en que su propósito era ni más ni menos que el de apoyar a personas que defendiesen ante todo y sobre todo la integridad territorial de España, dejando en un segundo plano la cuestión de las reformas (19):

"Ya lo dijimos: el país va a decir ahora simplemente si es español o separatista. Por las personas que vayan a formar parte de las Cortes que se han de reunir en Madrid va a saber el Gobierno si el ensayo de reformas políticas puede o no elevarse a ley fundamen-

tal y permanente o si, en vista de que las urnas puertorriqueñas sacan investiduras de diputados para dar gloria y respetabilidad a españoles como el Sr. Blanco, deben suprimirse, antes de plantearlo definitivamente, el sistema constitucional en estas provincias" (20).

El Gobernador, por su parte, llevó a cabo una doble campaña: por una parte, para mermar las fuerzas de los liberales y por otra para fortificar los ánimos de los conservadores. Todo esto, atendiendo a directrices que emanaban del Ministerio de Ultramar. El día 12 de marzo recibía el general Gómez Pulido una carta del Ministro, en la que, entre otras cosas, le comunicaba:

"A su debido tiempo recibirá V. un telegrama puesto de acuerdo con el Consejo de Ministros sobre el Manifiesto de Sanromá, Alvarez Peralta y Baldorioty a los electores de Puerto Rico. Es un documento escrito bajo las inspiraciones del espíritu antiespañol y lleno de falsas y pavorosas especies sobre el estado de la opinión y por tanto convenía y conviene que, usando V. de sus especiales facultades en materia de imprenta, no consienta su propagación" (21).

A esta petición contestó el Gobernador con otra de 22 del mismo mes en la que le daba cuenta de haber cumplimentado dicha petición con suma facilidad, pero añadía: "Ojalá me hubiera sido tan fácil el variar el censo electoral o al menos rectificar las listas!" (22).

Tenía razón en lamentarse el Gobernador, porque el punto fuerte de las elecciones contra los conservadores radicaba en que los liberales contaban con mayoría de seguidores en el país. Para superar este obstáculo apeló el Gobernador a toda clase de artimañas: excluir de las listas a los deudores de contribuciones, aunque no hubieran sido apremiados; arrestar a personas durante el período electoral por motivos fútiles, como el de hacer "propaganda sospechosa" o por celebrar reuniones en las casas o por proferir palabras subversivas contra la integridad nacional. Cuando no se podía probar nada concreto, se arrestaba por "sospechas de desorden público" (23).

En esta línea de actuación, el general Gómez Pulido separó

de la Secretaría del Gobierno a D. Arturo Soria, por sospechar estaba haciendo campaña a favor de los liberales (24). La lista de las manipulaciones sería bastante larga. Para concluir, mencionaremos solamente que repitió la artimaña del general Sanz de hacer recorrer las costas de la isla a un vapor de guerra, el cual transportaba oficiales que iban depositando sucesivamente sus votos en los distintos puertos que tocaba (25).

D.- Los resultados.-

En esta ocasión, las elecciones se llevaron a cabo con puntualidad los días 2 a 5 de abril y hecho el recuento de los votos resultó que el Partido Liberal Conservador había obtenido el triunfo en once distritos, logrando el Partido Liberal Reformista sacar solamente cuatro de sus candidatos (26).

E.- Comentarios.-

A tono con los resultados obtenidos, la reacción fue diversa: los conservadores, fijándose exclusivamente en los resultados, comentaban en la prensa:

"La provincia de Puerto Rico acaba de dar una gran prueba de cordura y fidelidad a la Nación española, de que forma parte, derrotando en las urnas a sus pretendidos "regeneradores"; a las alharacas de los amigos de la Internacional y del filibusterismo que audazmente había pedido el desarme de los Voluntarios y la disolución de las asociaciones patrióticas, ha contestado Puerto Rico dando un solemne mentís a los calumniadores del Partido, a los enemigos de la nacionalidad, a los embozados amigos de Céspedes. Decididamente, el vacío empieza a hacerse en torno a los prohombres del reformismo.

La isla de Puerto Rico, que es quizás el único país de América en que no ha corrido la sangre de sus hijos por causas políticas, quiere progreso, pero quiere paz; desea progreso, pero quiere seguir siendo española y a los que malignamente han querido trazar una odiosa línea divisoria entre el insular y el peninsular, ha contestado el país trazando otra entre españoles y separatistas.

El Partido Conservador corresponderá, estamos se-

guros de ello, como debe, a la confianza que en sus hombres más distinguidos ha depositado la mayoría del país, pidiendo a los poderes supremos de la Nación las reformas que realmente necesita esta provincia para progresar, sin caer en manos del filibusterismo, que arteramente trata de aprovecharse de ella para teñir sus bellos campos de sangre humana, como en Cuba los ha teñido" (27).

Los liberales, por boca de Labra, y fijándose más en el proceso que en los resultados, llegaban a la conclusión de que el Gobierno de Sagasta no deseaba tanto que fuesen a las Cortes auténticos representantes de Puerto Rico, como poder contar con quince votos más a su favor (28).

Finalmente, el Ministro de Ultramar se mostraba francamente satisfecho por el triunfo de los conservadores y por la activa participación que en el mismo había correspondido al general Gómez Pulido:

"El Gobierno lo estima en todo lo que vale y está altamente () de la patriótica y hábil conducta de V." (29).

En otra carta, ésta del 13 de mayo, volviendo sobre el mismo tema, le decía

"No creo que tengo necesidad de manifestar a V. cuánta ha sido mi satisfacción por el resultado de las elecciones de Diputados en esa isla, pues en los Diarios de las primeras Sesiones de las Cortes verá V. de qué manera he defendido a V., según era mi deber, de las acusaciones que se le han dirigido" (30).

El Gobernador, por su parte, relataba al Ministro con cierta delectación la forma astuta en que había procedido para conseguir sus propósitos, prometiéndole al mismo tiempo que en las próximas elecciones conseguiría sacar todos los candidatos conservadores (31). Indudablemente, el Gobernador de Puerto Rico se mostró aventajado discípulo de Sagasta, ya que consiguió algo que parecía totalmente imposible: en menos de un año logró hacer disminuir el número de votos radicales en 5,000 y aumentar el de los conservadores en 8,500, verdadera proeza que en una masa electoral de solamente 21,000 personas solo a base de artimañas era posible lograr (32).

NOTAS

- 1.- FERNANDEZ ALMAGRO, Melchor. Op.Cit., Tomo I, pág. 111 y sgts.
- 2.- TUÑON DE LARA, Manuel. Op.Cit., pág. 219.
- 3.- Diario de Sesiones de las Cortes, 1872, pág. 67.
- 4.- En estas elecciones triunfaron los 24 candidatos del Partido Liberal Reformista. Cf.: Archivo Histórico Nacional (Madrid). Sección de Ultramar, Legajo 5096/54.
- 5.- "La Razón", 1871, número 36.
- 6.- "El Progreso", 1871, número 32.
- 7.- Ibidem, número 33.
- 8.- CARR, Raymond. Op.Cit., págs 311 y 312.
- 9.- "La Razón", 1871, número 10.
- 10.- Ibidem, número 30.
- 11.- "Boletín Mercantil", 1871, número 136. En este mismo número se decía que los fines de tales sociedades no eran más que deshacer los planes de los enemigos de España y lograr la conservación de la integridad nacional en las Antillas. Sin embargo, en otro número posterior decía, refiriéndose al Centro Hispano-Ultramarino de San Juan: "El Centro Hispano-Ultramarino, inspirándose en las ideas del partido nacional de Cuba y del Conservador de Puerto Rico, representará genuinamente en el corazón de la Madre Patria a los Voluntarios de ambas Antillas, a los Casinos Españoles, a todos los hombres, en fin, que en estas provincias combatimos a los elementos laborantes y a los elementos radicales, sus auxiliares conscientes o inconscientes". Citado por "El Progreso", 1872, número 1.
- 12.- Formaban la Directiva del Centro las siguientes personas: general Gómez Pulido, Presidente honorario; D. José Ramón Fernández Martínez, Presidente efectivo; D. Pedro Díz Romero, Vicepresidente; D. Francisco Larroca Pascual y D. Fermín Martínez Villamil, Secretarios; D. Joaquín Peña Chávarri, Contador; D. Gerardo R. Soler, Tesorero; D. Bartolomé Borrás y el Marqués de Casacaracena, Vocales. Cf.: "Boletín Mercantil", 1872 número 3.
Comentando Labra la actuación de la Liga Nacional

decía lo siguiente: "Tampoco quiero decir lo que quizá convendría con otro propósito sobre los obstáculos que en la Península se pusieron al planteamiento y desarrollo de las nuevas instituciones coloniales. La famosa Liga antirreformista de 1872 prodigó todas las alarmas y todas las amenazas. Los reaccionarios ultramarinos impusieron no sé cuántas conspiraciones y motines en Puerto Rico, para demostrar al público la tesis maravillosa de que el país portorriqueño, ansioso de reformas, se levantaba precisamente cuando las reformas se iban a hacer y realizaba todo lo que los adversarios de éstas deseaban, para que no se saliese del "statu quo" ultramarino". Cf.: "La República y las libertades de Ultramar", (Madrid, Establecimiento Tipográfico de Alfredo Alonso, 1897), pág. 443.

- 13.- Gaceta de Puerto Rico, 1872, número 28. Archivo General de Puerto Rico (San Juan). Colección documental de la Diputación Provincial, Legajo 128, Expediente 27.
- 14.- Archivo Histórico Nacional (Madrid). Sección de Ultramar, Legajo 5109/52, número 4.
- 15.- Ibidem, Legajo 5109/52, número 2.
- 16.- Ibidem.
- 17.- Utilizamos aquí el adjetivo en su acepción genérica, como opuesto al de "conservador".
- 18.- ARTOLA, Miguel. Op.Cit., pág. 378.
- 19.- "El Progreso", 1871, número 32.
- 20.- Así lo reconocía explícitamente el Gobernador, una vez terminadas las elecciones, en carta dirigida al Ministro de Ultramar: "He tenido Corregidores, Alcaldes, Secretarios y unos agentes que han hecho maravillas; y sobre todo quien ha conseguido una gran parte con su inteligencia, autoridad y energía ha sido mi hijo, el Contador General, que lo mandé a recorrer los Departamentos de Arecibo, Aguadilla, San Germán, Mayagüez y Ponce, consiguiendo que no se retrajeran en algunos puntos, dando valor y empujando en otros, y señalando lo que debían de hacer en todos". Cf.: Archivo Histórico Nacional (Madrid). Sección de Ultramar, Legajo 5109/52, número 12.
- 21.- Una prueba de la actitud recelosa y contraria al Partido Liberal Reformista mantenida por las autoridades en estas elecciones la podemos ver en el siguiente documento, que se refiere a la denuncia hecha por el Alcalde del pueblo de Añasco contra el Presidente del Comité local Reformista, por un discurso que pronunció en

Añasco relativo a las próximas elecciones. Dice así la denuncia: "En la noche del 20 de los corrientes tuvo lugar una reunión electoral del partido liberal reformista con objeto de nombrar un Comité que organice los trabajos en las próximas elecciones.

Constituido dicho Comité, su Presidente D. Bruno Ruiz de Porras pronunció un discurso que por su lenguaje agresivo y poco comedido me pareció oportuno pedirle en copia íntegra y que he trasladado hasta con sus faltas ortográficas, en la que tengo el honor de someter a la consideración de V.E.

Como en ella observará V.E. por la llamada que en la misma aparece, al entregarme dicha copia se ha suprimido el párrafo que sustancialmente y subrayado aparece a continuación, para que obre en conocimiento de V.E. y pueda en su superior ilustración formar más exacto juicio de aquel documento...". El general Gómez Pulido pasó el texto del discurso al Fiscal de la Audiencia, para que dictaminara si podía ser objeto de una denuncia. El texto que remitía era el siguiente:

"Discurso pronunciado por el Presidente del Comité Liberal reformista del pueblo de Añasco en la noche del 20 de marzo de 1872:

"Hace nueve meses nos reunimos con igual objeto que hoy, acordar (sic) quién es el que merece nuestra confianza para representarnos en las cortes ordinarias. Ahora como entonces me habeis honrado nombrándome Presidente del Comité liberal reformista de este pueblo; doy a Vds. las gracias.

Teníamos fundadas esperanzas de que nuestras aspiraciones serían satisfechas, que antes de terminar la legislatura se habría discutido y puesta en observancia la constitución que debía regirnos y que considerados y trabados (sic) como hermanos, gozaríamos hoy de los mismos decretos que las demás provincias de la península española. Nos engañamos la legislatura terminó y continuamos desheredados permanecemos sujetos al sistema colonial. Pero ¿son culpables se han hecho cómplices de ese resultado nuestros diputados reformistas? No apenas llegaron al congreso se suspendieron las sesiones, reanudadas volvieron a suspenderse sin que nuestros representantes hubiesen podido hacer oír su voz y disueltas últimamente han sin embargo nuestros diputados hecho cuanto han podido aprovechando las oportunidades y ya de palabra ya por escrito han expuesto nuestras quejas reclamando justicia y si nada han conseguido débese a la marcha retrógrada de la política en la madre patria y a las maquinaciones de nuestros adversarios que favorecidos por las circuns-

tancias lograron paralizar las reformas; para ello se han atropellado los fueros de la justicia y faltándose a solemnes promesas. Nuestros adversarios para conseguir sus fines se han valido de medios poco nobles, calumniando a nuestros diputados atribuyéndoles miras que no tienen y para oscurecer la verdad para torcer la justicia han pretendido presentarlos presentarnos como traidores enemigos de la nacionalidad española ¡Traidores nosotros! con cuánto más fundamento puede aplicarse ese calificativo a muchos de los que pretenden arrojarnos lodo al rostro y haciendo alarde de patriotismo, antifaz con que cubren sus bastardas ambiciones, han sido perjuros y a los que la historia imparcial se encarga de colocar en la relación de los verdaderos traidores al lado de los Obispos (...) y Condes San Julián!

Algunos de nuestros correligionarios, pocos por cierto, unos desanimados amedrentados y otros dominados por ciertas influencias creen no deben concurrir a los colegios electorales y dicen ¿si nada hemos de conseguir para qué nombrar diputados? Las contrariedades los desalientan pierden la esperanza y se resignan a continuar sufriendo el látigo sin exalar una sola queja: pobres de espíritu olvidan que la constancia todo lo vence y que nuestra causa es demasiado justa, demasiado santa y no debemos abandonarla.

Si tenemos conciencia de nuestra propia dignidad si abrigamos el convencimiento de que las reformas se nos deben de justicia ¿por qué se ha de apoderar de nosotros el desaliento? ¿por qué no hemos de concurrir a las urnas electorales y procurar por todos los medios legales sacar triunfante nuestro candidato, cuando la ley nos llama y no es solo un derecho que vamos a ejercer sino un deber que tenemos que cumplir? (!).

Firme en nuestro derecho, sostenidos y alentados por la razón que no (s) asiste, tengamos fe, tengamos esperanza, no volvamos la espalda al enemigo, ni le abandonemos el campo sin combatir. En nuestras filas no debe oírse la voz de alto ni retirada y sí repetir incesantemente adelante y siempre adelante.

Perseveremos: al fin se nos hará justicia; al fin gozaremos de los derechos de hombres libres ciudadanos de una nación ilustrada. No lo dudeis liberales reformistas, es en vano, es temerario oponer diques al torrente de las ideas, éstas se siembran, fructifican, se propagan, adquieren fuerza y se abren paso franco por en medio de los mayores obstáculos. Nuestras aspiraciones son legítimas, la nación tiene contraída con nosotros una deuda sagrada que está en el deber de sa-

tisfacer: ¿Qué pedimos? ¿qué deseamos? Que la ley impere y no el capricho; que tengamos iguales deberes, pero también iguales derechos los españoles nacidos y residentes allende y aquende del atlántico y que sino es un sarcasmo el que se nos llame hermanos, hijos de una misma madre justo más justo es se nos dé asiento al igual de nuestros hermanos en el banquete de la libertad y no se nos coloque en mesa separada a comer las sobras cual si fuéramos huérfanos alimentados por caridad.

Muchos dictorios nos prodigan pero ellos saben perfectamente que no los merecemos; usan de ese sistema como un ardiz para amedrentar a los pusilánimes y hacer que cuando menos se retraigan.

El Comité convencido de que Don Manuel Corchado y Juarbe no ha desmerecido de nuestra confianza os propone su reelección para diputado en las próximas cortes ordinarias ¿Lo aceptais?. Bruno Ruiz de Porras.

(!) En este lugar se ha omitido un párrafo en que se decía a los electores que nadie por ningún concepto tenía derecho para ejercer coacción sobre ellos porque estaban terminantes las disposiciones penales y se les interrogaba que si había alguna que lo hiciera quién era ese? por qué? y con qué derecho?"

Después de haber examinado el anterior discurso, el Fiscal de la Audiencia dió la siguiente opinión:

"He examinado con detenimiento la copia del discurso pronunciado por el Presidente del Comité reformista de Añasco que V.E. se ha servido remitirme y le devuelvo; y aun cuando en él resalta la pasión política exagerada, como suele suceder en esta clase de documentos destinados a halagar a las personas a quienes se dirigen, no encuentro nada que le haga justificable de oficio bajo ningun aspecto.

En dicho documento se hacen apreciaciones políticas bajo determinado punto de vista y se dirigen acusaciones más o menos fuertes a los adversarios políticos del que le suscribe, pero en lo primero nada encuentro subversivo, ni aun siquiera como desacato al principio de Autoridad de suerte que deba caer bajo el dominio de los tribunales; y en lo segundo, aun cuando el lenguaje es destemplado y virulento, las expresiones empleadas pudieran constituir una injuria contra el partido al que se dirigen y esto solo podría perseguirse a instancia de parte y nunca de oficio, por no tratarse de Autoridades ni de corporaciones ni clases determinadas del Estado". Cf.: Archivo Histórico Nacional (Madrid). Sección de Ultramar, Legajo 5101/1.

El domingo, día 18 de junio, publicaba "El Progreso" la candidatura oficial del Partido Reformista, aconsejando al propio tiempo a sus correligionarios que votasen por la misma. La lista de candidatos era la siguiente: Primer Distrito: D. Luis María Pastor; Segundo: D. José Álvarez Peralta; Tercero: D. Luis Padial; Cuarto: D. Juan Antonio Hernández Arbizu; Quinto: D. Eurípides Escoriaza; Sexto: D. Manuel Corchado; Séptimo: D. José Julián Acosta y Calvo; Octavo: (no presentó candidato); Noveno: D. Román Baldorioty de Castro; Décimo: D. José Facundo Cintrón; Undécimo: D. Joaquín María Sanromá; Duodécimo: D. Francisco Mariano Quiñones; Trece: D. Julián E. Blanco y Sosa; Catorce: D. Luis Padial y Quince: D. Gregorio Ledesma y Navajas.

22.- En el lenguaje político actual de Puerto Rico podríamos decir que los conservadores querían convertir estas elecciones en una especie de referéndum sobre el "status político" de la isla.

23.- "Boletín Mercantil", 1872, número 29.

24.- Archivo Histórico Nacional (Madrid). Sección de Ultramar, Legajo 5109/52, número 4.

25.- La forma de impedir la publicación del Manifiesto consistió en llamar a La Fortaleza al Director de "El Progreso" y prohibirle expresamente la publicación del mismo, alegando peligros para la tranquilidad de la isla. Cf. Archivo Histórico Nacional (Madrid). Sección de Ultramar, Legajo 5109/52, número 7.

Por lo que se refiere al censo electoral, decía el Gobernador al Ministro de Ultramar, Sr. Balaguer, en carta en 29 de diciembre de 1871:

"Por el pronto adelantaré a V. que mi opinión es el que las elecciones, con el absurdo censo que existe darán por resultado el triunfo de los enemigos de España. Y que en el caso que éste no pueda variarse, es necesario al menos que se sirva V. apoyar lo que yo propongo; pues no basta a remediar el mal el nombramiento de delegados propuesta por el general Baldrich; tanto porque son en corto número, como porque los delegados no ejercen funciones administrativas". Cf.: Archivo Histórico Nacional (Madrid). Sección de Ultramar, Legajo 5109/50, números 1 y 2.

La diferente postura del general Gómez Pulido, conservador intransigente, frente a la del anterior Gobernador Mariscal Baldrich, liberal moderado, se demuestra en una serie de juicios acerca del sentido de los dos partidos políticos de la isla. Ya hemos expuesto en el capítulo anterior la postura del Mariscal Baldrich,

y su deseo de crear un partido "moderado", de orden, que sirviera de vehículo adecuado para plantear las reformas convenientes para la isla. En este sentido informaba a finales de 1870 al Ministro de Ultramar sobre las tres tendencias que, en su opinión, existían en Puerto Rico en aquel momento:

"Hay tres partidos definidos con distintas aspiraciones:

1.- El Radical, independiente, formado por un pequeño número que trabaja sin cesar clandestinamente, pero con la tenacidad y sutileza que han empleado siempre en su propaganda política los partidos separatistas del continente americano.

2.- El llamado Conservador, que se declara en abierta oposición al Gobierno de la Metrópoli y que rechaza las más prudentes reformas.

3.- El Reformista, que no quiere las exageraciones del radicalismo, sino la asimilación en cuanto sea posible, al régimen político y administrativo de las demás provincias de la Nación". Cf.: Archivo Histórico Nacional (Madrid). Sección de Ultramar, Legajo 5113/1.

Para el general Gómez Pulido solamente existen dos partidos: el Español y el Radical:

"Es necesario tener en cuenta que todos los movimientos que han tenido lugar en Cuba y los dos en esta isla han sido separatistas. Que antes de la Revolución de Septiembre no existían en esta isla tertulias, comités ni prensa progresista; y que no han estado en este sentido en correspondencia con los centros liberales de España.

¿Cómo y de dónde ha nacido este partido radical, desde que tuvo lugar la Revolución? Para conocerlo, basta mirar a su frente a todos los hombres conocidos por sus ideas anexionistas antes, separatistas después. Hay que tener presente que un considerable número de Curas párrocos, Maestros, Escribanos y Médicos pertenecen a esas ideas y de aquí se desprende los que difundirán en los pueblos". Cf.: Archivo Histórico Nacional. Sección de Ultramar, Legajo 5109/50.

En otro documento -carta al Almirante Topete de enero de 1872- insiste sobre el mismo tema:

"También es necesario no perder de vista que cuantos movimientos han tenido lugar en las dos islas han sido de carácter anexionista antes y separatista después; y que en la de Puerto Rico no se conocían antes de la Revolución los partidos progresista, unionista y demócrata que contribuyeron a ella.

¿De dónde, pues, ha surgido el partido que ahora

se llama radical? ¿No ha de inspirar desconfianza cuando se ve que con honrosas excepciones lo forman hombres comprometidos en los sucesos de Lares y los que han sido siempre conocidos por sus ideas anexionistas o separatistas o que aspiran al sistema establecido en el Canadá?

Yo vine aquí con el firme propósito de calmar la profunda excitación existente entre los partidos Español y Radical y a procurar unirlos... Los únicos que lo han verificado (el acercamiento al Gobernador) han sido los que pertenecen al Partido Español. Lo que se llama Partido Radical se ha retraído de mí completamente". Cf.: Archivo Histórico Nacional (Madrid), Sección de Ultramar, Legajo 5109/51.

26.- Ibidem, Legajos 5100 y 5101.

27.- En relación con esta decisión del Gobernador, transcribimos a continuación una carta dirigida por Arturo Soria al Ministro de Ultramar, en la que le expone lo que podríamos considerar como un problema de conciencia en un tono y con una sinceridad muy diferentes a la interpretación que de esta postura hizo el Gobernador:

"Hoy por hoy reina la más completa tranquilidad (en la isla) sin temor alguno de trastornos, desembarcos ni cosa parecida. El Partido Reformista, dentro del cual están confundidos los liberales de buena fe y los que aspiran a la separación de la madre patria, muy disgustado porque el Sr. Gómez Pulido sigue una conducta diametralmente opuesta a la del Mariscal Baldrich con lo que, excusado es añadir, el conservador está en extremo contento y satisfecho.

La formación del Partido Tibio, bello ideal de los amantes de la causa española al par que de las doctrinas liberales, destinado a moderar las exageradas tendencias de los unos y de los otros, es cada vez más difícil y hoy por hoy punto menos que imposible por causas que no puedo explicar y que más adelante referiré, cuando me sea más conocido el país.

Por mi parte, secundo lealmente las órdenes de mi inmediato jefe y las aspiraciones del Partido Conservador por más que, en mi concepto, no van muy acertados en algunas cosas los hombres más caracterizados del Partido Español. Y no es posible otra cosa a un funcionario de ésta o de la Antilla hermana o de ese Ministerio, mientras impere la hábil táctica de arrojar la nota de filibustero o vendido a cualquiera que no ceda en un todo a sus deseos". Cf.: Archivo Histórico Nacional (Madrid), Sección de Ultramar, Legajo 5109/50, número 4.

Esta postura digna y honesta no fue, sin embargo,

del agrado del general Gómez Pulido, que decretó su separación del cargo, alegando que estaba en connivencia con los reformistas:

"Le remito a V. -decía el Gobernador en carta al Ministro de Ultramar, Sr. Martín de Herrera- el oficio dando conocimiento de lo acaecido con el Secretario del Gobierno, D. Arturo Soria...

Le diré a V. que he sabido positivamente que se venía tratando hace muchos días de ese asunto entre él y los radicales, que aquí lo son únicamente en el nombre, porque cuanto menos son autonomistas en la forma del Canadá; y que los más interesados en ello son los que se llaman "patos o tibios", fracción que ha querido aparecer como de orden engañando a todos para mejor lograr sus deseos y que son los que ocasionaron al general Baldrich, que los creyó de buena fe, la situación en la que se colocara...

En el momento me he ocupado de destruir su candidatura en Quebradillas y estoy resuelto a llegar hasta el extremo, si es necesario, de que me lleven al Tribunal Supremo de Justicia, pues mi honra y mi dignidad están en ello interesadas". Cf.: Archivo Histórico Nacional (Madrid). Sección de Ultramar, Legajo 5109/52, número 6.

La opinión del general Gómez Pulido no era objetiva, pero su intención estaba clara: sus ideas políticas y su carácter militar inflexible no le permitían visibilizar más que dos posiciones político-partidistas: o se era español ante todo y sobre todo o se era separatista; no cabía ni era conveniente una tercera postura que podía restar fuerza al Partido Conservador, ya que muchas personas en la isla hubieran aceptado el programa moderado de los "tibios" de pedir ciertas reformas totalmente necesarias para la isla, y esto hubiera restado fuerzas y prestigio al Partido Conservador.

28.- "El País", 1872, números 74 y 87.

29.- Archivo de las Cortes. Sección de Expedientes, Legajo 69, número 5. Pueden verse los resultados en los Cuadros y Mapas electorales adjuntos.

30.- "Boletín Mercantil", 1872, número 41.

32.- LABRA, Rafael María de: "Una Campaña parlamentaria", (Madrid, Imprenta de M.G. Hernández, 1873), pág. 84.

Joaquín María Sanromá, diputado elegido por el Distrito de Humacao en estas elecciones y miembro en la legislatura de 1872-73, decía contestando a un discurso del Sr. Gamazo, entre otras cosas:

"Señores, durante las dos primeras elecciones habían sido diputados de Puerto Rico personas que allí representaban algo, como riqueza, industria, talento, movimiento científico, o acaso... representaban las aspiraciones naturales del país hacia las mejoras, hacia el progreso. Vino tal vez alguno que no tenía la suerte de haber nacido en el país, que no tenía allí propiedad; pero si alguno fue elegido sin tener aquellas condiciones, sería como premio tal vez inmerecido, tal vez excesivo a trabajos humildes, pero leales, que pudiera haber hecho en el seno de comisiones o en informaciones dedicadas a producir alguna mejora en la isla. La política sagastina varió por completo este orden de cosas, y en vez de querer quince diputados por Puerto Rico, aspiró a traer quince individuos más de la mayoría. Cuidado, señores, yo no niego que alguno de los que vinieron tenían arraigo en el país; yo lo que digo es que tanto éstos como los que no le tenían, vinieron aquí sin fuerza ni voluntad propia, con un ministerialismo absoluto, teniendo las manos atadas para proponer todas las reformas que hubieran podido reclamar en provecho de la isla.

Así es, señores, que a mí me daba pena ver la situación de aquellos hombres, por otra parte tan dignos de aprecio. Veían que a la diputación provincial de la isla se la dejaba sin atribuciones, queriendo rebajarla a la categoría de un consejo colonial, y sin embargo no protestaban. Veían que no se aplica la ley municipal, y no protestaban. Veían que los fondos con que se había de mantener el Erario de Puerto Rico iban a la isla de Cuba solo por una orden, por un deseo de las autoridades de la primera de las Antillas, y no protestaban. Veían que en todo, por todo y para todo se subordinaban a los intereses de Cuba los intereses de Puerto Rico, y ellos sufrían esto y consentían que Puerto Rico se considerase como una especie de berruga adherida a la isla de Cuba. No lo hacían con mala intención, sino porque no podían hacer otra cosa; porque venían aquí completamente ateniéndose a la voluntad de aquel Gobierno, que en materia de reformas para Puerto Rico estaba por el absoluto estacionamiento". Cf.: Diario de Sesiones de las Cortes, 1872, pág. 424.

33.- Archivo Histórico Nacional (Madrid). Sección de Ultramar, Legajo 5109/52, número 14. El día 12 de marzo el Ministro de Ultramar había enviado una carta al Gobernador incluyéndole la lista de los candidatos por el Comité Electoral de esta Capital (Madrid):

"Ahora debo añadirle que siendo quince los diputados que ha de elegir Puerto Rico y habiéndome recomen-

dado el Comité Electoral de esta Capital en la elección que preside el general Saz (y Posse) a los siete candidatos comprendidos en la adjunta nota, quede lugar para las recomendaciones hechas por el Sr. Topete y reiteradas por mí.

(Nota de los candidatos recomendados: Marqués de Machicote, Jaime Terol y Ortega, Jesús Martínez, General Sanz y Posse, Zacarías Carumo, Sebastián Plaja y Víctor Balaguer) ". Cf.: Archivo Histórico Nacional (Madrid). Sección de Ultramar, Legajo 5109/52, número 4.

34.- Ibidem, Legajo 5109/52, número 16.

35.- En carta fechada el 12 de abril comunicaba el Gobernador al Ministro de Ultramar sus comentarios sobre las elecciones:

"Mi estimado amigo: Ya sabrá V. por mi telegrama el triunfo obtenido en esta isla que indudablemente le debe haber sorprendido, tanto por haber hecho las elecciones con las mismas listas y el mismo censo que en el año anterior, en que únicamente salió el general Sanz en la Capital y a costa de los desórdenes graves que ocurrieron, como por lo que dije a V. en mi telegrama cifrado de 16 de febrero.

Yo abrigaba legítimas esperanzas de sacar mayoría, según el plan que me había propuesto; pero debía señalar el mal al Gobierno, y además es un deber en la Autoridad el no asegurar hechos que acaso no se realicen pues sabe V. mejor que yo que los cálculos más seguros se desvanecen con facilidad, y mucho más en asuntos electorales.

He guardado una profunda reserva, porque en ella estribaba parte de mi fuerza. De este modo he conseguido adormecer algún tanto al partido anti-español, pues me presentaba sin esperanza alguna de éxito; y con ese sistema he conseguido que trabaje con empeño y entusiasmo el Partido Español, pues de saber que se ganaban siete u ocho distritos solamente, se hubieran abandonado a la confianza, porque el sello peculiar de este país es la apatía en todo.

He tenido Corregidores, Alcaldes, Secretarios y unos cuantos agentes que han hecho maravillas; y sobre todo quien ha conseguido una gran parte, con su inteligencia, actividad y energía ha sido mi hijo, el Contador General, que lo mandé a recorrer los departamentos de Arecibo, Aguadilla, San Germán, Mayagüez y Ponce, consiguiendo que no se retrajesen en algunos puntos, dando valor y empujando en otros; y señalando lo que habían de hacer en todos; porque aquí falta práctica aunque haya voluntad.

En el correo inglés del 27 le mandaré a V. unas notas para que esté al corriente de lo que se ha hecho y pueda contestar.

He quedado estropeado porque todo me lo he tenido que hacer yo, pues solo un oficial de la Secretaría, D. Manuel Montoto es el que ha podido ayudarme, menos en lo de carácter reservado: y aunque el Jefe de Negociado D. José Aragón, se ha conducido lealmente, es muy cortito para los asuntos de interés.

Están haciendo representaciones atroces contra mí y mañana salen dos personas a unirse con Blanco Sosa en San Thomas y dirigirse a esa para presentarlas a S. M.

Es lógico el derecho del pataleo y a nadie puede negársele.

En los distritos de Aguadilla y Utuado acudieron a mi propuesta de conciliación y salieron por ese medio elegidos con facilidad Gallostra y Vida.

En Quebradillas se hizo por completo la fusión conciliadora para derrotar al desleal Secretario del Gobierno, D. Arturo Soria; y como debe V. comprender, heché (sic) allí todo el peso de mi influencia personal y de autoridad, pues mi honra estaba interesada en hacer palpable que el Sr. Soria, al mismo tiempo que faltaba a la lealtad de empleado, me había vendido villanamente como autoridad y como particular.

Los reformistas exigieron un radical de los de España y de importancia y como en Aguadilla y Utuado accedieron a que fueran conservadores los candidatos, era natural acceder a su petición; y entre los que presentaron designé a Mosquera, pues lo dejaron a mi elección, lo que me parece aprobará V. también.

En otras elecciones, creo que ganaremos todos los distritos; y en esta no han podido sacar los llamados radicales uno solo del país, pues Alvarez Peralta hace 26 años que está ausente de la isla.

Ahora estoy en la cuestión de Senadores, que es la difícil, pues tenemos en contra los 24 votos de la Diputación Provincial; pero se sacará todo el partido posible, para lo que no descanso un momento; así es que esta carta está suspendida muchas veces, y no tengo tiempo de rectificar, porque el correo se va a marchar.

Consérvese V. bueno y queda suyo affmo. amigo S.S.
Cf.: Archivo Histórico Nacional (Madrid). Sección de Ultramar, Legajo 5109/52, número 12.

El día 13 de abril enviaba una calurosa felicitación el Ministro de Ultramar al Gobernador de la isla, por el triunfo obtenido:

"Mi estimado General: El triunfo obtenido por el Gobierno en las elecciones de Puerto Rico, en el cual tanta parte ha tenido la buena política de V. ha causado la más grande satisfacción en Madrid y en toda España a los amantes sinceros de la integridad y de la honra nacional, no habiendo sido menor el efecto producido en Cuba por un resultado que adquiere su verdadera importancia cuando se le compara con el de las anteriores elecciones: 11 diputados liberales conservadores contra 4 radicales, en vez de 1 contra 14, suviendo de punto su mérito al considerar el censo, las listas y el plazo angustioso en que estábamos encerrados a mi entrada en el Ministerio...

Ese mismo éxito debe confirmarnos en el espíritu que inspira nuestros actos y que en la gobernación de las colonias no nos deja ver pequeños intereses de partido y sí solo el supremo de la nación. Puerto Rico ha respondido a nuestras levantadas miras, y yo espero que lo mismo han de hacer Cuba y Filipinas.

Cada día tengo nuevos motivos para afirmarme en mi propósito de encerrarme el tiempo que permanezca en este puesto a que me ha traído un deber penoso en tres ideas capitales, que he indicado a V. anteriormente: afianzar o restablecer a toda costa el orden y la unión de las provincias ultramarinas a la madre patria, poner su hacienda en el mejor pie que respectivamente consienta su estado y dar a su administración condiciones severas de celo, inteligencia y moralidad.

Como sé que V. se halla en igual ánimo, espero su decidida cooperación, como puede V. contar con todo mi apoyo.

Con la mayoría obtenida también aquí por el Gobierno en las últimas elecciones, a pesar de la formidable cuanto monstruosa coalición con que ha tenido que luchar, es de esperar que se inaugure un período de vida normal, aunque antes haya que vencer otro género de obstáculos, para que el país comience a disfrutar los beneficios de una libertad ordenada y verdadera.

Propóngame V. y dígame con entera confianza todo lo que le ocurra con anteriores indicaciones mías y cuanto conduzca a la mejora de la administración y gobierno de esa Antilla y disponga de la consideración y amistad de su afmo...". Cf.: Archivo Histórico Nacional (Madrid). Sección de Ultramar, Legajo 5109/52, número 14.

35.- Diario de Sesiones de las Cortes, 1872, pág. 424. GONTAN, José Antonio: "Historia político-social de Puerto Rico" (San Juan, Editorial Esther, 1945), págs. 130 y 131.

Por su parte, Labra intervino en el Congreso para impugnar el Acta del Distrito de San Juan y, entre otras acusaciones, se refería a esta cuestión de las listas electorales, afirmando la existencia de un fraude muy claro: el Gobernador de Puerto Rico decretó que, por la premura del tiempo, rigieran para estas elecciones las mismas listas que sirvieron para las de 1871. Las de este año contenían 19,789 electores, en tanto que según las Actas de de 1872 se elevaban a 27,878. Continuaba diciendo: "Aquí tengo el Acta de este año (de San Juan), según la cual el total de electores subió a 3,453, de este modo: votaron 2,622; se abstuvieron 831. En 1871, según las Actas que existen en el Archivo de esta Cámara, votaron 2,144 electores; se abstuvieron 556; total en lista 2,700. Por manera que hay una diferencia de 753 electores incluidos este año, bastante para invalidar la elección". Cf.: Diario de Sesiones de las Cortes, 1872, págs. 208 a 212.

CUADRO I

RESULTADOS

(1872)

10

<u>DISTRITO</u>	<u>POBLACION</u>	<u>ELECTORES</u>	<u>RELACION Hab/Elec</u>	<u>VOTANTES</u>	<u>ABST.</u>	<u>CANDIDATOS ELEGIDOS</u>	<u>VOTOS</u>
CAPITAL	3,453			2,622	24.07	SANZ Y POSSE, José L.	2,015
VEGA BAJA	906			763	15.78	ALVAREZ PERALTA, José A.	541
ARCIBO	1,979			1,000	49.47	FERNANDEZ MARTINEZ, José Ramón	923
QUEBRADILLAS	1,044			795	23.95	MOSQUERA, Tomás María	708
AGUADILLA	1,475			1,185	19.66	VIDA Y PALACIOS, Fernando	765
MAYAGUEZ	2,307			1,311	43.17	GONZALEZ LLORENTE, Antonio	789
SAN GERMAN	1,379			445	67.73	SEDANO Y AYSTERAN, Carlos	430
SABANA GRANDE	797			552	30.74	LABRA, Rafael María de	285
PONCE	2,240			1,584	29.29	BECERRA Y GARCIA, Manuel	857
GUAYAMA	1,303			991	23.94	LOPEZ DE BUSTAMANTE, Eugenio	440
MANACAO	913			766	16.10	SABROMA, Joaquín María	512
RIO PIEDRAS	725*			571*	21.24	OTEIZA, Francisco Javier de	295
CACUAS	936			742	16.25	DIZ ROMERO, Pedro	270
CONJO	901**			732**	18.76	CORTES LLANOS, Bonifacio	402
UTUADO	1,126			694	38.37	GALLOSTRA Y FRAU, Anibal	414
	21,434			14,753	29.23		
	617,328		28.80				

FUENTES: Archivo de las Cortes. Sección de Expedientes, Legajo 69, número 5

* Faltan los datos de Río Grande

** Faltan los datos de Barranquitas

CUADRO II

(1872)

1@

CONSERVADORES:

SANZ Y POSSE, José Laureano	San Juan
FERNANDEZ MARTINEZ, José R.....	Arecibo
MOSQUERA, Tomás María.....	Quebradillas
VIDA Y PALACIOS, Fernando.....	Aguadilla
GONZALEZ LLORENTE, Antonio.....	Mayagüez
SEDANO AYESTERAN, Carlos.....	San Germán
LOPEZ BUSTAMANTE, Eugenio.....	Guayama
OTeyZA, Francisco Javier de.....	Rio Piedras
DIZ ROMERO, Pedro.....	Caguas
CORTES LLANOS, Bonifacio.....	Coamo
GALLOSTRA FRAU, José.....	Utuado

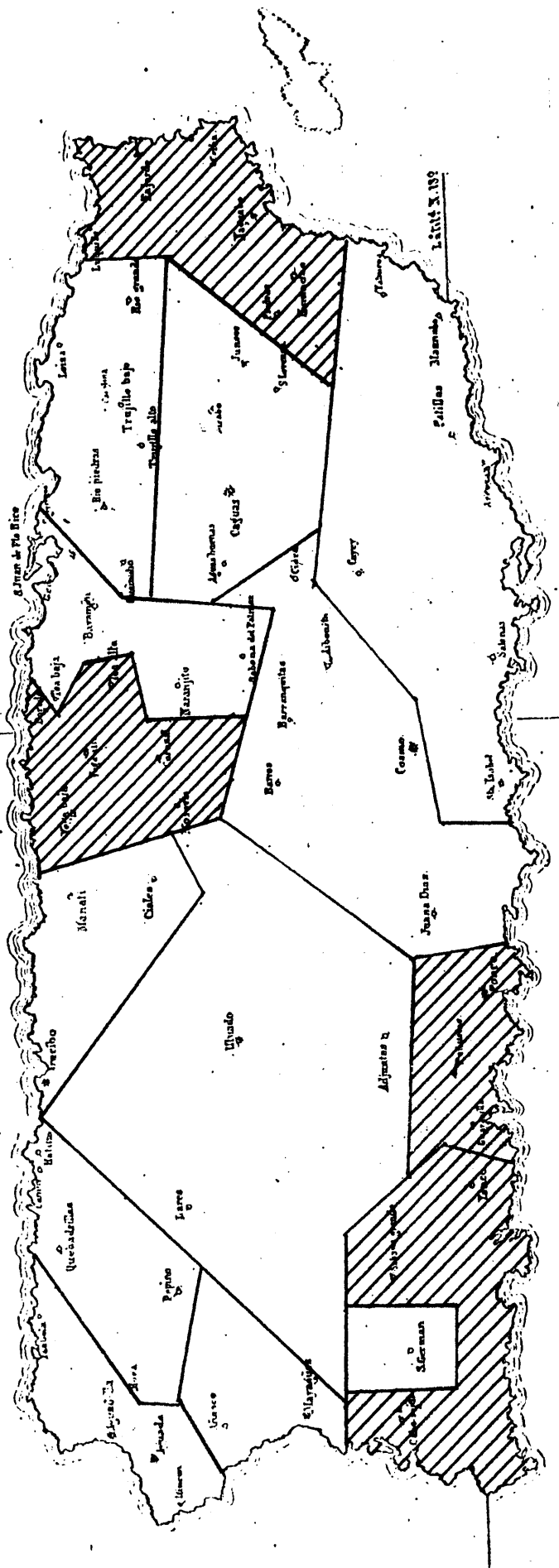
LIBERALES:

ALVAREZ PERALTA, José Antonio.....	Vega baja
BECERRA GARCIA, Manuel.....	Ponce
SANROMA, Joaquín María.....	Humacao
LABRA, Rafael María de	Sabana gran- de.

- - - - -

10

LIBERALES

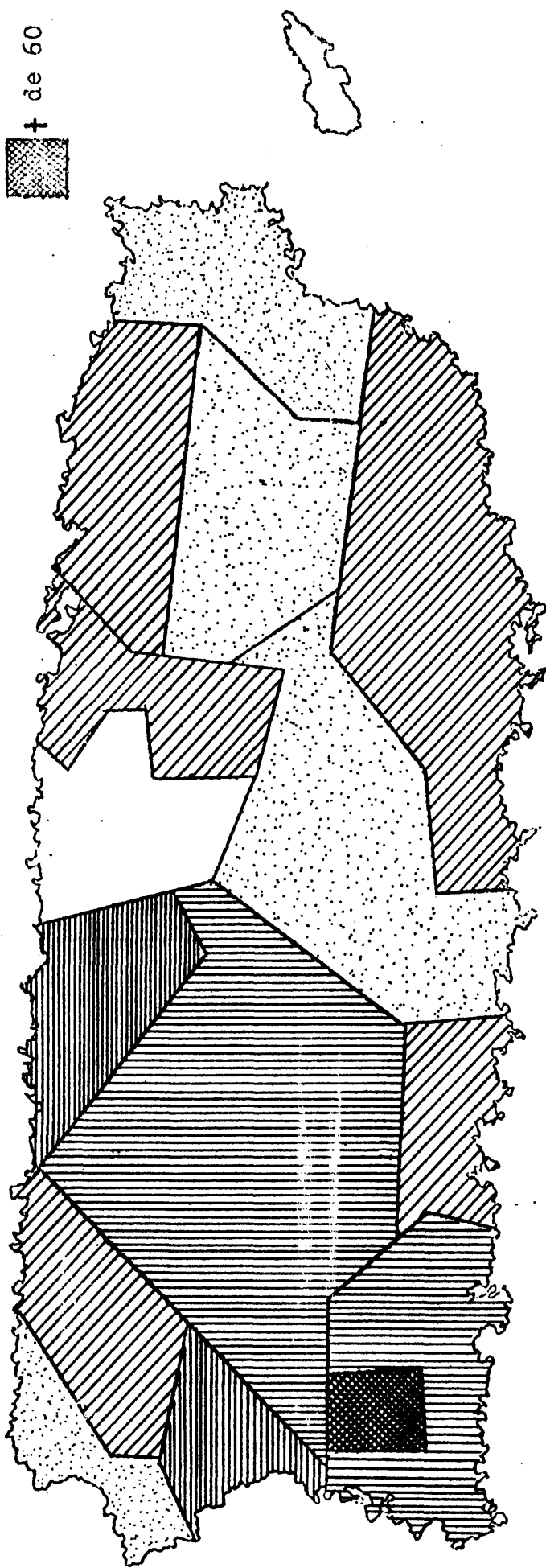
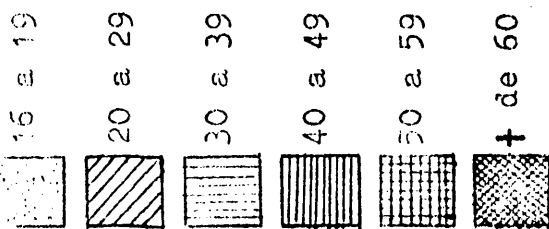


ABSTENCIONES

(1872)

10

Media: 29.23



2.4. LA ELECCION GENERAL DE 1872 (segunda)

A.- La situación política en la Península: La caída del Gobierno de Sagasta y la formación de uno nuevo por Ruiz Zorrilla.-

Poca duración tuvieron las Cortes de Abril de 1872, porque el Gobierno de Sagasta que las había convocado, tuvo que dimitir y después de un Gobierno relámpago de Serrano -20 días- el Rey llamó de nuevo a Ruiz Zorrilla, quien obtuvo la disolución de las Cortes el día 24 de junio (1).

Paradójicamente, no derribó al Gobierno de Sagasta ni la guerra carlista ni la guerra de Cuba, sino una simple escaramuza parlamentaria: una transferencia secreta de fondos de la Caja de Ultramar al Ministerio de la Gobernación fue descubierta y utilizada como arma contra el Gobierno por un diputado republicano (2). A lo largo del debate en torno a este asunto, que Sagasta no negó, se dejó entrever la sospecha de haber sido utilizados para sufragar los gastos electorales en las elecciones de abril. Aunque nunca llegó a saberse el destino real de la transferencia, el "affaire" logró su objetivo, ya que Sagasta dimitía el 22 de mayo.

B.- La situación político-partidista en Puerto Rico.-

El cambio de Gobierno trajo como consecuencia la sustitución del Ministro de Ultramar, Martín de Herrera, primero por Gasset y Artime (junio-julio de 1872), y luego por Mosquera. A su vez, el nuevo Ministro relevó de su cargo al general Gómez Pulido y nombró para sustituirle al general D. Simón de la Torre, quien llegó a Puerto Rico a finales de julio (3).

La subida al poder de Ruiz Zorrilla satisfizo grandemente a los liberales, quienes por medio de sus periódicos hicieron pública su intención de apoyar al nuevo Ministerio, según había

sido acordado en el pacto establecido en 1871 (4). Por su parte, el Comité Consultivo del Partido Liberal Reformista envió un telegrama al jefe del Partido Radical, Ruiz Zorrilla, prometiéndole seguir unido al mismo y afirmando tener la plena confianza en que éste llevaría a cabo en Puerto Rico las reformas prometidas y contenidas en el Manifiesto del Partido Radical publicado en octubre de 1871 (5).

No se quedaron atrás los conservadores en cuanto al intento de grangearse las simpatías del nuevo Gobierno y sobre todo del Ministro de Ultramar, Gasset y Artime, al que suponían "digno sucesor de los Ayala, los Topete, de los Mosqueras y los Martín de Herrera", al paso que en el mismo artículo del "Boletín Mercantil" llamaban su atención contra las intenciones antiespañolas de los reformistas de la isla:

"Ante la inquebrantable energía de un Ministro que se ha propuesto ser español sobre todo, salvando las Colonias con o contra los principios, se han de estrechar fatalmente los proyectos insensatos de los Labra y de los Sanromá, de los Blancos y de los Cintrón, de los Padial y de los Alvarez Peralta, de todo ese partido, en fin, cuya marcha tenebrosa no puede menos de ser sospechosa a todo Ministro español" (6).

C.- La convocatoria de elecciones en Puerto Rico.- La campaña electoral.-

Antes de abandonar el Gobierno de la isla, el general Gómez Pulido publicó dos Decretos sobre las elecciones: el primero, la convocatoria de elecciones que había aparecido en la Gaceta de Madrid del día 29 de junio y que las fijaba para el 24 de agosto y el segundo, un Decreto del Ministro de Ultramar, determinando que en Puerto Rico se llevarían a cabo con arreglo al Decreto de 1 de abril de 1871 (7).

1.- El asunto de la candidatura del Ministro de la Guerra,-

Al día siguiente de la llegada a la isla del nuevo Gobernador de Puerto Rico, general D. Simón de la Torre, éste convocó a La Fortaleza a varios jefes y oficiales del ejército y de

los Voluntarios para pedirles que aceptaran apoyar la candidatura del Ministro de la Guerra, D. Fernando Fernández de Córdova, en el Distrito de la Capital (8). Pero desconfiando éstos de las intenciones del Gobernador, declinaron la petición, declarando que en materia electoral no admitían imposiciones.

Algunos días después, el Comité Conservador de la Capital envió a una comisión de cinco personas para cambiar impresiones con el Gobernador en torno al mismo asunto, pero tampoco llegaron a un acuerdo (9).

Estos fracasos no desanimaron al Gobernador el cual, viendo que sus gestiones no daban resultado entre los elementos conservadores, se dirigió a los liberales. En efecto, más adelante se entrevistaba con varios líderes del Partido Reformista, a quienes hizo la misma petición, pero sugiriendo propulsasen dicha candidatura en el Distrito de Ponce, donde el Partido contaba con grandes simpatías. Aunque en ese Distrito se había comenzado ya a preparar la candidatura de Baldorioty, Morales Miranda pidió al Comité de Ponce aceptara la nueva candidatura como "exigencia política" y no sin lamentar que Baldorioty tuviera que quedar al margen del proceso electoral (10).

La petición de Morales Miranda fue atendida por el Comité de Ponce y en la reunión que celebraron los electores de este Distrito resultó proclamado candidato por unanimidad (11).

No es arriesgado suponer que la conducta posterior del Gobernador estuviera en parte condicionada por todo este asunto, si bien no creemos justa la postura de los conservadores, quienes prácticamente acusaron al general de la Torre tanto en sus periódicos como posteriormente en las Cortes de una actitud ven- gativa en su política electoral posterior.

2.- La Asamblea del Partido Conservador.-

Después de estos incidentes, el Partido Conservador celebró una Asamblea general el día 4 de agosto en el Teatro Municipal de San Juan, bajo la presidencia del jefe del partido, Marqués de la Esperanza (12). En dicha reunión fueron designados los

diputados por el Partido Liberal Conservador, y al mismo tiempo se aprobó la publicación de un Manifiesto al país, que apareció al día siguiente en las páginas del "Boletín Mercantil" (13)

El propósito de este manifiesto consistía en presentar al Partido Conservador no como una entidad político-partidista, sino como un baluarte de la defensa de los intereses de España en la isla. En esta misma línea, calificaba a los radicales como "los enemigos de nuestra nacionalidad", que intentaban conseguir por la vía pacífica lo que no podían conseguir por medio de la revolución (14). Finalmente, exhortaba a sus correligionarios a dar sus votos "a candidatos de reconocido patriotismo", combatiendo al propio tiempo "a todo el que por antiespañol o por auxiliar consciente o inconsciente de ese partido sea conocido".

A pesar de que el anterior Gobernador había publicado ya antes de su partida el Real Decreto convocando elecciones para el 24 de agosto, el general de la Torre, con fecha 6 de este mes publicó de nuevo el Real Decreto (15). En el mismo número de la Gaceta de Puerto Rico insertaba una Circular sobre la forma de realizarse dichas elecciones:

"Procurar que los pueblos hagan uso de este preciado derecho con toda la libertad, evitar todo género de coacciones y arbitrariedades en la emisión del sufragio, dar garantías de imparcialidad y de justicia a los electores, cualquiera que sean sus opiniones y hacer que los elegidos obtengan la representación augusta de legisladores con todos los caracteres de legalidad es el único deseo del Gobierno que actualmente rige los destinos de la Patria" (16).

Dos días más tarde publicaba otro Decreto por el que se dejaban sin efecto algunas de las disposiciones tomadas por el anterior Gobernador (17); y finalmente, el día 20 de agosto insertaba en la Gaceta una Circular autorizando a votar a los electores cuyos nombres apareciesen con errores en las listas electorales, ya que tales errores no eran culpa de los mismos (18).

Comentando el Gobernador sus disposiciones de los días 6 y 8 de agosto decía en carta al Ministro de Ultramar:

"En todas las modificaciones y aclaraciones no me ha guiado otro móvil que el de procurar la mayor verdad y fuerza en el ejercicio del derecho electoral ni otro deseo que el de cortar ciertos abusos cometidos en las últimas elecciones que tendían a favorecer a determinada clase de electores con notoria infracción de las más importantes disposiciones mandadas observar por el Gobierno Superior" (19).

3.- El reemplazo de Corregidores y Alcaldes.-

Con posterioridad a la convocatoria de elecciones en Puerto Rico, el general de la Torre procedió a remover de sus cargos a una serie de autoridades municipales de la isla, que habían sido nombrados por su antecesor (20). Nada más hacerse pública esta medida, los conservadores publicaron un Manifiesto anunciando que, en vista de que se intentaba suprimir la libertad electoral infringiendo abiertamente lo preceptuado por el Real Decreto de abril de 1871, se reservaban el derecho de no acudir a las urnas en los Distritos que lo juzgaran conveniente, como protesta ante semejante arbitrariedad (21).

Para neutralizar esta amenaza, el Gobernador se apresuró a poner en conocimiento del Ministro de Ultramar la medida adoptada, así como los motivos que le habían obligado a tomarla:

"Como, según queda expuesto, ya se había publicado el Decreto electoral, el personal de los Ayuntamientos y Municipios, escudado con la sanción penal que prohíbe su renovación durante el periodo de elecciones, abusando de un modo incalificable de su misión y atribuciones, cometía todo género de tropelías, coartando la libertad de los electores con el mayor escándalo y descaro" (22).

Esta medida originó numerosas protestas y contraprotestas y una actitud decidida por parte de los conservadores de conseguir la remoción del general de la Torre de su cargo (23).

D.- Los resultados.-

Realizadas las elecciones en los días señalados, resultaron triunfantes los liberales en catorce de los quince Distritos e electorales, consiguiendo únicamente los conservadores sacar

su candidato por el Distrito de la Capital, general Sanz y Posse (24).

D.- Comentarios.-

Si es cierto que hasta este momento las medidas arbitrarias y coercitivas habían correspondido a gobernadores de tendencia contraria al Partido Reformista, no lo es menos que el general de la Torre fue el contrapunto a esta tendencia. Aun aceptando como motivaciones sus ideas liberales y también el fracaso de sus primeras gestiones entre los elementos conservadores de la isla, ambas razones no justificaban la actitud contraria abiertamente a los conservadores, actitud que estaba muy cerca de la venganza y el despotismo. No es de extrañar, pues, que los comentarios de estas elecciones en la isla y en la Península fueran una copia, en negativo, de los que se hicieron a las anteriores. Así, el "Boletín Mercantil", en un tono mucho más moderado de lo que acostumbraba, se refería a los resultados en la siguiente forma:

"El Progreso" sabe también como nosotros que en Puerto Rico, como en todas partes, gana las elecciones aquel partido que cuenta con el apoyo oficial.

El gobierno radical había naturalmente de tener empeño en que los quince votos que vayan de Puerto Rico les sean favorables en las cuestiones azarosas de la política peninsular. No podía, pues, apoyar a los Vida, a los Gallostra, a los Sanz, ni a otros significativos adversarios del Gobierno existente.

Bien quisiéramos que para estas provincias se escogieran los representantes más entendidos, sin tener en cuenta para nada su color político. Pero esto sería una abnegación que no es de esperar de ninguno de nuestros partidos militantes" (25).

El eco de la actuación del Gobernador de la Torre llegó hasta las Cortes y con motivo de la discusión de los dictámenes de la Comisión de Actas el diputado, Sr. Gamazo, intervino para impugnar la del Distrito de San Germán, aunque su discurso se refirió a todo el proceso electoral (26). A lo largo de su intervención expuso todas las medidas adoptadas por el general de la Torre, comenzando por el intento de imponer a los conservadores

la candidatura del Ministro de la Guerra, hasta la destitución de alcaldes y corregidores decretada por el Gobernador durante el período electoral. Por cierto que este discurso tuvo como consecuencia una réplica por parte del diputado por el Distrito de Humacao, Sr. Sanromá, ya mencionado en el capítulo anterior, en el que volvía las acusaciones contra los conservadores, haciéndoles responsables de haber introducido en Puerto Rico las malas artes y la corrupción de los procesos electorales (27).

Por lo que se refiere a las variables electorales, tenemos que destacar fundamentalmente en esta Elección el elevado índice de abstenciones registrado, que alcanzó una media de cerca del 45 % (28). Por Distritos, los porcentajes más altos correspondieron a Ponce (56 %), Mayagüez (55 %) y Guayama (50 %). La causa de este elevado porcentaje, que fue el más elevado de todas las elecciones celebradas hasta ese momento, creemos que fue debido al retraimiento casi absoluto del Partido Conservador que inauguraba de esta forma en la isla la práctica del mismo como señal y arma de oposición al sistema o a la forma de realizarse la consulta electoral.

En el caso concreto de Ponce y Mayagüez pensamos que el motivo de haberse alcanzado en ambos Distritos las cotas más altas tuvo razones más concretas como lo son el hecho de que en esos casos los candidatos del Partido Reformista eran cuneros, lo cual restaba interés a su elección.

En cuanto al desarrollo del proceso electoral, se registraron multitud de protestas en la mayor parte de los Colegios electorales, casi todas ellas relacionadas con la separación de alcaldes y Corregidores decretada por el Gobernador, medida que muchos conservadores aducían para pedir que las Cortes decretasen la nulidad de las respectivas elecciones (29). Desde luego que también se produjeron contraprotestas por parte de los reformistas, defendiendo la actuación del general de la Torre, y recordando a los conservadores la actitud similar, pero opuesta, que había observado el general Gómez Pulido en las primeras elec-

ciones de ese mismo año.

Si bien es cierto que estas protestas no surtieron el efecto apetecido por los conservadores, fueron el punto de partida para una oposición tenaz y abierta contra el Gobernador, oposición que el general de la Torre no supo combatir adecuadamente, repitiendo la conducta y reacción exagerada del Mariscal Balthrich. Su imprudente conducta, manifestada en una serie de medidas adoptadas contra prominentes elementos conservadores de la isla, junto con la campaña en su contra sostenida por los medios informativos de estos últimos, consiguieron que el Ministro de Ultramar llamara a Madrid al Gobernador para que diera cuenta de su actuación. Posteriormente, se le pidió y aceptó su renuncia al cargo (30).

NOTAS

1.- FERNANDEZ ALMAGRO, Melchor. Op.Cit., Tomo I, pág. 148.

2.- Ibidem, págs. 146 y 147.

3.- Gaceta de Puerto Rico, 1872, número 87.

4.- "La Razón", 1871, número 51.

5.- Ibidem, 1871, número 10. El párrafo que contenía la política a seguir por el nuevo Partido decía así:

"Respetar profundamente el sentimiento religioso, y, renunciando para siempre, respecto de la Iglesia (católica), a esa mezquina política que tanto la humilló en otros tiempos, otorgándole los beneficios de la libertad constitucional, a cuya sombra tan grande y necesarios servicios puede prestar a la sociedad de nuestro siglo, conquistando las simpatías del país y la consideración del Estado, sin menoscabar en manera alguna la sagrada libertad de conciencia; emplear toda la severidad que aconseje la prudencia gubernamental dentro de la Constitución contra los individuos las asociaciones que intenten lo que se oponga a la moral, al orden público o a la seguridad del Estado; elevar y fortalecer las instituciones judiciales, si cuyo influjo tutelar no es posible la buena aplicación del sistema represivo, que garantiza el orden sin coartar el libérrimo ejercicio de ningún derecho; encerrando la acción de cada individuo en el bien trazado círculo de su propio derecho, asegura la inviolabilidad de cada uno, y que, amparando al ciudadano contra las arbitrariedades de la Administración, asegura la libertad de todos; establecer sin demora un Jurado, conciencia de la sociedad y complemento indispensable de nuestro sistema judicial; cumplir el voto de las Cortes Constituyentes realizando la organización municipal del país, base sólidamente de la libertad de los pueblos y elemento indispensable de moralidad de su administración; consumir las reformas de nuestra hacienda con la supresión de gastos inútiles, con el aumento de las rentas públicas y con la elevación del crédito nacional; regenerar la administración simplificando su organismo, reduciendo por este medio el número de empleados públicos y rescatarlos para el mérito y la actitud; buscar con ahínco y castigar con implacable severidad la corrupción ad-

ministrativa, dondequiera que se descubra; difundir por todos los ramos de la legislación patria la sabia la esencia y el espíritu de nuestro Código fundamental para dar al Gobierno, a la Administración, al Derecho, a todas las partes, en fin, del organismo social, aquella unidad que, siendo fuente de vida y condición de robustez en cualquier tiempo, es único medio de salvación en los momentos actuales; extinguir a todo trance la rebelión de Cuba y asegurar a toda costa la integridad nacional, sin hacer para ello concesiones que el honor de España no consiente, ni transacciones que el patriotismo de nuestro Partido rechaza; y una vez restablecida la paz, entrar para aquella isla en el camino de las reformas que la Constitución de 1869 ha ofrecido libremente a nuestros ciudadanos de Ultramar, y que han rechazado y han comenzado a plantearse en Puerto Rico, donde la tranquilidad no se ha perturbado y donde el complemento de estas reformas y la abolición de la esclavitud no han de influir para que se turbe; practicar, en fin, por mano del funcionario que cobra, la política más beneficiosa al contribuyente que paga, ya que de tantos años a esta parte es ésa la política que sin tregua reclama la opinión general; he aquí sus firmes propósitos".

- 6.- Citado por Lidio Cruz Monclova. Op.Cit. Tomo II, pág. 207.
- 7.- Gaceta de Puerto Rico, 1872, número 87.
- 8.- Diario de Sesiones de las Cortes, 1872. Sesión del día 10 de octubre, pág. 418 a 426. En esta sesión el diputado, Sr. Gamazo, intervino para impugnar el Acta electoral del Distrito de San Germán, aunque lo que en realidad hizo fue una impugnación de todo el proceso electoral en Puerto Rico. Refiriéndose a este asunto y a la actitud de los Voluntarios, decía:
"El Capitán general llamó a los oficiales de la guarnición, y les dijo que era menester votar al general Córdova; llamó a los voluntarios y les hizo la misma intimación. Pero los voluntarios de Puerto Rico, que habían visto la misma candidatura del general Córdova sostenida en las pasadas elecciones por personas que ellos no creían, no sé si con razón o sin ella, identificadas con sus miras españolas, resistieron, respetuosamente sí, pero resistieron la imposición que se les quería hacer, y declararon que ellos no podían votar al general Córdova, y que en materia electoral no admitían imposición ninguna, viniera de quien viniera. De este modo terminó la primera gestión de las que hizo el capitán general de Puerto Rico para cumplir el encargo de sus superiores, los Sres. Ministros de la

Guerra y de Gobernación, y para destruir la obra que le había sido recomendada por el Sr. Gasset y Artime"

- 9.- Ibidem. Continuaba el Sr. Gamazo:
"Llamó también el Capitán general a las personas influyentes de Puerto Rico, a los que figuran en el Comité llamado allí conservador, y les hizo la recomendación de la candidatura del Sr. Ministro de la Guerra. Pero esas personas respetables, teniendo más afecto a los candidatos del Sr. Ministro de Ultramar, y creyendo que las palabras que habían oído de labios de su señoría debían ser antepuestas a todas las razones de política interior que pudieran haber movido al Sr. Ruiz Zorrilla y al Sr. Córdova para formar la candidatura que se les recomendaba, se resistieron abiertamente a apoyarla.
- 10.- Ibidem. El Sr. Gamazo calificaba de "muy graves" las noticias de algunos periódicos en el sentido de que el Gobernador había mantenido entrevistas con diversos líderes del Partido Reformista, dejando entrever al propio tiempo su opinión de que en el "quid pro quo" el Gobernador se había deshonrado, al ofrecer a cambio su apoyo al Partido Reformista.
- 11.- "La Razón", 1872, número 64.
- 12.- "Boletín Mercantil", 1872, número 92.
- 13.- Ibidem. Destacamos del Manifiesto los siguientes párrafos, ilustrativos de la actitud del Partido Conservador en estos momentos:
"Correligionarios: Cuatro meses van apenas transcurridos desde que el cuerpo electoral de esta Isla emitió sus sufragios en la elección de diputados para las Cortes de la Nación, cuando por consecuencia de un inesperado cambio en la política gubernamental de la Península, es llamado de nuevo al ejercicio de aquel derecho.
Triste y lamentable es en alto grado para el partido genuinamente español de Puerto Rico el que la azarosa y febril vida política de la Península haga precisa en esta Antilla una repetida agitación electoral y consecutivas, aunque accidentales, perturbaciones de su plácida y tranquila existencia; porque a la sombra de aquellas y aprovechándolas astutamente los enemigos de nuestra nacionalidad, los que, encubiertos con máscara de españolismo, siguen una política falaz y cautelosa, los que sueñan alcanzar por medio de una revolución pacífica lo que la revolución armada no conseguirá, como no lo ha conseguido en la isla de Cuba, ejercen con cierta libertad su perniciosa

propaganda, se relacionan, se unen, trabajan activamente y consideran cada día más seguro el logro de sus deseos...

Electores, si conservamos la indispensable unión, si nos aprestamos a luchar en todos los distritos con la fe y entusiasmo que a todo corazón verdaderamente español inspiran nuestros principios, si comprendemos perfectamente lo crítico de las circunstancias por que atraviesa nuestra Patria y la densidad del porvenir, podremos acaso ser vencidos por la especialidad de nuestra actual situación, pero sacaremos a salvo nuestra dignidad y decoro, nuestra altitud de miras, más acrisolada si cabe, nuestro patriotismo, una organización cada vez más vigorosa y respetable. Comprendedlo así, mirad sobre las procedentes indicaciones y apresuraos a secundar activamente en la confianza de que no solo los que las comprenden hoy, sino los que aún no le hacen justicia, admirarán muy pronto nuestro patriótico proceder, con entusiasmo los unos, desengañados los otros".

- 14.- Una vez más, el Partido Conservador echaba mano de su slogan favorito, encaminado a colocar a los electores en una disyuntiva incómoda, ya que contraponía las reformas al sentimiento de españolismo, y presentando a aquellas envueltas en un sutil velo de desconfianza, con lo que muchas personas partidarias de las reformas y aún estando convencidas de su necesidad, optaban por no apoyarlas para no hacer el juego a los que las pedían por considerarles "enemigos de la nacionalidad".
- 15.- Gaceta de Puerto Rico, 1872, número 95. De acuerdo con el Decreto de convocatoria, las elecciones en Puerto Rico deberían llevarse a cabo por la Ley de 1 de abril de 1871.
- 16.- Ibidem.
- 17.- Puede verse este Decreto del Gobernador en el Anexo I.
- 18.- Gaceta de Puerto Rico, 1872, número 101.
- 19.- Archivo Histórico Nacional (Madrid). Sección de Ultramar, Legajo 5104/28, número 14.
- 20.- Las autoridades separadas de sus cargos fueron: Los Corregidores de Guayama, Arecibo, Ponce y Humacao, y los Alcaldes de Camuy, Juana Díaz, Aibonito, Manatí, Añasco, Barranquitas, Patillas, Río Piedras, Coamo, Carolina, Yabucoa, Loiza, Hato Grande y Peñuelas. Diez y ocho en total. Los motivos indicados para la remoción fueron en la mayor parte de los casos "sospechas de orden

público". Cf.: Archivo Histórico Nacional (Madrid). Sección de Ultramar, Legajo 5104/29, número 14.

- 21.- "Boletín Mercantil", 1872, número 99. "En qué situación -se preguntaba el Manifiesto- queda nuestro Partido colocado en la generalidad de los distritos? ¿Qué es lo que puede esperar teniendo a su frente un Partido ayudado por la influencia oficial, que pesará como losa de plomo sobre los electores, y no pudiendo obtener ningún amparo y protección de autoridades apasionadas y parciales? Se presentará solo con sus principios y con los respetables nombres de sus candidatos, en su mayoría de la situación dominante en la Península, y solo conseguirá que sus electores sean cohibidos, vejados y objeto de esa perniciosa influencia oficial; y si llevados de su patriotismo y sobreexcitados por la idea de combatir a aquellos candidatos que tan sospechosos se hicieron a todo buen español... los combatiese con decisión y calor, caería en el lazo que el ultrarreformismo le tiende, y se le haría aparecer como perturbador".
- 22.- Archivo Histórico Nacional (Madrid). Sección de Ultramar, Legajo 5113/40. Con posterioridad a la celebración de las elecciones, el general de la Torre envió otra carta al Ministro de Ultramar, explicándole más detalladamente la motivación de esta medida:
- "Cuando me hice cargo del mando de esta isla me hallaba dispuesto a respetar en su puesto durante y después del período electoral a todas las autoridades locales de la misma, nombradas por mi antecesor, siempre que del examen de sus cualidades y antecedentes resultara su idoneidad; este propósito firme que había hecho, no he podido verle realizado con grande sentimiento, porque algunas de las mencionadas autoridades no podían por sus malos antecedentes e incapacidad legal continuar en sus puestos y por lo tanto, he tenido necesidad de separarlos: además, en la relación de funcionarios separados que a V.E. acompaño figuran los nombres de algunos Corregidores y Alcaldes que con su conducta rebelde y de oposición abierta al Gobierno y a lo existente provocaban conflictos diarios, vejaban a los electores y cometían todo género de tropelías con sus administrados, dando lugar con su proceder a que el orden público llegare a alterarse gravemente, lo que no podía de ningún modo consentir. En reemplazo de todas las autoridades necesariamente separadas he procurado colocar personas de reconocida rectitud e ilustración, de probada honradez y de buena posición social, hasta tal punto que la ma-

yoría de las autoridades nombradas desempeñarán sus cargos sin sueldo y "ad honorem", haciendo de este modo un verdadero e importante servicio a las Juntas Municipales, cuyas atenciones son muchas y pocos los recursos de que disponen. Espero que V.E. se dignará aprobar estas medidas de absoluta precisión para la tranquilidad de la isla y estimará justas las razones expuestas, lacónicas y breves, porque no puedo perder un minuto en estos momentos en que se están verificando las elecciones". Cf.: Archivo Histórico Nacional (Madrid). Sección de Ultramar, Legajo 5104/28, número 17.

23.- Una relación de las reclamaciones se describe en: Archivo Histórico Nacional (Madrid). Sección de Ultramar, Legajo 5104/28, número 28.

24.- Pueden verse los resultados en los Cuadros y Mapas electorales adjuntos.

25.- "Boletín Mercantil", 1872, número 101.

26.- Diario de Sesiones de las Cortes, 1872, pág. 418 y sgts.

27.- A fuer de parecer prolijo, transcribimos a continuación algunos de los párrafos más importantes de la contestación del diputado, Sr. Sanromá, al discurso del Sr. Gamazo:

"Cuatro elecciones generales se han verificado en Puerto Rico desde la revolución acá y en las dos primeras ni hubo sombra de política electoral, ni se falseó el sufragio, ni faltó la libertad, ni escaseó independencia a los electores. Algunos que están aquí presentes lo estaban allí cuando aquellas elecciones tuvieron lugar, y pueden decir con cuánto orden, con qué entusiasmo, con qué buena fe iban a depositar sus votos en las urnas aquellos buenos, excelentes y nobilísimos isleños. Lo hacían con aquella severa dignidad con que se va a ejercer, y realmente lo ejercían, el más augusto de los sacerdocios civiles.

Yo bien sé que concluidas las segundas elecciones hubo algun conato de motín y algun principio de movimiento sedicioso; pero, señores, yo no vengo aquí a referir la historia de aquellos sucesos; lo que siento es que no se trajera a las Cortes el expediente de ellos, que uno de mis amigos reclamó en la legislatura pasada, porque aquel expediente demostraría que los verdaderos responsables de aquel principio de sedición eran aquellos hombres cuyo amor a la autoridad tanto nos ponderaba el Sr. Gamazo; eran aquellos conservadores que no se resignaban a ser derrotados después de

haber sido durante tanto tiempo triunfantes; eran los que no querían ser vencidos después de haber sido vencedores, cuando por largos años y casi por largos siglos, porque la tradición así lo indica, venían siendo, si no los que tenían el atavío y las formas externas de la autoridad superior, cuando menos su ojo, su oído su voluntad y su consejo, y los que tenían la influencia del dinero, la granjería de la esclavitud, y aquella serie interminable de monopolios, en cuyos pliegues también puede sin dificultad envolverse cierta clase de españolismo; monopolios a la cabeza de los cuales figuraban los grandes propietarios, por cuyo medio ciertos conservadores han conseguido impedir que se establezca un Banco grande o pequeño en Puerto Rico, que pueda hacer competencia a los cuantiosos préstamos que hacen al Tesoro de la isla de Cuba, a la industria y al comercio.

Llegan en esto las terceras elecciones, que fue en el mes de abril del año corriente, cuando por su propio daño y con harta desventura de la patria ocupaba el poder el Sr.D. Práxedes Mateo Sagasta. Lo que fueron entonces las elecciones de Puerto Rico se ha dicho aquí, e impreso está en el Diario de las Sesiones. Calculen los señores diputados la suerte que tendría el sufragio en Puerto Rico, cuando tan vilipendiado y escarnecido era y tan por los suelos andaba en la Península. Entonces ¡oh! sí, entonces fue cuando vosotros introdujisteis una política electoral completa en Puerto Rico. Y si el Congreso quiere saber cuál era, yo tendré mucho gusto en condensarla, para que se sepa lo que son los conservadores de Puerto Rico, los que se dicen altos defensores de la nacionalidad, y que lo que quieren, como los de aquí, es tomar las apariencias, la hipocresía de cierta clase de libertad, para seguir tratando las colonias con el absurdo, inicuo e imposible principio de que son países conquistados.

Vuestra política electoral en Puerto Rico, señores conservadores, se condensa en los siguientes puntos: introducción del cunerismo; amenazas en documentos oficiales; recogida sistemática y continua de la prensa; encarcelamientos en masa y mistificación del sufragio, hasta el punto de multiplicar indefinidamente los votos fuera de los límites de las listas electorales...

Hablais, sin embargo, de ilegalidades. ¿Os atreveréis, cosa que por otra parte no me extraña, tratándose de un partido que siempre ha hecho política de atrevimiento; os atreveréis, digo, a comparar vuestra política electoral tan compleja y tan violenta, con la política electoral tan franca, tan natural y tan sencilla

como la que ha seguido el partido radical?.. Hay dos políticas electorales: la política electoral de gobierno, que es la vuestra y la política electoral de partido, que es la que se hace, la que se hará y la que debe hacerse siempre en nombre de toda idea liberal. Ya sé que vosotros no entendeis estas cosas, porque no teneis el instinto de lo popular; porque sois muy nerviosos, y los ruidos populares os asustan, y la voz de la muchedumbre os aterra... No, no alcanzáreis jamás el sentido democrático, y hé aquí por qué no tiene nada de extraño que vuestra política electoral sea siempre una política de gobierno. Es la amenaza, la censura, la recomendación oficial... Los liberales de todos los tiempos, y nosotros con ellos, tenemos una política colonial que significa organización, lucha; lucha contra los rigores del clima, contra las grandes resistencias de una naturaleza tropical y primitiva; organización para obtener la armonía de los diferentes intereses que allí se cruzan, y en armonía también con los intereses de la madre Patria". Cf.: Diario de Sesiones de las Cortes, 1872, págs. 423 a 425.

28.- Datos obtenidos sobre las Actas electorales.

29.- Archivo Histórico Nacional (Madrid). Sección de Ultramar, Legajo 5102/ 107 a 174.

30.- Ibidem, Legajos 5101/ 1 y 2; 5103/4 y 5113/7.

ANEXO I

Decreto del Gobernador, general D. Simón de la Torre sobre elecciones (8 de agosto de 1872).

"Para que las elecciones de diputados y senadores que han de verificarse en esta isla en los días 24, 25, 26 y 27 del corriente se ajusten perfectamente al Decreto de S.M. el Rey 9q.D.g.) de 29 de junio último, publicado en esta provincia en 16 del próximo pasado julio, en el que se previene que el derecho electoral ha de ejercitarse según lo prescribe en el Decreto de 1 de abril de 1871; he venido en acordar lo siguiente:

artículo 1.- Son electores todos los individuos que aparezcan inscritos en las listas electorales ultimadas que sirvieron para las elecciones verificadas en los días 20, 21, 22 y 23 de junio de 1871, sin que para nada se tengan en cuenta las modificaciones que pudieron dictarse para las que se verificaron en abril del presente año, no pudiendo ejercer el derecho electoral sino los que estén inscritos en las mencionadas listas de 1871 o aquellos de que tratan los artículos 33 y 34 del citado Reglamento.

artículo 2.- Las penas aflictivas o correccionales de que trata el caso 3 del artículo 2 del mismo Reglamento, se entienden solamente tales las que hayan sido aplicadas por los tribunales de justicia en virtud de sentencia ejecutoria.

artículo 3.- Que el caso 6 del mismo citado artículo 2 se refiere únicamente a los deudores que estén apremiados en concepto de segundos contribuyentes y no a los que lo sean primeros, esto es, a los deudores por contribuciones directas al Estado, a la provincia o al municipio.

artículo 4.- El artículo 18 se entenderá redactado en estos términos:

art. 18: Las cédulas talonarias se entregarán a domicilio con 8 días de antelación al en que han de tener lugar las elecciones, dando cuenta con toda premura a este Gobierno las Autoridades locales de haberlo así ejecutado. Los electores que no hubieran recibido ocho días antes de la elección su cédula correspondiente, pueden reclamarla a la autoridad local y en caso de que por ésta les fuere negada, podrán hacerlo en este Go-

bierno Superior Civil.

artículo 5.- El artículo 25 se entenderá asimismo redactado de la manera siguiente:

art. 25: En la parte exterior de todo local en que se verifiquen las elecciones se fijará ocho días antes que empiecen, una lista certificada de los electores que correspondan al Colegio, la que permanecerá expuesta al público hasta que haya terminado la elección.

artículo 6.- El artículo 33 queda modificado desde luego como sigue:

art. 33: Los electores del Ejército y la Armada en servicio activo votarán en el punto donde se hallen el día de las elecciones, siempre que lleven dos meses de residencia continua en el mismo y estén inscritos en las listas electorales de cualquiera de los Colegios de la Provincia. La inscripción en las listas de otros Distritos la acreditarán los votantes que se encuentren en el caso citado con una certificación del Secretario del municipio, visada por la autoridad local.

Lo que hago público...

Puerto Rico, 5 de agosto de 1872

Simón de la Torre (Gobernador)

FUENTE: Archivo Histórico Nacional (Madrid). Sección de Ultramar
Legajo 5104/28, número 8.

CUADRO I

RESULTADOS

(1972)

20

<u>DISTRITO</u>	<u>POBLACION</u>	<u>ELECTORES</u>	<u>RELACION Hab/Elec</u>	<u>VOTANTES</u>	<u>ABST.</u>	<u>CANDIDATOS ELEGIDOS</u>	<u>VOTOS</u>
CAPITAL		2,873		1,589	44.69	SANZ Y POSSE, José Laureano	1,292
VEGA BAJA		893		647	27.55	ALVAREZ PERALTA, José A.	637
ARECIBO		1,194		600	49.32	PADIAL, Luis Ricardo	596
QUEBRADILLAS		1,093		688	37.05	SORIA Y MATA, Arturo	680
AGUADILLA		1,490		955	35.91	BORRELL, Félix	932
LAZAGUET		1,965		836	54.91	MORET Y PRENDERGAST, Segismundo	864
SAN JERON		1,341		723	46.09	ESCORIAZA CARDONA, Lurípides	686
SABANA GRANDE		907		612	32.52	LABRA, Rafael María de	608
LOMBE		2,400		1,056	56.00	FERNANDEZ DE CORDOVA, Fernando	1,054
GUAYAMA		1,345		665	50.56	CINTRON, José Facundo	641
RECTORIO		1,331		752	43.50	SANTANA, Joaquín María	742
RIO PIEDRAS		770		391	49.22	GARCIA MATTIN, Manuel	390
CAGUAS		909		493	45.21	BLANCO Y SOSA, Julián	493
COMO*		960		545	43.23	MOSQUERA GARCIA, Tomás María	539
UTUADO		1,123		603	46.30	ALVAREZ OSORIO, Anibal	601
		20,584	29.99	11,210	44.14		
	617,323						

FUENTES: Archivo de las Cortes. Sección de Expedientes, Legajo 72, número 16.

* No se constituyó Colegio en Aibonito por falta de electores

CUADRO II
(1872)

2@

RESULTADOS POR PARTIDOS

LIBERALES:

ALVAREZ PERALTA, José Antonio.....	Vega baja
PADIAL Y VIZCARRONDO, Luis.....	Arecibo
BORRELL, Félix	Aguadilla
SORIA Y MATA, Arturo.....	Quebradillas
MORET Y PRESBERGAST, Segismundo....	Mayaguez
ESCORIAZA Y CARDONA, José	San Germán
LABRA, Rafael María de	Sabana gran- de
BLANCO Y SOSA, Julián.....	Caguas
CINTRON, José Facundo.....	Guayama
SANROMA, Joaquín María.....	Humacao
GARCIA MAITIN, Manuel.....	Rio Piedras
MOSQUERA GARCIA, Tomás María.....	Coamo
ALVAREZ OSORIO, Anibal.....	Utuado
FERNANDEZ DE CORDOVA, Fernando.....	Ponce

CONSERVADORES:

SANZ Y POSSE, José Laureano.....	San Juan
----------------------------------	----------

- - - - -

CONSERVADORES

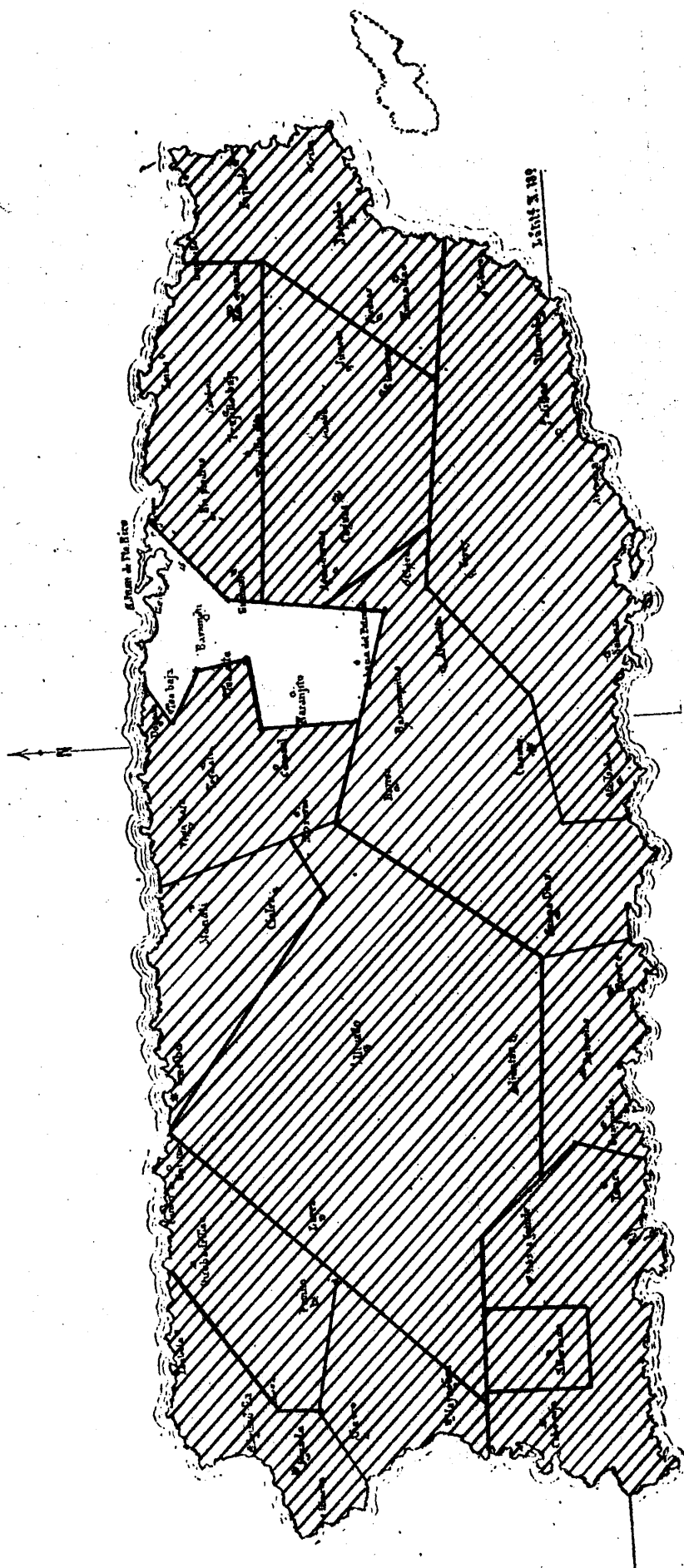


LIBERALES



(1872)

20

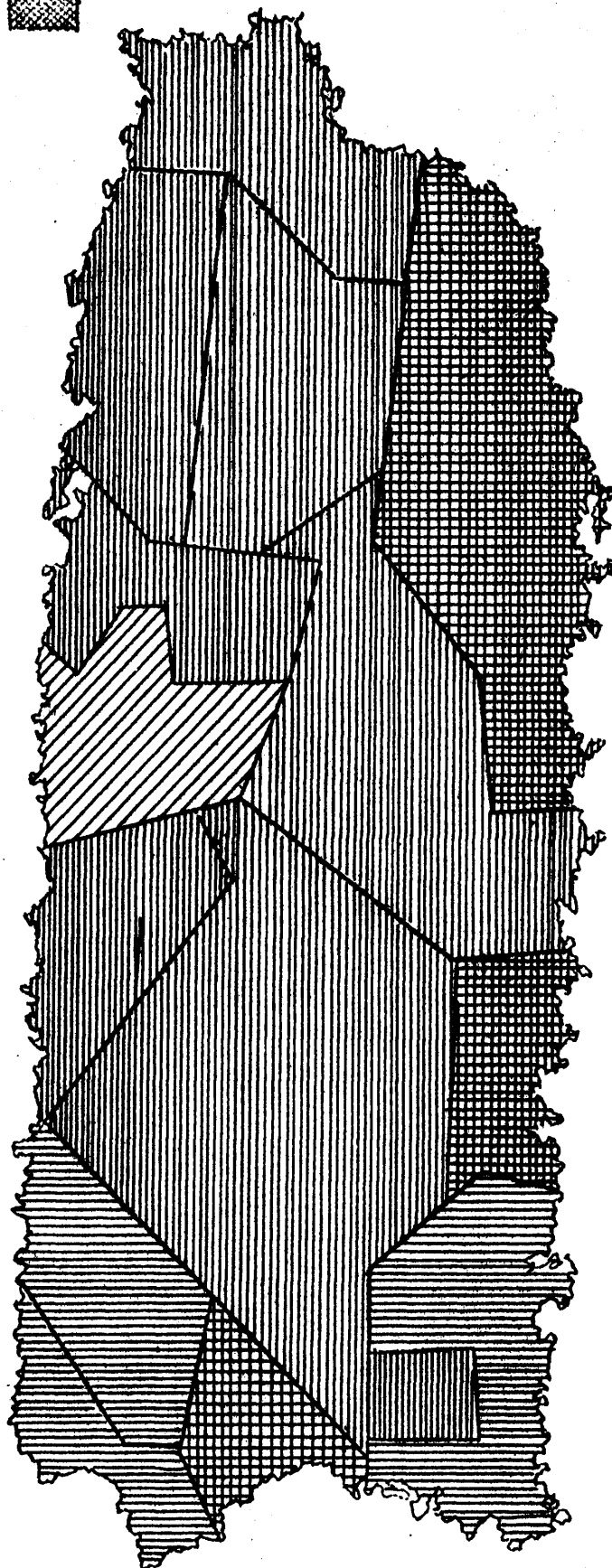
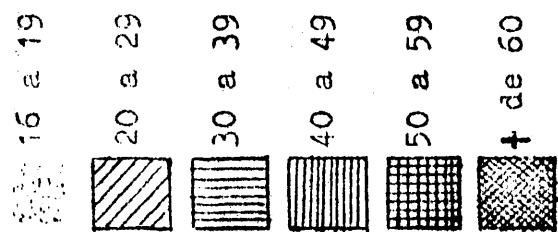


ABSTENCIONES

(1872)

20

Media: 44.14



2.5. LA ELECCION GENERAL DE 1873

A.- La situación política en la Península

1.- La abdicación de Amadeo I y la proclamación de la República.-

A partir de 1872 los acontecimientos políticos se precipitan en la Península, sin que nada ni nadie fueran capaces de enderezar la situación: aparte de las dos guerras civiles -la de Cuba y la carlista- se produjo en el mes de octubre el motín de carácter republicano de El Ferrol, con repercusiones en Barcelona; el llamamiento a filas de 40,000 hombres, a pesar de las promesas de Ruiz Zorrilla de suprimir las quintas; el préstamo solicitado por España al Banco de París, que obligó a la creación del Banco Español Hipotecario; la refundición de la Deuda Pública y, finalmente, la cuestión de los artilleros (1).

En este último asunto el Gobierno se mostró inflexible en castigar a los promotores del suceso y obtuvo un voto de confianza de las Cortes para ello. Pero el Rey, quizás por razones sentimentales, o tal vez cansado de tantos problemas como habían surgido a lo largo de su reinado, se resistió a firmar la orden de disolución propuesta por el Gobierno. Puesto en semejante dilema -o ir contra sus convicciones y deseos o ponerse en contra del Gobierno y de las Cortes- respetó por última vez la voluntad de las mismas, firmando el decreto de disolución del cuerpo de artilleros, pero acto seguido presentaba su renuncia al Trono (2).

El día 11 de febrero de 1873 entregó Amadeo a Ruiz Zorrilla su abdicación contenida en un "Mensaje al Congreso", que fue contestado por Rivero como Presidente del mismo, aceptando su renuncia. Ese mismo día los representantes de la Nación, reunidos en Asamblea Nacional, proclamaron por abrumadora mayoría la República; así mismo fue elegido el primer Presidente del Po-

der Ejecutivo, elección que recayó en D. Estanislao Figueras, quedando D. Francisco Salmerón encargado de la cartera de Ultramar (3).

2.- La Ley de 11 de marzo de 1873.-

Una de las primeras medidas aprobadas por la Asamblea Nacional fue la del Sufragio Universal. La misma se hallaba contenida en el Decreto de convocatoria de elecciones expedido por la Asamblea Nacional, con fecha 11 de marzo. Pero lo interesante de este Decreto era que al lado de la convocatoria incluía una enmienda a la Ley Electoral de 1870, vigente hasta ese momento en España: en su artículo 3º consideraba mayores de edad a todos los españoles de más de veintiún años (4).

Esta Ley tenía un interés especial para Puerto Rico, ya que contenía varias referencias específicas a la isla. La primera, en lo relativo a las fechas en que habían de celebrarse en ella las elecciones (artículo 2º); la segunda en la ampliación de la base electoral, al aplicar en ella el mismo criterio de mayoría de edad, si bien manteniendo la cuota contributiva, reducida "a cualquier cantidad pagada al Estado en concepto de contribución o saber leer y escribir", (artículo 3º); finalmente, el artículo 4º garantizaba que las Cortes no se disolverían hasta que fuesen aprobadas las leyes de abolición de la esclavitud en Puerto Rico, el de las matrículas del mar y el de la organización, equipo y sostén de los 80 batallones de Voluntarios de la República.

Es también interesante subrayar que el Preámbulo de la Ley Electoral que se envió a Puerto Rico reconocía explícitamente que el grado de desarrollo que había alcanzado la isla no solo ameritaba, sino que exigía una proclamación en ella de "todas las libertades propias de los pueblos civilizados" (5).

B.- La situación político-partidista en Puerto Rico.-

El Gobierno del general Martínez Plowes, sucesor en el man-

do del general de la Torre, que se extendió a lo largo de tres meses, estuvo marcado por dos hechos diferentes, pero que tuvieron una repercusión similar en la isla: el primero fue un enfrentamiento que se produjo en el pueblo de Camuy entre fuerzas del Instituto de Voluntarios y de la Guardia Civil, por una parte, y un grupo de personas de este pueblo. Este hecho se conoce en la Historia de Puerto Rico simplemente como "los sucesos de Camuy" o "La Estrellada", por ser Estrella el apellido del principal actor (6). A pesar de que el Gobierno de la Península no dio mayor importancia a los mismos, la impresión que produjo en el nuevo Gobernador fue similar a la que tuvo "El Grito de Lares" sobre el general Sanz y Posse, determinándole a llevar a cabo una movilización de tropas en toda la isla, con la consiguiente alarma entre los habitantes.

El segundo hecho se relacionaba con el Discurso de la Corona leído por Amadeo I en las Cortes en abril de 1872, y en el que prometía que su Gobierno dictaría "las medidas más conducentes al bienestar de las provincias de Ultramar" (7). Esta declaración, que lógicamente llenó de satisfacción a los reformistas, produjo inquietud y alarma entre los conservadores, los cuales se apresuraron a iniciar una campaña de propaganda contra la política del Gobierno, tanto en la Península como en la isla (8).

En estas circunstancias, el día 24 de febrero se recibía en Puerto Rico la noticia de la instauración de la República, y al día siguiente el Gobernador recibía del nuevo Gobierno la confirmación en su cargo (9).

Entre los liberales, la noticia de la proclamación de la República fue acogida con gran satisfacción, y también entre los conservadores, justificando estos últimos su postura en base a que el Partido Conservador no hacía consistir su interés en apoyar a uno u otro régimen político, sino en preservar la integridad del territorio y la soberanía española:

"Hemos designado nuestra agrupación con la frase de

"españoles sin condiciones", porque no somos españoles a condición que reine ésta o la otra dinastía, de que España sea monarquía o república, de que mande éste o el otro partido, o de que se instalen éstas o las otras reformas en Puerto Rico; lo somos bajo cualquier forma de Gobierno, siempre que ofrezca conservar íntegro el territorio nacional" (10).

Al Gobernador Martínez Plowes le cupo la honra de publicar en Puerto Rico la Ley de Abolición de la esclavitud, aprobada por la Asamblea Nacional con fecha 22 de marzo, por la cual obtuvieron la libertad los 29,182 esclavos que había en Puerto Rico en aquel momento (11).

C.- La convocatoria de elecciones en Puerto Rico.- La campaña electoral.

A mediados de abril abandonaba la isla el general Martínez Plowes y se hacía cargo del mando el general D. Rafael Primo de Rivera, hombre de experiencia en los asuntos ultramarinos por haber ocupado varios cargos en Cuba y Puerto Rico, y de firmes creencias liberales (12).

Nada más llegar a la isla, procedió a publicar, como otros gobernadores, un artículo de saludo que contenía a la vez su programa de gobierno:

"No es la primera vez que tengo la satisfacción de hallarme entre vosotros, y si en otra época no me cupo la honra de gobernar esta hermosa Antilla, pude, al menos, estimar en ella las virtudes cívicas y el carácter apacible y sincero de sus habitantes. Pude comprender sus más dignas aspiraciones y presentir que en día no lejano España, la Madre Patria, estrecharía en su corazón, con igual ternura, a todos sus hijos en ambos mundos...

La República española os llama al goce de todos los derechos de que disfrutaban los pueblos cultos; ha roto las cadenas de la esclavitud que os ruborizaban, brindando amparo y protección a la clase desvalida que las llevaba, y ofrece a todos justicia, orden y libertad.

La justicia es la expresión de la Ley, vosotros lo sabeis; y yo os declaro que por ninguna consideración humana me desviaré de sus mandatos. Dentro de la Ley

podreis realizar hoy vuestros más nobles deseos, ejercitar vuestros derechos más preciosos y contar con la Autoridad y con el amigo que será, a la vez que fiel intérprete de aquella, vuestro más leal hermano. Fuera de la Ley no veré más que enemigos de la honra del país y de su propia ventura, sea cual fuere el velo con que cubran sus aspiraciones.

Sin orden, señores, no hay paz, ni prosperidad, ni dicha para los pueblos. Yo velaré por conservarla a toda costa, porque el orden es el mejor escudo de vuestros derechos e intereses, así como aquel, unido a la justicia, constituye la única base de la verdadera libertad" (13).

Pocos días después, procedía a publicar en la "Gaceta" la Ley de 11 de marzo, junto con un Decreto del propio Gobernador por el que se fijaban las elecciones de diputados para los días 10 a 13 de mayo (14).

1.- El Partido Liberal Reformista.-

Tanto la personalidad política del general Primo de Rivera como los diferentes decretos publicados por el mismo desde que se hizo cargo del Gobierno aumentaron la satisfacción de los liberales, quienes se aprestaron con entusiasmo a dar comienzo a su campaña electoral. Como preparación para la misma, el día 20 de abril celebró el Partido una asamblea general en el Teatro Municipal de San Juan (15). En dicha asamblea fueron nominados los candidatos del partido para diputados a Cortes (16). Seguidamente, el Presidente del Partido, D. Pedro Gerónimo Goico Sabinetas, presentó su renuncia, si bien declaró su intención de continuar colaborando con el partido. Finalmente, fue elegido un nuevo Comité Central del Partido (17).

Después de celebrada esta asamblea, los liberales comenzaron su campaña por medio de la prensa y de reuniones electorales por toda la isla, con mucho más entusiasmo que en ocasiones anteriores, sabiendo que contaban con el apoyo del Gobierno.

2.- El Partido Español sin condiciones (Conservador).-

Por su parte, el Partido Liberal Conservador que, como he-

mos anotado más atrás, había cambiado su nombre para dejar más claro su primordial interés, acogió con muestras de desaprobación la serie de leyes y decretos publicados desde la instauración de la República, comenzando por la Ley de Abolición de la esclavitud. Así pues, pese a sus declaraciones de lealtad al nuevo régimen, poco a poco se fueron distanciando del Gobernador, hasta que finalmente, en una reunión del Comité Central Conservador celebrada el día 20 de abril, decidieron no acudir a los comicios, decisión que el Comité Central hizo pública por medio de un Manifiesto a los electores (18).

De esta forma, El Partido Conservador de Puerto Rico repetía su decisión de 20 de agosto del año anterior por las mismas causas y con los mismos fines, siguiendo en esta ocasión los pasos de su homónimo de la Península (19). Y esto, a pesar de que tanto el Ministro de la Gobernación como el de Ultramar habían hecho todo lo posible para evitar el retraimiento de cualquier partido (20).

D.- Los resultados.-

Sin la participación de candidatos y electores incondicionales (conservadores), el Partido Reformista no tuvo ninguna dificultad para sacar electos a todos los suyos, siendo ésta la primera elección de este segundo período en que todos los diputados de Puerto Rico pertenecían a un mismo Partido (21).

E.- Comentarios.-

Indudablemente éstas fueron las elecciones de las que tenemos los datos más completos de todo el período, lo cual, desde el punto de vista del análisis político parlamentario es algo que debemos agradecer al Gobierno de la República.

En ausencia de oposición partidista, el interés de los resultados consiste exclusivamente en el análisis de dos variables: el número de electores y el índice de abstencionismo. De

la primera es preciso destacar el hecho de que la población electoral de Puerto Rico se duplicó, como consecuencia de la aplicación de la Ley de 11 de marzo, sin que la participación de esta nueva masa de electores representara particulares problemas al desarrollo de la elección (22).

Por lo que se refiere al abstencionismo, a pesar del retraimiento absoluto de los conservadores, no llegó al nivel alcanzado en la segunda elección de 1872, pudiéndose fijar para la elección de 1873 entre un 36 y un 39 %, cifra que representa prácticamente la mitad del índice alcanzado en la Península (23). Esto significa, en nuestra opinión, que una gran parte de los nuevos electores votó por los candidatos reformistas. Por Distritos, las mayores cifras de abstenciones se produjeron en aquellos en los que el elemento oficial era más numeroso: Capital, Ponce, Mayagüez, San Germán y Guayama, lo cual se confirma si desglosamos la cifra total de abstenciones de cada uno de ellos en la de la cabecera de distrito y la del resto de los pueblos del mismo (24).

.

El año 1873 tuvo para Puerto Rico una importancia excepcional tanto desde el punto de vista político como social. En efecto, seis leyes y decretos aprobados por las Cortes, a propuesta y con el apoyo de los diputados puertorriqueños, colocaron a la isla prácticamente a la misma altura política y social que la Península. Nos referimos a la Ley de 11 de marzo sobre sufragio universal; a la de 23 del mismo mes sobre Abolición de la esclavitud en la isla; al Decreto de 30 de abril sobre Libertad de imprenta; al de 13 de mayo sobre libertad de asociación; al de 10 de julio declarando vigente en Puerto Rico el Título I de la Constitución de 1869 y finalmente, al Decreto de 15 del mismo mes promulgando la Ley Municipal, aprobada por las Cortes para la isla en 1870, pero que no se había aplicado (25).

Por la Ley de 11 de marzo, la población electoral de Puerto Rico, que en las elecciones de agosto de 1872 había sido de 20,584, pasó a 46,042, es decir, se duplicó con creces (26).

Por la Ley de Abolición de la esclavitud, recobraron su libertad 29,182 esclavos, sin que este hecho produjese los pesimistas augurios de algunos elementos conservadores de la isla y de la Península (27).

Al amparo del Decreto de la libertad de imprenta surgieron una serie de nuevos periódicos, muchos de ellos de tendencia reformista, entre los que podemos destacar "El Derecho", "El Diablillo Rojo", "La Linterna", "Don Severo Cantaclaro" en Ponce; "El Municipio", "El Semanario Puertorriqueño" y "El Estado Federal", en San Juan; "La Mar", "El Murciélagos" y "La Juventud", en Mayagüez. En otros pueblos de la isla se fundaron diferentes periódicos hasta un total de 12 solamente en este año (28).

Con motivo de la aplicación del derecho de asociación, cobró auge en la isla el movimiento de organización obrera: en Mayagüez se estableció la sociedad de artesanos "La Bella Unión" en Ponce se fundó el "Círculo Ponceño de Artesanos" y en Fajardo otra asociación con el nombre de "La Unión" (29).

Por el Decreto de 10 de julio se declaraba vigente en la isla el Título I de la Constitución de 1869 y con ello se hacían extensivos a la isla todos los derechos individuales que hasta ese momento habían estado reservados exclusivamente para los habitantes de la Península (30). En el Preámbulo de este Decreto se justificaba la aplicación a Puerto Rico del Título I en base al desarrollo político alcanzado por la isla y a su capacidad demostrada para ejercitar con responsabilidad las libertades otorgadas por la Constitución (31).

Finalmente, por la Ley Municipal se concedía a los municipios de la isla la plena responsabilidad y decisión sobre la gestión, gobierno y dirección de los intereses propios de los pueblos. Este último Decreto fue considerado por los reformis-

como la culminación de sus aspiraciones políticas, ya que significaba una intención descentralizadora por parte del Gobierno de la Metrópoli y una entrega de poder a los insulares para resolver sus asuntos internos (32).

Finalmente, por lo que se refiere a la actividad partidista, hemos de mencionar que el Partido Liberal Reformista sometía en el mes de agosto de 1873 a la consideración de los Comités locales una nueva Constitución del Partido, aprobada por el Comité Central con fecha 9 de agosto (33). La reforma se refería exclusivamente a la estructura del Partido y no a su fondo doctrinal, que permanecía siendo de tendencia asimilista, máxime en estos momentos en los que ya habían llegado rumores a la isla sobre los proyectos de elaboración de una Constitución de carácter federal, en la que Puerto Rico sería considerado como uno de los 18 estados federales de la República, con total autonomía en los asuntos económico-administrativos y amplia en lo político (34).

Cuando más adelante comenzaron a llegar las noticias sobre la presentación a la Asamblea Nacional del proyecto de Constitución Federal, el Comité Central del Partido tomó la decisión de dar por terminado su Pacto con el Partido Progresista Democrático Radical y de concertar uno nuevo con el Republicano Federal. Aunque esta decisión encontró cierta oposición en el seno del Comité, finalmente se aprobó por mayoría, pasando a denominarse el Partido desde este momento "Federal Reformista" (35).

NOTAS

- 1.- FERNANDEZ ALMAGRO, Melchor. Op.Cit., Tomo I, pág. 151. Labra menciona, al lado de estos sucesos, la cuestión de las reformas de Ultramar: "En el último período de la administración del Partido Radical... el problema ultramarino se sobrepuso de tal suerte, que bien puede asegurarse que vino a ser uno de los principales motivos de la caída de la Monarquía de D. Amadeo de Saboya". Cf.: "La República...", pág. 57. También del mismo autor: "Mi primer Discurso parlamentario", (Madrid, Tipografía "Sindicato de Publicidad", 1915), pág. 19.
- 2.- FERNANDEZ ALMAGRO, Melchor. Op.Cit., pág. 156.
- 3.- Ibidem, pág. 164. La República fue proclamada por 258 votos a favor y 32 en contra.
- 4.- GAMONEDA, Antonio. Op.Cit., págs. 345 y 346.
- 5.- Gaceta de Puerto Rico, 1873, número 46. Archivo Histórico Nacional (Madrid). Sección de Ultramar, Legajo 5104/27.
- 6.- Las versiones que se hicieron de estos sucesos son tan contradictorias que no hemos podido establecer el verdadero sentido de los mismos. Mientras los conservadores y el Gobernador los consideraron de carácter sedicioso, los liberales rechazaron esta versión, acusando a los conservadores de inducir en algunos casos y de interpretar maliciosamente en otros las situaciones conflictivas de la isla. En este sentido merece destacarse la tesis de Labra, enunciada precisamente como consecuencia de estos sucesos ante la Asamblea Nacional:
"Pues bien, señores: prescindiendo por completo del motín de Lares, ha habido en Puerto Rico tres alborotos: en 1781, el primero, en los momentos después que fueron vencidos los conservadores por los liberales en las elecciones de diputados a Cortes. Sobre esto me atengo a los informes del entonces Capitán general de la isla de Puerto Rico, Sr. Baldrich, que constan en el Ministerio de Ultramar. Ocurrió el segundo, cuando por segunda vez vencieron los liberales a los conservadores... en 1872. Entonces se habló de un supuesto motín en Yabucoa... Y por último, el tercer alboroto ocurre cuando teníamos ya facilidad para llevar

las reformas, y cuando, si fuese cierto que hubiera agitación en Puerto Rico, las reformas se habían de detener, y cuando todos saben perfectamente que la manera mejor y única de que se realicen las reformas es continuar en el orden acabado y ejemplar que viene manteniendo la isla de Puerto Rico desde la Revolución del 68, a pesar de las provocaciones de adentro, de las amenazas de Madrid y de las escitaciones de San Thomas y Nueva York.

Observad, pues, Sres. representantes, que siempre que hemos vencido los liberales, siempre que hemos estado en el momento de obtener una reforma, y siempre que las reformas han estado a punto de realizarse, se han producido en los primeros instantes esas agitaciones que no pueden ser cosa de los liberales, porque sabido es por éstos, que tales imprudencias únicamente pueden hacer mal a su causa". Cf.: Diario de Sesiones de la Asamblea Nacional, 1873, págs. 644 a 667. En su obra: "La República y las libertades de Ultramar, el mismo Labra resume su tesis sobre este tipo de sucesos:

"Los reaccionarios ultramarinos impusieron no sé cuántas conspiraciones y motines en Puerto Rico, para demostrar al público la tesis maravillosa de que el país portorriqueño, ansioso de reformas, se levantaba precisamente cuando las reformas se iban a hacer y realizaba todo lo que los adversarios de éstos deseaban, para que no se saliese del "statu quo" ultramarino". Pág. 443.

7.- En la parte relativa a Ultramar, el Discurso decía lo siguiente:

"En lo económico, como en lo administrativo y en lo político, mi Gobierno procederá dicatando las medidas más conducentes al bienestar de las provincias de Ultramar. Fija tendrá la vista en las solemnes y repetidas promesas de llevar a nuestros hermanos de allende los mares todas las reformas compatibles con su estado social; pero sin poner en peligro jamás la integridad del territorio, y cuidando con vigilante celo de que no puedan servir en ningún caso ni tiempo de arma ni escudo para los enemigos de nuestro nombre y de nuestra raza". Citado por Lidio Cruz Monclova. Op.Cit. Tomo II, págs. 226 y 227.

8.- Para una descripción detallada de las reacciones que esta promesa produjo entre los elementos conservadores de la isla y de la Península puede verse la citada obra de Cruz Monclova, páginas 229 a 234. Entre las actividades contra las reformas hay que destacar las que lle-

varon a cabo los Centros Hispano-Ultramarinos, tanto de la Península como de Puerto Rico, y los de la Liga Nacional contra las reformas.

- 9.- Archivo Histórico Nacional (Madrid). Sección de Ultramar, Legajo 5103/1.
- 10.- "Boletín Mercantil", 1873, número 25.
- 11.- Archivo Histórico Nacional (Madrid). Sección de Ultramar, Legajo 5111/20 a 34. Gaceta de Puerto Rico, 1873, número 44.
- 12.- "Boletín Mercantil", 1873, número 45.
- 13.- Gaceta de Puerto Rico, 1873, número 45.
- 14.- Ibidem, número 46.
- 15.- PAGAN, Bolívar. Op.Cit., pág. 257.
- 16.- La candidatura oficial del Partido Reformista coincide exactamente con los diputados elegidos, por lo cual no la repetimos aquí.
- 17.- El Comité Central quedó compuesto de la siguiente forma:
Presidente: José Julián Acosta; Vicepresidente, José García Maitín; Tesorero, Pablo Sáez; Vocales, Pedro G. Goico, Marcos S. Carazo, Isidoro Cintrón, Julián Blanco Sosa, José E. Ramos, Pascasio P. Sancérrit, Félix Padial y Pablo E. Rodríguez; Secretario, José Geigel y Zenón; Subsecretario, José Ramón Abad. Cf.: PAGAN, Bolívar. Op.Cit., pág. 257.
- 18.- "Boletín Mercantil", 1873, número 49. El texto de este Manifiesto era el siguiente:
"Electores: Un deseo altamente patriótico, una firme voluntad de evitar perturbaciones a todo trance y el deber de conservar, sin la más leve sombra que pudiera empañarle, el buen nombre de nuestro Partido, nos impusieron a un casi total retraimiento en las últimas elecciones generales dadas las circunstancias que ligeramente indicamos en nuestro Manifiesto de 20 de agosto último.
En su esencia existen aun aquellas circunstancias, y como hechos posteriores han venido a justificar nuestra previsión, y como otros de distinta naturaleza colocan a esta isla en grave y crítico estado, no existe razón impulsiva para un cambio de conducta, y parece más bien en extremo conveniente que el retraimiento entonces limitado, se adopte de una manera absoluta y general en las próximas elecciones para diputados a las Cortes Constituyentes.

Lo que indicado queda, y la unánime opinión previamente consultada de nuestros correligionarios de los fiderentes pueblos de la isla, basta para justificar tal actitud, sin que sea patriótico, ni prudente hoy, entrar en cierto número de consideraciones para mejor patentizar nuestro digno proceder.

El Partido Español sin condiciones de Puerto Rico, no ligado con ninguno de los que en la Península militan, como repetidamente lo ha manifestado, supedita todas sus aspiraciones políticas al principio que le da vida y constituye su bandera: a la integridad de la Patria. Por eso permanece fiel y unido al lado de esa bandera, hoy rodeada de peligros, hoy bajo cierta forma combatida y como una lucha ardiente en política podría arrostrar tras sí deplorables consecuencias, sacrifica todas sus secundarias aspiraciones, para solo, dentro de la legalidad y auxiliando a la del Gobierno español, sea el que fuere, vigilar por la causa de la Nación y defenderla a todo trance, si atacada se viere en esta isla.

Se aparta, pues, el Partido del terreno de la política con la convicción de haber militado en él como bueno, para salvar tan esencial principio; rechaza toda calificación que su carácter político pueda darle, y se reviste tan solo con el ancho manto de la Patria, sin atender a su forma ni color.

Electores: renunciad a vuestro derecho como tales, y sean solo vigilantes y decididos españoles"

19.- Vid.: MARTINEZ CUADRADO, Miguel: "Elecciones...", Tomo I, págs. 197 a 199.

20.- Contestando a un telegrama del Ministro de Ultramar de fecha 5 de mayo, le manifestaba el Gobernador de la isla en carta del día 10 del mismo mes:

"Hoy, primer día de elecciones, recibo el telegrama cifrado de V.E. por el que me recomienda la más amplia libertad electoral y que procure no se retraiga ningún partido.

La primera parte está cumplida y estoy seguro que no hay en España otra provincia en donde se ejecuten las elecciones con más amplia libertad.

La segunda parte no puede tener efecto, estando hoy en elecciones. Aquí no hay más que dos partidos políticos definidos, el demócrata, hoy en su mayoría republicano, y el conservador. Aquel ha tenido algunas divisiones, más que de principios, de personas, que creo han sido zanjadas sin que mi autoridad haya intervenido en nada absolutamente. El segundo se ha retirado enteramente de la lucha; así lo ha dicho en un Manifiesto

al Partido; no ha podido decir que por falta de libertad, pues mis actos demostraron desde mi llegada la completa en que dejaba la elección habiéndolo así declarado de un modo terminante a las comisiones que se me presentaron el mismo día: debe estar penetrado que no puede vencer sino por la protección más decidida de la parte oficial. El Sr. Marqués de la Esperanza me manifestó acabado de llegar que "no formarían partido, que estaban muy desengañados y que solo serían españoles". Le contesté que lo sentía, pues los hombres de su importancia debían velar por el bien de la Patria, defendiendo las ideas del partido que los representase. Insistió en su propósito que yo creo irrevocable, pues de público se dice que el Partido Conservador de aquí está profundamente disgustado de los diputados de la Asamblea que los representan, por haber votado la Ley de la Abolición, después de haber sacrificado sumas considerables para evitarlo. Con estos antecedentes, mis esfuerzos habrían sido inútiles y mi propósito de imparcialidad se hubiera roto con quebranto de mi autoridad". Cf.: Archivo Histórico Nacional (Madrid). Sección de Ultramar, Legajo 5014/27.

- 21.- Pueden verse los resultados en los Cuadros y Mapas electorales adjuntos.
- 22.- En un principio, los electores se habían calculado en 45000 Cf.: Archivo Histórico Nacional (Madrid). Sección de Ultramar, Legajo 5103/31. El número exacto de electores fue de 46,042. Cf.: Archivo de las Cortes. Sección de Expedientes, Legajo 75, número 1.
- 23.- Vid. MARTINEZ CUADRADO, Miguel: "Elecciones...", Tomo I, pág. 202.
- 24.- En efecto, dejando a un lado San Germán, que solamente tenía cabecera de Distrito, los demás dan las siguientes cifras: Capital: 69 % - 26 %; Mayagüez: 54 % - 31 %; Ponce: 59 % - 35 %; Guayama 54 % - 33 %.
- 25.- GAMONEDA, Antonio. Op.Cit., págs. 345 y 346. Diario de Sesiones de las Cortes (Asamblea Nacional), 1873, págs. 72 a 711. Gaceta de Puerto Rico, 1873, números 52 y 57. PAGAN, Bolívar. Op.Cit., págs. 255 y 256. LABRA, Rafael María de: "La República...", págs. 94 a 125. Todavía el 15 de octubre de 1873 el Gobierno de la República expedía un Decreto derogando la Real Orden de 28 de mayo de 1825, ratificada por el Real Decreto de 28 de noviembre de 1867, por los que se habían conferido a los Gobernadores de Puerto Rico "las facultades omnímodas de que gozan los gobernadores de plazas sitia-

das". Ibidem, págs. 79, 83 y 84.

26.- Datos obtenidos de las Actas Electorales.

27.- Archivo Histórico Nacional (Madrid). Sección de Ultramar, Legajo 5111. Los números 20 a 34 de este Legajo contienen una documentación muy completa sobre el tema de la Abolición de la esclavitud en Puerto Rico.

28.- PEDREIRA, Antonio Salvador. Op.Cit., págs. 107 a 123, y 429 en adelante. Refiriéndose a la situación de la prensa de la isla durante este período, comenta este autor:

"Desde que apareció el "Boletín Instructivo y Mercantil" en 1839 hasta que apareció "El Progreso" en 1874 (debe querer decir "desapareció"), los años más fecundos de la prensa puertorriqueña fueron los cinco no completos en que circuló este último periódico (1870-1874). Bien se ve que la historia de Puerto Rico corre paralelamente con el desarrollo de su prensa. Cuando aquella sufre una aguda crisis, desde 1874 en adelante, el periodismo más representativo desaparece y le sustituye por algún tiempo una prensa anodina y sin ningún interés cívico o literario". Pág. 112.

29.- CRUZ MONCLOVA, Lidio. Op.Cit., Tomo II, pág. 290.

30.- Decía así el Preámbulo:

"Considerando, que el fundamento de la actual situación política de la Nación Española lo constituyen los principios de la Democracia, cuyo primer dogma es el de los derechos naturales del hombre, anteriores y superiores a toda ley positiva;

Considerando, que estos derechos están consagrados en el Título I de la Constitución de 1869;

Considerando, que los títulos siguientes se refieren a la organización de los poderes públicos, sobre lo cual, muy especialmente, están llamados a entender y resolver en definitiva las actuales Cortes;

Considerando, que la cultura de la isla de Puerto Rico bastaría por sí sola, si otras razones de derecho no existiesen, para proclamar en aquel país todas las libertades propias de los pueblos civilizados;

Considerando, que el Gobernador Superior de aquella isla ha estimado que la situación de la provincia exigía la proclamación de las libertades de Imprenta, Reunión y de Asociación, lo cual ha hecho con el carácter de medida administrativa;

Considerando, que tanto estas medidas como la abolición de la esclavitud han producido la apetecible

plenitud de sus efectos;

Considerando, que unidas las razones de Justicia a las de conveniencia, hacen imposible retardar por un solo momento ni bajo ningún pretexto la consagración y reconocimiento explícito de los derechos referentes a la personalidad humana en la culta, pacífica y leal isla de Puerto Rico, el Ministro que suscribe tiene la honra de someter a las Cortes el siguiente proyecto de Ley..." PAGAN, Bolívar. Op.Cit., págs. 255 y 256.

31.- Ibidem.

32.- Tal fue, por ejemplo, el juicio de Labra, el cual dice a este respecto:

"De aquí resultó una gran descentralización, que a no haber sido restringida hasta el exagerado extremo que después lo fue por el primer Gobierno de la Restauración, hubiera tenido beneficiosas consecuencias para la isla de Puerto Rico y sido un precedente admirable para la más complicada reforma de Cuba". Cf.: "La República...", pág. 106.

33.- CELIS AGUILERA, José de: "Mi grano de arena

34.- Uno de los autores del Proyecto fue Rafael María de Labra, diputado elegido por el Distrito de Sabana grande.

35.- PAGAN, Bolívar. Op.Cit., pág. 263.

CUADRO I

RESULTADOS

(1973)

<u>DISTRITO</u>	<u>POBLACION</u>	<u>ELECTORES</u>	<u>RELACION Hab/Elec</u>	<u>VOTANTES</u>	<u>ABST.</u>	<u>CANDIDATOS ELEGIDOS</u>	<u>VOTOS</u>
CAPITAL*	4,850			2,085	63.81	CLIS AGUILERA, José	2,061
VEGA BAJA	2,303			1,733	22.75	ALVAREZ PERALTA, José A.	1,701
ARECIBO	2,641			1,720	34.87	PADIAL Y VIZCARRONDO, Luis	1,713
QUEBRADILLAS	2,352			1,352	21.56	RECIDOR Y JUINADO, Manuel	1,513
AGUADILLA	2,833			2,015	29.00	TORRE Y LENDIETA, Nemesio	2,014
MAYAGUEZ	3,552			1,913	48.82	CORCHADO Y JUARBE, Manuel	1,900
SAN GERMAN	2,427			1,370	43.55	QUINONES, José María	1,336
SABANA GRANDE	2,668			1,964	26.39	LABRA, Rafael María de	1,960
PONCE	4,458			2,052	53.97	AYUSO Y COLINA, José	2,046
GUAYAMA	3,794			2,240	40.96	CINTRON, José Pacundo	2,232
HUMACAO	2,733			1,953	28.54	SANROMA, Joaquín María	1,948
RIO PIEDRAS	2,214			1,592	28.09	GARCIA MARTIN, Manuel	1,492
CAGUAS	2,499			1,973	21.05	BLANCO Y SOSA, Julián	1,872
COAMO	3,291			2,141	34.94	BETANCOURT, José Ramón	1,745
UTUADO	2,917			1,905	34.69	IUGO VILLA, Wenceslao	1,905
	612,987		13.31	28,653	36.20		

FUENTES: Archivo de las Cortes. Sección de Expedientes, Legajo 75, número 1

CUADRO II
(1873)

RESULTADOS POR PARTIDOS

(Abstención de Partido Liberal Conservador)

LIBERALES:

CELIS AGUILERA, José de	San Juan
ALVAREZ PERALTA, José Antonio.....	Vega baja
GINTRON, José Facundo.....	Guayama
AYUSO Y COLINA, José.....	Ponce
CORCHADO Y JUARBE, Manuel.....	Mayagüez
REGIDOR Y JURADO, Manuel.....	Quebradillas
GARCIA MAITIN, Manuel.....	Rio Piedras
SANROMA, Joaquín María.....	Humacao
BLANCO Y SOSA, Julián.....	Caguas
LABRA, Rafael María de.....	Sabana grande
TORRES MEDIETA, Nemesio de la.....	Aguadilla
QUINONES, José Marcial.....	San Germán
PADIAL Y VIZCARRONDO, Luis.....	Arecibo
LUGO VIÑAS, Wenceslao.....	Utua
BETANCOURT, José Ramón.....	Coamo

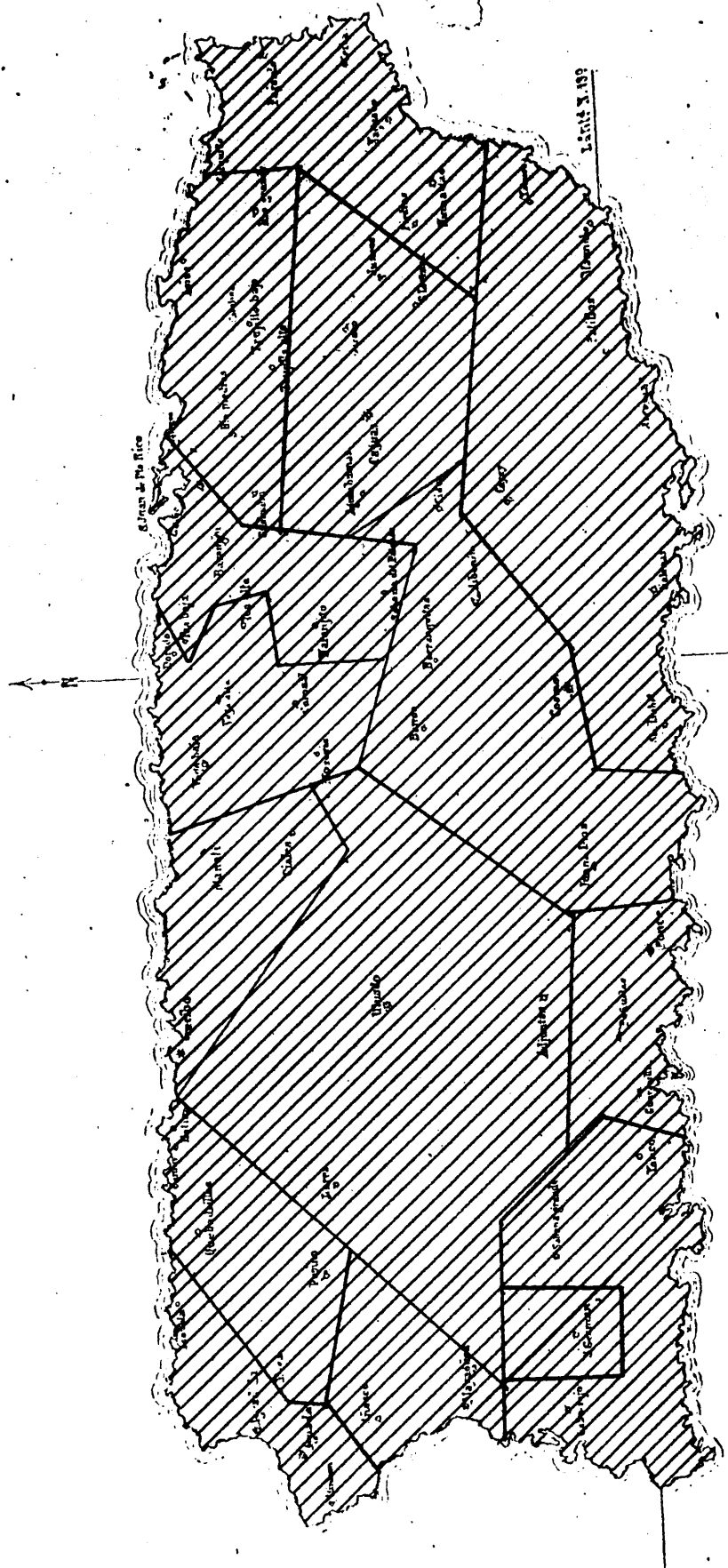
- - - - -

CONSERVADORES

LIBERALES

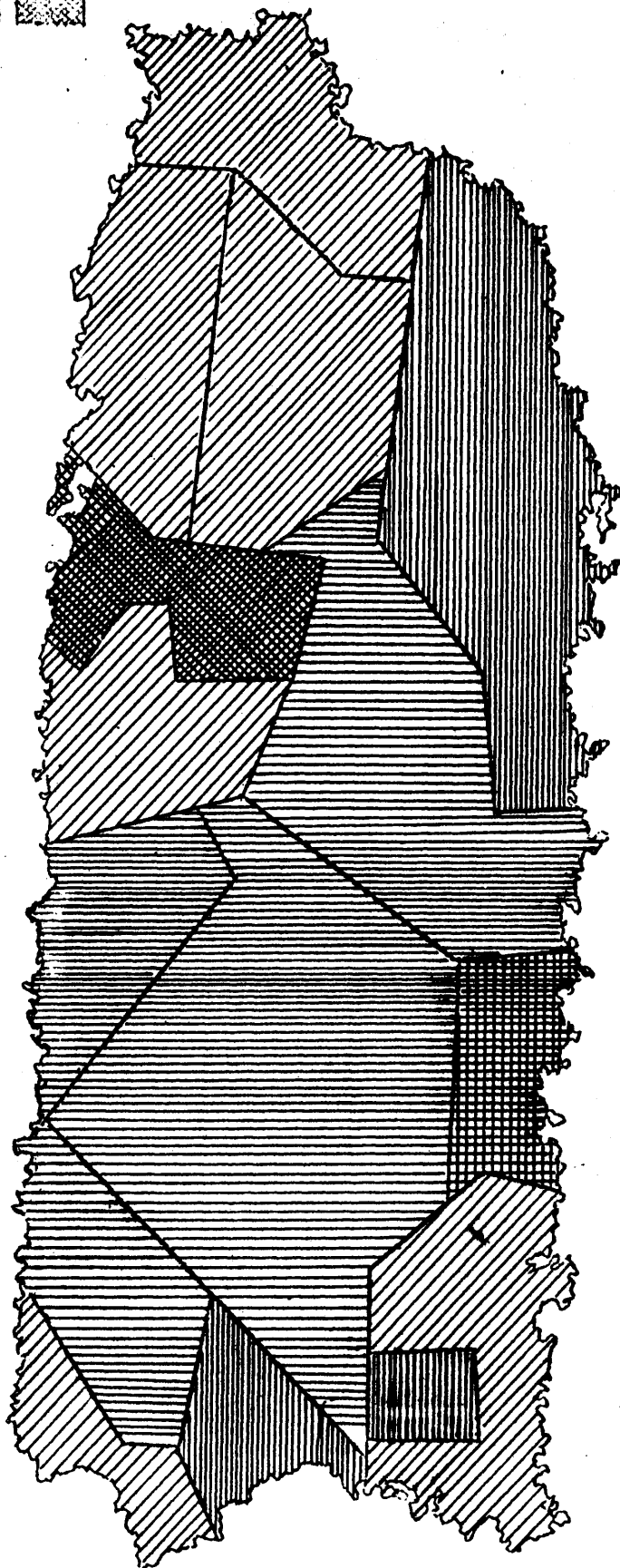
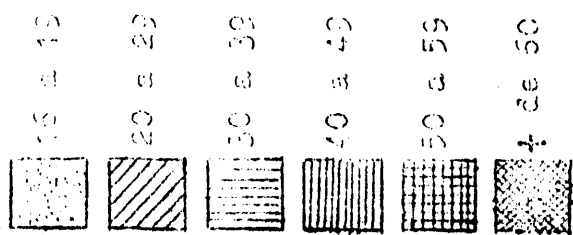


(1373)



ABSTENCIÓNES (1873)

Media: 36.20



2.6. LA ELECCION GENERAL DE 1876

A.- La situación política en la Península

1.- La Restauración.-

El día 3 de enero de 1874 el general Pavía, Capitán General de Madrid, disolvía por la fuerza la Asamblea Nacional republicana y formaba un gobierno "de orden" sumamente ambiguo, aunque legalmente continuaba siendo republicano. El general Serrano se hizo cargo del poder ejecutivo y logró formar un Gobierno combinando elementos republicanos con progresistas de tendencia moderada. Sin embargo, no consiguió atraerse a los "alfonsinos" los cuales, agrupados ya en torno a Cánovas, no transaban más que por la vuelta de D. Alfonso.

Ni el Gobierno de Zabala ni el posterior de Sagasta pudieron impedir la actividad conspiratoria de elementos del ejército, entre los que destacaba el general Martínez Campos; fue este general el que finalmente, y adelantándose a los proyectos de Cánovas, proclamaría Rey al Príncipe D. Alfonso en Sagunto, logrando de inmediato la adhesión de las autoridades militares y de la mayor parte de las políticas.

El Gobierno de Sagasta dimite y se nombra un Ministerio-Regencia, en el que Cánovas pasa a ocupar la Presidencia, puesto que realmente le correspondía por derecho propio. El día 9 de enero de 1875 llegaba D. Alfonso a Barcelona y el 15 hacía su entrada triunfal en Madrid, confirmando acto seguido los poderes del Ministerio de Cánovas.

En el mes de septiembre se produce una crisis "prefabricada" en el Gobierno para dar paso al general Jovellar, con el fin de que fuera éste y no Cánovas el que se encargase de la espionaje cuestión de las elecciones, evitando así que los conservadores se indispusieran con este último. Cánovas no estaba de acuerdo con el sufragio universal, pero creía necesario aplicarlo pa

ra hacer irrecusable el advenimiento de la Monarquía y lavarla al propio tiempo de su pecado original militar (1).

Una vez solucionado el problema de las listas electorales por Real Decreto de 1 de octubre, todo estaba preparado para la vuelta de Cánovas, y así lo hace en diciembre, convocando a Cortes para el día 15 de febrero y a elecciones para el 20 de enero en la Península y 15 de febrero en Puerto Rico (2).

Las Cortes Constituyentes, de mayoría conservadora, aprueban un texto constitucional previamente elaborado y discutido por una comisión de notables, todos ellos de acuerdo en aceptar una legalidad común (3). El Título XIII de esta Constitución de 1876 se refería a las provincias de Ultramar, y constaba de un solo artículo, en el que se recogía una ambigua tendencia asimilista a corto plazo junto a una autonomista a plazo indefinido (4).

2.- Las bases del sistema canovista.-

La política de Cánovas logró lo que ninguna otra había conseguido a lo largo de todo el siglo XIX: la estabilidad del sistema y de la vida política. Si bien este mérito nadie se lo disputó nunca a Cánovas, es preciso hacer notar que el mismo se había edificado sobre dos pilares no precisamente democráticos: el control riguroso de la prensa y una estructura bipartidista artificial, asentada a su vez sobre la manipulación electoral (5).

El control de la prensa comenzó a perfilarse inmediatamente después del "pronunciamiento" de Martínez Campos: con el fin de lograr una defensa a ultranza de la Corona, Cánovas no dudará en reprimir todo tipo de actividad hostil a la misma y al Gobierno que la representa. Será la prensa política la que sentirá todo el peso de este principio, no solo al tener que someterse a la previa censura, sino al aceptar la desaparición de una serie de diarios, algunos de ellos portavoces oficiales de ten-

dencias políticas al margen o contrarias a la legalidad común (6).

Por lo que se refiere al sistema bipartidista, "remedo caricatural del británico" como lo denomina Tuñón de Lara, era un sistema ajeno al desarrollo institucional de España, y para hacerlo funcionar, Cánovas hubo de recurrir a toda suerte de artilugios y manipulaciones:

"Tanto el régimen de dos partidos como el turno pacífico, regular, monótono de los mismos en el poder político va a ser principio fundamental del régimen. Pero dichos partidos no se correspondían ni representaban a una dual sociedad española conservadora y liberal. Ni siquiera su respectiva ideología liberal, matizada para cada uno de ellos, reflejaba las diferencias y desequilibrios entre las altas clases, la burguesía y las clases medias, excluyendo el proletariado, que no tuvo entrada en las Cortes hasta mucho tiempo después" (7).

Los medios más típicos y más utilizados para hacer funcionar el sistema consistieron en manejar y dirigir desde arriba el sistema electoral, con el fin de obtener los resultados apetecidos por el Gobierno:

"Esa España de viejas estructura agrarias, pero con constitución y partidos políticos "turnantes", creó un sistema social y político cimentado sobre dichas estructuras y encaminado a embotar más y más la sensibilidad política del hombre del campo y a hacer la vida fácil a los conservadores y "liberales" que peroraban en el parlamentario edificio de la Carrera de San Jerónimo. Estamos hablando del caciquismo" (8)

Asegurada de esta forma la mayoría parlamentaria del Gobierno, no había otra posibilidad para que el partido de oposición obtuviese el poder y la consiguiente mayoría parlamentaria que un acuerdo previo entre ambos partidos. Este acuerdo, tácito en un principio, se convirtió en oficial poco antes de la muerte de Alfonso XII, después de una reunión entre los jefes de los partidos Conservador y Liberal, Cánovas y Sagasta respectivamente (9). A partir de la instauración del sistema de

turno pacífico se suceden en monótona alternancia uno y otro partido de la siguiente forma, dentro del período aquí estudiado:

- 1875 - 1880: Conservadores
- 1881 - 1884: Liberales
- 1884 - 1885: Conservadores
- 1885 - 1890: Liberales
- 1890 - 1892: Conservadores
- 1892 - 1895: Liberales
- 1895 - 1897: Conservadores
- 1897 - 1899: Liberales.

B.- La situación político-partidista en Puerto Rico

1.- La política de la Restauración en Ultramar.-

Respecto a la política ultramarina, el punto más sobresaliente y el que a la vez domina todo el período es la guerra de Cuba. Esta guerra, que pasa por diversas etapas y alternativas, en ningún momento será controlada ni mucho menos resuelta por los diferentes gobiernos metropolitanos e insulares y desembocará directamente en la confrontación con los Estados Unidos.

Puerto Rico, por el contrario, se mantendrá a lo largo de todo este período en un segundo plano, opacado no solo por el conflicto cubano, sino también y sobre todo por la falta de vida política interior. Como veremos enseguida, el Partido Radical, ante el viraje drástico de la política peninsular, optará de inmediato por un retraimiento prácticamente total en los procesos electorales, y su existencia irá decayendo, con esporádicos y efímeros intentos de revitalización. Solamente a finales de la década de los 80 renacerá su espíritu de lucha y surgirá de su seno un nuevo partido, explícitamente autonomista, que tendrá en la década siguiente una brillante, aunque corta, existencia.

Por todo esto se puede afirmar que la Restauración, desde el punto de vista del desarrollo político, representó una desviación en la trayectoria iniciada por el Gobierno metropolitano a partir de la Revolución de 1868 (10). La concesión del régimen autonómico en 1897 no será más, en definitiva, que un intento desesperado por espantar las sombras de separatismo que se cernían sobre los dominios de Ultramar. Desgraciadamente, el intento había llegado demasiado tarde y a la postre no dió ningún resultado.

2.- El segundo Gobierno del general Sanz y Posse: retroceso en el desarrollo político de Puerto Rico.-

Al hacerse cargo el general Serrano de la Presidencia del Poder ejecutivo en enero de 1874 nombró Ministro de Ultramar a D. Víctor Balaguer, y éste, a su vez, requirió de nuevo los servicios del general Sanz y Posse para que se encargase de regir los destinos de Puerto Rico, en sustitución del general Primo de Rivera (11).

Desde el momento en que el general Sanz se hizo cargo del mando de la isla -2 de febrero de 1874- procedió a emitir toda una serie de decretos encaminados a restringir las libertades de que había gozado la isla a partir de 1868. El mismo día de su toma de posesión suspendía por decreto la vigencia en Puerto Rico del Título I de la Constitución de 1869, justificando esta medida por la necesidad de conservar "el orden y la integridad de la Patria"; esta legalidad fue sustituida por la Ley de Orden Público de 23 de abril de 1870 (12). Más adelante, sin embargo, y ante el requerimiento del Gobernador para que el Ministro de Ultramar sancionase ésta y otras medidas adoptadas, recibía la siguiente contestación:

"Respecto a las propuestas del Gobernador General de Puerto Rico sobre derogación del Título I de la Constitución y reforma de la Ley Electoral no se ha tomado acuerdo alguno, limitándose a aprobar la suspensión

del primero durante la situación actual del país" (13)

El día 3 de febrero convocaba a los directores de los principales periódicos de la isla para comunicarles personalmente su decisión de impedir que la prensa sirviera de vehículo para atacar la integridad del territorio o a la autoridad constituida y alterar el orden público, castigándose las transgresiones con la supresión (14). El día 4 y por otro decreto, quedaban prohibidas todas las sociedades políticas "en las que de palabra o de obra se conspirase contra la seguridad pública, los altos y sagrados intereses de la Patria; contra la integridad del territorio y contra el poder constituido" (15). El día 5 publicaba otro decreto disolviendo la Diputación provincial. En la exposición de motivos, justificaba así su decisión:

"La Diputación provincial elegida en 12 de octubre último por un número menor de la tercera parte de electores en las correspondientes listas inscritas y producto exclusivo de un partido declarado francamente federal y contrario al Gobierno constituido, no puede tenerse como fiel representante de la Provincia ni prestar garantías a una previsora autoridad. Por más que los individuos sean dignos y buenos ciudadanos, por más que aspiren a llenar debidamente su cometido, es imposible que esa Corporación pueda ejercer sus facultades puramente administrativas, sin obedecer a la presión del partido a que pertenece y le ha dado vida" (16).

Por todo ello procedió a disolverla y a designar por su cuenta a los miembros de la misma, designación que recayó lógicamente en personas de tendencia conservadora.

El día 7 del mismo mes disolvía los Ayuntamientos electivos, por razones parecidas, aunque en esta ocasión las explicitaba un poco más:

"Apoderado de los Municipios un partido opuesto en ideas y principios al Gobierno constituido; elegidos con retraimiento casi absoluto del Comercio y de la propiedad en su mayor representación y por notable minoría del cuerpo electoral; federales en política y por tanto excesivamente autonómicos, se les ha vis-

to desligarse en ocasiones de la alta inspección del Gobierno" (17).

Del mismo modo, procedió a destituir a los miembros de los Ayuntamientos y a nombrar para ocupar esos cargos a personas adictas al Gobierno.

Abrumado por estas medidas y por los sucesos ocurridos en la Península, el Comité Central del Partido Liberal, que desde la proclamación de la República se denominaba "Federal Reformista", publicó un comunicado dirigido a sus correligionarios, en el que, después de calificar de tristes y dolorosos los últimos acontecimientos, aconsejaba "esperar con calma y con dignidad el desenlace de los trascendentales sucesos iniciados en la Madre Patria" (18).

El Ministerio-Regencia de Cánovas, por medio de su Ministro de Ultramar, Sr. López de Ayala, confirmó al general Sanz y Posse en su cargo y éste continuó su política restrictiva. El 9 de marzo de 1875 publicaba la Gaceta de Puerto Rico un Decreto sobre Imprenta, por el que se reducía drásticamente la libertad de expresión escrita (19). El 26 de abril se dejaban sin efecto las disposiciones de la Ley Municipal relativas a la autonomía de los municipios en materia fiscal (20).

Todas estas medidas y otras que no mencionamos por no estar directamente relacionadas con nuestro tema, consiguieron producir un clima de desánimo en las filas del Partido Federal Reformista, muchas de cuyas figuras más destacadas decidieron retirarse de la vida política activa y hasta ausentarse de la isla, en tanto que otros se pasaban a las filas del Partido Incondicional, todo ello con lógica satisfacción del Gobernador y de los conservadores (21).

Pero otros liberales intentaron hacer algo para atajar la obra represiva del Gobernador y se dedicaron a combatir su política por medio de cartas y artículos publicados en la prensa extranjera. Tantas y tan evidentes fueron las acusaciones con-

tra el general Sanz y Posse, que el Gobierno de la Península hubo de darse por enterado y convencido de que la actuación del general era una mala propaganda para la política ultramarina de España, decidió su relevo, no sin que se produjeran manifestaciones en contra por parte del sector conservador de la isla, y sin que el propio Gobernador se resistiera a entregar el mando, conducta que él mismo había criticado respecto de su antecesor (22).

El general Segundo de la Portilla, nuevo Gobernador de Puerto Rico, tomó posesión de su cargo el día 15 de diciembre de 1875 y después de algunos titubeos iniciales, terminó por inclinarse hacia el Partido Incondicional, nuevo nombre que había adoptado el Partido Español sin condiciones. A esta decisión contribuyó el hecho de haberse presentado ante el Gobernador una comisión del Partido para ponerse a su entera disposición (23).

El general de la Portilla y el Partido Incondicional llegaron a un acuerdo respecto a la designación de candidatos para las elecciones de diputados a Cortes: una parte sería nominada por el Partido y la otra quedaría a disposición del Gobierno de la Península (24).

C.- La convocatoria de elecciones en Puerto Rico.- La campaña electoral.-

El día 2 de febrero de 1876 publicaba la Gaceta el Decreto de convocatoria de elecciones para diputados a Cortes, fijándolas para los días 15 a 18 del mismo mes (25). Las mismas debían celebrarse de acuerdo con el Decreto de 6 de octubre de año anterior, publicado en la Gaceta de Puerto Rico del día 7. En este último Decreto se determinaba que dichas elecciones deberían efectuarse con arreglo a la Ley Electoral de 20 de agosto de 1870 y al Real Decreto de 1 de abril de 1871. Establecía además la forma de confeccionar las listas electorales, en las

que debería incluirse solamente a los mayores de 25 años que pagasen una cuota mínima de 8 pesos (16 escudos) en concepto de contribución directa o supiesen leer y escribir. Establecía también que las Secciones o Colegios electorales serían únicamente las de los Ayuntamientos establecidos en la isla (26).

1.- El Partido Liberal Reformista.-

Hemos mencionado más atrás que al comenzar el mando del general de la Portilla los liberales habían concebido la esperanza de que éste tomara algunas medidas que suavizaran la precaria situación en que habían dejado a la isla los decretos del anterior Gobernador. A esta esperanza contribuyeron los recelos iniciales de los conservadores respecto al nuevo Gobernador, las medidas que éste adoptó contra ellos y las vacilaciones del mismo respecto al Partido Incondicional.

Cuando las relaciones entre el Gobernador y los incondicionales se normalizaron, acordando trabajar de común acuerdo para hacer triunfar los candidatos propuestos por el nuevo Gobierno de la Península, los reformistas perdieron sus últimas esperanzas de un desarrollo imparcial de las elecciones; en consecuencia, acordaron no intervenir en las mismas, por considerar que no contaban con las condiciones adecuadas para desarrollar su campaña ni con las garantías mínimas de imparcialidad por parte del Gobierno en el proceso electoral (27).

2.- El Partido Incondicional.-

La situación de este Partido se vió afectada por una serie de medidas adoptadas por el general de la Portilla al comienzo de su mando. Tales medidas fueron motivadas ante una actitud de desconfianza de los conservadores hacia el nuevo Gobernador, y por la destitución del general Sanz y Posse, a quien consideraban como el auténtico intérprete de sus deseos y aspiraciones.

La postura inflexible adoptada en principio por el nuevo

Gobernador decidió a los incondicionales a celebrar una reunión para fijar su actitud al respecto, y para tratar sobre las próximas elecciones de diputados a Cortes (28). Reunidos el 18 de enero, decidieron por unanimidad ofrecer el apoyo incondicional del Partido al nuevo Gobernador, aceptando que él propusiera "los candidatos que a bien tuviese, en la inteligencia de que serían eficazmente apoyados por el Partido" (29).

Naturalmente, el general de la Portilla aceptó tan generosa propuesta y, de común acuerdo, acordaron aceptar los candidatos propuestos desde Madrid por el Gobierno de Cánovas, con lo cual se restableció la colaboración entre el Gobierno y el Partido Incondicional (30).

D.- Los resultados.-

Dueños exclusivos del terreno, los conservadores no tuvieron que realizar grandes esfuerzos para lograr que salieran electos todos los candidatos nominados por ellos y el Gobernador, tanto en la elección general como en las diversas parciales que se realizaron posteriormente (31).

E.- Comentarios.-

Ateniéndonos al volumen de datos que existen sobre cunismo, es evidente que en estas elecciones cobró un enorme auge, en consonancia con la política peninsular de la mayoría parlamentaria. Los documentos consultados demuestran que fue ya el general Sanz quien comenzó a preparar el terreno a los candidatos del Gobierno de Madrid y así, cuatro días antes de recibirse en la isla el Decreto sobre listas electorales, comenzaba un intercambio de telegramas entre ambas autoridades, tejiendo la trama electoral. El primero de ellos era solamente un tanteo por parte del Ministro de Ultramar:

"Urge que V.E. me dé cuenta del estado de esos distritos electorales, indicándome las personas del país que por su arraigo e importancia aspiren justamente a la diputación, así como el número de distritos con

que podría contar el Gobierno para personas de la Península, que se hayan distinguido por sus trabajos y servicios con relación a Ultramar" (32).

Aunque el general Sanz y el Gobierno llegaron a un acuerdo respecto a la designación de candidatos, el relevo del general Sanz y el cambio de parecer del Gobierno de la Península provocaron el conflicto que ya hemos mencionado. A partir de estas elecciones de 1876 la actitud del Gobierno de Madrid se hace más drástica, limitándose a imponer sus candidatos, sin apenas dar razones ni explicaciones. Las pocas y débiles protestas que a veces se alzaban eran acalladas de inmediato por la presión del Gobierno y por la autoridad del Gobernador.

Para la elección parcial por el Distrito de San Juan celebrada los días 19 a 22 de enero de 1877, el Gobierno de la Península propuso la candidatura de D. Francisco Laiglesia (33). Pero el Gobernador de Puerto Rico se vió en la necesidad de hacer la siguiente observación:

"Señor Laiglesia completamente desconocido aquí... Debo advertir que distrito Capital celoso de su rango preferiría candidato que hubiera sobresalido ya en el estudio y defensa de intereses ultramarinos. Exento de todo compromiso personal, solo haré lo que V.E. quiera, esperando lo indique" (34).

La "indicación" llegó el mismo día y realmente era muy explícita, aunque poco convincente:

"El Sr. Laiglesia es persona que se ha ocupado mucho de asuntos ultramarinos. Gobierno insiste en su candidatura, pues que V.E. la cree de éxito seguro" (35)

Por supuesto que finalmente fue aceptada la candidatura y D. Francisco Laiglesia fue elegido por unanimidad de los votos emitidos (36).

Sin embargo, el eco de tales manipulaciones llegó hasta la Cortes, y no precisamente por boca de los reformistas, que no los había, sino de un diputado conservador de la isla, el Sr. Vivar y Gazzino, en una sesión de la Legislatura de 1878. Aprovechando una interpelación al Ministro de Ultramar sobre la

cuestión de los presupuestos, terminaba su intervención refiriéndose a una supuesta intención del Gobierno de combatir su candidatura:

"... con este motivo voy a hacer una advertencia al Gobierno por si desgraciadamente llegase el caso de que hiciera las elecciones. Yo que no quiero dejar nada retrasado y que más bien quiero vivir por adelantado, le advierto que la vida política en aquellas provincias es nueva... y que es menester que el régimen electoral no se vicie como se ha viciado en la Península, tomando participación el Gobierno en las elecciones. Allí debe resplandecer más que en ningún sitio la verdad y la justicia, y si se sigue la senda extraviada que se ha seguido en la Península por este Gobierno, y especialmente por el Sr. Ministro de la Gobernación actual, hemos de lamentar grandes desgracias" (37).

A esta clara y valiente advertencia contestaba con gran desparpajo el Ministro de Ultramar:

"No, Sr. Vivar: no se ha comunicado, puedo asegurárselo a S.S., orden ni instrucción de ninguna especie para que se combata la candidatura de S.S., ni la de ningún Sr. diputado. Interpretando de manera demasiado arbitraria, en mi opinión, palabras del Sr. Presidente del Consejo, ha podido suponer S.S. que aquí se habían traído diputados por el Gobierno. El Gobierno no ha traído aquí absolutamente ningún diputado; el cuerpo electoral ha enviado sus Diputados" (38).

Respecto a los resultados de esta elección, pocos comentarios podemos hacer, aparte de que fueron el reverso de las anteriores. Desde luego que el número absoluto de electores y el de votantes disminuyeron considerablemente, como consecuencia de la aplicación de decretos electorales más restrictivos del derecho electoral: los 46,042 electores de 1873 se redujeron a 20,839 en 1876; los 28,663 votantes pasaron a ser únicamente 12,600 (39). Sin embargo, el índice de abstencionismo se mantuvo en el mismo nivel que en la elección de abril de 1873: 35.69 %. Bajó un poco en los distritos de San Juan, Río Piedras, Guayama, San Germán, Arecibo y Coamo; subió también ligeramen-

te en los de Vega baja, Quebradillas, Mayagüez y Sabana grande, manteniendo idéntico porcentaje los de Humacao, Caguas y Arecibo (40).

La explicación de esta paradoja creemos haberla encontrado "grosso modo" en el fenómeno ya apuntado más atrás, que se produjo como consecuencia de las medidas adoptadas por el general Sanz y Posse: el abandono del Partido Liberal Reformista por parte de numerosos grupos de personas en toda la isla, que pasaron a engrosar las filas del Partido Incondicional por considerarle "la genuina representación de los intereses de la Patria" (41).

NOTAS

- 1.- MARTINEZ CUADRADO, Miguel: "Elecciones...", Tomo I, pág. 212.
- 2.- Gaceta de Madrid, 1876 (1 de enero).
- 3.- FERNANDEZ ALMAGRO, Melchor. Op.Cit., Tomo I, pág. 294.
- 4.- TIerno GALVAN, Enrique. Op.Cit., pág. 169. El artículo mencionado decía textualmente:

"Las provincias de Ultramar serán gobernadas por leyes especiales, pero el Gobierno queda autorizado para aplicar a las mismas, con las modificaciones que juzgue convenientes y dando cuenta a las Cortes, las leyes promulgadas o que se promulguen para la Península.

Cuba y Puerto Rico serán representadas en las Cortes del Reino en la forma que determine una ley especial, que podrá ser diversa para cada una de las dos provincias".
- 5.- MARTINEZ CUADRADO, Miguel: "La Burguesía conservadora", (Madrid, Alianza Editorial, 1974), pág. 22. El Dr. Martínez Cuadrado hace un juicio favorable del sistema canovista por considerar que, a pesar de sus defectos, constituía un adelanto respecto a la etapa anterior.

Para una opinión negativa respecto del sistema canovista, Cf.: TUÑON DE LARA, Manuel. Op.Cit., pág. 260 y sgts.
- 6.- MARTINEZ CUADRADO, Miguel: "Elecciones...", pág. 213. El Dr. Martínez Cuadrado cita una serie de periódicos de Madrid suspendidos temporalmente por el Gobierno, dos de los cuales fueron suprimidos a partir del 29 de enero de 1875.
- 7.- MARTINEZ CUADRADO, Miguel: "La Burguesía conservadora", pág. 71.
- 8.- TUÑON DE LARA, Manuel. Op.Cit., pág. 265.
- 9.- FERNANDEZ ALMAGRO, Melchor. Op.Cit., pág. 444.
- 10.- En apretada síntesis, Labra describe así la situación de Puerto Rico durante los primeros años de la Restauración:

"Por el derecho de la fuerza quedaron anuladas las franquicias municipales y provinciales en Puerto Rico. Allí se prescindió totalmente de la Constitución de 1869. Se restableció la previa censura para la imprenta. Los concejales y diputados provinciales fueron nombrados por el Gobernador que puso la vida local a merced de los alcaldes de su libérrimo nombramiento con sueldo fijo y extraños hasta a la vecindad del pueblo que administraban. Persiguióse de manera implacable a los maestros de primera enseñanza, la cual quedó realmente desbaratada. Tuvieron que emigrar algunos de los más caracterizados reformistas. De hecho se restauró el decreto de las "omnímodas" (facultades del Gobernador) de 1823 y los partidos políticos se deshicieron, dispersándose sus individuos. La reacción triunfó de un modo completo. Solo quedó en pie la abolición de la esclavitud, sin que faltaran conservadores preocupados con la idea de desvirtuar esta gran reforma por medio de la llamada "organización" del trabajo y del régimen de las "libretas" clasificación de la vagancia (más o menos efectiva) entre los delitos sancionados por el Código". Cf.: "La República...", pág. 156.

- 11.- TUÑÓN DE LARA, Manuel. Op.Cit., pág. 214. CRUZ MONCLOVA, Lidio. Op.Cit., Tomo II, pág. 377.
- 12.- Gaceta de Puerto Rico, 1874, número 2.
- 13.- Archivo Histórico Nacional (Madrid). Sección de Ultramar, Legajo 5111/60.
- 14.- PEDREIRA, Antonio Salvador. Op.Cit., págs. 100 y 101. El periódico "La Voz del País" publicó la siguiente descripción de la forma en que el Gobernador comunicó a la prensa su decisión:

"El lunes a las cuatro de la tarde hemos sido llamados al Palacio de La Fortaleza en unión de nuestros demás compañeros de periodismo, D. José Pérez Moris, D. José R. Abad, D. Saturnino González Reguera y D. Francisco Larroca, Directores respectivamente del "Boletín Mercantil", "El Progreso", "Don Cándido" y "El Loco".

En presencia del nuevo Gobernador, Capitán General de esta isla, Excmo.Sr.D. José Laureano Sanz y Posse, nos manifestó S.E. para que así lo tuviéramos entendido:

- 1.- Que todo periódico que directa o indirectamente atacase la integridad del territorio, sería suprimido en el acto.

2.- Que todo periódico que directa o indirectamente tratase de alterar la tranquilidad pública o excitar las pasiones, sería también suprimido inmediatamente.

3.- Que todo periódico que directa o indirectamente atacase al Gobierno constituido en la Madre Patria, sufriría igual pena.

Esto, añadió S.E., a reserva y sin perjuicio de que los directores o encargados de cada publicación queden sujetos a las demás responsabilidades que el Gobierno tuviera a bien imponerle, según los casos". Citado por el mismo autor.

A continuación se refiere Pedreira a la repercusión de estas medidas sobre la prensa periódica de la isla, aportando los siguientes datos:

"En 1872 surgieron (en la isla) ocho periódicos nuevos; en 1873 doce; en 1874 diez de cortísima vida, todos conservadores, independientes o neutrales. Este último año fue fatal para nuestra prensa; en los primeros meses de 1874 solo pudieron circular el "Boletín Mercantil" y "La Gaceta". Ibidem, pág. 102.

15.- Archivo Histórico Nacional (Madrid). Sección de Ultramar, Legajo 5109/50.

16.- Ibidem.

17.- Ibidem. El día 26 de febrero de 1874 dirigía una carta el general Sanz al Ministro de Ultramar informándole "acerca de las reformas políticas necesarias en Puerto Rico". Cf.: Archivo Histórico Nacional (Madrid). Sección de Ultramar, Legajo 5104/28. El documento consultado dice textualmente:

"En el expediente político del General Sanz se halla una carta oficial Número 33, fecha 26 de febrero de 1874, en la que, a propósito de la necesidad que a su entender existe de reformar radicalmente la organización provincial y municipal de Puerto Rico y refiriéndose a los preceptos legales que juzga inconvenientes, dice lo que sigue:

"Uno de esos preceptos, el más importante de todos, es el relativo al sufragio para la elección de los diputados y concejales. Con el derecho electoral concedido a todo contribuyente y a todo el que sepa leer y escribir, siendo mayor de 20 años, es imposible que las clases conservadoras, las que representan la propiedad y el comercio, las que son la más firme garantía para la sociedad y la Patria, tengan la necesaria representación, porque dominando en el cuerpo

electoral esas masas ignorantes y de poco valer, imbuidas de disolventes ideas que alhagan sus instintos de igualdad social, de independencia y hasta de predominio de raza, siempre obtendrán el triunfo, como hasta ahora le han obtenido, las personas que guiadas por un pensamiento fijo, ya de lucro o anti-patriótico, ofrezcan en el uso, si no el abuso de los más ilimitados derechos que permiten al pueblo dar expansión a sus sentimientos naturales y no contenidos por una prudente legislación. De aquí el poco respeto de esas corporaciones al Gobierno Supremo; de aquí su conducta absorbente que tiene por fin un objeto dado y por medio el desmoralizar al pueblo, el gravar a las clases conservadoras, el de supeditarlas a la dominación de las más ínfimas clases sociales. Por esto, Excmo. Sr., teniendo presente una corta, pero lamentable experiencia, creo de necesidad imperiosa, si ha de continuar el actual sistema provincial y municipal, que se modifique el sufragio dando probabilidades de triunfo a las personas ilustradas y de responsabilidad y evitando un peligro para la sociedad y la Patria, lo que se conseguiría declarando el derecho electoral tan solo a todo contribuyente que pague más de 10 pesos por contribución directa y sepa leer y escribir, sin otras capacidades que las que se fundan en títulos académicos".

- 18.- Archivo Histórico Nacional (Madrid). Sección de Ultramar, Legajo 5109/50. El texto completo de este documento dice así:

"Proclama del Comité Central del Partido Federal-Reformista a sus correligionarios (17 de enero de 1874):

"Conciudadanos: En presencia de los gravísimos hechos ocurridos durante los primeros días del mes que cursa en la Capital de la República española y que como no podía menos de suceder son hoy del dominio público, le es imposible a este Centro, al que habéis honrado con vuestra confianza encomendándole la difícil misión de dirigir vuestro Partido, encerrarse en el silencio. Razones del más puro patriotismo le mueven en estos solemnes momentos a dirigir su voz desapasionada y leal.

Tristes y dolorosos son esos acontecimientos que, con sobrado motivo, excitan nuestra más viva solicitud y preocupan nuestro espíritu; porque no solo importan una violación flagrante de los principios fundamentales en que descansa y porque se rige el sistema representativo, único propio para que las socieda-

des civilizadas realicen sus destinos, adquiriendo gloria y poder en este siglo de publicidad y de discusión.

Abroquelados en las garantías que él nos presta, podemos y debemos esperar en calma y con dignidad el desenlace de los trascendentales sucesos iniciados en la Madre Patria.

Redoblemos en tanto nuestros esfuerzos, acallando las sugerencias del amor propio y del espíritu de localidad para que nuestra misión sea más perfecta.

De este modo, si desgraciadamente al restablecerse en la Metrópoli una situación legal y parlamentaria, pretendiera ésta sostener principios políticos contrarios a los nuestros, lucharemos como hasta aquí, animados por un solo pensamiento y dando, si necesario fuere, nuevos testimonios de las virtudes cívicas.

Sostengamos, pues, nuestro espíritu a la altura de nuestros deberes y sirvamos, como hasta ahora, con fe y perseverancia a la noble causa de la justicia y del derecho". Firmaban este documento todos los Delegados de los Distritos, excepto el de Sabana grande, D. Isidoro Cintrón, por hallarse ausente. También lo firmó José de Celis Aguilera, diputado a Cortes.

- 19.- Este Decreto tomaba como base la Ley de Imprenta publicada en la Península el 29 de enero del mismo año. En el Preámbulo del Decreto decía así el general Sanz:

"Oportunamente este Gobierno General acudió a poner remedio al desbordamiento de la prensa periódica de la isla, cuyos escritos en desdoro de la religión y menoscabo de los intereses de la Patria, todavía se recuerdan por los hombres honrados con verdadero sentimiento. Pasada aquella época de funesta licencia y dirigida a más noble propósito la propagación de las ideas, todavía se hace sentir la falta de un sistema definitivo que previendo estos excesos evitara con su publicación el consiguiente escándalo". Cf.: Archivo Histórico Nacional (Madrid). Sección de Ultramar, Legajo 5111/44.

- 20.- Archivo Histórico Nacional (Madrid). Sección de Ultramar, Legajo 5109/50. Ya con anterioridad y en carta dirigida al Ministro de Ultramar, se refería el general Sanz al asunto de la Ley Municipal en los siguientes términos:

"Recién llegado a esta Antilla a principio del año próximo pasado, en cumplimiento y uso de las fa-

cultades extraordinarias de que me hallo investido, teniendo en cuenta la profunda perturbación que habían introducido en el régimen administrativo y político de la Isla los decretos provincial y municipal, asumí muchas de las facultades concedidas a estas Corporaciones, y renovadas con personas de confianza al principio a la improba tarea de reconstituir los municipios en condiciones propias de estas localidades, estirpando para ello los abusos y corruptelas introducidos a la sombra de una funesta autonomía así en materia de administración de fondos comunales, como de enseñanza y aún de orden público.

No pudiendo ir en aquella fecha contra el espíritu de estos Decretos que con el Título I de la Constitución del Estado, aunque por vía de ensayo, habían tomado carta de naturaleza en la organización de la cosa pública, con grave detrimento de los intereses de la Patria; proyecté en vista de ello y propuse a esa Superioridad la reforma de las citadas leyes, ya por estar este procedimiento más en armonía con el carácter de ensayo que aquí se dió a su aplicación, ya por las ideas representadas por los altos poderes de la Metrópoli. Incesantemente desde entonces he venido solicitando la aprobación de estas reformas porque todas las saludables medidas que he adoptado obedeciendo al criterio que las inspiró y que han sido suficientes a devolver a este país la paz de que carecía entrando en su natural asiento la administración pública en sus diversos ramos, revestían y siguen revistiendo un carácter de intensidad que aún sirve de aliento a los que se prometen días de desventura para la Madre Patria en esta parte del mundo, y con ellos el triunfo de sus disolventes ideas.

Las profundas alteraciones introducidas en el modo de ser de la Diputación de la Provincia, Corporación autonómica fiscalizadora y adsorbente de la Autoridad del Gobernador General, que es y debe ser sin limitaciones de cierto género, la más alta representación de la Autoridad de España en estos sus dominios; la anulación de la ley municipal en todo a aquello que tenía relación con la enseñanza y otros graves negocios que habían pasado a manos de los enemigos de la patria; la creación del cuerpo de orden público, salvaguardia de la propiedad, amparo de los poblados y garantía de que los libertos no habrán de desbordarse sobre una sociedad tímida que solo a la más completa confianza puede deber su prosperidad,

son reformas de tal naturaleza, que no pueden por más tiempo revestir el carácter de interino que hace un año vienen arrastrando con detrimento del buen orden administrativo: por estas razones y, a pesar del profundo convencimiento que me anima de que al ilustrado celo de V.E. sin indicación de mi parte no han de quedar éstas en olvido, considero un deber llamar sobre ellos la atención de V.E. a fin de que llevándolos a su conocimiento, resuelva sobre los citados proyectos lo que considere más conveniente a los altos intereses de la Patria". Cf.: Archivo Histórico Nacional (Madrid). Sección de Ultramar, Legajo 5096/54, número 25.

21.- Declaraciones de adhesión a la autoridad y relación de nombres de los que abandonaron las filas del Partido Federal-Reformista se recogen in extenso en la Gaceta de Puerto Rico, números 130, 136, 137 y 144.

Comentando por entonces estas deserciones y la situación de los partidos de la isla, decía el general Sanz en carta al Ministro de Ultramar, Sr. Balaguer:

"Como tengo dicho a V. la cuestión política aquí está vencida. Los reformistas de buena fe se han unido. Los Patos siguen entre dos aguas; pero ambas facciones están apartadas del Partido antinacional y unidas al parecer al Conservador español.

También recomiendo como cosa propia, la inmediata concesión de las Grandes Cruces del Mérito Militar al Marqués de la Esperanza y a D. Pedro Díz Romero, como lo propongo oficialmente. Esto es indispensable y conveniente en alto grado. A los dos puede decirse se debe que exista aquí organizado el Partido Español". Cf.: Ibidem, Legajo 5109/50, número 20.

22.- Archivo Histórico Nacional (Madrid). Sección de Ultramar, Legajo 5111/5 y 5109/50.

23.- Esta drástica decisión del Partido Incondicional se tomó ante las vacilaciones iniciales del general de la Portilla y ante algunas medidas contrarias a este Partido que hubo de adoptar al comienzo de su mando.

El origen de todo este asunto fue provocado por el general Sanz y Posse, el cual, de acuerdo con el Gobierno de la Península, había llegado a un compromiso respecto a los candidatos para las elecciones de diputados a Cortes. Relevado Sanz del mando y habiendo cambiado posteriormente el parecer del Gobierno respecto de los candidatos designados, los conservadores no acogieron con buenos ojos este cambio, y has-

ta algunos de ellos siguieron haciendo campaña por su cuenta a favor de los primeros candidatos. Enterado de todo esto el general de la Portilla, siguió la pista de tales manejos, y habiendo descubierto que el Secretario del Gobierno, D. Pedro Díz Romero, que era al mismo tiempo Vicepresidente del Partido Incondicional, había utilizado los medios de comunicación oficiales para hacer campaña contra la destitución del general Sarrá y a favor de uno de los candidatos por él designados, decretó su destitución, así como la de D. Agustín Panner, Oficial Primero de la Secretaría del Gobierno, clausurando a continuación el Casino Español, centro de actividades del Partido Incondicional. Estas medidas que se vió obligado a tomar ocasionaron las dudas iniciales del general de la Portilla respecto a la ayuda que le podría brindar el Partido Incondicional, dudas que hicieron concebir ciertas esperanzas al Partido Reformista. Cf.: Archivo Histórico Nacional (Madrid). Sección de Ultramar, Legajo 5111/37.

A estos problemas se debió el retraso que sufrieron en esta ocasión las elecciones en la isla.

- 24.- Ibidem, Legajos 5111/63 y 5116/5.
- 25.- Gaceta de Puerto Rico, 1876, número 15.
- 26.- La relación de Colegios Electorales para estas elecciones puede verse en el Anexo I.
- 27.- PAGAN, Bolívar. Op.Cit., pág. 279.
- 28.- CRUZ MONCLOVA, Lidio. Op.Cit., Tomo III, págs. 443 a 445.
- 29.- Ibidem, pág. 444.
- 30.- Ibidem, pág. 445.
- 31.- Pueden verse los resultados en los Cuadros y Mapas electorales adjuntos.
- 32.- Archivo Histórico Nacional (Madrid). Sección de Ultramar, Legajos 5111/61 y 5116/10.
- 33.- Ibidem, Legajo 5116/10, número 31.
- 34.- Ibidem, número 32.
- 35.- Ibidem, número 33.
- 36.- Ibidem, Legajo 5116/10, número 39. De los 3,052 electores del Distrito de la Capital, solamente tomaron parte en esta elección parcial 946, todos los cuales fueron para el candidato oñero, ya que los reformistas se abstuvieron de tomar parte en la misma.

37.- Diario de Sesiones de las Cortes, Legislatura de 1875, pág. 4283.

38.- Ibidem.

39.- Datos obtenidos de las Actas electorales.

40.- Ibidem.

41.- En este sentido se manifestaron, por ejemplo, un numeroso grupo de personas de San Sebastián, que dirigieron al general Sans la siguiente comunicación:

"Los suscribientes, individuos que han militado de buena fe en el Partido Reformista, cuya efímera existencia en lo relativo a la longevidad que suelen tener las pasiones políticas cruzó por este suelo como un meteoro en el espacio, movidos por el sentimiento del honor y de la justicia, tienen la alta complacencia de manifestar al Gobierno General de V.E. que, llenando como buenos y leales súbditos españoles sagrados deberes, tendrán el orgullo de concurrir a los próximos comicios en unión de los que fueron sus adversarios para depositar sus votos en las urnas por el candidato que se les designe, seguros de que él no será otra cosa que la genuina representación de los intereses de la Patria.

Hombres desengañados de la marcha seguida por una política que dividió la sociedad y la familia, rompiendo lazos que antes unían antiguas y respetables asociaciones, hoy no quieren ver, oír ni hacer otra política para esta venturosa Antilla que la de un Gobierno probado, recto y paternal como el de V.E.; Gobierno que moraliza la Administración y los administradores en la parte que lo necesitan; Gobierno que garantiza la vida y la propiedad del individuo adquirida muchas veces por medio de honrosas vigilias y economías o a costa del rudo y penoso trabajo...

Sabido es Excmo. Sr., que la política de partido produjo en esta tierra, entre otras cosas, el temerario desarrollo de la empleomanía, y entonces, y solo entonces, la perturbación y la calumnia, la venganza y la zozobra y el odio llegaron a sentar sus reales en lo más íntimo del hogar doméstico...". Cf.: "Boletín Mercantil", 1875, número 130.

ANEXO I

Relación de Colegios electorales para las elecciones de
diputados de 187 Decreto de 7 de octubre de 1874

PRIMER DISTRITO: CAPITAL

Capital
Sabana del Palmar
Naranjito
Bayamon
Toa-baja

SEXTO DISTRITO: MAYAGUEZ

Mayaguez
Añasco
Las Marias

SEPTIMO DISTRITO: SAN GERMAN

San German

SEGUNDO DISTRITO: VEGA-BAJA

Vega-Baja
Vega-alta
Morevis
Corozal
Toa-alta
Dorado

Hormigueros

Maricao

OCTAVO DISTRITO: SABANA GRANDE

Sabana grande
Yauco

Gabo-rojo

NOVENO DISTRITO: PONCE

Ponce

Pesueles

Guayanilla

DECIMO DISTRITO: GUAYAMA

Guayama

CUARTO DISTRITO: QUEBRADILLAS

Quebradillas

Salinas

Moca

Cayey

Camuy

Arroyo

San Sebastián

Patillas

Matillo

Mamabo

QUINTO DISTRITO: AGUADILLA

Aguadilla

Yabucoa

Santa Isabel

Aguada

UNDICESIMO DISTRITO: HUMACAO

Rincon

Humacao

Isabela

Luquillo

Piedras

Naguabo

Ceiba

Fajardo

Vieques

DUODECIMO DISTRITO: RIO PIEDRAS

Rio-Piedras

Guainabo

Trujillo-alto

Carolina

Loiza

Rio grande

TRECE DISTRITO: CAGUAS

Caguas

Aguas buenas

Hato grande

Gurabo

Juncos

CATORCE DISTRITO: COAMO

Coamo

Barros

Barranquitas

Juana Díaz

Aibonito

Cidra

QUINCE DISTRITO: UTUADO

Utado

Lares

Adjuntas

FUENTE: Gaceta de Puerto Rico, 1876, 2 de febrero.

RESULTADOS

(1876)

<u>DISTRITO</u>	<u>POBLACION</u>	<u>ELECTORES</u>	<u>RELACION Hab/Elec</u>	<u>VOTANTES</u>	<u>ABST.</u>	<u>CANDIDATOS ELEGIDOS</u>	<u>VOTOS</u>
CAPITAL	2,880			1,271	55.37	FERNANDEZ MARTINEZ, José Ramón	1,223
VEGA BAJA	968			577	40.39	MARTORELL Y ARABIGT, Ambrosio	570
ARECIBO	806			501	37.84	ALBACETE ALBERT, Salvador	501
QUEBRADILLAS	1,118			810	27.55	VALERA, Juan	809
AGUALILLA	972			815	16.15	COLON, Cristobal	810
MAYAGUEZ	2,556			1,202	52.97	TORRES DE MENDOZA, Luis	1,190
SAN CERMAN	2,293			1,780	22.37	CARTAGENA, José Agustín	1,777
SABANA GRANDE	1,233			765	37.96	LEDESMA Y NAVAJAS, Enrique	763
PONCE	2,031			722	64.45	PEREZ VALDIVIESO, Vicente	711
GUAYAMA	1,125			777	30.93	SOLER Y BOU, Antonio	77
HUMACAO	1,232			867	29.63	ARGENTI, Nicolás	863
RIO PIEDRAS	751			635	15.45	DACARRETE, Angel María	620
CAGUAS	897			640	28.65	GAVINA, Luis	637
COAMO	1,011			720	28.78	SANZ Y POSSE, Salustiano	665
UTUADO		<u>966</u>		<u>518</u>	<u>46.38</u>	HOPPE, Federico	516
		20,839	<u>35.09</u>	12,600	35.69		
	731,313						

FUENTES: Archivo de las Cortes. Sección de Expedientes, Legajo 78, número 16

CUADRO II

(1876)

RESULTADOS POR PARTIDOS

(Abstención de los Liberales)

CONSERVADORES:

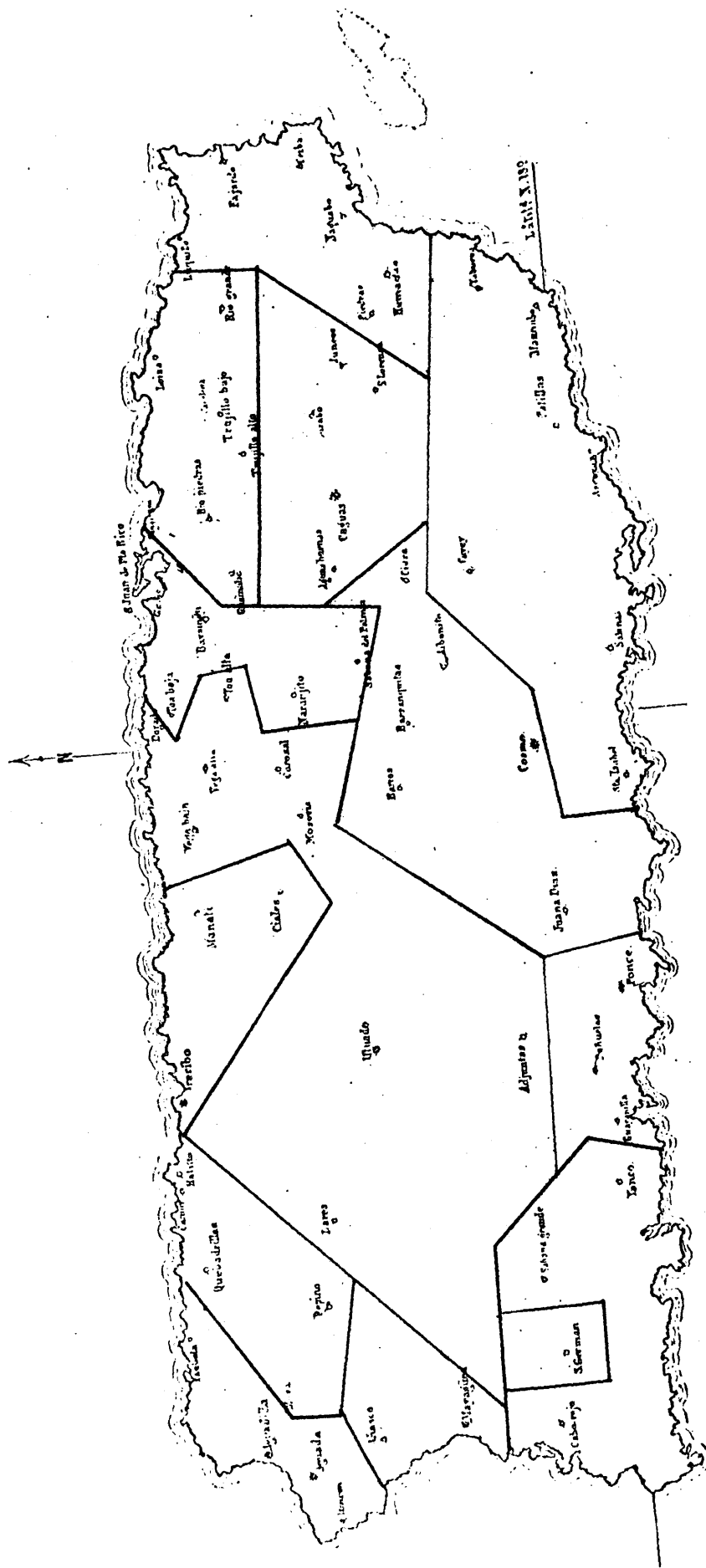
FERNANDEZ MARTINEZ, José Ramón.....	San Juan
VALERA ALCALA GALIANO, Juan.....	Quebradillas
MARTORELL ARABIGT, Ambrosio.....	Vega baja
TORRES DE MENDOZA, Luis.....	Mayagüez
COLON, Cristobal.....	Aguadilla
CARTAGENA, José Agustín.....	San Germán
LEDESMA NAVAJAS, Enrique.....	Sabana grande.
PEREZ VALDIVIESO, Vicente.....	Ponce
SOLER Y BOU, Antonio.....	Guayama
ARGENTI, Nicolás.....	Humacao
DACARRETE, Angel María.....	Rio Piedras
GAVIÑA ALVAREZ, Luis.....	Caguas
SANZ Y POSSE, Salustiano.....	Coamo
ALBACETE ALBERT, Salvador.....	Arecibo
HOPPE, Federico.....	Utuado

CONSERVADORES

LIBERALES

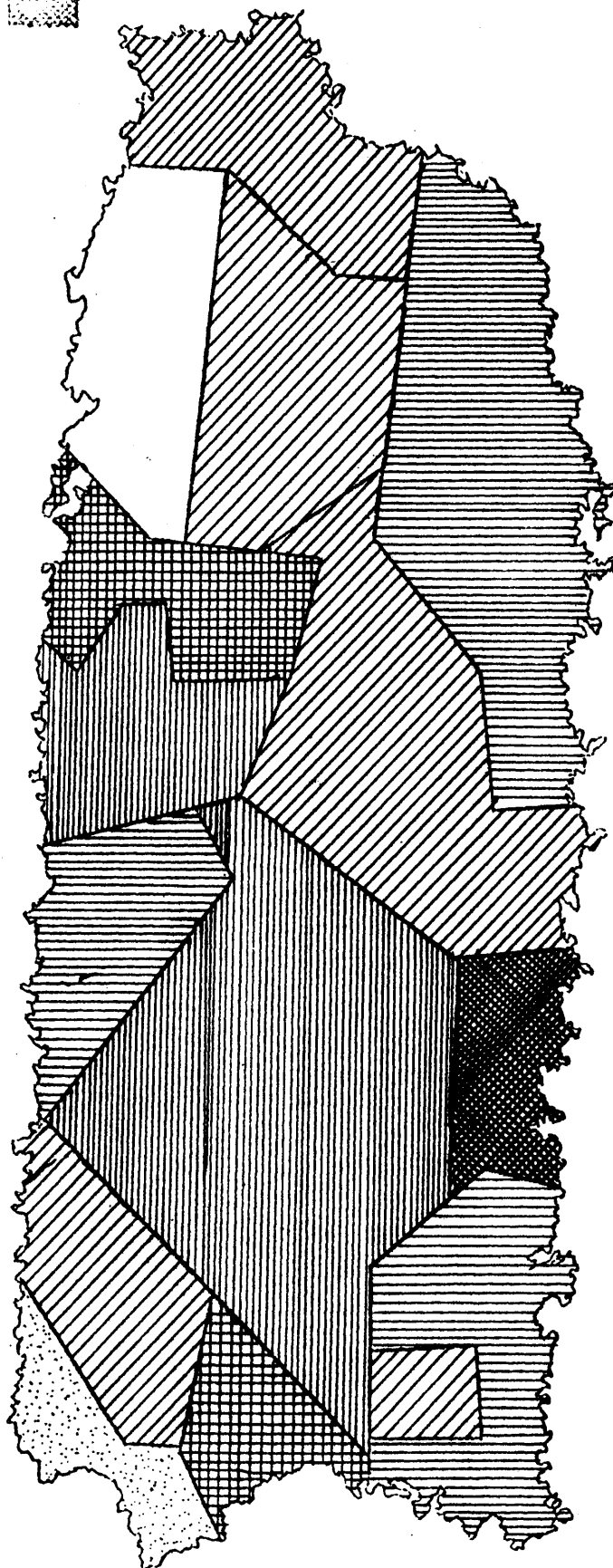
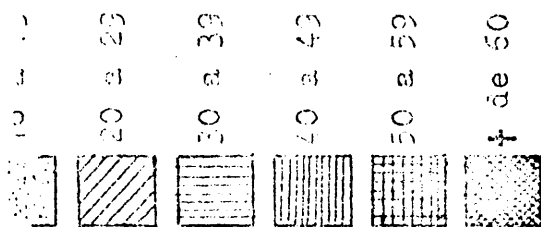


← 2 →



ABSTENCIONES
(1976)

Media: 35.69



2.7. LA ELECCION GENERAL DE 1879

A.- La situación política en la Península: Gobierno de Martínez Campos.-

Próximo a expirar el mandato de tres años señalado a las Cortes por la Constitución de 1869, no quiso Cánovas tener que dirigir unas nuevas elecciones. Pero al mismo tiempo, estaba convencido de que era todavía demasiado pronto para que la oposición obtuviera el poder, por lo cual adoptó una conducta intermedia: llamar al general Martínez Campos, cuya popularidad era muy grande en la Península por haber firmado con los insurrectos cubanos la paz del Zanjón. Este llamamiento evitaría, además, que los liberales de Sagasta lo incorporaran a sus filas (1).

Aunque Alfonso XII evacuó las consultas de rigor con los Presidentes de las dos Cámaras, parece que ya tenía decidido de antemano el relevo de Cánovas y su sustitución por Martínez Campos, aceptando de esta forma el criterio del jefe conservador.

El 3 de marzo planteaba Cánovas la crisis total de su Gabinete y el día 7 encomendaba el Rey a Martínez Campos la formación de otro; en el mismo entró como Ministro de Ultramar D. Salvador de Albacete, que había sido elegido en 1876 diputado por el Distrito de Arecibo (Puerto Rico), y que había ocupado con anterioridad el cargo de Subsecretario de Ultramar en el último Gobierno de Isabel II (2).

B.- La situación político-partidista en Puerto Rico.-

En cumplimiento de la Real Orden de 8 del mes de enero, el nuevo Gobernador de la isla, general Eulogio Despujol, ordenaba la publicación de la Ley Electoral aprobada por las Cortes el 28 de diciembre de 1878, y cuyo Título VIII estaba dedicado a

Cuba y Puerto Rico (3). El artículo 142 determinaba que la cuota de contribución que daría derecho a ser inscrito en las listas electorales sería en ambas islas de 125 pesetas anuales por impuesto territorial o urbano o por subsidio industrial o de comercio (4). Esta elevación de la cuota contributiva, unida a la eliminación de las capacidades de lectura y escritura, redujo drásticamente el electorado de la isla, y en consecuencia, produjo muy mal efecto entre el elemento liberal (5).

Pocos días después, la Gaceta de Puerto Rico insertaba una Circular del Gobernador en la que daba una serie de instrucciones y reglas encaminadas a aclarar diversos puntos de la nueva Ley Electoral (6).

La actitud de los conservadores ante estos acontecimientos fue de un cambio total respecto a su política anterior; así, aparecía en el número del "Boletín Mercantil" correspondiente al día 8 de marzo un artículo sugiriendo la conveniencia de una unión de todo el cuerpo electoral "designando para administrar los intereses provinciales y locales a personas de inteligencia, probidad y arraigo; y para diputados a Cortes a personas que, exentas de ambiciones personales, conozcan personalmente nuestras necesidades y que se propongan, en primer lugar, sacarnos del aislamiento mercantil en que estamos respecto a la Madre Patria, que procuren simplificar y hacer más barata nuestra administración, y que en lo político estén por la asimilación en lo que asimilable sea este país especial" (7).

C.- La convocatoria de elecciones en Puerto Rico.- La campaña electoral.-

El día 22 de marzo publicaba la Gaceta de Puerto Rico el Real Decreto de convocatoria de elecciones, que fijaba las mismas para el día 20 de abril y la apertura de las Cortes el día 1 de junio (8). El artículo 3º de este Decreto determinaba que las elecciones se llevarían a cabo con arreglo a las leyes de 8 de febrero de 1877, 28 de diciembre de 1878 y 9 de enero de

1879 (9).

1º.- La coalición electoral de conservadores y liberales.-

Una vez publicada la nueva Ley Electoral, el Director de "El Agente", D. Manuel Fernández Juncos, publicó un artículo en el que, una vez más, lanzaba la idea de realizar una coalición entre los dos partidos de la isla, con el fin de designar conjuntamente hombres honrados y de buena voluntad tanto para las elecciones municipales como para las de diputados provinciales y de Cortes, que intentaran resolver con criterio pragmático los numerosos problemas que tenía planteados la isla (10).

Los conservadores que, como ya hemos visto, habían apuntado algo parecido con anterioridad, acogieron bien la idea, y poco después la hacían suya por medio de otro artículo del Director del "Boletín Mercantil", D. José Pérez Moris (11).

Aunque la propuesta de coalición encontró algunas oposiciones en ambos bandos, la mayoría de ellos la aceptó, si bien por diferentes motivos. En efecto, los liberales tenían necesidad de encontrar un apoyo que les permitiera superar la desventaja que para sus huestes representaba el aumento de la cuota contributiva que daba derecho al voto. Los conservadores temían que el nuevo Ministro adoptara una política de reformas y que, por tanto, diera ventaja al Partido Reformista. Por otra parte, se podía apreciar en los conservadores cierta preocupación y malestar a causa de la continua imposición de candidaturas cuneras (12).

2º.- La candidatura de conciliación.-

Llegados a este acuerdo de base, rápidamente comenzaron los preparativos para llevar a cabo la designación de la candidatura conjunta. A tal efecto, ambos partidos celebraron sendas asambleas, comenzando los conservadores. El día 26 de marzo de 1879 se reunieron en el Ayuntamiento de San Juan y en primer lugar presentó su renuncia el Presidente del Partido, D. José Ramón Fernández, Marqués de la Esperanza, a causa de su ceguera. Para sustituirle fue elegido el español peninsular, D. Pablo Ubarri,

que más adelante sería nombrado Conde de Santurce.

Seguidamente se procedió a la designación del Comité de Partido que formaría parte del Comité Conjunto de Conciliación, resultando elegidos D. Pablo Ubarri, D. Ignacio Díaz Canaja, D. José Pérez Moris, D. Serafín Viñals y el Marqués de Casacuraceña (13).

Al día siguiente, se reunió en el mismo lugar el Partido Conservador, procediendo igualmente a la designación de sus delegados, que recayó en D. Pedro Gerónimo Goico, D. José Julián Acosta, D. Manuel de Elzaburu, D. José Geigel Zenón, D. Félix Padial Vizcarrondo y el Marqués de Cabo Caribe (14).

Durante los días 28, 29 y 30 del mismo mes se celebró la reunión del Comité Conjunto de Conciliación para designar la candidatura conjunta para las elecciones de diputados provinciales y a Cortes (15). El mismo Comité redactó un Manifiesto a lo electores en el que, dando por cierto que el Gobierno del general Martínez Campos plantearía reformas en el gobierno de las Antillas, se reconocía la necesidad y el deber de prestarle apoyo "contra aquellos elementos que en anteriores Congresos se opuesto a su pensamiento", y "en tanto al menos que se muestre favorable a los intereses de las Antillas" (16).

D.- Los resultados.-

El día 20 de abril se efectuaron las elecciones de diputados a Cortes y de acuerdo con los resultados de las mismas obtuvieron el triunfo los ocho candidatos del Partido Incondicional propuestos por el Comité de Conciliación y cuatro de los siete por el Partido Reformista (17). Los candidatos de los Distritos de Mayagüez, Humacao y Utuado fueron derrotados y en su lugar salieron electos otros tantos miembros del Partido Incondicional. Este hecho, atribuido por los liberales a manejos sucios de los conservadores, dio pie para que los primeros dieran por terminada la conciliación, "convencidos de que nuestros esfuerzos no han correspondido del todo a nuestras esperanzas" (18).

E.- Comentarios.-

El hecho más sobresaliente de estas elecciones consistió en que no se cumplieron las expectativas del Comité de Concilia. Creemos que fueron varios los motivos de este resultado: en primer lugar, el distanciamiento ideológico de ambos partidos, que no les permitía llegar a un efectivo entendimiento ni siquiera en el ámbito de las mejoras materiales y morales para la isla.

En segundo lugar, la actitud contraria del Gobierno de la Península a la inclusión de ciertos miembros del Partido Liberal en la candidatura conjunta, y la consiguiente presión sobre el Gobernador para que los sustituyera por otros. En esta ocasión, el Gobierno de Madrid se mostró más reaccionario que los propios Incondicionales, y así, en telegrama del Ministro de Ultramar al Gobernador Despujol, fechado el 15 de abril, le comunicaba:

"Muy reservado: Péximo efecto nombres sustituidos ahí a los que indiqué a V.E. Mi telegrama debió servir para los fines de su transmisión nunca tardía, llegado como llegó antes de las elecciones y antes del 13. El Consejo de Ministros ha acordado que V.E. procure por todos los medios naturales al alcance de su autoridad y prestigio, que venga mayor número de diputados adictos a España, y que desaparezcan sin comprometer éxito elección los que conocemos muy bien como contrarios a la Patria" (19).

En respuesta, el Gobernador enviaba el 20 otro telegrama, anunciando haber cumplimentado los deseos del Gobierno, si bien no garantizando el éxito de tal decisión por haber llegado la indicación demasiado tarde (20).

En tercer lugar, influyó en los resultados el hecho de que candidatura conjunta había sido obra de un Comité de la Capital el cual, aunque indudablemente gozaba de autoridad, no podía imponer tajantemente sus decisiones al resto de los Comités locales de la isla. De hecho, a pesar de haber acordado el Comité Conjunt la exclusión de la candidatura común a las personas extremistas de ambos partidos, algunas de ellas recibieron votos, como fue el caso de Labra (68 votos); Alcalá del Olmo (29); Alfau y Baralt (84); Muruve (67); Dausa (76), etc. (21).

Finalmente, debemos mencionar la connivencia de los conservadores para aceptar los cambios hechos por el Gobernador en la candidatura conjunta, faltando por tanto al compromiso establecido con los liberales.

Un análisis de los datos cuantitativos de esta elección permite comprobar, junto a lo ya comentado acerca de la drástica reducción del electorado de la Isla casi a la décima parte de la elección anterior, un aumento apreciable del nivel de participación: el porcentaje de abstencionismo bajó de 35.69 % en la elección de 1876 a un 23.18 % en ésta. Creemos que la mayor afluencia de electores fue debida en gran parte al acuerdo de conciliación entre ambos partidos, habiéndose reducido el abstencionismo por igual en la mayor parte de los distritos. (22).

El desarrollo del proceso electoral fue normal en toda isla y no se registraron incidentes dignos de atención; solamente en Ponce y Guayama hubo protestas que constaron en Acta.

Para el Gobierno de la Península los resultados fueron sumamente satisfactorios y así lo hacía saber el Ministro de Ultramar al Gobernador en telegrama enviado al saber los resultados:

"Consejo de Ministros ha acordado se dan a V.E. las gracias por resultado elecciones que supera esperanzas concebidas según telegramas anteriores V. . . y supuesto aquí de público. A las gracias del Gobierno unió mi felicitación personal" (23).

NOTAS

- 1.- FERNANDEZ ALMAGRO, Melchor. Op.Cit., Tomo I, pág. 311 y siguientes. El 10 de febrero de 1878 firmaba el general D. Arsenio Martínez Campos con los insurrectos cubanos la Paz del Zanjón, que venía a poner fin a 10 años de ininterrumpida guerra intestina.

Es interesante consignar que una de las principales condiciones impuestas por los insurrectos tenía estrecha relación con Puerto Rico. En efecto, el artículo primero de la capitulación decía textualmente:

"Concesión a la isla de Cuba de las mismas condiciones políticas, orgánicas y administrativas que disfruta la isla de Puerto Rico".

En las "Notas" a su obra "La República y las libertades de Ultramar", apunta Labra a este respecto:

"Conviene añadir que "las condiciones políticas, orgánicas y administrativas de Puerto Rico" a las que se contrae el artículo primero del convenio del Zanjón eran las decretadas por la República española de 1873, no derogadas legalmente hasta después de hecha la paz con los insurrectos cubanos..., pues no era dable imaginar que los insurrectos condicionasen su sumisión, pretendiendo subsistiera en Cuba aquello mismo contra lo cual se habían levantado en armas. Para hacer eso, habrían prescindido del artículo primero del Pacto". Concluye Labra afirmando que España no cumplió totalmente lo prometido y achaca a este incumplimiento, en parte al menos, la reanudación posterior de las hostilidades en Cuba, que desembocarán directamente en la implantación primero de la autonomía, seguida casi de inmediato por la concesión obligada de la independencia. Pág. 415 y siguientes.

- 2.- FERNANDEZ ALMAGRO, Melchor. Op.Cit., pág. 329.

- 3.- GAMONEDA, Antonio. Op.Cit., pág. 381 y sgts. Gaceta de Puerto Rico, 1879, números 13 y 14.

El general D. Eulogio Despujol que se había hecho cargo del mando de la isla en junio de 1878, enviaba a finales de septiembre una carta al Ministro de Ultramar en la que le hacía saber su opinión sobre la necesidad de adoptar una decisión acerca de la legalidad vigente en Puerto Rico:

"Sin perjuicio de ir llamando oportunamente la

atención de V.E. sobre cada uno de los ramos de esta legislación administrativa que en mi concepto conviene reformar, por echarse de menos en ella alguna de las circunstancias que acabo de mencionar, por hoy me limito a hacerlo respecto a la situación que en lo político mantiene la suspensión todavía vigente en esta isla de las garantías constitucionales consignadas en la Constitución de 1869, única que en principio y de hecho continúa rigiendo aquí.

Han pasado afortunadamente las circunstancias que hicieron necesaria esa medida; hoy respondo a V.E. que el orden no está ni remotamente amenazado; de que no existe el más leve motivo para temer que pueda turbarse en lo sucesivo; que, si se exceptúa el natural y reciente interés que bajo diversos criterios empieza a excitar en los distintos matices de la opinión pública la rápida transformación política que se está realizando en la isla de Cuba, lo que principalmente preocupaba hasta ahora a estos habitantes era su situación económica y que a mejorarla dirigen toda su actividad. No veo, por lo mismo, inconveniente alguno, antes al contrario, considero exigencia imprescindible de este favorable estado de cosas, el que empiece ya a imperar una legalidad plenamente normal, mediante el restablecimiento de las garantías constitucionales, con arreglo a la Constitución de 1876, que ni siquiera ha sido aquí promulgada. Y esta medida necesaria y conveniente de suyo, según acabo de indicar, adquiere doble carácter de urgencia desde el momento que se ha aplicado ya a la isla de Cuba, cuyo estado general, bajo el punto de vista social y político, tanto se diferencia del de Puerto Rico, donde hace ya tiempo que la cuestión social se halla satisfactoriamente resuelta, planteadas sin dificultad las leyes municipal y provincial sin que la isla haya atravesado, como aquella, un largo período de guerra...

En suma, Excmo. Sr., lo que con deber imperioso me mueve a reclamar de V.E. en este punto es que la tranquila y sensata provincia de Puerto Rico deje de vivir sujeta al régimen político creado en España a consecuencia del golpe del 3 de enero de 1874, que deje de constituir la única y ya injustificada excepción en el armónico concierto político de las demás provincias de la Monarquía española y que entre de una vez, salvo algunas inevitables diferencias, en la legalidad común que aquellas disfrutaban, llamándola sin tardanza a participar de los beneficios de la misma forma que su hermana la de Cuba". Cf.: Archivo Histórico Nacional (Madrid). Sección de Ultramar, Legajo 5111/39, número 2.

- 4.- GAMONEDA, Antonio. Op.Cit., pág. 428. La cuota que determinaba la misma Ley para la Península era de 25 pesetas por contribución territorial o de 50 pesetas por subsidio industrial (artículo 15).

En las "Notas" a la obra de Labra citada en la primera de este capítulo, decía este autor a propósito de la diferencia en el monto de la cuota:

"La Ley Electoral para diputados a Cortes, que lleva la fecha de 28 de diciembre de 1878, exige al elector la cuota de 125 pesetas de contribución territorial, o por subsidio industrial o de comercio: es decir, todo lo contrario a la ley peninsular y lo opuesto al criterio dominante en las leyes electorales que exigen cuota de contribución para el goce del derecho electoral. En éstas siempre se exige menos cuota al contribuyente territorial, por suponer al comerciante e industrial de carácter más inestable o pasajero. En las Antillas se igualó a todos, beneficiándose a los industriales y comerciantes, por la notoria razón de que éstos eran conservadores y en su inmensa mayoría peninsulares, como los agricultores y propietarios eran liberales y antillanos". Pág. 423.

- 5.- En la elección de 1876, la población electoral fue de 20,839 personas, mientras que en ésta de 1879 se redujo a solamente 3,674, la cifra más baja que había tenido el censo electoral en este segundo período. Cf.: Archivo Histórico Nacional (Madrid). Sección de Ultramar, Legajos 5116/5, números 14 al 29; 5116/13, número 17 y 5116/5, número 2.

- 6.- Gaceta de Puerto Rico, 1879, número 16.

- 7.- "Boletín Mercantil", 1879, número 29.

- 8.- Gaceta de Puerto Rico, 1879, número 35.

- 9.- Ibidem.

- 10.- "El Agente", 1879, número 44. Este periódico, de tendencia liberal reformista, había aparecido en el mes de octubre de 1875, con el nombre de "El Agente de Negocios". En 1877 acortó el título, para quedarse solamente con "El Agente", y en un principio salió como periódico independiente. A finales de 1879, y bajo la dirección del español peninsular D. Manuel Fernández Juncos, se convirtió en periódico político-liberal, pasando a ser de esta forma "el primero que tuvo nuestra isla después de las despóticas actuaciones del Gobernador general Laureano Sanz". Cf.: PEDREIRA, Antonio Salvador. Op.Cit., págs. 132 y sgts. y 389.

11.- "Boletín Mercantil", 1879, número 29.

12.- El día 9 de marzo enviaba el Ministro de Ultramar un telegrama al Gobernador de la isla redactado en los siguientes términos:

"Informe V.E. cuál es el estado de la opinión de esa isla en las próximas elecciones de diputados a Cortes. Necesitamos personas que apoyen decididamente la política del general Campos que tendrá oposición fuerte en los partidos avanzados y reaccionarios".

A este telegrama contestaba el general Despujol con otro fechado el día 14:

"Felicitó Gobierno por instrucciones respecto futuras elecciones diputados. Isla cansada de constante abuso de candidatos cuneros; propósito unánime de rechazar imposición de candidatos desconocidos. Más que de cuestiones políticas, opinión pública preocupada de intereses económicos. Deseo general verlos defendidos en Cortes por diputados de arraigo e ilustración". Cf.: Archivo Histórico Nacional (Madrid). Sección de Ultramar, Legajo 5116/10, números 58 y 59.

13.- PAGAN, Bolívar. Op.Cit., pág. 283 y sgts.

14.- Ibidem.

15.- La candidatura de conciliación para diputados a Cortes fue la siguiente: Capital: D. Salvador Albacete; Vega baja: D. Antonio Canals; Arecibo: D. Diego A. Martínez; Quebradillas: D. José Julián Acosta; Aguadilla: D. Miguel Martínez Campos; Mayagüez: D. Miguel Rosich; San Germán: D. Segundo de la Portilla; Sabana grande: D. Enrique Ledesma y Navajas; Ponce: D. Antonio Vivar y Gazzino; Guayama: D. Wenceslao Lugo Viñas; Humacao: D. Luis Izquierdo Roldán; Río Piedras: D. Antonio Zechini; Caguas: D. Francisco Bastón Cortón; Coamo: D. Salustiano Sanz y Posse y Utuado: D. Félix Simplicio Alfonso. Cf.: "Boletín Mercantil", 1879, números 45 a 47 y 65.

16.- Archivo Histórico Nacional (Madrid). Sección de Ultramar, Legajo 6116/13, número 5. El Manifiesto decía así:

"El Comité de Conciliación de la Capital a los electores de toda la Isla.

Sres. electores:

Al estampar el rubro anterior a las frases que una ocasión bendita nos pone en la precisión de dirigidos, nos parece haber vaciado nuestra alma; es más,

creemos interpretar la vuestra, que desde luego habrá penetrado todo el sentido de lo que inútilmente pretenderíamos ampliar y traducir con palabras. ;Tanta elocuencia tiene el sentimiento, y tanto juzgamos en la ocasión actual conveniente y espontáneo y espontáneo por la misma conveniencia, el espíritu de concordia que a un tiempo mismo ha invadido el corazón de antiguos contendientes y adversarios, para unirlos en todo lo que hace relación a los intereses morales y materiales de esta simpática provincia!

Creemos firmemente en la energía y fuerza del espíritu, y por eso lo decimos: así como donde se crean necesidades, brotan siempre, y por fin, los medios de cumplirlas, así también donde quiera que aparece un problema más o menos difícil, surge la solución más breve o más tardía, pero siempre segura que lo resuelve. Todo depende de llegar a comprender bien el fondo de las cosas, y saber aprovechar los recursos que la razón serena y la voluntad constante de consuno nos proporcionan.

Diez años de luchas estériles y enojosas nos prueban que no es con la división, que no es manteniendo principios políticos exclusivistas e intransigentes (que ninguna de las dos fracciones insulares es poderosa a hacer prevalecer en la Metrópoli) como se consiguen las reformas económico-administrativas que ha menester esta Provincia para su bienestar y felicidad, y en las que ha tiempo todos estamos de acuerdo.

"La conciliación de la Capital a los electores de toda la Isla" es una frase que nos parece decirlo todo. "Conciliación", es decir, aumento de fuerza. "El Comité de la Capital a toda la Isla", es decir, un pueblo entero que ya ha conseguido concentrar todo su aliento para un objeto dado, y que ahora se dirige a todos los restantes que puedan tener iguales intereses, para aumentar su esfuerzo multiplicándolo por el de todos. ¿Y para qué? El momento de pronunciar esa frase, excusa la contestación. Estamos en plena elección de Diputación de Provincia, en plenos instantes de Diputación a Cortes, en momentos precisos de designar Senadores o, lo que es lo mismo, desde el seno de la Provincia pidiéndonos todo concurso para atender por cuantos medios sean posibles a múltiples e imperiosas necesidades; y desde el seno también de la Madre Patria, y en su corazón y en su cabeza, en el Senado y en el Congreso dejando campo y señalando sitio a grandes elementos que pueden ayu-

dar, en lo económico y administrativo, a conjurar tantas dificultades, tantos males y tantos peligros de mayor abatimiento, por que estamos viendo atravesar la isla.

La decadencia ha mucho que se sentía, y cada vez más, crecer. Hásela querido atajar, pero, lejos de detenerse, ha aumentado, y todo esfuerzo hasta el presente ha resultado siempre infructuoso. En estos últimos tiempos perdíamos de vista el horizonte, al sentir que nos hundíamos. No se sabía qué iba a ser de nosotros. Hoy la esperanza nos anima de nuevo y nos promete un porvenir mejor.

Una paz en la Península ha traído, con un hombre verdaderamente notable, otra paz para las Antillas. Y los discretos medios de que éste se ha valido, y las altísimas miras con que los ha utilizado en uno y otro caso, le han alcanzado el reconocimiento unánime de la Nación, y el pesado laurel de habérsele creído capaz de dar cima a nuevos y difíciles empeños.

Nadie ignora que el general Martínez Campos lleva fijo el pensamiento de plantear profundas reformas en la administración antillana, que urgen más que nunca, y que por eso más que nunca insiste en que sean atendidas, buscando apoyo en las diputaciones a Cortes de Cuba y Puerto Rico. Sus palabras y su decisión han sido terminantes, como respetables sus compromisos, y su persona, hoy al frente del Gobierno de la Nación, es una garantía de bienandanza para nosotros. Va a abrir nuevas Cortes, en el seno de las que necesita ser apoyado contra aquellos elementos que en anteriores Congresos se han opuesto a su pensamiento, y ese apoyo hemos creído que estamos en la obligación de prestárselo, en tanto al menos que se muestre favorable a los intereses de las Antillas y sin que nuestros representantes se afilien a partidos políticos que se proponen fines dignos sin duda de respeto, pero ajenos por ahora en un todo a la conveniencia de las provincias españolas de América. Hemos considerado nulo un auxilio de esfuerzos aislados, y por eso consebimos la idea de aunar todos los nuestros y concentrándolos, prestárselo a quien sostiene la realización del programa que promete su alto juicio y su innegable valer.

Como todo pensamiento, para que no muera en el choque con los demás, es necesario que entre en el concierto general de las ideas y en armonía se mueva con todas ellas; he ahí por qué la conciliación, precisa y necesaria para la Diputación a Cortes, nos ha movido al acuerdo de llevarla a las demás esferas, a

la comunidad antes, por nuestra propia cuenta, y la Provincia ahora, por el mandato que hemos recibido de correligionarios respectivos que han convalidado con su voto nuestro primer paso, y han apadrinado hasta el extremo nuestro pensamiento, dándonos facilidades para comunicarlo a todos y coronarlo con el asentimiento unánime que esperamos.

Escoger una Diputación Provincial que sepa inspirarse en este criterio al dirigir en la parte que le incumbe la Administración interior del país; una Diputación compuesta indistintamente de hombres de arraigo, de probidad y de ilustración de ambas procedencias, es el primer acto trascendente que debe llevar a cabo en los días 6, 7, 8, y 9 del entrante el cuerpo electoral. Para conseguirlo, menester es prescindir de esas funestas divisiones, más bien locales que políticas, que suelen matar en flor las ideas de concordia y armonía que a las veces hombres generosos de ambas agrupaciones conciben y que han presidido a la formación de este Comité.

No pretenden los infrascritos imponerse en manera alguna al cuerpo electoral de la Provincia, cuya libre voluntad en respetar son los primeros; más para que haya unidad de acción, para que resulte un todo armónico, conveniente parece indicar los candidatos que verían con gusto favorecidos por el sufragio si bien admitirán sin repugnancia alguna otras personas dignas, en que puedan fijarse los comités de conciliación que se formen en los distritos respectivos. Guiados por este pensamiento en comunicación aparte se indican los candidatos para diputados provinciales que cada distrito pudiera elegir, si no tuviesen otros más del agrado de los electores, en cuyo caso este Comité desearía saber, a la mayor brevedad posible, sus nombres para hacer las combinaciones a que esas variantes den lugar.

Si, como esperan los infrascritos, llega a efectuarse práctica y fielmente la conciliación, sin reticencias ni reservas de ningún género, habránse destruido de raíz las disidencias que han llevado en época no remota la intranquilidad de espíritu, el recelo, el encono y la zozobra a muchos hogares; Puerto-Rico no tendrá más que una voz unánime, una voz autorizada que pida lo que conviene al desarrollo de nuestra agricultura, de nuestro comercio y de nuestra naciente industria; y esta voz será escuchada indudablemente con deferencia en las altas regiones oficiales.

Este es el pensamiento que anima a la concilia-

ción. Si es aceptable, eso lo dirán las personas influyentes del resto de la isla, lo dirán los electores.

Por nuestra parte, cumplimos el grato deber de hacerlo presente así a toda la Provincia, invitándola a realizar un pensamiento que entregamos a su sensatez y que no necesitamos encomiar: tan patente es su oportunidad y tan obvia la importancia y grandeza que encierra para este país, donde tenemos profundos afectos e intereses, y un amadísimo hogar o una tierra hospitalaria y querida.

Si nuestros esfuerzos fueren, sin embargo, vanos para realizar nuestro empeño en la Isla, o si, realizado, no trajese consigo el éxito que es de esperar, habremos puesto una vez más nuestras personas al servicio del interés general, y habremos sido consecuentes con el principio recomendable y lógico de que "la primera condición que se necesita para llevar a cabo una empresa, consiste en acometerla".

Puerto-Rico, 29 de Marzo de 1879

Pablo Ubarri.- José J. Acosta.- Pedro G. Goico.- Marqués de Casa-Caracena.- Marqués de Cabo-Caribe.- Francisco Bastón.- José Serafín Viñals.- Manuel Elzaburu.- Ignacio Díaz Caneja.- José Geigel y Zenón.- Félix Padial.- José Pérez Moris."

- 17.- Pueden verse los resultados en los Cuadros y Mapas electorales adjuntos.
- 18.- "El Buscapié", 1879, número 17. PAGAN, Bolívar. Op.Cit., pág. 286.
- 19.- Archivo Histórico Nacional (Madrid). Sección de Ultramar, Legajo 5116/11, número 20.
- 20.- Ibidem, Legajo 5116/11, número 25.
- 21.- Ibidem, Legajo 5116/13, número 3.
- 22.- Datos obtenidos sobre las Actas electorales.
- 23.- Archivo Histórico Nacional (Madrid). Sección de Ultramar, Legajo 5116/8, número 3.

RESULTADOS

(1879)

<u>DISTRITO</u>	<u>POBLACION</u>	<u>ELECTORES</u>	<u>RELACION Hab/Elec</u>	<u>VOTANTES</u>	<u>ABST.</u>	<u>CANDIDATOS ELEGIDOS</u>	<u>VOTOS</u>
CAPITAL		551		274	50.27	ALBACETE, Salvador	256
VEGA BAJA		106		94	11.32	CANALS, José Antonio	63
ARECIBO		193		156	19.17	MARTINEZ, Diego A,	129
QUEBRADILLAS		181		119	34.25	ACOSTA Y CALVO, José J.	117
AGUADILLA		212		200	5.66	MARTINEZ CAMPOS, Miguel	200
LAYAGUEZ		418		259	33.04	TORRES DE MENDOZA, Luis	174
SAN GERMAN		237		190	19.83	PORTILLA, Segundo de la	190
SABANA GRANDE		182		172	5.50	LEDESMA Y NAVAJAS, Enrique	102
PONCE		383		261	32.74	VIVAR Y GAZZINO, Antonio	193
GUAYAMA		263		186	29.28	IUGO VIÑAS, Wenceslao	108
HUACAO		252		225	10.71	SOLER Y BOU, Antonio	118
RIO PIEDRAS		125		99	20.80	ZECHINI, Antonio	93
CAGUAS		220		169	23.18	BASTON Y CORTON, Francisco	158
COAMO		161		124	22.98	SANZ Y POSSE, Salustiano	124
UTUADO		185		142	23.24	GUERRERO, Teodoro	117
	<u>738,442</u>	<u>3,674</u>	<u>200.99</u>	<u>2,670</u>	<u>23.18</u>		

FUENTES: Archivo de las Cortes. Sección de Expedientes, Legajo 85, número 9. Archivo Histórico Nacional. Sección de Ultramar, Legajos 5116/5, número 2 y 5116/13, número 17.

CUADRO II
(1879)

RESULTADOS POR PARTIDOS

CONSERVADORES:

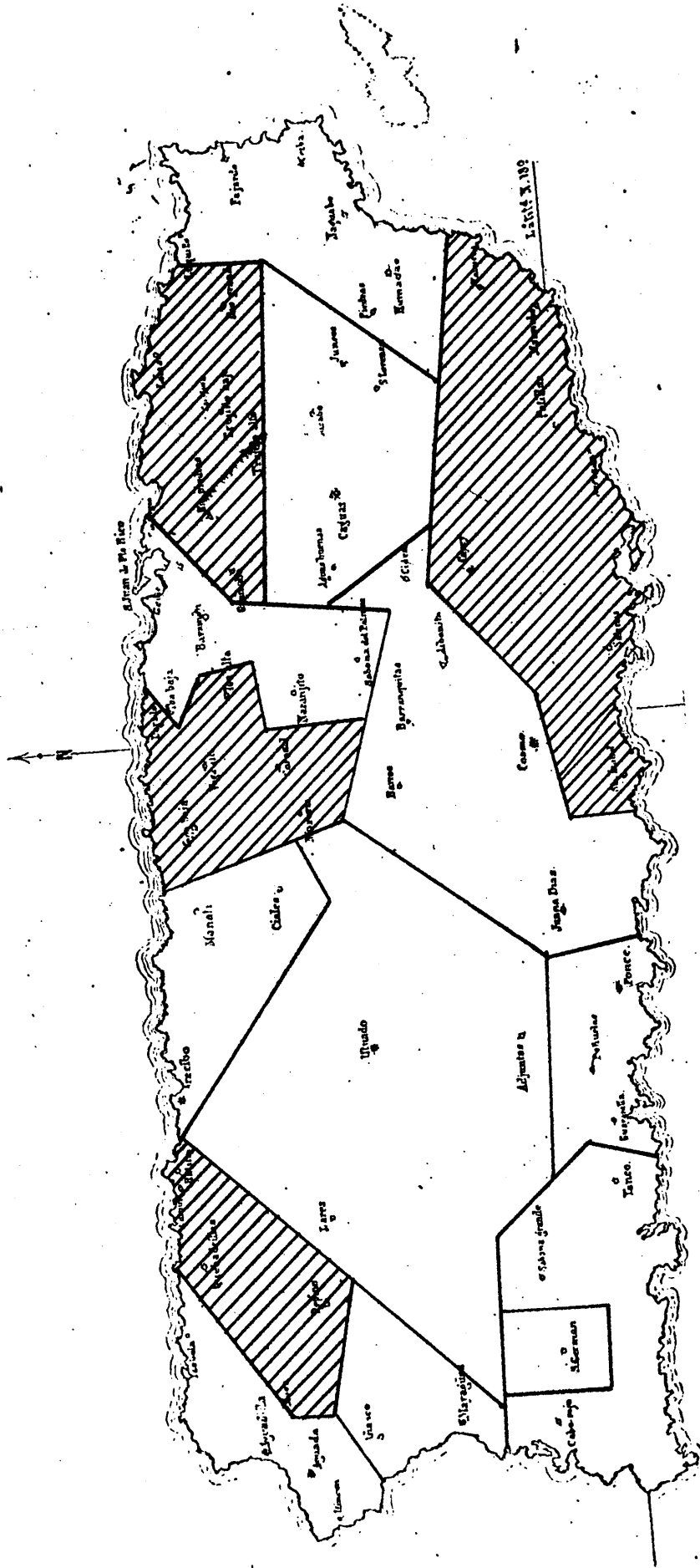
ALBACETE ALBERT, Salvador.....	San Juan
PORTILLA, Segundo de la.....	San Germán
MARTINEZ CAMPOS, Miguel.....	Aguadilla
LEDESMA Y NAVAJAS, Enrique.....	Sabana grande
SOLER Y BOU, Antonio.....	Humacao
SANZ Y POSSE, Salustiano.....	Coamo
TORRES DE MENDOZA, Luis.....	Mayagüez
VIVAR Y GAZZINO, Antonio.....	Ponce
GUERRERO, Teodoro.....	Utua
MARTINEZ, Diego A.	Arecibo
BASTON CORTON, Francisco	Caguas

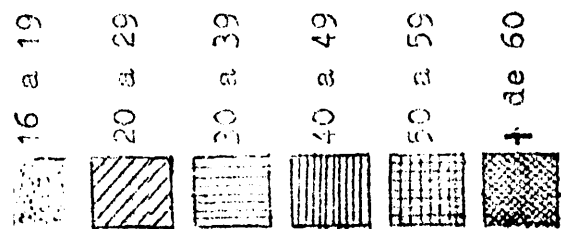
LIBERALES:

CANALS, José Antonio.....	Vega baja
ZECHINI, Antonio.....	Rio Piedras
LUGO VIÑAS, Wenceslao.....	Guayama
ACOSTA Y CALVO, José Julián.....	Quebradillas

- - - - -

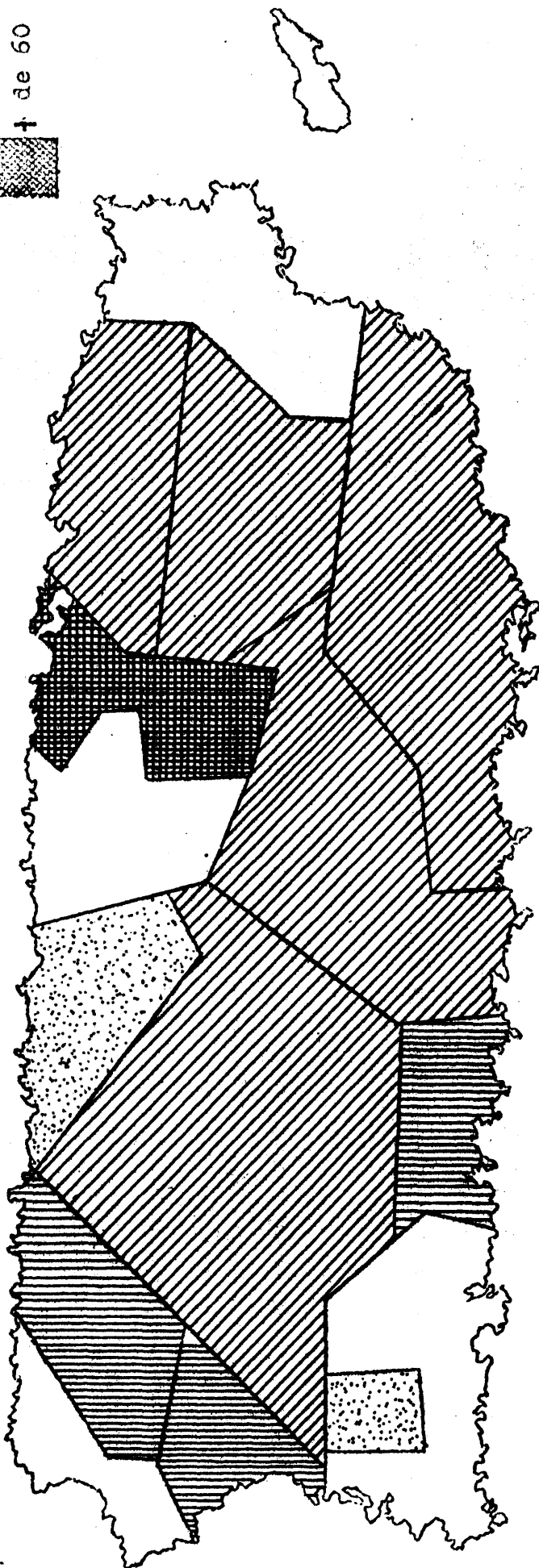
LIBERALES





ABSTENCIONES
(1879)

Media: 23.18



2.8. LA ELECCION GENERAL DE 1881

A.- La situación política en la Península: La iniciación del turno pacífico de los partidos.-

Cánovas sustituye a Martínez Campos en la Presidencia del Ministerio en diciembre de 1879, a causa de la dimisión del Gobierno presentada el día 6 del mismo mes. Precisamente, las causas de esta dimisión estaban muy relacionadas con Ultramar: la Comisión del Senado que estudiaba el proyecto de abolición de la esclavitud en Cuba, emitió un dictámen restrictivo del mismo, hecho que contrarió profundamente a Martínez Campos (1). No hallaron mejor acogida en las Cortes las reformas económicas y fiscales propuestas por el Gobierno para Ultramar (2).

Sin duda que la actitud de Martínez Campos estaba motivada tanto por las promesas que en nombre del Gobierno había hecho a los insurrectos cubanos a principios de 1878, como por la inquestionable realidad de que todavía no se había llevado a la isla de Cuba ninguna de las reformas a las cuales los insurrectos habían condicionado su rendición (3).

El Rey lleva a cabo las consultas de rigor, pero ante la negativa de diversas personalidades a formar gobierno, tiene que volver a depositar finalmente su confianza en Cánovas. Este nuevo mandato del jefe conservador se apunta el último tanto en la política ultramarina al conseguir la aprobación del proyecto de abolición de la esclavitud en la isla de Cuba (4).

Una vez que el Partido de Sagasta logra atraer a su seno la fracción centralista de Alonso Martínez y a una serie de figuras relevantes de la política peninsular como lo eran los generales Martínez Campos, Jovellar y otros del Partido Moderado, como el Conde de Xiquena y el de Valmaseda, decide llegado el momento de efectuar la fusión de todos ellos, y al efecto se celebra una asamblea en el Salón de Presupuestos del Congreso. De esta reunión surgió el Partido Liberal Fusionista, heredero del Consti-

tucional de Sagasta (5).

Ya estaba todo dispuesto para que el sistema ideado por Cánovas pudiera entrar en funcionamiento y, entendiéndolo así, se dispone a dar paso a su rival político. El día 7 de febrero de 1881 Cánovas presenta la dimisión de su Gabinete, que es aceptada por el Rey. El día 8 Sagasta formaba un nuevo Gobierno, de carácter moderado, con el fin de no alarmar demasiado a las clases conservadoras (6). Suspende las sesiones de las Cortes el día 10 de febrero y por Real Decreto quedan disueltas el 25 de junio, convocándose nuevas Cortes para el 20 de septiembre y elecciones para el 20 de agosto (7).

Durante el período preparatorio, el Gobierno de Sagasta aprueba una serie de medidas liberalizadoras del sistema, entre otras la de libertad de prensa sin previa censura y la de reunión pacífica y de asociación (8).

B.- La situación político-partidista en Puerto Rico

1.- El problema de la legalidad vigente en Puerto Rico.-

Ya hemos mencionado en el capítulo anterior la comunicación que envió el Gobernador de Puerto Rico al Ministro de Ultramar, haciéndole saber su parecer de que en la isla debía comenzar a regir una legalidad normal, que diese impulso al desarrollo político y económico de Puerto Rico, frenado desde el golpe de estado de enero de 1874. Sin embargo, nada resolvió el Ministro, por lo que la isla continuó bajo un régimen legal de excepción.

Nuevamente a mediados de 1880 el general Despujol volvió a insistir para que el Gobierno de la Península aclarase de una vez cuál era el sistema de legalidad vigente (9). Esta vez la petición prosperó, y el Ministro de Ultramar, Sr. Sánchez Bustillo, contestó que la legalidad vigente en Puerto Rico era la de la Constitución de 1876, pero que "respecto a los derechos consignados en el artículo 13 de la Constitución de 1876, entienda V.E. subsistente la legislación que hoy rige, en tanto que aque-

llos no sean regulados en leyes especiales" (10). Es decir, que la situación quedaba aclarada, pero no se adelantaba mucho respecto a los derechos políticos de los puertorriqueños, ya que los mismos quedaban en suspenso en tanto no se aplicasen las leyes orgánicas específicas. A pesar de ello, es preciso decir que poco a poco fueron concediéndose tales leyes, tanto por el Gobierno de Cánovas como por el posterior de Sagasta, como veremos más adelante.

2.- El Partido Liberal Reformista,-

Hacia 1880 su situación era bastante precaria. A partir de las últimas elecciones de diputados no se mostró capaz de presentar una oposición consistente a sus adversarios, posibilitando el triunfo sistemático de los candidatos incondicionales en todas las elecciones parciales celebradas entre 1879 y 1880 (11). No obstante, el espíritu del Partido no había muerto, y en 1880 surgieron varias iniciativas para reorganizarlo y ponerlo en condiciones de lucha.

En el mes de julio de 1880 D. Ramón Marín Solá, maestro y periodista de Ponce, junto con un grupo de liberales de esta ciudad, conseguía que D. Román Baldorioty de Castro se trasladara del pueblo de Yauco a Ponce para hacerse cargo de la dirección del periódico "La Crónica", que dirigía D. Ramón Marín (12). El propósito que guiaba a los liberales era que Baldorioty iniciara desde sus páginas una campaña encaminada a lograr la reorganización del Partido.

Así fue en efecto, y Baldorioty se entregó de lleno a la tarea encomendada, poniendo en ella sus mejores recursos, convencido como estaba de que la autonomía era la mejor solución política para Puerto Rico.

Sin embargo, inmediatamente surgieron dos obstáculos a su labor: el primero, la campaña de réplica que inició contra él y "La Crónica" el "Boletín Mercantil", el cual apoyaba sus críti-

cas en dos principios incuestionables para los conservadores: la democracia es desorden y la autonomía significa independencia (13).

El otro obstáculo, más inesperado y en cierto modo más difícil de vencer, fue la reacción que se produjo en el seno del propio Partido Reformista contra la tendencia autonomista. Lo cierto era que, si bien algunos miembros del Partido habían acogido con entusiasmo las ideas de Baldorioty, otros muchos, por el contrario, se mostraban suspicaces y hasta opuestos a la introducción de esta doctrina en el seno del Partido, proponiendo como alternativa que los partidarios de la autonomía fundaran su propio partido, en vez de intentar convertir en autonomistas a los que creían en la asimilación (14).

Podemos entender esta actitud contraria sabiendo que ya a partir de 1874 el Gobierno de la Península había aprobado una serie de leyes liberalizadoras del régimen político y económico de Puerto Rico, encaminadas mal que bien a lograr una asimilación de la isla a la Metrópoli. Entre las leyes aprobadas a lo largo de este período podemos mencionar: la Ley de Instrucción pública de 1874; la Ley de Servicio Militar de 1877; la Ley de Ferrocarriles del mismo año, así como la de Carreteras; la Ley de Sociedades Anónimas de 1878; las Leyes Municipal y Provincial de 1878; la Ley Hipotecaria de 1879, el Código Penal del mismo año y finalmente, la Ley de Imprenta de 1880 (15).

La buena disposición del Gobierno peninsular en cuanto a llevar a la práctica la política asimilista prometida desde 1868 y demostrada con la aplicación de éstos y algunos otros decretos y leyes, dió nuevos bríos a los liberales partidarios de la asimilación, con lo cual empezó a producirse un cisma en las filas del reformismo insular. Esta situación fue hábilmente aprovechada por los incondicionales para ahondar más las diferencias entre ellos. Así pues, podemos decir que desde este momento quedan dibujadas cuatro tendencias políticas en la isla

que preludían la crisis posterior de la estructura político-partidista insular: incondicionales y conservadores por una parte y asimilistas y autonomistas por otra.

3.- El Partido Incondicional.-

Se aprovechó de la crisis surgida en su seno en estos momentos a causa de la renuncia que había presentado su Presidente, D. Pablo Ubarri, para proceder a una reorganización interna. A tal efecto, tuvo lugar una reunión en la Capital de la Junta del Partido el día 15 de agosto de 1880, bajo la presidencia accidental de D. Francisco Bastón Cortón (16). Luego de lograr la reincorporación de D. Pablo Ubarri, se acordó el cambio oficial de nombre del Partido, que pasó a denominarse "Español sin condiciones". Finalmente, fueron aprobadas por abrumadora mayoría las nuevas Bases del Partido, en las que se recalca el fin casi exclusivo de salvaguardar la integridad nacional, ofreciendo su apoyo para lograr este fin "a todo Gobierno español en cuanto sea útil y necesario a la citada Base Fundamental" (17).

C.- La convocatoria de elecciones en Puerto Rico.- La campaña electoral.-

La caída de Cánovas y la formación de un Gobierno de tendencia liberal fue acogido con la natural satisfacción por los reformistas, ya que Sagasta había prometido en diversas ocasiones, desde la oposición, que su Partido adoptaría medidas liberales tanto en la Península como en Ultramar.

El general de la Portilla, nuevamente nombrado Gobernador de Puerto Rico, había prometido en su discurso de saludo a la isla su apoyo para lograr reformas de tipo económico para la isla (18).

Poco más adelante y con fecha 20 del mes de julio de 1881, procedía a expedir el Decreto de convocatoria de elecciones pa-

ra diputados a Cortes, fijándolas para el día 21 de agosto. El mismo Decreto determinaba que se llevarían a cabo con arreglo a las mismas leyes que las de 1879 (19).

1.- El Partido Español sin condiciones.-

Atentos los conservadores a no caer en el mismo error que cometieron durante la anterior incumbencia del general de la Portilla, se pusieron de acuerdo con él para formar una candidatura conservadora, en la que dieron entrada a la mayor parte de los candidatos propuestos por el Gobierno de la Península. (20).

A continuación, procedieron a publicar dos Manifiestos, el primero de fecha 2 de agosto con los nombres y algunos datos biográficos de los candidatos por el Partido (21); el segundo, de 17 del mismo mes, exhortando a sus electores a apoyar con disciplina y lealtad la candidatura oficial (22).

2.- El Partido Liberal Reformista.-

En sus filas se dejaron sentir en esta ocasión los efectos de la división de sus miembros en torno a las dos tendencias -asimilista y autonomista- que se habían iniciado más atrás. Así fue que, mientras el grupo de tendencia asimilista, formado casi en su totalidad por el Comité de la Capital, se adhería a la candidatura oficial propuesta por el Partido Español, excepción hecha del candidato por el distrito de Sabana grande, por estimar que todos los candidatos propuestos eran personas partidarias de las reformas, el grupo de tendencia autonomista, representado sobre todo por el Comité de Ponce, se opuso a la misma, considerando deshonrosa la práctica de que el Gobierno nombrase los candidatos (23). Al propio tiempo, este grupo alababa la decisión del Comité de Sabana grande de apoyar contra viento y marea la candidatura de Rafael María de Labra, defensa que llevó a la cárcel a varios de sus defensores (24).

Esta divergencia de criterios y de posturas en el seno del Partido Reformista produjo una dispersión de las fuerzas del mismo y una desorientación entre sus partidarios, que se tradujo en una falta de efectividad y aún de desconfianza entre ellos, todo lo cual ayudó indirectamente a sus opositores.

D.- Los resultados.-

Terminada la elección, resultaron elegidos catorce de los quince candidatos propuestos por el Partido Español y solamente triunfó el candidato liberal del Distrito de Sabana grande (25).

E.- Comentarios.-

Dado que tanto los conservadores como el grupo de tendencia asimilista del Partido Liberal Reformista habían votado por la candidatura oficial, se dió la curiosa y paradójica situación de que ambos grupos declarasen en sus comentarios haber obtenido el triunfo en las elecciones: los conservadores, porque los elegidos habían sido los candidatos propuestos por ellos; los liberales, porque les consideraban como reformistas y por lo tanto afirmaban que los conservadores les habían hecho el juego, al darles sus votos (26).

Como ya hemos dicho, en esta ocasión de nuevo los conservadores aceptaron la mayor parte de los candidatos impuestos por el Gobierno de Madrid, aunque se nota en la correspondencia telegráfica cruzada entre el Ministro de Ultramar y el Gobernador cierto matiz de resistencia, respetuoso y justificado, pero firme ante las demandas del Ministro. Así, por ejemplo, encontramos el día 8 de agosto una comunicación telegráfica del Ministro de Ultramar redactada en los siguientes términos:

"Gobierno desea y espera que Conde de Xiquena sea elegido diputado por esa Isla y encomienda a V.E. su candidatura, excluyendo al que crea conveniente. Del Sr. Posada nadie tiene noticia ni iba en la lista. Recomiendo a V.E. que no sean excluidos Angolo-

ti, Cabezas, Ferreras ni Mellado.
¿Y el Marqués de Villaviciosa?
Urge contestación" (27).

Dos días más tarde recibía el Ministro la contestación:

"Aguadilla es por sus circunstancias el solo Distrito en que puede realizarse ahora un cambio de candidato sin riesgo de conflicto. Si San Germán se hallara en igual caso hubiera yo resuelto toda dificultad omitiendo a Mellado. Posada es candidato por recomendación más autorizada que la voluntad mía y está garantizando nuestro triunfo en Utuado. Villaviciosa figuraba en lista mancomunada con Colón y solo para el caso en que éste fuera excluido" (28).

Este asunto de las candidaturas cuneras dio pie de nuevo a Labra para expresar su postura contraria a las mismas, considerando el cunerismo en Ultramar como "el mayor de los absurdos y de los escándalos" (29).

Por lo que se refiere a los datos cuantitativos tenemos que hacer notar un punto negativo común a todos los Gobiernos a partir de las elecciones de 1879: el poco interés en la publicación de los datos relacionados con las variables electorales. En varias ocasiones no figuran en las Actas datos sobre el número de electores del distrito; en otras, los resultados por colegios electorales van saliendo en la Gaceta en períodos que alcanzan los tres meses de duración, para desaparecer repentinamente sin estar completos. Por este motivo, a partir de esta elección de 1881 nos hemos visto obligados a incluir datos incompletos de algunas variables, después de haber agotado la búsqueda de todas las fuentes a nuestro alcance.

Estamos conscientes de lo irregular de este procedimiento, pero pensamos a la vez que los datos que hemos conseguido pueden, aunque incompletos, dar una idea de la evolución de los procesos y solamente en este sentido los utilizaremos, haciendo en cada caso las advertencias oportunas.

En esta elección solamente hemos conseguido obtener el da-

to sobre el número de electores de diez de los quince Distritos; todos ellos muestran una disminución pequeña, pero apreciable, del número de electores, disminución que estimamos sería similar en el resto de los distritos, ya que estos diez distritos han sido escogidos, por así decirlo, al azar. El total de electores de los diez distritos correspondientes a 1879 fue de 2,040 frente a 1,843 que nos da en éstas, es decir, una disminución del 9.6 % en el cuerpo electoral.

En cuanto a las abstenciones, se produjo un aumento considerable, de más de un 10 % respecto a las de la elección anterior, alcanzando en ésta un 34.31 %, referidas también estas cifras a los diez distritos mencionados. Por distritos, los porcentajes más altos de abstención se produjeron en San Germán, con un 47.96 %, Ponce, con un 45.63 % y Arecibo, con un 41.57 %. Los más bajos, en Quebradillas, con un 18.12 % y Aguadilla, con un 17.79 % (30).

NOTAS

- 1.- FERNANDEZ ALMAGRO, Melchor. Op.Cit., Tomo I., pág. 337.
Con motivo de la discusión de este proyecto en el Senado se produjo un enfrentamiento entre Cánovas y Martínez Campos, saliendo a relucir sus discrepancias respecto al procedimiento para restaurar la Monarquía. Cf.: MARTINEZ CUADRADO, Miguel: "Elecciones...", pág. 161.
- 2.- Tampoco fueron aprobados los proyectos de ley sobre reforma tributaria y cabotaje, que ni siquiera encontraron un ambiente favorable por parte del mismo Gobierno, a pesar de que Martínez Campos, sinceramente dispuesto a llevar a cabo todas estas reformas, pudiera hacer nada para que se aprobaran.
- 3.- El día 24 de agosto de 1879 comenzaba en Cuba la llamada "guerra chiquita", por su corta duración. Sin pretender minimizar algunas interpretaciones acerca de las causas de esta nueva insurrección, nos permitimos destacar el hecho ya apuntado páginas atrás: la ausencia de un planteamiento de reformas urgentes en Cuba, comenzando por la abolición de la esclavitud.
Citamos ya la opinión de Labra a este respecto; incluimos ahora la de otra persona poco sospechosa de extremismo como lo fue el Diputado Sr. Mellado; el cual decía en la sesión del Congreso del 28 de mayo de 1885:
"Viene el Convenio del Zanjón, y se promete en él dar a Cuba todas las libertades de Puerto Rico. Después de esto, parecía que iban a verse regidas y administradas con arreglo a las leyes de la Península las dos Antillas españolas. Pues no señor; entonces se niegan a Puerto Rico las libertades de que gozaba; entonces vienen las restricciones y las persecuciones de la prensa; entonces se sostiene allí más que nunca ese censo electoral imposible e injusto". Cf.: Diario de Sesiones de las Cortes, Legislatura de 1884-85, pág. 4586.
Más adelante, en las Cortes de 1890, el diputado autonomista de Puerto Rico, Sr. Moya Ojanguren, se refería al mismo tema con un juicio similar:
"En 1878, el general Martínez Campos, utilizan-

do el ejemplo de la tranquilidad de Puerto Rico, prometió a los insurrectos cubanos y a la isla de Cuba toda, en nombre del Gobierno, que las libertades de Puerto Rico serían llevadas allí inmediatamente que se apaciguase el país. Firmóse el Pacto del Zanjón y, en efecto, Cuba y Puerto Rico quedaron igualadas. Pero ¿de qué manera? Sacrificando a Puerto Rico, a quien se arrebataron las leyes provincial y municipal de 1870, verdaderamente descentralizadoras, y todas las libertades de aquella época, igualándola a Cuba mediante las leyes suspicaces y depresivas de 1878, que rigen aún, no obstante el carácter de provisionales con que fueron dadas, y que están produciendo hoy, sobre todo para el país liberal, los más tristes y desconsoladores resultados". Cf.: Diario de Sesiones de las Cortes, Legislatura de 1890, pág. 3381.

- 4.- La Ley de Abolición de la esclavitud en la isla de Cuba fue aprobada el día 13 de febrero de 1880. Cf.: FERNANDEZ ALMAGRO, Melchor. Op.Cit., Tomo I, pág. 341.

En Puerto Rico había sido aprobada la correspondiente siete años antes por la Asamblea Nacional, el día 22 de marzo de 1873.

Acerca de las demás reformas comenta el mismo autor:

"Las otras reformas económicas y administrativas no salieron adelante, pese a la proposición del diputado autonomista, sinceramente incorporado a la política nacional, D. Rafael María de Labra, para que fuese declarada urgente la discusión de los correspondientes decretos". Ibidem.

- 5.- El acto se llevó a cabo el día 19 de mayo de 1880. Ibidem, pág. 262.

- 6.- Ibidem, pág. 367 y sgts.

- 7.- Gaceta de Madrid, 1881, 26 de julio.

- 8.- Así, por ejemplo, los Decretos de 14 de febrero sobre levantamiento de suspensión a varios periódicos; Circular de 3 de marzo sobre libertad de Cátedra; Circular de 5 del mismo mes sobre libertad de expresión. Cf.: MARTINEZ CUADRADO, Miguel: "Elecciones..." pág. 263.

En relación con Ultramar, es preciso destacar la promulgación de la Constitución de 1876, hecha por Decreto de 7 de abril de 1881, publicado en la isla el primero de mayo del mismo año. No obstante, aparte de la promulgación, se precisaba la elabora-

ción de leyes orgánicas que garantizasen el disfrute de los derechos individuales consignados en la misma:

"Pero lo cierto es -comenta Cruz Monclova- que las leyes orgánicas para validar los derechos personales no se promulgaron, y que, consecuentemente, la isla de Puerto Rico hubo de continuar sujeta en la realidad al artículo primero del Real Decreto de 9 de junio de 1878, que consagraba la potestad omnimoda del Gobernador, y a la Ley Provincial de 1878, que dejaba subsistente la irresponsabilidad del ejecutivo, ya que de ella se habían suprimido los artículos que establecían dónde y cómo había de ser acusado y juzgado el Gobernador". Cf.: Op.Cit., Tomo III, pág. 655.

- 9.- "Lo que me ha puesto en un verdadero aprieto -decía el Gobernador de Puerto Rico al Ministro de Ultramar en carta de 8 de mayo- es la Real Orden reservada acerca de la aplicación a esta Isla de la Constitución de 1876, obligándome a dirigir a V. una consulta que he considerado precisa por cuanto, a diferencia de Cuba, donde desde 1873 y en virtud de ley hecha "ad hoc" se promulgó solemnemente el Título I de la Constitución de 1869, cuyas garantías fueron suspendidas más tarde y planteada la Ley de Orden Público de 1870: constituyendo esta última ley, junto con toda la parte de aquel Título I no comprendida en la suspensión, la legalidad constitucional sin interrupción acatada y aplicada por gobernados y gobernantes. Lo absurdo de esta situación resulta tanto que no comprendo cómo pudieron vivir con ella mis antecesores después de la Restauración o por lo menos, después de promulgada la Constitución de 1876: así fue que a los tres meses de encargarme del mando dirigí al Gobierno una comunicación reservada llamando su atención sobre la grave anomalía de continuar rigiendo aquí, a los cuatro años de realizada la Restauración, la misma situación legal que al día siguiente del golpe de estado del 3 de enero; pero el hecho es que, solemnemente promulgada en virtud de una ley aquella legalidad y sancionada por tan larga práctica, no parece posible plantear ahora sin previa y pública promulgación de ella". Cf.: Archivo Histórico Nacional (Madrid). Sección de Ultramar, Legajo 5111/38, número 11.

- 10.- La contestación del Ministro de Ultramar a la carta cita-

da en la nota anterior estaba redactada en los siguientes términos:

"A contar de la ley de 6 de agosto de 1873 y del Decreto de ese Gobierno General de 2 de febrero de 1874 rigen en esa isla el Título I de la Constitución de 1869, aunque suspendidas las garantías constitucionales por virtud de esta suspensión y la Ley de Orden Público de 1870, habiendo así entendido los gobernadores generales, las demás autoridades, los Tribunales y aún los mismos habitantes, y consulta V.E. si la derogación de esta legalidad habrá de hacerse por Decreto de V.E., nacido de la citada Real Orden; si continúan en suspensión las garantías constitucionales y a qué reglas deberá ajustarse el ejercicio de determinados derechos. En su vista, S.M. el Rey (q.D.g.) considerando que la Constitución de 1876 ha derogado desde la fecha de su promulgación la Ley de 6 de agosto de 1873 que declaró vigente en esa provincia el Título I de la Constitución de 1869; que la disposición de ese Gobierno General de 2 de febrero de 1874 debió entenderse derogada, aún su puesta la legalidad establecida por la citada Ley de 6 de agosto del año anterior, en virtud del párrafo cuarto del artículo tercero de la misma; y que el ejercicio de algunos de los derechos políticos consignados en la Constitución de 1876 no está regulado todavía por leyes especiales, ha tenido a bien disponer:

1.- que para el efecto de la derogación que V. E. solicita de la legalidad que supone establecida, puede V.E. publicar la Real Orden de 6 de abril último y comunicarla a todas las autoridades y corporaciones.

2.- que respecto de los derechos consignados en el artículo trece de la Constitución de 1876, entiendan V.E. subsistente la legislación que hoy rige, en tanto que aquellos no sean regulados en leyes especiales.

3.- que en lo sucesivo se cumpla lo dispuesto en el artículo once del mismo Código fundamental, no permitiendo otras manifestaciones exteriores del culto que las de la Religión del Estado, en la inteligencia de que si existen casos especiales, como parece deducirse de la comunicación de V.E. deberá instruirse el oportuno expediente y consultar para cada uno de ellos la resolución de este Ministerio.

4.- que la Ley de Orden Público rige en esa isla en las circunstancias y en la forma prevenidas por el párrafo cuarto del artículo segundo del Real Decreto de 9 de junio de 1878, vigente en esa provincia desde el 8 de noviembre del mismo año". Cf.: Archivo Histórico Nacional (Madrid). Sección de Ultramar, Legajo 5111/39, número 8.

11.- Archivo Histórico Nacional (Madrid). Sección de Ultramar, Legajos 5105/2; 6112 y 5116. También: Archivo de las Cortes, Sección de Expedientes, Legajos 78, número 16; 85, número 9; 91, número 9; 96, número 8; 103, número 6 y 107, número 42.

12.- PAGAN, Bolívar. Op.Cit., pág. 288. PEDREIRA, Antonio Salvador. Op.Cit., págs. 104 y 370-371. Dice Pedreira sobre este periódico:

"D. Ramón Marín, en Ponce, suprimió "El Avisador", y en su lugar publicó un periódico literario, de artes y noticias, con el título de "La Crónica de Ponce". En esta primera época iniciada en mayo de 1875, salía los jueves; en 1879 se publicaba martes y viernes y un año después lo hizo político bajo la dirección de D. Román Baldorioty de Castro, defendiendo la autonomía por primera vez en la historia de nuestro periodismo insular. En esta segunda época no ganaba para defenderse de juicios, y "El Buscapié" del 23 de octubre de 1881 nos informa que "La Crónica" suspende su publicación en tanto el Tribunal Supremo resuelve las últimas cuatro denuncias". No volvió a publicarse más".

13.- "Boletín Mercantil", 1881, números 79 a 93 y 107, 108, 113 y 126.

14.- PAGAN, Bolívar. Op.Cit., pág. 189. Entre los opositores a la tendencia autonomista se encontraban, según este autor "viejos y aguerridos líderes liberales", entre ellos, José Julián Acosta, José de Celis Aguilera, Manuel Corchado y Juarbe, José Pablo Morales y Pedro Gerónimo Goico Sabanetas. Se declararon partidarios de la autonomía en este primer momento, aparte de Baldorioty de Castro, Manuel Fernández Juncos, si bien éste se inclinaba hacia la fórmula expuesta por el político y escritor cubano Antonio Govín Torres en un famoso artículo publicado en el periódico "El Triunfo" de La Habana; Rafael María de Labra; Ramón Marín Solá; los periodistas Mario Braschi y José Ramón Abad, Luis Ramón Velázquez y algunos otros. Ibidem.

- 15.- PAGAN, Bolívar. Op.Cit., pág. 315. CRUZ MONCLOVA, Lisio. Op.Cit., Tomo III, pág. 326. LABRA, Rafael de: "La República...", pág. 162 y sgts.

Destacamos de entre todas ellas la Ley de Imprenta de 27 de agosto de 1880, cuyo Preámbulo decía así:

"Señor: Planteada la obra de la asimilación política y administrativa de la isla de Puerto Rico a la Península, por medio de las diversas disposiciones que allí se han promulgado en los últimos años y rigiendo como rige en la citada isla la Constitución de 1876, es natural que, a fin de seguir por el camino trazado y de regular el ejercicio de un derecho político consignado en la citada Constitución, deje de estar la imprenta en aquella provincia sujeta al arbitrio de la autoridad o regulada por prescripciones de carácter provisional, resultando las más veces de las circunstancias del momento y comience a regirse por una legislación definitiva, análoga a la vigente en la Metrópoli.

Inspirado el Gobierno de V.M. en el citado pensamiento, no tiene que hacer para llevarlo a cabo más que proceder en armonía con lo dispuesto en el artículo 89 de la Constitución del Estado y aplicar a la mencionada isla, con las modificaciones que exigen sus peculiares circunstancias, la Ley de 7 de enero de 1879, dictada para la Península sobre la materia.

En tal concepto ha sido redactado el proyecto que el Ministro que escribe eleva hoy a la aprobación de V.M.

Las diferencias, pocas y no esenciales, que existen entre el proyecto aludido y la Ley citada, consisten en que en el primero se ha atendido a impedir agresiones a la patria común; a declarar la necesidad de la autorización del Gobernador General para la publicación de los periódicos que se dediquen a la política por la gravedad que tienen en la isla las cuestiones que con aquella se relacionan; a sustituir la acción inmediata del Gobierno Supremo por la de la autoridad superior de la provincia, en consideración al carácter especial de sus atribuciones y a la distancia al primero del territorio donde la Ley ha de ejecutarse en los casos en que se haya de dejar sentir la necesidad de una acción más rápida; a poner en consonancia sus preceptos con el Código Penal allí vigente; con la Ley provisional para su aplicación y con el valor

de la moneda, por lo que a las multas se refiere, y finalmente, a todas las demás condiciones que distinguen las provincias ultramarinas de las peninsulares, para las que la Ley de 7 de enero fue promulgada.

Fundado en las condiciones expuestas y de acuerdo con el parecer del Consejo de Ministros, el que suscribe tiene la honra de someter a la aprobación de V. M. el adjunto proyecto de Decreto".

- 16.- CRUZ MONCLOVA, Lidio. Op.Cit., Tomo III, pág. 531. El origen y motivo de esta renuncia se encontraba en un enfrentamiento que se había producido en el mes de mayo de 1880 entre dos grupos de conservadores, en torno a una candidatura para diputado a Cortes, debido a la renuncia de D. Enrique de Cisneros. Mientras el Marqués de la Esperanza y un grupo bastante numeroso de conservadores apoyó la candidatura de D. Manuel Alcalá del Olmo, el Presidente del Partido, D. Pablo Ubarri y el "Boletín" presentaron y apoyaron de nuevo al propio Cisneros, el cual salió finalmente elegido.

A pesar de haber triunfado la candidatura por él apoyada, parece que al Sr. Ubarri no le agradó la actitud adoptada por el ex-Presidente del Partido, y considerándolo más tarde como una falta de confianza en su política, presentó su dimisión.

Nuestra opinión es que en el fondo de este asunto había algo más que una divergencia personal, pues lo cierto era que D. Manuel Alcalá del Olmo había evolucionado hacia una tendencia de reformismo moderado, claramente visible en sus intervenciones en las Cortes, en las que había defendido y apoyado, entre otras, una enmienda a la Ley Electoral de 1878 para que pudieran votar en Puerto Rico los que solamente supieran leer y escribir o pagaran cualquier cantidad en concepto de contribución al Estado. Cf.: Diario de Sesiones de las Cortes, Legislatura de 1878, pág. 3494.

- 17.- PAGAN, Bolívar. Op.Cit., págs. 290 y 291. Las nuevas Bases del Partido pueden verse en el Anexo I.

- 18.- Gaceta de Puerto Rico, 1881, ejemplar extraordinario de fecha 6 de julio. El nuevo Gobernador decía entre otras cosas:

"Hay un asunto a que debo más especialmente referirme, aún cuando solo sea consignándole brevísimas palabras. En el Parlamento, a cuyos escaños me condujo vuestra benevolencia con grandísima satisfacción y honra más, contraí voluntariamente un compromiso solemne, solicitando a nombre de la conveniencia y la justicia que esta provincia, mirada como cualquiera

otra de la Metrópoli, tuviese la facilidad y el derecho de alternar con aquellas en todos los actos y funciones de la vida nacional. Hallándome en este instante al servicio inmediato de vuestros intereses y agitando como Gobernador las mismas convicciones y propósitos que expuse en el Congreso siendo diputado, pedís bien figuraros la línea de conducta que respecto a este punto me propongo seguir. Solicitaré respetuosamente, pero incesantemente la reforma de aquellos procedimientos que por no ajustarse a la base de una reciprocidad equitativa, dificulten el movimiento comercial con daño de Puerto Rico".

- 19.- Gaceta de Puerto Rico, 1881, número 86. Archivo Histórico Nacional (Madrid). Sección de Ultramar, Legajo 5116/9.
- 20.- No todos los candidatos eran ministeriales, como se demuestra por la correspondencia entre el Ministro de Ultramar y el Gobernador de la isla, aunque sí la mayor parte de ellos. Cf.: Archivo Histórico Nacional (Madrid). Sección de Ultramar, Legajo 5116/12, números 5, 7, 8 y 9.
- 21.- Puede verse este Manifiesto del Partido Incondicional en el Anexo II.
- 22.- Puede verse este segundo Manifiesto en el Anexo III.
- 23.- Efectivamente, el cisma que se estaba produciendo en el seno del Partido Reformista se perfilaba en torno a una diferencia de tipo doctrinal; pero al mismo tiempo esta diferencia tenía una connotación de carácter geográfico, puesto que mientras los reformistas del Norte de la isla se declaraban partidarios de la asimilación, los del Sur se inclinaban cada vez más hacia el autonomismo.
No hemos podido profundizar todo lo que hubiéramos deseado en las causas de esta diferencia, si bien opinamos que podría deberse al contacto más estrecho que existía entre los reformistas del Norte con el elemento oficial y peninsular, en tanto que los del Sur, más alejados geográficamente de la Capital, pudieron desarrollar una mentalidad más autóctona y libre de influencias ideológicas externas.
También podemos citar el hecho de que en los primeros tiempos del descubrimiento de la isla, Puerto Rico se dividió por muchos años en dos partes: "Banda del Norte" y "Banda del Sur", de las cuales, la primera era más adicta al Gobierno de la Metrópoli, en tanto que la segunda se resistió en varias ocasiones a acatar las disposiciones de los Gobernadores.

24.- "El País", 1881, número 79.

25.- Pueden verse los resultados en los Cuadros y Mapas electorales adjuntos.

26.- "Todos nuestros candidatos -decía "El Agente"- han salido triunfantes en las elecciones del domingo último.

Catorce de ellos apoyados por el Partido Conservador que, impotente para vencer en franca lid, ha dado la más cabal prueba de su inconsecuencia, votando candidatos asimilistas, esto es reformistas, y alcanzando el único que combatieron, nuestro querido amigo el Sr. Labra, la victoria más completa que podíamos desear". Citado por Cruz Monclova. Op.Cit., Tomo III, pág. 606.

27.- Archivo Histórico Nacional (Madrid). Sección de Ultramar, Legajo 5116/12, número 8.

28.- Ibidem, Legajo 5116/12, número 9.

29.- "Como se ve -decía Labra- no tengo la menor duda en combatir la preocupación de que los diputados y senadores ultramarinos han de ser precisamente nacidos, domiciliados o materialmente interesados en nuestras Antillas.

Es imposible, sinceramente hablando, confundir los candidatos peninsulares que yo me permito recomendar, en principio y con ciertas condiciones, con los famosos candidatos cuneros; es decir, con aquellas personas completamente extrañas a la sociedad y a los problemas de Ultramar, impuestas a aquellos colegios electorales por la recomendación indiscutible y casi soberana del Gobierno.

En todas partes el "cunero" es un agravio al país que por imposición le vota. Pero tratándose de Ultramar, el mayor de los absurdos y de los escándalos, de tal modo que no comprendo cómo sobre este punto no se entienden todos los partidos ultramarinos, pues que se trata de cuestión de supremo interés y verdadero decoro.

Bien me explico que algunas gentes se presten a tal agravio, porque complaciendo servilmente al Gobierno de la Metrópoli, de él consiguen en cambio la fuerza que les falta en el país que explotan para mantener su soberbia o sus negocios. Ya se dijo "Omnia pro dominatione". Y no es preciso detallar las vergüenzas del caciquismo.

Pero en realidad estas gentes son muy pocas. Y no veo muy difícil que sobre el punto indicado se concertasen liberales, conservadores, neutrales y sueltos

para exigir que los candidatos, independientemente de su particular opinión, conociesen la especialidad ultramarina y estuvieran dispuestos a dedicarse a ella con preferencia, intimando con sus electores. Por lo mismo que se trata de una especialidad; que las cuestiones ultramarinas se plantean en el Parlamento, hasta ahora, y por desgracia, poniendo a un lado el interés de la Península y a otro el de Ultramar, y que las provincias peninsulares tienen asegurada una representación adecuada, muy superior en número a la de las Antillas y robustecida por la atención de la prensa y la inmediación de los intereses representados". Cf.: "La Reforma electoral en las Antillas españolas", (Madrid, Imprenta y Estereotipia de "El Liberal", 1891), Introducción, págs. LXVIII a LXX.

30.- Datos elaborados y obtenidos sobre las Actas electorales.

ANEXO I

NUEVAS BASES DEL PARTIDO ESPAÑOL SIN CONDICIONES

(15 de agosto de 1880)

BASE FUNDAMENTAL

El Partido Español sin Condiciones o Conservador de la nacionalidad, tiene por fin supremo de su existencia el velar por la conservación de la integridad nacional en Puerto Rico.

BASES DOCTRINALES

- 1.- El objeto del Partido Español sin Condiciones es cooperar, por todos los medios, al mantenimiento del orden público en cuanto sea compatible este objeto con la Base Fundamental.
- 2.- El Partido no participará en los cambios políticos en la Metrópoli y apoyará incondicionalmente a todo Gobierno español constituido en cuanto sea útil y necesario a la citada Base Fundamental.
- 3.- Constituyendo la disciplina la fuerza de los partidos, la Junta proclama deber de todo buen conservador de la integridad la más completa obediencia al Jefe del Partido, a los Comités Central y Locales, en su caso, debiendo cada cual sacrificar sus aficiones y prevenciones en aras de la unidad colectiva.
- 4.- El Partido Español sin Condiciones, desligado de todos los partidos peninsulares, no solo no se opone a las reformas convenientes al bienestar, prosperidad y progreso del país, sino que las promueve y apoya, tanto por amor a esta bella Provincia, cuanto porque así conviene a los intereses generales.
- 5.- El partido no tiene por sistema combatir ideas de escuela política alguna; se declara en la legalidad vigente; pero tenderá, por medio de la prensa, a poner en evidencia los inconvenientes de ciertas teorías y doctrinas que pudieran conducir a la anulación parcial o total de la Base Fundamental a la que el Partido subordina todos sus actos políticos.

BASES DE ORGANIZACION

- 1.- El Partido formará en la Capital un Comité Central permanente compuesto por seis vocales, uno de ellos Secretario con voz y voto, cuyo Comité será presidido por el Jefe del

Partido, quien lo convocará cuando estime conveniente.

- 2.- En cada ciudad, villa o pueblo, habrá un Comité Local compuesto del número de individuos que acuerde, presidido por la persona que los Incondicionales de los pueblos elijan, la cual convocará el Comité cuando lo crea conveniente o cuando para ello reciba órdenes del Jefe del Partido.
- 3.- En cada Comité se llevará un libro en que se irán inscribiendo todos los conservadores que existan en la localidad, expresando los que tengan derecho a figurar en las listas electorales, por qué concepto y para qué clase de elecciones.
- 4.- El objeto principal del "Comité Central", que hará también funciones de Local en esta Capital, será pedir la inclusión y exclusión de las listas electorales, según la ley, y cooperar a la marcha y buena administración del Partido.
- 5.- Los Comités locales se entenderán directamente con el Jefe del Partido".

FUENTE: Bolívar Pagán. Op.Cit., págs. 291 y 292.

ANEXO II

RELACION DE CANDIDATOS PARA DIPUTADOS A CORTES POR EL PARTIDO
ESPAÑOL SIN CONDICIONES (2 de agosto de 1881)

"Con el objeto de comunicar a nuestros lectores la candidatura general para diputados a Cortes que ha acordado por unanimidad el Comité Central del Partido Español sin condiciones... hemos resuelto publicar hoy el siguiente suplemento.

----- . -----

El Comité Central ha recomendado en atenta circular, dirigida a las locales de toda la provincia, los siguientes señores candidatos:

Primer Distrito: Ilmo.Sr.D. Joaquín Angoloti y Merlo, distinguido hombre público y Director de Hacienda en el Ministerio de Ultramar.

Segundo Distrito: Ilmo.Sr.D. José Cabezas de Herrera, ex-Intendente de Filipinas y muy entendido en cuestiones económicas de Ultramar.

Tercer Distrito: Sr.D. Manuel Alcalá del Olmo, ex-diputado a Cortes, cuyas dotes de inteligencia y actividad son bien conocidas en Puerto Rico.

Cuarto Distrito: D. Enrique Ledesma y Navajas, ex-diputado a Cortes por Sabana grande y celoso defensor de los intereses de esta isla.

Quinto Distrito: D. Fernando Colón, ex-diputado a Cortes y descendiente del descubridor de América.

Sexto Distrito: D. Juan Bautista de la Torre, Conde de Torrepando, nacido en Puerto Rico siendo Gobernador su padre, el general la Torre que tan buenos recuerdos dejó entre nosotros en sus catorce años de mando.

Séptimo Distrito: D. Andrés Mellado y Fernández, distinguido escritor público y Director del acreditado periódico de Madrid "El Imparcial".

Octavo Distrito: D. José Cartagena, ex-diputado a Cortes, notable letrado puertorriqueño y ex-juez interino de Primera Instancia de Mayagüez.

Noveno Distrito: D. Antonio de Vivar, ex-diputado a Cortes y bizarro marino.

Décimo Distrito: D. Francisco Cañamaque, notable autor de va-

rios libros apreciables y Director del diario de Madrid "La España", que ha residido largo tiempo en Filipinas y hecho estudios importantes respecto de aquellas posesiones españolas y de las de América.

Undécimo Distrito: D. Antonio Soler, ex-diputado a Cortes, bien conocido en Puerto Rico por su patriotismo y desinterés.

Duodécimo Distrito: D. Adolfo Salinas y Setiém, bizarro jefe militar que fue en la campaña de Cuba y en la actualidad ayudante de S.M. el Rey.

Trece Distrito: D. José Ferreras:, distinguido escritor público y Director del diario de Madrid "El Correo".

Catorce Distrito: D. Miguel Muruve, ilustrado ingeniero civil, muy competente de los asuntos de Ultramar.

Quince Distrito: Ilmo.Sr.D. Juan de Posada y Aldaz, presidente de sala que fue de esta Real Audiencia y muy conocedor de las necesidades del país.

Todos estos señores mencionados son personas de valía, de patriotismo, ilustración e influencia, teniendo, además, la ventaja de ser adictos a la política del Gobierno de S. M., del cual obtendrán, no dudamos, la entrada libre de nuestros productos en los mercados nacionales, reforma importantísima tantas veces reclamada, como demorada, por motivos que no acertamos a explicarnos de un modo satisfactorio, pero que en manera alguna pueden fundarse en la equidad y la justicia. Que España consuma azúcar y café cosechados en países extranjeros, a la vez que para favorecer las harinas nacionales, se nos imponen grandes derechos de importación en los Estados Unidos y comemos el pan caro, es un absurdo exonómico que están llamados a destruir los representantes de Puerto Rico.

Fieles a nuestro credo y a nuestra envidiable disciplina, los electores de nuestro Partido votarán como un solo hombre a los candidatos designados por el Comité Central.

Así lo esperamos de su adhesión y patriotismo".

FUENTE: "Boletín Mercantil", 1881, Suplemento al número 90.

ANEXO III

MANIFIESTO DEL COMITE CENTRAL DEL PARTIDO ESPAÑOL SIN CONDICIONES (17 de agosto de 1881).

"Correligionarios: No el combate o el predominio, ni la victoria o el triunfo; no el fundado temor de inesperada derrotas la desmedida ambición de inmerecidos laureles, menos aún la ciega pasión, el personal interés o el sórdido egoísmo; un sacratísimo deber impulsa hoy la voz del Comité Central hacia sus correligionarios de toda la isla. Este deber es el de la lealtad que guía nuestros pasos, el de la consecuencia que inspira nuestros principios, el del patriotismo que produce, que eleva, que ratifica nuestra unión.

El Gobierno de S.M., genuina representación de la Patria, esta madre dulce y cariñosa, cuyo solo nombre hace verter lágrimas de ternura y cuyo amor inunda vuestros corazones, os convoca de nuevo a los comicios para que nombreis constitucionalmente los depositarios de vuestra confianza en el templo augusto de las leyes. Vosotros, que sois la unidad en la acción, la armonía en el movimiento, la cohesión en la fuerza, el afecto a esa misma Patria, el amor a sus instituciones ¿habéis de permanecer sordos a su llamamiento? Por nuestra parte, la indiferencia fuera desprestigio que defraudaría vuestras más legítimas esperanzas, esterilizando, de una manera indigna de la confianza que en nosotros habeis depositado, vuestro desinteresado esfuerzo, vuestro noble afán.

Momentos hay en la vida de los pueblos en que el silencio es crimen, la inacción es vileza. El actual es uno de ellos, y el acto que vais a ejecutar el más transcendental de cuantos se rozan con vuestro porvenir y bienestar; como que en él se trata del ejercicio de vuestros derechos, de la defensa de vuestros intereses, del remedio de vuestras necesidades.

Ya lo veis: nueva ocasión se nos ofrece de mostrar al país el gran espíritu de disciplina que nos anima en la prosecución de los sanos principios que creemos nosotros han de labrar hasta donde sea posible la felicidad de esta querida porción de la Patria española, evitando los perjuicios que pasa esa misma felicidad entraña el sistema de aquellos que de buena fe, sin duda, siguen la contraria, pero, a nuestro juicio, equivocada senda.

En esta ocasión, pues, y hoy más que nunca, estrechar debeis los vínculos de ideas y de tendencias que os una; robusteciendo de un modo inquebrantable esa firme esperanza en el porvenir que os anima, ese noble entusiasmo que os hace campeones de la más grande de las causas. De otra manera, la desunión, desconocida entre vosotros, la indisciplina contra vuestra organización, la debilidad impropia de vuestras fuerzas labrarán vuestro descrédito ante el país, que os contempla y lo espera todo del patriótico concurso de sus leales hijos.

Correligionarios: los candidatos para la diputación a Cortes que el Comité Central os ha propuesto dignos son de vuestra confianza, merecedores de vuestro apoyo. Para ellos, pues, reclamamos vuestros sufragios. Adictos en un todo a la política franca y expansiva del actual Gabinete, sus nombres son la mejor garantía del acierto de vuestra elección en el lleno de la aspiración de todos. Votadlos, pues, correligionarios, y así demostrareis que, cuando de la prosperidad se trata de esta querida isla, seguís dócilmente el camino de vuestro deber, los impulsos de vuestra conciencia, la nunca reconocida voz de vuestros conocidos jefes.

Votadlos, sí, y de ese modo ahogareis para siempre la voz de la mentira y de la calumnia, que, con menguada intención, os atribuyen determinados fines políticos de secta o escuela; por este medio sancionareis solamente vuestro credo fundamental, y asegurareis el éxito de vuestros principios al lado de un Gobierno paternal, norte y guía de nuestros actos, estrella inmóvil en el horizonte de nuestros ideales, primer salvaguardia del orden que defendemos, centinela avanzado del fin primero de nuestra existencia.

Correligionarios: La hora de realizar tan altos fines está ya muy próxima. Vuestros Comités locales os esperan para el día 21 de los corrientes en los colegios electorales del respectivo distrito; que el concurso sea general, sin excepción, como general es la convocatoria del Comité Central, que a vosotros se dirige y a cuantos de buena fe quieran secundaros, movidos por el patriótico sentimiento de amor al país, único que inspira a aquel sus actos.

Que ninguno falte a su deber. No os ciegue la confianza ni os haga desmayar la contrariedad. Todos, sin excepción, a depositar vuestros sufragios. Queden solo fuera del electoral concierto los que ayer, con enamorados cantos de sirena, saludaban el advenimiento de un régimen al que, desagradecidos, parece quieren hoy volver la espalda; ellos que, si lo verifican, son los sectarios de la división y del encono, los hijos de la inconsecuencia y de la ingratitude.

Correligionarios: unánime en vuestros propósitos, firmes en vuestros principios, amparados por la ley, que es vuestro escudo, seguid la huella que os dejamos trazada, pero seguidla en todo y siempre, con entusiasmo, con fe, con ardor.

Correligionarios: por vuestro honor y lealtad, por vuestra fe y patriotismo, por vuestros candidatos,

¡a las urnas!

Correligionarios: por el bien de la Patria y del país,

¡a las urnas!

Puerto Rico, 17 de agosto de 1881."

FUENTE: "Boletín Mercantil", 1881, número 98.

RESULTADOS

(1981)

<u>DISTRITO</u>	<u>POBLACION</u>	<u>ELECTORES</u>	<u>RELACION Hab/Elec</u>	<u>VOTANTES</u>	<u>ABST.</u>	<u>CANDIDATOS ELEGIDOS</u>	<u>VOTOS</u>
CAJITAL				273		ANGOLOTY Y LERLO, Joaquín	273
VEGA BAJA	102			71	30.39	CABEZAS DE HERRERA, José	66
ARCIBO	166			97	41.57	ALCALA DEL OLMO, Manuel	92
QUEBRADILLAS	138			113	18.12	LEDESMA Y NAVAJAS, Enrique	112
AGUADILLA	208			171	17.79	ALVAREZ DE TOLEDO, José	171
MAYAGUEZ				143		TORRE Y VEGA, Juan P. de la	143
SAN GERMAN	196			102	47.96	MELLADO Y FERNANDEZ, Andrés	102
SABANA GRANDE				179		LABRA, Rafael María de	131
PONCE	344			187	45.63	VIVAR Y GAZZINO, Antonio	187
GUAYAMA				121		CAÑAMAQUE, Francisco	115
HUMACAO	219			134	38.81	SOLER Y BOU, Antonio	134
RIO PIEDRAS	130			84	35.38	SALINAS Y SETIEN, Antonio	84
CAGUAS				165		FERRERAS, José	163
COAMO	155			99	36.13	MURUVE, Miguel	99
UTUADO	185			127	31.35	POSADA ALDAZ, Juan de	127
	754,313	3,306*	228.16*	2,097	34.31		

FUENTES: Archivo de las Cortes. Sección de Expedientes, Legajo 91, número 9. Archivo Histórico de Ponce, Legajo 76.

* Estimado

CUADRO II
(1881)

RESULTADOS POR PARTIDOS

CONSERVADORES:

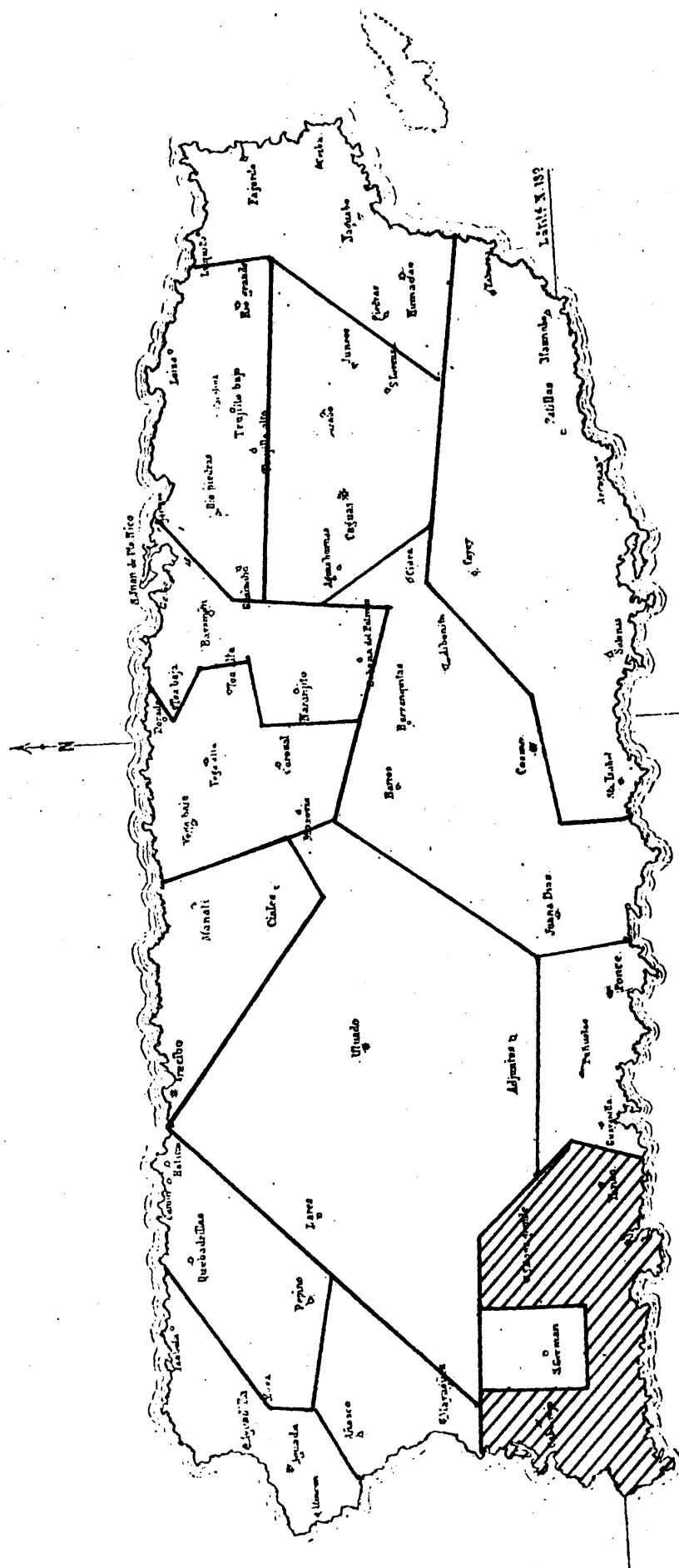
ANGOLOTY Y MERLO, Joaquín.....	San Juan
FERRERAS, José.....	Caguas
VIVAR Y GAZZINO, Antonio.....	Ponce
ALCALA DEL OLMO, Manuel.....	Arecibo
CABEZAS DE LAS HERAS, José.....	Vega baja
ALVAREZ DE TOLEDO, José.....	Aguadilla
LEDESMA Y NAVAJAS, Enrique.....	Quebradillas
SOLER Y BOU, Antonio.....	Humacao
MELLADO FERNANDEZ, Andrés.....	San Germán
SALINAS SETIEN, Adolfo.....	Rio Piedras
TORRE Y VEGA, Juan B. de la.....	Mayagüez
CAÑAMAQUE, Francisco.....	Guayama
MURUVE, Miguel.....	Coamo

LIBERALES:

LABRA, Rafael María de.....	Sabana grande
-----------------------------	---------------

- - - - -

LIBERALES



A B S T E N C I O N E S

(1881)

Media: 34.31

16 a 19

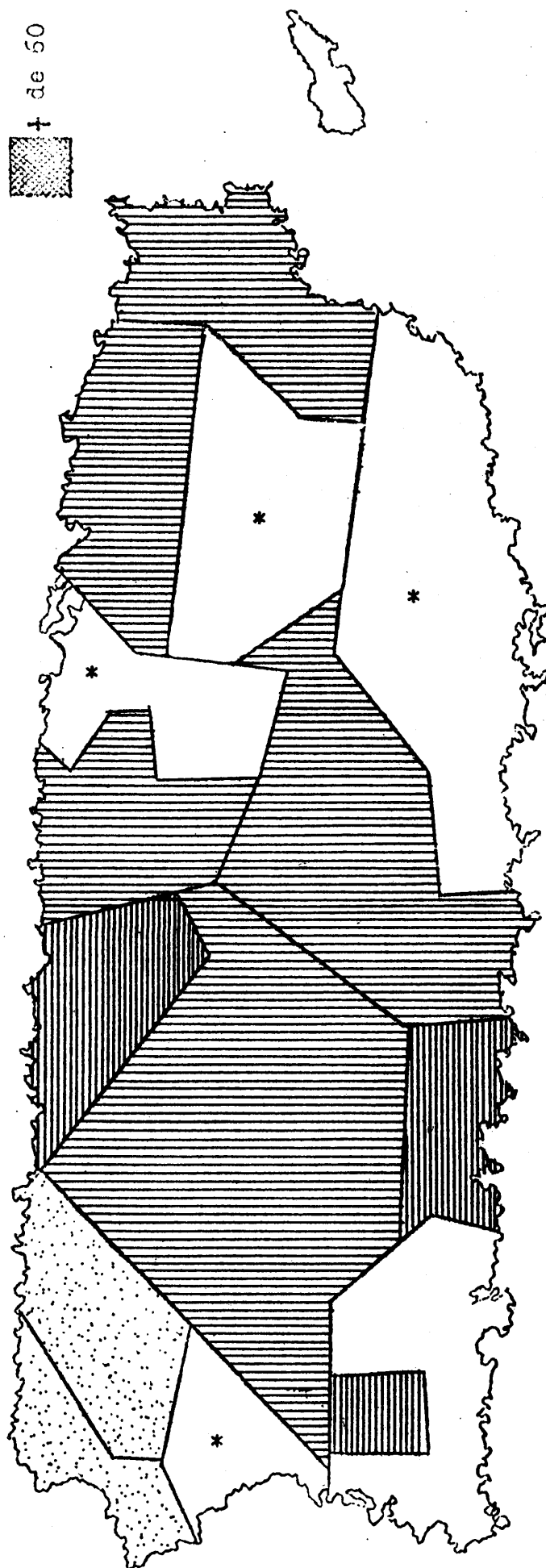
20 a 29

30 a 39

40 a 49

50 a 59

+ de 60



* Sin datos

2.9. LA ELECCION GENERAL DE 1884

A.- La situación política en la Península.-

Una serie de acontecimientos políticos adversos, entre los que cabe destacar la actitud hostil a Sagasta del Partido de Izquierda Liberal Dinástica, presidido por el Duque de la Torre imposibilitaban la permanencia de los fusionistas en el poder. Sagasta dimittía el 13 de octubre de 1883 y Posada Herrera intentaba formar un nuevo Gobierno de coalición con el Partido de Izquierda Dinástica, pero finalmente tiene a su vez que dimitir ante un voto de censura de la mayoría liberal adicta a su jefe (1).

El Gobierno de Posada Herrera dimite al no conseguir del Monarca el decreto de disolución de las Cortes y Alfonso XII llama de nuevo a Cánovas, con el fin de dar paso por segunda vez al Partido Conservador (2). El nuevo Gobierno, que quedó instalado el día 18 de enero de 1884, suspendía las sesiones de las Cortes al día siguiente, con el fin de preparar las elecciones con tiempo suficiente. El 31 de marzo se publicaba el Decreto de disolución, fijando las elecciones de diputados para el 27 de abril (3).

B.- La situación político-partidista en Puerto Rico.-

1.- El Partido Liberal Reformista

Las postrimerías de 1881 fueron momentos de gran actividad por parte del sector de tendencia asimilista dentro del Partido Liberal, a causa de la interpretación que dieron a los resultados de las elecciones de ese mismo año y también a la promulgación y publicación en la Gaceta de Puerto Rico del Real Decreto que hacía extensivos a la isla los preceptos de la Constitución de 1876 sobre libre reunión (4). No le fueron tan bien las cosas al sector autonomista, ya que en el mes de octubre

veían desaparecer su periódico más combativo y el primero se había atrevido a sostener públicamente la doctrina; nos referimos a "La Crónica", que fue suspendido por orden del Gobernador y que ya no volvió a publicarse (5).

Se produjo, pues, un movimiento encaminado a el Partido Liberal, promovido por líderes de tendencia ta, celebrándose varios actos públicos en los que participaron José de Celis Aguilera, José Julián Acosta, Pedro Gerónimo Colco, Manuel Corchado, Julián Blanco y Sosa, Manuel Alonso Pacheco, Manuel Elzaburu y Gabriel Ferrer Hernández (6).

Como culminación de estas reuniones, a finales de noviembre se celebró una asamblea en el Teatro Municipal de San Juan, con asistencia de un destacado grupo de líderes del Partido y después de proclamar que la asimilación era la meta de la política del Partido, se acordó enviar sendos telegramas al Presidente del Consejo de Ministros y al Ministro de Ultramar, felicitándoles por la extensión a Puerto Rico de la Ley de Reuniones de la Península.

El día 2 de diciembre, en otra reunión celebrada también en San Juan, se acordó la reorganización del Partido y el nombramiento de un Comité Central para llevar a cabo tal propósito. El Comité daba a la publicidad pocos días más tarde un Manifiesto dirigido a los líderes de la isla, en el que se les exhortaba a impulsar la reorganización de comités locales y a la creación de ellos donde todavía no estuvieran formados (7).

Pero este resurgimiento del Partido no duró mucho, porque a mediados del siguiente año y como consecuencia de una serie de fracasos electorales, algunos de sus propagandistas más destacados anunciaban su retirada de la lucha, con lo que el esfuerzo resultó estéril (8).

La crisis del Partido Liberal no duró mucho, pues a principios de 1883 Manuel Corchado, uno de los que el año anterior había anunciado su retirada de la lucha, tomó la iniciativa de reorganizar nuevamente el Partido, siendo casi de inmediato se-

cundado el movimiento por todos los liberales de la isla. Aprovechando este entusiasmo, se designó de inmediato un Comité Central provisional para la labor de propaganda y preparativos correspondientes (9).

En esta ocasión, la asamblea del Partido se celebró en la residencia de uno de los miembros del Partido durante los días 11 al 13 de noviembre de 1883 y a la misma asistieron delegados de 55 poblaciones de la isla en las que había comités locales del Partido. Inmediatamente se sometieron a discusión las bases para la reorganización del Partido, que habían sido redactadas por el mismo Manuel Corchado. El debate en torno a las mismas fue largo y controversial, ya que las mismas estaban concebidas en sentido francamente asimilista. Finalmente, fue aceptada esta línea doctrinal, no sin que los partidarios de la autonomía lograran introducir y hacer aprobar algunas enmiendas de tipo descentralizador; la más interesante fue la contenida en el cuarto principio del Partido, redactada en la siguiente forma:

"Cuarto: Declara por último el Partido Liberal Reformista de Puerto Rico que juzga indispensable para la prosperidad y buen gobierno de esta comarca la descentralización administrativa, tan amplia como la tienen y la tengan en lo sucesivo las provincias peninsulares; y desde luego en armonía con la vida peculiar de nuestras localidades, y por lo tanto, de la isla, considerada en su conjunto. En virtud de ello, los Liberales Reformistas puertorriqueños creen deber suyo trabajar sin descanso para el logro de la descentralización administrativa" (10).

2.- El Partido Español sin Condiciones.-

La situación en este Partido no era tampoco muy boyante, debido a que cada vez que hacían más profundas en su seno las diferencias entre dos grupos que representaban las dos tendencias ya apuntadas anteriormente, y que producían repetidas crisis relacionadas casi siempre con la dirección del Partido (11)

Lo mismo que en la crisis anterior, esta vez se produjo a causa de una designación de candidato para cubrir la vacante producida en el Distrito de Caguas, a causa de la renuncia del

diputado Sr. José Ferreras. Este era el candidato ministerial, apoyado por el general de la Portilla y por el Presidente del Partido Español. Enfrente de él, el "Boletín" apoyó la del hijo del ex-Gobernador de la isla general Sanz, D. José Sanz y Peray quien finalmente consiguió salir electo (12). Considerando esta derrota como un ataque personal, D. Pablo Ubarri presentó de nuevo su renuncia y se embarcó hacia la Península.

Sin pérdida de tiempo se reunió el Comité Central Incoacional en San Juan y acordó convocar una Junta Magna del Partido, que se celebró en el mes de junio de 1882. En ella se ratificó la confianza a D. Pablo Ubarri, pero al mismo tiempo se confirmó al "Boletín" su condición de órgano oficial del Partido (13).

Los problemas del Partido Español no terminaron aquí, ya que a continuación el Gobernador rompía sus relaciones con la redacción del "Boletín" por los mismos motivos que D. Pablo con el Partido, y procedía a tomar medidas contra el mismo, a consecuencia de varios artículos considerados lesivos de la autoridad. Pero estos ataques se volvieron muy pronto contra el general, ya que un grupo de incondicionales lograron hacer llegar sus quejas por medio del general Sanz hasta el Ministro de Ultramar y poco más adelante presentaba su dimisión, que le fue aceptada (14).

C.- La convocatoria de elecciones.- La campaña electoral

El día 1 de abril de 1884 publicaba el nuevo Gobernador de Puerto Rico, Marqués de la Vega Inclán, el Real Decreto de 31 de marzo disolviendo las Cortes y convocando nuevas elecciones para el 27 de abril (15).

Los dos partidos se dedicaron con empeño a preparar su campaña, utilizando sobre todo la prensa adicta, aunque es preciso reconocer que la maquinaria electoral de los incondicionales era mucho más poderosa y eficiente que la de los liberales, primero por una mayor disciplina interna y segundo por contar con la colaboración y apoyo del Gobierno.

D.- Los resultados.-

No fueron muy diferentes a los de las anteriores elecciones, y tampoco cabía esperar otra cosa, dada la similitud de las condiciones imperantes en la isla y en el seno de los propios partidos. Doce de los quince diputados elegidos pertenecían al Partido Español y solamente tres eran de tendencia reformista, si bien en la práctica quedaron reducidos a dos, al ser recusado uno de ellos por las Cortes y ser elegido posteriormente para reemplazarle un candidato incondicional (16).

E.- Comentarios.-

Si hubo algo diferente en estas elecciones y fue un recrudecimiento de los abusos electorales por parte de las autoridades y de elementos incondicionales, encaminados a restar fuerzas a los reformistas. Especialmente violentos fueron los sucesos en Yauco, donde hubo un triste saldo de un muerto y dos heridos (17).

Asimismo, continuó la práctica del cunerismo, pues la mayor parte de los elegidos eran candidatos de recomendación ministerial (18).

Finalmente, y como consecuencia de todo esto, se produjeron numerosas deserciones en las filas del Partido Liberal y un recrudecimiento de las divergencias en el seno del mismo: mientras se disolvían diferentes comités locales del Partido, dejaban de publicarse varios periódicos reformistas y se retiraban de la actividad periodística numerosos y prominentes escritores y propagandistas, otros muchos se declaraban partidarios de la doctrina autonomista (19). La última consecuencia de esta crisis fue la renuncia del Presidente del Partido Liberal, D. José de Celis Aguilera, motivada sobre todo por los problemas creados al Partido a causa de la pugna entre asimilistas y autonomistas, que en su opinión estaban quebrantando la disciplina del Partido y posibilitando el triunfo sistemático de sus rivales (20).

La crisis de la política partidista insular fue objeto de debate en el seno de las Cortes, no de una manera directa, que ningún diputado creyó oportuno formular, sino con motivo de la discusión de los presupuestos de Puerto Rico. Primero tuvo que intervenir el diputado por Arecibo, Sr. Alcalá del Olmo, (21); más adelante, el Ministro de Ultramar, Conde de Tejada de Valdesera, culpaba a los electores de la isla de no tener "un vivo amor al ejercicio de los derechos políticos", por lo cual era posible que salieran elegidos candidatos sin arraigo en el país. Es decir, que en opinión del Ministro de Ultramar había cun-rismo en la isla, porque los puertorriqueños lo permitían; no había, pues, que echar la culpa de ello al Gobierno (22).

Finalmente, el Sr. Mellado interviene tomando la acusación del Sr. Ministro y respondiendo a ella con una acusación, no a los electores, sino a la ley electoral vigente en Puerto Rico (23).

Creemos que todas estas opiniones, así como otras que se vertieron en diversos escritos de la época, sin dejar de ser acertadas, pasaban por alto un dato importante, tal vez por una falta de perspectiva adecuada. En efecto; con ser dignas de consideración tanto las leyes electorales en vigor como la propia acción del Gobierno sobre los procesos electorales, creemos que no tuvieron en estos momentos tanta importancia como la falta de una política partidista clara y coherente, política que, por otra parte, no estaban en condiciones de ofrecer aquejados como estaban de una crisis doctrinal que desorientaba a la opinión pública del país.

Tendrán que pasar varios años antes de que el Partido Liberal Reformista logre fijar de nuevo claramente su doctrina, lo cual dará automáticamente coherencia al Partido, poniéndole en condiciones para hacer posible la política autonomista del Gobierno en la siguiente década.

En cuanto al Partido Incondicional, seguirá sufriendo repetidas crisis que finalmente le incapacitarán para tomar deci-

siones propias, convirtiéndose en un dócil instrumento de los deseos del Gobernador y de las decisiones del Gobierno de la Metrópoli.

Por lo que se refiere a los datos cuantitativos de esta elección, no hemos logrado encontrar más que la copia de la Actas de Distritos que se hallan en el Archivo de las Cortes y éstas no contienen más que en la mitad de los distritos los datos relativos al número de electores de cada uno de ellos.

No tuvimos mejor suerte en el Archivo Histórico, en donde, a pesar de que consta la existencia de los mismos, no aparece el legajo correspondiente. Finalmente, nuestras pesquisas en la prensa periódica de la isla tampoco dieron el menor resultado, pues ni siquiera salieron en la Gaceta de Puerto Rico los resultados.

Por este motivo, el análisis de las variables electorales tiene que ser, obligadamente, muy general, basado como está en la mitad de los datos. Considerando los mismos como una muestra al azar, podemos presumir que se produjo una nueva disminución del número de electores, al mismo tiempo que una disminución correlativa, pero menor, del número de votantes, por lo que el porcentaje de abstenciones fue un poco menor: 31.92 %. Nuestra opinión es que la tónica general fue muy semejante a la de la elección anterior.

Creemos que esta similitud de los resultados reflejaba una situación muy parecida de los partidos, aquejados como estaban desde hacía algún tiempo por problemas internos, razón por la cual se habían dedicado más a una actividad de reorganización de sus respectivos programas y estructuras, que a la campaña electoral.

En cuanto al desarrollo del proceso electoral, aparte de los ya mencionados sucesos del Colegio electoral de Yauco, que obligaron a suspender la elección y a repetirla el día 30 del mismo mes, se produjeron protestas en los distritos de Vega baja Aguadilla y Sabana grande (24).

NOTAS

- 1.- El Ministro de Ultramar del Gobierno formado por Posada Herrera, D. Estanislao Suarez Inclán, expuso en una obra publicada en 1884, las medidas adoptadas por dicho Gobierno en relación con los territorios de Ultramar, a lo largo de los 94 días que duró el mismo. Por lo que se refiere a Puerto Rico, comentaba el Sr. Suarez Inclán que si bien no tuvo materialmente tiempo para resolver el expediente de la cuestión monetaria de la isla, sí pudo tomar algunas medidas beneficiosas para la misma, como la autorización dada al Gobernador con el fin de que abriera sus puertas de forma provisional la Escuela de Artes y Oficios. También se cuidó de acelerar las obras públicas de la isla, "con el propósito de dar fuerte impulso a servicio tan importante, dotándole previamente del personal facultativo necesario, cosa no del todo expedita por efecto de especiales circunstancias". Otras medidas adoptadas fueron: el Acuerdo Comercial entre España y los Estados Unidos; la Ley de Registro Civil; la extensión a Puerto Rico la Ley Hipotecaria de la Península reformada; la extensión de la Ley reformando los Juzgados Municipales y finalmente la aplicación a la isla de la Ley de Aranceles de los Juzgados Municipales de la Península. Cf.: "El Gobierno del Ministerio presidido por el Sr. Posada Herrera con respecto a la Administración de las Provincias de Ultramar", (Madrid, Imprenta Fortanet, 1884).
- 2.- FERNANDEZ ALMAGRO, Melchor. Op.Cit., Tomo I, pág. 400 y sgts. Aguirre de Tejada pasó a ocupar la cartera de Ultramar.
- 3.- MARTINEZ CUADRADO, Miguel: "Elecciones...", pág. 284.
- 4.- Gaceta de Puerto Rico, 1881, número 142.
- 5.- PEDREIRA, Antonio S. Op.Cit., pág. 104.
- 6.- PAGAN, Bolívar. Op.Cit., pág. 294 y sgts.
- 7.- Ibidem. El Comité Central elegido estaba compuesto de las siguientes personas: Pedro Gerónimo Goico, representante por San Juan; Fidel Guillermet, por Arecibo; Manuel Corchado Juarbe, por Ponce y Mayaguez; José de Celis Aguilera, por Humacao; José Julián Acosta, por Río Piedras; Julián Blanco y Sosa, por Caguas, y Gabriel Ferrer Hernández, por Vega baja. Del Manifiesto

entresacamos los siguientes párrafos:

"Inútil nos parece encarecer a usted la necesidad de reorganizar nuestro Partido. Esta urgente preocupación está en el ánimo de todos y solo falta poner en ésta cuanto se hace necesario para llenarla y cumplirla. Por esta razón, tan pronto hemos conseguido obtener la representación de los pueblos que en nuestra anterior indicábamos, hemos procedido a redactar, discutir y aprobar las adjuntas bases... Interesa sobremanera tener una ley que nos dé formas y fuerzas. Y sometemos ese breve proyecto con arreglo al cual podemos inmediatamente constituirnos...

Por la parte declarada de la constitución adjunta verá usted que no se innova nada en el credo histórico de nuestra agrupación. El Partido Reformista es el mismo de siempre. Hoy, que se traducen nuestras aspiraciones en leyes y nuestro criterio en propósitos de la Autoridad Soberana, debemos centuplicar el esfuerzo, aumentado con la fe que da al que lucha el éxito de las primeras victorias".

- 8.- CELIS AGUILERA, José de. Op.Cit. en "Boletín Histórico" de Cayetano Coll y Toste, Tomo IX, págs. 190 a 193.
- 9.- PAGAN, Bolívar. Op.Cit., pág. 299 y sgts. El Comité Central provisional quedó compuesto por las siguientes personas: Manuel Corchado Juarbe, Pedro G. Goico Sabanetas, José Julián Acosta, Julián Blanco y Sosa, José de Celis Aguilera, Fidel Guillermet, Manuel Elizaburu, Gabriel Ferrer Hernández, Manuel Alonso Pacheco, Manuel Fernández Juncos y José T. Silva.
- 10.- Ibidem, pág. 302.
- 11.- Comentando estas crisis que se estaban produciendo cada vez con más frecuencia en el seno del Partido Español, comentaba Labra en 1884:

"Porque yo advierto la profunda división que se ha producido allá en Ultramar en el seno de los elementos conservadores, los unos, cansados de una intransigencia a cuyo término solo está la guerra, preocupados de los intereses permanentes del país donde han arraigado, donde tienen su cuna sus hijos y que han convertido en país propio; propicios, por tanto, a una intimidad salvadora con los elementos progresistas y naturales de la comarca que con su laboriosidad y con su celo ellos contribuyen a levantar; los otros, devotos de lo pasajero, imbuídos en las preocupaciones de procedencia cuando no de raza, seducidos por el caciquismo, fáciles a todos los excesos

del antiguo régimen que daba la cultura de nuestras Antillas, ya parece tan solo un reflejo de la política de conquista: dispuestos a la provocación y a aquella turbulencia en que cifran su éxito los que por razón de su escaso número, su falta de perseverancia, nada pueden prometerse por los caminos regulares, los procedimientos de paz y de tolerancia propios de los pueblos cultos y de las sociedades bien organizadas". Cf.: "A mis electores de Cuba y Puerto Rico", en "Mi campaña en las Cortes españolas de 1881 a 1883", (Madrid, Tipografía "Sindicato de Publicidad", 1884), págs. XLVI y XLVII.

- 12.- En carta dirigida por el ex-Gobernador de Puerto Rico, general Sanz y Posse al Ministro de Ultramar, D. Fernando León y Castillo con fecha 10 de junio de 1881, es decir, dos meses antes de celebrarse las elecciones anteriores, le decía:

"Mi distinguido amigo: Con arreglo a lo que hemos hablado, recuerdo a V. los nombres de mis recomendados ya aceptados para Diputados, los cuales son el Excmo. Sr. D. Antonio Belmonte, Intendente que fue de Puerto Rico, D. José Sanz y Peray, mi hijo y D. Antonio Alfau, hijo del general Americano del mismo apellido que tan buenos servicios prestó a España. Estos Señores cuentan con fuerzas propias y solo desean como yo igualmente que sean puestos en candidatura para evitar se dividan nuestras fuerzas en la elección.

Ruego a V. se sirva tener presente mi justa petición, por bien del Partido y conveniencia para la Isla que por dos veces he gobernado y cinco la vengo representando..." Cf.: Archivo Histórico Nacional (Madrid). Sección de Ultramar, Legajo 5116/10, número 24.

Aunque en esa ocasión el Ministro no atendió el ruego del general Sanz, sí parece era cierto que al menos su hijo contaba con "fuerzas propias", como se vió en esta elección parcial. También es sintomático el hecho de que, al contrario de lo que sucedió en la elección parcial de mayo de 1880, esta vez logró triunfar la candidatura contraria a la apoyada por el Presidente del Partido Español. Cf.: Archivo Histórico Nacional (Madrid). Sección de Ultramar, Legajo 5116/12.

- 13.- CRUZ MONCLOVA, Lidio. Op.Cit., Tomo III, págs. 629 y 630.
- 14.- Además de estos hechos de política interna, motivaron la renuncia del general de la Portilla las reclamaciones diplomáticas que hizo al Gobierno de Madrid el de la República de Santo Domingo, con motivo de haber permitido una expedición contra su Gobierno, en la que tomaron parte algunos puertorriqueños. Cf.: Archivo Histórico Nacional

(Madrid). Sección de Ultramar, Legajo 5115/50 y 51.

15.- Gaceta de Puerto Rico, 1884, número 41. Archivo Histórico Nacional (Madrid). Sección de Ultramar, Legajo 5121/15.

16.- Pueden verse los resultados en los Cuadros y Mapas electorales adjuntos.

17.- Comentando Labra estos sucesos, decía poco después en el Congreso:

"Todo este espectáculo de coacciones, que hacen de nuestros asuntos electorales en la Península un verdadero escándalo, a punto de llamar la atención de los estadistas de todos los pueblos, todo esto se ha realizado en Puerto Rico, y Puerto Rico tiene ya su historia de protestas, causas, de alborotos y de intervenciones reprobables de jueces y delegados de las autoridades en la campaña electoral, incurriendo en grave responsabilidad. De esta suerte se pudo dar el caso de que en aquel Distrito que me ha hecho el honor de elegirme ésta y otras muchas veces, se cometieran verdaderos atentados, hubiera abusos, tiros, cuchilladas dirigidas contra los que me favorecían con su apoyo y a los jefes del Comité que estaban a su lado, hasta el punto de tener que defenderse con sillas dentro del mismo local de la acometida de un hombre, pintada la cara de negro, que enarbolando un puñal lo dirigió contra determinadas personas, teniendo la fortuna de escapar de la acción de la autoridad. La cosa llegó al punto de que cayera muerto un guardia de orden público, que honradamente quiso cumplir con su deber, y que por último hubiera necesidad de suspender la elección por las violencias que allí se habían cometido". Cf.: Diario de Sesiones de las Cortes, 1884, págs. 3249 y sgts.

18.- En la ya mencionada obra de Labra "Mi campaña parlamentaria", comenta sobre la práctica del cunerismo en estos momentos:

"Nada debiera observar sobre la oposición que merecen los candidatos "cuneros", de que tanto se ha abusado en Puerto Rico y cuyas candidaturas ya se preparan para Cuba. El error, por parte del Gobierno que los patrocina, es palmario.

En cualquier país constituiría un formidable ataque al régimen representativo, cuyos peligros han aumentado en España de un modo extraordinario los últimos gobiernos fusionista y conservador, que han llegado a sostener cuneros de oposición! Pero en Ultramar la cosa sale de los límites de la más ligera y equívoca prudencia. Porque aquí se dice a toda hora que las cuestiones de Ultra-

mar son difícilísimas y de un carácter especial. Muchos afirman que la situación de nuestras Antillas pide una gran reserva en el establecimiento de instituciones y la consagración de derechos propios de los pueblos cultos en un cierto grado de adelantamiento. Y la doctrina de la asimilación, tal como la vienen entendiendo los Ministros de la Restauración, implica necesariamente el exacto cumplimiento de dos términos: a saber, el estado actual de lo que se ha de asimilar y aquello a que tiende la asimilación.

Con tales antecedentes, parecía natural que se tratase de asegurar la presencia en el Parlamento de verdaderas representaciones de nuestras Antillas, que hicieran como de ponentes de los ignorados o mal entendidos problemas ultramarinos cuya resolución se entrega a los cuatrocientos Diputados o Senadores de la Península. En tal sentido, los Gobiernos debieran preosuparse de que a las Cortes vinieran todos los matices de la opinión antillana, aún los más exagerados e inverosímiles.

Pero nuestros monárquicos lo han arreglado de otro modo. Puerto Rico, bajo el aspecto del cunerismo deja atrás aún a los distritos rurales de Galicia; con la diferencia de que los problemas gallegos son, por regla general, los de toda la Nación y aun cuando resulten quince o veinte cuneros por aquella comarca, el número de sus diputados que quizá llegue a cincuenta, permite que la mayoría sea de personas competentes y arraigadas en el país galaico. Todo lo contrario de lo que acontece en la pequeña Antilla, donde de los quince Diputados, ordinariamente las tres cuartas partes carecen de otra relación con el lejano y original país que representan, que la recomendación del Ministro de Ultramar al Gobernador de la Isla, en el momento de las elecciones". Páginas LXI a LXIII.

- 19.- CELIS AGUILERA, José de. Op.Cit., pág. 216 y sgts.
- 20.- En la mayor parte de las elecciones parciales realizadas hasta 1886 resultaron vencedores los candidatos incondicionales. Cf.: Archivo Histórico Nacional (Madrid), Legajo 6116/ 8 y 9.
- 21.- Diario de Sesiones de las Cortes, Legislatura de 1884-85, pág. 1276. Como consecuencia de una alusión personal del Diputado, Sr. Villanueva, en relación con la manera en que había llegado a ocupar su escaño el diputado por el Distrito de Arecibo Sr. Alcalá del Olmo, éste se creyó obligado a replicarle de esta forma:

"Mi amigo el Sr. Villanueva que tan impuesto se encuentra de cuantos asuntos se refieren a Ultramar, y mu-

cho más de los que revisten carácter político, sabe perfectamente que mi elección en Puerto Rico fue debida al voto de mis electores, a las simpatías con que cuento en el Partido Incondicionalmente Español de aquel país y a mí me importa añadir que como consta en las regiones oficiales de una manera pública y solemne que no da lugar a dudas, ese mismo partido español, antes de que vieran las elecciones generales y antes de que se abriese el período electoral, proclamó entre otras de muy queridos amigos que tienen asiento en esta Cámara, mi candidatura, consignando en un acta demasiado honrosa para este humilde diputado que por razón de mis grandes servicios a la causa española en aquel país, merecía el honor de ser designado de antemano como candidato a la diputación".

22.- En la sesión del día 28 de marzo de 1885 decía el Ministro de Ultramar, refiriéndose a las elecciones de Puerto Rico y en contestación a una intervención del Sr. Labra:

"Pero no concluiré sin manifestar a S.S. una cosa, que es el resultado del estudio que todo hombre medianamente reflexivo tiene que hacer, en vista de lo que ocurre en las elecciones de las Antillas. La diferencia entre las elecciones de Cuba y las de Puerto Rico; la diferencia entre el arraigo de los candidatos en Cuba y el menor arraigo y aun desconocimiento a veces en el país de los diputados por Puerto Rico consiste en una enfermedad, que ciertamente no es el Gobierno el que la ha causado, ni el llamado a curarla. En Puerto Rico no hay, por punto general, el espíritu público y el vivo amor al ejercicio de los derechos políticos que hay en Cuba. Eso basta, Sr. Labra, para determinar la diferencia entre el resultado de unas y otras elecciones; y sin que yo entienda que esta reflexión que hago es aplicable a todos los distritos de Puerto Rico... es indudable que afecta a un número no corto de aquellos. Yo sé que hay en Puerto Rico colegios electorales que están en relación íntima con sus candidatos, y en los cuales nadie disputa a éstos el derecho de elección. Sigán todos los colegios de Puerto Rico esa conducta, y tendrán aquí una representación tan íntimamente suya como es la representación de Cuba". Pág. 4549.

Sin embargo, creemos que la opinión del Ministro de Ultramar no era totalmente justa, y que la isla no merecía una crítica tan dura, habiéndose aprovechado el Gobierno, como lo había hecho durante mucho tiempo, de las ventajas que para imponer sus candidatos le ofrecía una ley electoral, que favorecía abiertamente a uno de los partidos de Puerto Rico. E indirectamente, así lo hubo

de reconocer poco después el propio Sr. Ministro. En efecto, en la sesión del 30 de mayo de ese mismo año y justificando su postura contraria a la igualación de las disposiciones electorales en la Península y en Puerto Rico, decía, entre otras cosas:

"Todos los Gobiernos han escuchado la reclamación de la rebaja del censo; y todos ellos, aunque han prometido hacer la reforma en ese importante ramo de la política y de la pública administración, no la han, sin embargo, realizado.

Delicada es la cuestión, y deseo no pronunciar más que aquellas palabras que la prudencia me aconseje pronunciar en este sitio, pues yo no quiero contestar a ciertas cosas sino con la verdad tal cual la aprecio.

Sí; todos los Gobiernos han tenido miedo a esa cuestión; los Gobiernos todos han vacilado en resolverla; los Gobiernos todos han temido desvirtuar la influencia que en la pequeña Antilla tiene el Partido más conservador, que es, a la vez, el partido que todo lo pospone al principio de la integridad de la Patria, fortaleciendo la influencia de otros partidos compuestos de individuos, algunos de los cuales no prestan el mismo escrupuloso respeto a la anteposición a todo de aquel principio, de aquel caro interés.

Ahí tiene S.S. en pocas palabras la contestación a su pregunta; y, como yo, miembro de un Gobierno conservador, y como este Gobierno, colectividad conservadora, no ha de hacer aquello que no han hecho los partidos más liberales, declino la responsabilidad de esa reforma, comenzando por declinar la reforma misma". Cf.: Diario de Sesiones de las Cortes, Legislatura de 1884-85, págs. 4612 y 4613.

- 23.- "Señor Ministro de Ultramar, señores individuos de la Comisión, Sres. diputados todos, es sumamente grave lo que sucede en la cuestión electoral de Puerto Rico. Eso no puede continuar así; nadie es capaz de defender aquel censo absurdo y aquella manera de proceder a la elección de los representantes del país. Todos los Ministros y todas las Cortes piensan introducir en ello modificaciones; pero como raras son las Cámaras que llegan a su término, y ninguna quiere tratar con anticipación la ley electoral, porque parece lo correcto que una vez reformada ésta se proceda a la disolución de las Cortes, y todo Parlamento tiene miedo a la muerte, resulta esa cuestión definitivamente aplazada y así persevera el absurdo en aquellos comicios de una manera extraña, de una manera perturbadora, de una manera, es menester decirlo, hasta poco decorosa para los que traemos la re-

presentación, para la isla que nos elige o nos debiera elegir y para la Cámara en la que tenemos intervención. Y me permito ser tan duro en este aserto, porque más ha insinuado, a pesar de su tacto habitual, el Sr. Ministro de Ultramar en la sesión del 28 de marzo último; y me permito decirlo, porque la censura que pudiera inferirse a mí por haber obtenido la diputación en condiciones tales tiene más que un atenuante una explicación: la de que en frente de mí no se presentaba ninguna persona de arraigo en el país, ni siquiera un candidato que lo deseara con insistencia...

Es muy triste que vengan aquí por cuarenta y por cincuenta y tantos votos, y es hasta cómico pensar que si los electores de la diputación puertorriqueña que nos han votado y elegido acudieran a la Cámara, no bastarían quizás todos ellos a llenar los escaños, o por lo menos, los escaños y las tribunas". Cf.: Diario de Sesiones de las Cortes, Legislatura de 1884-85, pág. 4586.

Con razón podía Labra, diez años más tarde, criticar la Ley Electoral de 1873 con las siguientes palabras:

"No se diga que el proyecto al que me refiero -el de la Ley Electoral de 1892- mejoraba las condiciones electorales de 1873. Es decir, de aquella monstruosidad por cuya virtud se exigió al elector antillano una cuota contributiva electoral quintuple de la exigida al elector de la Península. Y esto sin más razón ni criterio que el de dificultar la representación de ciertos elementos. Por aquel medio, que es lo que ha servido para las elecciones últimas, Cuba tiene un elector por cada 51 habitantes, y Puerto Rico uno por 212, y se puede dar y se da el caso de que vengan más de ocho y de diez diputados por menos de 200 votos". Cf.: "La Autonomía colonial en España", (Madrid, Sucesores de Cuesta, 1892), págs. 54 y 55.

24.- Archivo de las Cortes. Sección de Expedientes, Legajo 96, número 8.

RESULTADOS

(1384)

<u>DISTRITO</u>	<u>POBLACION</u>	<u>ELECTORES</u>	<u>RELACION Hab/Elec</u>	<u>VOTANTES</u>	<u>ABST.</u>	<u>CANDIDATOS ELEGIDOS</u>	<u>VOTOS</u>
CALITL				190		ARTEAGA, Fernando	188
VEGA BAJA				63		ACUÑA PANIAGUA, Francisco de P.	34
ALACIBO		157		128	18.47	ALCALA DEL OLMO, Manuel	33
QUERACILLAS		144		117	18.75	FERNANDEZ CAPEYILLO, Manuel	31
AGUADILLA				220		DESPUJOL, Eulogio	123
MAYAGUEZ		300		235	21.67	LASTRES JUIZ, Francisco	131
SAN GERMAN				89		GONZALEZ STEFANI, Joaquín	70
SABANA GRANDE		227		148	34.30	LABRA, Rafael María de	98
IVONCE				180		SALAZAR Y SCHUCK, Ermelindo	167
GUAYAMA				110		MARTINEZ, Diego A.	109
HUACAO		215		110	48.84	SOLER Y BOU, Antonio	109
RIO PIEDRAS		110		69	37.27	SALTO Y HUELVES, Martín del	69
CASUAS				72		GUERRERO, Teodoro	71
COMLO		151		93	38.41	MELLADO FERNANDEZ, Andrés	93
UTUADO				78		VALLEJO MIRANDA, Angel	78
				<u>1,902</u>	<u>31.92*</u>		

784,709 2,794 * 280.85*

* Cifras aproximadas

FUENTES: Archivo de las Cortes. Sección de Expedientes, Legajo 96, número 8

RESULTADOS

(1884)

<u>DISTRITO</u>	<u>POBLACION</u>	<u>ELECTORES</u>	<u>RELACION Hab/Elec</u>	<u>VOTANTES</u>	<u>ABST.</u>	<u>CANDIDATOS ELEGIDOS</u>	<u>VOTOS</u>
CAPITAL				190		ARTEAGA, Fernando	188
VEGA BAJA				63		ACUÑA PANIAGUA, Francisco de P.	34
ARACIO	157			128	18.47	ALCALA DEL OLMO, Manuel	83
QUEBRADILLAS	144			117	18.75	FERNANDEZ CAPELLO, Manuel	81
AGUADILLA				220		DESPUJOL, Eulogio	123
MAYAGUEZ	300			235	21.67	LASTRES JUIZ, Francisco	131
SAN GERMAN				89		GONZALEZ STEFANI, Joaquin	70
SABANA GRANDE	227			148	34.80	LABRA, Rafael Maria de	98
PONCE				180		SALAZAR Y SOHUCK, Ermelindo	157
GUAYAMA				110		MARTINEZ, Diego A.	109
HUMACAO	215			110	48.84	SOLER Y BOU, Antonio	109
RIO FIEDRAS	110			69	37.27	SALTO Y HUELVES, Martin del	69
CAGUAS				72		GUERRERO, Teodoro	71
COMO	151			93	38.41	MELLADO FERNANDEZ, Andrés	93
UTUADO				78		VALLEJO MIRANDA, Angel	78
	<u>784,709</u>	<u>2,794</u>	<u>280.85*</u>	<u>1,902</u>	<u>31.92*</u>		

* Cifras aproximadas

FUENTES: Archivo de las Cortes. Sección de Expedientes, Legajo 96, número 8

CUADRO II
(1884)

RESULTADOS POR PARTIDOS

CONSERVADORES:

ARTEAGA, Fernando.....	San Juan
CUERRERO, Teodoro.....	Caguas
MARTINEZ, Diego A.	Guayama
ALCALA DEL OLMO, Manuel.....	Arecibo
LABRES JUJZ, Francisco.....	Mayagüez
SOBER Y DOU, Antonio.....	Humacao
FERNANDES CAPETILLO, Manuel.....	Quebradillas
GONZALES TREFANI, Joaquín.....	San Germán
VALDEJO MIRANDA, Angel.....	Utuaado
MELLADO FERNANDES, Andrés.....	Coamo
SALTO Y HUELVES, Martín de.....	Rio Piedras
DESTUJOL DUSSAY, Eulogio.....	Aguadilla

LIBERALES:

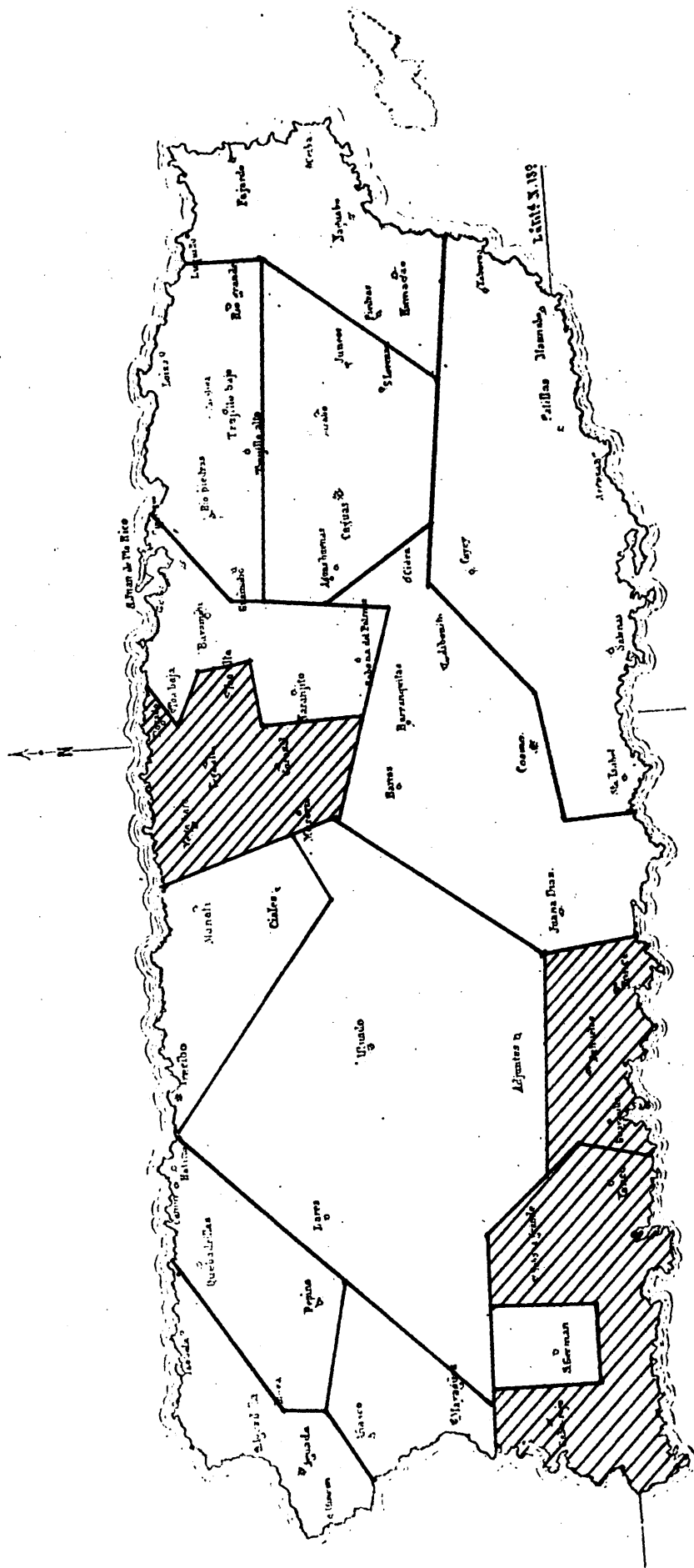
LABRA, Rafael María de	Sabana grande
SALAZAR, Ermelindo.....	Ponce
AGUIA PANIAGUA, Francisco de P....	Vega baja

- - - - -



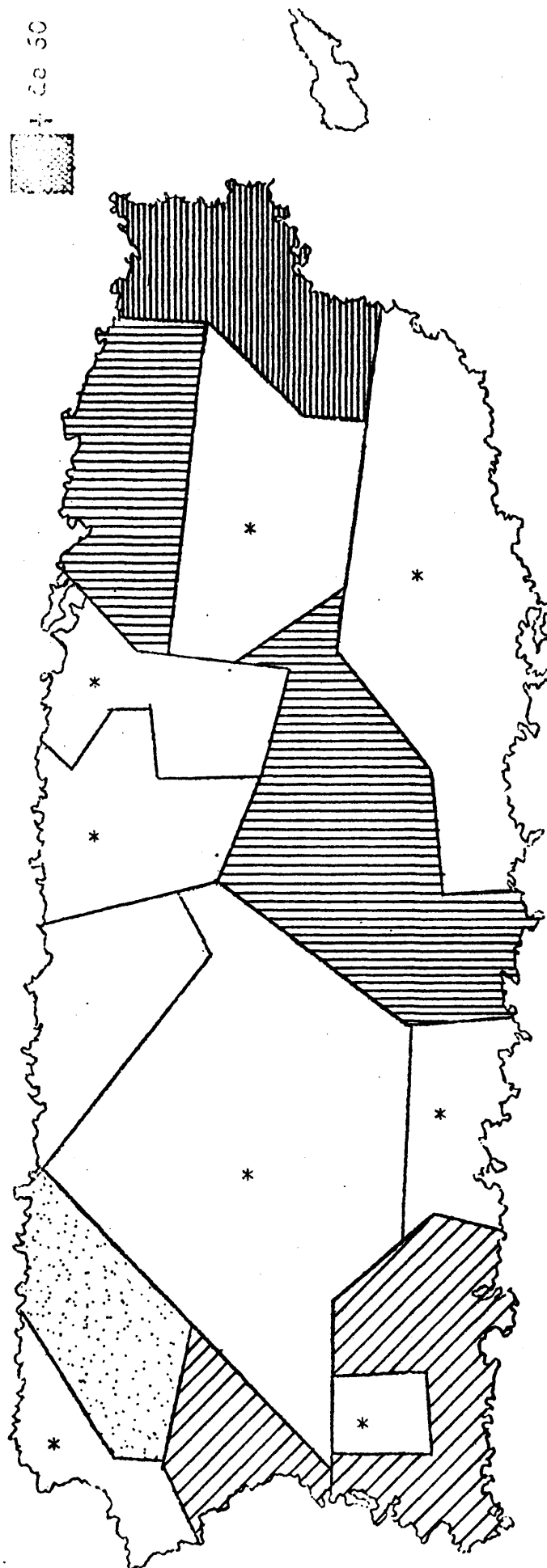
LIBERALES

(1834)

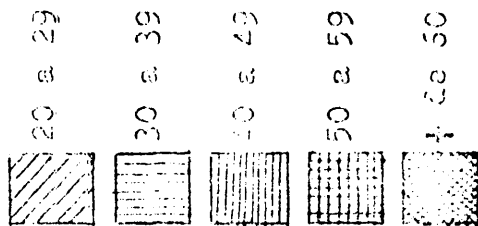


ABSTENCIONES (1884)

Media: 31.92 (estimado)



* Sin datos





UNIVERSIDAD COMPLUTENSE



5327102698

T 8
1752

ELECCIONES Y PARTIDOS POLITICOS DE PUERTO RICO: 1809 - 1898

VOLUMEN II

Tesis elaborada para optar al Grado de Doctor en
Ciencias Políticas, por José María López Domínguez

Puerto Rico, Abril de
1976

INDICE

INDICE

PAGINAS

INTRODUCCION.....	2
I.- Naturaleza y motivación del trabajo	2
II.- Fuentes	6
III.- Clasificación de los datos	7
IV.- Estructura y Metodología	9
V.- Los sistemas de legalidad electoral en Puerto Rico	12
NOTAS Y ANEXOS	16
CAPITULO PRELIMINAR: DESARROLLO HISTORICO DE PUERTO RICO	32
NOTAS	43
PRIMER PERIODO: DESDE 1809 HASTA 1836:	
A.- Visión de conjunto	53
B.- Las tendencias políticas de Puerto Rico durante este período	54
C.- La Elección de Vocal ante la Junta Suprema..	56
NOTAS	58
1.1. LA ELECCION GENERAL DE 1810:	
A.- La Convocatoria	62
B.- Proceso electoral y resultados	62
C.- Las Instrucciones al Diputado	63
NOTAS	65

1.2. LA ELECCION GENERAL DE 1812-1813

A.- La Convocatoria.....	68
B.- Proceso electoral y resultados	69
C.- Comentarios	70
NOTAS Y ANEXOS	72

1.3. LA ELECCION PARTICULAR DE 1813-1814

A.- La Convocatoria	83
B.- Proceso electoral y resultados	83
C.- El regreso de Fernando VII y la restauración del Absolutismo	84
NOTAS Y ANEXOS	87

1.4. LA ELECCION GENERAL DE 1820

A.- El Pronunciamiento de Riego	94
B.- La Convocatoria	94
C.- Proceso electoral y resultados	95
D.- Comentarios	97
NOTAS Y ANEXOS	99

1.5. LA ELECCION GENERAL DE 1820-21

A.- La Convocatoria	112
B.- Proceso electoral y resultados	112
C.- Comentarios	113
NOTAS Y ANEXOS	115

1.6. LA ELECCION PARTICULAR DE 1822-23

A.- La Convocatoria	126
B.- Proceso electoral y resultados	127

C.- Segunda vuelta al régimen absolutista	127
NOTAS	130
1.7. LA ELECCION GENERAL DE 1834	
A.- La Promulgación del Estatuto Real	133
B.- La Convocatoria	134
C.- Proceso electoral y resultados	134
D.- Las Instrucciones a los Procuradores	135
NOTAS	136
1.8. LA ELECCION GENERAL DE 1836 (Primera)	
A.- La situación política de la Península	139
B.- La Convocatoria	140
C.- Proceso electoral y resultados	140
D.- Comentarios	140
NOTAS	141
1.9. LA ELECCION GENERAL DE 1836 (Tercera)	
A.- La situación política en la Península	143
B.- La Convocatoria	144
C.- Proceso electoral y resultados	144
NOTAS	146
EPILOGO: LA PERDIDA DE LA REPRESENTACION EN LAS CORTES	
A.- Los Antecedentes	148
B.- La discusión del Dictámen	150
C.- Conclusión	159
NOTAS Y ANEXOS	162

II PERIODO

2.1. LA ELECCION GENERAL DE 1869

A.- La situación política en la Península:	
1.- La Revolución de Septiembre	169
2.- La readmisión de los representantes de Puerto Rico	171
3.- El Decreto sobre sufragio universal y la convocatoria de elecciones	172
B.- La Convocatoria de elecciones en Puerto Rico ...	175
C.- Ambiente preelectoral: actividades de los grupos liberal y conservador.....	176
D.- Los Resultados	177
E.- Comentarios	179
NOTAS Y ANEXOS	181

2.2. LA ELECCION GENERAL DE 1871

A.- La situación política en la Península:	
1.- La proclamación del Duque de Aosta como Rey de España	194
B.- La situación político-partidista en Puerto Rico:	
1.- La aparición de los primeros partidos po- líticos	195
2.- La fundación del Partido Liberal Reformis- ta	198
3.- La fundación del Partido Liberal Conserva- dor	200
C.- La Convocatoria de elecciones en Puerto Rico.- La Campaña electoral	202

1.- El Partido Liberal Conservador	203
2.- El Partido Liberal Reformista	205
D.- Los Resultados	207
E.- Comentarios	208
NOTAS Y ANEXOS	210
2.3. LA ELECCION GENERAL DE 1872 (Primera)	
A.- La situación política en la Península	237
B.- La situación político-partidista en Puerto Rico:	
1.- El Pacto del Partido Liberal Reformista de Puerto Rico con el Democrático de Ruiz Zorrilla	237
2.- La Liga Nacional contra las Reformas y los Centros Hispano-Ultramarinos	241
C.- La Convocatoria de elecciones en Puerto Rico.- La Campaña electoral	242
1.- El comienzo de la manipulación electoral y del cunerismo en Puerto Rico	243
2.- La Campaña electoral	244
D.- Los Resultados	246
E.- Comentarios	246
NOTAS Y ANEXOS	248
2.4. LA ELECCION GENERAL DE 1872 (Segunda)	
A.- La situación política en la Península: La caída del Gobierno de Sagasta y la formación de uno nuevo por Ruiz Zorrilla	267
B.- La situación político-partidista en Puerto Rico.	267

C.- La Convocatoria de elecciones en Puerto Rico.-

La Campaña electoral:

1.- El asunto de la candidatura del Ministro de la Guerra	268
2.- La Asamblea del Partido Conservador	269
3.- El reemplazo de Corregidores y de Alcaldes.	271
D.- Los Resultados	271
E.- Comentarios	272
NOTAS Y ANEXOS	275

2.5. LA ELECCION GENERAL DE 1873

A.- La situación política en la Península

1.- La Abdicación de Amadeo I y la proclama- ción de la República	290
2.- La Ley de 11 de Marzo de 1873	291
B.- La situación político-partidista en Puerto Rico..	291
C.- La convocatoria de elecciones en Puerto Rico.- La Campaña electoral	293
1.- El Partido Liberal Reformista	294
2.- El Partido Español sin condiciones	294
D.- Los Resultados	295
E.- Comentarios	295
NOTAS Y ANEXOS.....	299

2.6. LA ELECCION GENERAL DE 1876

A.- La situación política en la Península

1.- La Restauración	311
2.- Las bases del sistema canovista	312

-VII-

B.- La situación político-partidista en Puerto Rico:	
1.- La política de la Restauración en Ultra-	
mar	314
2.- El segundo gobierno del general Sanz y Po-	
sse: retroceso en el desarrollo político	
de Puerto Rico	315
C.- La convocatoria de elecciones.- La campaña elec-	
toral	318
1.- El Partido Liberal Reformista	319
2.- El Partido Incondicional	319
D.- Los resultados	320
E.- Comentarios	320
NOTAS Y ANEXOS	324

2.7. LA ELECCION GENERAL DE 1879

A.- La situación política en la Península: Gobierno	
de Martínez Campos	340
B.- La situación político-partidista en Puerto Rico..	340
C.- La convocatoria de elecciones.- La campaña elec-	
toral	341
1.- La coalición electoral de conservadores y	
liberales	342
2.- La candidatura de conciliación	342
D.- Los Resultados	343
E.- Comentarios	344
NOTAS Y ANEXOS	346

2.8. LA ELECCION GENERAL DE 1881

A.- La situación política en la Península: La inicia-	
---	--

-VIII-

ción del turno pacífico de los partidos	359
B.- La situación político-partidista en Puerto Rico:	
1.- El problema de la legalidad vigente en Puerto Rico	360
2.- El Partido Liberal Reformista	361
3.- El Partido Incondicional	363
C.- La convocatoria de elecciones.- La campaña elec- toral	363
1.- El Partido Incondicional	364
2.- El Partido Liberal Reformista	364
D. Los resultados	365
E.- Comentarios	365
NOTAS Y ANEXOS	368
2.9. LA ELECCION GENERAL DE 1834	
A.- La situación política en la Península	390
B.- La situación político-partidista en Puerto Rico:	
1.- El Partido Liberal Reformista	390
2.- El Partido Español sin condiciones	392
C.- La convocatoria de elecciones.- La campaña elec- toral	393
D.- Los resultados	394
E.- Comentarios	394
NOTAS Y ANEXOS	397

FIN DEL PRIMER VOLUMEN

SEGUNDO VOLUMEN

2.10. LA ELECCION GENERAL DE 1886

A.- La situación política en la Península: la muerte de Alfonso XII y Gobierno de Sagasta	410
B.- La situación político-partidista en Puerto Rico:	
1.- El Partido Liberal Reformista: la crisis de la tendencia asimilista	410
2.- El Partido Español sin condiciones	415
C.- La convocatoria de elecciones.- La campaña electoral	416
D.- Los resultados	417
E.- Comentarios	417
NOTAS Y ANEXOS	420

2.11. LA ELECCION GENERAL DE 1891

A.- La situación política en la Península	
1.- El Partido Conservador en el poder	434
2.- El Proyecto de Ley Electoral para Cuba y Puerto Rico	434
B.- La situación político-partidista en Puerto Rico:	
1.- La fundación del Partido Autonomista Puer- torriqueño:	
a). Los antecedentes	435
b). La Asamblea Autonomista de Ponce..	437
c). Los primeros tiempos del Partido Autonomista	438

2.- El Partido Incondicional	440
3.- Los sucesos de "El Año Terrible"	440
C.- La convocatoria de elecciones.- La campaña electoral	443
D.- Los resultados	444
E.- Comentarios	444
NOTAS Y ANEXOS	446
2.12. LA ELECCION GENERAL DE 1893	
A.- La situación política en la Península	
1.- Crisis en el Partido Conservador y nuevo Gobierno de Sagasta	472
2.- El Decreto Electoral de 27 de Diciembre de 1892	472
B.- La situación político-partidista en Puerto Rico:	
1.- El Partido Autonomista	473
2.- El Partido Incondicional	476
C.- La convocatoria de elecciones.- La campaña electoral	477
D.- Los resultados	478
E.- Comentarios	478
NOTAS Y ANEXOS	481
2.13. LA ELECCION GENERAL DE 1896	
A.- La situación política en la Península	
1.- División en el Gobierno de Sagasta y formación de uno nuevo por Cánovas	508
2.- Los proyectos autonomistas	509

B.- La situación político-partidista en Puerto Rico.	512
1.- Desarrollo del Partido Autonomista	512
2.- El Partido Incondicional	514
C.- La convocatoria de elecciones.- La campaña electoral	515
D.- Los resultados	517
E.- Comentarios	517
NOTAS Y ANEXOS	522

2.14. LA ELECCION GENERAL DE 1898

A.- La situación política en la Península	
1.- La política autonomista del Gobierno: nuevos decretos	537
2.- Muerte de Cánovas.- Gobierno de Sagasta ..	538
B.- La situación político-partidista de Puerto Rico	
1.- La fusión del Partido Autonomista con el Liberal-Fusionista de Sagasta	539
2.- La subida del Partido Liberal al poder.- Repercusión en Puerto Rico	541
3.- El Acta Autonómica de Puerto Rico	542
4.- La organización del primer Gobierno Auto- nómico	543
5.- La fusión de los dos partidos autonomis- tas	544
C.- La convocatoria de elecciones.- La campaña elec- toral	544
D.- Los resultados	546
E.- Comentarios	546

-XII-

NOTAS Y ANEXOS	548
CONCLUSIONES	560
A.- Consideraciones y conclusiones sobre los partidos políticos de Puerto Rico durante el siglo XIX:	
1.- El fundamento de la estructura bipartidista	562
2.- Estructura y organización	563
3.- Trayectoria de los partidos	564
B.- Las Elecciones: consideraciones generales	565
1.- La legalidad electoral	565
2.- La actitud del Gobierno ante los partidos y los procesos electorales	565
C.- Las Elecciones: Conclusiones generales	566
D.- Las Elecciones: Consideraciones y conclusiones relativas a las variables electorales	
1.- La Población	568
2.- Etapas en el desarrollo de los procesos electorales	568
3.- Las variables electorales: nivel distrital	
a). Niveles de participación	571
b). La concentración de los votos	573
CUADROS Y GRAFICAS	574
APENDICES:	
APENDICE I: LEYES, DECRETOS, INSTRUCCIONES Y REGLAMENTOS ELECTORALES RELATIVOS A ULTRAMAR	591

APENDICE II: RESULTADOS POR COLEGIOS Y SECCIONES DE LAS ELEC- CIONES PARA DIPUTADOS A CORTES POR LA PROVINCIA DE PUERTO RICO (1869 - 1898)	704
--	-----

- - - - -

2.10. 1ª ELECCION GENERAL DE 1836

A.- La situación política en la Península: la muerte de Alfonso XII y Gobierno de Sagasta.-

El 23 de noviembre de 1885 moría Alfonso XII, pasando a ocupar su viuda el cargo de Reina Regente. Al mismo tiempo, Cánovas presentaba su dimisión como Jefe de Gobierno, con el fin de dar paso nuevamente a Sagasta:

"El Ministro-Presidente que suscribe -decía Cánovas en el escrito de dimisión- abriga la profunda convicción de que a un nuevo reinado como el que comenzó ayer le conviene ministros nuevos también" (1).

El día 27 tomaba posesión el nuevo Gabinete presidido por Sagasta, en el que Gamazo pasaba a ocupar la cartera de Ultramar.

Las Cortes suspendían sus sesiones el día 5 de enero de 1886, después de haber recibido el juramento de la Reina Regente y por un Real Decreto de 8 de marzo quedaban disueltas, con vocándose elecciones de diputados para el día 4 de abril (2).

B.- La situación político-partidista en Puerto Rico

1.- El Partido Liberal Reformista: La crisis de la tendencia asimilista.-

En septiembre de 1884 renunciaba Celis Aguilera a la Presidencia del Partido Reformista, con lo cual se precipitó la desorganización del mismo.

Pero, mirando retrospectivamente este momento histórico del Partido y de la isla en general, creemos que no fue tanto una crisis del Partido cuanto de la doctrina asimilista que había constituido su principio fundamental desde el momento de su fundación, constituyendo la descentralización -gérmen del autonomismo- solamente un apéndice del mismo.

Sin embargo, esta crisis del asimilismo no debe interpretarse como un fracaso de esta política; por el contrario, nuestra opinión en este punto es, en primer lugar, que la misma se aplicó a Puerto Rico, desde 1868, si bien con un ritmo diferente: más rápido entre 1868 y 1874 y más lento a partir de la Restauración, de acuerdo con la política general de este último período.

Rechazamos, por tanto, las interpretaciones críticas que algunos autores han hecho acerca de la política asimilista del Gobierno de la Península en el sentido de que nunca se puso en práctica en Ultramar. Las leyes de la Península se aplicaron a Puerto Rico y una prueba la encontramos en los mismos autores que lo niegan, puesto que en sus obras se contienen relaciones de las leyes aplicadas, o las mismas se encuentran diseminadas a lo largo de la obra.

Ya hemos mencionado en el capítulo correspondiente a la Elección General de 1881 una serie de leyes aplicadas a la isla hasta 1860; entre este año y 1886 se aplicaron, entre otras, las siguientes: la Ley de Obras Públicas de 1881; la Ley de Matrimonio Civil y la Ley Notarial de 1883; la Ley Hipotecaria, la Ley de Registro Civil, la Ley de Reforma de los Juzgados municipales y de sus aranceles, la Ley de Caza y la de Expropiación forzosa de 1884, y, finalmente, en 1885 la Ley de Enjuiciamiento civil (3). Y el proceso continuó en los años siguientes.

Ciertamente, hay que advertir dos defectos comunes a la mayor parte de estas leyes: un retraso en la aplicación de ellas a Puerto Rico, en relación al momento de su vigencia en la Península y algunas modificaciones introducidas en ellas más en razón de cierta desconfianza hacia sus efectos en la isla que a causa de las peculiaridades del medio insular.

Junto a estas fallas había otra cuestión que el Gobierno no parecía dispuesto a resolver, no obstante haber constituido una constante del Partido Reformista: la desigual legalidad electoral vigente

en la Península y en Puerto Rico.

Aún con todas estas acotaciones a la política asimilista, repetimos nuestra afirmación de que dicha política se aplicó. Y en apoyo de ella podemos aducir la opinión de una persona tan poco sospechosa de "gubernamentalismo" como Labra; en la Introducción a su obra "La política electoral en las Antillas", afirma lo siguiente:

"Es decir, que lo fundamental en el orden político -si se exceptúa el derecho electoral- está conseguido. Hemos llegado a la afirmación, por medio de leyes, del principio de la identidad de los derechos políticos y civiles, que figuraba en primer término en el programa autonomista" (4).

Y por lo que se refiere al desarrollo de Puerto Rico bajo el régimen asimilista su opinión, no por severa, dejaba de reconocer los resultados positivos que había producido en la isla:

"Por cima de todo esto se hallan el descrédito universal de nuestra centralizada administración ultramarina; la protección decidida, franca e incomparable que las autoridades de todo género han dado y continúan dando a los elementos y partidos conservadores antillanos contra los liberales y autonomistas; la intervención de los Alcaldes de nombramiento del gobierno en la política interior de aquellos países; los escándalos de la ya célebre lista de candidatos y diputados cuneros de Puerto Rico las frases tan expresivas y síceras como las del Sr. León y Castillo, Ministro de Ultramar en 1882, que reconocía en pleno Parlamento que "en Puerto Rico se podía hacer todo impunemente", o como la del Sr. Tejada de Valdamera, también Ministro de Ultramar, que candorosamente declaró que la ley electoral ultramarina se había hecho para asegurar la superioridad a los elementos conservadores.

Pero quiero prescindir de todo esto para reconocer y proclamar que en estos últimos años se han realizado progresos considerables en la vida económica y política de nuestras Antillas. Lo he dicho varias veces, combatiendo a los intransigentes y a los pesimistas".

Crisis de madurez, pero al mismo tiempo, crisis de principios o, si se quiere, de límites. En efecto, Puerto Rico estaba llegando a una situación política semejante a la que prevalecía

en la Península; pero Puerto Rico no era una provincia exactamente igual al resto de las que componían la Península: estaba a 4,000 millas de ella y solo a unos cientos de la costa americana; tenía una economía atrasada, pero que pugnaba por encontrar las condiciones que posibilitaran el "despegue", relacionándose más estrecha y directamente con el mercado próximo antillano y americano. El desarrollo económico de Puerto Rico exigía ya la libertad de comercio y la supresión de los aranceles, dos obstáculos insuperables para lograrlo.

Ni los intereses económicos peninsulares ni, en cierto modo, la política asimilista podían aceptar estos dos puntos que constituyeran una consecuencia del hecho diferencial insular y tal consideración quedaba fuera, por opuesta, al principio de la asimilación. Por el contrario, exigía leyes especiales en el ámbito económico y en el complementario administrativo, que impulsaran el ulterior desarrollo global de la isla.

De manera que a finales de la década de los 80 la situación de Puerto Rico se presentaba de la siguiente forma: en lo político una igualdad casi total con la Península, si se exceptúa la cuestión electoral y la cuestión de la unificación de los mandos civil y militar. En lo económico y administrativo, sin embargo, una excesiva centralización que oprimía e imposibilitaba el desarrollo económico y social de Puerto Rico (6).

Como hemos dicho al principio de este apartado, hacia finales de 1884 el Partido Reformista sufre un rudo golpe con la renuncia de su Presidente; dicha renuncia y la subsiguiente desorganización del Partido la poníamos en relación con una crisis de la doctrina asimilista que había constituido la meta del Partido desde su fundación. Pues bien, a este hecho se añadieron algunos otros de diversa índole que se produjeron a continuación y que hicieron posible una transformación de la doctrina y del Partido hacia una línea de pensamiento de carácter autonomista.

Entre estos otros hechos podemos mencionar una labor de pro-

moción y de propaganda llevada a cabo por una serie de directores de periódicos, que habían abandonado las filas del Partido últimamente; entre ellos podemos mencionar a D. Luis Velázquez, director de "La Civilización"; D. Manuel Fernández Juncos, director de "El Buscapié"; D. Rodolfo Dávila, director de "El Deber"; D. Salvador Brau, director de "El Clamor del País". Dirigieron a veces y apoyaron en toda ocasión esta campaña dos peninsulares que fueron D. Rafael María de Labra y D. Julio Vizcarrondo.

Otro hecho más concreto y más próximo fue una crisis de carácter económico que se produjo en la isla en 1886 y que produjo hondo malestar en una gran parte de la población de la isla, que la achacó, sin mucha razón, a la excesiva centralización económica que ejercía la Península sobre la isla y a la política monopolizadora de los comerciantes peninsulares que vivían en Puerto Rico. En este sentido, podríamos mencionar la celebración de una Asamblea de la Unión Mercantil e Industrial y el Círculo Mercantil que tuvo lugar en el pueblo de Aibonito en el mes de agosto de 1886 y cuyas conclusiones fueron en parte incorporadas al programa del Partido Autonomista (7).

Desde luego que en absoluto pretendemos reducir la aparición en Puerto Rico del Partido Autonomista a estas solas causas ni que esa aparición fuera repentina; nada más lejos de la realidad. La idea de la autonomía, lo mismo que la de la independencia tenían en Puerto Rico una larga tradición, que en cuanto a la autonomía se remontaba a 1868, momento en que había sido expuesta por D. Román Baldorioty de Castro (8). En las obras y en la trayectoria política de este personaje encontramos perfilada la ejecutoria del reformismo insular y la transformación, dentro de un esquema evolutivo lógico y necesario, de su contenido doctrinal del asimilismo al autonomismo.

En efecto, colocándose en una corriente de posibilismo histórico doctrinal, Baldorioty, al tiempo que afirmaba su postura favorable a la autonomía, se mostraba partidario por el momento

de una política que colocase a Puerto Rico a la altura política y social de las demás provincias de la Península:

"En la discusión de los intereses públicos, como en el litigio de los intereses privados, las transacciones son, con frecuencia, necesarias.

Buscamos soluciones prácticas, de pronta realización.

Sin embargo, no transigiremos jamás con el sistema colonial, no aceptaremos nunca un sistema que ponga a la Provincia en condiciones humillantes de inferioridad dentro del magnífico concierto de las demás provincias de la Nación, que son iguales" (9).

No puede parecernos extraño que a los 19 años de escritas estas palabras, una vez conseguida prácticamente la igualdad de condiciones, fuera el mismo Baldorioty, como veremos en el próximo capítulo, el que se encargara de realizar la segunda fase de la política reformista.

2.- El Partido Español sin condicones.-

Vientos de Fronda soplaban sobre el Partido Español, o, más bien sobre la directiva del mismo. Cada día se hacían más duras y explícitas las críticas a la rigidez de su estructura y a la omnipotencia de su Presidente, críticas que producían automáticas renunciaciones del mismo, posterior voto de confianza y subsiguiente reincorporación a su puesto y a la línea de inflexibilidad.

Exactamente en la forma descrita se desarrollaron los acontecimientos del Partido Español a principios de 1886. En efecto, el Comité Centr^al del Partido convocaba a finales de 1885 a una Junta Magna, encaminada a redactar una nueva constitución para el mismo (10). Pero el Presidente, D. Pablo Ubarri, tenía otro propósito y era el de combatir al "Boletín Mercantil" y mermar la influencia de su director, el escritor y periodista peninsular D. Ignacio Díaz Caneja (11).

Abierta la Asamblea, D. Pablo Ubarri presentó su dimisión como Presidente por motivos de salud; pero, ratificada por todos los presentes su confianza en él, accedió a continuar desempeñando su cargo. Acto seguido se propusieron las nuevas bases

del Partido que, si bien no se diferenciaban en el aspecto doctrinal de las aprobadas en 1883, conferían facultades prácticamente ilimitadas al Presidente tanto para la suspensión, remoción y separación de miembros del Partido, como para la designación de candidatos para los ayuntamientos, Diputación provincial y a las Cortes (5). Finalmente, se nombró un nuevo Comité Central del Partido, con lo que concluyeron los trabajos de la Asamblea (6).

Durante algun tiempo el "Boletín" intentó desautorizar los acuerdos de la Asamblea, acusando al Presidente del Partido de llevar a cabo una política exclusivamente personal y de intentar la desaparición de este periódico; pero merced a los buenos oficios de amigos comunes, se logró restablecer la normalidad en las relaciones entre todos.

C.- La convocatoria de elecciones en Puerto Rico.- Campaña electoral.-

Con fecha 4 de marzo de 1886 publicaba la Gaceta de Puerto Rico la convocatoria para las elecciones de diputados a Cortes, que según el mismo Decreto deberían celebrarse el día 4 de abril (7).

Publicada la convocatoria, fueron los liberales los primeros en ponerse en marcha, organizando asambleas y reuniones, con el fin de proponer candidatos y hacer propaganda de los mismos. En Ponce, Vega baja, San Germán y Sabana grande fueron proclamados candidatos respectivamente D. Julio Vizcarrondo, D. José de Celis Aguilera, D. José Julián Acosta y D. Rafael María de Labra (8). También en Mayagüez se celebró una reunión con el mismo fin, pero los asistentes no lograron ponerse de acuerdo en cuanto a si convenía o no proponer candidato y al final no se realizó la nominación (9).

Si bien los Incondicionales desplegaron una gran actividad propagandística, no alcanzó en esta ocasión el nivel y volumen de pasadas elecciones, tal vez porque estaban seguros de su

triunfo, o tal vez porque aun se resentían de los efectos de la pasada crisis.

D.- Los resultados.-

Verificadas las elecciones, resultaron elegidos 11 candidatos incondicionales y 4 liberales, correspondiendo estos últimos a los Distritos de Ponce, Vega baja, Sabana grande y San Germán, es decir, a los distritos en los que el Partido Liberal había postulado candidatos (10).

E.- Comentarios.-

De estas elecciones tenemos un estudio auténticamente moderno llevado a cabo por Sánchez Ortiz y Berástegui, que realizaron un análisis cuantitativo, estadístico-electoral de las mismas. También incluyen una breve descripción del desarrollo del proceso electoral y una biografía de los diputados elegidos. (11).

En los Cuadros y Mapas electorales presentamos los resultados de Sánchez y Berástegui al lado de los nuestros, con el fin de que se puedan apreciar algunas diferencias entre los mismos. Aparte de una equivocación en la ubicación del Distrito de San Germán, creemos que los autores dan unas cifras excesivamente elevadas del número de electores de cada Distrito. Finalmente, aunque en el Distrito de Vega baja dan como candidato elegido a D. Rafael Terol y Ortega, posteriormente la Comisión de Actas del Congreso propuso y las Cortes aprobaron la anulación del Acta, a causa de las irregularidades cometidas durante el proceso electoral en ese Distrito, y la designación de D. José de Celis Aguilera como diputado por el mismo.

También se produjeron algunas irregularidades en la elección del Distrito de Arecibo, donde dos individuos desconocidos intentaron cambiar la urna por otra que trían; no pudiendo sustraer la auténtica, la Mesa se encontró con dos urnas, sin poder determinar cuál de ellas era la verdadera y cuál la falsa. Abier-

tas las dos y hecho el recuento respectivo de votos, resultó que en una había 74 papeletas, coincidiendo con el número de electores del Distrito, 52 con el nombre de D. Rafael Bosch y Carbonell y 22 con el de D. Manuel Alcalá del Olmo, mientras que la otra contenía 77 papeletas, todas ellas con el nombre de D. Manuel Alcalá del Olmo (12). A pesar de ser bastante obvia la decisión a tomar, la Mesa decidió poner en conocimiento del Congreso lo ocurrido, sin proclamar candidato. Posteriormente, las Cortes proclamaron diputado a D. Rafael Bosch y Carbonell (13).

La obtención del triunfo en cuatro Distritos llenó de entusiasmo a los liberales, al tiempo que, remedando al autor de la "Fisonomía natural y política...", el Director de "El Buscapié" publicaba una biografía humorística de los diputados incondicionales y cuneros elegidos (14).

Un análisis de los datos cuantitativos -incompletos- que hemos logrado obtener para esta Elección nos permiten comprobar una nueva disminución, en términos absolutos, del número de votantes: 1823 en ésta, frente a 1902 en la anterior; una diferencia de 79 electores, que representa un 4.15 % de disminución (21

En cuanto al número de electores, los datos que poseemos nos permiten detectar, aunque no asegurar, una disminución más acentuada que en la cifra de votantes: un 10.81 % aproximadamente sobre la cifra de 1884. De acuerdo con estos datos y cálculos hemos estimado que la media de abstenciones fue en esta ocasión algo menos elevada que en la Elección anterior: 26.82 % frente a 31.92 %, lo que representa una disminución del 5.10 % en el total de abstenciones.

El Mapa de abstenciones lo hemos confeccionado en base exclusivamente a los datos de Sánchez Ortiz y Berástegui, con el fin de ofrecer un cuadro completo de las mismas. Sin embargo, hemos de insistir una vez más en que las cifras de electores que han utilizado son un tanto exageradas, por lo que los índices de

abstencionismo son muy elevados, los más elevados de todas las elecciones que hemos analizado (22).

Ya hemos dado nuestra estimación al respecto; pero, aparte de los datos numéricos que avalan la misma, hay un dato electoral que, en nuestra opinión, refuerza una estimación de menor abstencionismo y es el hecho de que, por lo menos en cuatro distritos, acudieron masivamente los electores reformistas para apoyar y votar por sus candidatos. Lógicamente, esta mayor participación tuvo que repercutir en una disminución del abstencionismo y no al contrario.

Finalmente, tenemos que consignar que se registraron irregularidades y protestas únicamente en tres distritos, siendo de destacar la irregularidad ocurrida en el distrito de Arecibo. El Acta electoral de Vega baja fue declarada "grave" por la Comisión, y se registraron varias protestas en la elección de San Germán (23).

NOTAS

- 1.- FERNANDEZ ALMAGRO, Melchor. Op.Cit., Tomo II, pág. 12.
- 2.- Ibidem, pág. 21.
- 3.- PAGAN, Bolívar. Op.Cit., pág. 315. CRUZ MONCLOVA, Lidio. Op.Cit., Tomo III, págs. 660 a 663. LABRA, Rafael María de: "La Reforma electoral...", págs. XCI y XCII.
- 4.- LABRA, Rafael María de: "La Reforma electoral...", pág. XCII.
- 5.- LABRA, Rafael María de: "La República...", pág. 178.
- 6.- Comparando Labra la situación de la isla en 1880 y en 1890, hacía de la diferencia la siguiente descripción:

"No hay que olvidar el estado político y social antillano en 1880. La esclavitud de los negros sometidos al reglamento de 1849; la real orden de 1825 sobre facultades de los gobernadores generales como jefes de plazas sitiadas; las leyes de la Recopilación de Indias sobre facultades excepcionales de los vireyes y gobernadores para la defensa y tranquilidad de la tierra; la previa censura; la necesidad de licencia del gobierno para procesar a los empleados públicos; el derecho de reunión limitado a la de veinte personas; el de asociación para otros fines que los civiles y mercantiles, absolutamente negados; los permisos de la policía en el lugar de los avisos dados al gobierno para la celebración de actos públicos, de carácter político; el capítulo segundo del Código penal de 1879, que se refiere a los delitos cometidos por los funcionarios públicos contra el ejercicio de los derechos constitucionales, reducido a pura fórmula por no aplicarse a los antillanos la Constitución en el punto relativo a los derechos individuales; imperante el anacrónico sistema del juicio de residencia de los gobernadores en condiciones casi idénticas a las de la época de los vireyes, sin la garantía de los Reales Acuerdos y la apelación al Monarca; el régimen de los pasaportes; el procedimiento escrito y el juicio secreto en orden penal; el nom-

bramamiento arbitrario de jueces y magistrados, y la amobilidad permanente de éstos; el monopolio de la enseñanza por el Estado, por la aplicación imperfecta y con carácter represivo de la Ley de Instrucción pública de 1857, mal reproducida en los reglamentos de 1863 y 1871; el profesorado universitario de real orden y con el mero carácter de un servicio administrativo; el gobierno político militar en todas las provincias; la centralización administrativa llevada a la virtual negación de la provincia y del Municipio por los decretos de 1878 (inmenso progreso respecto del régimen de 1860), y un presupuesto de gastos que en Cuba llegó a cerca de cuarenta y cinco millones de pesos, con cifras proporcionadas a la población de la isla en términos absolutamente inverosímiles en el más modesto de los pueblos civilizados.

Así se nos presentaban Cuba y Puerto Rico hace diez años. A lo que hay que añadir el Arancel casi prohibitivo de las Aduanas de la primera, con los grandes derechos de exportación, y la negación completa de la legalidad de la propaganda autonomista, denunciada y perseguida casi como un delito común, ante los tribunales de justicia.

Casi todo esto ha variado radicalmente en el transcurso de este decenio. Cuba y Puerto Rico disfrutan de las libertades de imprenta, reunión y asociación como la Península, como Bélgica, como Inglaterra, como los Estados Unidos.

La seguridad individual esta garantizada por la promulgación de la Constitución del 76 que hace eficaces todos los artículos del Código penal de 1879 y por la derogación de la real orden de 1825 y las cédulas de la Recopilación de Indias. Rige allí el juicio oral y público, y los puestos de la judicatura se proveen por oposición en Madrid, la Habana y San Juan. Se han creado los gobiernos civiles de Cuba. Se ha proclamado la libertad de enseñanza y organizado el profesorado como en la Metrópoli. El presupuesto de Cuba ha bajado a veinticinco millones de pesos, y se ha promulgado la ley de 1882 de relaciones mercantiles, que si bien yo creo equivocada por la solución, esta inspirada en un sentido de equidad y armonía". Cf.: "La Reforma electoral.." págs. LXXXIX a XCII.

- 7.- En su obra "De la crisis económica del 86 al Año Terrible del 87", (San Juan, Editorial Puerto, 1972), Félix Mejía pone en relación causal la crisis económica que hemos mencionado en el texto con la fundación

del Partido Autonomista un año después. Se refiere también a la Asamblea de Aibonito y en apoyo de su tesis hace un análisis de los asistentes a ella y los que tomaron parte en la posterior Asamblea de Ponce de la que surgió el Partido Autonomista y encuentra que ocho de los asistentes tomaron parte en ambos actos.

Interesante como estudio revelador de la situación económica y social de Puerto Rico en este momento inmediatamente anterior a la fundación del Partido Autonomista, no aceptamos, sin embargo, la opinión del autor por considerarla francamente determinista; así, en la página 53 dice textualmente:

"Como consecuencia del estado y funcionamiento de la economía del país, que hace crisis en el año 1886, se organizó en Ponce el 10 de marzo de 1887 el Partido Autonomista Puertorriqueño".

Consideramos que esta afirmación del autor es por lo menos tan exagerada como la que él mismo critica de Antonio Salvador Pedreira, el cual sostiene que la fundación del Partido se debió a móviles puramente políticos.

8.- Vid.: BALDORIOTY DE CASTRO, Román: "Asuntos de Puerto Rico",
(

9.- Ibidem.

10.- PAGAN, Bolívar. Op.Cit., págs. 312 y 313.

11.- El día 29 de septiembre de 1881 era asesinado en San Juan el Director del "Boletín Mercantil", D. José Pérez Moris. Los Incondicionales intentaron desde el primer momento dar al crimen un carácter político, lanzando repetidas y mal veladas acusaciones de complicidad moral sobre los reformistas. Ante estos ataques, el Partido Liberal tomó finalmente la decisión de sustituir a D. Manuel Fernández Juncos, Director de "El Agente", órgano oficial del Partido, por D. Manuel Alonso Pacheco. Por su parte, los Incondicionales pusieron al frente del "Boletín" primero a D. Antonio Pineda y posteriormente a D. Ignacio Díaz Caneja, que desempeñó este cargo durante muchos años Cf.: PEDREIRA, Antonio Salvador. Op.Cit., págs. 207 a 209. A pesar de los ataques de D. Pablo Ubarri contra el "Boletín", éste continuó disfrutando de la preeminencia que le habían concedido diversas Asambleas generales del Partido, declarándolo, además de órgano oficial del mismo, "órgano superior al jefe

y al Comité Central, acordándose que solo el Partido en asamblea magna podría desautorizar al periódico", ibidem, pág. 209. Dado el autocratismo del Presidente del Partido Español no es de extrañar su campaña contra este periódico.

12.- Las Bases del nuevo Programa del Partido Español eran las siguientes:

Base I.: El Partido Incondicionalmente Español de Puerto Rico tiene por fin supremo de su existencia velar por la integridad del territorio nacional, y contribuir al adelantamiento moral y material de la provincia.

Base II.: Como partido exclusivamente nacional reconoce, acata y sostiene a todos los Gobiernos legalmente constituidos, sin renunciar al derecho de queja y de representación de oposición franca y decidida contra las disposiciones que puedan comprometer el fin supremo que persigue.

Base III.: No defiende como suyos los ideales políticos de ninguno de los partidos peninsulares que se disputan la gobernación del Estado al amparo de la Constitución y de las leyes; ni combate los de escuela política alguna, mientras estos ideales sean compatibles con lo preceptuado en la Base I.

Base IV.: Pertenecen al Partido, por derecho propio, todos los españoles, cualesquiera que sea el lugar de su nacimiento y el color de su piel, que prometan y presten acatamiento y obediencia a la Constitución y a las Autoridades.

Base V.: La suprema autoridad del Partido reside en todos sus afiliados reunidos en Junta Magna; y por delegación de ésta en el Jefe y el Comité Central.

Base VI.: Todos los individuos del Partido Incondicionalmente Español, como hermanos y correligionarios, se deben respeto y auxilio mutuos; deben acatamiento y obediencia a la Constitución y Autoridades que libre y voluntariamente se han dado; y deben a la Patria honradez sin mácula en su vida privada y pública; amor sincero a la provincia en que viven; respeto y adhesión a las Autoridades que la gobiernan, y generoso entusiasmo por la santa causa que defienden, hasta dar por ella sus vidas y haciendas". Cf.: CRUZ MONCLOVA, Lidio. Op.Cit., Tomo III, pág. 7.

13.- El nuevo Comité Central quedó integrado por las siguientes

personas: D. José Peña Chávarri, Presidente; D. José María Arzuaga Izaguirre, D. Ricardo Mendizábal Génova, D. Juan Rubert, D. Isidoro Dávila y D. Manuel Cañols Bobes, vocales; D. Joaquín Peña Cáriga, D. Ramón Balasquide Méndez, D. José González Quijano, D. Fermín Pérez Villamil, D. Lorenzo Bolívar y D. Pedro Santistóban Chávarri, suplentes". Cf.: *Ibidem*, pág. 8.

- 14.- Número 30.
- 15.- "El Buscapié", 1886, número 33.
- 16.- Pueden verse los resultados en los Cuadros y Mapas electorales adjuntos.
- 17.- "Las primeras Cámaras de la Regencia", (Madrid, Imprenta de Enrique Rubiños, 1886), págs. 536 a 546.
- 18.- Diario de Sesiones de las Cortes, 1886, págs. 2161 y 2270.
- 19.- Archivo de las Cortes. Sección de Expedientes, Legajo 103, número 6. Después de haber dado la Comisión de Actas del Congreso su dictámen, se presentó una proposición incidental firmada por los diputados conservadores de la isla, Sres. Sanz y Peray, Fernández Capetillo, Torrependo y Alcalá del Olmo, en la que impugnaban la decisión de la Comisión de Actas, pero dicha impugnación no fue tenida en cuenta. Cf.: Diario de Sesiones de las Cortes, 1886, pág. 2267.
- 20.- "El Sr. Alcalá del Olmo -decía el artículo- no da peras, como dice el refrán, pero sin duda las recoge, puesto que acaba de calzarse, para envidia de los candidatos cuneros, la Fiscalía del Tribunal de Cuentas. Bien le han salido las suyas al Sr. Alcalá del Olmo. Sin ser orador ni escritor se ha elevado desde humilde condición y merced al arte de hacer cortesías, hasta donde llegar le plugo...
El Sr. Fernández Capetillo, como los señores Guillón y Sanz, aparece sin duda como sobrino. Los hijos de los monarcas nacen con una corona; los sobrinos de Ubarri con un acta de diputado metida en el ombligo. Los condiscípulos del Sr. Fernández Capetillo recordarán que cuando estudiaba latín en el Seminario de los jesuitas era siempre el eterno suspenso en los exámenes; ahora es el eterno sobresaliente en las urnas... Y ¿para qué deseará ser diputado el Sr. Fernández Capetillo? Sentarse todos los días en los escaños del Congreso y decir algunas veces: Capetillo, sí, Capetillo, no, es demasiado monótono. Por mucho que se repitan esos nombramientos no se llega

nunca a la inmortalidad, al alto asiento. En Francia guillotinaron a un Capeto, y cuentan que tenía sangre real. Escarmienten por aquel ejemplo los diminutivos de Capeto con sangre de Ubarri.

Lo único que sé del Sr. Gullón (hijo) es los siguiente: es hijo del Sr. Gullón (padre). En calidad de hijo será sin duda acreedor a que su papá le recompense su buena conducta dándole, a manera de estampa pintoresca y bonita, un acta de diputado. Me parece de perlas. En este país la mejor carrera es la del hijo...

Usara Martín, que es sobrino de D. Clotilde Santiago, es el diputado "sulfuroso", perteneciente a la dinastía hereditaria de los baños de Coamo.

El Sr. Lastres figuró como diputado autonomista por la circunscripción de La Habana, de cuya localidad es hijo. Pero los autonomistas no tuvieron fuerza para sacarle triunfante en las urnas. Al mal tiempo buena cara, dice el proverbio, y Lastres adoptó la cara de conservador que era la buena.

Declaro, bajo mi palabra de hombre que no ha escrito jamás un mal drama, que nunca oí mentar en ninguna parte al Conde de Torrependo, si bien tengo mis sospechas de que debe ser hijo de algún general...

Al Sr. Galdós todos le conocemos. Es el primer novelista de España... Cuando el amigo Cortón censuraba en "El Buscapié" la debilidad del gran novelista al desear ser diputado, ¿qué ajeno estaría que hacía en aquel mismo instante propaganda inconsciente de su candidatura!

Si yo tuviera influencia con Ubarri le diría: compre usted los libros de Galdós y... haga que se los lean, pero no le apoye para diputado. Pero ya verán ustedes cómo Ubarri apoya y no oye leer aquellos libros ni los de nadie". Cf.: "El Buscapié", 1886, números 15 y 16.

21.- Respecto a las cifras sobre el número de votantes hay una completa igualdad entre las que hemos obtenido sobre las Actas y las que ofrecen Sánchez Ortiz y Berastegui.

22.- De las seis cantidades totales de electores por distritos que hemos conseguido de las Actas, cinco de ellas son sensiblemente inferiores a las de los autores citados, según se puede comprobar en el cuadro siguiente:

DISTRITO	S. ORTIZ Y B.	NUESTRA
Arecibo	193	139
Quebradillas	151	147
Mayagüez	418	253
Coamo	161	147
Rio Piedras	84	106
Total	1,007	792

diferencia que representa un 20.5 % más en las cifras de S. Ortiz y Berastegui. Lógicamente, la media porcentual de abstencionismo que obtuvieron se coloca más o menos en un 20 % más alta de resulta de nuestras estimaciones: 45.67 % frente a 26.82 %.

23.- Archivo de las Cortes. Sección de Expedientes, Legajo 103, número 6.

RESULTADOS

(1886)

<u>DISTRITO</u>	<u>POBLACION</u>	<u>ELECTORES</u>	<u>RELACION Hab/Elec</u>	<u>VOTANTES</u>	<u>ABST.</u>	<u>CANDIDATOS ELEGIDOS</u>	<u>VOTOS</u>
CAPITAL				151		ALCALA DEL OLMO, Manuel	102
VEGA BAJA	106			70	33.93	CELIS AGUILERA, José de	70
ARECIBO *	139			108	22.30	BOSCH Y CARBONELL, Rafael	
QUEBRADILLAS	147			100	31.97	FERNANDEZ CAPEYILLO, Manuel	96
AGUADILLA	153					TORRE Y VEGA, Juan B. de la	153
LAYAGUEZ	253			197	22.13	LASTRES JUIZ, Francisco	99
SAN GERMAN				117		ACOSTA Y CALVO, José J.	73
SABANA GRANDE	181			94	43.07	LABRA, Rafael María de	89
PONCE				167		VIZCARRONDO Y CORONADO, Julio	94
GUAYAMA **				112		PEREZ GALDOS, Benito	112
HUACAO				117		SOLER Y BOU, Antonio	115
RIO PIEDRAS	106			99	16.04	GULLON Y DABAN, Eduardo	89
CAGUAS				138		SANZ Y PERAY, José	111
COAMO	147			117	20.41	USERA Y MARTIN, Julio	112
UTUADO				93		SUAREZ SANCHEZ, Diego	85
	781,609	2,492*	313.54	1,823	26.82		

FUENTES: Archivo de las Cortes. Sección de Expedientes, Legajo 103, número 6.

* No se hizo proclamación de Diputado

** No hubo elección en Santa Isabel

RESULTADOS

(1886)

<u>DISTRITO</u>	<u>POBLACION</u>	<u>ELECTORES</u>	<u>RELACION Hab/Elec</u>	<u>VOTANTES</u>	<u>ABST.</u>	<u>CANDIDATOS ELEGIDOS</u>	<u>VOTOS</u>
CAPITAL	57,594	550	104.72	151	72.54	ALCALA DEL OLMO, Manuel	102
VEGA BAJA	42,260	106	393.68	70	33.93	TEROL Y ORTEGA, Rafael	36
ARCEIBO	54,112	193	280.37	77	60.10	-----	---
QUEBRADILLAS	51,245	151	339.37	100	33.77	FERNANDEZ CAPELILLO, Manuel	96
AGUADILLA	45,184	212	213.13	153	27.83	TORREPANDO (Torre y Vega)	153
MAYAGUEZ	46,515	418	111.28	197	52.87	LASTRES	9
SAN GERMAN	46,574	231	201.62	117	49.35	ACOSTA	73
SABANA GRANDE	52,159	236	221.01	94	60.16	LABRA	89
PONCE	57,635	388	148.54	167	56.95	VIZCARRONDO	94
GUAYAMA	59,327	263	227.48	112	57.41	PEREZ GALDOS	112
REINAGA	66,654	292	228.61	117	59.93	SOLER	115
RIO PIEDRAS	28,306	94	342.93	79	5.95	GULLON	79
CAGUAS	49,930	220	226.10	138	37.27	SANZ	111
COAMO	61,036	161	379.11	117	27.32	USERA	112
UTUADO	62,078	185	335.56	93	49.72		
Total	781,609	3,690	211.82	1,782	45.67		

FUENTES: SANCHEZ ORTIZ, Modesto y BERASTEGUI, Fermín: "Las primeras Cámaras de la Regencia"

CUADRO II
(1886)

RESULTADOS POR PARTIDOS

CONSERVADORES:

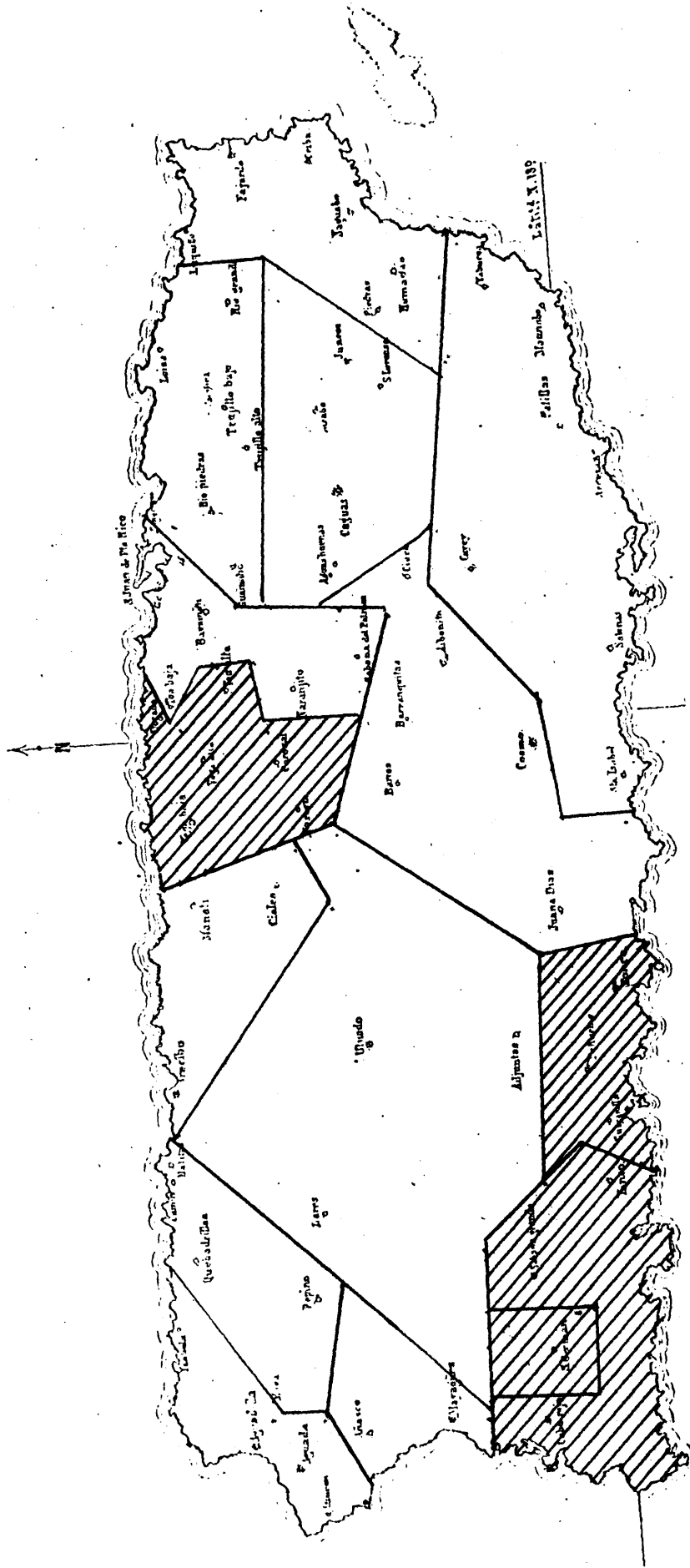
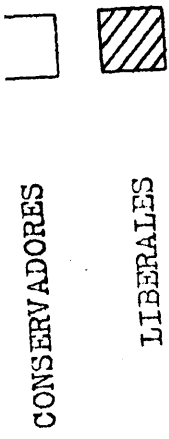
LASTRES Y JUÍZ, Francisco.....	Mayagüez
TORRE Y VEGA, Juan B. de la.....	Aguadilla
PERNADEZ CAPETILLO, Manuel.....	Quebradillas
GULLON Y DABAN, Eduardo.....	Rio Piedras
SOLER Y BOU, Antonio.....	Humacao
USERA MARTIN, Julio.....	Coamo
SUAREZ SANCHEZ, Diego.....	Utuado
BOSCH Y CARBONELL, Rafael.....	Arecibo
ALCALA DEL OLMO, Manuel.....	San Juan
SANZ Y PERAY, José.....	Caguas
PEREZ GALDOS, Benito.....	Guayama

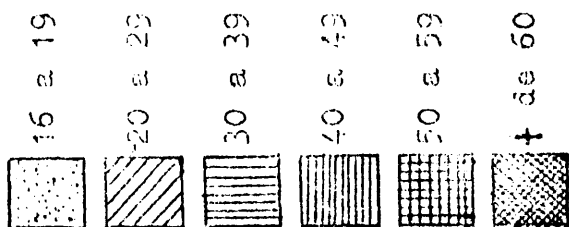
LIBERALES:

VIZCARRONDO CORONADO, Julio.....	Ponce
LABRA, Rafael María de.....	Sabana grande
ACOSTA Y CALVO, José Julián.....	San Germán
CELIS AGUILERA, José de.....	Vega baja

MAPA ELECTORAL

(1886)

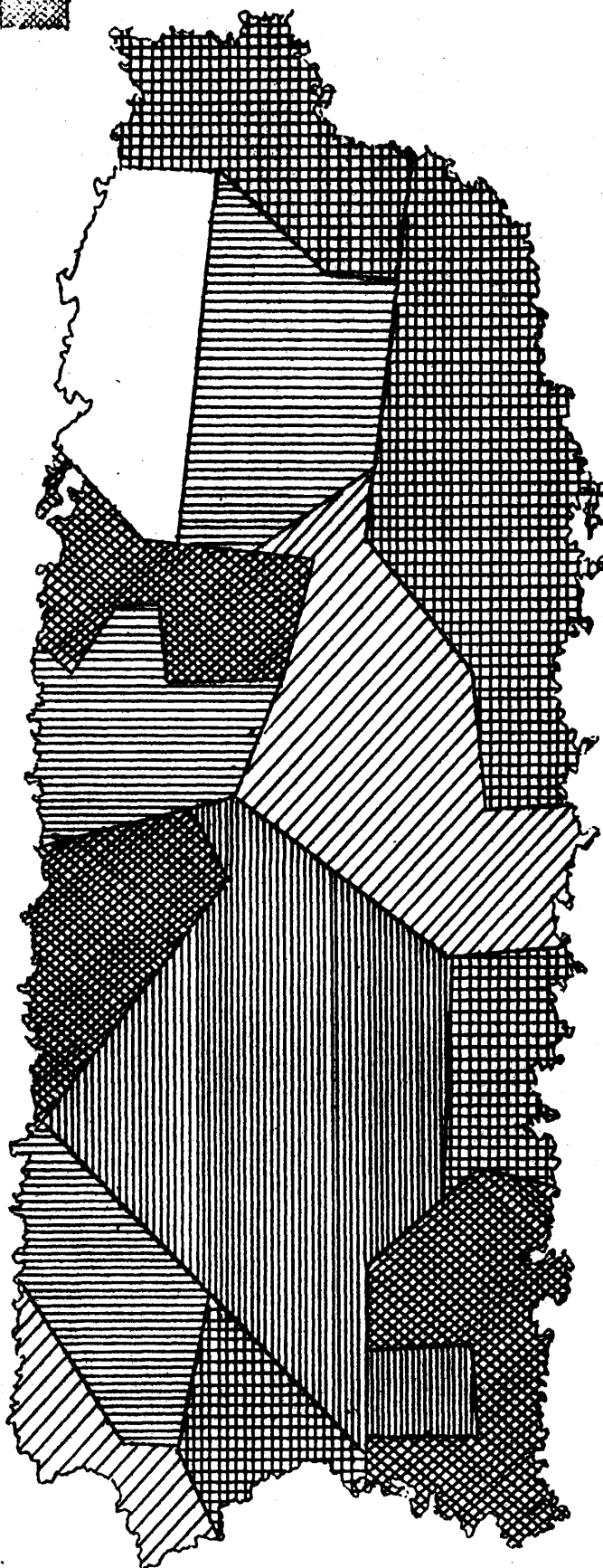




A B S T E N C I O N E S

(1886)*

Media: 45.67 %



* De acuerdo con los datos de Sánchez Ortiz y Berástegui

2.11. LA ELECCION GENERAL DE 1891

A.- La situación política en la Península.-

1.- El Partido Conservador en el poder.-

El día 4 de julio de 1890 dimitía el Gobierno de Sagasta, al retirarle la Reina Regente su confianza con el fin de evitar un escándalo en el que se iba a ver envuelto el jefe de los liberales (1). Cánovas, que en la ronda del poder fue llamado a detentarlo de nuevo, suspendía las sesiones de las Cortes a los dos días de haber prestado juramento el nuevo Gobierno, y por Real Decreto de 29 de diciembre eran disueltas, convocándose elecciones de diputados para el día 1 de febrero de 1891 (2).

Se le reprocha comúnmente a Cánovas no haber esperado a que las Cortes terminaran su vida normal, para lo cual les faltaban tan solo cuatro meses. Parece que esta impaciencia se debió al deseo de que se aprobaran con urgencia leyes de tipo proteccionista (3). El día 25 de julio de 1890 quedaba instalado el nuevo Gobierno conservador, en el que D. Antonio María Fabié pasaba a ocupar la cartera de Ultramar.

2.- El Proyecto de Ley Electoral para Cuba y Puerto Rico.-

En el mes de febrero de 1889 el entonces Ministro de Ultramar, Sr. Becerra, presentaba a las Cortes un proyecto de ley sobre elecciones de diputados a Cortes en las provincias de Cuba y Puerto Rico (4). La nota más destacada del mismo consistía en una rebaja de la cuota contributiva que daba derecho al voto, a 8 pesos en concepto de contribución territorial o de 12 por impuesto urbano, industrial o de comercio (5).

En torno a este proyecto y al dictamen restrictivo que la Comisión de Leyes hizo del mismo se desarrolla en el Congreso un largo y apasionado debate, que se extiende hasta el mes de mayo en que se da la aprobación al mismo. A lo largo de la discusión

A.- La situación política en la Península.-

1.- El Partido Conservador en el poder.-

El día 4 de julio de 1890 dimitía el Gobierno de Sagasta, al retirarle la Reina Regente su confianza con el fin de evitar un escándalo en el que se iba a ver envuelto el jefe de los liberales (1). Cánovas, que en la ronda del poder fue llamado a tentarlo de nuevo, suspendía las sesiones de las Cortes a los días de haber prestado juramento el nuevo Gobierno, y por Real Decreto de 29 de diciembre eran disueltas, convocándose elecciones de diputados para el día 1 de febrero de 1891 (2).

Se le reprocha comúnmente a Cánovas no haber esperado a las Cortes terminaran su vida normal, para lo cual les faltaban tan solo cuatro meses. Parece que esta impaciencia se debió al deseo de que se aprobaran con urgencia leyes de tipo proteccionista (3). El día 25 de julio de 1890 quedaba instalado el nuevo Gobierno conservador, en el que D. Antonio María Fabié pasaba a ocupar la cartera de Ultramar.

2.- El Proyecto de Ley Electoral para Cuba y Puerto Rico.-

En el mes de febrero de 1889 el entonces Ministro de Ultramar, Sr. Becerra, presentaba a las Cortes un proyecto de ley sobre elecciones de diputados a Cortes en las provincias de Cuba y Puerto Rico (4). La nota más destacada del mismo consistía en rebaja de la cuota contributiva que daba derecho al voto, a 8 pesos en concepto de contribución territorial o de 12 por impuesto urbano, industrial o de comercio (5).

En torno a este proyecto y al dictamen restrictivo que la Comisión de Leyes hizo del mismo se desarrolla en el Congreso un largo y apasionado debate, que se extiende hasta el mes de mayo en que se da la aprobación al mismo. A lo largo de la discusión

y al hilo de los distintos tópicos del proyecto, se pasa revista a todos los aspectos de la situación política antillana, dándose como era lógico, tres versiones diferentes: la del Gobierno, por boca del Ministro de Ultramar; la de los incondicionales y la de los autonomistas, tanto de Cuba como de Puerto Rico. (6).

Los extremos más discutidos del proyecto fueron el monto de la cuota, que la Comisión había elevado a 25 pesos, y la concesión de voto a los voluntarios, milicias y cuerpo de bomberos. Después de innumerables propuestas y contrapropuestas, fue aceptada una cuota única de 10 pesos por contribución territorial o por impuesto urbano, industrial o de comercio; en cuanto a la concesión del voto a los voluntarios, milicias y bomberos, a lo cual se oponían los autonomistas, fue aprobada finalmente.

En el mes de mayo se aprobaba por el Congreso el Proyecto de Ley Electoral y pasaba a la consideración del Senado, el cual, sin embargo, devolvió el Proyecto sin aprobarlo.

B.- La situación político-partidista en Puerto Rico

1.- La fundación del Partido Autonomista Puertorriqueño

a) Los antecedentes

Producida alrededor de 1885 la crisis de la tendencia asimilista como ya hemos visto, desde ese momento comienzan a hacerse más explícitas las opiniones y juicios favorables a la solución autonomista, opiniones y posturas que, como en el caso concreto de Baldorioty de Castro, habían sido formuladas hacía más de quince años, conservándose latentes a lo largo de todo ese tiempo, en espera de circunstancias más favorables. Ese momento llegó en 1886, y en apretado resumen, vamos a mencionar las etapas y acontecimientos más sobresalientes en el proceso de fundación del Partido Autonomista.

El primer paso para cambiar la orientación del Partido Liberal Reformista creemos que se dió a principios de 1886 cuando, a instancias de D. Román Baldorioty de Castro, se reunieron en Ponce una serie de personalidades del Partido, con el fin de tra-

tar una vez más acerca de la reorganización del mismo. El ambiente de las reuniones fue cordial y, según las noticias que dieron los periódicos, reinó en ellas un espíritu de colaboración y un deseo de lograr acuerdos positivos (7).

La finalidad y contenido de estas reuniones se nos aclaran un poco sabiendo que poco más adelante volvían a reunirse los liberales del distrito de Ponce, con motivo de la convocatoria de elecciones para diputados a Cortes de 1886. Después de acordar la candidatura de D. Julio Vizcarrondo quien, junto con D. Rafael María de Labra, sostenía en la Península la doctrina autonomista, se comisionó al propio Comité local para que redactase unas bases encaminadas a la reorganización del Partido Liberal Reformista. Estas bases serían las que más adelante servirían de borrador de trabajo para redactar las del nuevo partido.

El segundo paso lo dió también, como los anteriores, el Comité de Ponce, al promover a finales de 1886 la idea de una asamblea general del Partido. En efecto, el 14 de noviembre se reunía de nuevo el Comité local y suscribía el documento conocido como "Plan de Ponce para la reorganización del Partido Liberal de la Provincia" (8). Incluida en el Plan iba la convocatoria de una asamblea general del Partido a celebrarse en el año siguiente.

Como factores complementarios que coadyubaron a la creación de un ambiente propicio a la consolidación y aceptación de la doctrina autonomista podemos mencionar, en primer lugar, la llegada a Puerto Rico a mediados de 1886 del escritor y periodista peninsular, D. Francisco Cepeda, amigo íntimo de Labra, que se convirtió en defensor y promotor de la doctrina autonomista en la isla (9). Francisco Cepeda comenzó a publicar en el mes de agosto la "Revista de Puerto Rico" periódico de tendencia autonomista (10). Desde ella, Cepeda y otros colaboradores, iniciaron multitud de campañas a favor de la doctrina autonomista, si bien, más adelante el propio Cepeda la convirtió en un arma con-

tra miembros del propio Partido, sobre todo contra D. Luis Muñoz Rivera y su periódico "La Democracia" (11).

Otro hecho que indudablemente tuvo una repercusión positiva en el auge del movimiento autonomista fue la visita que realizaron a San Juan los diputados autonomistas cubanos, Rafael Montoro, Rafael Fernández de Castro y Miguel Figueroa, que regresaban a Cuba. Cepeda les obsequió con un banquete en su residencia y en el mismo se pronunciaron una serie de discursos en los que se hicieron votos por un fortalecimiento de los lazos entre los autonomistas de ambas Antillas (12).

La reacción de los liberales al Plan de Ponce fue en general favorable, por lo que, al aprobarse posteriormente con algunas enmiendas sustanciales, pudo convertirse sin mayores dificultades el Partido Liberal Reformista en Partido Autonomista.

b) La Asamblea Autonomista de Ponce.--

El día 19 de febrero de 1887 publicaba Baldorioty, en su calidad de Presidente del Comité de Ponce, la convocatoria para la celebración de una Asamblea general del Partido Liberal, señalándola para el 7 de marzo (13). El día anterior se llevó a cabo una reunión secreta de los principales líderes del Partido con el propósito de reducir las diferencias de opinión en torno al tipo de autonomismo que convendría dar como programa del Partido.

Como ya hemos indicado más atrás, eran dos las tendencias dentro de la doctrina autonomista, representadas respectivamente por Baldorioty y por Labra. La tendencia de Baldorioty era más extremada, habiendo tomado como modelo el tipo de autonomía concedida por Inglaterra al Canadá (14). Por su parte, Labra defendía una fórmula híbrida en la que se mezclaba el asimilismo en lo político junto con la descentralización en lo económico y administrativo (15). Por desgracia para el Partido, esta diferente postura doctrinal, resuelta momentáneamente a favor de la tendencia meramente descentralizadora, sería a lo largo de todo el período siguiente la manzana de la discordia que dividiría

a los miembros del Partido y anularía en gran parte la actividad del mismo.

En la sesión secreta del día 6 Baldorioty y sus compañeros de Ponce cedieron en su postura más extrema ante Cepeda y otros miembros del Comité de la Capital, que apoyaban la tendencia más moderada de Labra, con el fin de evitar disidencias en el seno del Partido. En la misma sesión se acordó, también contra lo propuesto en el "Plan de Ponce", que se cambiara el nombre del Partido, aprobándose el de "Partido Autonomista Puertorriqueño" (16).

Al día siguiente se efectuó la inauguración solemne de la Asamblea General, bajo la presidencia de D. Román Baldorioty de Castro, como anfitrión que era. En sucesivas sesiones de trabajo se leyó el Plan, así como las diferentes enmiendas hechas al mismo por el Comité de San Juan, que fueron aprobadas por unanimidad. También se aprobó otra propuesta del mismo Comité para que se cambiara el nombre del Partido; que se diera un voto de gracias a Labra por su labor y se le nombrara "leader" o representante del Partido en Madrid y finalmente otro voto a Baldorioty por su incansable labor en pro del progreso de Puerto Rico. Para concluir, Baldorioty declaró constituido el nuevo Partido y clausurada la Asamblea (17).

c) Los primeros tiempos del Partido Autonomista.-

El juicio de los propios autonomistas coincidió en considerar que el programa del Partido no significaba un gran paso hacia la autonomía total, pero, con todo, lo defendían en el sentido de que arrinconó definitivamente el ideal asimilista total como meta del Partido. Es posible también que los defensores de esta fórmula mixta pensaran que era más fácil conseguir de la Metrópoli la aceptación de una descentralización económico-administrativa, que una autonomía total, que en aquellos momentos indignaba a la mayor parte de los habitantes de la Península y que ningún político estaba dispuesto a conceder.

La fundación del nuevo Partido tuvo otros efectos positi-

vos entre los liberales, ya que actuó como polo de atracción de elementos dispersos, que se habían separado del antiguo Partido, disgustados ante la inoperancia práctica del mismo; al propio tiempo que daba coherencia a las aspiraciones legítimas de una parte considerable de la población.

Sin embargo, la vida del nuevo Partido se vió envuelta desde el momento de su fundación en una serie de problemas que en varias ocasiones estuvieron a punto de producir su desaparición. Y esto, no solo por causas externas, como a continuación expon-dremos, sino sobre todo por dificultades surgidas en su propio seno, que se produjeron desde el mismo momento de su constitución.

Ya hemos hecho mención de las discrepancias entre los autonomistas de la Capital y los de Ponce respecto al sistema autonomista que debía adoptar el Partido. Si bien es cierto que, para evitar escisiones, los autonomistas de Ponce aceptaron la fórmula más moderada del Comité de la Capital, no lo fue menos que posteriormente los primeros siguieron argumentando acerca de los méritos de su fórmula, lo que produjo ciertas discrepancias entre los miembros del Partido, discrepancias que, si en un primer momento permanecieron ocultas, pronto fueron del dominio público. A su divulgación contribuyó el hecho de que también la prensa autonomista tomó partido y se dividió en dos bandos, defendiendo cada cual una de las posturas.

Los efectos de estas discrepancias no se dejaron esperar y a finales de 1888 se iniciaba un movimiento para sustituir a Baldorioty en la Dirección política del Partido y al Secretario del mismo, Arístides Díaz, yerno de Baldorioty (18). Enterado Baldorioty de todo esto, optó por renunciar a su puesto, actitud que fue imitada por varios miembros del Directorio, con lo que se producía la primera crisis del Partido, a los dos años escasos de su fundación.

Pero esto no fue más que el comienzo; poco después un ilustre insular se convertía en continuador de la doctrina de Baldo-

rioty y la disputa,, convertida ahora en una cuestión de liderazgo, alcanzaba unos niveles de dureza y animosidad increíbles. Finalmente, en 1896 y con motivo del establecimiento del pacto entre el Partido Autonomista y el Fusionista de Sagasta, se producía el último cisma en su seno, que dió lugar a la fundación de otro partido autonomista, el Histórico u Ortodoxo.

Así pues, podemos afirmar que la existencia del Partido Autonomista estuvo jalonada de problemas doctrinales y personales, lo cual produjo una constante división de fuerzas y como consecuencia una falta de efectividad en las distintas elecciones celebrados a partir de este momento, como tendremos ocasión de comprobar.

2.- El Partido Incondicional.-

Para superar definitivamente la crisis surgida a finales de 1885, se convocó una nueva Junta Magna para abril de 1890 (19). Tres fueron los temas propuestos a la consideración de los asambleístas: el primero, el establecimiento de una representación del Partido en Madrid; el segundo, la reorganización del Comité Central del Partido, de acuerdo a una candidatura preparada de antemano y de la cual había sido excluido el periodista y Director del "Boletín", D. Ignacio Díaz Caneja; por último, la emienda de algunos artículos del Programa.

La primera de las propuestas fue rechazada; la segunda fue impugnada por D. Enrique Alvarez Pérez, quien sostuvo el derecho de la asamblea a nominar y votar libremente los candidatos. Pero ante una petición de D. Pablo Ubarri para mantener la concordia entre los asistentes, se aprobó la candidatura propuesta (20). La tercera, que también desató en algunos puntos controversias, quedó limitada a variar ciertos detalles secundarios del programa del Partido, con lo que se dió por terminada la asamblea.

3.- Los sucesos de "el año terrible".-

Si en el plano político-partidista el año de 1887 marcó un

hito memorable en el desarrollo de Puerto Rico, este hecho se vió empañado por una serie de sucesos de carácter violento que se desencadenaron en la isla inmediatamente después de la fundación del Partido Autonomista.

El comienzo de los mismos se produjo como consecuencia del auge de las actividades de una sociedad secreta que se había formado tiempo atrás y cuyo principal objeto consistía en combatir la expansión de los negocios propiedad de españoles peninsulares, al tiempo que favorecía el desarrollo de los negocios propiedad de los criollos. Esta sociedad se conoció con diversos nombres: "La Torre del Viejo"; "Los secos (insulares) y los mojados (peninsulares)" y "Los hermanos del corazón negro" (21).

A partir de la fundación del Partido Autonomista, la sociedad logró hacer muchos prosélitos y extenderse por toda la isla, y aunque en un principio sus procedimientos fueron meramente de boicott, más adelante se mezclaron con otros de carácter violento, como el incendio de establecimientos. Estos hechos, unidos a ciertos rumores que se habían propalado en el sentido de que se estaba preparando una magna conspiración para eliminar a todos los peninsulares, llenó de temor a éstos y decidió a las autoridades a tomar cartas en el asunto.

Si bien nunca se pudo probar una relación directa entre la sociedad y el Partido Autonomista, lo cierto fue que algunos de sus miembros más prominentes pertenecieron a ella y que diversas reuniones de autonomistas se aprovecharon para hacer propaganda de la misma e inciar a nuevos miembros. El silencio de la prensa autonomista y la falta de comentarios condenando los actos violentos de la sociedad dieron pie para que la prensa incondicional considerase al Partido como inductor y encubridor de tales actividades. Por su parte, el Gobernador de la isla, general Palacio, no tardó en tomar una serie de medidas contra la sociedad y contra miembros del Partido de forma indiscriminada.

Habiéndose trasladado el general Palacio al pueblo de Aibonito, cercano al de Juana Díaz -donde se habían producido la mayor parte de los incendios- y al de Ponce -centro del Partido Autonomista- llevó a cabo una serie de arrestos en el primero de ellos. Según consta en las declaraciones a la prensa y ante los jueces que intervinieron en el proceso, a los presos se les aplicaron diversos procedimientos de tortura, con el fin de lograr confesiones de culpabilidad y delaciones de otros miembros. De acuerdo con las mismas, el Gobernador ordenó el arresto de Baldorioty y de otros miembros prominentes del Comité Autonomista de Ponce (22).

Ante el giro que iban tomando los acontecimientos, la Audiencia territorial decidió intervenir y nombró a D. José García de Lara, Juez Decano de Primera Instrucción de la Capital, para que prosiguiera la Instrucción de la causa. Dando cuenta posteriormente de sus primeras gestiones, decía en una carta dirigida a la Audiencia:

"Ya luego hablé con el Alcalde Echevarría (de Juana Díaz) sobre lo que ocurría, y éste me manifestó que estaba alarmado por varios sucesos ocurridos en el campo; que no creía que existiera una verdadera conspiración contra la integridad nacional en la que tuviera participación los jefes del Partido Autonomista; pero sí que se hubieran formado sociedades o reuniones en odio al Partido Conservador y a los peninsulares; y que por consecuencia de las predicaciones de oradores autonomistas y de la publicación de ciertos artículos violentos, se realizaban en los campos actos agresivos contra los que no pensaban como ellos por individuos que eran impulsados por cierto espíritu antinacional" (23).

Como la "Revista de Puerto Rico" publicase varias cartas de presos en las que éstos describían los procedimientos utilizados por la Guardia Civil para hacerles confesar ("comportes"), y su Director D. Francisco Cepeda se negase a entregar al Fiscal Militar los originales de las mismas, el Comandante Fiscal ordenó el arresto de Cepeda (24). Sin embargo, los autonomistas no permanecieron inactivos y lograron hacer llegar noticias de es-

tos sucesos a Madrid, recabando la ayuda de Labra, Vizcarra y otros correligionarios para que pusieran en conocimiento del Gobierno las irregularidades cometidas por el Gobernador (25). Informado de todo ello el Ministro de Ultramar, éste procedió a destituir al general Palacio, el cual se embarcó hacia la Península a finales de 1887.

El general Contreras, que se hizo cargo interinamente y por segunda vez del mando de la isla, después de haber obtenido de varios líderes autonomistas la seguridad de que el Partido no tenía relación con la sociedad secreta, tomó las medidas adecuadas para poner en libertad a los principales miembros del Partido. Más adelante y con motivo de una amnistía general decretada en la Península, la misma se hizo extensiva a Puerto Rico, con lo cual recobraron la libertad la mayoría de los encausados por estos sucesos, pese a que algunos autonomistas preferían que continuasen los procedimientos judiciales con el fin de establecer la verdad de los mismos y exigir las responsabilidades correspondientes.

C.- La convocatoria de elecciones en Puerto Rico.- La campaña electoral.-

El día 1 de enero de 1891 publicaba la Gaceta de Puerto Rico la convocatoria para las elecciones de diputados a Cortes, que deberían celebrarse el día 1 de febrero (26).

En las del recién fundado Partido Autonomista se produciría desde este mismo momento una nueva discrepancia en torno a la abstención o participación en los comicios. Labra y sus partidarios de la Capital preconizaban la participación, en tanto que Muñoz Rivera y otros líderes insulares se inclinaban por la abstención, en tanto el Gobierno no aprobase una ley electoral más democrática; algunos llegaron a postular la disolución del Partido como protesta contra la política del Gobierno.

Con el fin de resolver esta cuestión, se reunió en el mes de enero el Directorio autonomista, y acordaba por votación acu-

dir a las urnas, mantener la existencia del Partido, proponer cuatro candidaturas correspondientes a los Distritos de Sabana grande, Ponce, Mayagüez y Aguadilla, convocar una asamblea para el mes de marzo y finalmente, publicar un Manifiesto, dando cuenta de todos estos acuerdos (27).

El Partido Incondicional también llevó a cabo los preparativos correspondientes y a mediados de enero publicaba dos Manifiestos: uno con la candidatura oficial del Partido, formada en gran parte por candidatos cuneros, y el otro excitando a sus correligionarios a la lucha electoral (28).

Pero también en el Partido Incondicional se estaban produciendo ciertas disensiones, relacionadas como siempre con la forma personalista en que su Presidente conducía el Partido. Esta vez se trataba precisamente de la forma en que se habían aceptado las candidaturas para diputados, decididas por el Presidente sin contar con los demás miembros del Comité Central. De momento sin embargo, estas quejas y acusaciones no tuvieron ningún resultado (29).

D.- Los resultados.-

Celebradas las elecciones, el Partido Incondicional consiguió el triunfo en 13 Distritos, correspondiendo únicamente 2 al Partido Autonomista (30).

E.- Comentarios.-

Varias características, todas ellas negativas, tuvieron estas elecciones, de las cuales destacamos, en primer lugar, un incremento considerable del cunerismo ministerial, como hemos demostrado en nota anterior en base a la nutrida correspondencia telegráfica entre el Ministro de Ultramar y el Gobernador de la isla. Este hecho fue denunciado y duramente criticado en el Congreso por los diputados Srs. Labra y Moya (31).

En segundo lugar, es necesario hacer constar que el Partido Autonomista de Puerto Rico estuvo a punto de decidir la absten-

ción electoral, como protesta contra el contenido del proyecto de ley electoral aprobada por el Congreso y que posteriormente fue rechazado por el Senado, por lo que estas elecciones se llevaron a cabo de acuerdo con la ya anticuada Ley electoral de 1878. Según declaraciones del diputado Sr. Moya ante el Congreso, el retraimiento del Partido Autonomista se evitó por el denodado esfuerzo de Labra (32).

Finalmente, y tal vez como consecuencia de lo anterior, se produjeron multitud de protestas en diferentes distritos, motivadas por supuestas arbitrariedades ocurridas, sobre todo en relación con exclusiones e inclusiones de individuos en las listas electorales de forma ilegal; con el reemplazo de jueces y alcaldes en el distrito de Mayagüez y con el arresto de los interventores autonomistas de Ponce D. Arístides Díaz Díaz, D. Juan Príncipe, D. Rafael Ulpiano Colón y D. Rafael Toro Quiñones (33).

Un análisis cuantitativo de los datos correspondientes a esta elección nos permite estimar un aumento sobre la anterior del número de electores -35-, junto a una nueva disminución del número de votantes: 1,660 frente a 1,823 (34).

El porcentaje de abstenciones alcanzó un 34.30, es decir, un 9.48 % más que en la elección de 1886. Creemos que este incremento se debió al hecho de que los autonomistas no acudieron a las urnas de forma general y masiva, contrariados por el hecho, ya apuntado, de que esta elección se realizara de acuerdo con la Ley Electoral de 1878.

NOTAS

- 1.- FERNANDEZ ALMAGRO, Melchor. Op.Cit., Tomo II, pág. 12 y segs.
- 2.- Este Gobierno de Sagasta se acreditó el tanto de la aprobación de la Ley de Sufragio Universal (26 -VI- 1890).
- 3.- MARTINEZ CUADRADO, Miguel: "Elecciones...", pág. 534.
- 4.- Diario de Sesiones de las Cortes, 1889. Apéndice sexto al número 53.
- 5.- La cuota diferencial había sido defendida ya por los liberales, como hemos tenido ocasión de señalar más atrás, puesto que una cuota más baja por concepto de contribución territorial hacía posible la inclusión en las listas electorales de un número considerable de pequeños propietarios rurales, en general simpatizantes del Partido Autonomista.
- 6.- Los principales temas tratados fueron el sentido de las tendencias asimilistas y autonomistas; el carácter de los dos partidos políticos de la isla; la actuación del Gobierno respecto a las Antillas y el sentido de la trayectoria histórica de Puerto Rico. Citaremos únicamente algunos de los juicios más destacados sobre estos extremos.

Acerca del asimilismo, decía el Sr. Montero, diputado de Cuba, en la sesión del 13 de julio de 1889: "Yo soy un autonomista convencido, un partidario decidido de la autonomía colonial en toda su pureza, según la hemos formulado varias veces, mientras S.S. (se refiere al Sr. Calbeton) persevera en ese credo asimilista, que después de once años de infructuosos ensayos, resulta que todavía está "virgen y mártir". (El Sr. Calbeton: No se ha ensayado nada). Pues si no ha habido en once años tiempo suficiente para emprender el ensayo ¿qué no sucederá en lo adelante? No es así como deben atenderse las urgentes necesidades de colonias que atraviesan un período tan crítico y difícil" Cf.: Diario de Sesiones, 1889, pág. 715.

Respecto a las reformas políticas, el Sr. Moya proponía el 12 de marzo de 1890 a las Cortes se sirviesen aprobar la división de mandos en la isla de Puerto Rico. Aunque la proposición fue aceptada por el Congreso y pasó a estudio de la Comisión, no llegó a discutirse. Cf.: Ibidem, págs. 3379 a 3389.

Hay una intervención sumamente interesante del Sr. Alcalá del Olmo respecto a la forma de actuar el Go-

bierno en Ultramar, sobre todo por ser una persona poco sospechosa de ideas contrarias al mismo: "El Sr. Gullón pone en duda que en Puerto Rico se pueda hacer todo. Yo únicamente diré a S.S. que consulte la historia de Puerto Rico y verá cómo es cierto que de 20,000 electores que tenía antes ha pasado inopinadamente y sin preparación a un censo restringido de 2,500 (...) Una sola cosa se me ocurre: medite sobre ella S.S. y tengo la seguridad de que encontrará que en Puerto Rico es todo posible, si lo consulta con su propia conciencia". Más adelante, contestando el propio Alcalá del Olmo al Sr. Rodríguez San Pedro, expresa otro juicio interesante por lo sincero respecto a la forma de actuar los conservadores y el propio Gobierno en las Antillas: "En cuanto a los intereses nacionales y al crecimiento del autonomismo, que S.S. como yo consideramos altamente peligroso para los intereses nacionales en las Antillas, eso, lejos de ser un argumento contra este proyecto de ley (electoral), es razón que lo abona y robustece. ¿Sabe S.S. cuál es mi criterio en este punto? ¿Sabe S.S. cómo entiendo yo que ha crecido el autonomismo? Pues yo entiendo que ha ido a compás de la intransigencia del otro lado; es decir, que si no hubiera intransigencias en las derechas, no hubiera ganado el pensamiento de la autonomía por la izquierda; no hubiera progresado ese pensamiento si se hubiera mantenido la aspiración política de aquellos países en un término medio eminentemente nacional y conveniente para la Patria, cuyo término medio viene a establecer este proyecto, ampliando los derechos de los que allí ostentan con orgullo el título de españoles. Con intransigencia, negando el derecho a los que tienen razón para reclamarlo lo que se hace es exasperar los ánimos y lanzar al extremo opuesto a todo aquel que no está con la intransigencia". Cf.: Ibidem, págs. 3985 y 4013.

Finalmente, y en relación con el proyecto de ley electoral, los conservadores expresan sus temores de que una extensión del derecho al voto ponga en peligro su posición dominante, con peligro también para los intereses de la Patria: (Sr. Gullón) "Nosotros nos hemos opuesto a que la reforma se hiciera sin la meditación, sin la lentitud con que creemos que es preciso caminar. Justo, justísimo era modificar la ley electoral de Puerto Rico ampliando el derecho al voto ya desde largo tiempo concedido a los individuos de las Antillas, cumpliendo de esta suerte el compromiso que en la oposición contrajo nuestro partido para el día en que llegara al poder... pero de ninguna manera era eso necesario (la reforma electoral) por la sola razón de que no estuvieran representados ciertos ele-

mentos del país... Pero si no es para esto, si no es para dar representación a ningún género de elementos que hasta ahora carecieran de ella, hay que confesar que lo que únicamente se persigue es que éstos se sobrepongan, que anulen y ahoguen a otros elementos que hasta ahora han gozado de cierto predominio, que lo que se desea es anonadarlos; y esto, Sr. Soto y Srs. individuos de la Comisión, es tan sumamente grave, que puede traer grandes peligros, si no caminamos con la parsimonia y con el detenimiento que estas reformas políticas exigen". Cf.: Ibidem, pág. 3980.

Finalmente, cuando el proyecto de ley estaba en el Senado, y con motivo de una proposición incidental presentada al Congreso por Labra y otros diputados autonomistas cubanos, acuñaba el Sr. Montoro una frase que después iba a ser utilizada con profusión por los autonomistas para describir la situación de los habitantes de Puerto Rico: "Pero ya que S.S. (el Ministro de Ultramar), según parece, no cree oportuno llevarlo a las Antillas (el proyecto de ley sobre sufragio universal), paréceme que sería una gran injusticia mantener entre la Península y las colonias una diferencia de régimen electoral tan grande como resultaría entre la ley que vais a hacer para la Metrópoli y la ley que rige en las colonias. Habría entonces dos ciudadanía españolas: una de primera clase, con toda clase de prerrogativas e inmunidades, para los que residen en la Metrópoli, y otra, no de segunda, sino de tercera clase, para las Antillas". Cf.: Ibidem, Segunda Legislatura de 1889-90, pág. 709.

- 7.- CRUZ MONCLOVA, Lidio. Op.Cit., Tomo III, págs. 11 y 12.
- 8.- El texto completo del Plan puede verse en el Anexo I y las Bases del Partido Autonomista en el Anexo II
- 9.- PAGAN, Bolívar. Op.Cit., pág. 316.
- 10.- PEDREIRA, Antonio S. Op.Cit., pág. Algunos de los redactores que tuvo a lo largo de este periodo fueron: Mario Brachi, José Abad, Dr. M. Zeno Gandía, Diego Y. Texera, Agustín Navarrete y Félix Matos Bernier. La "Revista" fue suspendida por primera vez en octubre de 1887 y no reapareció hasta marzo de 1888; en agosto del mismo año volvió a ser suspendida por unos días y desde ese momento continuó publicándose hasta mayo de 1894 en que desapareció.
- 11.- "La Democracia" fue fundado por D. Luis Muñoz Rivera en 1890 y fue su primer Director. Organó oficial del Partido Autonomista desde su fundación. Hasta 1893 fue trisemanario y a partir de esta última fecha se hizo diario de la tarde. Entre sus redactores y directores podemos

destacar a D. Gumersindo Rivas, D. Mariano Abril, D. Luis Rodríguez Cabrero, D. Eugenio Deschamps, D. José Muñoz Rivera, D. Eugenio Astol, D. Rosendo Rivera Collón, D. Luis Muñoz Marín y otros. Cf.: Ibidem, págs. 373 y 374.

12.- PAGAN, Bolívar. Op.Cit., pág. 320.

13.- "Revista de Puerto Rico", 1887, número 50

14.- PAGAN, Bolívar. Op.Cit., págs. 317 y 318.

15.- La generalidad de los autores es unánime en reprochar el comportamiento de Labra de querer imponer a toda costa su personal forma de autonomismo, que todos sus contemporáneos, y aun el mismo Labra, consideraban inferior al que propugnaba Baldorioty. El historiador puertorriqueño, José A. Gontán, dice a este respecto: "... según dijera el Club Revolucionario Puertorriqueño de Nueva York, en 1892, (los liberales) rompieron el Plan de Ponce y con retazos de unas bases autonómicas incoloras del Sr. Labra, y con fragmentos de varios artículos de la Constitución del Partido Liberal cubano, se suplió el Título I, y se enmendaron o variaron algunos artículos del Plan de referencia, viniendo al suelo de este modo la labor meditada de la sagacidad y de la previsión.

Siguen los puertorriqueños de Nueva York diciendo: "Es decir, que aquel Plan cerrado, armónico, en que todas las partes correspondían entre sí, eminentemente democrático y consecuente con la anterior vida política liberal... aquel Plan tan concienzudamente elaborado, resultó un engendro híbrido, contradictorio en no pocos puntos y sin doctrina política uniforme, amplia y verdaderamente democrática". Cf.: "Historia política social de Puerto Rico", (San Juan, Editorial Esther, 1945), pág. 214. Igual juicio, pero más severo todavía, contra Labra expresa el Dr. S. Arana Soto, acusando a Labra de haber obstruido y desvirtuado la obra de Baldorioty y retrasado la solución de los problemas insulares por su constante interés en lograr una alianza del autonomismo con algun partido republicano de la Península y su consiguiente oposición a una alianza del Partido Autonomista con el Liberal de Sagasta. Cf.: "Defensa de los Capitanes Generales españoles y nueva interpretación del siglo XIX puertorriqueño", (San Juan, s.e., 1968), sobre todo en páginas 60 y sgts.

16.- PAGAN, Bolívar. Op.Cit., pág. 341. Este autor consigna -a nuestro juicio erróneamente- que el Comité local Liberal de San Juan "era en su mayoría autonomista "a outrance". Creemos que esta afirmación se podría hacer

con mayor propiedad del Comité de Ponce, como se pueda comprobar por el tipo de doctrina autonomista defendida por cada uno de estos dos Comités. El hecho de que el de la Capital propusiera cambiar el nombre del Partido, contra lo propuesto por el Comité de Ponce, no nos parece un argumento de peso y sí una falta de táctica por parte de los liberales capitalinos, ya que de este modo, como dice Gontan, "se restaron fuerzas valiosas que no quisieron nunca plegar la antigua bandera". Cf.: Op.Cit., pág. 214.

- 17.- PAGAN, Bolívar. Op.Cit., págs. 345 a 365.
- 18.- Ibidem, págs. 403 y sgts. Este autor describe de la siguiente forma el planteamiento de los conflictos internos del Partido: "Pero, desde arriba, entre los superiores dirigentes, surgieron discrepancias ideológicas y de orientación, que quebrantaron la solidaridad del partido y le sacudieron con polémicas internas y con enconados choques de cariz personalista. Ello ocasionó una crisis en el Partido Autonomista que debilitó su ímpetu y contribuyó a reveses electorales, y le obligaron a retraerse en luchas comiciales ante adversarios unidos y compactos". Más adelante apunta la formación de dos grupos en el seno del Partido, uno de ellos encabezado por Cepeda, lugarteniente de Labra en la isla, al que se unieron Julián Blanco Sosa, Martín Corchado Juarbe, Manuel Zeno Gandía, Luis Aguerrevere y Juan Iglesias Ganebriera. Al lado de Baldorioty, por su parte, se colocaron Luis Muñoz Rivera, Mario Braschi, Ramón Marín, Herminio Díaz Navarro, Salvador Brau y Aristides Díaz.
- 19.- CRUZ MONCLOVA, Lidio. Op.Cit., Tomo III, pág. 291.
- 20.- El Comité Central del Partido Incondicional quedó compuesto de la siguiente forma: Pablo Ubarri Capetillo, Presidente; Joaquín Peña Chávarri, Vicepresidente; Rafael López Landrón, Pedro Arzuaga Beraza, Manuel Egozcú Cintrón, Juan Roubert y Alejandro Villar Varela, vocales; Gregorio Bolívar Alvarez, Alvaro Domingo, Antonio David González, Avelino Vicente González, Gumersindo Suárez García y Gabriel Giménez Sanjurjo, vocales. Ibidem.
- 21.- BARBOSA, José Celso: "En charla con el pueblo o La Torre del Viejo"; artículos publicados en "El Tiempo" (P.R.) en abril y mayo de 1918. En estos artículos (4) se contienen los datos más exactos sobre este tipo de sociedades secretas, ya que el Dr. Barbosa fue miembro de ellas. En el cuarto y último resumía así el sentido de la sociedad: "La sociedad secreta "La Torre del Viejo", conocida popularmente con el nombre de "Los

secos y los mojados", fue producto de la época y de las circunstancias. Nació al calor del odio y apasionamiento producidos por la arbitrariedad y el despotismo. Era una defensa del pueblo, tal vez demasiado apasionada, de procedimientos radicales y de tendencia un tanto exclusiva y absorbente. Pero a esa sociedad pertenecíamos; y hoy, como ayer, creemos que entonces, dentro de aquella situación especial, tuvo su existencia razón justificada, habida cuenta de la necesidad de defenderse en que se encontraba nuestro pueblo, sometido a la peor condición social en su propia tierra". Ibidem, pág. 154.

22.- Archivo Histórico Nacional (Madrid). Sección de Ultramar, Legajo 5143. En este Legajo se recogen todos los documentos relacionados con este suceso, entre ellos, el Expediente instruido por el Gobernador, manifiestos, cartas de autonomistas al Gobierno de la Península, telegramas de Labra, etc, etc.

23.- Ibidem.

24.- Ibidem, número 8.

25.- Ibidem.

26.- jueves, 1 de enero, número 1

27.- "Correligionarios -decía el Manifiesto-: Nos hemos reunido hoy para deliberar y tomar acuerdo acerca de la actitud que debe adoptar nuestra colectividad en las ya próximas elecciones de diputados a Cortes.

En este acto solemne hemos meditado muy detenidamente, antes de aconsejar nada respecto a lo que tanto puede influir en el futuro desenvolvimiento del derecho y del progreso de Puerto Rico.

Y, tras detenida discusión, han sido tomados por mayoría absoluta de votos, los acuerdos de mantener enhiesta la bandera del Partido, y de acudir a las urnas para luchar en ellas hasta sacar triunfantes nuestras candidaturas, en aquellos distritos en que haya probabilidades de buen éxito.

La Delegación, pues, recomienda desde luego que los autonomistas, unidos como un solo hombre, voten las siguientes candidaturas, que sabemos han sido aceptadas ya por los respectivos distritos:

Por el de Sabana grande, D. Rafael María de Labra.

Por el de Ponce, D. Antonio Cortón Toro.

Por el de Aguadilla, D. Agustín Sardá y Llavería.

Y además excita a todos los autonomistas a que, si en algún otro distrito pueden tomar parte en la lucha para obtener algún resultado ventajoso, vayan a ella con el candidato que acuerden.

La Delegación, reservando para próxima oportunidad

el decir lo pertinente a la protesta que hoy existe latente en todos los habitantes de Puerto Rico, que sienten herida su dignidad por la desairada situación en que acudimos a los comicios, lastimados por la injusticia de los gobernantes, acuerdan también convocar la Asamblea del Partido para que el segundo domingo de marzo próximo se reúna en Mayagüez o en la Capital de la isla, si las circunstancias inclinasen a resolverlo así al Directorio, a cuya decisión se deja en último caso el acuerdo.

Y en esa Asamblea nuestros representantes tomarán todas aquellas resoluciones que exija el decoro del país, y que les aconseje el amor que todos profesamos a esta maltratada colonia.

Autonomistas: a luchar y a vencer.

Ponce 11 de enero de 1891.- Martín R. Corchado.- Luis de Porrata-Doria.- Francisco Cepeda.- Julián Blanco y Sosa.- José H. Ruiz.- Félix Tió Malaret.- Abelardo E. Eguilú.- Rafael Toro Quiñones.- Francisco Mejía.- Pedro Fournier.- Ponentes: Juan Iglesias Gembriera.- José Llorens Echevarría". Cf.: LABRA, Rafael María de: "La Autonomía colonial en España", (Madrid, Imprenta de los sucesores de Cuesta, 1892), págs. 270 y 271.

28.- La candidatura Incondicional fue la siguiente: Casa Miranda por Vega baja; Ramírez Verger por Arecibo; Miguel Martínez Campos por Mayagüez; Salcedo Ruiz por San Germán; Hernández Arias por Carolina (sic); Gallart por Capital; Sanz (y Peray) por Humacao; Despujol por Quebradillas; Cabezas (de Herrera) por Caguas; Perí Mencheta por Ponce; Stefani por Sabana grande; Martín Sánchez por Utuado; Torrependo por Aguadilla. Cf.: Archivo Histórico Nacional (Madrid). Sección de Ultramar, Legajo 5145/5 número 3.

29.- "La Nación Española", 1891, número 1

30.- Pueden verse los resultados en los Cuadros y Mapas electorales adjuntos.

31.- En secuencia cada vez más rápida se van sucediendo los telegramas cruzados entre ambas autoridades. Vamos a reproducirlos sin comentarios"

Del Gobernador al M. de U. (12-I-1891): (cifrado)

"Hay 15 Distritos y 17 candidatos oficiales ¿A quién elimino?"

Del Gobernador al M. de U. (21-I-1891) (cifrado):

"Partido Incondicional publicó distribución siguiente candidatos oficiales: Casa Miranda por Vega baja; Ramírez Verger por Arecibo; Martínez Campos, Maya-

guez; Salcedo, San Germán; Hernández Arias, Carolina; Gallart, Capital; Sanz, Humacao; Despujol, Quebradillas; Cabezas, Caguas; Peris Mencheta, Ponce; Stefani, Sabana grande; Martín Sánchez, Utuado; Torrependo, Aguadilla.

Rechazó candidatos Ruiz del Arbol y Marcel Lladó y se obstinó presentar Gullón por Rio Piedras. Imposible asignar Distrito al Señor Silvela, cuadragésimo sexto de lista oficial, ni a Suárez Figueroa, último recomendado. Profunda división partido adicto por egoísmo local. Espero dominarlos.

Lucha reñida Caguas, Humacao y Coamo. Medito con candidato fusionista".

De Ministro de Ultramar a Gobernador (22-I-1891):

"En contestación a su último telegrama y como indicaciones definitivas que espero hará V.E. prevalecer le dirijo la siguiente lista:

Martínez Campos - Lastres - Casa Miranda - Mellado - Hernández Arias - Estos cinco preferentísimo y también muy preferentes Alfau - Ruiz del Arbol - Sanz Avilés - Torrependo - Pastor Díaz y si puede ser alguno de los siguientes en el orden en que van a continuación: Suárez Figueroa - Peris Mencheta - Madañaga - respetando en su distrito a Labra".

De Gobernador a M. de U. (28-I-1891)

"Ruego V.E. dígame si candidato es Diego Fernández o Hernández Arias".

De M. de U. a Gobernador (28-I-1891)

"Suárez Figueroa se llama Adolfo".

De M. de U. a Gobernador (29-I-1891)

"El candidato es Diego Fernández Arias".

De Gobernador a M. de U. (29-I-1891)

"Telegramas de V.E. y del Presidente Consejo de Ministros fechas 21 y 22 llegaron ayer después votación interventores mesas.

Ante profunda división partido adicto conceptúo peligrosísimo cambiar de candidatura. Ubarri y Comité Central niega en absoluto modificación temiendo perder total elección".

De M. de U. a Gobernador (29-I-1891, 9:30 p.m.)

"Sustituya V.E. a toda costa en el lugar que ocupa el Sr. Ramírez Verger al Sr.D. Andrés Mellado. La elección de éste es para mí un compromiso de honor".

De M. de U. a Gobernador (29-I-1891)

"El Gobierno insiste en sus últimas y definitivas indicaciones y espera confiadamente que V.E. las hará prevalecer".

De M. de U. a Gobernador (30-I-1891)

"Retiren candidatura del Sr. Mellado. El Gobierno tiene el mayor interés en la de Ruiz del Arbol".

De M. de U. a Gobernador (30-I-1891, 1 de madrugada)

"Mis telegramas anteriores han de entenderse sin perjuicio de la unión de partido español y del triunfo de candidatos que lo representen".

De Gobernador a M. de U. (31-I-1891):

"Telegramas de V.E. reiterando orden modificar lista oficial, llega 30 horas antes elecciones diputados. Comité Español reproduce por unanimidad no poder alterar candidaturas publicadas por temor a nuevas excisiones y gravísimos peligros de perder elecciones". Cf.: Archivo Histórico Nacional (Madrid). Sección de Ultramar, Legajo 5145/5.

32.- "Entonces vino el decreto de S.S. -decía Labra en el Congreso- sobre la división electoral (de Cuba), en el cual volvió a cometer la misma injusticia con Puerto Rico; injusticia doblemente terrible, porque allí no había ni siquiera la representación de las minorías; pero injusticia luego extremada, y ¿de qué manera, señores! en las últimas elecciones, en las cuales, mientras desde aquí agotábamos nuestras fuerzas, nuestros medios, nuestros amigos, cuanto teníamos y cuanto podíamos para evitar el retraimiento en aquella Antilla el Gobierno contestaba con una lista interminable de candidatos". Cf.: Diario de Sesiones de las Cortes, 1891, pág. 2790.

33.- En las Actas de Distritos aparecen numerosas protestas, sobre todo en las de Mayagüez, San Germán, Ponce, Caguas y Coamo. Cf.: Archivo de las Cortes, Sección de Expedientes, Legajo 105, número 39. Pero en el Diario de Sesiones se explicitan más las irregularidades denunciadas al discutirse los dictámenes de la Comisión de Actas. Cf.: Diario de Sesiones, 1891, págs. 358 a 360. El Diputado, Sr. Moya, describía en la sesión del 23 de junio de 1891 la forma en que se había desarrollado su elección: "Permitidme ahora que os diga cómo me trataron a mí. Cito el caso porque sirve para demostrar lo que ha sido la intervención judicial en las elecciones de las Antillas.

No os impacientéis. Lo voy a decir en estilo telegráfico. Ponce, apelo al testimonio honrado de todos los representantes de Puerto Rico, es un Distrito franca, genuina, eminentemente liberal. Jamás han triunfado allí los candidatos del Gobierno. El triunfo, pues, de los autonomistas, ahora como siempre, era seguro y fácil.

Pues bien; por si las papeletas quemadas, una vez

hecho el escrutinio en la sección de Ponce, eran 114 ó 118 (y conste que allí alcancé una mayoría de más de 90 votos), el juez procesa a los cuatro interventores de oposición, D. Aristides Díaz, D. Juan Príncipe, D. Ulpiano Colón, D. Rafael Toro Quiñones, personas todas respetabilísimas, de grande y legítima influencia y de honor intachable, y los encarcela, encerrándolos en inmundo y oscuro calabozo, confundidos con varios criminales. Se buscan electores que declaren que hubo error en el recuento de las papeletas; no se encuentran, y el juez se inhibe declarándose incompetente, y envía la causa a la Audiencia de lo criminal de Ponce, que se declara incompetente también, y manda los autos a la sección de lo criminal de la Audiencia territorial, para que duerman allí el sueño de los justos ¿Es ésta la traducción del sentido jurídico del Sr. Silvela, que ha enviado a Puerto Rico al Sr. Fabié?". Cf.: Diario de Sesiones de las Cortes, 1891, pág. 2476.

- 34.- La cifra de electores para 1886 es aproximada y está calculada de acuerdo a nuestros datos. Sánchez Ortiz y Berastegui dan una cifra bastante más alta: 3,690 electores.

ANEXO I

CONVOCATORIA PARA LA ASAMBLEA GENERAL DEL PARTIDO LIBERAL-REFORMISTA Y

"PLAN DE PONCE PARA LA REORGANIZACION DEL PARTIDO LIBERAL DE LA PROVINCIA (14 de noviembre de 1886).

"Autorizados por el sentimiento de numerosos correligionarios, los que suscriben, invitan a los liberales de la Provincia para que unidos en esta ciudad de Ponce, en el día que se fijará oportunamente, concurran a la reorganización del Partido Liberal-Reformista.

El Plan de Ponce, que acompaña a esta convocatoria, debe considerarse únicamente como materia de estudio, y a lo más, como base de discusión.

Lejos está, pues, de nuestro ánimo, la idea vanidosa de haber abrazado todos los extremos de una reorganización acabada del gran Partido al que tenemos la honra de pertenecer. Al someter este Plan a la deliberación de todos, dicho está que de todos se esperan luces, meditación y correcciones, para llevarlo a la perfección posible. En efecto, enmiendas, adiciones, supresiones, y aun la sustitución de otra reorganización, que se juzguen convenientes, todo será bienvenido, y todo será tomado en consideración y sometida a la deliberación de la Asamblea. Unicamente esperamos que se tengan presentes las dificultades de la obra, dadas las divergencias surgidas del tiempo, y que al juzgarla y enmendarla en cada una de sus partes, no se pierdan de vista las dominantes relaciones de ellas con el conjunto.

Por otra parte, nada sale perfecto de las manos del hombre y mucho queda siempre a cargo de la futura experiencia reveladora infalible de lo bueno y malo que hay en las obras humanas. Cumplimos hoy el deber que se nos impuso el 14 de marzo en el Teatro de Ponce y no tenemos otra pretensión que la de haber cumplido aquel deber, con toda nuestra conciencia, desinteresadamente y con la mira puesta en las cumbres elevadas de la unidad del Partido, del progreso de la sociedad puertorriqueña y de las aspiraciones superiores de la generosa Nación de que es parte integrante esta hermosa Provincia.

Así, en efecto, toda vez que los correligionarios hayan corregido este Plan, el Partido Liberal de esta Provincia, por la ancha base de los principios en que descansa, por sus procedimientos esencialmente democráticos y

por sus elevadas aspiraciones nacionales asciende a la categoría de "partido político nacional" sin perder su unidad proclamando altamente la "política de paz", que estriba en la obediencia a la Soberanía y demostrando tanto patriotismo, por lo menos, como puede animar a los partidos más avanzados de toda España.

A otros toca, pues, no a nosotros, la tarea ingrata de oponer obstáculos a estos nobles propósitos, mientras les cierre los ojos de la razón la venda de las preocupaciones. La antorcha del tiempo quemará la venda; los prejuicios de los hombres verdaderamente honrados caerán de golpe, y veremos a muchos venir a formar en las filas de la libertad progresiva, asombrados de no haber estado siempre en ellas, como lo exigían las secretas propensiones de su instintivo amor a la justicia.

Ellos comprenderán un día que su concepto de la integridad nacional es menguado y deficiente hasta la deformidad; ellos defenderán un día, juntamente con nosotros, la integridad española, territorial, política e intelectual que nosotros amamos.

Entre tanto, marchemos nosotros unidos, con la virilidad de las conciencias rectas, al cumplimiento de nuestros deberes.

Y para llegar a esta alta meta, rogamos a los Comités Liberales que den plenos poderes al mayor número de representantes de su seno que puedan concurrir a esta reunión; rogamos a los liberales, donde no haya Comité, que se reúnan en el número que les sea posible, y autoricen con su mandato a personas connotadas del Partido Liberal a que asistan a esta Asamblea y que influyan en los correligionarios para que vengan, a fin de que, tanto por el número como por la calidad de los concurrentes, adquieran los acuerdos toda la autoridad que demandan los graves asuntos que se han de tratar y que reclaman las circunstancias presentes.

Orden de las Sesiones

I

La primera reunión será preparatoria: 1.- Para constituirse la mesa que ha de presidir la Asamblea hasta dejar reorganizado el Partido; esta mesa se compondrá de Presidente, Vicepresidente, cuatro secretarios y tres vocales. 2.- Para presentar por escrito las proposiciones y enmiendas, y clasificarlas por el orden de los asuntos a que se refieren.

II

Desde el momento en que la mesa este constituida, los individuos de la comisión quedan desligados del proyecto,

y podrán usar el derecho de defenderlo, impugnarlo y enmendarlo, como los demás miembros de la Asamblea.

Los deberes de la Comisión se limitarán desde entonces a proveer a la reunión de todo lo necesario para cumplir su misión y coadyuvar al mantenimiento del orden en el interior del edificio.

III

Las demás sesiones que fueren necesarias serán públicas y se consignarán a la discusión del Plan en su totalidad y por artículos. Las enmiendas serán leídas y discutidas, en cada caso con preferencia.

IV

Las votaciones serán en general nominales; pero se harán por escrutinio secreto cuando así lo pidan cinco representantes y lo acuerde la Asamblea.

V

Los liberales que resuelvan asistir a la Asamblea, lo participarán con anticipación al Secretario de la Comisión.

VI

Las familias que deseen presenciar las sesiones públicas, lo solicitarán en la Secretaría de la Comisión, expresando el número de sus individuos a fin de señalarles asientos convenientes.

VII

La sesión preparatoria será celebrada en el salón del piso principal, y las sesiones públicas en todo el Teatro de esta ciudad.

Ponce, 14 de noviembre de 1886

Presidente, Román Baldorioty de Castro; vicepresidente, Antonio E. Molina; vocales, Guillermo Oppenheimer, Pedro Salazar, Luis Gautier, Martín R. Corchado, Lázaro Martínez, Marcial Morales, Rafael Pujals, por Ramón Marín y Enrique Cabrera, ausentes, Román Baldorioty de Castro; secretario, José R. Abad.

PLAN

Nombre del partido

Comprendemos que un partido político, gastado por el

uso prolongado del poder, o desacreditado por errores de trascendencia, vea romperse sus filas, plegar su bandera hecha girones o llena de manchas y extinguirse su nombre e la indiferencia de sus pasados adeptos; mas no nos es dable concebir que un partido esencialmente democrático, tan numeroso como el nuestro, con fe en su destino, y con un pasado lleno de gloria, pierda su nombre, se subdivida y anule bajo nombres diversos que no representan más que variedades de su principal especie.

Bajo la enseñanza Liberal-Reformista promovieron nuestros ilustres iniciadores en la Información de 1867, con energía sin igual, con profunda visión del porvenir y con imperturbable del bien, sin cuidarse poco ni mucho de su propio peligro e interés, la reforma social en la Abolición inmediata de la esclavitud con o sin indemnización, con o sin organización del trabajo, promovieron la Reforma Política, la representación de nuestra Provincia, privada arbitrariamente de diputados y senadores durante el largo y funesto paréntesis de 1837 a 1869; promovieron, en fin, la Reforma Económica en la crítica profundamente racional que hicieron de nuestro sistema tributario y de la absurda distribución de nuestra Hacienda pública, que por desgracia aún no está resuelta.

Bajo esta misma noble enseña, y continuando la grande obra, denunciaron nuestros representantes del 69 y 70 el despotismo colonial y Provincial que con tanto ciego ardor desvirtuaron los conservadores en 1874, para sufrir después juntamente con nosotros las pésimas consecuencias de tan grave error.

En aquellas mismas Cortes, inmortales en los fastos de la Nación, impetraron de nuevo los liberales-reformistas la abolición inmediata de la Esclavitud y obtuvieron la emancipación de los niños y de los ancianos y el respeto de la familia del esclavo, de modo que no se podían vender el esposo sin la esposa, los hijos sin los padres, ni recíprocamente; en aquella misma ley, tímida todavía y en extremo considerada para con los conservadores, se aprobó (no sin grandes dificultades) la poderosa Enmienda que debía de hacer imposible la continuación del régimen antinatural de la esclavitud, se aprobó la abolición del "fuate", de todo castigo corporal, quedando de hecho rotos los recods más fuertes de la nefanda institución. La Monarquía democrática de D. Amadeo de Saboya sancionó la abolición definitiva legislada a instancia de los mismos reformistas.

A la Prensa reformista debemos el Instituto Civil en toda su pureza, a ella deberemos la división de los gobiernos civil y militar, , ella ha revelado los vicios de la administración y al cabo alcanzará éstas y otras muchas reformas.

Y bajo otro punto de vista, relativo al porvenir y no menos laudable que el pasado ¿no ha sido reformista este noble partido bajo las monarquías y no lo fue bajo la República? ¿Ha mudado acaso de criterio? ¿Tienen por ventura término fijo el mejoramiento social, el progreso político, las transformaciones administrativas? El individuo mismo ¿tiene una sola meta, en la senda del bien, para sus adelantos y perfección? Y si esta meta existiera, ¿quién osará decir que hemos llegado a ella?

Si la esencia, pues, de nuestro Partido es el mejoramiento indefinido de la parte y del todo, del individuo, del municipio, de la Provincia y del Estado en todas sus manifestaciones, ¿qué nos inducirá a mudar de nombre, o qué otro vendría a sustituirlo tan histórico y tan característico?

Nos llamaríamos entonces canovistas o sagastinos, o izquierdistas con la Monarquía, o castelaristas, o zorrillistas o pactistas de la República, y verdaderamente no vemos las ventajas de tal mudanza en el nombre y mucho menos en el fondo, cuando bajo la enseñanza de Liberales-Reformistas tenemos inscritos en nuestras banderas los principios esenciales de la libertad, comunes a los partidos más avanzados y sin tomar parte en sus disidencias particulares, podemos votar con independencia, y juntamente con todos ellos, las medidas liberales y combatir las medidas liberticidas, no solamente sin inconsecuencia, sino dentro de la más estricta religión de los principios.

Demócratas entusiastas somos desde 1873 bajo la enseña liberal reformista y demócratas convencidos debemos seguir siendo, sin mudar de bandera, que en nada afecta en este caso al fondo de las ideas.

Unidos en un solo haz, con una bandera llena de recuerdos honrosos, con principios claros y definidos y con una organización perfectamente democrática, podemos entrar en los partidos nacionales y coaligarnos temporalmente o permanentemente con los afines, sin interrumpir nuestra educación política y sin perder nuestra individualidad. Sin contraer compromisos que tiendan a perturbar la paz pública de la Nación, en ninguna emergencia, podemos y debemos continuar con firmeza a través de todas ellas, sirviendo a la Patria en general, a la Provincia en particular, y de todos modos, mantener vivos y propagar sin tregua los santos fueros de libertad.

Partido Liberal Reformista es, pues, el nombre que preferimos llevar en adelante como con tanto honor lo hemos llevado hasta el presente más, obedientes a los acuerdos de la mayoría, no vacilaremos en aceptar otro más adecuado, si se encuentra y se promulga.

Principios del Partido

1. Derechos individuales, ilegislables, la fe religiosa, como el alma de la misma que la vivifica, pertenecen por su esencia al individuo, no al legislador. Pensar y expresar el pensamiento libremente, por la palabra hablada o escrita no solamente es lo propio de la naturaleza humana, sino el medio único del progreso humano. Reunirse los hombres para todos los fines de la vida pública y privada, formular su pensamiento y lanzarlo a los cuatro vientos en pos de la persuasión de sus semejantes, es la consecuencia inmediata de la libertad ingénita de pensar. La petición ante los poderes públicos, para el restablecimiento del derecho hollado o de la justicia olvidada, no solamente es una necesidad individual y colectiva, sino también el reconocimiento, la consagración popular de aquellos mismos poderes. La libertad personal y la seguridad del hogar doméstico son garantías que, como todos los derechos individuales, no puede ni renunciar ni delegar ningún pueblo libre. Los llamamos ilegislables porque no cabe poner estos derechos a merced de ningún partido político dominante en las esferas legislativas; por el contrario, los tribunales de justicia deben estar investidos del poder de revocar, o dejar sin efecto toda ley atentatoria a los derechos del hombre. Cualquiera ficción, cualquiera mayoría que pretenda regularlos atenuándolos, limitándolos o desvirtuándolos, marcha consciente e inconscientemente en la senda de la tiranía. Así este principio de los derechos individuales es dogma del Partido Liberal Reformista y su deber es velar por su depuración e integridad, votando con los partidos que lo afirmen y contra los partidos que lo combatan o pretendan desnaturalizarlo.

2. Sufragio Universal. Todo hombre que se halla en el pleno uso de su razón, que sostiene la vida social con su trabajo que está obligado a dar su sangre para defender el honor o el territorio nacional o que no ha cometido delito que lo prive de la ciudadanía, tiene derecho a votar. El Partido Liberal Reformista no puede admitir grado alguno en el ejercicio de este derecho, sin negar la justicia de su propia causa. Las oligarquías, bajo cualquiera de sus formas, son incompatibles con su propia vida.

3. La Soberanía Nacional. Es para nosotros, la fuente de todos los poderes públicos, y origen de todas las leyes comunes; pero no de los derechos del hombre.

4. Poderes legislativos, ejecutivo y judicial independientes.

5. Forma de Gobierno: La República española. Pero el Parti-

do prestará obediencia a las instituciones fundamentales que la Soberanía Nacional crea conveniente establecer en cualquier momento de la historia y coadyuvará a su pacífica existencia, oponiéndose a toda rebeldía fundada en la fuerza.

Esto, no obstante, el Partido Liberal Reformista no renunciará jamás a emplear todos los medios legales, para mejorar o transformar las instituciones y las leyes vigentes en cada actualidad, si así lo juzgase conveniente para el bien público.

6. Legislación común para todos los delitos, inclusive los que deriven del mal uso de los derechos individuales y políticos.
7. Separación completa de los gobiernos civil y militar. Organización de los municipios y de las provincias en toda la nación con mayor suma de poder político y administrativo y siempre dentro de la unidad nacional. La autonomía municipal y provincial se imponen como una necesidad del progreso histórico de las naciones; negarla es debilitar la patria exponiéndola a frecuentes catástrofes.
8. Identidad de procedimientos en materia civil y criminal en toda España. Libre publicidad de todos los actos judiciales.
9. Identidad en la constitución de la familia. Matrimonio civil para los efectos civiles.
10. Libre cambio interior y exterior. Tributación uniforme, igual para todos, relativamente al tanto por ciento de los beneficios líquidos de toda la riqueza imponible.
11. Patrón de oro en el sistema monetario nacional. Monedas de plata y de bronce en pequeña cantidad como auxiliares en las transacciones domésticas.
- 12.- Libertad de Bancos de emisión y descuento, hipotecarios y agrícolas, con las garantías que se estipulen en sus respectivos estatutos.
13. El Partido Liberal Reformista reconoce y acepta la obligación de servir en los institutos militares disciplinados que existen o se crearen, así en tiempo de paz como de guerra. En caso de guerra, liberales reformistas que no estén al servicio y puedan tomar las armas se ofrecerán voluntariamente a las autoridades constituidas para coadyuvar a la defensa del honor y del territorio de la patria.
14. El Partido reconoce y acepta las contribuciones necesarias para los servicios del Estado y peculiares a la provincia conforme a su riqueza y población, pero en proporciones justas de tributación y de servicio con las demás pro-

vincias de la nación.

15. El Partido reconoce la necesidad de orden público, pero para restablecerlo en el punto preciso donde falte o se altere y promulgada y promulgada en forma legal en el mismo punto. Es contrario al bien general suspender las garantías legales en toda la nación y aun en toda una provincia para restablecer el orden en un campo, una aldea o una ciudad, sea lo que fuere. La confusión, el trastorno del comercio, de la industria, de las relaciones sociales así producidas son mayor desorden que aquel que se trata de renunciar. La fuerza militar auxiliar del poder civil debe permanecer subordinada a dicho poder en todos los casos".

(No se incluye la parte correspondiente a "Organismos del Partido).

FUENTE: PAGAN, Bolívar. Op.Cit., págs. 321 a. 330.

ANEXO II

CONSTITUCION DEL PARTIDO AUTONOMISTA PUERTORRIQUEÑO

TITULO I: PRINCIPIOS DEL PARTIDO

Artículo 1. El partido cuya constitución emana de la Asamblea reunida en Ponce los días 7, 8 y 9 de marzo de 1887, se denominará "Partido Autonomista Puertorriqueño".

Artículo 2. Dicho Partido tratará de obtener la identidad política y jurídica con nuestros hermanos peninsulares; y el principio fundamental de su política será alcanzar la mayor descentralización posible, dentro de la unidad nacional.

Artículo 3. La fórmula clara y concreta de este principio es el régimen autonómico, que tiene por bases la representación directa de los intereses locales a cargo de la Diputación Provincial, y la responsabilidad, también directa, de los que tengan a su cargo el ejercicio de las funciones públicas, en lo que toca a la administración puramente interior o local.

Artículo 4. Como consecuencia de esta Doctrina, el partido pedirá que en esta Antilla queden resueltos definitivamente por la Autoridad competente, los asuntos administrativos locales, y que se administre el país con el concurso legal de sus habitantes, concediendo a la Diputación la facultad de acordar en todo lo que toque y se relacione con los asuntos puramente locales, y sin intervención alguna en lo que tenga carácter nacional; así como la de votar y formar los presupuestos de ingresos y gastos locales por su naturaleza, objeto y fin, y sin perjuicio de las atribuciones de las Cortes en materia de presupuesto nacional.

Artículo 5. El Partido no rechaza la unidad política, antes bien, proclama la identidad política y jurídica; según la cual, en Puerto Rico, lo mismo que en la Península, regirán la propia Constitución, la Ley Electoral, la de Reuniones, la propia Representación en Cortes, la propia Ley de Asociación, la de Imprenta, la de Procedimientos civiles y criminales, la Orgánica de Tribunales, la de Matrimonio Civil, la de Orden Público, la misma Ley Provincial y Municipal; es decir, que en punto a derechos civiles y políticos, el Partido pide que se iguale a las Antillas con la Península.

Artículo 6. Y en virtud de la descentralización administrativa que el Partido pide, las cuestiones locales que, por regla general, deben reservarse a las Antillas son las siguientes: Obras Públicas, Instrucción Pública, Sanidad, Beneficencia, Agricultura, Bancos, Formación y Policía de las poblaciones, Inmigración, Puertos, Aguas, Correos, Presupuesto Local, Impuestos y Aranceles, y Tratados de Comercio. Éstos subordinados siempre a la aprobación del Gobierno Supremo; de manera que, al hacer esa reserva, la Metrópoli continúa en el goce supremo de la soberanía, y en la práctica del imperio, entendiendo exclusivamente en lo relativo al Ejército, Marina y Tribunales de Justicia, Representación diplomática y Administración general del país, señalando a éste el cupo que le corresponde en el presupuesto general del Estado, llevando la dirección de la política general, velando por la fiel observancia de las leyes, resolviendo todos los conflictos de Corporaciones y entidades nombrando y separando, con arreglo a las Leyes generales de la Nación, a sus representantes en las diferentes esferas de los poderes públicos, y en la facultad de suspender y anular los acuerdos de la Diputación insular, cuando lleven el vicio de la incompetencia, o sean contrarios a los intereses nacionales.

Artículo 7. Dado el carácter local de la unión o partido autonomista, se deja a cada uno de los afiliados en completa libertad para ingresar en los partidos políticos de la Metrópoli, que acepten o defiendan la Autonomía de las Antillas; de sustentar sus ideas particulares respecto de la forma de gobierno".

(Falta la parte correspondiente a "Organismos del Partido")

FUENTE: PAGAN, Bolívar. Op.Cit., págs. 352 a 354.

RESULTADOS

(1891)

<u>DISTRITO</u>	<u>POBLACION</u>	<u>ELECTORES</u>	<u>RELACION Hab/Elec</u>	<u>VOTANTES</u>	<u>ABST.</u>	<u>CANDIDATOS ELEGIDOS</u>	<u>VOTOS</u>
CAPITAL		442		203	54.07	GALLART Y FORGAS, José	145
VEGA BAJA		90		46	48.39	VALLEJO MIRANDA, Angel R.	46
ARECIBO		136		55	47.27	RAMIREZ DE VERGER FABIE, Manuel	55
QUEBRADILLAS		117		81	44.44	DESPUJOL Y RIGALT, Ygnacio	81
AGUADILLA		158		112	29.11	TORRE Y VEGA, Juan B. de la	112
MAYAGUEZ		253		240	5.14	LASTRES JUIZ, Francisco	122
CAN TERRAN		99		90	19.19	SALCEDO Y RUIZ, Angel	63
CABANA GRANDE		130		40	69.23	LABRA, Rafael María de	37
PONCE		181		140	22.65	MOYA OJANGUREN, Miguel	106
CUAYAMA		209		148	29.19	MARTINEZ CAMPOS, Miguel	106
HEMATO		228		143	37.28	GARCIA GOMEZ, Juan J.	102
RIO FIEDRAS		33		64	22.89	GULLON Y DABAN, Eduardo	64
CAGUAS		162		127	21.60	ALFAU Y BARALT, Antonio	69
COMO		126		90	28.57	USERA Y MARTIN, Julio	56
UTUADO		113		91	19.47	MARTIN SANCHEZ, Francisco	87
		2,527	310.49	1,660	34.30		
	734,619						

FUENTES: Archivo de las Cortes. Sección de Expedientes, Legajo 105, número 39. Diario de Sesiones de las Cortes, 1890, páginas 4,436 a 4,438.

CUADRO II

(1891)

RESULTADOS POR PARTIDOS

INCONDICIONALES:

DESPUJOL Y RIGALT, Ignacio.....	Vega baja
GALLART Y FORGAS, José.....	San Juan
GULLON Y DABAN, Eduardo.....	Rio Piedras
USERA Y MARTIN, Julio.....	Coamo
ALFAU BARALT, Antonio.....	Caguas
VALLEJO MIRANDA, Angel Ramón.....	Quebradillas
GARCIA GOMEZ, Juan José.....	Humacao
RAMIREZ VERGER Y FABIE, Manuel.....	Arecibo
TORRE Y VEGA, Juan B. de la.....	Aguadilla
MARTINEZ CAMPOS, Miguel.....	Guayama
LASTRES JUIZ, Francisco.....	Mayagüez
MARTIN SANCHEZ, Francisco.....	Utuaado
SALCEDO RUIZ, Angel.....	San Germán

AUTONOMISTAS:

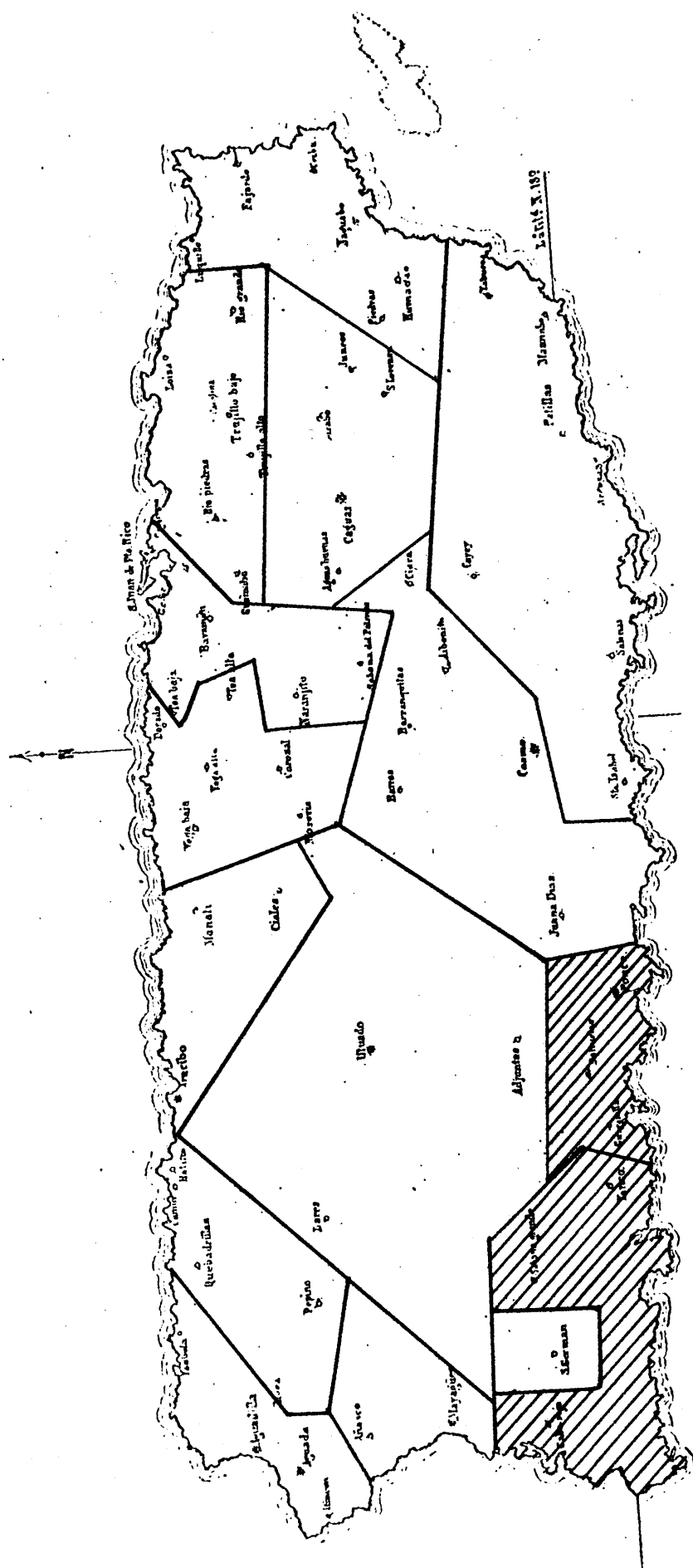
LABRA, Rafael María de.....	Sabana grande
MOYA OJANGUREN, Manuel.....	Ponce

- - - - -



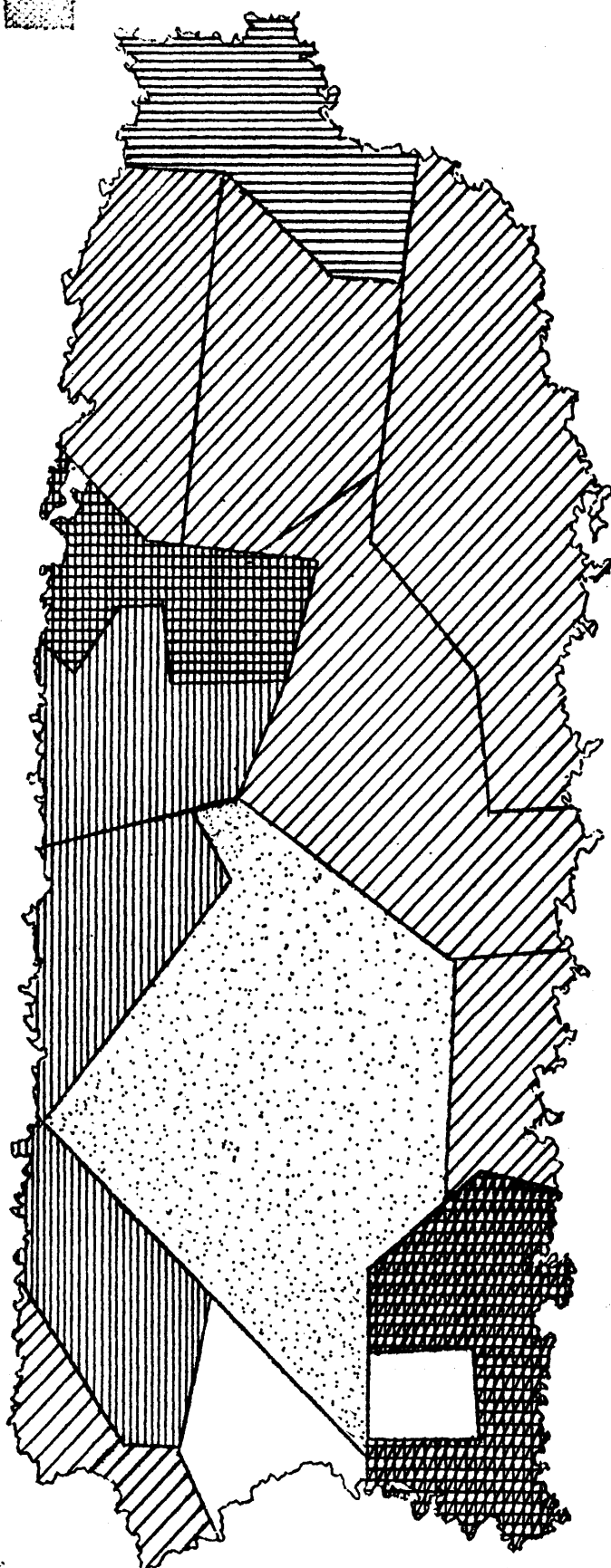
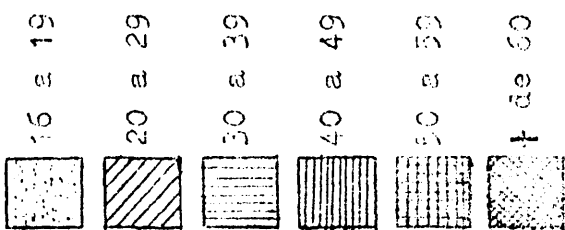
AUTONOMISTAS

(1891)



ABSTENCIONES (1891)

Media: 34.30 %



2.12. LA ELECCION GENERAL DE 1893

A.- La situación política en la Península

1.- Crisis en el Partido Conservador y nuevo Gobierno de Sagasta.-

En 1891 se había producido una excisión en el seno del Partido Conservador peninsular: ante el anuncio de la entrada en el Gobierno de Romero Robledo, dimite Silvela. El carácter de Silvela era ciertamente incompatible con el acomodaticio del antiguo Ministro de la Gobernación.

A esta discrepancia se añadió el asunto del Ayuntamiento de Madrid, en el seno del cual se habían descubierto ciertas irregularidades de las que fueron acusados Bosch, Alcalde de la Capital, y algunos concejales del Ayuntamiento adictos a Romero Robledo (1). Una proposición incidental en el Congreso para que los diputados ratificaran la actitud del Gobierno conservador de Cánovas frente a estas irregularidades no logró ser aprobada y entendiendo el Jefe del Gobierno que esto equivalía a un voto de censura, presentó su dimisión, que la Reina Regente le aceptó, llamando a los liberales de Sagasta para que formaran un nuevo Gobierno (2).

Sagasta lo formó efectivamente en diciembre de 1892, obteniendo también un Real Decreto de disolución de las Cortes conservadoras el día 5 de enero de 1893; las elecciones quedaban señaladas para el día 5 de marzo del mismo año (3).

2.- El Decreto Electoral de 27 de diciembre de 1892.-

El Gobierno formado por Sagasta, llamado "de los Notables" incluía a un joven diputado, D. Antonio Maura, como Ministro de Ultramar. A los pocos días de haber asumido el cargo, publicaba un Decreto relativo a las elecciones en Cuba y Puerto Ri-

co (4).

Las principales innovaciones que introducía este Decreto con relación a la Ley Electoral de 1878 eran, en primer lugar, una nueva división de Puerto Rico a efectos electorales en tres circunscripciones electorales plurinominales, que eran: Capital (3 diputados); Mayagüez (3 diputados), y Ponce (3 diputados), y siete Distritos uninominales: Arecibo, Quebradillas, Humacao, Guayama, Caguas, Coamo y Utuado.

En segundo lugar, se aumentaba a 16 el número de representantes, y finalmente, se reducía a 10 pesos la cuota contributiva que daba derecho al voto. Esta última disposición disgustó profundamente al Partido Autonomista de Puerto Rico, máxime cuando la de Cuba se había fijado por la misma Ley en 5 pesos, dando lugar a la aparición de numerosos artículos de protesta, en los que se acusaba al Gobierno de considerar a los puertorriqueños "ciudadanos de tercera clase" (5).

B.- La situación político-partidista en Puerto Rico

1.- El Partido Autonomista.-

Según se había dispuesto en la reunión de la Delegación del Partido celebrada en Ponce en el mes de enero, se llevó a cabo una Asamblea del Partido Autonomista, pero no en el mes de marzo, sino en el de mayo de 1891, desde el día 15 hasta el 18. (6).

Superada ya, si no zanjada definitivamente, la controversia respecto a la tendencia autonomista del Partido, había comenzado a suscitarse otra en torno a la política electoral a seguir y conectada con este tema, la cuestión de si sería o no conveniente realizar una alianza con algún partido de la Península. Respecto al primer punto, nada había previsto el programa del Partido; respecto al segundo, la decisión había sido de mantenerse al margen de alianzas o compromisos partidistas; no obstante, se dejaba plena libertad para que cada miembro del

Partido, a título particular, pudiera ingresar en cualquiera de los partidos peninsulares que aceptasen la doctrina autonomista (7).

Pues bien; éste constituyó el principal tema de la Asamblea y el punto de partida de una larga serie de controversias y gestiones que desembocarían cinco años más tarde en el acuerdo de fusión del Partido Autonomista con el Liberal de Sagasta.

En nuestra opinión, el motivo de replantear este punto fue debido a una desconfianza de los autonomistas hacia el Gobierno, tanto insular como peninsular, motivada por dos hechos: el primero, el sentido restrictivo y discriminatorio del proyecto de ley electoral de 1889, y el segundo, la constatación de que el Gobierno no estaba dispuesto a inhibirse en los procesos electorales y a permitir, en consecuencia, una libre y espontánea manifestación de la voluntad del cuerpo electoral.

Si bien la Asamblea no aceptó una moción presentada por Luis Muñoz Rivera y José de Diego para concertar una alianza "con el fusionista acaudillado por el señor Sagasta... o con el republicano acaudillado por el señor Castelar", aprobó posteriormente casi por unanimidad otra moción parecida, pero no tan concreta, de Manuel Fernández Juncos, que decía así:

"La Delegación, de acuerdo con el "leader" del Partido, y por medio de los comisionados que ella designe y que éste presidirá, quedan facultados para acordar y realizar inteligencias o alianzas del Partido Autonomista puertorriqueño con los demócratas peninsulares que acepten o defiendan el sistema autonómico-administrativo de las Antillas" (8).

Otros acuerdos de menor importancia logrados en la misma Asamblea fueron acordar un voto de gracias a Labra por los servicios prestados al Partido, al tiempo que se le aclamaba de nuevo "leader" del mismo; trasladar la capitalidad del Partido de Ponce a San Juan, siguiendo así una indicación del propio Labra (9); sostener la publicación en Madrid de un periódico dedicado a la defensa de los ideales autonomistas. Finalmente, la Asamblea pasó a considerar dos mociones de importancia, la

una de Rosendo Bosch para que se aprobara la disolución del Partido como protesta ante la política del Gobierno de la Península que fue derrotada por abrumadora mayoría, y la otra relacionada con la postura del Partido ante las elecciones. Esta última moción estaba redactada en el sentido de acordar el retraimiento del Partido Autonomista de las próximas elecciones como protesta contra la Ley Electoral vigente; fue aprobada con una enmienda de Muñoz Rivera que otorgaba a la Delegación del Partido la facultad de determinar el momento en que el retraimiento debería hacerse efectivo:

"Mereciendo la Delegación elegida la absoluta confianza del Partido, se le autoriza para que acuerde, en el instante que considere oportuno hacerlo, la abstención o el retraimiento colectivo, respondiendo virilmente al propósito de mantener la dignidad política de este pueblo a todo trance y a costa de todos los sacrificios, entendiéndose que la Asamblea acepta en principio estas medidas, dejando a los directores del Partido la aplicación de su criterio cuando lo estime conveniente" (10).

Elegida la nueva Delegación del Partido, así como los miembros del Directorio, se dió por terminada la Asamblea (11).

Tres meses más tarde, el 13 de agosto, se reunía en San Juan la Delegación autonomista para pronunciarse sobre la postura del Partido respecto a las elecciones. No creyó oportuno la Delegación poner en práctica de momento el retraimiento acordado en el mes de mayo, y aprobó una moción para asistir a las próximas elecciones para diputados provinciales. Finalmente, y a propuesta de Julián Blanco Sosa, la Delegación aprobaba una autorización a Labra para que concertase una alianza con alguno de los grupos del Partido Republicano peninsular, cuando lo estimare oportuno (12).

En el mes de diciembre de 1891 el Directorio del Partido hacía público un Manifiesto, en el que exponía un resumen del programa y propósitos del Partido Autonomista, justificando tal publicación a causa de los malentendidos y suspicacias surgidas

en torno al Partido (13).

El acuerdo de la Delegación del Partido autorizando a Labra para concertar una alianza con los republicanos dió origen a un enfrentamiento en el seno del Partido entre los que como Cepeda y Fernández Juncos estaban a favor de la misma, y los que con Muñoz Rivera, Cortón Toro y Mariano Abril se inclinaban, con un sentido más pragmático que dogmático, hacia un pacto con el Partido de Sagasta (14).

La controversia alcanzó alarmantes proporciones al enfrentarse directamente Cepeda desde las páginas de la "Revista de Puerto Rico" con Muñoz Rivérra desde "La Democracia", sin que varios llamamientos del Directorio a la concordia diesen el menor resultado. Solamente terminó cuando Cepeda marchó de Puerto Rico a principios de 1892, con lo que el campo quedaba libre para Muñoz Rivera y su proyecto de alianza con Sagasta, puesto que una ratificación de la facultad concedida a Labra hecha por la Delegación del Partido con fecha 13 de febrero de 1892, no tuvo efectos debido a las censuras que se le hicieron (15).

2.- El Partido Incondicional.-

A principios de 1893 volvía a producirse una crisis en el seno del mismo, ésta vez, sin embargo, mucho más profunda que todas las anteriores hasta el punto de que, indudablemente, marca el ocaso definitivo del Partido Incondicional, a pesar de que siga funcionando todavía por espacio de algunos años.

La oposición estaba capitaneada esta vez por el ex-diputado D. Gregorio Ledesma Navajas, D. Pedro Santisteban Chávarri, D. Ricardo Mendizábal, D. Juan Brussi y D. Ulpiano Valdés. Todos ellos acusaban al Presidente del Partido, D. Pablo Ubarri Capetillo, de egoísmo y arbitrariedad en el mando; afirmaban que esta conducta había producido la fosilización del Partido, que ya no respondía a ningún fin ni político ni económico y finalmente, se pronunciaban contra la práctica del cunerismo, que el Partido

había patrocinado desde su fundación, abogando porque los representantes de la isla fuesen nativos (16).

Por su parte, D. Ulpiano Valdés proponía, para dar nueva vida al Partido, llevar a cabo una alianza del mismo con alguno de los partidos de la Península. Esta proposición no tuvo acogida favorable ni en el seno del Partido Incondicional ni en el Autonomista, a pesar de que más adelante el propio Valdés aclaraba que su intención era la de crear un partido nacional monárquico, fusionando a incondicionales y autonomistas (17).

C.- La convocatoria de elecciones en Puerto Rico.- La campaña electoral.-

El general Dabán y Ramírez de Arellano, Gobernador a la sazón de la isla, publicaba el día 9 de febrero de 1893 la convocatoria de elecciones para diputados a Cortes, señalando las mismas para los días 2 a 5 del mes de mayo (18).

Como ya apuntamos al comienzo de este capítulo, el Decreto electoral de Maura de diciembre de 1892 no satisfizo a los autonomistas, los cuales hicieron saber su opinión al Gobernador interino de la isla, general Delagado Zulueta, en enero de 1892, al tiempo que le adelantaban la posibilidad de que la Delegación del Partido adoptase el acuerdo de no acudir a las urnas como protesta por este Decreto (19). Así sucedió, en efecto, ya que el día 15 de enero se reunía la Delegación y adoptaba el siguiente acuerdo:

- 1.- Mantener en toda su fuerza y vigor el acuerdo de la propia Delegación de 20 de agosto último por el cual se puso en práctica el retraimiento resuelto por la Asamblea de Mayagüez, entendiéndose que tal retraimiento es exclusivamente electoral para toda clase de elecciones en las cuales no tomará parte alguna absolutamente el Partido Autonomista mientras no se consagre en las leyes y en la práctica la absoluta igualdad política y civil de los españoles habitantes de esta isla y los que viven en la Península.

2.- Dirigir en el acto un telegrama al señor don Rafael María de Labra comunicándole el acuerdo anterior y ratificándole sus poderes de "leader".

3.- Publicar un Manifiesto a la Nación exponiendo los fundamentos que dan relieve al agravio con la disparidad de la Ley Electoral y estableciendo solemne protesta contra ella" (20).

Aunque la mayor parte de los autonomistas estimaron acertada la decisión, el Director Político del Partido, D. Julián Blanco Sosa, publicó un artículo en el que proponía la conveniencia de que los autonomistas acudieran a las urnas para apoyar a candidatos que estuvieran dispuestos a promover reformas de tipo económico para la isla (21). Frente a esta propuesta se levantó Muñoz Rivera, logrando que el proyecto de las "candidaturas económicas" fuera desechado y se cumpliera tajantemente el acuerdo de no participar en los comicios.

En el Partido Incondicional, los disidentes intentaron presentar candidaturas propias, frente a la oficial del Partido, con el fin de oponerse a la práctica del cunerismo aceptada por el Partido una vez más, y para lograrlo, postularon candidatos nativos en varios distritos y circunscripciones como en Mayagüez, donde, frente a la candidatura oficial de Lastres, opusieron la de D. Francisco Blanes, al paso que en Carolina, Arecibo y Utuado se organizaba un movimiento para luchar contra las respectivas candidaturas del Partido Incondicional (22).

D.- Los resultados.-

Pese a los esfuerzos hechos por los disidentes y, no teniendo enfrente ningún candidato del Partido Autonomista, los incondicionales lograron triunfar en todos los distritos y circunscripciones de la isla, sin que la oposición y las críticas al cunerismo tuvieran una vez más los resultados apetecidos (23).

E.- Comentarios.-

No ocultaron los incondicionales el júbilo que les habían

producido los resultados y a los pocos días, el Comité Central del Partido a instancias del Presidente y sintiéndose más seguro de su fuerza, procedía a expulsar del Partido a dos de los principales líderes de la disidencia (24). Pero éstos se apresuraron a publicar sendos artículos en "La Correspondencia de Puerto Rico", en los que hacían responsable a D. Pablo Ubarri de tal decisión, calificando de "borregos" y de "buitres" a los que le rodeaban y secundaban; al mismo tiempo le acusaban de haber producido la decadencia del Partido por su conducta egoísta y por su miopía política (25).

En el seno del Partido Autonomista los comentarios se condensaron en un célebre artículo titulado "Aún hay Patria", publicado en "La Democracia" y del que era autor D. Luis Muñoz Rivera. Al tiempo que calificaba de pobre triunfo el conseguido por los incondicionales, dado el corto número de participantes en la Elección, alababa la conducta de los autonomistas por haber mantenido firme y unánime la decisión de no participar en la misma (26).

Por lo que se refiere a los datos cuantitativos, no hemos podido conseguir los totales de electores y votantes, al faltarnos los datos correspondientes en la Circunscripción de Mayagüez y el de electores en el Distrito de Quebradillas. Calculamos, a base de los datos que poseemos, que los electores fueron alrededor de 8,700 y los votantes unos 4,900 aproximadamente (27). De acuerdo con estos datos, podemos estimar el nivel de abstenciones entre un 43 y un 47 %, es decir, más de 10 % de aumento sobre el de la elección anterior. Esta cifra solamente había sido igualada en la Elección de agosto de 1872, cuando los conservadores decidieron un retraimiento prácticamente total, como protesta por lo que entendieron actitud contraria de parte del Gobernador, Mariscal Baldrich.

No tuvo, pues, buen estreno la Ley Electoral de 1892, pese a la buena intención que indudablemente guió a Maura a elaborar-

la y a que mejoraba las condiciones electorales de Puerto Rico. En nuestra opinión, la mala acogida de esta Ley fue debida exclusivamente a una causa más de tipo psicológico que político: la diferencia de cuota en Cuba y Puerto Rico, que hirió profundamente el sentimiento nacional de los puertorriqueños, al considerar que el Gobierno establecía un discrimen contra ellos. Error que pudo haberse previsto y evitado, aunque hubiera motivos de tipo económico que avalasen la cuota diferencial (28).

NOTAS

- 1.- FERNANDEZ AIMAGRO, Melchor. Op.Cit., Tomo II, pág. 176.
- 2.- Ibidem, pág. 180.
- 3.- Gaceta de Madrid, 1893, día 6 de enero.
- 4.- Gaceta de Puerto Rico, 1892, número 157. Gaceta de Madrid, 1892, día 28 de diciembre.
- 5.- "La Democracia", 1893, número 387. Labra afirma que este asunto de la cuota produjo el retraimiento del Partido Autonomista en las elecciones de 1896, y que "los autonomistas de Puerto Rico protestaron ruidosamente contra la calificación de "españoles de tercera clase" que sancionaba el Decreto del Sr. Maura Cf.: "La República ...", pág. 176. Podemos afirmar que también lo fue en esta Elección de 1893, como lo reconocieron expresamente los autonomistas de la isla y el Ministro de Ultramar, Sr. Castellano.
- 6.- PAGAN, Bolívar. Op.Cit., pág. 424 y sgts.
- 7.- El artículo mencionado decía textualmente lo siguiente:

"Dado el carácter local de la unión o partido autonomista, se deja a cada uno de los afiliados en completa libertad para ingresar en los partidos políticos de la Metrópoli, que acepten o defiendan la autonomía de las Antillas; de sustentar sus ideas particulares respecto de la forma de gobierno".
- 8.- LABRA, Rafael María de: "La cuestión colonial...", pág. 275
- 9.- La indicación de Labra estaba contenida en una carta que escribió a D. Julián Blanco Sosa en diciembre de 1888. Cf.: CELIS AGUILERA, José de: "Mi honradez política en COLL Y TOSTE, Cayetano: "Boletín Histórico de Puerto Rico", Tomo IX, pág. 89.
- 10.- PAGAN, Bolívar. Op.Cit., pág. 426.
- 11.- El nuevo Directóριο del Partido quedó formado por las siguientes personas: D. Julián Blanco Sosa, Director Político o Presidente del Partido; D. Juan Ramos, Director Jurídico; D. Manuel Fernández Juncos, Director Económico; D. Salvador Brau, Secretario. Cf.: Ibidem, pág. 427.

12.- La propuesta aprobada quedó redactada en la forma siguiente:

"La Delegación del Partido Autonomista Puertorriqueño en su nombre, haciendo uso de la autorización que le concediera en la Asamblea de Mayagüez, y en vista de los debates que han tenido lugar últimamente en el Congreso de los Diputados, declara:

- 1.- Que jamás se ha considerado el Partido Autonomista fuera del concierto de los partidos nacionales en que tiene un derecho inconcuso a figurar; y a cuya labor y sacrificios en pro de la patria común a todos, ha concurrido siempre al igual que los demás, hasta donde se lo han permitido los medios de que puede disponer.
- 2.- Que se ha considerado y considera dentro de los Partidos Republicanos de la Península para todas las soluciones nacionales de carácter general, aceptando para llegar a esas soluciones los principios, la doctrina y el criterio de dichos partidos, y más esencialmente de aquellos que han reconocido e inscrito en sus programas la autonomía colonial.
- 3.- Que en las cuestiones de carácter puramente local mantiene a la vez el Partido Autonomista su espíritu regional, dentro siempre de la unidad nacional y profundamente penetrado de que el establecimiento definitivo y permanente del régimen autonómico en las Antillas, solo puede ser la obra de la Nación entera y no de una ni de varias facciones de la misma, acepta y solicita el concurso de todos los partidos nacionales sin excluir alguno, ofreciendo a todos igualmente su más decidido apoyo y cooperación para realizar de consuno esa grande obra de inmensa trascendencia.
- 4.- Que con arreglo a estos particulares que cree estrictamente ajustados a las declaraciones hechas por su ilustre "leader", D. Rafael María de Labra, en el importante debate sobre la cuestión ultramarina a que diera lugar la interesante interpelación del Diputado por Ponce, D. Miguel Moya, declaraciones con las cuales está absolutamente conforme esta Delegación, desde luego, autoriza también, por su parte, al Sr. Labra para que, en la forma y oportunidad que estime conveniente, lleve a la práctica la alianza del Partido Autonomista Puertorriqueño con el grupo o grupos del gran Partido Republicano peninsular que su reconocido patriotismo e ilustrado criterio le

aconsejen, determinando las relaciones o vínculos que entre uno y otro deben existir y facultándole ampliamente para celebrar para celebrar con este objeto y el de llenar su misión de "leader" del Partido en la Metrópoli los conciertos y acuerdos que juzgue útiles o indispensables". Cf.: "El Glamor del País, 1891, número 99.

De acuerdo con la anterior propuesta, la Delegación del Partido hacía públicas unas Declaraciones sobre la cuestión electoral el día 31 del mismo mes de agosto. Pueden verse en el Anexo I.

13.- Puede verse este Manifiesto en el Anexo II.

14.- "Por ahora -escribía Mariano Abril en febrero de 1892- no hay que contar con que los republicanos gobiernen a la Nación. Divididos profundamente, odiándose con odio verdaderamente africano, zorrillistas y salmeronianos, federales y posibilistas, carece la República y carecerá por mucho tiempo de la fuerza que podría prestarle la unión de todos sus elementos para derribar la Monarquía. Y no cabe pensar que llegado un momento supremo, todos esos componentes se unan en un solo cuerpo, pues no les separan pequeñas diferencias de forma o procedimiento, sino el orgullo y la ambición personalísima de tres o cuatro jefes que todos a la vez quieren ser presidentes de la república. Y de esta comparsa exceptuamos a Pi y Suñer por ser el único que persigue un ideal noble y científico.

Así pues, el Partido Liberal monárquico está llamado a eternizarse en el poder, porque él solo puede infiltrar en el organismo de la monarquía la savia democrática". Cf.: "La Democracia", 1982, número 356.

15.- "Acuerdo de la Delegación del Partido Autonomista puertorriqueño, de 12 y 13 de febrero de 1892:

Por voto unánime ratificó la Delegación el acuerdo de 13 de agosto de 1891 en que autorizó al Sr. Labra para llevar a la práctica la alianza del Partido Autonomista Puertorriqueño con el grupo o grupos del gran Partido Republicano peninsular, según que su reconocido patriotismo e ilustrado criterio se lo aconsejen.

Y dando un nuevo voto de confianza al "leader", se dispuso comunicarle esta ratificación, dejando a su discreción el indicar la oportunidad en que deba procederse a nombrar los Comisionados, que, según el art. 7 de la Constitución deben, bajo la presidencia del Sr.D. Rafael M. de Labra, intervenir en el expre-

sado concierto.

Y que, en previsión de este caso, se estudien por la Sección Económica y se propongan al Directorio los medios de que, llegada la eventualidad de practicar dichos nombramientos, puedan los nombrados llenar su cometido sin materiales inconvenientes". Cf.: LABRA, Rafael María de: "La cuestión colonial...", pág. 315.

- 16.- "La Correspondencia de Puerto Rico", 1893, número 769.
- 17.- "La Democracia", 1893, número 377.
- 18.- Gaceta de Puerto Rico, 1893, número 14.
- 19.- LABRA, Rafael María de: "La República...", pág. 176.
- 20.- LABRA, Rafael María de: "La Reforma colonial...", pág. 10
- 21.- "La Democracia", 1893, número 392.
- 22.- Ibidem, número 404.
- 23.- Pueden verse los resultados en los Cuadros y Mapas electorales adjuntos.
- 24.- "La Correspondencia de Puerto Rico", 1893, número 809.
- 25.- D. Ricardo Mendizábal publicó un artículo en "La Correspondencia" en el que decía, entre otras cosas:

"¡Pobre D. Pablo y pobres los del Comité! ¡Y cómo se dejan llevar por los Rodines y Rigolettos que están tras la cortina de quienes se asesoran! ¡Pobre D. Pablo, y qué manada de buitres tiene a su lado! ¡Lástima grande que al poco tiempo de ir al Reino de los Cielos no resucitara para que viera cómo esos buitres descuartizaban su cuerpo ya cadáver! Si Santisteban y Mendizábal se han colocado fuera de la agrupación, ha sido para colocarse encima del Comité Central, a excepción del Jefe, porque este infeliz, hace quince meses se halla postrado en cama y cuando yo era muchacho al agarrarme con otro ídem, siempre se ponía por condición, "que en el suelo no se pegaba a nadie"; y estas máximas sigo, por más que ese Jefe aún continúe citando a la Comisión Permanente y Asociados, y firmando asuntos de la Diputación". Cf.: "La Correspondencia", número 812.

Por su parte, D. Pedro Santisteban publicaba un artículo en el siguiente número del mismo periódico, redactado en términos de más alturas:

"Entre el partido que dirigía el Excmo. Sr. Marqués de la Esperanza y el de hoy, la diferencia es tan grande, tan inmensa, que no puede ser más.

Era aquél un partido grande, de ideas amplias y

generosas en que cabían muchos hombres de saber y posición, que poco a poco hemos visto desertar de nuestras filas, y lo han dejado reducido a tal extremo, que son pocos los que caben dentro de él". Cf.: Ibid número 813.

26.- Por el interés de su contenido, reproducimos a continuación íntegramente el citado artículo:

"Si el Partido Incondicional fiara sus triunfos apoyo de la opinión pública y aspirase a una grande duradera popularidad, bajaría hoy la frente avergonzándose de su descrédito y lamentando su impotencia.

Veinte años de absoluta dominación no bastan a crearle mayoría en los comicios. Falsificó los censos monopolizó los cargos influyentes, proscribió a sus adversarios; empleó todos los ardides, acudió a todas las cábalas, y aún así no puede luchar sin que la violencia le acompañe, el privilegio le escude y la injusticia le sostenga.

Comarca tan rica y próspera como ésta comarca de Ponce, en que existen 856 electores, solo les da 325 sufragios. Circunscripción tan extensa como ésta circunscripción del sur en que hay 1,775 votantes, solo les da 721 votos. De suerte que las tres quintas partes del cuerpo electoral permanecen retraídas, obediendo al mandato del Directorio y al consejo de la prensa.

Los diputados electos no representan, pues, al país; representan a un grupo exiguo de gentes audaces que, con el antemural de la fuerza y con la ventaja del monopolio, se yerguen sobre el país que los soporta o los desdén.

No se avergonzarán los incondicionales ni sus insignes diputados. Ellos van por cualquier medio al fin que consiste en mantener aquí su predominio innoble, inmoral y pernicioso.

Incluyeron en las listas un centenar de comerciantes sin comercio, se agitaron sin óbices en estos días y llegan a 721 votos en el escrutinio.

Cuanto a nosotros, cumplimos aplaudir con entusiasmo fervor a nuestros hermanos en la idea, que nunca han ofrecido más amplio testimonio de vitalidad y de abnegación.

Ni un solo liberal se ha deshonrado esta vez. La disciplina es completa y nadie pretendió vulnerarla pervertirla.

Firmes sobre las armas, vigilando las mesas, reuniendo los Colegios o tranquilos en el fondo de sus hogares, nuestros correligionarios muestran que saben

despreciar a los que recortan sus derechos y prescindir de las Cámaras españolas que no hacen honor a la mansedumbre y a la fidelidad.

Ha sido éste un espectáculo formidable.

Solicitaba a nuestros hombres una candidatura independiente y simpática como la del Sr. Cervantes, y les requería con empeño; irritábale el vocerío conservador con sus alardes de fuerza y sus pujos de diplomacia; sentíanse capaces de copar la circunscripción entera por su entusiasmo y por su número; comprendían las conveniencias de la lucha política en las altas esferas del Estado, y permanecían en silencio, graves sombríos, como aquel que realiza al mismo tiempo un sacrificio por la patria y un acto de homenaje al decoro colectivo.

La protesta ha sido unánime.

En el Congreso no se escuchará la palabra de Puerto Rico.

Olvidamos los grandes intereses económicos vinculados en esta tierra, los grandes intereses sociales que encarna nuestra doctrina y venimos a salvar la dignidad, ya que ninguna otra es posible poner a flote después de este naufragio cien veces maldito.

Al escribir nuestro artículo "El Insulto", conociendo al país cual le conocemos, ni un instante dudamos de que el retraimiento adquiriría los caracteres de una manifestación solemne y hoy nos sentimos orgullosos de aquella iniciativa tan rápida y tan energicamente secundada por casi todos los Comités autonomistas.

No debe pedirse más civismo a un pueblo, ni más consecuencia ni más altivez de espíritu.

Con ta sólida base ¿qué mucho si aspiramos a un reconocimiento inmediato y a una victoria decisiva?

Aún hay Patria; aún es lícito soñar días de reivindicaciones fecundas. Cruda guerra hemos de sostener contra los que pretenden anonadarnos; pero el laurel será nuestro si persistimos en el ataque y esforzamos la embestida.

A veces el negro pesimismo nos invade, el horizonte se nubla a nuestros ojos y el desencanto se enseña a nuestra alma; pero al ver que todavía quedan liberales de temple en el terruño, renace el ardor juvenil, se despierta el instinto de la resistencia y buscamos ansiosos en el porvenir un remedio a nuestros dolores.

Aunque la cuota insultante subsista y perdure, aunque España nos obligue a prolongar el retraimiento

aunque lleguemos a la desesperación, mientras detrás de nosotros se alce una falange de combatientes por el ideal, lucharemos con brío hasta romper los últimos baluartes de un sistema decrepito y caduco.

¿Se mantiene en la ignorancia al campesino? Pues nosotros le llevaremos el periódico que le enseña a conocer la Patria y a amar la libertad.

¿Se vulneran los derechos del ciudadano? Pues nosotros acusaremos a cuantos osen poner su diestra corrompida en el tabernáculo augusto de las leyes.

¿Se crean dos castas desiguales y antagónicas? Pues nosotros caeremos junto a la casta de los que sufren la opresión y lloran la miseria.

Tiempos vendrán en que las cadenas se rompan y en que los siervos se conviertan en señores. Sobre la superficie de este planeta ningún mal es eterno; ningún despotismo durable; ninguna infamia permanente ni segura.

Unanse en haz apretadísimo los puertorriqueños que idolatran a su país; aprendan a sacrificar en sus deberes patrióticos una mezquina proporción de sus lucros; sométanse a un plan inteligente y práctico; no desmayen jamás, no retrocedan nunca y llegarán a las cumbres que ambicionan.

Para nosotros las elecciones significan una manifestación pasiva de nuestro poderío; manifestación halagadora y espléndida en cuyo seno palpitan esperanzas inmortales.

¡Aún hay Patria!

27.- Los datos que tenemos para dos circunscripciones y seis de los siete distritos dan los siguientes totales: electores 6,977 y votantes 3,725.

28.- Para una explicación de la relación entre las cuotas y el diferente sistema de tributación en Cuba y Puerto Rico pueden verse las diferentes intervenciones de los diputados en el Congreso, con motivo de la discusión del proyecto de Ley Electoral de 1889. Cf.: Diario de Sesiones de las Cortes, Legislatura de 1889-90, pág. 3979 y sgts.

ANEXO I

"Declaraciones de la Delegación Autonomista de Puerto Rico de 31 de Agosto de 1891:

La Delegación provincial, usando las facultades que le confiriera la última Asamblea general del Partido, en sesión del día 13 del corriente, a que asistieron, bajo la presidencia del Delegado por la Capital que suscribe, los señores licenciado D. Manuel F. Rossey, por Arecibo; licenciado D. Salvador Amell, por Aguadilla; D. Francisco Mejía por Sabana grande; Dr. D. Francisco del Valle Atilés, por Guayama; D. Manuel Fernández Juncoos, por Humacao; Dr. D. José Gómez Brioso, por Caguas; y D. Salvador Brau, por Río Piedras, se ha servido declarar la inoportunidad de abstenerse o retraerse, en estos momentos, de su activa labor política la colectividad, y en consecuencia han de disponerse los correligionarios para intervenir, personal y eficazmente, en las elecciones para diputados provinciales a que convoca el decreto del Gobierno, inserto en la "Gaceta Oficial", a 29 del corriente.

Al establecer el anterior acuerdo, debió atenderse la Delegación a su propio criterio, fortalecido por los consejos del "leader", informado por las exigencias de los intereses económico-administrativos de la provincia y formulado al unísono por una mayoría de ocho votos entre los nueve concurrentes al acto. Llamado este Directorio que tengo la honra de presidir a hacer ejecutivo dicho acuerdo, ha de reclamar para ello la cooperación ineludible, activa y vigorosa de todos los correligionarios en general, y muy en especial de los comités locales de la Capital, Bayamón, Aguadilla, Cabo rojo, Patillas, Guayanilla, Cayey, Utuado, Marías, Guayama, San Sebastián, Humacao, Manatí y Yauco, donde han de verificarse las elecciones.

Dichos Comités procederán desde luego a la designación de candidatos, en la forma prevenida por nuestra Constitución orgánica, si se hallase el distrito en condiciones hábiles para la lucha, o informarán al Directorio de las circunstancias que a su juicio puedan imponer la abstención local, consultando así en ese caso como en cualquier otro que a las elecciones se contraiga, la resolución o acuerdo de carácter público o reservado que se trate de establecer a fin de imprimir la mayor cohesión posible a la campaña.

No ha olvidado este Directorio todo el civismo de que el Partido Autonomista ha sabido dar pruebas en cuantas

ocasiones ha sido llamado a ejercitar públicamente sus derechos políticos; sin embargo, cumpliendo en todas sus partes el acuerdo de la Delegación, está en el caso de someter a conocimiento de los correligionarios las siguientes

ADVERTENCIAS

1. En todos los distritos donde se establezca la lucha, se ejercitarán y mantendrán por los autonomistas, con toda energía, los derechos taxativamente prescritos, pero sin apartarse en lo más mínimo del orden y la legalidad.
2. Si las violencias o abusos se extremasen hasta el punto de hacer imposible el ejercicio del derecho, sin producir grandes conflictos, se retirarán los correligionarios del palenque, formulando en la debida forma las consiguientes protestas, procurando en todo caso comprobar los abusos, coacciones y demás hechos justiciables que puedan tener lugar, y llevando ante los Tribunales de justicia a los infractores de la Ley.
3. El Directorio se propone secundar esas gestiones con toda solicitud, ejercitando todas las que sean necesarias ante los centros oficiales respectivos de esta capital y el Supremo de Madrid, hasta obtener el desagravio de la Ley y de los derechos que fuesen conculcados.

Al efecto, y como preparación preliminar, se acercará al Gobierno general para suplicarle se sirva dictar a las autoridades subalternas que han de intervenir en los comicios, las medidas necesarias para garantizar la imparcialidad de que ha menester la libre emisión del sufragio por los ciudadanos.

Asiste a este Directorio conocimiento perfecto de las dificultades con que ha de tropezar este acuerdo al ser llevado a la práctica, dada la situación en que se halla colocado el Partido por las preferencias oficiales concedidas a la colectividad adversa; pero entiende que esas dificultades agravarían su pesadumbre con el abandono absoluto, por nuestra parte, de los comicios, pues que, aprovechándose de ese abandono nuestros adversarios, ocuparían sin obstáculo todos los puestos de Diputados provinciales, asegurándose durante cuatro años por lo menos, la exclusiva intervención en los presupuestos, repartimientos y demás asuntos económicos que a la provincia corresponde gestionar, sin que a la fiscalización y censura nuestra quedase de modo campo oficial para ejercitar siquiera una protesta.

En tal virtud suplico, a nombre del Centro que me honro en presidir, a todos los señores Presidentes y Vocales de los Comités respectivos, así como a todos los autonomistas en general, procuren inspirarse en las anteriores ad-

vertencias, ciñéndose patrióticamente a su espíritu y letra, y procurando informar en la más correcta disciplina su cumplimiento, en la seguridad de que el Directorio, correspondiendo a la confianza que en él ha depositado el Partido, y al vigor que la colectividad le preste, sabrá colocarse a la altura de su deber.

Dios guarde a ustedes muchos años.

Puerto Rico, 31 de Agosto de 1891.- El Director Político, JULIAN E. BLANCO.

A los Sres. Presidentes de Comités locales y al Partido Autonomista en general".

FUENTE: LABRA, Rafael María de: "La Autonomía colonial en España", páginas 300 a 303.

ANEXO II

"Manifiesto del Directorio del Partido Autonomista portorriqueño de 19 de diciembre de 1891:

Publicada y circulada la Constitución del Partido con las modificaciones introducidas en su texto por la Asamblea general celebrada en Mayagüez en los días 15 al 18 de mayo último, considera oportuno este Directorio dirigirse con tal motivo a sus correligionarios.

Ante todo llama su atención sobre el importantísimo punto de no haberse introducido variante alguna en el "Ordo del Partido", tal como fuera definido y proclamado por la Asamblea de Ponce en marzo de 1887. El respeto a la declaración de principios hecha entonces, se ha llevado al extremo de no variar una letra de los términos en que allí fue redactada, por más que se indicara la conveniencia de hacer algunas correcciones puramente literarias en su forma o estilo. Unicamente se ha variado el artículo 7 del título 1 de la Constitución, que en rigor no afecta a los principios, puesto que en él solo se establece esencialmente que la Delegación y el "leader" del Partido quedan facultados para convenir y realizar, de común acuerdo, inteligencias o alianzas del mismo con los demócratas peninsulares que acepten o defiendan el sistema autonómico administrativo de las Antillas.

Las ideas, las aspiraciones y los procedimientos de nuestra colectividad son, pues, los mismos que en plena luz ha venido profesando y propagando desde que en la memorable Asamblea de Ponce los inscribió en su bandera, desplegada a todos los vientos de la publicidad.

Su ideal primero es la identidad política y jurídica con nuestros hermanos peninsulares; su aspiración segunda, la mayor descentralización posible dentro de la unidad nacional y la forma clara y concreta de una y otro, el régimen autonómico-administrativo, fundado en la representación directa de los intereses peculiares de esta región por las respectivas corporaciones locales, de elección popular, y la responsabilidad, también directa, de los que tengan a su cargo el ejercicio de las funciones públicas en lo que toca a la administración puramente interior o local.

Nuestro Partido no pretende el gobierno, sino la administración del país por el país. Así pide que en él se resuelvan definitivamente por la Autoridad competente los asuntos administrativos locales, y que esas resoluciones se dicten con el concurso, no de un grupo de favoritos, si-

no de los habitantes todos de la isla, sea cual su precedencia y su matiz político.

Nuestro Partido, lejos de tender al quebrantamiento de la unidad nacional, ni de pretender privilegios para Puerto Rico, aspira a que dejen esos privilegios que en su daño disfrutaban nuestros adversarios y las provincias peninsulares, y a estrechar y robustecer aque-
unidad, destruyendo la desigualdad y la injusticia, que las que engendran las revoluciones, y proclamando la identidad política y jurídica, dentro de la cual deben regir en la España americana, como en la europea, la propia titución, la propia Ley Electoral y las mismas leyes todas que en la Metrópoli regulan, afirman y garantizan el pleno ejercicio de los derechos consagrados en el Código fundamental; de modo que, en punto a la condición civil y política, sean absolutamente iguales el ciudadano portorrique y el de cualquiera de las provincias de la Península.

Nuestro Partido, al solicitar la descentralización administrativa, aspiración común a todos los partidos nacionales que rinden culto a los verdaderos principios democráticos, pide no más que se reserven a nuestra Corporación provincial las cuestiones de puro interés local, que afectan privativamente a esta región, y que solo deben y pueden ser resueltas con acierto y justicia por aquellos a quienes exclusivamente interesan. Tales son la formación de nuestro presupuesto local de ingresos y gastos, sin perjuicio de las atribuciones de las Cortes, en lo que se refiera al supuesto nacional, y todos aquellos asuntos que dentro de la isla, y sin salir de ella, se contraigan a la Instrucción pública, Obras públicas, Sanidad, Beneficencia, Agricultura, Bancos, Formación y policía de las poblaciones, migración, Puertos, Aguas, Correos, Impuestos, Aranceles y Tratados de comercio, subordinados siempre estos últimos a la aprobación del Gobierno Supremo.

Nuestro Partido, por último, reconoce la soberanía de la Nación española de que formamos parte, y el imperio que le corresponde sobre esta Antilla, como sobre todas las más porciones de su vasto territorio en ambos hemisferios; en cuya virtud son y serán siempre de su competencia exclusiva la resolución de todo lo relativo al Ejército, Marina y Tribunales de justicia, Representación diplomática y Administración general del país, señalando a esta comarca el cupo con que debe contribuir a cubrir los gastos del presupuesto general del Estado; llevando la dirección de la política general; velando por la fiel observación de las leyes; resolviendo todos los conflictos entre corporaciones y entidades; nombrando y separando con arreglo a las leyes generales de la Nación, a sus representantes en las diversas esferas de los Poderes públicos, y conservando la fa-

cultad de suspender y anular los acuerdos de la Diputación insular, cuando lleven el vicio de incompetencia, o sean contrarios a los intereses nacionales.

Acaso parecerá inútil o redundante esta nueva exposición de los principios y aspiraciones únicas de la colectividad autonomista, consignados como están con toda claridad, en nuestra Constitución; pero no cree superfluo el Directorio recordarlos cuando a cada paso parecen olvidarse por nuestros detractores, cuando uno y otro día la insidia y mala fe persisten en atribuirnos fines y doctrinas abiertamente contrarios a los que perseguimos y profesamos, y cuando las impaciencias y exageraciones de irreflexivos correligionarios unas veces, y otras la perfidia e hipocresía de los que, fingiéndose tales, han pasado por nuestras tiendas con aviesos propósitos, han servido y sirven de pretexto para crear en torno de nuestro Partido una atmósfera artificial de suspicacias indignas y de estópidos celos, que nos importa desvanecer.

Los partidos políticos no son campo cerrado en que se necesite permiso alguno para entrar ni salir; cada cual es dueño de llamarse autonomista sin serlo, y al Partido no le es dado impedirlo; pero sí tiene el derecho y el deber de rechazar, como rechaza enérgicamente, toda solidaridad y comunión con los procaces que abusen de su nombre para comprometerlo, y de proclamar muy alto que no son tales autonomistas, ni tienen nada de común con éstos los que abrigar otros principios y alimentan otras aspiraciones distintas del espíritu y letra de nuestro credo, ni los que para realizarlos se valgan o intenten valerse de procedimientos que no sean los de la más estricta legalidad, a que nuestro Partido rinde profundo acatamiento, reconociendo, como reconoce ante todo y sobre todo, la soberanía nacional y el imperio de sus leyes.

El capítulo 1º del título II, relativo a la prensa liberal, considerada como uno de los organismos del Partido, tampoco ha sufrido otra variante que la adición del artículo 8 en que se declara el propósito de sostener en Madrid un periódico dedicado a la defensa de nuestros ideales, dirigido a ser posible por el "leader", y a cuyo sostenimiento acudirá el Directorio por los medios que creyere más convenientes. De ello se ha ocupado y ocupa éste hasta donde se lo permiten los elementos puestos a su disposición, sin que, por lo que hace a esta idea, se haya creado ni exista hasta ahora ningún órgano especial, oficial ni oficioso en la prensa. Sus órganos en ella, y como tales los más importantes del Partido, son todos los periódicos cuyos publicistas profesan y propagan nuestros principios, ilustrando con sujeción a ellos nuestra conducta, y sosteniendo las decisiones de nuestras Asambleas y Comités, según el artículo

2; los que sean consecuentes con el Partido en todas las cuestiones de principios, y particularmente en los períodos electorales, según el artículo 4; los que se ajusten, en fin, a los procedimientos y límites fijados en los artículos 5 y 6. Fuera de esos límites, según el 7, cualesquiera que sea la denominación que hayan adoptado esos periódicos y sus campañas anteriores, obran por su propia cuenta y bajo su exclusiva responsabilidad. No son órganos del Partido, por más que así se apelliden o con él tengan afinidad.

La prensa autonomista tiene el derecho de emplear con entera independencia la crítica racional, cuando, fundada-mente o no, pero de buena fe, crea que el Partido sufre detrimento por los actos de nuestros Comités y de nuestros hombres. Está asimismo dentro de su órbita, censurando con más o menos severidad, pero sin pasión ni acritud, los actos de la administración y la conducta pública de los empleados en el ejercicio de sus funciones, siempre que lo merezcan. Presta igualmente un servicio al Partido y al país sosteniendo polémicas con la prensa adversaria y aún con los propios correligionarios, en tanto que la discusión se mantenga en la región serena de los principios; que ella verse sobre objetos y asuntos de interés o utilidad general y que en sus formas se guarden las reglas de la buena educación y se respeten los fueros de la verdad y las convenciones sociales.

Pero cuando éstas se desatienden y aquellos se olvidan; cuando al suave roce de las ideas se sustituye el rudo choque de las pasiones desenfrenadas, y en vez de discutir sobre los arduos problemas político-económicos y sociales que están reclamando nuestro estudio, se pierde el tiempo y se derrocha el ingenio en disputas bizantinas y acaloradas sobre asuntos fútiles y baladíes; cuando a las fórmulas cultas y corteses reemplaza el insulto y la difamación, y en vez de la crítica mesurada y reflexiva se esgrime la virulenta diatriba y el sarcasmo sangriento; y los altos intereses del Partido y de la Patria se sacrifican a ruines concupiscencias, y en vez de predicar la unión y la concordia entre los afiliados, se les excita a dividirse en facciones y banderías puramente personales, y al inefable sentimiento del amor que atrae, se sobreponen el odio que repele y la cólera que ciega las inteligencias más claras, hasta el punto de desconocer y desnaturalizar grandes servicios prestados y merecimientos insignes contraídos en época aciaga de tristísima recordación, cayendo en el mismo feo vicio que condenara en nuestros adversarios de penetrar en el sagrado de las intenciones, ora imputando defecciones inverosímiles, ora convirtiéndose en apasionada delatora de traiciones imaginarias; cuando a tal punto se olvida la prensa de su misión docente y moralizadora, esa prensa no es auto-

nomista, y lejos de tener derecho a las simpatías y a la cooperación del Partido, sólo puede ser acreedora a su más completa reprobación.

Es también ésta la oportunidad de combatir una propaganda que el Directorio no vacila en calificar de errónea. Así como es injusto imputar a España los errores de sus Gobiernos y hacer recaer sobre éstos la culpa de los ciudadanos, es obvio que ni el Partido ni sus directores son ni pueden ser responsables de los excesos ni de las faltas en que pueden incurrir personalmente sus afiliados, y mucho menos los que, blasonando de autonomistas, contradicen ese título con sus actos y predicaciones.

Al Directorio no incumbe tampoco intervenir en las querellas particulares de los periódicos que dirigen o editan nuestros correligionarios, ni asumir el cargo, que no se le ha confiado ni acepta, de censor de tales publicaciones, ni mucho menos le corresponde anatematizar o excomulgar a determinados publicistas acusados por otros de heterodoxos, y que por el mismo hecho de serlo o suponerseles tales, se hallarían fuera de la jurisdicción de los directores del Partido. Conociendo como conocen éstos su misión, a la que procuran ceñirse estrictamente; consecuentes con los principios democráticos y aborreciendo por ende toda clase de dictaduras, de ningún modo han de prestarse a ejercer la más odiosa de todas; propósito que, por otra parte, sería tan insensato como ridículo e ineficaz. Los ataques a la opinión, de que la prensa es órgano, se corrigen por la opinión misma, retirando su aplauso y su concurso a los que pecan contra ella.

El Directorio encarece finalmente a todos los correligionarios la absoluta necesidad y la incuestionable conveniencia de llenar las demás prescripciones de la Constitución, tendentes a mejorar la organización del Partido, imprimirle actividad y regularizar sus trabajos y su marcha. No se le ocultan los inconvenientes que a esa labor opone la especie de aplanamiento en que se encuentra, al parecer, nuestra colectividad; situación que obedece, más que al desaliento causado por las decepciones sufridas y otras razones puramente locales, al marasmo general que en estos momentos experimenta toda la política española, y a cuyos efectos no podemos substraernos los autonomistas, siendo, como somos, uno de los factores de esa política, y por consiguiente un miembro de ese organismo enfermo y achacoso.

Pero no se amilanen ni desfallezcan nuestros amigos. A esa aparente postración en que también se hallan nuestros adversarios -y que equivale al reposo impuesto inevitablemente por la naturaleza después de grandes luchas, para que la reacción se establezca y el cuerpo pueda recuperar las agotadas fuerzas- ha de suceder un período de gran movimien-

to y agitación, que será como el despertar de todas las actividades adormecidas; y hay que estar prevenidos para que no nos sorprenda ese sacudimiento, que así en el orden moral y político como en el físico, es inevitable.

El Directorio recomienda, por lo tanto, muy especialmente la creación de los correspondientes comités en las localidades donde aún no se han constituido; la apertura y sostenimiento en todos de los registros de sus respectivos afiliados, no sólo con un fin puramente económico, sino con el de evitar que se les confunda con los sectarios reales o supuestos de aspiraciones ilícitas; la recaudación entre aquellos de las cuotas con que deben contribuir para atender a los gastos imprescindibles de la comunidad; la constante revisión de los censos electorales para depurarlos de los vicios de que adolecen, restableciendo la verdad en ellos, sin lo cual no es posible la lucha en los comicios cuando llegan los períodos de sostenerla, apesar de tener la mayoría de nuestra parte; y en una palabra, cuanto conduzca a fortalecer el Partido, y colocarlo en condiciones de llenar los patrióticos y levantados fines con que naciera a la vida pública, haciendo que todos los que a él se honran de pertenecer contribuyan en la medida de sus facultades y de sus aptitudes a la obra común. No basta proclamarse autonomista ni ser platónico amante de sus bellísimos y fecundos ideales; hay que demostrar ese afecto prácticamente con las obras, y es de mayor conveniencia deslindar claramente los campos, separando la cizaña del trigo, y alejando de nuestra colmena a los que, cual zánganos, solo sirven para perturbar la labor de los autonomistas activos y entusiastas, cuando no para comprometerlos con sus inconveniencias, y para devorar el fruto de las conquistas y de la perseverante solícitud de los últimos.

A pesar de todos los escollos y dificultades atravesadas en nuestro camino, que en ocasiones ha sido un largo y doloroso viacrucis, el Partido Autonomista sigue siempre adelante su marcha majestuosa, acercándose más y más cada día a la ansiada meta de sus legítimas aspiraciones. Los últimos debates sobre las cuestiones antillanas ocurridos en el Parlamento, así lo demuestran, revelando el avance formidable que en la opinión pública de la Península (que en definitiva es la que ha de resolver nuestro pleito) han alcanzado las ideas y los principios de la colectividad. Perseveremos, pues, en ellos con profunda fe y constancia inquebrantable; tomemos ejemplo de nuestro ilustre "leader" secundemos sus esfuerzos y los de su eximio cooperador en las Cortes y en la prensa de Madrid, el diputado por Ponce, D. Miguel de Moya; no nos apartemos ni una línea de los procedimientos pacíficos, ordenados y estrictamente legales

que hemos seguido siempre, y, estad seguros de ello, en no lejano día el triunfo decisivo será nuestro.

Puerto Rico, 19 de Diciembre de 1891.- JULIAN E. BLANCO.-JUAN RAMON RAMOS.- MANUEL FERNANDEZ JUNCOS.- SALVADOR BRAU, Secretario.

FUENTE: LABRA, Rafael María de: "La Autonomía colonial en España", páginas 304 a 314.

ANEXO

Nueva división electoral de Puerto Rico
(Real Decreto de 27 de diciembre de 1892)

CIRCUNSCRIPCION DE LA CAPITAL: CIRCUNSCRIPCION DE MAYAGUEZ:

San Juan	Mayagüez
Bayamón	Hormigueros
Naranjito	Cabo rojo
Sabana del Palmar	Lajas
Toa baja	San Germán
Corozal	Maricao
Dorado	Las Marías
Toa alta	Añasco
Vega alta	San Sebastián
Vega baja	Rincón
Carolina	Aguada
Loiza	Moca
Rio grande	Aguadilla
Rio Piedras	
Trujillo alto	

CIRCUNSCRIPCION DE PONCE:

Ponce
Guayama
Sabana grande
Yauco
Peñuelas
Adjuntas
Juana Díaz
Barros

DISTRITO DE ARECIBO:

Arecibo
Manatí
Barceloneta

DISTRITO DE QUEBRADILLAS:

Quebradillas
Camuy
Hatillo
Isabela
Lares

.../...

DISTRITO DE GUAYAMA:

Guayama
Arroyo
Maunabo
Patillas
Salinas
Yabucoa

DISTRITO DE UTUADO:

Utuaado
Ciales

FUENTE: Gaceta de Puerto Rico,
1892, número

DISTRITO DE HUMACAO:

Humacao
Ceiba
Fajardo
Luquillo
Naguabo
Piedras
Vieques

DISTRITO DE CAGUAS:

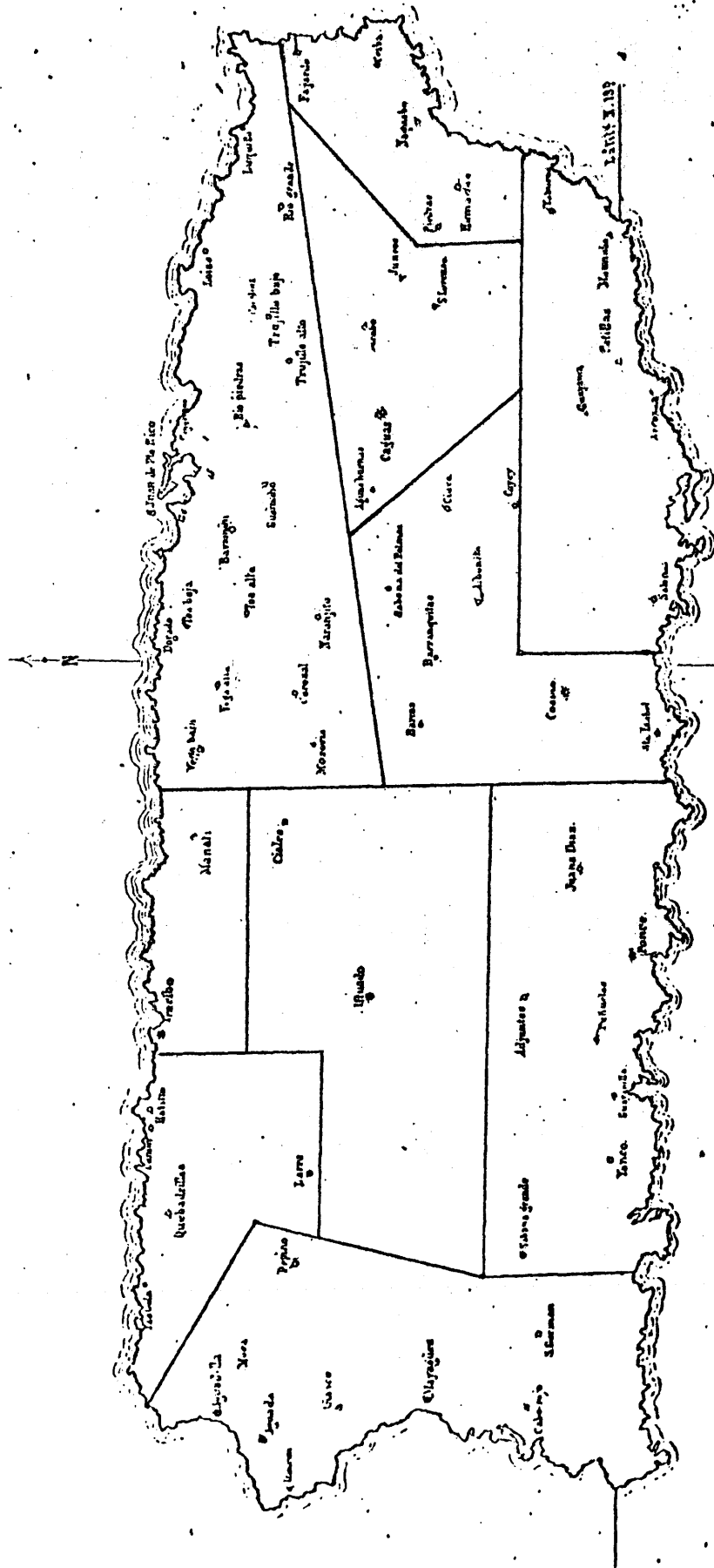
Caguas
Aguas buenas
Gurabo
Hato grande
Juncos

DISTRITO DE COAMO:

Coamo
Aibonito
Barranquitas
Santa Isabel
Cidra
Cayey

NUEVA DIVISION ELECTORAL DE PUERTO RICO

(Real Decreto de 27 de diciembre de 1892)



ANEXO

"Alteraciones que ha sufrido el número de circunscripciones o distritos y el de señores diputados.- Puerto Rico:

Para la presente Legislatura, primera de las Cortes convocadas en 4 de febrero de 1893 y reunidas en 5 de abril, esta isla, por virtud de la reforma de la Ley electoral para la elección de diputados a Cortes en las islas de Cuba y Puerto Rico... ha elegido 16 señores diputados en las circunscripciones y distritos que a continuación se expresan:

Circunscripción de San Juan.....	3
Idem de Ponce.....	3
Idem de Mayagüez.....	3
Distrito de Arecibo.....	1
Idem de Quebradillas.....	1
Idem de Guayama.....	1
Idem de Humacao.....	1
Idem de Caguas.....	1
Idem de Coamo.....	1
Idem de Utuado.....	<u>1</u>
Total.....	16

FUENTE: Diario de Sesiones de las Cortes, 1892, Tomo XIII, pág. 543.

RESULTADOS

(1393)

<u>CIRCUNSC.</u>	<u>POBLACION</u>	<u>ELECTORES</u>	<u>RELACION Hab/Elec</u>	<u>VOTANTES</u>	<u>ABST.</u>	<u>CANDIDATOS ELEGIDOS</u>	<u>VOTOS</u>
SAN JUAN	143,807	2,173	66.17	1,110	48.91	GULLON Y DABAN, Eduardo	796
						GARCIA MOLINAS, Francisco	761
						MUJANO FERNANDEZ, Gilberto	729
PONCE	143,000	1,775	80.56	719	59.49	SOLER Y CASAJUNA, Luis	470
						MELLADO Y LEGUEY, Fernando	460
						GASCON, Juan Francisco	457
MAYAGUEZ	162,895	---	---	---	---	LASTRES Y JULIE, Francisco	965
						TORRE Y VEGA, Juan B. de la	946
						BALBAS Y CAPO, Vicente	540
<u>DISTRITOS</u>							
ARECIBO	47,219	532	88.75	263	50.56	DIAZ CANEJA Y ALONSO, Ignacio	263
QUEBRADILLAS	54,164	---	---	215	---	SANTOS Y FERNANDEZ LAZA, José	215
GUAYAMA	52,520	456	115.17	269	41.00	MARTINEZ DE CAMPOS, Ramón	269
HUACAC	58,101	586	99.14	360	38.56	GARCIA GOMEZ, Juan José	360
CAGUAS	48,421	445	108.81	171	61.57	ALFAU Y BARALT, Antonio	154
COAMO	44,281	546	81.10	236	47.61	CORRALES MOVEDO, Enrique	236
UTUADO	44,157	464	95.16	322	30.60	MARTIN SANCHEZ, Francisco	165
	798,565	8,700*	97.66	4,900*	47.28		

FUENTES: Gaceta de Puerto Rico, 1893, números 16 al 29 y 48. Archivo de las Cortes. Sección de Expedientes Legajo 107, número 42. Diario de Sesiones de las Cortes, 1890, Apéndice 1 al número 161.

* Estimado

CUADRO II

(1893)

RESULTADOS POR PARTIDOS

(Abstención de los Autonomistas)

INCONDICIONALES:

SOLER Y CASAJUANA, Luis.....	Ponce
GASCON, Juan Francisco.....	"
MELLADO LEGUEY, Fernando.....	"
GULLON Y DABAN, Eduardo.....	San Juan
GARCIA MOLINAS, Francisco.....	"
QUIJANO FERNANDEZ, Gilberto.....	"
LASTRES JUIZ, Francisco.....	Mayagüez
BALBAS CAPO, Vicente.....	"
TORRE Y VEGA, Juan B. de la	"
DIAZ CANEJA, Ignacio.....	Arecibo
ALFAU BARALT, Antonio.....	Caguas
MARTIN SANCHEZ, Francisco.....	Utuado
SANTOS FERNANDEZ LAZA, José de.....	Quebradillas
GARCIA GOMEZ, Juan José.....	Humacao
CORRALES MOVEDO, Enrique.....	Coamo
MARTINEZ CAMPOS, Ramón.....	Guayama

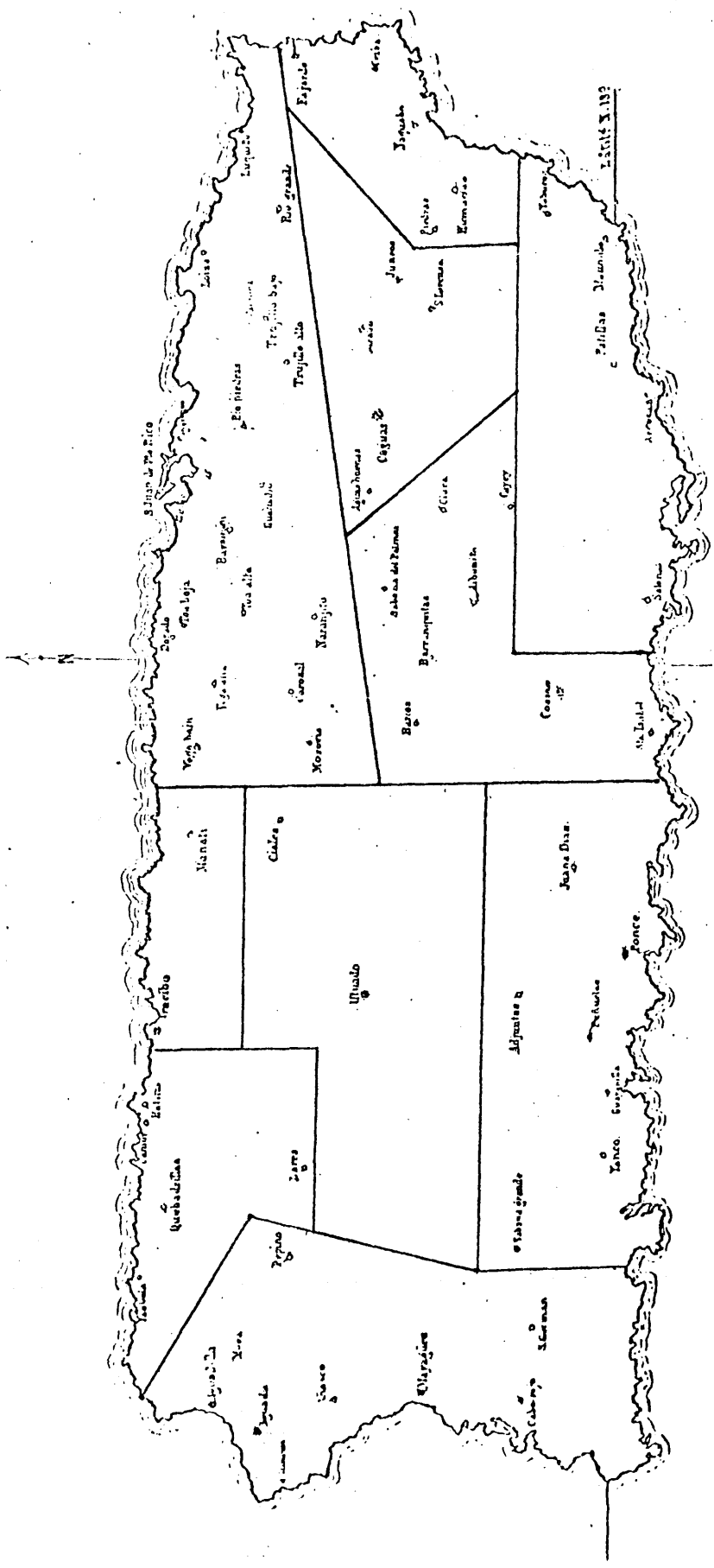
- - - - -

CONSERVADORES

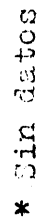


AUTONOMISTAS

(1993)



10044: 47.20 20



2.13. LA ELECCION GENERAL DE 1896

A.- La situación política en la Península

1.- División en el Gobierno de Sagasta y formación de uno nuevo por Cánovas.-

Dos problemas exteriores se le plantean al Gobierno en toda su magnitud a finales de 1894: la guerra de Marruecos y un nuevo movimiento insurreccional en Cuba, que tendrá pleno desarrollo a principios del siguiente año (1).

Estrechamente ligado con ambos conflictos se había producido en el ámbito interior un grave desequilibrio presupuestario. Y de consuno, los tres problemas habían producido en la Península una exaltación de los ánimos en unos sectores y en otros una susceptibilidad a flor de piel. Así fue cómo, al apuntar dos periódicos un problema que aparentemente había surgido en el ejército, un grupo de oficiales asaltó las redacciones de los periódicos madrileños "El Globo" y "El Resumen". Ante lo que Sagasta consideró como actitud pasiva de las autoridades militares, al no castigar este ataque a la libertad de prensa, presentó a la Reina Regente su dimisión el 23 de marzo de 1895 (2). El mismo día Cánovas queda encargado de formar un nuevo Gobierno, y así lo hace de inmediato, pero esta vez no disuelve al mismo tiempo las Cortes.

La vida de las Cortes liberales se alarga así por un año más, pero a principios de 1896 se plantea de nuevo el asunto de las irregularidades del Ayuntamiento de Madrid, que da lugar a una manifestación de "hombres honrados" contra Cánovas, por haber dado entrada en el Gobierno a Romero Robledo y Alberto Bosch, dos de los principales sospechosos de haber tomado parte en dichas irregularidades. Cánovas, que se había dado cuenta de la maniobra de sus adversarios, replica con la disolución

de las Cortes, para lo cual había obtenido el Real Decreto correspondiente, con fecha 28 de febrero del mismo año (3).

2.- Los proyectos autonomistas.-

Pocos meses después de decretada la reforma electoral para Cuba y Puerto Rico, y con fecha 5 de julio de 1893, proponía Maura a las Cortes un nuevo proyecto de ley para el Gobierno y Administración de las islas de Cuba y Puerto Rico (4). Según Fernández Almagro, los motivos que indujeron al Ministro de Ultramar a plantear la reforma del sistema de gobierno en ambas Antillas fueron los vicios y corruptelas de las leyes aplicadas hasta ese momento:

"Todo inducía a radicales modificaciones del régimen vigente en las Antillas, cuyas deficiencias, desde el punto de vista del asimilismo que lo informaba, se hacían más graves, exigiendo urgente remedio, por los abusos y las corruptelas en la práctica de las leyes. Cundía el malestar en la población cubana y puertorriqueña; arreciaban las campañas de prensa; competían los partidos políticos y las fuerzas sociales en la solución teórica, no sin violentas fricciones de unos y otros, sin ventajas para nada ni para nadie, salvo el provecho de las larvas separatistas, y cundía el autonomismo en sus formas más alarmantes" (5).

El proyecto de Maura abordaba con valentía el espinoso problema de dar a las Antillas un régimen político y administrativo que corrigiera de una vez por todas los abusos y corruptelas del sistema imperante y que no había producido más que descontento y hondo malestar entre los partidos y la población. El proyecto de Maura estructuraba el régimen político y administrativo de ambas Antillas en torno a cuatro instituciones, a saber: Gobernador, Consejo de Administración, Diputación provincial y Ayuntamientos (6). El autonomismo del proyecto radicaba en una distribución de la Administración de Cuba y Puerto Rico entre el Poder Central y los Gobiernos insulares, en la forma siguiente: asuntos de Guerra, Marina, Relaciones Exteriores, Justicia, Orden Público y Política Financiera eran asignados al

Poder Central; Obras públicas, Comunicaciones, Fomento, Instrucción y Sanidad al Gobierno insular. Por lo que se refiere a las funciones y facultades de las instituciones de gobierno, el Gobernador sería el representante de la Metrópoli y tendría principalmente facultades ejecutivas; el Consejo de Administración, formado por las autoridades civiles, militares y eclesiásticas, facultades consultivas y la Diputación y los Ayuntamientos administrativas y fiscales.

La acogida del Proyecto Maura, tanto en las Cortes como por parte de la opinión pública peninsular, fue de diversa índole: mientras los "romeristas" y aún algunos liberales, como el Sr. Villanueva, lo combatieron con bastante saña y poco sentido de la realidad, Sagasta, Labra y los federales lo apoyaron (7). Sin embargo, ante la hostilidad de la opinión pública y las críticas de los diferentes círculos políticos de la capital y la oposición de los elementos incondicionales de las Cortes, Sagasta se vió obligado a abandonar la consideración del proyecto (8). Maura dimitía el 12 de marzo y el Presidente del Gobierno aprovechó esta circunstancia para reorganizar el Gabinete, sustituyéndole por Manuel Becerra.

En Puerto Rico, la acogida del Proyecto-Maura fue también contradictoria: los incondicionales, que eran por principios e intereses opuestos a cualquier reforma que representase merma de la soberanía de España, lo acogieron con ostensible desconfianza (9). Por el contrario, los autonomistas lo acogieron favorablemente, aunque consideraban que no se adaptaba exactamente a su doctrina, sobre todo porque no concedía el sufragio universal (10).

El Proyecto-Maura fue informado favorablemente por la Comisión del Congreso, pero, como ya hemos visto, su discusión desencadenó tales reacciones, que Maura optó por dimitir y el proyecto quedó momentáneamente abandonado (11).

El segundo proyecto de autonomía fue obra de D. Buenaventura de Abárzuza, que había sustituido a Becerra en la cartera

de Ultramar, en el reajuste ministerial llevado a cabo por Sagasta el 5 de noviembre de 1894 (12). Preocupado el Gobierno por el auge que tomaba en Cuba el movimiento separatista, materializado a finales de noviembre del mismo año en el plan de invasión de la isla de Cuba conocido con el nombre "de Fernandina", se apresuró a dar su visto bueno a otro proyecto que reformaba en sentido restrictivo el de Maura (13). Las enmiendas se introdujeron con el fin de hacerle aceptable a los conservadores y se referían fundamentalmente a una menor autonomía de la Diputación provincial y de los Ayuntamientos, cuyos acuerdos podían ser impugnados por el Gobernador, y también a una forma diferente de elegir a los miembros de la Diputación provincial y a los concejales de los ayuntamientos.

La misma reacción que produjo en la isla el Proyecto-Maura produjo éste, si bien, como es lógico, los autonomistas elevaron el tono de sus críticas en razón al menor grado de autonomía que concedía (14).

En el Partido Incondicional la reacción fue en esta ocasión más positiva, porque ante el giro claramente irreversible de la política del Gobierno hacia la descentralización, los miembros disidentes del Partido aprovecharon la oportunidad para insistir en la necesidad de introducir reformas en el mismo, desde un cambio de programa hasta de nombre (15). Por su parte, el Comité Central captó bien la tendencia del Gobierno y para salir al paso de las críticas internas, publicó un Manifiesto en diciembre de 1894, en el que manifestaba estar de acuerdo con las reformas que el Gobierno de la Península quería introducir, en tanto que reforzasen la unión de la isla con la Metrópoli y atendiesen al robustecimiento de los organismos locales. Indudablemente, que el Partido se colocaba con esta declaración en una difícil posición de equilibrio entre el asimilismo y el autonomismo (16).

De nuevo el Proyecto-Abárzuza no prosperó, pues si bien fue aprobado por el Congreso con fecha 13 de febrero y se con-

virtió en Ley el 12 de marzo de 1895, nunca llegó a aplicarse, como consecuencia de los sucesos revolucionarios que habían comenzado en Cuba, coincidiendo precisamente con la aprobación del Proyecto y también con la caída del Ministerio de Sagasta (17).

B.- La situación político-partidista en Puerto Rico.-

A partir de las elecciones de 1893 se inicia en Puerto Rico la última etapa de su desarrollo político bajo la soberanía española. Etapa fecunda y brillante, digna de resultados más duraderos. La actividad de los partidos políticos cobra un auge verdaderamente incontenible. Hemos dicho de los partidos, pero es preciso hacer una salvedad: el Partido Incondicional estaba prácticamente muerto y el triunfo de las candidaturas oficiales en estas elecciones de 1896 no será en absoluta obra ni representación suya, cuanto del Gobierno de la Península, propiciado por la abstención del Partido Autonomista.

La actividad político-partidista se centra, pues, en el sector autonomista, y su pujanza y bríos eclipsarán en un tiempo record la del hasta entonces indiscutible partido oficial. No es de extrañar que, como consecuencia de esta vitalidad desbordante, se produjeran en el seno del Partido Autonomista tropiezos y hasta cismas; todo ello no era más que el efecto natural de la improvisación y de la falta de experiencia. Pero todos los contratiempos serán superados en gran parte por el espíritu de entrega y la honradez política que animaba a la mayoría de los líderes autonomistas.

1.- Desarrollo del Partido Autonomista.-

Dos temas dominan la actividad política del Partido entre 1893 y 1896: el de su aproximación y alianza con alguno de los partidos peninsulares, y el de su postura ante las elecciones (18). Ambos temas pasan por multitud de diferentes alternativas dando lugar a la celebración de numerosas reuniones y de varias

asambleas de Partido, con las consiguientes campañas de prensa.

El tema de la alianza, que en el Programa de Ponce de 1887 había sido relegado a un lugar secundario dentro de los propósitos del Partido, cobró actualidad y relieve a partir de la segunda Asamblea celebrada en Mayagüez en mayo de 1891, acordándose enmendar el artículo 7º de los "Principios del Partido", para posibilitar los contactos del mismo con alguno de los partidos demócratas de la Península y poder llegar, de esta manera, a un entendimiento.

Ya hemos mencionado la pugna que se entabló en el seno del Partido en torno al alcance y sentido de esta enmienda, que enfrentó a dos de las principales figuras del autonomismo: Muñoz Rivera, que postulaba con un criterio realista y oportunista el acercamiento al Partido Liberal-Fusionista de Sagasta, y Cepeda Taborcías y Fernández Juncos que eran partidarios de una alianza con alguno de los partidos republicanos.

Para superar la crisis producida en el Partido por la renuncia del Director político del mismo, D. Manuel Corchado, el Directorio decidía celebrar una Asamblea general en el mes de febrero de 1894 (19). Pero efectuada la misma, poco más hizo que elegir una nueva Delegación y ratificar el acuerdo de retraimiento electoral de 15 de enero de 1893, sin que prosperaran una moción de Muñoz Rivera para llevar a cabo una reorganización del Partido ni otra de Fernández Juncos para llevar a cabo una alianza con el partido republicano (20).

Después de esta Asamblea, la Delegación del Partido celebró varias reuniones, en las que, sistemáticamente, se trataba el tema de la alianza, siendo derrotado en todas ellas. En el mes de marzo de 1895 se celebró en Aguadilla la cuarta Asamblea general del Partido, cuyos principales acuerdos fueron, en primer lugar, aprobar una moción de los delegados de Mayagüez para que el Partido desistiera del retraimiento electoral, dejando, sin embargo, en manos de la Delegación la decisión del momento más oportuno para volver a participar en los comicios.

El segundo tema de importancia fue, como siempre, el de la alianza; de nuevo Muñoz Rivera propuso una moción para que el Partido permitiera las gestiones pertinentes, pero al desatarse una viva excitación en la Asamblea en torno a la misma, síntoma inequívoco de que la propuesta iba ganando adeptos, Muñoz Rivera, para evitar escisiones en el Partido, aceptó el retirarla, reservándose el derecho de presentarla en una ocasión posterior. Finalmente, se eligió un nuevo Directorio y se acordó fundar en San Juan un periódico dedicado a la defensa y propaganda del autonomismo, con lo que se dio por finalizada la Asamblea (21).

2.- El Partido Incondicional.-

Inmediatamente después de terminadas las elecciones de diputados a Cortes de 1893, el Comité Central decretaba la expulsión del Partido de Ricardo Mendizábal Génova y de Pedro Santibañan Chávarri, como principales promotores de la disidencia que se había desarrollado en el seno del Partido a principios de ese año (22). Con la renuncia de D. Pablo Ubarri al cargo de Presidente del Partido y su viaje a la Península en mayo de 1893, la crisis interna del Partido se agravó, al tiempo que la disidencia cobró nuevos vuelos, hasta el punto de que un año más tarde convocaban a una reunión a todos los que estuvieran de acuerdo en que debía llevarse a cabo una reorganización del Partido (23).

Si bien se llevó a cabo una reunión de los miembros disidentes en el mes de marzo, la misma no tuvo ningún resultado, debido a los temores y vacilaciones de los asistentes.

Atento por su parte el Comité Central a que los autonomistas no capitalizaran en su beneficio las disidencias, los incondicionales celebraron una Junta Magna en San Juan en junio del mismo año, pero, aparte de nombrar a D. Pablo Ubarri jefe y presidente vitalicio del Partido, nada de interés decidió dicha Junta (24).

Pero en octubre de 1894 moría en Madrid D. Pablo Ubarri, y desde ese momento se hizo patente la descomposición interna del Partido Incondicional. De todas formas, no cabe duda de que la política del Gobierno Peninsular tuvo una influencia decisiva en este ocaso definitivo, ya que se inclinaba cada día más al abandono de la línea de intransigencia y a la introducción en la isla de profundas reformas en el régimen político. Esta actitud, que los incondicionales interpretaron como un abandono de su causa por parte del Gobierno, hirió de muerte al Partido, puesto que su razón de ser consistía única y exclusivamente en la defensa a ultranza del statu quo colonial como forma de conservar la integridad territorial, política y económica de España en Ultramar.

La muerte de D. Pablo Ubarri determinó al Comité Central a celebrar nueva Junta Magna con el fin de elegir nuevo Presidente y tratar de zanjar las disidencias (25). Los disidentes fueron readmitidos en el Partido, se nombró un nuevo Comité directivo y se designó una comisión para redactar un nuevo reglamento; por última vez, se había evitado la crisis interna del Partido Incondicional.

C.- La convocatoria de elecciones en Puerto Rico.- La campaña electoral.-

El día 3 de marzo de 1896 expedía el nuevo Gobernador de la isla, general D. Sabas Marín González, la convocatoria de elecciones para diputados a Cortes, que habían de celebrarse el 12 de abril (26).

No habiendo logrado los autonomistas que se cambiara la Ley electoral, pese a sus repetidos esfuerzos y a las gestiones personales de Labra ante el propio Sagasta, estaban decididos a repetir su retraimiento, decisión que había sido tomada en diciembre de 1895 en una reunión de la Delegación del Partido, como protesta contra un Gobierno que no daba garantías de imparcialidad para la libre emisión del voto (27).

Sin embargo, una vez publicada la convocatoria, y ante la actitud contraria al retraimiento manifestada por un grupo de personalidades del Partido, que consideraban estéril la abstención, los miembros del Directorio hicieron una visita al Gobernador para tantear su disposición en relación con el Partido. El resultado de la entrevista no satisfizo al Directorio, no sabemos si porque pidieron mucho o porque el Gobernador estaba dispuesto a ofrecerles poco; lo cierto fue que no se pusieron de acuerdo (28).

Acto seguido, la Delegación se reunió en San Juan, y por unanimidad aprobó una moción de Gómez Brioso y Rossy Calderón para continuar en el retraimiento:

"La Delegación reunida para tomar acuerdo acerca del retraimiento del Partido, sintiendo la necesidad de hacer oír su voz en las próximas Cortes cuando se debata el problema antillano y por patriotismo, deseaba ir a la lucha electoral, pero no habiendo encontrado en el Gobierno nacional ni en el local buenas disposiciones que garanticen sus derechos en el momento de las elecciones, acuerda por unanimidad mantener el retraimiento" (29).

Ante la decisión de los autonomistas, el Partido Incondicional limitó sus preparativos a negociar con el Gobernador y con el Ministro de Ultramar el número de candidaturas que podría designar el Partido. Transcribimos del Diario de Sesiones la versión del Ministro de Ultramar respecto a las mismas:

"Debo afirmar nuevamente, que tal ha sido el respeto que he tenido yo a los acuerdos del Partido incondicional de Puerto Rico, y de tal manera se le ha dejado en libertad en la ocasión presente, que solo tres diputados han sido indicados por el Gobierno. Todos los demás han venido indicados por la Junta del partido de la isla. No solamente tiene ésta la representación de los cinco que por su constitución deben representarla, sino que se han aceptado todos los que oficiosamente, a manera de ruego, proponía la Junta para que vinieran al Congreso y solamente han venido tres por indicación del Gobierno... y de esos tres no hay más que uno que no tenga en Puerto Rico arraigo, que no pertenezca a aquella isla" (30).

Ciertamente, la versión del Sr. Castellano era bastante

exacta, pero olvidaba incluir una decisión personal que vició el procedimiento de nominación de los candidatos. En efecto, de los cinco candidatos propuestos por el Partido Incondicional el Ministro de Ultramar rechazó a uno de ellos, D. Enrique García Molinas, al parecer por motivos personales, sustituyéndolo por su cuñado y Secretario particular, D. Enrique González Rodríguez; ante la actitud sumisa que adoptó el Comité Central frente a esta intromisión del Ministro, García Molinas se retiró de las filas del Partido Incondicional (31).

D.- Los resultados.-

Dada la identidad de las circunstancias, los resultados de estas elecciones fueron una copia exacta de los anteriores, obteniendo el triunfo todos los candidatos incondicionales y ministeriales (32).

E.- Comentarios.-

Al discutirse en las primeras sesiones de las Cortes de 1896 los dictámenes de la Comisión de Actas, el Conde de Romanones tomó la palabra para impugnar la elección de D. Juan Morlesín, diputado por la Primera Circunscripción de Puerto Rico. Pero en realidad, esto fue solamente una excusa, según reconoció él mismo:

"Pero si yo no hablara de esta acta, si esta acta se dejara pasar en silencio, parecería como que se aprobaba la conducta que en las elecciones de Puerto Rico ha observado el Sr. Ministro de Ultramar; y yo me propongo, con la brevedad que me sea dable, demostrar que el Sr. Ministro de Ultramar ha cometido en las elecciones de Puerto Rico las mayores coacciones posibles, y que ha ejercido en Puerto Rico de gran cacique, quizá con mayor libertad de acción que lo ha ejercido en Aragón" (33).

La acusación del Conde de Romanones tenía dos partes: una demostrando que el Ministro de Ultramar, y en su nombre el Gobernador de Puerto Rico no habían hecho ningún esfuerzo para evi-

tar el retrimiento del Partido Autonomista, y la otra , que ni siquiera había respetado las decisiones del Partido Incondicional. Es decir, que el Sr. Castellano se había comportado en las elecciones de Puerto Rico como un auténtico cacique.

Refiriéndose a lo primero, menciona la entrevista que tuvieron en La Fortaleza los miembros del Directorio del Partido, así como la respuesta dada por el general Marín:

"1°. Que España tuvo siempre el defecto de tratar con mimo exagerado a sus colonias de Ultramar, porque les concedió cuanto pidieron y se mostró con ellas hidalga y generosa.

2°. Que no se debe equiparar en las preferencias oficiales a los partidos, que en aquellas tierras viven, porque los conservadores se identifican con el régimen existente, mientras que los autonomistas pugnan por tratornarlo y destruirlo.

3°. Que no tenía nada que ofrecerles a fin de que revocasen su acuerdo, porque en interés de ellos estaba el elegir Diputados y salir de la difícil situación en que se hallaban" (34).

En cuanto a la forma de comportarse el Ministro de Ultramar con el Partido Incondicional, el Conde de Romanones la describía de la siguiente manera:

"Hay allí un gran partido que se llama incondicional. Este partido había sufrido años ha una grave disidencia; pero a la muerte de su jefe, el Sr. Ubarri, esta disidencia desapareció. Esta disidencia tenía por base, que había elementos importantísimos del partido incondicional que estaban cansados de que la representación de Puerto Rico fuera dada constantemente, en todas las situaciones y gobiernos, a candidatos cuneros, que no viniera a las Cortes siquiera un representante de Puerto Rico que tuviera lazos, relaciones con los intereses que tenía que representar. Para evitar esto hubo en la Capital de Puerto Rico una reunión extraordinaria , a la cual concurrieron los delegados de este partido, y acordaron como base fundamental para la unión y concordia, que de los 16 candidatos a diputados que elige Puerto Rico, 11 fueran designados libérrimamente por el Gobierno; que el Gobierno dispusiera a su antojo como tuviera por conveniente, sin reparo alguno, de las condiciones que pudieran tener; pero que cinco habían de ser proclamados por la Junta central del partido... y el partido proclamó candida-

tos a cinco individuos.

Púsose en conocimiento del Gobierno esta proclamación, y entonces el Sr. Ministro de Ultramar excluyó a uno de los proclamados; y hubo de excluirle únicamente por motivos personales, por motivos de aquellos que no se deben vengar ni desagraviar en la esfera de la política" (35).

Por su parte, el Conde de Xiquena, apoyando también la censura al Ministro de Ultramar, hacía hincapié en el mal efecto que la forma de manipular las elecciones en Puerto Rico habría de tener en Cuba:

"¿Puede negar S.S. que, cuando en Cuba se pretende explicar lo que allí ocurre con estos errores, por no decir más, de la administración pública, cuando por todos se buscan los medios más seguros de repararlos y hacer imposible su repetición; puede negar el Sr. Castellano que elecciones, como las dirigidas por S.S. en Puerto Rico, habrán de usarse como argumento seguro por los insurrectos de Cuba, que para continuar la guerra dirán que no pueden prestar fe a las promesas de un Gobierno, que en Puerto Rico, en plena paz, sostenido por un partido fuertísimo, hace precisamente lo contrario de lo que a Cuba ofrece?" (36).

Fueran o no tantas y tales las manipulaciones del Gobierno en las elecciones de Puerto Rico, lo cierto es que ni siquiera en estos últimos momentos en que la situación de España respecto a sus colonias era cada vez más precaria ante la opinión internacional, el Gobierno estuvo dispuesto a dejar que los procesos electorales se desarrollaran en un clima de auténtica libertad. Pues ciertamente que a lo largo de todo el siglo XIX se había desarrollado, tanto en Cuba como en Puerto Rico, al lado de una crítica hacia la forma de gobernar España sus territorios de Ultramar, un ambiente de desconfianza respecto a las verdaderas intenciones del Gobierno respecto a su deseo de desarrollo y transformación progresiva de los mismos. En algún momento tenía que haber demostrado el Gobierno que estaba dispuesto a aplicar en Ultramar una política clara y rotunda, no para acallar protestas o para salir de un mal paso, sino como expresión auténtica de una voluntad de desarrollo y de incorporación de las colonias a una vida política, económica y social por lo menos igual

a la que existía en la Metrópoli.

Algo así expresaba en 1891 una persona que no se había destacado precisamente por sus ideas avanzadas, pero que, al menos, en esa ocasión ponía el dedo en la llaga de los gobiernos de la Restauración; nos referimos al Sr. León y Castillo, el cual declaraba ante el Congreso:

"Yo no soy partidario de la forma autonómica en Cuba por estas razones que he dicho, y además porque no creo que éntre en los propósitos de la política de España preparar sus colonias para la independencia. Pero así y todo, no siendo yo partidario de la forma de gobierno autónoma, prefiero la autonomía al statu quo, porque, si la autonomía es la preparación para la independencia, el statu quo es la anexión en plazo breve (Sensación). Hay que poner, no el dedo, sino toda la mano, Sres. Diputados, sobre la llaga, aunque mane sangre...

El problema de Cuba, en mi concepto, se presenta con una gran sencillez. ¿Queremos conservar la isla de Cuba a todo trance, sean las que fuesen las dificultades de orden político y de orden económico que puedan surgir? Pues entonces, hay que ir a la asimilación en lo político y en lo económico, con todas sus consecuencias, sin detenerse ante ninguna. ¿Consideramos la carga tan pesada, que no queremos o no podemos aceptarla? Pues entonces hay que ir al gobierno autonómico, con todas sus consecuencias. ¿Es que creemos que el gobierno autonómico tiene sus peligros? ¿No queremos aceptar la asimilación ni la autonomía? ¡Ah, Sres. Diputados! hay otra solución que también podemos aceptar: que es, la consolidación de la rutina, que es, perpetuar la inercia: esa también es una solución, pero esa solución es la catástrofe" (37).

Desgraciadamente, a este lúcido planteamiento de la situación y de las alternativas que se abrían ante el Gobierno contestaba Cánovas del Castillo con aquella frase, muy patriótica, pero poco realista en aquellos momentos, de que España emplearía en la isla de Cuba "el último hombre y el último peso" (38).

Creemos que esta fue la última oportunidad que tuvo el Gobierno para aceptar y plantear una política realista y sincera en relación con Ultramar; pero una vez más, frente a las razones y cálculos fríos de la conveniencia y oportunidad políticas, se impuso el sentimiento, el patriotismo, "el Cristo de la inte-

gridad de la Patria", como decía el diputado Moya en una sesión anterior. Y la oportunidad se dejó pasar y cuando más adelante el Gobierno tuvo que volver sobre sus convicciones y sobre sus palabras, ni al Gobierno correspondió la iniciativa espontánea de las leyes autonómicas ni éstas, aprobadas y aplicadas de prisa y corriendo, pudieron impedir que se desencadenara en toda su magnitud la última etapa del proceso desintegrador, que privó a España de los restos de su antiguo Imperio.

Los pocos datos cuantitativos que hemos logrado reunir de esta Elección apenas nos permiten sacar conclusión alguna de ellos (39). Indirectamente, sin embargo, tenemos algunos hechos que nos pueden proporcionar un valioso complemento. En efecto, la situación político-partidista fue exactamente la misma en ambas ocasiones, con el dato fundamental de la ausencia del Partido Autonomista del proceso y semejante actitud del Gobierno respecto a su política cunera, como se puede comprobar por lo expuesto en notas precedentes.

Los datos de electores y la distribución de votos entre los candidatos, unidos a estos hechos electorales nos permiten concluir que los niveles de participación fueron muy semejantes a los alcanzados en la Elección general de 1893, no habiendo variado sustancialmente las cifras de electores.

NOTAS

- 1.- Entre las motivaciones que Fernández Almagro menciona como causantes de este nuevo levantamiento cubano, conocido en historia como "el Grito de Baire", están la reducción de las fuerzas militares en Cuba, las deficiencias en el armamento y formación de los combatientes y "el malogro de las reformas de Maura, impugnadas aquí incluso por elementos ministeriales, y aceptadas allá por grandes sectores de opinión: concretamente, el partido reformista y, en no pequeña parte, el autonomista. Esas reformas, instauradas a su tiempo, habrían logrado quizá lo que las de Abárzuza, tardío y tenue reflejo de aquellas, no podían conseguir, echado ya el separatismo a la Manigua y a Las Vegas, con todas sus consecuencias". Cf.: Op.Cit., Tomo II, pág. 237.
- 2.- Ibidem, pág. 238.
- 3.- MARTINEZ CUADRADO, Miguel: "Elecciones...", pág. 577.
- 4.- Diario de Sesiones de las Cortes, 1893, págs. 595 y sgts.
- 5.- FERNANDEZ ALMAGRO, Melchor. Op.Cit., Tomo II, pág. 192.
- 6.- Diario de Sesiones de las Cortes, 1893, Apéndice 3º al número 47.
- 7.- Ibidem, págs. 1331 y sgts. El juicio que merece a Fernández Almagro la actitud de los que se opusieron a estas reformas es sumamente duro: "... las reformas de Maura fueron muy discutidas en las islas afectadas por el proyecto, desde luego; pero también en Madrid y en los círculos políticos de todo el país; una veces -muy pocas- con atención, objetividad y competencia, a tono con la importancia del empeño acometido por Maura, y en otros casos, con mezquina intención política, ya que proporcionaba nuevas armas a los enemigos del Gobierno, algunos de los cuales se movían dentro del propio partido liberal, y no siempre porque discrepaban de la solución que Maura proponía a problema de tanta trascendencia, sino por espíritu banderizo o personalista, que solía utilizar el argumento del patriotismo más simple y aun contraproducente, calificando de malos españoles, de filibusteros, a quienes, como el Ministro de Ultramar en primer término, trataban de evitar la separación cruenta de la España antillana, según atestiguaban guerras pasadas, conspiraciones sin solución de continuidad..."

- 8.- Sagasta no estaba totalmente de acuerdo con la postura inflexible, opuesta a toda transacción, que Maura adoptó en esta ocasión, y tampoco estaba dispuesto a que la oposición utilizase el proyecto para obtener de las Cortes un voto de censura contra el Gobierno. Colocado en la alternativa de escoger entre Maura y el proyecto o permanecer en el poder, optó por lo último, aceptando la renuncia de su Ministro, aprovechando la crisis para hacer una reorganización de su Gabinete.
- 9.- Puede verse la reacción de los Incondicionales de Puerto Rico al proyecto sobre todo en diversos artículos de el "Boletín", 1893, números 72, 73, 74 y 75.
- 10.- Cf.: "La Democracia", 1893, números 483, 493, 501 y 513.
- 11.- Diario de Sesiones de las Cortes, 1893, Apéndice 1º al número 95. Las modificaciones introducidas por la Comisión en el proyecto original fueron pocas, pero todas ellas de sentido positivo: "Han sido estas modificaciones -decía en su preámbulo la Comisión- el aumento del número de diputados (provinciales) de 18 a 24, por creer que así corresponde más equitativamente a la población de las regiones; el de no admitir la igualdad de todas en la elección de sus administradores; la creación de delegaciones que sirvan de lazos de unión directa y continua entre los Diputados y las regiones que han de administrar; la aclaración de lo que, en su concepto, resultaba confuso respecto a la indicación de reforma de leyes, y el desvanecimiento de todo lo que pudiera creerse modificación del censo electoral en una o en otra isla".
- 12.- Manuel Becerra, que había sustituido a su vez a Maura, presentó su dimisión el 21 de octubre de 1894, a causa de una serie de problemas económicos ocurridos en Puerto Rico y a la mala prensa que tenía entre los autonomistas cubanos.
- 13.- El Proyecto-Abárzuza, convertido en Ley, fue publicado en la Gaceta de Puerto Rico correspondiente al 25 de abril de 1895 (número 50).
- 14.- "La Democracia", 1895, número 1,006.
- 15.- "El Imparcial", 1894, números 283 y 292.
- 16.- Puede verse este Manifiesto en el Anexo I
- 17.- Diario de Sesiones de las Cortes, 1895, Apéndice 5º al número 88. Labra, en su obra "La Autonomía colonial", comenta acerca de la inestabilidad de la política ultramarina del Gobierno: "Porque es verdad que el partido liberal después del fracaso de los proyectos reformis-

tas del Sr. Maura y de la reaparición de los insurrectos cubanos en Baire el 24 de febrero de 1895, trató de contener la nueva protesta de la insurrección por la ley de 15 de marzo de este último año, titulada de "reforma" del Gobierno y la Administración de las islas de Cuba y Puerto Rico.

Pero hay que observar que aparte de la insuficiencia de esta Ley, los hombres y las cosas se dispusieron para que aquella obra se redujera a vanas palabras y lo que es peor, para que pareciera como una repetición de la burla del Zanjón de 1878.

En efecto, la Ley de 15 de Marzo de 1895 que redactó el Sr. Abarzuza era solo una ley de "bases" que el Gobierno había de desarrollar por medio de decretos que luego conocerían y aprobarían o no las Cortes. Y sucedió que esos decretos no aparecieron y el Partido Liberal dejó el poder el 23 de aquel mismo mes, sin salir del terreno de los tibios deseos, en lo tocante a las reformas de Ultramar". Pág. 145.

- 18.- La conveniencia de lograr una alianza con el Partido Liberal de la Península creemos que comienza a perfilarse a mediados de 1893, como consecuencia de unas declaraciones hechas en el Congreso por Sagasta, y que fueron acogidas con entusiasmo por el Partido Autonomista, cuya Delegación se apresuró a publicar un Manifiesto, en el que hacía saber su acuerdo con las ideas expresadas por Sagasta. Cf.: Diario de Sesiones de las Cortes, Legislatura de 1893, pág. 2550 y sgts. El Manifiesto que se cita puede verse en el Anexo II.

La idea de realizar una alianza o pacto entre los liberales insulares y un partido de la Península la había expuesto por primera vez D. Julio Vizcarrondo en 1871. A partir de ese momento, se producirán numerosas manifestaciones del Partido, abogando por una nacionalización del mismo, aunque las dos únicas alianzas que el Partido Liberal Reformista concertó fueron, la primera, en 1872 con el Partido Progresista Democrático Radical de Ruiz Zorrilla, y la segunda, con el Partido Republicano Federal, en 1873; pero ambas duraron muy poco tiempo. Cf.: PAGAN, Bolívar. Op.Cit., págs. 238-239 y 236.

- 19.- PAGAN, Bolívar. Op.Cit., pág. 440.

- 20.- Ibidem. Según este autor, estos fueron unos momentos de crisis del Partido Autonomista y, si finalmente logró superarla, ello fue debido al esfuerzo, actividad y celo del Dr. José Celso Barbosa, el cual quedó encargado de la dirección política del mismo y de su reorganización.

Reunida la Delegación del Partido los días 4 y 5 de marzo, se eligió el nuevo Directorio, que quedó compuesto por José Gómez Brioso como Director Político o Presidente del Partido; Manuel F. Rossey, Director Jurídico; José Celso Barbosa, Director Económico y Luis Sánchez Morales, Secretario.

- 21.- El Directorio quedó integrado por las mismas personas que lo componían hasta ese momento. Cf.: PAGAN, Bolívar. Op.Cit., pág. 445.

El periódico fundado fue "El País", cuyo primer número salió el día 7 de agosto de 1895. Dice Pedreira al respecto:

"Treinta y dos nuevos periódicos empezaron a circular en 1895 siendo el de mayor interés y más larga vida "El País", fundado en diciembre por los autonomistas de San Juan, y dirigido por D. J.E. Martínez Quintero. Lo más sobresaliente de este diario era la colaboración política de los señores José Celso Barbosa, José Gómez Brioso, Manuel F. Rossey, José Gordils y Enrique C. Hernández. Fue un fuerte contrincante de "La Democracia" y desapareció en 1902". Op. Cit., pág. 271. Aunque en el párrafo figura el mes de diciembre como fecha de fundación, lo cierto es que apareció en agosto y así consta en la misma obra de Pedreira, página 500.

- 22.- "La Correspondencia", 1893, número 809.

- 23.- "La Democracia", 1894, número 718.

- 24.- "Boletín Mercantil", 1894, número 67.

- 25.- "Boletín Mercantil", 1895, número 113.

- 26.- Gaceta de Puerto Rico, 1896, número 27.

- 27.- "El Buscapié", 1895, número 347.

- 28.- En el texto hemos consignado la versión de los autonomistas expuesta por el Conde de Romanones y por el Conde de Xiquena. La otra versión, la del Gobierno, la expuso el Ministro de Ultramar, Sr. Castellano, en réplica al Conde de Romanones:

"Ante todo, forzoso es hacer constar que ha sido totalmente ajeno al retraimiento del Partido Autonomista todo cuanto S.S. ha expuesto.

El Partido Autonomista acordó su retraimiento cuando le constaba que el Ministro de Ultramar le dejaba libre los tres puestos; no por lo que S.S. ha dicho, porque S.S. está equivocado en lo que ha expuesto respecto a los distritos de Puerto Rico en los

cuales hay tres puestos para las minorías... (El Sr. Conde de Romanones: Y los dos de Ponce). Hay tres circunscripciones, y sabido es que los tres últimos puestos se reservan a las minorías. Si las minorías tiene fuerza para luchar con las mayorías, claro es que no necesitan esa reserva de puesto alguno.

Los autonomistas sabían que el Gobierno no presentaba candidato para el tercer puesto y eso es lo mismo que ha dicho el Gobernador, que con todo celo ha sabido secundar las indicaciones del Gobierno; y por tanto, los autonomistas sabían que se les había reservado los tres puestos en términos de no presentarles enfrente candidato alguno. Lo que hay es, que el Partido Autonomista de Puerto Rico, que hace mucho tiempo que viene persiguiendo el ideal de que se rebaje a 5 pesos para la emisión del sufragio la cuota de 10 que actualmente rige, se acercó al Gobernador general poniéndole que rebajase la cuota, a fin de que pudiesen verificarse las elecciones por medio de un censo más amplio; el Gobernador general puso esto en conocimiento del Gobierno, pero fácilmente se comprende que cuando existe un censo al cual hay que someterse y una ley que lo establece, el Gobierno, por su propia voluntad y arbitrariamente, no puede saltar por cima de la ley y rebajar el censo arbitrariamente en el momento mismo de verificarse las elecciones". Cf.: Diario de Sesiones de las Cortes, 1896, págs. 45 y 46

- 29.- "La Democracia", 1896, número 1330. Erróneamente, Bolívar Pagán consigna que los autonomistas acudieron a las urnas en esta elección. Cf.: Op.Cit., pág. 450.
- 30.- Diario de Sesiones de las Cortes, 1896, págs. 54 y 55.
- 31.- Ibidem.
- 32.- Pueden verse los resultados en los Cuadros y Mapas electorales adjuntos.
- 33.- Diario de Sesiones de las Cortes, 1896, pág. 41.
- 34.- Ibidem, pág. 49.
- 35.- Ibidem, págs. 41 y 42.
- 36.- Ibidem, pág. 51.
- 37.- Ibidem. Legislatura de 1891, pág. 2795.
- 38.- Ibidem, pág. 2797.
- 39.- Al igual que en las elecciones anteriores, la Gaceta de Puerto Rico únicamente recoge datos sobre el número de votantes en cada Colegio, pero no incluye el número de

electores correspondiente a cada uno. Por otra parte, las listas del Censo Electoral se publicaban de forma incompleta, por lo que tampoco se pueden tomar como base para realizar los cálculos globales.

Ni siquiera en esta ocasión hemos podido conseguir de forma completa el número de electores, ya que los correspondientes a la Circunscripción de Ponce incluyen solamente los de dos Colegios electorales de esta ciudad, como puede verse en el Apéndice correspondiente.

ANEXO I

"Manifiesto del Partido Incondicional, de 3 de diciembre de 1894:

Correligionarios: Un deber nos obliga hoy a dirigirnos a vosotros. En este momento en que el Gobierno Nacional piensa someter a las Cortes un proyecto de reforma para las Antillas se nos tilda por algunos de refractarios a toda evolución y a todo pensamiento que tienda a fundir en una, si es posible, las grandes ideas nacionales.

Ante tal actitud, precisa que os comuniquemos nuestros acuerdos y que nuestra Diputación en Cortes conozca íntimamente las aspiraciones de la patriótica colectividad que representamos.

No vamos a hacer nueva profesión de fe; vamos a continuar la gran obra del Partido Incondicional Español, llamando a todos sus hombres, sin excepción ninguna, a la noble empresa de coadyuvar al dedarrollo de los intereses intelectuales, morales y materiales de esta provincia, manteniendo inmutable todo lo sustancial de nuestro credo.

Una conciencia honrada preside nuestros juicios; una convicción profunda los alienta, y nos sobran decisión y firmeza para mantenerlos.

En este sentido:

Queremos toda reforma política que tienda a dignificar al ciudadano español y a estrechar de manera indisoluble los lazos con la Metrópoli; y dentro del principio asimilista que ha informado nuestros procedimientos, vamos progresivamente hasta la igualdad.

Aceptamos la especialidad administrativa y por consiguiente la descentralización en todo cuanto tienda a robustecer los organismos locales y provinciales, con leyes amplias que favorezcan su desenvolvimiento siempre que no invadan ni cercenen en lo más mínimo las funciones propias de soberanía que pertenecen por derecho indiscutible a la Nación ni emengüen los altos prestigios que corresponden a la Autoridad superior de la Isla.

Consecuentes con nuestra conducta, seguiremos gestionando la normalidad monetaria, cabotaje completo y recíproco con la Península, y dentro de la unificación arancelaria, la reforma de la 2ª columna, de manera tal que, protegiendo en la medida necesaria los productos nacionales, no hagan prohibitivos los extranjeros en beneficio de la

renta insular y de los consumidores.

Recabaremos la difusión de la enseñanza en todos sus grados, como base de la cultura general; propenderemos con todas nuestras fuerzas al desarrollo de las obras de fomento, y mantendremos en todos nuestros actos, como norma del Partido, la más sincera y escrupulosa moralidad administrativa.

A estos principios deberán ajustarse los procedimientos que cumpla adoptar para llegar a su realización, contando con el concurso de todos vosotros, de los que antes y ahora hemos luchado siempre por el bien de la Patria, de todos cuantos anhelan la paz, el orden, la moralidad y el progreso de la Isla indiscutiblemente unida a la Nación.

Tales son los acuerdos de vuestro Comité Central, inspirados en la patriótica historia del Partido, acuerdos que hacemos públicos para conocimiento de todos nuestros correligionarios, confiando en que una política eminentemente nacional de ancha base, de nobles empeños y generosos propósitos, honrada, leal y progresiva, ha de engrosar nuestras filas con todos los elementos que buscan con legítima ambición en la fuente del trabajo, en el respeto de las leyes, en la dignificación del ciudadano y en el desarrollo de la riqueza pública, la prosperidad de esta hermosa región de la Patria española.

Puerto Rico, 3 de diciembre de 1894.

Firmado: Alejandro Villar, Manuel Cañal, Pedro Arzua-ga, Manuel Egozcue, Joaquín Fontán, Manuel Luiña, Joaquín Peña, P. Ubarri Iramategui, Víctor Ochoa, Rafael Fabián, Rafael López Landrón; Secretario, F. Martínez Villamil"

FUENTE: "Boletín Mercantil", 1894, número 143.

ANEXO II

"Manifiesto de la Delegación del Partido Autonomista de 16 de agosto de 1893:

La Delegación del Partido Autonomista puertorriqueño, en su nombre, y cumpliendo lo acordado en 1 del que cursa, en vista de la discusión habida en el Congreso de los Diputados en 14 de julio último, hace saber:

Que aplaude, confirma y ratifica las declaraciones hechas en ese debate por su eminente "leader" el señor D. Rafael María de Labra, y de acuerdo con ellas manifiesta:

1. Que reconociendo el Partido y acatando y sosteniendo, como lo ha efectuado siempre, el principio absoluto de la unidad del Estado, la sagrada integridad de la Patria y la soberanía nacional, entiendo que esa soberanía reside única y exclusivamente en la Nación, de la que forman parte lo mismo sus regiones americanas que las europeas, sin diferencias de ninguna clase, participando, en consecuencia, de aquel imperio y estando a él sometidas al igual que las peninsulares.
2. Que siendo tan española esta región como cualquiera otra de las que radican en la Península Ibérica y tan patriótico el Partido Autonomista como el que más de los otros partidos nacionales, en ninguno reconoce superioridad, bajo concepto alguno, ni el derecho de dudar de su sinceridad, proclamando sin embozo que al obrar en ese sentido y hostilizándole de tan injusto modo aquellas agrupaciones o sus miembros, quienes quiera que sean, autorizan "ipso facto" a los autonomistas para afirmar que no el patriotismo, sino otros móviles muy distintos, cuya falsedad se encubre con aquel ropaje, son los que inspiran los actos de sus detractores, y que es hora ya de poner término a esa política ruin y a ese convencionalismo mendaz de recelos y suspicacias que ningún cerebro sano puede abrigar realmente, ni hecho alguno justificar en esta Isla, reemplazándolo por otra política grande, levantada y noble, fundada en el respeto mutuo de todas las opiniones y en sentimientos de verdadera fraternidad, de recíproca concordia y armonía a que no nos es dable llegar mientras se mantenga el irritante predominio de un partido sobre otro, a que jamás se somete el Autonomista.
3. Que, sin renunciar a ninguno de sus patrióticos ideales

ni borrar una tilde de sus credos, el Partido Autonomista de Puerto Rico aplaude asimismo sin reservas y está de acuerdo con las explícitas declaraciones que en pro de dichos ideales hizo en esa propia sesión del 14 de julio el señor Presidente del Consejo de Ministros; que entre unas y otras no hay la más leve discrepancia, sino una mera confusión de nombres, nacido de la impropiedad con que allá y aquí han sido generalmente bautizados los partidos, ninguno de los cuales sustenta ni defiende en toda su plenitud y fuerza lo que su título representa o significa; que la aspiración de los autonomistas puertorriqueños, fuera de la igualdad civil y política, es ni más ni menos que la amplia y completa descentralización administrativa a que, según ha declarado el Sr. Sagasta, está dispuesto a ir el Partido Liberal que acaudilla, tan lejos como pueda desearlo el Autonomista; que más allá de esa libertad y de esa descentralización en los asuntos locales, que a las colectividades y a las Corporaciones Municipales y Provinciales pueden confiarse, que son las exactamente determinadas en el credo autonomista, ni ha de ir ni lo ha pretendido nunca este Partido y mucho menos ha intentado ni intenta mermar ni desequilibrar la soberanía de la Nación sobre estas provincias, cuando precisamente se ha fundado y venido a la arena política para evitar e impedir que eso pueda suceder jamás como implícita y aún explícitamente lo ha reconocido ya el mismo Gobierno ante el Parlamento; y

4. Que en tan importante punto hay perfecta unidad de miras, de sentimiento y de convicciones entre los liberales de la Península y los autonomistas puertorriqueños si todos los liberales piensan y sienten como ha asegurado el ilustre Jefe, el señor Sagasta, que no hay, por tanto, valla insuperable ni de ninguna clase entre unos y otros y que, como ha dicho muy bien el señor Presidente del Consejo, el día que se realice de veras la plena descentralización administrativa en los asuntos locales de esta isla y la completa identidad de sus hijos y habitantes en el goce de los derechos civiles y políticos de que disfrutaban los peninsulares, no solo se hará innecesaria la verdadera autonomía, la autonomía política de la que nunca se ha ocupado el Partido Autonomista Puertorriqueño, sino que este mismo Partido desaparecerá por no tener razón de ser, y sus afiliados entrarán en ello entonces, como elementos perfectamente homogéneos, en el concierto de los partidos nacionales, yendo a confundirse en sus filas con sus hermanos del otro lado del Atlántico.

Esta es la final y suprema aspiración de los autonomistas antillanos y ésta debe ser, sin hipócritas mixtificacio-

nes, la de todos los verdaderos españoles que a sus medros personales y a toda idea menguada de predominio y explotación sobrepongan, como deben sobreponer, los altísimos intereses de la integridad de la Patria.

Puerto Rico, 16 de agosto de 1893.

Firmado: El Presidente, Julián E. Blanco; Juan R. Ramos, Manuel Fernández Juncos, Francisco Mejía, Ladislao Collazo, Nicolás López de Victoria, Manuel F. Rosay; Salvador Brau, Secretario.

FUENTE: "Boletín Mercantil", 1893, número 100.

RESULTADOS

(1896)

<u>PROVINCIA.</u>	<u>POBLACION</u>	<u>ELECTORES</u>	<u>RELACION Hab/Elec</u>	<u>VOTANTES</u>	<u>ABST.</u>	<u>CANDIDATOS ELEGIDOS</u>	<u>VOTOS</u>
SAN JUAN				1,112		GONZALEZ RODRIGUEZ, Enrique	851
						MORLESIN Y SOTO, Juan	729
						GULLON Y DABAN, Eduardo	589
PONCE				500		VALLEJO MIRANDA, Angel R.	399
						CASSA ROUVIER, Francisco	356
						SOLER Y CASAJUANA, Luis	254
AYAGUE		2,187		1,056	51.71	LASTRES Y JUJIZ, Francisco	911
						BALBAS Y CAPO, Vicente	645
<u>DISTRITOS</u>						CANTI Y POLO, Santiago	555
RUCIO		469		234	50.11	DIAZ CANEJA Y ALONSO, Ignacio	234
VEREDILLAS				211		LOPEZ LANDRON, Rafael	191
GUAYMA				234		MARTINEZ CAMPOS, Miguel	234
TEMAJO				296		GARCIA GOMEZ, Juan José	296
LAGUAS				250		HOCES Y LOSADA, José Ramón de	250
BOAMO				243		CORRALES Y MORADO, E.	242
ITUADO				298		MARTIN SANCHEZ, Francisco	298
	<u>900,000</u>			<u>4,691</u>			

FUENTES: Gaceta de Puerto Rico, 1896, números 56 a 74. Archivo de las Cortes. Sección de Expedientes, Legajo 109, número 42.

CUADRO II
(1896)

RESULTADOS POR PARTIDOS

(Abstención de los Autonomistas)

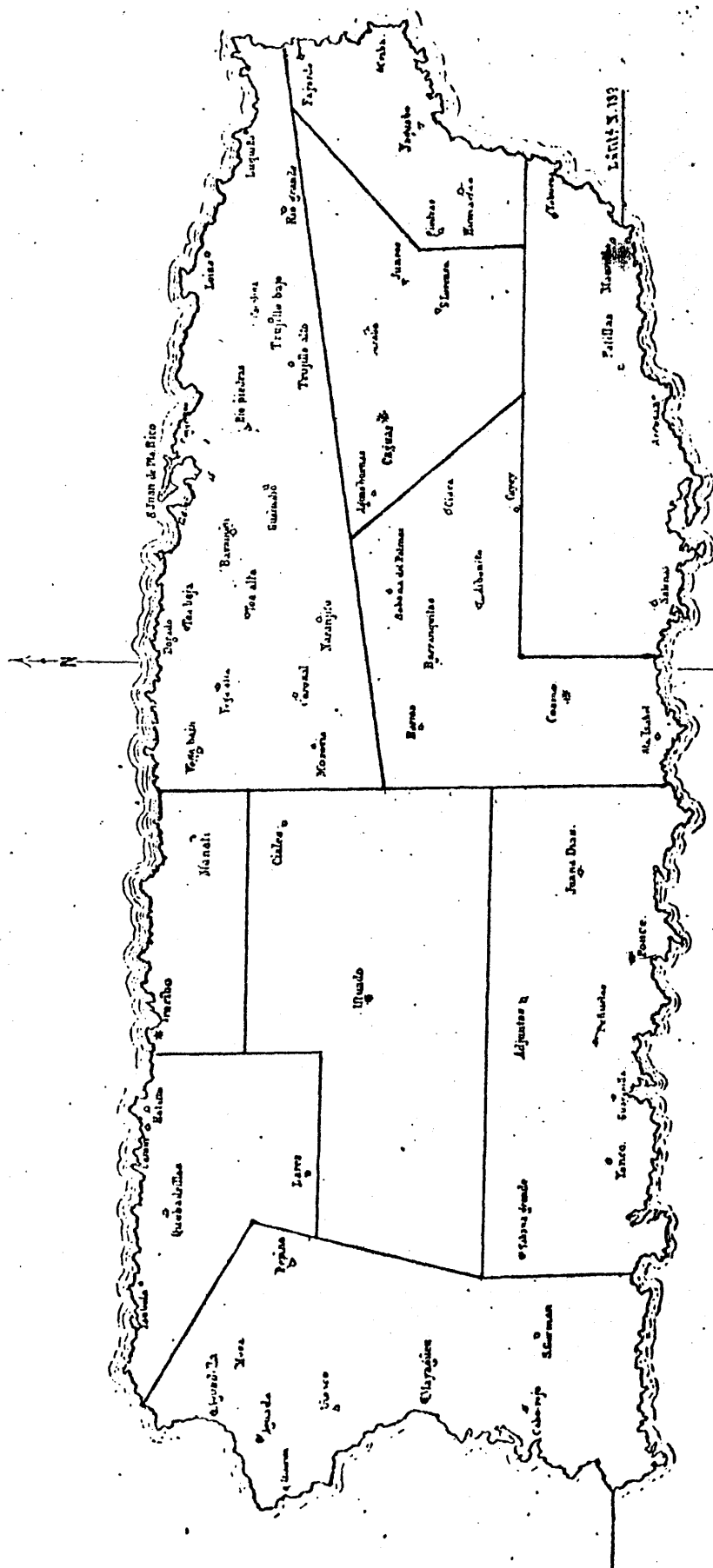
INCONDICIONALES:

GONZALEZ RODRIGUEZ, Eduardo.....	San Juan
MORLESIN SOTO, Juan.....	"
GULLON Y DABAN, Eduardo.....	"
LASTRES JUIZ, Francisco.....	Mayagüez
BALBAS Y CAPO, Vicente.....	"
CANTI POLO, Santiago.....	"
VALLEJO MIRANDA, Angel Ramón M.....	Ponce
CASSA ROUVIER, Francisco.....	"
SOLER Y CASAJUANA, Luis.....	"
MARTIN SANCHEZ, Francisco.....	Utuado
DIAZ CANEJA, Ignacio.....	Arecibo
HOCES LOSADA, José Ramón de.....	Caguas
CORRALES MORALES, Enrique.....	Coamo
GARCIA GOMEZ, Juan José.....	Humacao
MARTINEZ CAMPOS, Miguel.....	Guayama
LOPEZ LANDRON, Rafael.....	Quebradillas

- - - - -



(1896)



2.14. LA ELECCION GENERAL DE 1898

A.- La situación política en la Península

1.- La política autonomista del Gobierno: Nuevos decretos.-

"Fácilmente será admisible la asimilación -decía María Cristina en su Mensaje a las Cortes de 1896- en cuanto sea posible, aunque nada resolvería esto solo de por sí, en el estado en que por necesidad dejará la isla la insurrección después que tenga fin. Cuando tal cosa llegue, preciso ha de ser, para que la paz se consolide en ella, el dotar a entrambas Antillas de una personalidad administrativa y económica de carácter exclusivamente local, pero que haga expedita la intervención del país en sus negocios peculiares, bien que manteniendo intactos los derechos de la soberanía e intactas las condiciones indispensables para su subsistencia" (1).

Para dar cumplimiento a esta promesa, el Ministro de Ultramar, Sr. Castellano, obtuvo de la Reina Regente la firma para diez decretos, que regulaban la aplicación a Puerto Rico de la Ley de Bases de marzo de 1895 (Proyecto-Abárzuza), y que, como ya hemos visto, había quedado sin aplicación a causa de la nueva guerra declarada en Cuba a finales de 1894.(2).

De acuerdo con estos Decretos, el Gobierno de Puerto Rico se compondría de las siguientes instituciones: un Gobernador, dos Delegados regionales, una Junta de Autoridades, una Diputación provincial, una Sección de Administración local y una Intendencia.

La Ley Electoral se modificaba levemente, ya que solo introducía una rebaja en la cuota contributiva que daba derecho al voto.

La acogida dispensada a estos Decretos no fue muy entusiasta por parte de los autonomistas, juzgando que las mismas habían justificado el sentido y alcance de la Ley de Bases de 1895: se aumentaban las facultades del Gobernador y se minimizaba la participación de los puertorriqueños en la gestión de sus asuntos.

En este sentido se manifestaron los principales líderes del Partido Autonomista a través de sus órganos de información (3).

Los Incondicionales se apresuraron a manifestar su aceptación, al tiempo que criticaban la actitud de insatisfacción de los autonomistas (4).

Las críticas de los autonomistas repercutieron en el Gobierno, y esto, juntamente con la presión del Embajador de los Estados Unidos, Mr. Taylor, lograron que Cánovas expidiese un extenso Decreto el día 5 de febrero de 1897, conteniendo las nuevas bases para la reforma del estatuto colonial de las Antillas (5). Este proyecto era, efectivamente, mucho más amplio que todos los anteriores, ya que establecía que la Diputación provincial, el Consejo de Administración y los Ayuntamientos disfrutarían de amplia autonomía en sus respectivas funciones, y sus miembros serían elegidos totalmente mediante sufragio de segundo grado. Disponía, además, que los cargos públicos serían provistos con individuos del país, y finalmente determinaba que los presupuestos y los aranceles serían acordados y fijados por organismos de la propia isla (6).

Este proyecto sí satisfizo a los autonomistas de Puerto Rico, si bien la experiencia les había enseñado que debían esperar la aprobación de las leyes orgánicas para la aplicación de los mismos. Unicamente Labra criticó el que se hubiera omitido en el proyecto una reforma electoral que introdujera en Puerto Rico el sufragio universal, con el fin de igualar totalmente a los insulares con el resto de los habitantes de la Península.

2.- Muerte de Cánovas.- Gobierno de Sagasta

Ratificada por la Reina Regente la confianza a Cánovas, después de la denominada "crisis del balcón", éste, a su vez, confirmó a los ministros en sus respectivas carteras, y a Weyler en la Capitanía general de Cuba, produciéndose protestas de parte de los liberales y adoptando a partir de este momento una actitud favorable a las reformas autonómicas en Ultramar.

El 8 de agosto de 1897 caía asesinado Cánovas y este suceso vino a cambiar radicalmente el panorama tanto de la política interior como del desarrollo de la guerra en Cuba. La Reina Regente, de momento, tendió el puente de la presidencia interina de Azcárraga, iniciando de inmediato las gestiones para una nueva entrega del poder a Sagasta, ya que los conservadores habían quedado privados de su presidente y no parecía conveniente dejar en sus manos las negociaciones que habría que ⁱnciar con el representante en Madrid del Gobierno de los Estados Unidos.

El Gobierno interino de Azcárraga apenas dura dos meses, ya que el 4 de octubre Sagasta formaba un nuevo Gobierno, en el que D. Segismundo Moret pasaba a ocupar la cartera de Ultramar (7).

B.- La situación político-partidista de Puerto Rico

1.- La fusión del Partido Autonomista con el Liberal-Fusionista de Sagasta.-

Inquebrantable Muñoz Rivera en su empeño de lograr la aproximación del Partido Autonomista al Liberal-Fusionista, logró finalmente que en una reunión del Partido celebrada durante el mes de julio de 1896 se le enviara, junto con otros tres compañeros, a Madrid, para mantener conversaciones con los líderes de los partidos demócratas y concertar una alianza con uno de ellos (8).

A finales de septiembre llegaba la Comisión a la Península y, después de una visita a Labra en su residencia de Asturias y contando con su visto bueno, se dirigieron a la capital. En el mes de noviembre comenzaron sus gestiones de sondeo con sendas visitas al Ministro de Ultramar, D. Tomás Castellano, al Jefe del Gobierno y a Francisco Silvela. Más adelante y sucesivamente, visitaron a Salmerón, Pi y Margall, José Carvajal, José Esquerdo y José López Muro, dejando para el final las visitas a los líderes del Partido Liberal-Fusionista, Segismundo Moret, Antonio Maura, Gaspar Núñez de Arce, Germán Gamazo, Joaquín Ló-

pez Puigcever, José López Domínguez y el Conde de Romanones.

Por último, el día 30 de noviembre se entrevistaban con Sagasta.

Todos los personajes entrevistados se mostraron favorablemente dispuestos a conceder una amplia autonomía a Puerto Rico, si bien es cierto que Cánovas no se comprometió a conceder la reforma del sufragio. Sagasta, por el contrario, se manifestó totalmente dispuesto a conceder todo lo que pedía el Partido, incluyendo la reforma electoral, todo ello, naturalmente, una vez que estuviera en el poder; de modo que, junto a la igualdad política de los puertorriqueños, aceptaba otorgar a la isla una amplia descentralización administrativa (9).

Después de estas terminantes declaraciones y promesas la Comisión, con el voto en contra de D. Federico Degetau González, decidió proponer a Sagasta una alianza de ambos partidos, proposición que fue acogida cordialmente por el jefe liberal, quedando en estudiarla durante unos días. Al cabo, propuso, en lugar de la alianza, una fusión de ambos partidos, de manera que el Partido Autonomista de la isla se convirtiera en filial del Liberal-Reformista peninsular. La propuesta fue aceptada por la Comisión y quedó establecida con arreglo a la siguiente fórmula:

"La Comisión del Partido Autonomista de Puerto Rico, a nombre de la Delegación del mismo, en virtud de las facultades de que se halla investida, declara que prestará su apoyo al Partido Liberal que preside D. Práxedes Mateo Sagasta, tanto en su política general como antillana, visto que este partido al desenvolver las bases de reformas con el espíritu más expansivo y el criterio más liberal, otorgará a las Antillas, como ya lo hubiera hecho de continuar en el poder, la mayor descentralización posible, dentro de la unidad nacional, de suerte que la iniciativa y gestión de sus intereses locales (municipales y provinciales) les corresponda y pertenezca por completo, como solicitan los liberales puertorriqueños; y que cesando toda distinción entre españoles, los habitantes de Puerto Rico gocen los mismos derechos que los peninsulares, como medio, el más seguro, de dar satisfacción a los principios democráticos por todos proclamados. Y como para la debida unificación del procedimiento es necesaria la incorporación de los autonomistas de Puerto Rico, la Comisión someterá a la Asamblea general del

Partido la indicada incorporación para constituir en la isla un solo Partido Liberal, sometido a la disciplina del de la Península como prolongación suya en aquella provincia ultramarina" (10).

Concluida así la misión, Muñoz Rivera, Gómez Brioso y Matienzo Cintrón emprendieron viaje de regreso a Puerto Rico, a donde llegaron el 11 de febrero de 1897. Al día siguiente exponían ante la Asamblea del Partido celebrada en San Juan sus gestiones, al tiempo que presentaron sus recomendaciones. Sometidos a la Asamblea los términos del acuerdo con el Partido Liberal-Fusionista, así como los votos en contra de Labra y Degetau, se procedió a la votación sobre los mismos, arrojando una mayoría a favor del acuerdo. Ante este resultado, se retiraron de la Asamblea los partidarios del pacto con los republicanos peninsulares, produciéndose de esta forma la primera excisión en el seno del Partido. Después de ser elegido el Comité Provincial del Partido Liberal-Fusionista de Puerto Rico, se clausuró la Asamblea (11).

Los miembros disidentes, al frente de los cuales estaba D. José Celso Barbosa comenzaron de inmediato las gestiones para la organización de un partido que, bajo la denominación de "Autonomista Histórico u Ortodoxo", acogiera a todos los autonomistas disconformes con la fusión realizada. Se procedió a elegir un Comité local y se nombró una comisión para que se encargase de la organización de comités locales (12).

2.- La subida del Partido Liberal al poder.- Repercusión en Puerto Rico.-

En estas circunstancias llegó a la isla la noticia del asesinato de Cánovas y la formación de un nuevo Gabinete liberal, después del breve Ministerio de Azcárraga. La incorporación de Moret al Ministerio de Ultramar era una garantía de que finalmente el Gobierno de la Península pondría en práctica el régimen autonómico, ya que Moret estaba totalmente identificado con la política ultramarina de Sagasta y había hecho públicas mani-

festaciones de su aceptación de la autonomía (13).

Efectivamente, en el primer Consejo de Ministros que celebró el nuevo Gabinete el día 16 de octubre de 1897 se acordó conceder la autonomía a Cuba y Puerto Rico, procediéndose a su implementación por medio de cuatro Decretos aprobados por el Consejo de Ministros celebrado el 22 de noviembre y firmados posteriormente por la Reina Regente (14).

La subida de Sagasta al poder llenó de entusiasmo al Partido Liberal-Fusionista de Puerto Rico y también al Autonomista Ortodoxo; este último reconocía que con Sagasta en el poder, el autonomismo podría ser finalmente una realidad (15).

Entre los incondicionales no causó precisamente júbilo el nuevo Gobierno, pero, conformes con su política de aceptar todas las decisiones del Gobierno, ya fuera liberal o conservador, se apresuraron a ponerse a la disposición del mismo "para el planteamiento de cuanto considerase conveniente al mejor régimen de esta leal provincia" (16).

Nos hemos referido al Partido Incondicional, pero lo cierto era que la disidencia que hemos tenido ocasión de señalar más atrás había cobrado tal fuerza, que con el nombre de "Izquierda Progresista Incondicional" estaba captando adeptos rápidamente, separándose cada día más del núcleo original del Partido. Con la subida de Sagasta al poder, esta facción disidente, encabezada por D. Vicente Balbás y Capó, fue expulsada del Partido Incondicional, ocasión que aprovechó para romper definitivamente con el Partido. El día 3 de noviembre se reunieron los disidentes y procedieron a formar un nuevo partido con el nombre de "Partido de Izquierda Progresista Incondicional" (17). El nuevo Partido estaría dirigido por una Junta Central compuesta por un Secretario general, dos secretarios particulares y quince vocales, que se turnarían en la presidencia. De esta forma, a principios de 1898 había en Puerto Rico cuatro partidos.

3.- El Acta Autonómica de Puerto Rico.-

Cuatro fueron, según ya hemos mencionado, los decretos autonómicos aprobados por el Gobierno de Sagasta en noviembre de 1897: el primero establecía la igualdad de derechos políticos de los españoles residentes en las Antillas y los peninsulares; el segundo hacía extensiva a Cuba y Puerto Rico la Ley Electoral de la Península de 26 de junio de 1890, que había implantado el sufragio universal; el tercero declaraba la autonomía de Puerto Rico y el cuarto lo mismo de Cuba (18).

Las reacciones ante los decretos autonómicos pueden dividirse en tres grupos: los que aplaudieron la decisión del Gobierno, considerándola como la auténtica forma de resolver los problemas coloniales; los que, aun aceptando su valor, consideraron las medidas como un remedio demasiado tardío y finalmente, los que criticaron duramente la decisión, tildando los decretos de "desdichados documentos" que acarrearían la independencia, aun sin intervención de las potencias extranjeras (19).

4.- La organización del primer Gobierno autonómico.-

Deseoso Labra de que el Partido Autonomista Ortodoxo no quedara excluido del Gobierno de la isla, pidió a sus jefes que se avinieran a colaborar con el Liberal-Fusionista. En el mismo sentido se pronunció el Gobierno de la Península, dando órdenes al Gobernador para que ofreciese sus buenos oficios en este sentido. El general Marín González consiguió, en efecto, que ambos partidos nombrasen sendas comisiones y que celebrasen varias reuniones en La Fortaleza, encaminadas a lograr un acuerdo de colaboración. Tras estudiar diversas combinaciones, el día 5 de febrero de 1898 se acordó que el primer Gobierno autonómico se constituiría con representación de ambos partidos, hasta que las elecciones determinasen su composición definitiva. El reparto de cargos aprobado por ambas comisiones fue: para los Ortodoxos, la Presidencia del Gabinete y las Secretarías de Instrucción y de Hacienda; para los Liberales, las de Gobernación, Gracia y Justicia, Agricultura, Obras Públicas y Comunicaciones (20).

El día 10 de febrero nombraba el Gobernador a las personas que habían de constituir el Gabinete Autonomista Insular: D. Francisco Mariano Quiñones, Presidente; D. Manuel Rossy Calderón Secretario de Instrucción Pública y D. Manuel Fernández Juncos, Secretario de Hacienda, todos ellos Ortodoxos. D. Juan Severo Quiñones, Secretario de Agricultura, Industria y Comercio; D. Juan Hernández López, de Obras Públicas y Comunicaciones y D. Luis Muñoz Rivera, de Gracia y Justicia y Gobernación (21). Tres días más tarde prestaba juramento el Gabinete y se entregaba de lleno a su labor de gobierno.

5.- La fusión de los dos partidos autonomistas.-

A pesar de haber logrado la colaboración de los dos partidos para formar entre ambos el Gobierno autonómico, el Gobierno de la Península siguió presionando sobre ellos para lograr la fusión de ambos, y requerida la ayuda de los respectivos jefes, éstos presentaron el 21 de febrero sendos pliegos de bases. Discutidos los mismos por una comisión mixta, poco a poco se fueron salvando las diferencias, incluso la condición impuesta por los Ortodoxos de que Muñoz Rivera no fuera el presidente del Partido. En aras de la concordia, éste aceptó renunciar a su cargo, nombrando para sustituirle a D. Ramón Román Rivera. Salvado así el último obstáculo, se llegó rápidamente a un entendimiento total, y el día 25 quedaron aprobadas las bases del nuevo partido (22). El nombre acordado para el mismo fue "Unión Autonomista Liberal" y hacía suyo el programa del Partido Autonomista de 25 de noviembre de 1887.

C.- La convocatoria de elecciones en Puerto Rico.- La campaña electoral

Las Cortes conservadoras de 1896 fueron suspendidas el 2 de junio de 1897 y disueltas por Real Decreto el 26 de febrero de 1898; las elecciones quedaban fijadas para el 31 de marzo (23).

Los comités locales de la Unión Autonomista se entregaron acto seguido a la labor de designar los candidatos para las elecciones de representantes a la Cámara Insular y de diputados a Cortes. Pero bien pronto quedó al descubierto que la armonía lograda entre las dos tendencias del autonomismo había sido meramente superficial, ya que al efectuarse las nominaciones surgieron numerosas quejas y acusaciones por ambas partes, que terminaron por producir una ruptura de la unidad y del acuerdo de fusión. Desde este momento -marzo de 1898- cada fracción se dedicó a una campaña de propaganda de sus propios candidatos.

Al mismo tiempo, un grupo de antiguos autonomistas de Mayagüez fundaba una agrupación política bajo el nombre de Partido Autonomista Radical, cuyo programa político iba más allá de los límites fijados por el Acta autonómica (24).

Por su parte, el recién fundado Partido de Izquierda Progresista Incondicional llevó a cabo una reunión en San Juan el 15 de febrero de 1898, con el fin de adoptar una postura ante los últimos acontecimientos políticos que habían tenido lugar en la isla. En esta reunión acordaron constituir una comunidad independiente con el nombre genérico de "Partido Oportunista", cuyo contenido específico sería determinado una vez que los otros partidos de la isla adoptasen su programa definitivo. Elegida la Junta Central Directiva de la nueva agrupación, lanzó un Manifiesto, en el que anunciaba un programa de mejoras económicas, mientras que en lo político decía entre otras cosas:

"No le es inadvertido que existen todavía escasos elementos refractarios a la nueva legalidad, los cuales, afectando considerar al pueblo puertorriqueño incapaz de regir sus propios destinos, procuren empequeñecerle, cual si careciese de las dotes de buen sentido, inteligencia y laboriosidad que precisamente le enaltecen. Esos pocos que puedan recibir el establecimiento definitivo del régimen popular como un peligro para esta Antilla, viven, a su entender, convencidos de su impotencia, y les deja entregados a regeneración que solo el tiempo pueda otorgarles. El descrédito de nuestra rehabilitación política lo sería de la nación magnánima que le concede" (25).

La referencia a la postura del Partido Incondicional es perfectamente clara.

Finalmente, por lo que se refiere a la actitud del Partido Incondicional, no fue muy diferente a la que había adoptado en ocasiones anteriores, consecuente con su posición de partido gubernamental, y aunque hasta ese momento había visto con malos ojos todo lo que se relacionara de cerca o de lejos con el autonomismo:

"Si el nuevo Gobierno nos resuelve en la práctica lo que otros que le precedieron al parecer no lograron, tendremos que bendecir la autonomía, y sin pasión aplaudiremos a esos dignos hombres que por hoy necesitan de todo apoyo para hacerles posible el fin que realiza la Nación, apoyo y auxilio que nosotros les ofrecemos con toda la sinceridad de nuestra alma" (26)

Actitud gubernamental pura que poco antes había permitido a un diputado incondicional aceptar de buen grado la decisión del Gobierno de no celebrar elecciones municipales en la isla:

"El partido incondicional es eminentemente gubernamental; en cuestiones políticas acepta todo lo que decreta el Gobierno de la Nación, sea el que sea, sin oposición ninguna. Por consiguiente, si el Gobierno de S.M. cree que no deben hacerse las elecciones de Ayuntamientos en Puerto Rico, el Partido Incondicional entiende eso mismo" (27).

D.- Los resultados.-

El día 27 de marzo tuvieron lugar las elecciones para los 16 representantes de la isla ante las Cortes y, según lo previsto, resultaron triunfantes los liberal-fusionistas que consiguieron sacar victoriosos a 10 de sus candidatos, frente a 6 de los ortodoxos (28). Ni el Partido Incondicional, ni la Izquierda Progresista (Partido Oportunista) ni el Autonomista Radical lograron sacar ninguno de sus candidatos.

E.- Comentarios.-

Estas elecciones, que fueron las últimas celebradas en Puer-

to Rico bajo la soberanía española, eran al mismo tiempo las primeras que se efectuaban mediante sufragio universal (29). El censo electoral arrojó una cifra de 166,068 electores, salto verdaderamente gigantesco con relación a todos los anteriores, incluido el de 1873, en el que los electores no llegaron a los 44,000. A pesar de ello, no se produjeron mayores complicaciones y el porcentaje de participación fue muy elevado (30).

Los Oportunistas acogieron con resignación el resultado, achacando su fracaso a la apatía de sus afiliados, que les había llevado a no tomar parte en los comicios (31).

Pero tanto los Incondicionales como los Ortodoxos encajaron muy mal su derrota y se dedicaron a lanzar acusaciones y reproches sobre todo contra Muñoz Rivera, al que responsabilizaban de todas las irregularidades que, en su opinión, se habían producido a lo largo del proceso electoral. Al mismo tiempo, el Partido Incondicional publicó un Manifiesto en el que, después de repetir las acusaciones de intransigencia, parcialidad y tropellos hacia sus correligionarios, anunciaba su retirada de la lucha política:

"En cuanto a nosotros, estamos satisfechos de haber escrito la última página de nuestra historia con una nueva prueba de nuestro amor a la región y a la patria. Y sin renunciar a la esperanza de que brille el sol de la justicia para poder, amparados por la Ley, defender nuestros derechos, plegamos nuestra bandera...

Hemos cumplido con nuestro deber. Estamos orgullosos de nuestra historia, de la que no debemos borrar una sola página. Para lo futuro, evadimos responsabilidades, porque dejamos demostrado que no es a nosotros a quienes deben exigirlas el pueblo puertorriqueño y la Nación española " (32).

- - - - -

NOTAS

- 1.- FERNANDEZ ALMAGRO, Melchor. Op.Cit., Tomo II, pág. 277
- 2.- Gaceta de Puerto Rico, 1897, números 2 y 21, (25 de enero).
- 3.- "El Pais", 1897, números 21, 23 y 48. "La Democracia", 1897, números 1593 y 1597. "La Correspondencia", 1897, números 2238, 2240 y 2252.
- 4.- "Boletín Mercantil", 1897, número 17.
- 5.- Gaceta de Puerto Rico, 1897, número 34. FERNANDEZ ALMAGRO, Melchor. Op.Cit., Tomo II, págs. 384 y 385.
- 6.- En una obra escrita ese mismo año, Labra expresaba el siguiente juicio sobre estos Decretos:
"Sin duda los Decretos referidos tienen muchos defectos. Para su eficacia existe la enorme dificultad de que en ellos se prescinde de la reforma electoral requerida por todos los elementos progresivos e imparciales de las Antillas. Se incurre, pues, en el mismo error de la reforma de los liberales peninsulares de 1895, cuyas primeras consecuencias ya se han visto en Puerto Rico donde, en estos últimos días, se ha planteado esa reforma, en medio del retraimiento de todos los liberales y autonomistas y en provecho exclusivo de los antiguos conservadores, los cuales continúan monopolizando el poder, con el beneficio de que éste sea ahora mayor cuando las Cortes y el Ministerio de Ultramar tenían mayor competencia en los negocios de las Antillas. Pero, con todos sus defectos, los decretos de febrero y abril del 97, son un considerable progreso, tanto por lo que contienen, cuanto por lo que obligan al partido Liberal, sucesor obligado, en plazo próximo, de los conservadores". Cf.: "La República y las libertades...", pág. 49 y 50.
- 7.- FERNANDEZ ALMAGRO, Melchor. Op.Cit., Tomo III, pág. 23.
- 8.- "El Pais", 1896, número 176.
- 9.- "La Democracia", 1896, números 1570, 1593, 1594 y 1616.
- 10.- LABRA, Rafael María de: "La República y las libertades...", pág. 10.
- 11.- PAGAN, Bolívar. Op.Cit., págs. 482 a 486.
- 12.- Ibidem, págs. 488 y sgts. El día 16 de febrero de 1897, José Celso Barbosa, Manuel F. Rossy y Luis Sánchez Morales publicaban un manifiesto dirigido "Al Pueblo Auto-

nomista", en el que decían, entre otras cosas:

"Mantenemos íntegro sin mixtificaciones el credo votado en Ponce, donde juramos sostenerlo ante la venerable figura de Don Román Baldorioty de Castro, quien desde la inmortalidad donde lo llevaron sus méritos y virtudes, ratifica nuestro acuerdo y bendice nuestra actitud". Cf.: PAGAN, Bolívar. Op.Cit., pág. 486.

- 13.- En efecto, el 19 de julio de 1897 pronunció Moret un discurso en Zaragoza, a favor de la autonomía. La interpretación de Moret respecto a la autonomía era que consistía en conceder a Cuba y Puerto Rico los mismos derechos que a los españoles peninsulares y competencia local respecto a la administración insular, quedando reservadas al Gobierno de Madrid las competencias del Estado en cuanto a guerra, Marina y Gracia y Justicia. Cf.: FERNANDEZ ALMAGRO, Melchor. Op.Cit., pág. 404 y 405.
- 14.- Ibidem, Tomo III, pág. 31
- 15.- "El País", 1897, número 210.
- 16.- "Boletín Mercantil", 1897, números 97 y 162.
- 17.- CRUZ MONCLOVA, Lidio. Op.Cit., Tomo III, pág. 168. PAGAN, Bolívar. Op.Cit., pág. 497.
- 18.- Gaceta de Puerto Rico, 1897, número 296. Archivo Histórico Nacional. Sección de Ultramar, Legajo 5143/36 y 52. Gaceta de Madrid, 1897, (16 de abril). Con arreglo al Decreto que establecía el régimen autonómico en la isla de Puerto Rico, el Gobierno de la isla se compondría de: el Gobernador general; un Parlamento dividido en dos cuerpos: Cámara de Representantes y Consejo de Administración; un Presidente y cinco Ministerios, a saber: Gracia, Justicia y Administración; Hacienda; Instrucción; Agricultura, Industria y Comercio y Obras Públicas y Comunicaciones; una Diputación provincial; Ayuntamientos electivos; 16 diputados y tres senadores en las Cortes españolas.
- 19.- Diario de Sesiones de las Cortes, 1898, págs. 260 y 261; 458 a 463. El Congreso, después de un largo debate, en el que se expusieron multitud de juicios opuestos, aprobó un proyecto de ley eximiendo al Gobierno de responsabilidad por la concesión del régimen autonómico. Cf.: Ibidem, Apéndice 3º al número 33.
- 20.- "La Democracia", 1898, números 1908 y 1909.
- 21.- Archivo Histórico Nacional (Madrid). Sección de Ultramar, Legajo 5143/20. El día 7 de febrero de 1898 transmitía el Gobernador de la isla el siguiente mensaje cifrado al Ministro de Ultramar: "Aceptada conciliación entre

los dos partidos acordaron repartir Secretarías Hacienda, Instrucción autonomistas; Gobernación, Obras Públicas, Agricultura, Liberales. Presidencia, Francisco Mariano Quiñones. No fue posible dejar sin proveer Presidencia para buscar compensación exigiendo provisión base concierto. Procuré recabar Hacienda para Liberales, pero autonomistas juzgábanse debilitados. Ambos partidos satisfechos; yo juzgo real composición Gabinete pertenece Liberales; comunicaré nombres proyectado Gabinete pronto".

22.- Ibidem. También, "La Democracia", 1898, números 1926 y 1927. Las Bases del nuevo Partido eran las siguientes:

"Primera: Se crea un Partido que tendrá por nombre el de Unión Autonomista Liberal.

Segunda: En este Partido se refunden las dos agrupaciones que existen en Puerto Rico con los nombres de Liberal y Autonomista.

Tercera: El Partido de la Unión adopta como programa la Ley fundamental del régimen autonomista de 25 de noviembre de 1897, aplicada con el criterio más expansivo y liberal. En lo que se refiere a los procedimientos, se ajusta a las fórmulas de la Constitución de 1887, votada en la Asamblea de Ponce, armonizadas con las presentes bases.

Cuarta: Los fines de la Unión serán absolutamente locales y circunscritos a la política colonial, pudiendo, no obstante, sus afiliados mantener sus ideas y sus compromisos en lo que se refiere a la política nacional.

Quinta: El nuevo Partido tendrá una corporación directora llamada Junta Central, compuesta de cien personas, designadas por partes iguales entre el actual Comité Provincial que preside el Sr. Muñoz Rivera y la actual Delegación que preside el Sr. Fernández Juncos.

Sexta: Las funciones delegadas de la Junta Central para el gobierno y dirección del Partido corresponden a una Comisión Ejecutiva elegida previamente por iguales partes, de un lado el Comité Provincial y de otro el Directorio, y compuesta de ocho personas, cuyo presidente cumplirá todos los acuerdos y representará a la agrupación en sus relaciones con las autoridades y con las demás fuerzas políticas organizadas en el país.

Séptima: Los Comités Locales de los dos partidos hoy existentes podrán optar por uno de los términos de esta alternativa: fundirse en uno solo, entrando a constituirlos por mitad individuos de las dos agrupaciones; o disolverse para formar una asamblea popular para su reorganización. En estas asambleas tendrán voto los electores liberales y autonomistas de las localidades en que se verifiquen. En donde no haya Comité de una de las agrupaciones, se designará por los afiliados a

la agrupación que carezca de Comoté un número igual de individuos que compongan el de la otra. Si no hay acuerdo en la elección de aquellos términos, se apelará a la dicha asamblea local.

Octava: Los candidatos para toda clase de elecciones se designarán por los organismos y por los trámites establecidos en la Constitución de Ponce, reformada en Mayagüez, o sea, congregando los Comités locales a sus electores y eligiendo estos comisionados que pasen a la cabecera del distrito a designar el candidato en unión de los comisionados de los demás pueblos.

Novena: La Presidencia provincial de la Unión Autonomista Liberal será ejercida por un liberal que designe el presidente del Comité Provincial.

Décima: Estas bases serán sometidas a la próxima asamblea que se celebrará tan pronto como lo permitan las circunstancias y estén ya constituidos los Comités e implantado el régimen. Entre tanto, se considerarán como de carácter transitorio los organismos creados dentro de la Unión, que es principio esencial e invariable en la existencia de la colectividad".

23.- MARTINEZ CUADRADO, Miguel: "Elecciones...", pág. 595.

24.- CRUZ MONCLOVA, Lidio. Op. Cit., Tomo III, pág. 189.

25.- PAGAN, Bolívar. Op.Cit. pág. 505.

26.- "Boletín Mercantil", 1898, número 19.

27.- Diario de Sesiones de las Cortes, 1896, págs.1645 y 1646.

Sin embargo, en esa misma sesión, el también diputado incondicional, Sr. Soler y Casajuana, matizaba la declaración de su compañero en un sentido más cercano a la postura del nuevo partido de Izquierda Progresista: "Debo declarar dos cosas: que estoy de acuerdo con las manifestaciones que acaba de hacer el señor Martín Sánchez, ratificando el carácter gubernamental del Partido Incondicional, y que puedo dar al señor Alvarado la seguridad de que ni el modo de ser del partido incondicional, ni su temperamento, ni sus respetos a la ley, ni su gran adhesión a las determinaciones que emanan de las Cortes, ni su templanza, ni el hecho de que no formule determinadas censuras, podrán ser jamás un argumento para afirmar que ve con agrado que no se cumplan las disposiciones legales en aquella isla".

28.- Pueden verse los resultados en los Cuadros y Mapas electorales adjuntos.

29.- En efecto, las de 1873 se habían llevado a cabo con arreglo a la Ley de 11 de marzo de ese mismo año que, si bien aplicaba a la isla el mismo criterio que a la Península en cuanto al requisito de la edad, no así en

lo relativo a otras calidades, ya que exigía como requisito adicional para poder ser elector en la isla una cuota contributiva, aunque reducida a "cualquier cantidad pagada al Estado en concepto de contribución".

30.- Archivo Histórico Nacional (Madrid). Sección de Ultramar, Legajo 5143/38.

31.- "La Democracia", 1898, número 1,956.

32.- "Boletín Mercantil", 1898, número 41.

.

Notas sobre el Movimiento Obrero en Puerto Rico.-

A lo largo de todo este trabajo, solamente hemos hecho referencia una vez a la organización de ciertas asociaciones de obreros en 1873, como consecuencia de la aprobación por el Gobierno de la República de la Ley de Asociaciones para Puerto Rico. Esta Ley no pasó de ser en la práctica un fugaz comienzo del asociacionismo, ya que la caída de la República al poco tiempo significó para Puerto Rico la pérdida de éste y otros derechos políticos.

Desde 1874 hasta la década de los 90 apenas se desarrolla algo que pueda considerarse como pensamiento, organización y menos aún intervención de las masas obreras en los procesos políticos y económicos del país. Las causas de esta ausencia de actividad obrera radicaban sobretudo en la inexistencia de una legislación que permitiera a los obreros organizarse como tales para la defensa de sus intereses. La siguiente Ley de Asociaciones que tuvo Puerto Rico data de 1888, y fue una de las últimas concesiones del régimen asimilista.

Pero sin duda que existieron otras razones para esta falta de pensamiento y de actividad obreros. En primer lugar, tenemos que a lo largo de todo el siglo XIX la actividad de los líderes políticos e intelectuales se orientó fundamental si no exclusivamente hacia la consecución de los derechos políticos, con el fin de poner a la isla en una situación de igualdad con relación a la Metrópoli. Y esta actividad, por motivos también políticos, estuvo en manos de un pequeño grupo de personas que eran las únicas capacitadas legalmente para intervenir en los procesos políticos.

Por otra parte, existiendo como existió a lo largo de todo el siglo XIX un régimen electoral censitario y una reglamentación restrictiva de la organización del trabajo, los obreros no pudieron en manera alguna intervenir en la elección de sus representantes, de personas que se hicieran portavoces de sus necesidades e intereses.

Por lo que se refiere al régimen laboral, el mismo se encontraba reglamentado a través de una serie de disposiciones

aprobadas por varios Gobernadores de la isla, entre los que destacaron dos Circulares publicadas en 1838 por el general D. Miguel López de Baños sobre la obligación de los jornaleros de trabajar en la reparación de los caminos de sus respectivos pueblos y la otra sobre vagos, considerando como tales a los que carecieran de renta o profesión, disponiendo que tales personas fueran condenadas a trabajar en las obras públicas, si en el término de veinte días no acreditaban estar trabajando para algún propietario.

En 1849 publicaba otro Gobernador, el general D. Juan de la Pezuela, otro Reglamento mucho más completo sobre jornaleros, sus derechos y obligaciones que, si bien contenía algunas disposiciones favorables a los trabajadores, en el fondo dejaba a los mismos a merced de los propietarios, como parte más fuerte que eran dentro del sistema de libre contratación (1).

Finalmente, aún en las contadas ocasiones en las que el sistema electoral admitió el concepto de capacidades de lectura y escritura, esta medida no produjo los efectos apetecidos, dado el elevado porcentaje de analfabetos que había en Puerto Rico.

Por todo esto: por el régimen laboral restrictivo, por la falta de leyes que permitieran la libre asociación laboral, por el elevado índice de analfabetismo y por el régimen económico de tipo extractivo que imperaba en la isla, no se pudo desarrollar un pensamiento ni un movimiento típicamente obreros.

Cuando llega a la isla la Ley de Asociaciones de 1888, comienza a desarrollarse un movimiento asociativo obrero, pero de carácter cultural y recreativo, no laboral ni de clase; un movimiento de tipo gremial (2).

En estas condiciones llegaba a la isla en 1897 D. Santiago Iglesias Pantín procedente de Cuba y enterado enseguida de la inexistencia en Puerto Rico de asociaciones, organizaciones ni líderes obreros, se entrega por completo a la tarea de promover y organizar un movimiento obrero. Comienza por fundar en el mes de mayo la primera publicación periódica dedicada a la defensa y promoción de los intereses de los trabajadores en la isla: "El Ensayo obrero", en el que colaboraron con Iglesias, Fernández Gómez Acosta, José Ferrer y Ferrer y Ramón del Romeral (pseudónimo de Ramón Romero Rosa) (3).

Acto seguido y antes de que el Gobierno de la Península concediera la autonomía a Puerto Rico, Santiago Iglesias decidió fundar la primera organización obrera encaminada a la defensa de sus intereses, la "Federación del Trabajo", cuyas bases había hecho públicas en las páginas de "El Ensayo Obrero". Sin embargo, es encarcelado a causa precisamente de estas actividades y no recobra la libertad hasta después de la llegada de los norteamericanos en Puerto Rico, con lo que su esfuerzo quedó interrumpido hasta el final de la soberanía española sobre la isla (4).

tres años después de la famosa Información para las Reformas de Ultramar que en 1865 decretó el Gabinete de Madrid; pero es verdad histórica que en las luces gloriosas de la época hasta el advenimiento de la Autonomía Española de 1897 todo fue obra de los próceres que en nuestro país constituían la "intelligentsia" liberadora. En el esfuerzo no hubo participación activa y consciente de las masas de nuestro pueblo. Salvo la gesta inmortal de los abolicionistas de la esclavitud, aquel fue un período de ardorosa brega por reivindicaciones políticas, por el derecho colectivo, esencialmente político de la isla. Fue una lucha patriótica para traspasar el poder político de peninsulares a criollos. Aun bajo la conquista del Gobierno Autonomico de 1897, los plenos derechos civiles y las garantías sociales y humanas para las masas del pueblo no eran realidades halagadoras".

NOTAS:

- (1).-- Archivo General de Indias. Sección 10, Ultramar, Legajo 416. COLL Y TOSTE, Cayetano: "Boletín Histórico", Tomo VI, págs. 217 a 221.
- (2).-- IGLESIAS PAGAN, Igualdad: "El Obreroismo en Puerto Rico: época de Santiago Iglesias (1896-1905)", (Palencia, Ediciones Juan Ponce de León, 1973), pág. 17. Dice la autora acerca del carácter de estas asociaciones:

"Existieron... asociaciones de instrucción y recreo, casinos de artesanos, cofradías y hermandades, asociaciones de beneficencia y socorro mutuo... pero carecían de una ideología y militancia genuinamente obrera...

Los obreros que organizaban sus "casinos artísticos no interesaban la participación de otros obreros que pertenecían a los "casinos de artesanos". Y así se formaban estos grupos en niveles sociales distintos, dentro de la misma clase trabajadora".

- (3).-- PEDREIRA, Antonio Salvador. Op.Cit., pág. 244. Al consignar los datos sobre este periódico, dice el autor acerca del carácter del movimiento obrero:

"Aparte de los centros sociales y casinos de artesanos, nuestros trabajadores no gozaron de verdadera cohesión gremial para defender sus derechos hasta que llegó a Puerto Rico el fundador del Partido Socialista, D. Santiago Iglesias Pantín".

Los otros dos periódicos obreros de la isla en esta época fueron: "El Porvenir social" y "El Eco Proletario". Ibidem.

- (4).-- IGLESIAS PANTIN, Santiago: "Luchas emancipadoras (Crónicas de Puerto Rico)", (San Juan, s.e., 1958), págs. 35 y 36. LEBRON RODRIGUEZ, Ramón: "El Problema obrero en Puerto Rico", (San Juan, Tipografía "El Compás", 1924), pág. 10. ROMERAL, Ramón del: "Santiago Iglesias: su biografía en el movimiento obrero de Puerto Rico, (Puerto Rico, Tipografía de L. Ferreras, 1901), págs. 6 y 7.

Extractamos de la obra de Santiago Iglesias los siguientes párrafos que demuestran la falta absoluta de movimiento obrero insular a lo largo de todo el siglo XIX. Prólogo de Bolívar Pagán:

"La consciencia política de Puerto Rico comenzó a vibrar con ansias de liberación, puede decirse, al formarse los primeros partidos políticos puertorriqueños

RESULTADOS

(5555)

<u>MUNICIPIO.</u>	<u>POBLACION</u>	<u>ELECTORES</u>	<u>RELACION Hab/Elec</u>	<u>VOTANTES</u>	<u>ABST.</u>	<u>CANDIDATOS ELEGIDOS</u>	<u>VOTOS</u>
PAN DE AZÚCAR		25,345				GARCIA MOLINAS, Francisco	18,361
						GULLON Y DABAN, Eduardo	10,650
						LABRA, Rafael María de	8,165
PONCE		33,410				SANZ DE ANDINO, Juan Cervantes	7,407
						DEGETAU GONZALEZ, FEDERICO	7,152
						DIEZ PEROJO, José	7,150
PAYAGÜEZ		33,198				LOYA Y OJANGUREN, Miguel	11,594
						SILVA RODRIGUEZ, José T.	11,373
PASTRITOS						CORTON TORO, Antonio	6,552
PRINCIBO		10,175		6,395	37.14	COLON BONFIGLIO, Felipe	6,395
QUEBRADILLAS		11,119		8,775	21.08	GASCON, Juan Francisco	7,983
GUAYAMA		11,304		7,128	36.94	CORTON TORO, Antonio	6,722
UUMACAO		10,294		8,640	33.86	CINTRON, Melquíades	6,807
CAGUAS		10,964		8,640	21.19	SANZ DE ANDINO, Juan Cervantes	8,640
COAMO		9,643		8,160	9.76	FRANCOS RODRIGUEZ, José	6,894
UTUADO		10,215		7,708	24.54	MENDEZ CARDONA, Ramón	7,687
	953,243	165,068	5.77		26.35		

FUENTES: Gaceta de Puerto Rico, 1898, número 87. Archivo de las Cortes. Sección de Expedientes, Legajo 111, número 42. Archivo Histórico Nacional. Sección de Ultramar, Legajo 5143/53.

CUADRO II

(1898)

RESULTADOS POR PARTIDOS

LIBERALES:

GARCIA MOLINAS, Francisco.....	San Juan
GULLON Y DABAN, Eduardo.....	"
DIEZ DEL PEROJO, José.....	Ponce
FRANCOS RODRIGUEZ, José.....	Coamo
GASCON, Juan Francisco.....	Quebradillas
MENDEZ CARDONA, Ramón.....	Utuado
SANZ DE ANDINO, Juan Cervantes.....	Ponce y Ca- guas.
COROTON TORO, Antonio.....	Mayagüez y Guayama

ORTODOXOS:

MOYA OJANGUREN, Miguel.....	Mayagüez
SILVA RODRIGUEZ, José Tomás.....	"
COLON BONFIGLIO, Felipe.....	Arecibo
CINTRON, Melquíades.....	Humacao
LABRA, Rafael María de.....	San Juan
DEGETAU GONZALEZ, Federico.....	Ponce

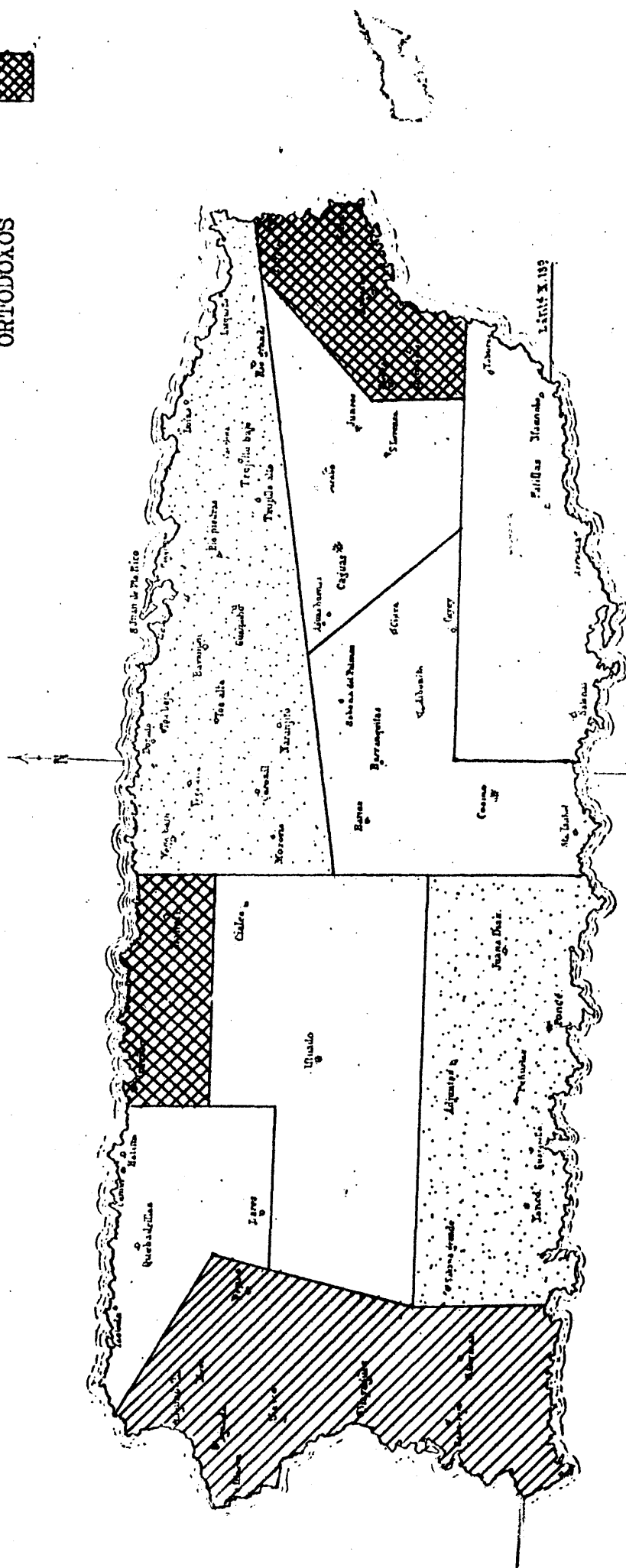
- - - - -

(1898)

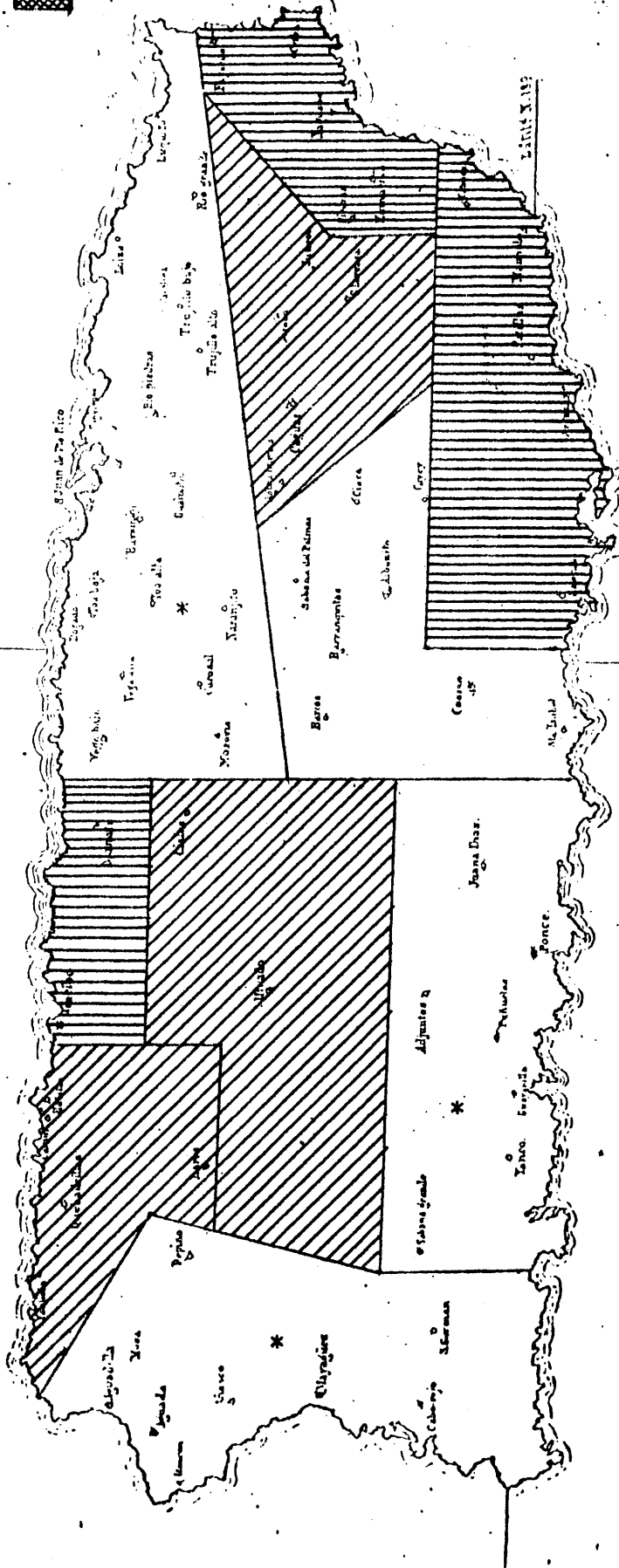
MAYORIA LIBERALES

MAYORIA ORTODOXOS

ORTODOXOS



CA
—
CA
CO
—

[illegible]

* Sin datos

-560-

CONCLUSIONES

Dado que este trabajo se refiere tanto a un estudio de las elecciones para Diputados a Cortes, como de los partidos políticos de Puerto Rico a lo largo del pasado siglo, hemos creído conveniente referirnos por separado a cada uno de los dos temas, no obstante reconocer la íntima conexión que existe entre ellos. Por otra parte, estas Conclusiones se referirán fundamentalmente al segundo período de los dos en que hemos dividido nuestro estudio, ya que el diferente sistema electoral vigente hasta 1836, unido a la inexistencia en el mismo de estructuras político-partidistas hacen imposible toda comparación.

Por lo que se refiere a los procesos electorales que se efectuaron a lo largo de la primera parte -1809 a 1836- podemos decir como conclusión general que los consideramos como una especie de experimento -tanteo y prueba- sobre las implicaciones que la concesión de la representación pudiera tener en Ultramar. Desgraciadamente, la pérdida de la mayor parte de las colonias a los pocos años de iniciado este proceso sirvió para que un sector político de la Península y de la propia isla elaboraran una teoría negativa acerca de ambos fenómenos y para que, basándose en el principio "post hoc, propter hoc", imputaran a la concesión de la representación y a la política de reformas iniciada por el Gobierno la culpa de las revoluciones separatistas. Y creemos que esta teoría, de hecho, fue compartida por la mayor parte de los dirigentes políticos de la Metrópoli con independencia de su ideología política, impregnando la actuación de los mismos y tiñéndola de un barniz mezcla de temor y de desconfianza.

Por lo que se refiere al segundo período, expondremos en primer lugar nuestras conclusiones sobre los partidos políticos para finalizar con algunas consideraciones acerca de los procesos electorales.

A.- Consideraciones y conclusiones sobre los partidos políticos de Puerto Rico durante el siglo XIX.-

1.- El fundamento de la estructura bipartidista

Desde los comienzos del siglo XIX encontramos ya en Puerto Rico una actitud dual de dos sectores de la población insular, coincidiendo con una actitud y estructura similares que se desarrollan en la Península ante el anuncio de la convocatoria de las Cortes de 1810: la actitud conservadora y la actitud liberal. Pero creemos que en Puerto Rico, como colonia que había sido hasta esos momentos, había además otra razón para la aparición de ambas posturas: la de los que deseaban una persistencia de la relación colonial, como forma más segura de evitar el contagio y la aparición de fermentos y movimientos secesionistas, y la de los que preferían un desarrollo interior de la isla, hasta ponerla en pie de igualdad con la Metrópoli, apoyándose precisamente en la letra y en el espíritu de los decretos de la Junta Central y del Consejo de Regencia, aunque aceptando, desde luego, la continuidad de su unión a la Metrópoli.

Tal vez esta situación se pueda tomar como un exacto ejemplo del sentido de la diferente posición doctrinal del conservadurismo y del liberalismo; y lo mencionamos, porque repetidamente se sacará a colación en las Cortes la clásica alternativa entre principios e intereses: en tanto que algunos elementos de ellas se aferraban al "sálvense los principios, aunque se pierdan las colonias", otros, en mayor número, se inclinaron por la otra alternativa, quedando todavía un grupo que pensaba era posible salvar los dos términos.

Puesto que en ningún momento a lo largo del siglo entró en los cálculos del Gobierno metropolitano conceder la independencia a los territorios de Ultramar, una de las tendencias de la isla adoptó este postulado -la integridad del territorio na-

cional- como principio fundamental de su doctrina, apoyando a todo Gobierno legalmente constituido, tanto de la Península como de la isla, y subordinando el resto a la defensa del mismo. Unido este principio a su firme creencia de que "las libertades perdieron América", podemos tener un esquema bastante exacto de lo que fue y persiguió a lo largo de toda su existencia el Partido Liberal Conservador, más tarde Partido Incondicional y más tarde Partido Español sin condiciones: apoyo a toda autoridad, temor al separatismo y desconfianza hacia las reformas políticas.

La otra tendencia, la reformista, imbuída de las teorías igualitarias y reformistas de la época y con el ejemplo tan cercano de los Estados Unidos y del Canadá, se inclinó desde el primer momento hacia la consecución para la isla de los derechos y libertades que estimaba propios de un país políticamente adelantado, tal como consideraban al sistema liberal y representativo de la Península, exigiendo el exacto cumplimiento de las declaraciones en ese sentido de la Junta Central y del Consejo de Regencia. Más adelante, convertido en partido, seguirá postulando los mismos principios, aceptando como credo y norma fundamental el sistema asimilista.

2.- Estructura y organización.-

Con relación a estos dos aspectos, creemos que la del Partido Conservador o Incondicional fue más coherente que la del Reformista, debido a una mayor disciplina interna, aunque indudablemente influyó el hecho de sentirse en todo momento protegido por el Gobierno, lo cual le permitía ser más exigente con sus miembros. También tenía la ventaja de que su credo era más simple y no exigía de sus miembros más que la aceptación estricta del principio de la integridad del territorio.

Por el contrario, el Partido Reformista, lo mismo que luego el Autonomista, se movió en un ámbito más amplio, impreciso

y cambiante, que le obligaba a variar las tácticas y su estrategia a medida que iban cambiando las condiciones políticas en la Península o a medida que el Gobierno iba introduciendo reformas en Puerto Rico.

Por otra parte, el hecho de no contar con el apoyo del Gobierno y de verse en algunos momentos combatido por el mismo produjo numerosas deserciones y crisis, que no le permitían ser excesivamente estricto a la hora de aceptar nuevos miembros.

3.- Trayectoria de los partidos

Correspondiendo a su diferente actitud frente al Gobierno, la vida y desarrollo de ambos partidos pasa por etapas diferentes: en tanto que el Conservador pasa inmediatamente después de su fundación por un período de crisis, que se extiende hasta la Restauración, el Reformista goza en esta primera parte de su desarrollo de un relativo florecimiento, posibilitado sobre todo por la actitud benévola del entonces Gobernador de la isla, general Baldrich, y más tarde por el decidido apoyo de otro Gobernador, el general Primo de Rivera, así como del Gobierno de la República.

Con la llegada de la Restauración se produce una inversión de las condiciones, acompañada de un estancamiento de la actividad político-partidista: en el Conservador, por la seguridad que encontraba en la política de prudencia de los Gobiernos de la Península, así como por el apoyo decidido de ellos y de los diferentes Gobernadores de la isla; en el Reformista, por las trabas de toda índole puestas al desarrollo de su credo, que a su vez produjeron un desánimo y frustración en sus principales líderes: serán diez años -desde el 76 hasta el 86- de continuas crisis, a través de las cuales irá cambiando lenta pero irreversiblemente el credo del partido, hasta pasar a ser autonomista en 1887.

Finalmente, la última etapa del período -década de los 90- se caracteriza por el cambio de actitud en el Gobierno, cambio que repercute decisivamente en la trayectoria de ambos partidos: a partir de la elaboración de los primeros proyectos autonomistas, el Partido Incondicional se da cuenta de que tiene perdida la partida y de la resignación inicial pasará a la disolución en 1898. Por el contrario, el Partido Autonomista irá poco a poco -muy lentamente al principio- haciéndose dueño de la situación, hasta el punto de desbancar totalmente a los conservadores, aunque sufriendo a su vez una serie de cismas interiores que restarán efectividad y coherencia a las escasas manifestaciones prácticas de sus posibilidades.

B.- Las Elecciones: Consideraciones generales.-

Antes de exponer nuestras conclusiones referidas específicamente a los procesos electorales, creemos necesario hacer algunas consideraciones y sacar algunas conclusiones acerca de varios aspectos relativos a los sistemas electorales, así como al papel del Gobierno en los procesos electorales de Puerto Rico.

1.- La legalidad electoral

Respecto a este punto, es preciso destacar la consideración diferencial de las provincias de Ultramar en lo relativo sobre todo a las calidades exigidas para obtener el derecho de sufragio: aparte de que en Puerto Rico no se aplicó el sufragio universal hasta 1898, en las etapas en que también rigió en la Península el sistema censitario se exigió a la isla unas cuotas contributivas mayores, se igualó todo tipo de contribuciones y hasta llegó a exigirse a Puerto Rico una cuota contributiva mayor que a Cuba.

2.- La actitud del Gobierno ante los partidos y procesos electorales.

Una práctica constante del Gobierno metropolitano y tam-

bién de los diferentes Gobernadores de la isla fue la de prestar su apoyo a uno de los dos partidos, actitud que producía el automático distanciamiento del otro respecto de la autoridad, haciendo al propio tiempo difícil, si no imposible, una colaboración de ambos partidos en su actuación general y en la específica de los procesos electorales. Desde luego que esta práctica benefició mucho más a los conservadores, ya que, como hemos dicho, la mayoría de los Gobiernos de la Península, así como la de los Gobernadores de la isla se inclinaron hacia ellos. Al igual que en la Península, podemos afirmar que en Puerto Rico el partido que obtenía el apoyo del Gobierno ganaba las elecciones.

Otra práctica también constante del Gobierno peninsular, relacionada ésta directamente con los procesos electorales, fue una constante intervención en los mismos, encaminada a reforzar la posición del partido en el poder mediante la imposición de candidaturas al Partido Conservador, y en algunas ocasiones, hasta al Partido Reformista. Esta práctica, aceptada en la mayor parte de las ocasiones por el Gobernador y por el Partido conservador, desvirtuó no poco el sentido de la representación; pero el Gobierno la seguirá hasta los últimos momentos, a pesar de las fuertes críticas que desencadenó tanto en la isla como en las Cortes.

C.- Las Elecciones: Conclusiones generales.-

Las conclusiones que creemos podrían extraerse de estos hechos son las siguientes:

a). En Puerto Rico existió, a lo largo del período aquí estudiado, una diferente legalidad electoral, la cual produjo los siguientes efectos:

- 1.- Directamente, una reducción de la población electoral de la isla con relación a la de la Península.

2.- Indirectamente, una actitud continua de crítica por parte del sector reformista, que hizo bandera de una misma legalidad electoral, consecuente con su credo asimilista; en varias ocasiones se tradujo en decisiones de retraimiento total como protesta ante esta desigualdad.

3.- Dado también el sistema censitario vigente a lo largo de todo el período, el grupo de población que pudo participar en los procesos electorales fue muy reducido, en relación a la población total de la isla, quedando reducido al grupo de propietarios, comerciantes, a los profesionales y funcionarios del Gobierno. De hecho, hemos calculado que la relación media para el segundo período de electores y habitantes fue de 132, aunque con marcadas oscilaciones (Cuadro III).

4.- Una actitud francamente partidista tanto del Gobierno Peninsular como del insular, que se plasmó en un "quid pro quo" esencialmente contrario al sentido democrático de la representación y lesivo para los intereses de la isla. Sobre todo la práctica de nominar e imponer candidatos ministeriales, muchos de ellos sin relación directa ni intereses en la isla, significó una rémora para el desarrollo de la isla e impidió una auténtica representación de los intereses políticos y económicos insulares; esto sin contar con el mal efecto que la práctica del cunerismo y del ministerialismo produjo en el sector reformista de la isla.

5.- Hemos mencionado cuatro conclusiones negativas. Sin embargo, creemos que los procesos electorales descritos, con todo el aparato de información y de formación política que llevaron aparejado representaron también un factor decisivo en la educación política de los puertorriqueños y en la creación de una conciencia y actitud decididamente favorables a las soluciones "legales" de los problemas que los contemporáneos veían en

la isla y en la relación de ella con la Metrópoli.

Las críticas de los partidos al Gobierno, sobre todo del Reformista, no pusieron nunca, sin embargo, en cuestión la legitimidad de una cierta subordinación o, más bien, intervención de la Metrópoli en los asuntos insulares, y, por otra parte, se dirigían más bien hacia la conducta desconfiada unas veces y de abandono otras en que los Gobiernos de la isla y de la Península incurrieron con frecuencia.

Y como conclusión final de esta parte, creemos que el saldo de los cuarenta años en total en que estuvo vigente en Puerto Rico el régimen liberal y representativo fue altamente positivo y que dejó a la isla en buenas condiciones para una vida autónoma. El azar impidió, sin embargo, que pudiera demostrarlo.

D.- Las Elecciones: Consideraciones y conclusiones relativas a las variables electorales.-

1@.- La Población.-

A lo largo del período aquí estudiado -1869 a 1898- se realizaron tres Censos generales de población en Puerto Rico, en los años 1877, 1887 y 1897 (1). Las cifras que se recogen en el Cuadro I se han obtenido de la Gaceta de la isla, publicadas a efectos electorales o simplemente para registro de la evolución de la misma.

Según el Dr. José L. Vazquez Calzada, los censos efectuados por los españoles en la isla son bastante confiables, según ha demostrado en tesis doctoral (2); por lo mismo, pensamos que las cifras recogidas de la Gaceta también lo serán. Se puede apreciar un crecimiento bastante sostenido de la población, únicamente interrumpido en contadas ocasiones por retrocesos ligeros en 1871, 1873 y 1886, que se debieron más a movimientos emigratorios que a descensos del índice de natalidad.

2.- Etapas en el desarrollo de los procesos electorales.-

Por existir una diferente legalidad electoral a lo largo del período estudiado, así como unas diferencias notables en las variables electorales, hemos dividido el mismo en tres subperíodos o etapas, que son las siguientes:

1@.- Desde 1869 hasta 1873

2@.- Desde 1876 hasta 1891

3@.- Desde 1893 hasta 1898.

Hacemos nuestras conclusiones de nivel general con arreglo a esta división, de la siguiente manera:

Primera etapa: rigen en ella los Reales Decretos de 14 de Diciembre de 1868, 11 de Febrero de 1869, 1 de Abril de 1871 y la Ley de 11 de Marzo de 1873.

La característica principal de este período es la de una constante y progresiva apertura del sistema electoral, hasta llegar a una situación límite, dentro del régimen censitario, que hemos denominado "sistema censitario mínimo directo" en la Elección General de 1873.

Las implicaciones de la misma fueron:

a). Un aumento sostenido del número de electores (Cuadro II).

b). Una disminución consiguiente de la relación electores/habitantes (Cuadro III).

c). Un nivel de participación situado en la zona más alta de mínimo consenso institucional (31.57 %), pero anotando diferencias bruscas y notables entre las diferentes elecciones (Cuadros IV, V y VI).

Segunda etapa: Rigen en ella, aparte del Real Decreto de 7 de Octubre de 1875, que únicamente sirvió para la Elección General de 1875, la Ley Electoral de 1873, vigente en Puerto Rico hasta la Elección General de 1891 inclusive.

Las implicaciones para esta etapa fueron:

1@.- Una reducción drástica inicial del número de electores, seguida y complementada de una progresiva y continua disminución de los electores inscritos en las sucesivas listas electorales, fenómenos que atribuimos dentro de un régimen censitario como era el de Puerto Rico a una falta de interés hacia el sistema representativo viciado, a una actitud de desacuerdo con el mismo y posiblemente también a una crisis económica que se extiende hasta 1886 aproximadamente (Cuadro II).

2@.- Un aumento notable de la relación electores/habitantes, por la elevación de la cuota contributiva (Cuadro III).

3@.- Un nivel de participación prácticamente igual al del período anterior. Dada la continua disminución, en términos absolutos, del número de electores y votantes, que hemos considerado efecto de la falta de interés y de la actitud contraria al sistema por parte de un sector de la población -el reformista- hemos de considerar que esa actitud se compensó con otra en sentido contrario por parte del otro sector partidista -el conservador- y también, como dejamos consignado en el texto, por un cambio de partido realizado en diversas ocasiones por grupos de personas pertenecientes al Partido Reformista.

Tercera etapa: rigen en ella dos leyes electorales de muy diferente contenido e implicaciones: el Real Decreto de 27 de Diciembre de 1892 que ampliaba, aunque en términos reducidos, la población electoral de la isla, y el Real Decreto de 25 de Noviembre de 1897 que disponía la promulgación en Cuba y Puerto Rico de la Ley Electoral de 1890, es decir, del sufragio universal.

De las tres elecciones que comprende este período, dos de ellas -1893 y 1896- se efectuaron con arreglo al Real Decreto de 27 de Diciembre de 1892 y en las mismas no participaron los

autonomistas, precisamente como protesta ante la misma.

Esta ley, la actitud contraria del Partido Autonomista y finalmente, la profunda crisis que afectaba al Partido Incondicional produjeron de consuno los siguientes efectos:

a). Un aumento absoluto del número de electores, estimado entre los 8 y 9 mil (Cuadro II).

b). Una reducción consiguiente de la relación electores/habitantes (Cuadro III).

c). Un nivel de abstencionismo sumamente alto en las Elecciones de 1893 y 1896 V y VI).

3.- Las variables electorales: Nivel distrital.-

A.- Niveles de participación.-

A efectos del análisis comparado y de las conclusiones oportunas, hemos tomado solo los resultados correspondientes a diez de las catorce elecciones efectuadas a lo largo del segundo período, es decir, de 1869 a 1898. La razón es que solamente estas diez se realizaron con una misma división electoral de la isla, en tanto que la de 1869 lo fue en tres circunscripciones y las de 1893, 1896 y 1898 en tres circunscripciones y siete distritos.

Lógicamente, existen ciertas diferencias entre los datos totales y los correspondientes a estas diez elecciones; pero creemos que, en general, son bastante representativas del desarrollo de los procesos electorales y, por otra parte, haremos notar en cada caso las diferencias significativas o desviaciones.

La participación total a lo largo de estos 20 años fue algo superior a la media general: 68.15 %, frente a 66.78 %. Esta diferencia se debe a que no se tienen en cuenta los datos de las dos elecciones de 1893 y 1896, en las que la participación fue bastante baja, como consecuencia del retraimiento total del

Partido Autonomista.

Por Distritos, tenemos que los niveles más altos de participación se alcanzaron en cinco de los quince distritos, a saber: Aguadilla, Caguas, Vega baja, Rio Piedras y Quebradillas, con medias superiores al 70 %.

En el extremo opuesto -baja participación- tenemos los diez restantes, encabezados por los de la Capital, Ponce, Sabana grande y San Germán, con medias de participación no superiores al 65 %.

Las conclusiones que se podrían sacar de estos datos creemos que son las siguientes:

1@.- Los niveles de mínima participación se obtienen en los reductos de los dos partidos insulares: San Juan, del Conservador y los distritos de la zona oeste de Puerto Rico, es decir, Ponce, San Germán, Mayagüez y Sabana grande, del Partido Reformista y Autonomista (Cuadros VII y VIII).

2@.- Los niveles de mayor participación se dieron en distritos marginales al desarrollo político-partidista de la isla y solamente en cinco de ellos se alcanzó, como hemos dicho, la cota del 70 %.

3@.- De acuerdo con lo anterior, podemos concluir que las zonas de máximo consenso institucional fueron los distritos de Vega baja, Quebradillas, Aguadilla, Rio Piedras y Caguas, es decir, los que destacaron precisamente por no estar profundamente involucrados en los procesos partidistas. El resto -diez distritos- se mantiene, no obstante, dentro de la zona inmediata inferior -mínimo consenso institucional- lo que avala nuestra afirmación de que en ningún momento los partidos insulares rechazaron de plano el sistema (Cuadros IX y X).

Solamente en una ocasión los Conservadores, en otra los Reformistas y en dos los Autonomistas se retrajeron totalmente de

los procesos electorales.

b). La concentración de los votos.-

Para terminar estas conclusiones, vamos a referirnos a un hecho que nos ha llamado la atención a lo largo de todas las elecciones y que nos parece muy significativo: una concentración elevada de los votos emitidos en los candidatos elegidos, concentración que llegó a alcanzar niveles de hasta el 97.46 %, como en el caso de la Elección de 1881, es decir, en una elección en la que participaron ambos partidos. La media total para el período de 1869 a 1898 fue de 34.64 % (Cuadro XI).

Las causas de este fenómeno creemos que fueron de diversa índole; en primer lugar parece deberse en parte al propio sistema de división electoral en distritos uninominales, que permitía un mayor control por los partidos de sus electores. Que esto influyó, lo tenemos confirmado en la Elección de 1893 -desgraciadamente no tenemos los datos correspondientes a las de 1896 y 1898- en la que la media de concentración de votos en las tres circunscripciones fue de 67.56 %, frente a una media en los distritos de 91.61 %.

Otras causas pudieron ser la disciplina de partido, sobre todo por parte de los conservadores, que les impulsaba a aceptar la candidatura propuesta por los Comités centrales.

Desde luego, que el hecho de ser muy reducida la población electoral en la isla, hacía relativamente fácil ponerse de acuerdo los electores acerca de las candidaturas.

Finalmente, creemos que había otro factor concurrente y era el hecho de la exigua cantidad de personalidades notables en uno y otro partido, lo que facilitaba la agrupación de los votos alrededor de los mismos. Y esto también se puede comprobar por la frecuente y en algunos casos sistemática reelección de la misma persona.

CUADRO I

EVOLUCION DE LA POBLACION

(1869 - 1898)

1869	612,442	HABITANTES
1871	611,987	"
1872	617,328	"
1873	612,987	"
1876	731,313	"
1879	738,442	"
1881	754,313	"
1884	784,709	"
1886	781,609	"
1891	784,619	"
1893	798,565	"
1896	900,000	"
1898	953,243	"

200

TANTES

GRAFICA I
EVOLUCION DE LA POBLACION
(1869 - 18989)

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

inches to the

69

71

72

73

76

79

81

84

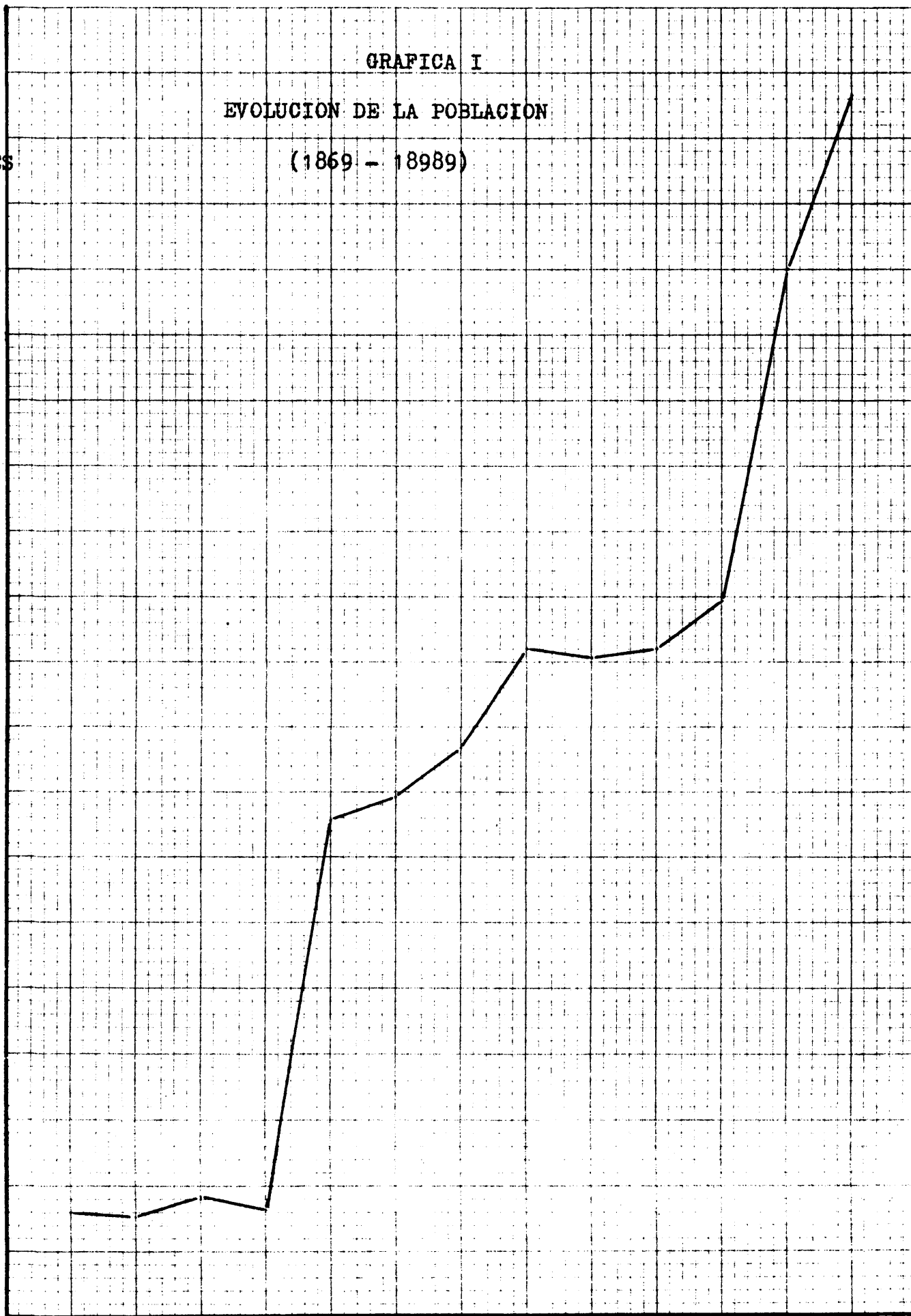
86

91

93

96

98



CUADRO II

EVOLUCION DE LA POBLACION ELECTORAL

(1869 - 1898)

1869	3,718	Electores
1871	19,789	"
1872 (1 ^o)	21,434	"
1872 (2 ^o)	20,584	"
1873	46,042	"
- - - - -		
1876	20,834	"
1879	3,674	"
1881	3,306*	"
1884	2,794*	"
1886	2,492*	"
1891	2,527	"
- - - - -		
1893	8,700*	"
1896	8,700*	"
1898	165,068	"

CUADRO III

RELACION ENTRE ELECTORES Y HABITANTES

Un Elector por cada:

1869	164	Habitantes
1871	35	"
1872 (1@)	29	"
1872 (2@)	30	"
1873	14	"

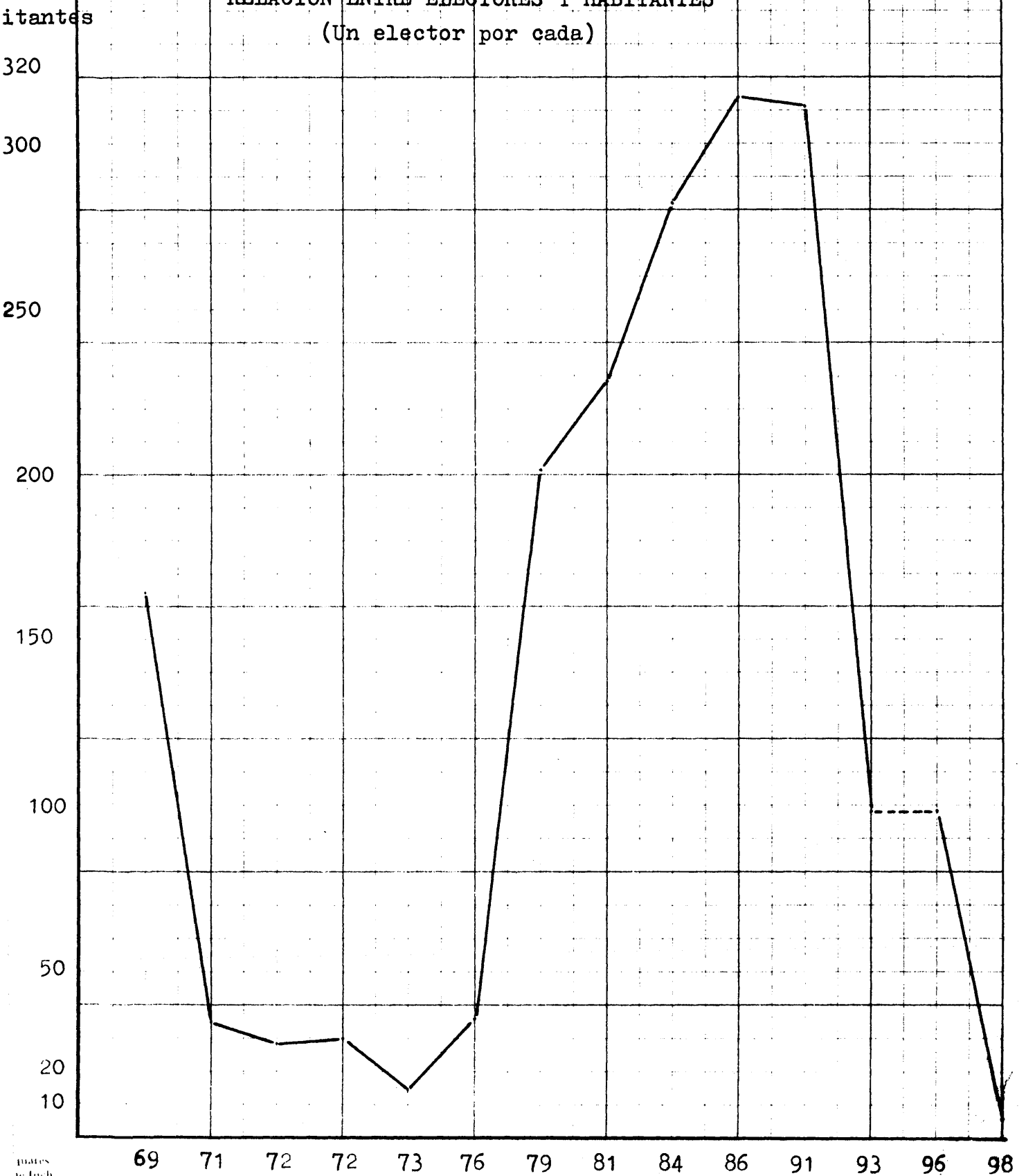
1876	36	"
1879	201	"
1881	229	"
1884	281	"
1886	314	"
1891	311	"

1893	98	"
1896	98*	"
1898	6	"

* Por carecer de datos precisos la consideramos igual a la de la Elección anterior.

GRAFICA III

RELACION ENTRE ELECTORES Y HABITANTES
(Un elector por cada)



CUADRO IV

EVOLUCION DEL NUMERO DE VOTANTES
(1869 - 1898)

1869	2,580 Electores	
1871	15,940	"
1872 (1 ^o)	14,753	"
1872 (2 ^o)	11,210	"
1873	28,663	"

1876	12,600	"
1879	2,670	"
1881	2,097	"
1884	1,902	"
1886	1,823	"
1891	1,660	"

1893	4,900	"
1896	4,691	"
1898	121,573*	"

* Estimado

CUADRO V

NIVELES TOTALES DE PARTICIPACION (1)

(1869 - 1898)

1869	70 %
1871	81 "
1872 (1@)	71 "
1872 (2@)	56 "
1873	64 "
— — — — —	
1876	64 "
1879	77 "
1881	66 "
1884	68*"
1886	73*"
1891	66 "
— — — — —	
1893	53*"
1896	53*"
1898	74*"

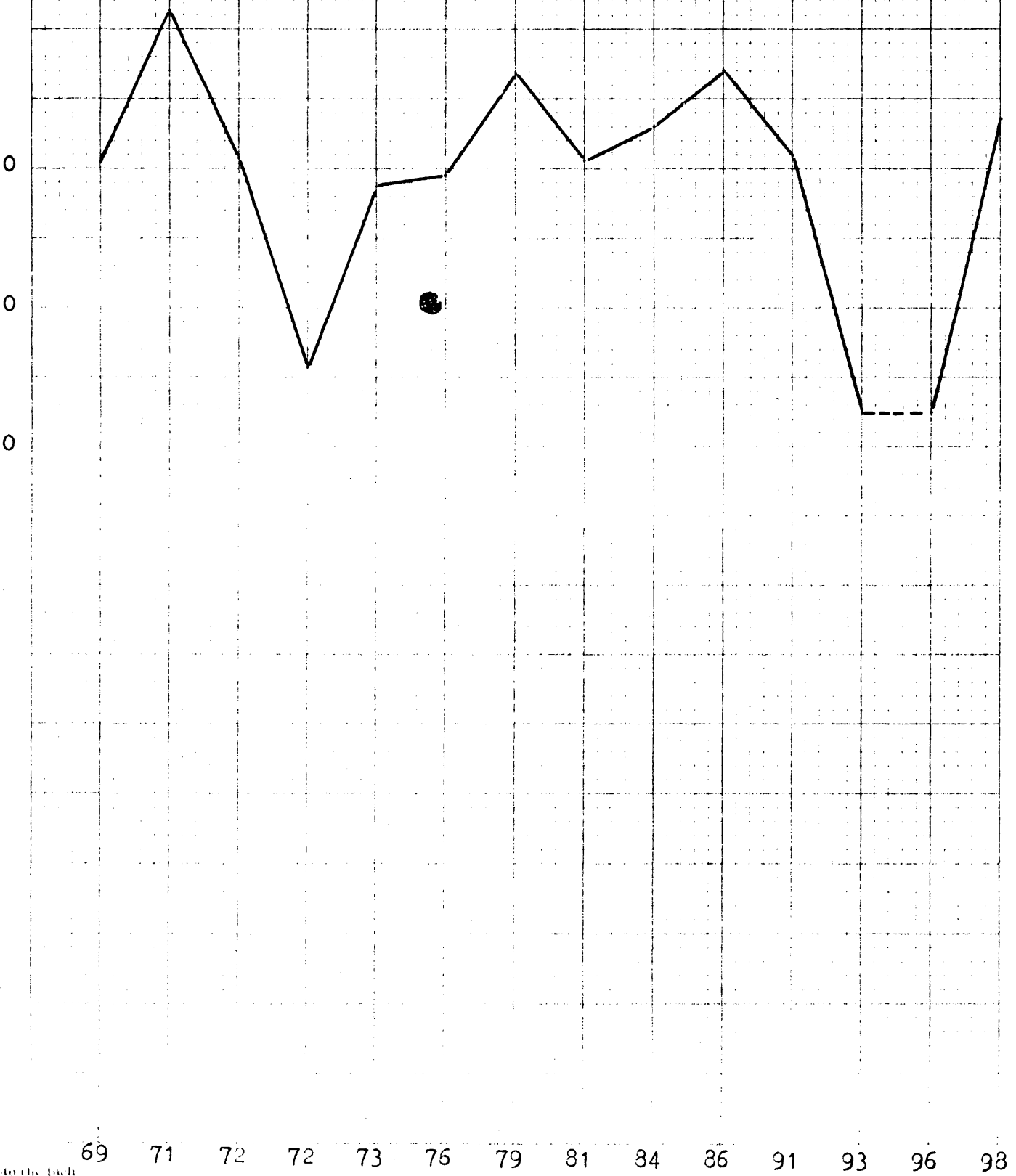
(1) Cifras redondeadas

* Estimado

NIVELES DE PARTICIPACION GENERAL

(1869 - 1898)

(%)



CUADRO VI

NIVELES TOTALES DE ABSTENCION (1)

(1869 - 1898)

1869	30 %
1871	19 "
1872 (1@)	29 "
1872 (2@)	44 "
1873	36 "
- - - - -	
1876	36 "
1879	23 "
1881	34 "
1884	32*"
1886	27*"
1891	34 "
- - - - -	
1893	47*"
1896	47*"
1898	26 " (Media de los Distritos)

(1) Cifras redondeadas

NIVELES DE ABSTENCION GENERAL

(1869 - 1898)

(%)

0

to the Inch

69

71

72

72

73

76

79

81

84

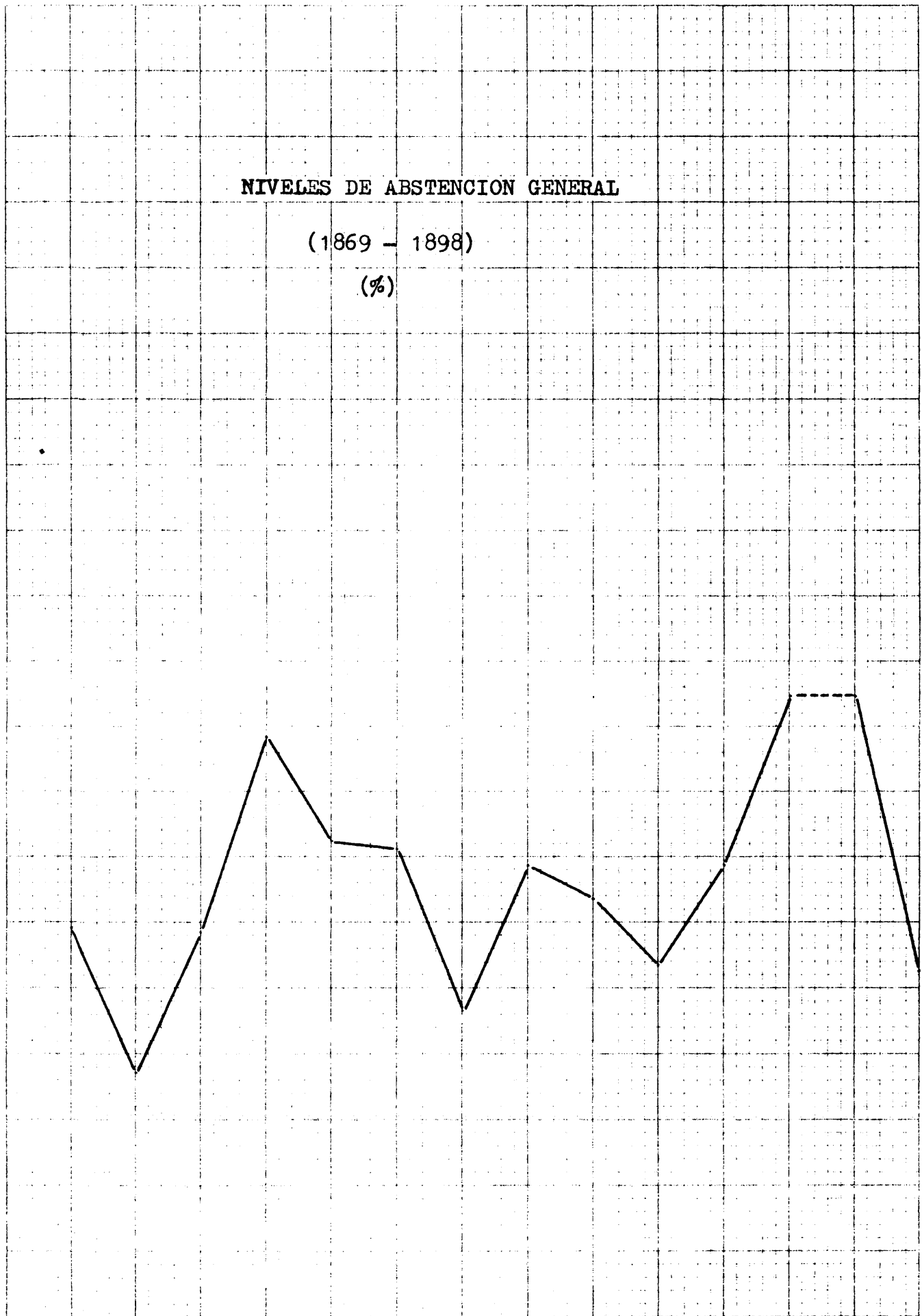
86

91

93

96

98



CUADRO VII

NIVEL DE PARTICIPACION

(Media por Distritos)

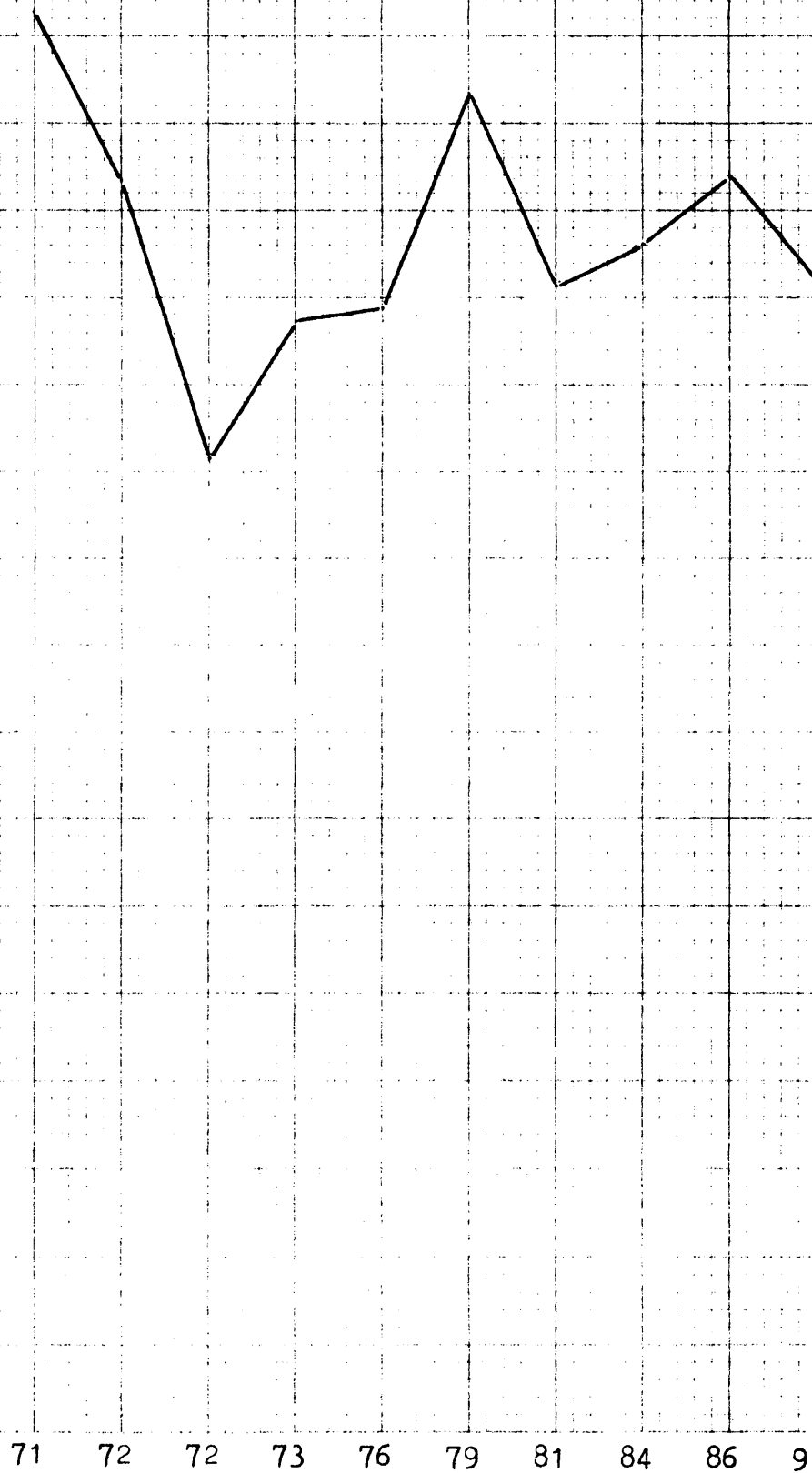
(1871 - 1891)

CAPITAL	55.24 %
VEGA BAJA	73.97 "
ARECIBO	66.42 "
QUEBRADILLAS	70.96 "
AGUADILLA	78.76 "
MAYAGUEZ	65.56 "
SAN GERMAN	62.99 "
SABANA GRANDE	65.80 "
PONCE	59.30 "
GUAYAMA	68.65 "
HUMACAO	69.63 "
RIO PIEDRAS	73.76 "
CAGUAS	75.56 "
COAMO	68.70 "
UTUADO	67.02 "

NIVELES DE PARTICIPACION

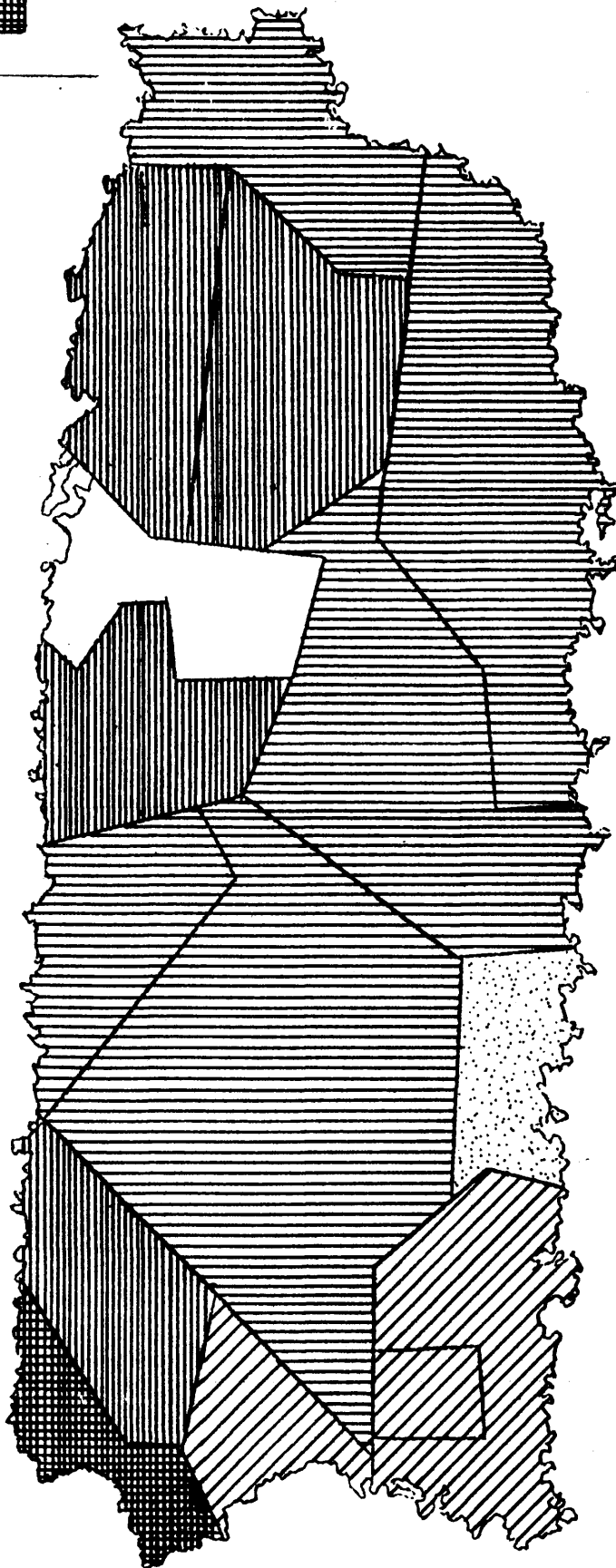
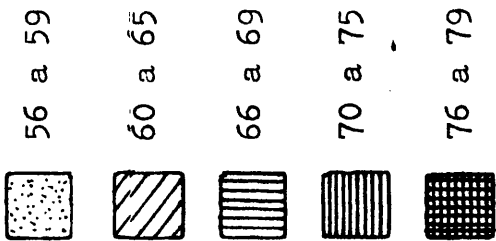
((1871-1891))

(%)



NIVEL DE PARTICIPACION

(1871 - 1891)



CUADRO VIII

NIVEL DE ABSTENCION

(Media por Distritos)

(1871 - 1891)

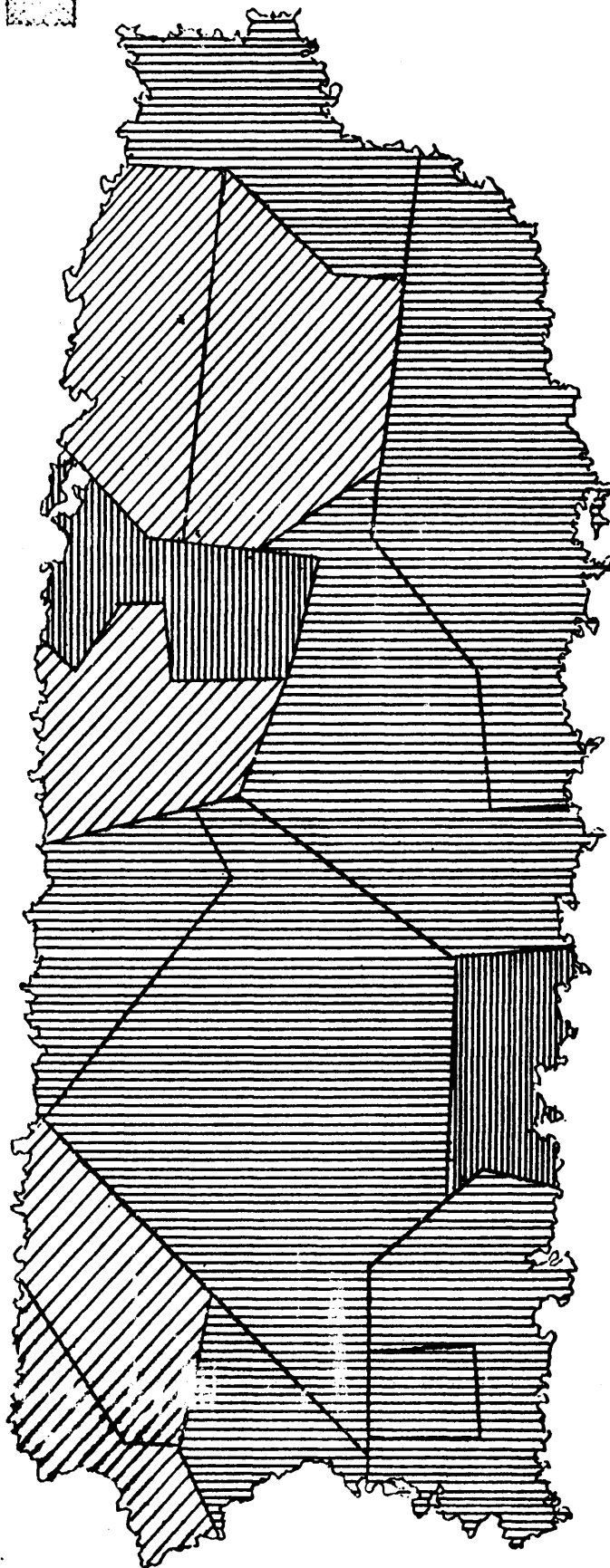
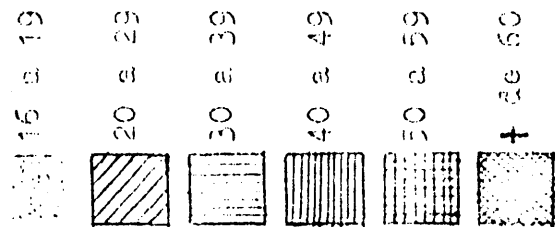
CAPITAL	44.76 %
VEGA BAJA	26.03 "
ARECIBO	33.58 "
QUEBRADILLAS	29.04 "
AGUADILLA	21.24 "
MAYAGUEZ	34.44 "
SAN GERMAN	37.01 "
SABANA GRANDE	34.20 "
PONCE	40.70 "
GUAYAMA	31.35 "
HUMACAO	30.37 "
RIO PIEDRAS	26.24 "
CAGUAS	24.44 "
COAMO	31.30 "
UTUADO	32.98 "

NIVELES DE ABSTENCION
(1871 - 1891)
(%)



NIVEL DE ABSTENCION

(1871 - 1891)



TOTALES POR DISTRITOS

	1@	1871	1872	1872	1873	1876	1879	1881	1884	1886	1891	MEDIA
CAPITAL		20.59	24.07	44.69	63.81	55.87	50.27	---	---	---	54.07	44.76
VEGA BAJA		3.29	15.78	27.55	22.75	40.39	11.32	30.39	---	33.96	48.89	26.03
ARECIBO		15.52	49.47	49.32	34.87	37.84	19.17	41.57	18.47	22.30	47.27	33.58
QUEBRADILLAS		27.94	23.85	37.05	31.56	27.55	34.25	18.12	18.75	31.97	44.44	29.04
AGUADILLA		16.69	19.66	35.91	29.00	16.15	5.66	17.79	---	---	29.11	21.24
KAYAGUEZ		23.13	43.17	54.91	48.82	52.97	38.04	---	21.67	22.13	5.14	34.44
SAN GERMAN		29.38	67.73	46.09	43.55	22.37	19.83	47.96	---	---	19.19	37.01
SABANA GRANDE		22.60	30.74	32.52	26.39	37.96	5.50	---	34.80	48.07	69.23	34.20
PONCE		20.92	29.29	56.00	53.97	64.45	32.74	45.63	---	---	22.65	40.70
GUAYAMA		14.64	23.94	50.56	40.96	30.93	29.28	---	---	---	29.19	31.35
HUMACAO		19.94	16.10	43.50	28.54	29.63	10.71	38.81	48.84	---	37.28	30.37
RIO PIEDRAS		16.10	21.24	49.22	28.09	15.45	20.80	35.38	37.27	16.04	22.89	26.24
CAGUAS		15.16	16.25	45.21	21.05	28.65	23.18	---	---	---	21.60	24.44
COAMO		13.81	18.76	43.23	34.94	28.78	22.98	63.13	38.41	20.41	28.57	31.30
UTUADO		24.04	38.37	46.30	34.69	46.38	23.24	31.35	---	---	19.47	32.98

- Por debajo de la Media

	1871	1@ 1872	2@ 1872	1873	1876	1879	1881	1884	1885	1891
CAPITAL	-	-	+	+	+	s.d.	s.d.	s.d.	s.d.	+
VEGA BAJA	-	-	-	-	+	-	-	s.d.	+	+
ARECIBO	-	+	+	+	+	-	+	-	-	+
QUEBRADILLAS	-	-	+	-	-	+	-	-	+	+
AGUADILLA	-	-	+	-	-	-	-	s.d.	s.d.	-
MAYAGUEZ	-	+	+	+	+	+	s.d.	-	-	-
SAN GERMAN	-	+	+	+	-	-	+	s.d.	s.d.	-
SABANA GRANDE	-	-	+	-	+	-	s.d.	+	+	+
PONCE	-	-	+	+	+	+	+	s.d.	s.d.	-
GUAYAMA	-	-	+	+	-	-	s.d.	s.d.	s.d.	-
HUMACAO	-	-	+	-	-	-	-	+	s.d.	+
RIO PIEDRAS	-	-	+	-	-	-	+	+	-	-
CAGUAS	-	-	+	-	-	-	s.d.	s.d.	s.d.	-
COAMO	-	-	+	+	-	-	+	+	-	-
UTUADO	-	+	+	+	+	-	-	s.d.	s.d.	-

ABSTENCIONES

SITUACION DE LOS DISTRITOS EN RELACION A LA MEDIA TOTAL

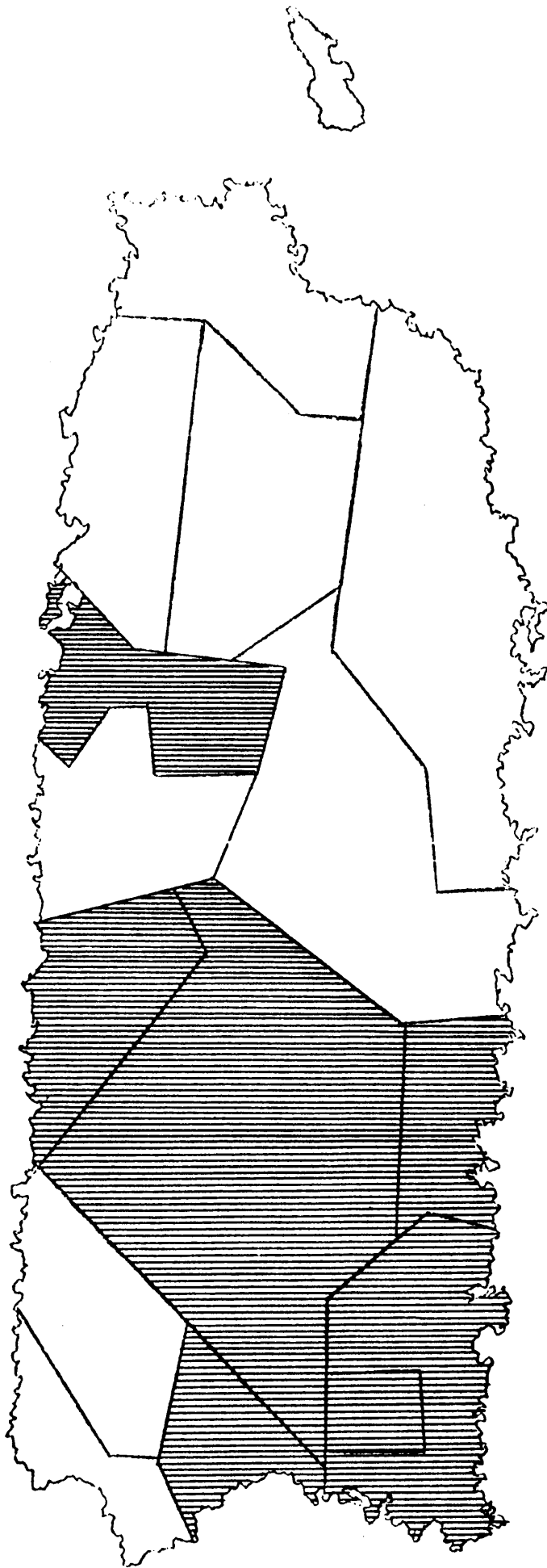


Por encima de la Media



Por debajo de la Media

(1871 - 1891)



CUADRO XI

CONCENTRACION DE LOS VOTOS

Por ciento de los votos emitidos que obtuvo el candidato elegido

(Por Elecciones)

1869.....	63.00 %	
1871.....	70.44 %	
1872.....	64.67 %	
1872.....	97.30 %	Retraimiento general de Conservadores
1873.....	95.83 %	Abstención total de Conservadores
1876.....	98.86 %	Abstención total de Reformistas
1879.....	79.62 %	
1881.....	97.46 %	
1884.....	82.21 %	
1886.....	82.75 %	
1891.....	83.51 %	
1893.....	79.58 %	* Abstención de Autonomistas
1896.....	98.59 %	** Abstención de Autonomistas
1898.....	91.17 %	

a media de las Circunscripciones fue de 67.56 %; la de los Distritos 91.61 %
los Distritos; sin datos de las Circunscripciones

- - - - -

NOTAS

- 1.- La población total de Puerto Rico, según estos tres censos fue la siguiente:

1877	731,648
1887	798,565
1897	894,302

Cf.: VAZQUEZ CALZADA, José L.: "El crecimiento poblacional de Puerto Rico: 1493 al presente", Monografía mimeografiada, publicada por la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico. Esta monografía es un resumen de su tesis doctoral presentada en la Universidad de Chicago bajo el título "The Demofrafic Evolution of Puerto Rico".

- 2.- A esta conclusión llega el citado autor, de acuerdo con los resultados positivos obtenidos de la aplicación de métodos de consisten-cia interna. Ibidem, pág. 8 y nota 1 a la misma página.

APENDICE I

LEYES, DECRETOS, INSTRUCCIONES Y REGLAMENTOS ELECTORALES
RELATIVOS A ULTRAMAR

DECRETO

De la Junta Suprema y Gubernativa de España e Indias
(22 de enero de 1809)

"El Rey Nuestro Señor don Fernando Séptimo y en su nombre la Junta Suprema Central gubernativa del Reino, considerando que los vastos y preciosos dominios que España posee en las Indias no son propiamente colonias o factorías, como los de otras naciones, sino una parte esencial e integrante de la monarquía española; y deseando estrechar de un modo indisoluble los sagrados vínculos que unen unos y otros dominios, como asimismo corresponder a la heroica lealtad y patriotismo de que acaban de dar tan decisiva prueba a la España, en la coyuntura más crítica que se ha visto hasta ahora nación alguna, se ha servido S.M. declarar, teniendo presente la consulta del Consejo de Indias de 21 de noviembre último, que los reinos, provincias e islas que forman los referidos dominios deben tener representación nacional e inmediata a su real persona, y constituir parte de la Junta Central Gubernativa del Reino por medio de sus correspondientes diputados.

Para que tenga efecto esta real resolución, han de nombrar los virreinos de Nueva España, el Perú, Nuevo Reino de Granada y Buenos Aires, y las Capitanías Generales independientes de la isla de Cuba, Puerto Rico, Guatemala, Chile, provincias de Venezuela y Filipinas, un individuo cada cual que represente su respectivo distrito.

En consecuencia dispondrá V.E. que en las capitales, cabezas de partido del virreinato de su mando, incluso las provincias internas, procedan los ayuntamientos a nombrar tres individuos de notoria probidad, talento e instrucción, exentos de toda nota que pueda menoscabar su opinión pública; haciendo entender V.E. a los mismos ayuntamientos la escrupulosa exactitud con que deben proceder a la elección de dichos individuos, y que prescindan absolutamente los electores del espíritu de partido que suele dominar en tales casos, sólo atiendan al riguroso mérito de justicia vinculado en las calidades que constituyen un buen ciudadano y un celoso patriota.

Verificada la elección de los tres individuos, procederá el Ayuntamiento con la solemnidad de estilo a sortear uno de los tres, según la costumbre, y el primero que salga, se tendrá por elegido. Inmediatamente participará a V.E. el Ayuntamiento, con testimonio, el sujeto que haya salido en suerte, expresando su nombre, apellido, pa-

tria, edad, carrera o profesión y demás circunstancias políticas y morales de que se halle adornado.

Luego que V.E. haya recibido en su poder los testimonios del individuo sorteado en esa Capital y demás del virreinato, procederá con el Real Acuerdo (*) y previo examen de dichos testimonios, a elegir tres individuos de la totalidad, en quienes concurren las cualidades más recomendables, bien sea que se le conozca personalmente, bien por opinión y voz pública; y en caso de discordia decidirá la pluralidad.

Esta terna se sorteará en el Real Acuerdo presidido por V.E. y el primero que salga se tendrá por elegido y nombrado diputado de ese reino y vocal de la Junta Suprema Central Gubernativa de la monarquía, con expresa residencia en esta Corte.

Inmediatamente procederán los Ayuntamientos de esa y demás capitales a extender los respectivos poderes e instrucciones, expresando en ellas los ramos y objetos de interés nacional que haya de promover.

En seguida se pondrá en camino con destino a esta Corte, y para los indispensables gastos de viaje, navegaciones, arribadas, subsistencia y decoro con que se ha de sostener, tratará V.E. en Junta Superior de Real Hacienda la cuota que se le haya de señalar bien entendido que su porte, aunque decoroso, ha de ser moderado y que la asignación de sueldo no ha de pasar de 6,000 pesos fuertes anuales. Todo lo cual comunico a V.E. de orden de S.M. para su puntual observancia y cumplimiento, advirtiéndole de cuanto va prevenido".

FUENTE: CONDE DE TORENO: "Historia del Levantamiento, Guerra y Revolución de España", (Madrid, 1926), pág. 175.

REAL DECRETO

(14 de febrero de 1810)

"El Rey nuestro Señor Don Fernando VII, y en su nombre el Consejo de Regencia de España e Indias: considerando la grave y urgente necesidad de que a las Cortes extraordinarias que han de celebrarse inmediatamente que los sucesos militares lo permitan, concurren diputados de los dominios españoles de América y de Asia, los cuales representen digna y lealmente la voluntad de sus naturales en aquel Congreso, del que han de depender la restauración y felicidad de toda la Monarquía, ha decretado lo siguiente:

Vendrán a tener parte en la representación nacional de las Cortes extraordinarias del Reino, Diputados de los Virreinos de Nueva España, Perú, Santa Fé y Buenos Aires, y de las Capitanías generales de Puerto Rico, Cuba, Santo Domingo, Guatemala, Provincias internas, Venezuela, Chile y Filipinas.

Estos Diputados, serán uno por cada capital cabeza de partido de estas diferentes provincias.

Su elección se hará por el Ayuntamiento de cada capital, nombrándose primero tres individuos naturales de la provincia, dotados de probidad, talento e instrucción, y exentos de toda nota; y sorteándose después uno de los tres, el que salga a primera suerte será Diputado.

Las dudas que puedan ocurrir sobre estas elecciones, serán determinadas breve y perentoriamente por el Virrey o Capitán general de la provincia, en unión con la Audiencia.

Verificada la elección, recibirá el Diputado el testimonio de ella, y los poderes del Ayuntamiento que le elija, y se le darán todas las instrucciones que así el mismo Ayuntamiento, como todos los demás comprendidos en aquel partido, quieran darle sobre los objetos de interés general y particular que entiendan debe promover en las Cortes.

Luego que reciba sus poderes e instrucciones, se pondrá inmediatamente en camino de Europa, por la vía más breve, y se dirigirá a la isla de Mallorca, en donde deberán reunirse todos los demás representantes de América a esperar el momento de la convocación de las Cortes.

Los Ayuntamientos electores determinarán la ayuda

de costa que debe señalarse a los Diputados para gastos de viajes, navegaciones y arribadas. Mas como nada contribuya tanto a hacer respetar a un representante del pueblo como la moderación y la templanza, combinadas con el decoro, sus dietas, desde su entrada en Mallorca hasta la conclusión de las Cortes, deberán ser de seis pesos fuertes al dia, que es la cuota señalada a los diputados de las provincias de España.

En las mismas Cortes extraordinarias, se establecerá después la forma constante y fija en que debe procederse a la elección de Diputados de esos dominios para las que hayan de celebrarse en lo sucesivo, supliendo o modificando lo que por la urgencia del tiempo y dificultad de las circunstancias no ha podido tenerse presente en este Decreto.

Tendréislo entendido, y lo comunicareis a quien corresponda para su cumplimiento.- Xavier de Castaños, Presidente.- Francisco de Saavedra.- Antonio de Escaño.- Miguel de Lardizábal y Uribe. Real isla de León a 14 de Febrero de 1810.- Al Marqués de las Hormazas."

FUENTE: Antonio Gamoneda: "Leyes electorales y proyectos de Ley", págs. 53 a 55.

INSTRUCCION

Para las elecciones por América y Asia

(14 de Febrero de 1810)

"El Consejo de Regencia de España e Indias a los americanos españoles.

"Apenas el Consejo de Regencia recibió del Gobierno que ha cesado la autoridad que estaba depositada en sus manos, volvió su pensamiento a esa porción inmensa y preciosa de la Monarquía. Enterarla de esta gran novedad; explicar los motivos que la han acelerado; anunciar las esperanzas que promete y manifestar los principios que animan a la Regencia por la prosperidad y gloria de esos países, han sido objeto de su primer cuidado en esta memorable crisis, y va a desempeñarlos con la franqueza y sinceridad que nunca más que ahora debe caracterizar en los dos mundos a las almas españolas.

Una serie no interrumpida de infortunios había desconcertado todas nuestras operaciones desde la batalla de Talavera. Desvaneciéronse en humo las grandes esperanzas que debieron prometerse en esta célebre jornada. Muy poco después de ella el florido ejército de la Mancha fue batido en Almonacid. Defendíase Gerona; pero cada día se imposibilitaba más un socorro que con tanta necesidad y justicia se debía a aquel heroico tesón que dará a sus defensores un lugar sin segundo en los fastos sangrientos de la guerra. A pesar de prodigios de valor, el ejército de Castilla había sido batido en la batalla de Alba de Tormes y Tamames, y con este revés se había completado el desastre anterior de la acción de Ocaña, la más funesta y mortífera de cuantas hemos perdido.

Sin fortuna no hay crédito ni favor. Dudábase ya en la Nación si el Cuerpo encargado de sus destinos era suficiente a salvarla. Todos los resortes del Gobierno habían perdido su elasticidad y fuerza. Las providencias eran, o equivocadas, o tarde y mal obedecidas. La ambición de los particulares, la de los Cuerpos, se había excitado hasta un punto extraordinario, y se había puesto en una contradicción más o menos abierta con la autoridad. Hasta

los más moderados decían que un Gobierno compuesto de tantos individuos, todos diversos en caracteres, en principios, en profesiones, en intereses, todos atendiendo a un tiempo a todas las cosas grandes y pequeñas, no podía pensar con sistema, deliberar con secreto, resolver con unidad, ni ejecutar con presteza. Pocos en número para las grandes discusiones legislativas, excesivamente muchos para la acción, presentaban todos los inconvenientes de una autoridad combinada, menos por el saber y la meditación política, que por el concurso extraordinario y fortuito de las circunstancias que han mediado en nuestra singular revolución.

El voto público, pues, era de que el Gobierno debía reducirse a elementos más sencillos. La misma Junta Suprema, persuadida de esta verdad, había ya anunciado esta mudanza, y las próximas Cortes extraordinarias, cuya convocatoria se había acelerado, debían determinarla y establecerla con la solemnidad consiguiente a su augusta representación. El Gobierno que ellas formasen, y los recursos y arbitrios que necesariamente brotarían de su seno, debían restablecer la confianza, y con ella restituírnos al camino de la fortuna.

Los acontecimientos no han consentido que las cosas llevasen este orden. Recelosos los franceses de los efectos saludables de esta gran medida, agolparon todo el grueso de sus fuerzas a las gargantas de Sierra Morena. Defendíanlas los restos de nuestro ejército batido en Ocaña, no rehecho todavía de aquel infausto revés. El enemigo rompió por el punto más débil, y la ocupación de los otros se siguió al instante, a pesar de la resistencia que hicieron algunas de nuestras divisiones, dignas de mejor fortuna. Rota, pues, la valla que había, al parecer, contenido a los franceses todo el año anterior para ocupar la Andalucía, se dilataron por ella y se dirigieron a Sevilla.

Brotó entonces el descontento en forma de quejas y clamores. La perversidad, aprovechándose de la triste disposición en que se hallaban los ánimos, agitados por el terror, comenzó a pervertir la opinión pública, a extravíar el celo, a halagar la malignidad y a dar rienda a la licencia. Había puesto en ejecución la Junta la medida, que ya anteriormente tenía acordada, de trasladarse a la isla de León, donde estaban convocadas las Cortes; pero en el viaje, la dignidad de sus individuos y el respeto debido a su carácter, se vieron más de una vez expuestos al desaire y al desacato. Aunque pudieron, por fin, reunirse en la isla y continuar sus sesiones, la autoridad, ya inerte en sus manos, no podía sosegar la agitación de los pueblos, ni animar su desaliento, ni hacer frente a la gravedad y urgencia del peligro. Terminó, pues, la Junta el

ejercicio de su poder con el único acto que ya podía atajar la ruina y disolución del Estado; y estableciendo por su Real Decreto de 29 de enero de este año el Consejo de Regencia, resignó en él el depósito de su soberanía, que ella legítimamente tenía, y que ella sola, en la situación presente, podía legítimamente transmitir.

Tales han sido las causas de la revolución que acaba de suceder en el Gobierno español; revolución hecha sin sangre, sin violencia, sin conspiración, sin intriga, producida por la fuerza de las cosas mismas, anhelada por los buenos, y capaz de restaurar la Patria si todos los españoles de uno y otro mundo concurren enérgicamente a la generosa empresa.

Ya el buen resultado de las operaciones en estos primeros días son un presagio de buena fortuna para en adelante. Fiados los enemigos en el abandono en que suponían hallarse los puntos de la isla y Cádiz, codiciosos de tan rica presa, se habían arrojado a devorarla con su celeridad impetuosa. La marcha del ejército de Extremadura, al mando del general Duque de Alburquerque, ha desconcertado sus designios, y a despecho de su diligencia y su pujanza se hallan hoy nuestros valientes guerreros cubriendo estas interesantes posiciones, que están seguras de todo atentado. La confianza se restablece en las provincias, nuevos ejércitos se forman y los generales mejores están puestos a su frente. Así los franceses que creyeron cortar el nervio de la guerra con la ocupación de Andalucía, se ven burlados en su esperanza, y a su espalda, a su frente, a sus costados, bajo sus pies mismos, la ven renacer y arder con más violencia que al principio.

Sobra, españoles americanos, a vuestros hermanos de Europa magnanimidad y constancia para contrastar los reveses que les envíe la fortuna. Cuando declaramos la guerra, sin ejércitos, sin almacenes, sin arbitrios, sabíamos bien a lo que nos exponíamos, y vimos bien la terrible perspectiva que se nos presentaba delante. No nos arredró entonces, no nos arredra tampoco ahora; y si el deber, el honor y la venganza no nos dejaron en aquel día otro partido que la guerra, no queda otro partido que la guerra a los españoles que escuchan las voces de la venganza, del honor y del deber.

Contó siempre la Patria con los medios de defensa que proporciona la posición topográfica de la península; contó con los recursos inagotables de la virtud y contancia de sus naturales, con la lealtad acendrada de sus naturales, con la lealtad acendrada que los españoles profesan a su Rey, con el rencor inacabable que los franceses inspiran; contó con los sentimientos de la fraternidad americana, igual a nosotros en celo y lealtad. Ninguna de

estas esperanzas la ha engañado: con ellas piensa sostenerse en lo que resta de tormenta y con ellas ¡oh americanos! está segura la victoria.

Que no es dado al déspota de la Francia, por más que todo lo presuma de su enorme poderío, acabar con una Nación que desde el Occidente de Europa se extiende y se dilata por el Océano y el nuevo continente hasta las costas de Asia. Degradada, envilecida, atada de pies y manos, la entregaron a discreción suya los hombres inhumanos que nos vendieron. Mas gracias a nuestra resolución magnánima y sublime, gracias a vuestra adhesión leal y generosa, no nos pudo subyugar en un principio, no nos subyugará jamás. Sus satélites armados entrarán en una ciudad, ocuparán una provincia, devastarán un territorio. Mas los corazones son todos españoles, y a despecho de sus armas, el nombre de Fernando VII será respetado y obedecido en las regiones más ricas y dilatadas del universo.

Será bendecido también, porque a este nombre quedará para siempre unida la época de la regeneración y felicidad de la Monarquía en uno y otro mundo. Entre los primeros cuidados de la Regencia, tiene un principal lugar la celebración de las Cortes extraordinarias, anunciadas ya a los españoles, y convocadas para el día primero del próximo Marzo. En este gran Congreso cifrarán los buenos ciudadanos la esperanza de su redención y su felicidad futura. Y si los sucesos de la guerra obligan a dilatar esta gran medida hasta que pueda realizarse con la solemnidad y seguridad conveniente, esta misma dilación ofrece al nuevo Gobierno la oportunidad de dar al próximo Congreso nacional la representación completa del vasto Imperio cuyos destinos se le confían.

Desde el principio de la revolución, declaró la Patria esos dominios parte integrante y esencial de la Monarquía española. Como tal le corresponden los mismos derechos y prerrogativas que a la Metrópoli. Siguiendo este principio de eterna equidad y justicia, fueron llamados esos naturales a tomar parte en el Gobierno representativo que ha cesado; por él la tienen en la Regencia actual, y por él la tendrán también en la representación de las Cortes nacionales, enviando a ellas Diputados según el tenor del decreto que va a continuación de este manifiesto.

Desde este momento, españoles americanos, os veis elevados a la dignidad de hombres libres; no sois ya los mismos que antes, encorvados bajo un yugo mucho más duro, mientras más distantes estábais del centro del poder, mirados con indiferencia, vejados por la codicia y destruidos por la ignorancia. Tened presente que al pronunciar o al escribir el nombre del que ha de venir a representaros en el Congreso nacional, vuestros destinos ya no dependen

ni de los Ministros, ni de los Virreyes, ni de los Gobernadores; están en vuestras manos.

Es preciso que en ese acto, el más solemne, el más importante de vuestra vida civil, cada elector se diga a sí mismo: a este hombre envío yo, para que, unido a los representantes de la Metrópoli, haga frente a los designios destructores de Bonaparte; este hombre es el que ha de exponer y remediar todos los abusos, todas las extorsiones, todos los males que han causado en estos países la arbitrariedad y nulidad de los mandatarios del Gobierno antiguo, éste el que ha de contribuir a formar con justas y sabias leyes un todo bien ordenado de tantos, tan vastos y separados dominios; éste, en fin, el que ha de determinar las cargas que he de sufrir, las gracias que me han de pertenecer, la guerra que he de sostener, la paz que he de jurar.

Tal y tanta es, españoles de América, la confianza que vais a poner en vuestros Diputados. No duda la Patria ni la Regencia, que os habla por ella ahora, que estos mandatarios serán dignos de las altas funciones que van a ejercer. Enviadlos, pues, con la celeridad que la situación de las cosas públicas exige: que vengan a contribuir con su celo y con sus luces a la restauración y recomposición de la Monarquía, que formen con nosotros el plan de felicidad y perfección social, de esos inmensos países; y que concurrendo a la ejecución de obra tan grande, se revistan de una gloria, que sin la revolución presente, ni España, ni América, pudieron esperar jamás.

Real isla de León 14 de Febrero de 1810.- Xavier de Castaños, Presidente.- Francisco de Saavedra.- Antonio de Escaño.- Miguel de Lardizábal y Uribe."

CONVOCATORIA

para las Cortes ordinarias de 1^o de Octubre de 1813

Decreto de las Cortes

(23 de mayo de 1812)

"Las Cortes generales y extraordinarias, atendiendo a que según previene la Constitución de la Monarquía debe haber Cortes ordinarias en cada año; y considerando que la utilidad pública, que ha hecho formar esta regla constitucional, nunca recomienda más su observancia que cuando las urgencias del Estado y la necesidad de ir poniendo en planta la misma Constitución lo exigen tan imperiosamente, han venido en decretar y decretan:

1^o. Que se convoca a Cortes ordinarias para el año próximo de 1813.

2^o. Que siendo absolutamente imposible, atendida la angustia del tiempo y las distancias, que las primeras Cortes ordinarias se verifiquen en la época precisa que la Constitución señala, por no ser dable que se hallen reunidos los Diputados de las partes más lejanas del Reino para el día primero de Marzo del citado año, abran y celebren sus sesiones las primeras Cortes ordinarias el primero de Octubre del próximo año de 1813: debiéndose proceder a la celebración de Juntas electorales de parroquia, de partido y de provincia, con arreglo a las instrucciones para la Península y Ultramar que acompañan a este Decreto.

3^o. Que con el objeto de facilitar las elecciones de Diputados en un tiempo en que las particulares y extraordinarias circunstancias en que se halla todo el Reino oponen embarazos de tantas clases para la necesaria verificación de las elecciones, y de la primera reunión de Cortes ordinarias que de ellas ha de seguirse, se observen y guarden respectivamente en las provincias de la Península e islas adyacentes y en las de Ultramar las reglas contenidas en las instrucciones que acompañan a este decreto para cada uno de los dos hemisferios.

4^o. Que todos los Diputados de Ultramar se dirijan a esta ciudad de Cádiz, en donde se les comunicará por la Diputación permanente de Cortes el lugar en que éstas hayan de abrir sus sesiones, para cuyo efecto deberán hallarse reunidos en esta ciudad a principios del mes de septiembre

bre del mismo año de 1813.

5°. Los Diputados de las actuales Cortes generales y extraordinarias no pueden ser reelegidos para las próximas ordinarias.

Lo tendrá entendido la Regencia del Reino para su cumplimiento, haciéndolo imprimir, publicar y circular. Dado en Cádiz a 23 de Mayo de 1812.- José María Gutierrez de Terán, Presidente.- José de Zorraquín, Diputado Secretario.- Joaquín Díaz Caneja, Diputado Secretario.- A la Regencia del Reino."

FUENTE: Antonio Gamoneda: "Leyes electorales y proyectos de Ley", págs. 77 y 78.

INSTRUCCION

conforme a la cual deberán celebrarse en las provincias de Ultramar las elecciones de Diputados de Cortes para las ordinarias del próximo año de 1813.

(23 de mayo de 1812)

"Artículo 1^o. Se formará una Junta preparatoria para facilitar la elección de los Diputados de Cortes para las ordinarias del año próximo de 1813 en las capitales siguientes: México, capital de Nueva España; Guadalajara, capital de la Nueva Galicia; Mérida, capital de Yucatán; Goatemala, capital de la provincia de este nombre; Monterrey, capital de la provincia del Nuevo Reino de León una de las cuatro internas de Oriente; Durango, capital de la Nueva Vizcaya, una de las provincias internas de Occidente; Habana, capital de la isla de Cuba y de las dos Floridas; Santo Domingo, capital de la isla de este nombre; Puerto Rico, capital de la isla de este nombre; Santa Fe de Bogotá, capital de la Nueva Granada; Caracas, capital de Venezuela; Lima, capital del Perú; Buenos Aires, capital de las provincias del Rio de la Plata, y Manila, capital de las Islas Filipinas.

2^o. Luego que el Jefe superior de cada una de estas provincias reciba el decreto de convocatoria para las Cortes ordinarias del año próximo de 1813, formará la expresada Junta, que se compondrá del mismo Jefe superior, del Arzobispo, Obispo, o quien sus veces hiciere, del Intendente donde le haya, del Alcalde más antiguo, del Regidor decano, del Síndico Procurador general, y de los dos hombres buenos, vecinos de la misma provincia, y nombrados por las personas arriba mencionadas. En la Junta preparatoria de las cuatro provincias internas de Oriente, que debe formarse en Monterrey, capital de la del Nuevo Reino de León, presidirá el Jefe político de esta provincia; y en la Junta preparatoria de las provincias internas de Occidente, que debe formarse en la ciudad de Durango, capital de la nueva Vizcaya, presidirá el Jefe político de esta provincia. Cada Junta preparatoria, luego que se hubiese formado, dará aviso de ello a la Regencia del Reino quien lo comunicará inmediatamente a las Cortes, o a la

Diputación permanente de ellas, para que se conserven estas noticias en su archivo.

3°. Si por razón del estado político del país no residiere el Jefe superior en la respectiva capital de las arriba expresadas, formará la Junta preparatoria en la ciudad o pueblo donde tenga su residencia, debiendo en tal caso ser de este vecindario los individuos del Ayuntamiento, y entrar a falta del Arzobispo, Obispo, o quien sus veces hiciere, el eclesiástico diocesano de mayor dignidad.

4°. Formada la Junta, sobre lo que no se admitirá excusa ni dilación a ninguna de las personas que han de componerla, tendrá presentes los censos de la población más auténticos entre los últimamente formados, o a falta de ellos, formará el cálculo de la población por los medios más expeditos y exactos que fuere posible, y con arreglo a la base de un Diputado por cada 70,000 personas de las comprendidas en el art. 29 de la Constitución, y a los censos de la población, designará los Diputados de Cortes, propietarios y suplentes que corresponden a su territorio, según está demarcado en el art. 1 de esta instrucción.

5°. A fin de facilitar las elecciones, cada Junta preparatoria hará para este solo efecto la división más cómoda del territorio de su comprensión en provincias, y designará en cada una de ellas la ciudad en donde deban reunirse los electores de los partidos para elegir los Diputados a Cortes.

6°. Cada Junta preparatoria señalará a cada una de sus respectivas provincias el número de diputados del cupo principal que proporcionalmente corresponda a su población.

7°. A fin de facilitar las elecciones cuidará cada Junta preparatoria de distribuir las provincias de su demarcación en partidos, si no estuviesen señalados; y si lo estuviesen, se atenderá a la división existente, fijando en uno y otro caso a cada partido el número de electores que le corresponda, con arreglo a su población, y a lo demás que la Constitución establece sobre el particular.

8°. Si el estado político de algunas provincias no permitiere que se verifiquen las elecciones en todos los puntos de su comprensión, las respectivas Juntas preparatorias determinarán el lugar y forma en que deban ejecutarlas el partido o partidos que se hallen en estado de proceder a ellas.

9°. Las Juntas preparatorias resolverán breve y sumariamente todas las dudas que se suscitaren antes de comenzar las elecciones, que deben hacerse inmediatamente después de haberse jurado la Constitución; y lo que resolvieren se ejecutará sin recurso.

10°. Las Juntas preparatorias resolverán también todas las dudas que puedan ocurrir sobre la elección de las Diputaciones provinciales, arreglándose al decreto de las Cortes sobre esa materia con fecha de este mismo día.

11°. Las Juntas preparatorias no se mezclarán en otras funciones que las que aquí van señaladas; cesando en las suyas luego que allanadas todas las dificultades, comiencen a verificarse las elecciones y no embarazando en manera alguna a las Juntas electorales de Parroquia, de Partido y de Provincia en el ejercicio de las facultades que les están asignadas por la Constitución.

12°. Remitirá cada Junta preparatoria por medio del Gobierno a las Cortes, o a la Diputación permanente de ellas, testimonio circunstanciado de cuantas disposiciones haya tomado en la materia, como también de los censos de población que hayan servido para el señalamiento del número de Diputados.

13°. Con arreglo al art. 102 de la Constitución, se señala a los Diputados de las próximas Cortes ordinarias 110 reales vellón diarios por razón de dietas, que abonarán las respectivas provincias.

14°. Los Diputados de las próximas Cortes ordinarias tendrán derecho a percibir las dietas asignadas desde el día que se presenten a la Diputación permanente hasta que concluyan su diputación.

15°. A los Diputados se les asistirá por sus respectivas provincias con la decente asignación que proporcionalmente a la distancia se estime necesaria, a huicio de las Diputaciones provinciales, para sus viajes de ida y vuelta.

16°. Las Diputaciones provinciales cuidarán de proporcionar los arbitrios más convenientes para cubrir todos estos gastos de sus respectivos Diputados, proponiéndolos a su tiempo para la aprobación de las Cortes.

17°. Por primera vez, las Juntas preparatorias de todo el Reino dispondrán lo conveniente para que se realicen estos abonos por las respectivas provincias, echando mano, si fuere necesario, de los fondos de la Hacienda pública con calidad de reintegro, que deberán hacer las Di-

Cádiz, a 23 de Mayo de 1812.- José María Gutierrez de Terán, Presidente.- José de Zorraquín, Diputado Secretario.- Joaquín Díaz Caneja, Diputado Secretario.

FUENTE: Antonio Gamoneda: "Leyes electorales y proyectos de Ley", págs. 77 a 88.

REAL DECRETO

convocando las Cortes ordinarias para los años de 1820 y 1821

(22 de marzo de 1820)

"Don Fernando VII, por la gracia de Dios y por la Constitución de la Monarquía Rey de las Españas; a todos los que las presentes vieren y entendieren, sabed:

Que habiendo resuelto reunir inmediatamente las Cortes ordinarias que, según la Constitución que he jurado, deben celebrarse en cada año; considerando la urgencia con que la situación del Estado y la necesidad de poner en planta en todos los ramos de la Administración pública la misma Constitución, exigen que se congrege la Representación nacional; y teniendo presente las variaciones a que obligan las actuales circunstancias, he venido en decretar, de acuerdo con la Junta Provisional creada por mi Decreto de 9 de este mes, lo siguiente:

Artículo 1º. Se convoca a Cortes ordinarias para los años de 1820 y 1821, con arreglo a lo prevenido en los artículos 104 y 108 del capítulo sexto, título tercero de la Constitución política de la Monarquía española, promulgada en Cádiz por las Cortes generales y extraordinarias de la Nación en 19 de marzo de 1812.

2º. A este efecto, se procederá desde luego a las elecciones en todos los pueblos de la Monarquía, conforme a lo que la Constitución dispone en los capítulos primero, segundo, tercero, cuarto y quinto del título tercero, en la forma que aquí se previene.

3º. El haber desempeñado la legislatura en las Cortes extraordinarias de Cádiz o en las ordinarias de 1813 y 1814 no impide a los individuos que las compusieron poder ser elegidos Diputados para las inmediatas de los años de 1820 y 1821.

4º. No pudiendo ya celebrarse las Cortes del presente año en la época prevenida por la Constitución en el art. 106, darán principio a sus sesiones en 9 de julio próximo.

5º. Por cuanto la necesidad de que se hallen pron-

tamente reunidas las Cortes no da lugar a que se guarden en las elecciones los intervalos que establece la Constitución respecto a la Península entre las Juntas de Parroquia, de Partido y de Provincia, se celebrarán por esta sola vez las primeras el domingo 30 de Abril; las segundas con intermedio de una semana, el domingo 7 de Mayo y las terceras, con el de 15 dias, el domingo 21 del mismo, procediéndose en todo conforme a las instrucciones que acompañan al presente decreto.

6°. Verificadas las elecciones de Diputados, tendrán éstos el término de un mes para presentarse en esta Capital.

7°. Al llegar a ella, los Diputados de la Península acudirán al Secretario del Despacho de la Gobernación, a fin de que se sienten sus nombres y el de la provincia que los ha elegido, según debería practicarlo si existiese la Diputación permanente en la Secretaría de las Cortes en virtud del art. 111 de la Constitución.

8°. Respecto a las particulares circunstancias que concurren para las elecciones de las islas Baleares y Canarias por las contingencias del mar, procederán a verificarlas tan pronto como puedan.

9°. Los Diputados propietarios de la Península e islas adyacentes deberán traer los poderes amplios de los electores con arreglo a la fórmula inserta en el artículo 100 de la Constitución.

10°. Por lo respectivo a la representación de las provincias de Ultramar, interim pueden llegar a las Cortes los Diputados que eligieren, se acudirá a su falta por el medio de suplentes acordado por el Consejo de Regencia en 8 de septiembre de 1810 para las Cortes generales y extraordinarias.

11°. El número de estos suplentes será, con arreglo al mismo decreto y hasta que las Cortes determinen lo más conveniente, de treinta individuos, a saber: siete por todo el Virreinato de México; dos por la Capitanía general de Guatemala; uno por la isla de Santo Domingo; dos por la de Cuba; uno por la de Puerto Rico; dos por las Filipinas; cinco por el Virreinato de Lima; dos por la Capitanía general de Chile; tres por el Virreinato de Buenos Aires; tres por el de Santa Fe, y dos por la Capitanía general de Caracas.

12°. Para ser elegido Diputado suplente se exigen las calidades que la Constitución previene para ser propietario.

13°. Las elecciones de los treinta Diputados suplentes por Ultramar se harán reuniéndose todos los ciudadanos naturales de aquellos países que se hallen en esta capital en Junta presidida por el Jefe superior político de esta provincia y remitiendo al mismo sus votos por escrito los que residan en los demás puntos de la Península, a fin de que, examinados por el presidente, secretario y escrutadores que la misma Junta elige, resulten nombrados los que tuvieren mayor número de votos.

14°. Para tener derecho a ser elector de los suplentes por Ultramar se necesitan las mismas circunstancias que la Constitución requiere para tener voto en las elecciones de propietarios.

15°. Los electores de los referidos suplentes serán todos los ciudadanos de que trata el art. 13 de este decreto, que tendrían derecho a serlo en sus respectivas provincias con arreglo a la Constitución.

16°. A fin de que la falta de electores de algunas provincias ultramarinas no imposibilite la asistencia de su representación en las Cortes, se reunirán para este solo efecto los de las provincias más inmediatas de Ultramar según el art. 18 del citado reglamento de 8 de Septiembre de 1810, en la forma siguiente: los de Chile, a los de Buenos Aires; los de Venezuela o Caracas, a los de Santa Fe; los de Guatemala y Filipinas, a los de México, y los de Santo Domingo y Puerto Rico, a los de la isla de Cuba y las dos Floridas.

17°. Cada elector de los suplentes hará ante el Ayuntamiento constitucional del pueblo de su residencia la justificación de concurrir en él las calidades que se requieren para ejercer este derecho; y por conducto del mismo Ayuntamiento remitirá con su voto respectivo dicha justificación al Jefe superior político de Madrid antes del domingo 28 de Mayo, día en que se harán las elecciones de los Diputados suplentes.

18°. Los Diputados suplentes se presentarán al Secretario del Despacho de la Gobernación de Ultramar para los efectos indicados en el art. 7 de este decreto respecto a los propietarios de la Península.

19°. Verificado en Junta general de los electores que residan en la Corte el escrutinio de los votos de que deben resultar elegidos los individuos para suplentes de Ultramar, todos los electores presentes, en representación de sus provincias, otorgarán por sí, y a nombre de los demás que hayan remitido sus votos por escrito, poderes am-

plios a todos y a cada uno de los Diputados suplentes nombrados a pluralidad, según la fórmula inserta en el art. 100 de la Constitución entregándoles dichos poderes para presentarse en las Cortes.

20°. No existiendo la Diputación permanente que debe presidir las Juntas preparatorias de Cortes, y recoger los nombres de los Diputados y sus provincias, para suplir esta falta, reunidos los Diputados y suplentes el día 26 de Junio próximo en primera Junta preparatoria, nombrarán entre sí a pluralidad de votos y para solo este objeto, el Presidente, Secretario y Escrutadores de que trata el art. 112 de la Constitución, y luego las dos Comisiones de cinco y tres individuos que prescribe el art. 113 para el examen de la legitimidad de los poderes; practicándose la segunda Junta preparatoria en primero de Julio, y las demás que sean necesarias hasta el seis del mismo, en cuyo día se celebrará la última preparatoria; quedando constituidas y formadas las Cortes que abrirán sus sesiones el día 9 del mismo mes de Julio, todo conforme a los artículos 114, 115, 117, 118, 119, 120, 121, 122 y 123 de la Constitución.

21°. En conformidad con el art. 104 de la Constitución se destina para celebración de las Cortes el mismo edificio que tuvieron las últimas, para lo cual se dispondrá en términos que expresa el capítulo primero del Reglamento para el gobierno interior de las mismas, formado en Cádiz por las generales y extraordinarias en 4 de Septiembre de 1813.

22°. Por cuanto las variaciones que se notan en este decreto respecto a lo establecido por la Constitución tocante a la convocatoria, Juntas electorales, y épocas en que deben celebrarse las Cortes, son efecto indispensable del estado presente de la Nación, se entenderá solo extensivas a la legislatura de los años de 1820 y 1821, excepto en lo que pertenece a la Diputación permanente, que ya deberá existir en este último año; pues conforme al juramento que tengo prestado interinamente, y prestaré con toda solemnidad ante las Cortes, debe en lo sucesivo observarse en todo escrupulosamente lo que sobre el particular previene la Constitución política de la Monarquía. Por tanto, mandamos a todos los Tribunales, Justicias, Jefes, Gobernadores y demás Autoridades, así civiles como militares y eclesiástica, de cualquier clase y dignidad, que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar el presente decreto en todas sus partes. Tendreislo entendido para su cumplimiento, y dispondreis se imprima, publique y circule.- Señalado de la Real mano.- En Palacio, a 22 de Marzo de 1820.-

A D. Jacobo María de Parga"

FUENTE: Antonio Gamoneda: "Leyes electorales y proyectos de Ley", págs. 89 a 94.

INSTRUCCION

conforme a la cual deberán celebrarse en las provincias de Ultramar las elecciones de Diputados de Cortes para las ordinarias de 1820 y 1821

(22 de Marzo de 1820)

"Artículo 1º. Se formará una Junta preparatoria para facilitar la elección de los Diputados de Cortes para las ordinarias de los años de 1820 y 1821 en las capitales siguientes: México, capital de Nueva España; Guadalajara, capital de la Nueva Galicia; Mérida, capital de Yucatán; Goatemala, capital de la provincia del nuevo reino de León, una de las cuatro internas del Oriente; Durango, capital de la Nueva Vizcaya, una de las provincias internas de Occidente; Habana, capital de la isla de Cuba y de las dos Floridas; Santo Domingo, capital de la isla de este nombre; Puerto Rico, capital de la isla de este nombre; Santa Fe de Bogotá, capital de la Nueva Granada; Caracas, capital de Venezuela; Lima, capital del Perú; Santiago, capital de Chile; Buenos Aires, capital de las provincias del Rio de la Plata; y Manila, capital de las islas Filipinas.

2º. Luego que el Jefe superior de cada una de estas provincias, o quien sus veces haga, reciba el decreto de convocatoria para las Cortes ordinarias de los años de 1820 y 1821, formará la expresada Junta, que se compondrá del mismo Jefe superior, del Arzobispo, Obispo, o quien sus veces hiciere, del Intendente, donde le haya, del Alcalde más antiguo, del Regidor decano, del Síndico Procurador general, y de los dos hombres buenos, vecinos de la misma provincia, y nombrados por las personas arriba mencionadas. En la Junta preparatoria de las cuatro provincias internas de Oriente, que debe formarse en Monterrey, capital de la del nuevo reino de León, presidirá el Jefe que tenga el gobierno político de esta provincia, y en la Junta preparatoria de las provincias internas de Occidente, que debe formarse en la ciudad de Durango, capital de la Nueva Vizcaya, presidirá asimismo el Jefe que tenga el gobierno político de esta provincia. Cada Junta preparatoria, luego que se hubiese formado, dará aviso de ello al Rey por el conducto del Secretario de la Gobernación de Ultramar quien lo comunicará inmediatamente a las Cortes

o a la Diputación permanente de ellas, para que se custodien estas noticias en su archivo.

3°. Si por razón del estado político del país no reside el Jefe superior en la respectiva capital de las arriba expresadas, formará la Junta preparatoria en la ciudad o pueblo donde tenga su residencia, debiendo en tal caso ser de este vecindario los individuos del Ayuntamiento, y entrar a falta del Arzobispo, Obispo o quien sus veces hiciere, el eclesiástico diocesano de mayor dignidad.

4°. Formada la Junta, sobre lo que no se admitirá excusa ni dilación a ninguna de las personas que han de componerla, tendrá presentes los censos de la población más auténticos entre los últimamente formados, o a falta de ellos, formará el cálculo de la población por los medios más expeditos y exactos que fuere posible, y con arreglo a la base de un Diputado por cada 70,000 personas de las comprendidas en el artículo 29 de la Constitución y a los censos de la población, designará los Diputados de Cortes propietarios y suplentes que corresponden a su territorio, según está demarcado en el artículo primero de esta instrucción.

5°. A fin de facilitar las elecciones, cada Junta preparatoria hará para este solo efecto la división más cómoda del territorio de su comprensión en provincias; y designará en cada una de ellas la ciudad en donde deban reunirse los electores de los partidos para elegir los diputados de Cortes.

6°. Cada Junta preparatoria señalará a cada una de sus provincias respectivas el número de Diputados del cupo principal, que proporcionalmente corresponda a su población.

7°. A fin de facilitar las elecciones, cuidará cada Junta preparatoria de distribuir las provincias de su demarcación en partidos si no estuviesen señalados, y si lo estuviesen, se atenderá a la división existente, fijando en uno y otro caso a cada partido el número de electores que le corresponda, con arreglo a su población y a lo demás que la Constitución establece sobre el particular.

8°. Si el estado político de algunas provincias no permite que se verifiquen las elecciones en todos los puntos de su comprensión, las respectivas Juntas preparatorias determinarán el lugar y forma en que deben ejecutarlas el partido o partidos que se hallen en estado de proceder a ellas.

9°. Las Juntas preparatorias resolverán breve y sumariamente todas las dudas que se suscitaren antes de

comenzar las elecciones que deban hacerse inmediatamente, después de haberse jurado la Constitución, y lo que resolvieren se ejecutará sin recurso.

10°. En atención a la dificultad de que en todos los pueblos se hallen ejemplares de la Constitución por ahora y que se tengan presentes todas sus disposiciones al cabo de seis años, se harán reimprimir los capítulos IV del título II; y III, IV, V del título III que tratan de los ciudadanos españoles y de las Juntas de parroquia, partido y provincia, circulándolos al mismo tiempo que la convocatoria.

11°. La reimpresión únicamente de estos capítulos correrá por cuenta del Estado a cargo del Jefe superior de cada provincia, quien será responsable de que no se vicie ni altere su texto ni aún en lo más mínimo, según lo mandado por las Cortes extraordinarias en 21 de abril de 1812 indicando además a los pueblos las variaciones que por esta vez hacen forzosas las circunstancias, y que se expresan en el derecho de convocatoria de este día.

12°. Las Juntas preparatorias resolverán también todas las dudas que puedan ocurrir sobre la elección de las Diputaciones provinciales, arreglándose al decreto de las Cortes generales y extraordinarias de 23 de Mayo de 1812 que trata de esta materia.

13°. Las Juntas preparatorias no se mezclarán en otras funciones que las que aquí van señaladas; cesando en las suyas luego que allanadas todas las dificultades comiencen a verificarse las elecciones, y no embarazando en manera alguna a las Juntas electorales de parroquia, de partido y de provincia en el ejercicio de las facultades que les están asignadas por la Constitución.

14°. Remitirá cada Junta preparatoria por medio del Gobierno a las Cortes, o a la Diputación permanente de ellas, testimonio circunstanciado de cuantas disposiciones haya tomado en la materia, como también de los censos de población que hayan servido para el señalamiento del número de Diputados.

15°. Con arreglo al artículo 102 de la Constitución y a lo dispuesto por las Cortes generales y ordinarias para los Diputados de las de 1813 en la Instrucción de 23 de Mayo de 1812, se señala a los Diputados de las próximas ordinarias 110 reales vellón diarios por razón de dietas, que abonarán las respectivas provincias.

16°. Los Diputados de las próximas Cortes ordinarias tendrán derecho a percibir las dietas asignadas des-

de el día que se presenten a las Cortes o a la Diputación permanente, hasta que concluya su diputación.

17°. A los Diputados se les asistirá por sus respectivas provincias con la decente asignación que proporcionalmente a la distancia se estime necesaria, a juicio de las Diputaciones provinciales, para sus viajes de ida y vuelta.

18°. Las Diputaciones provinciales cuidarán de proporcionar los arbitrios más convenientes para cubrir todos estos gastos de sus respectivos Diputados, proponiéndolos a su tiempo para la aprobación de las Cortes.

19°. Por esta vez, las Juntas preparatorias de todo el Reino dispondrán lo conveniente para que se realicen estos abonos por las respectivas provincias, echando mano, si fuere necesario, de los fondos de la Hacienda pública con calidad de reintegro, que deberán hacer las Diputaciones provinciales.

Señalado de la Real mano".

FUENTE: Antonio Gamoneda: "Leyes electorales y proyectos de Ley", páginas 99 a 104.

REAL DECRETO

para la elección de Procuradores a las Cortes generales
del Reino

(20 de Mayo de 1834)

- Extracto -

TITULO III: Disposiciones especiales relativas a algunas
provincias:

Artículo 48. Por lo respectivo a las islas de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, se reunirá una Junta electoral en la ciudad de Santiago de Cuba, otra en la Habana, otra en Puerto Príncipe, otra en Puerto Rico y otra en Manila, compuesta cada una de ellas de los individuos del Ayuntamiento de las expresadas capitales, y de un número igual de las personas más pudientes, elegidas de antemano por el mismo Ayuntamiento; y la Junta electoral así formada, y presidida por el respectivo Capitán General o por la Autoridad en que éste delegare sus facultades, procederá a la elección de los Procuradores a Cortes por el método y forma prescritos en este Real Decreto"

FUENTE: Antonio Gamoneda: "Leyes electorales y proyectos de Ley", página 117.

REAL DECRETO

de convocatoria a Cortes (Constituyentes de 1836 a 1837)
con arreglo a la Constitución de 1812

(21 de agosto de 1836)

- Extracto -

"Artículo 20. A fin de facilitar las elecciones en las islas de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, y de que sus diputados concurren a las próximas Cortes lo más pronto posible, se verificarán las elecciones del mismo modo que se hicieron las de procuradores a las Cortes convocadas en virtud del Estatuto Real y Reales Ordenes posteriores; pero el número de Diputados y suplentes que en cada provincia se han de nombrar será el mismo que se nombró para las Cortes de los años de 1820 y 1822.

Artículo 21. Y declaro que lo que se prescribe para las elecciones de Diputados en Navarra, provincias Vascongadas y de Ultramar se debe entender solamente en cuanto al método de elegirlos, mas de ningún modo para las calidades que deben tener los electores y elegidos; pues respecto de esto, se debe estar a lo que prescribe la Constitución".

FUENTE: "Antonio Gamoneda: "Leyes electorales y proyectos de Ley", páginas 146 y 147.

REAL DECRETO

para las elecciones de Diputados a Cortes por las provincias de Cuba, Puerto Rico y Filipinas

(14 de Diciembre de 1868)

NOTA: El mal estado en que se encuentra el ejemplar de la Gaceta de Puerto Rico correspondiente al día 28 de enero de 1869, en el que se publicó este Decreto, nos ha impedido su reproducción. No obstante, en el capítulo 2.1. hemos recogido las disposiciones más importantes del mismo. El resto de las disposiciones eran muy semejantes a las del Decreto de 9 de Noviembre de 1868.

REAL DECRETO

enmendando algunos extremos del R.D. de 14 de diciembre de 1868

(10 de febrero de 1869)

"Excmo.Sr. En el Decreto publicado en la Gaceta de esta Capital correspondiente al día de hoy relativo a las elecciones de diputados a Cortes Constituyentes en las provincias de Cuba y Puerto Rico se dispone que las provincias de Cuba y Puerto Rico elegirán diez y ocho diputados la primera y once la segunda y se determina que sea de 50 escudos la cuota requerida entre otras circunstancias para gozar del derecho electoral. Se dispone también en el estado que acompaña al mismo Decreto que la primera de las Circunscripciones en la isla de Cuba elija 7 diputados, 6 la segunda y 5 la tercera y que la primera de la isla de Puerto Rico elija 4 diputados, 3 la segunda y 4 la tercera. Lo que comunico a V.E. para que entienda rectificado en la forma que va expresada el traslado de la mencionada disposición, autorización que se remitió a V.E. con fecha 14 de diciembre último. Dios guarde a V. muchos años.- Madrid 20 de enero de 1869.- AYALA"

FUENTE: Gaceta de Puerto Rico, 1871, día 11 de febrero.

REAL DECRETO

sobre elecciones en Puerto Rico de Senadores y Diputados a Cortes

(1 de Abril de 1871)

"En consecuencia de lo que dispone el artículo 1^o adicional de la Ley de primero de Enero del corriente año, y para llevar a efecto las elecciones de Senadores y Diputados a Cortes ordinarias de la Isla de Puerto Rico, a propuesta del Ministro de Ultramar, de acuerdo con el parecer del Consejo de Ministros y oído el dictámen del Consejo de Estado en pleno, acerca de la interpretación que debe darse al expresado artículo adicional de la Ley de primero de Enero último, vengo a decretar:

Artículo 1.- Las elecciones ordinarias de Senadores y Diputados a Cortes en la Provincia de Puerto Rico se verificarán en los días 20 y siguientes del mes de junio próximo, con arreglo al Decreto, hoy Ley, del Gobierno Provisional de 14 de Diciembre de 1868, modificado en la forma que se expresa en los artículos siguientes:

Artículo 2.- La Provincia de Puerto Rico elegirá cuatro Senadores y quince Diputados.

Artículo 3.- Los distritos para las elecciones serán los que se determinan en la división adjunta a este Decreto. Cada distrito elegirá un solo diputado.

Artículo 4.- En los pueblos que formen un solo distrito electoral y exista más de un Juzgado, el Juez decano ejercerá las atribuciones que en el procedimiento electoral se encomiendan a estas autoridades.

Artículo 5.- En la Capital de Distrito electoral que no sea cabeza de partido judicial, el Juez de paz ejercerá las atribuciones a que anteriormente se ha hecho referencia.

Artículo 6.- El Gobernador Superior Civil de la Provincia de Puerto Rico dividirá los distritos electorales en tantas secciones cuantos ayuntamientos comprendan. Subdividirá éstos también en igual forma cuando las circunstancias locales

y la comodidad de los electores así lo aconsejen, siempre que las secciones contengan un número de electores que no baje de cincuenta.

Artículo 7.- Para ser elector se requiere: ser español en el pleno goce de los derechos civiles, mayor de 25 años y saber leer y escribir o pagar 16 escudos de contribución directa. El elector que contribuya en un distrito y esté domiciliado en otro, no podrá ejercer su derecho sino en aquel en que tenga su vecindad. Para computar la contribución a los que reclamen el derecho electoral, se considerarán como bienes propios: primero- Con respecto a los maridos, los de sus mujeres, mientras subsista la sociedad conyugal. Segundo- Con respecto a los padres, los de sus hijos de que son legítimos administradores. Tercero- Con respecto a los hijos los suyos propios de que por cualquier concepto sean sus madres usufructuarias. En todo arrendamiento o parceria se imputarán para los efectos de este Decreto, los dos tercios de contribución al propietario, y el tercio restante al colono o colonos.

Artículo 8.- No podrán ser electores los que se hallen comprendidos en las excepciones que contiene el artículo 2 del Decreto electoral dictado para la Península, en 9 de noviembre de 1868.

Artículo 9.- Todo elector es elegible, salvo los casos de incapacidad que se determinan en la Ley de 20 de agosto de 1870. No podrán ser elegidos Senadores ni Diputados los que en cualquier tiempo hayan sido condenados por delitos que castiga el Decreto sobre represión y castigo del tráfico negrero.

Artículo 10.- El Diputado que fuere elegido por dos o más distritos, optará a la presentación de la última de sus actas, por el distrito que desee representar, entendiéndose vacante su plaza en los demás que le hayan elegido. Si alguno fuese elegido Senador o Diputado por Puerto Rico, habiéndolo sido en la Península y declarado tal por las Cortes, podrá previa renuncia de dicho cargo, aceptar en los términos establecidos en el párrafo anterior, la representación de aquella Antilla, pero solo en casos de que, durante el plazo de su elección en la provincia ultramarina, no hubiera tenido conocimiento oficial en ella del resultado de la elección peninsular.

Artículo 11.- Publicado este Decreto en la Gaceta Oficial de Puerto Rico y establecidas por el Gobierno Superior Civil las secciones a que se refiere el Artículo 6, los Ayuntamientos, asociados de los contribuyentes que en el Reglamento se designen, procederán a la formación de las listas electorales. En estas listas por Ayuntamientos, aparecerán clasificados en las casillas correspondientes, por orden alfabético, los nombres y apellidos de todos los que tengan derecho de elec

ción, expresándose la vecindad de cada uno y el concepto por el que son inscritos con expresión de la cuota que satisfacen si lo son como contribuyentes. Se excluirá de las listas a los que se creyeren comprendidos en las incapacidades de que trata el artículo 8 del presente Decreto.

Artículo 12.- Verificados los trabajos de formación de las listas electorales, los Ayuntamientos expondrán éstas sin demora, autorizadas con la firma de su presidente y el sello de la Corporación en los sitios de costumbre para los bandos y ordenanzas del Municipio.

Artículo 13.- Los individuos que se crean con derecho a figurar en dichas listas, podrán reclamar en el plazo de ocho días ante los Ayuntamientos a que corresponda la inclusión de su propio nombre en la lista electoral. Sólo los electores de cada Municipio, inscritos en las listas publicadas, tendrán derecho a hacer reclamaciones sobre inclusión o exclusión de otras personas o rectificaciones de errores cometidos en dichas listas.

Artículo 14.- Los Ayuntamientos resolverán acerca de estas reclamaciones en el plazo improrrogable de ocho días.

Artículo 15.- Los interesados que no se conformaren con las resoluciones de los Ayuntamientos, podrán alzarse de ellas dentro del plazo de 15 días ante la Diputación Provincial en defensa del derecho de que se crean asistidos.

Artículo 16.- La Diputación Provincial oyendo a los interesados resolverá en el plazo de 15 días las reclamaciones que ante ellas presenten los que se creyeren agraviados por los acuerdos de los Ayuntamientos. De estas resoluciones puede establecerse el recurso de apelación ante la Audiencia que lo sustanciará oyendo a las partes y al Ministerio Fiscal en el plazo de 15 días.

Artículo 17.- Los Ayuntamientos remitirán al Gobierno Superior Civil copia autorizada de las listas que hubieren rectificado. La Diputación y la Audiencia remitirán también al mismo Gobierno copia autorizada o testimoniada en su caso, de las resoluciones o sentencias que hubieren dictado. Con estos datos el Gobierno Superior Civil ultimaré las listas, sujetándose a las resoluciones de los Ayuntamientos en los casos en los que no hubiere habido reclamación y a las de la Diputación y Audiencias cuando aquella se hubiere presentado.

Artículo 18.- Ultimadas las listas, se imprimirán en la Capital de la Isla y se remitirán ejemplares impresos duplicados a la de distrito o sección electoral para que se expongan al público en la forma que previene el artículo 12 y se archiven en las Secretarías de los Ayuntamientos respectivos. También se publicarán las listas ultimadas en la Gaceta

Oficial de Puerto Rico.

Artículo 19. Son presidentes de las mesas interinas y definitivas los de los Ayuntamientos respectivos y donde el Municipio se dividiere en secciones, los auxiliarán en este cargo los Tenientes de Alcaldes o Regidores por orden de antigüedad. Compondrán las mesas el Presidente y cuatro Secretarios escrutadores que constituirán así las interinas como las definitivas de acuerdo con lo que previene la Ley Electoral de la Península.

Artículo 20.- Cada Ayuntamiento o distrito municipal elegirá por sus electores un número de compromisarios para la elección de senadores, igual a la sexta parte del de Concejales que debe componer el Ayuntamiento. Los distritos municipales donde el número de concejales no llegue a seis, elegirán sin embargo, un Compromisario. Solo serán elegibles para este cargo los electores del distrito que sepan leer y escribir.

Artículo 21.- La elección de los compromisarios para Senadores se verificará al mismo tiempo que la de los Diputados a Cortes.

Artículo 22.- Los delitos que se cometieren en los actos preparatorios de la elección de Senadores y Diputados, y en la elección misma, se castigarán en la forma que establece la Ley electoral de la Península.

Artículo 23.- El Gobierno Superior Civil de Puerto formará, oyendo previamente a la Audiencia del territorio, si lo creyere oportuno, y publicará con la debida urgencia los Reglamentos necesarios para la ejecución de este Decreto, acomodando los actos de la elección, en cuanto fuere posible, a la legislación electoral de la Península. En casos extraordinarios en que se hallare comprometido el orden público, el Gobierno Superior Civil, podrá suspender en uno o más distritos los actos de la elección en la forma que expresa el artículo 4 del Decreto de 28 de Agosto del año último.-

Dado en Palacio a primero de Abril de mil ochocientos setenta y uno.- AMADEO.- El Ministro de Ultramar, Adelardo López de Ayala".

FUENTE: Gaceta de Puerto Rico, 1871, día 3 de abril.

REGLAMENTO

para la elección de Diputados a Cortes Constituyentes en
la Provincia de Puerto Rico

(17 de abril de 1873)

CAPITULO I DEL CENSO ELECTORAL

Artículo 1º. Los Ayuntamientos y Juntas Municipales de la Provincia asociados a igual número de contribuyentes, que según este Decreto tengan derecho al sufragio, procederán, con la brevedad y urgencia que el caso exige a la rectificación de las listas o censos electorales de su jurisdicción correspondiente, formando aquel con arreglo al modelo num. 1 que se inserta a continuación.

Art. 2º. Quedan autorizadas las mencionadas Corporaciones para arbitrar por todos los medios legales la rectificación de los mencionados censos, en un plazo que no deberá exceder del día 19 del corriente, con cuyo objeto dispondrán lo conveniente para que los atrabajos no se paralicen, aprovechando si fuere necesario las horas extraordinarias del día y de la noche.

Art. 3º. Son electores todos los españoles mayores de veinte y un años, que paguen cualquier cuota de contribución directa al Estado o sepan leer y escribir.

Art. 4º. Se exceptúan y no serán incluidos en las listas:

1. Los libertos que con arreglo a la Ley de abolición de la servidumbre en esta isla, no hubieren entrado aún en el ejercicio de los derechos políticos.

2. Los que al verificarse las elecciones se hallen procesados criminalmente, si se hubiere dictado contra ellos auto de prisión y no la hubieren subrogado con fianza en los casos que sea admisible con arreglo a derecho.

3. Los que por sentencia ejecutoria estén privados del ejercicio de derechos políticos.

4. Los sentenciados a penas aflictivas o correccio-

nales mientras no hayan extinguido sus condenas y obtenido rehabilitación en los casos que ésta proceda con arreglo a las leyes.

5. Los incapacitados que como tales están sujetos a curaduría ejemplar

6. Los fallidos o en suspensión de pagos.

7. Los deudores a los fondos públicos apremiados en concepto de segundos contribuyentes.

8. Los que careciendo de medios de subsistencia reciban ésta en establecimientos benéficos.

Artículo 5º. En los censos electorales se incluirán todos los individuos que tengan derecho a emitir sus sufragios con sujeción a los artículos precedentes.

Artículo 6º. El día 20 del corriente mes, a las 8 de la mañana, se expondrán al público los censos electorales en el exterior de las Casas Consistoriales del punto a que correspondan.

Artículo 7º. Hasta el día 24 del mismo mes se admitirán reclamaciones acerca de inclusiones o exclusiones de las listas electorales.

Artículo 8º. Las reclamaciones tanto de inclusiones como de exclusiones, se resolverán en el acto que se presenten por acuerdo del Municipio, a pluralidad de votos, admitiéndose a los reclamantes las pruebas que presentaren.

Artículo 9º. Son electores capacidades para los efectos de este Decreto, todos los que figuren inscritos en las listas electorales de Diputados a Cortes y Diputados provinciales que en la actualidad sean vecinos del pueblo a que pertenezca el censo.

Lo serán igualmente todos los vecinos del territorio que posean un título o ejerzan una profesión por la que no haya duda de su capacidad.

Y lo son también todos los que acrediten que saben leer y escribir en la forma establecida para estos casos, o sea escribiendo lo que se le dictare en el registro que se abrirá al efecto en cada término electoral.

Artículo 10º. Ningún elector podrá votar más que en el Colegio de su domicilio. El que contribuya en un distrito y esté domiciliado en otro no será incluido en la lista o censo electoral, ni podrá ejercer su derecho sino en aquel en que tenga su vecindad.

Artículo 11º. Todo elector que hubiere variado su domicilio después de inscrito en las listas electorales ultimadas, podrá emitir su voto únicamente en el anterior domicilio, pero no en el nuevo por no figurar en las lis-

tas.

Artículo 12^o. Para computar la contribución a los que reclamen derecho electoral, se considerarán como bienes propios:

1. Con respecto a los maridos; los de sus mujeres mientras subsista la sociedad conyugal
2. Con respecto a los padres; los de sus hijos de que son legítimos administradores.
3. Con respecto a los hijos; los suyos propios de que por cualquier concepto sean sus madres usufructuarias.

Artículo 13^o. Así los tribunales de justicia y demás autoridades judiciales y administrativas como los Curas párrocos expedirán gratis y en papel de oficio a petición de los Ayuntamientos o Juntas Municipales o de los interesados, sin dilación de ninguna especie, cualquiera clase de documentos que necesite el elector o vecinos para acreditar su capacidad o la capacidad o incapacidad de otros electores. Estos documentos se pedirán por medio de solicitud u oficio expresando el objeto con que se piden y no serán admitidos en ningún tribunal ni oficinas sino para acreditar el derecho o la incapacidad de los electores.

Los que con otro fin se valieren de ellos, serán considerados como defraudadores de la renta de papel sellado.

Artículo 14^o. Los individuos que necesiten acreditar su edad para ser inscritos en las listas electorales lo verificarán exhibiendo su fé de bautismo o entregando papeleta sellada y firmada por el Párroco del punto donde haya de ejercer su derecho, si fuese el mismo que el de su domicilio o residencia.

Artículo 15^o. Los electores por el concepto de contribuyentes que lo sean de otro territorio que el de su domicilio, podrán acreditar su derecho con los recibos o cartas de pago de la última contribución que les haya sido repartida y hubieren satisfecho al Estado.

Los que no tuvieren aquellos documentos por virtud de extravío, lo verificarán con una certificación de la Administración de Rentas correspondiente.

Artículo 16^o. Las listas o censos electorales de que trata el art. 1 se formarán en orden alfabético incluyendo en la letra A a todos los electores de todos los barrios del término municipal y sucesivamente las demás; haciéndose constar en ellas los apellidos y nombres de los electores que tengan acreditado su derecho de elección, la vecindad de cada uno, el concepto por que son inscri-

tos, cuota que satisfice; si lo son por concepto de contribuyentes, y las observaciones sobre los ausentes, los que hubiesen fallecido o mudado de domicilio después de formado el censo, y los que pertenezcan al Ejército o la Armada.

Artículo 17°. Los electores de cada pueblo o colegio inscritos en las listas electorales publicadas, tendrán derecho a hacer reclamaciones dentro del plazo que señala el artículo 7, sobre inclusión o exclusión de otras personas o a que se rectifiquen los errores cometidos en dichas listas.

Artículo 18°. Las reclamaciones de inclusión o exclusión de las listas electorales deberán dirigirse al Presidente del Ayuntamiento o Junta Municipal por escrito en papel simple, pero con la debida documentación para acreditar el derecho a la inclusión o exclusión reclamadas; de otro modo no se admitirá aquella.

Artículo 19°. Las reclamaciones sobre rectificación de errores podrán hacerse verbalmente justificando los asertos.

Artículo 20°. Desde el día 20 al 24 se admitirán las reclamaciones según lo previene el artículo 7; el último día citado estarán abiertas las oficinas de los Ayuntamientos y Juntas municipales hasta las doce de la noche y se admitirán todas las reclamaciones que en la forma prevenida en este decreto se presenten por los electores, hasta dicha hora en que deberán cerrarse las puertas, sin que por esto dejen de admitirse las demás que en la misma forma presenten los que quedaren dentro del local.

Artículo 21°. En los días 25 y 26 se llevará a efecto la primera rectificación de las listas electorales por los Ayuntamientos y Municipios, remitiendo un ejemplar a la Diputación provincial, el día 27 de dicho mes.

Artículo 22°. Los interesados que no se conformen con las resoluciones de los Ayuntamientos o Juntas Municipales, podrán alzarse de ellas ante la Diputación Provincial en defensa del derecho de que se crean asistidos.

Artículo 23°. La Diputación Provincial admitirá estas apelaciones hasta las 12 de la noche del día 1 de Mayo y las resolverá oyendo a los interesados en los días 2 y 3 de dicho mes. De estas resoluciones puede establecerse el recurso de apelación ante la Audiencia que las sustanciará y determinará oyendo a las partes y al Ministerio Fiscal a la voz en los días 4 y 5 del referido mes de Mayo.

Artículo 24. Los Ayuntamientos y Juntas municipales remitirán a este Gobierno dos copias autorizadas de las listas que hubiesen rectificado, las cuales solo se escribirán por una cara, dejando la otra, o sea la de la vuelta, en blanco. La Diputación Provincial y la Audiencia remitirán también al mismo Gobierno copia autorizada testimoniada en su caso de las resoluciones o sentencias que hubieren dictado. Con estos datos el Gobierno Superior Civil ultimaré las listas sujetándose a las resoluciones de los ayuntamientos en los casos que no hubiese habido reclamación y a las de la Diputación y Audiencia cuando aquella se hubiese presentado.

Artículo 25. La ultimación de las listas por el Gobierno se limitará a anotar al dorso de ellas o sea en la parte en blanco los aumentos o deducciones de electores según las resoluciones de la Diputación y Audiencia.

Artículo 26. Por el correo interior del día 6 de Mayo se devolverán a los Ayuntamientos y Municipios las listas ultimadas. Estos las expondrán manuscritas en los sitios públicos y de costumbre para los bandos y ordenanzas municipales, con cuyo objeto tendrán preparados los ejemplares necesarios para el efecto y para las mesas interinas y definitiva para las elecciones de Diputados a Cortes Constituyentes.

Artículo 27. Sin perjuicio de que se lleven a efecto las elecciones de Diputados a Cortes Constituyentes haciéndose uso para ellas de las listas manuscritas por no haber tiempo para su impresión; esto se verificará sin pérdida de momento y se remitirán a los Ayuntamientos y Municipios los ejemplares necesarios para las elecciones sucesivas.

Artículo 28. El elector que sin motivo legal fuese excluido de las listas podrá entablar contra el responsable la acción criminal que le corresponda con arreglo a las leyes penales vigentes.

Artículo 29. Los Juzgados remitirán a los Ayuntamientos y Juntas municipales del domicilio de los procesados o incapacitados, ya de oficio, ya a petición de dichas Corporaciones o de los interesados, testimonio de los autos de prisión que dicte o de las sentencias ejecutorias que priven o suspendan del ejercicio del derecho electoral

CAPITULO II

DE LOS ELEGIBLES, SUS INCAPACIDADES E INCOMPATIBILIDADES

Artículo 30. Son elegibles para Diputados a Cortes

todos los electores.

Artículo 31. No podrán ser elegidos Diputados los que desempeñen o hayan desempeñado tres meses antes de las elecciones cargo o comisión de nombramiento del Gobierno con ejercicio de autoridad en la Provincia, distrito o localidad donde éstas se verifiquen.

Artículo 32. Tampoco pueden ser elegidos para dicho cargo

Primero. Los contratistas y sus fiadores de Obras y servicios públicos que se paguen con fondos del Estado, provinciales o municipales, ni los administradores de dichas obras y servicios.

Segundo. Los recaudadores de contribuciones y sus fiadores.

Tercero. Los deudores del Estado que lo sean por cualquier clase de contrato

Cuarto. Los deudores en clase de segundos contribuyentes, los fiadores y mancomunados en ambos casos y los que reciban sueldo de la Provincia.

Quinto. Los que en cualquier tiempo hayan sido condenados por delitos que castiga el decreto sobre represión del tráfico negrero.

En cualquier tiempo en que después de la elección un electo adquiera alguna de las cualidades expresadas, la incapacidad, que cada una de ellas lleva consigo, producirá su efecto y aquel en que se halle perderá inmediatamente el cargo.

Artículo 33. Para el cargo de Diputado a Cortes Constituyentes no se computarán a los candidatos electos los votos que obtengan en las localidades donde ejerzan jurisdicción, aunque sea de elección popular el cargo que desempeñen.

Artículo 34. El cargo de Diputado es incompatible con el ejercicio de destinos públicos, aunque sean en comisión y sin sueldo, siempre que lo tengan señalado en el presupuesto del Estado.

Artículo 35. Exceptúanse del anterior precepto con arreglo al artículo 1 de la Ley de 30 de diciembre de 1870:

Primero. Los Ministros de la República

Segundo. Los Oficiales generales del Ejército y Armada con residencia en Madrid.

Tercero. Los Jefes superiores de Administración con residencia en Madrid, que desempeñen destinos cuyos sueldos consignados en presupuesto no bajen de 12,500 pesetas.

Cuarto. El Regente y Presidente de Sala de la Au-

diencia de Madrid, el Rector y Catedrático por oposición de ascenso y término de la Universidad Central y los Inspectores generales de primera clase e Ingenieros Jefes de la misma con residencia en Madrid y dos años de antigüedad en el cargo, tanto los Inspectores como los Ingenieros.

Artículo 36. El número de Diputados de las categorías comprendidas en el artículo anterior que tomen asiento en el Congreso, no podrá exceder de cuarenta; y si fuere elegido mayor número, la suerte decidirá los que hayan de quedar. El acto del sorteo se celebrará en la sesión pública siguiente a la de la constitución del Congreso.

Artículo 37. Los cargos de Diputado a Cortes, Diputado provincial y Concejal son incompatibles entre sí.

Artículo 38. El Diputado a Cortes que acepte del Gobierno empleo, comisión con sueldo, honores o condecoraciones se entiende que renuncia sus respectivos cargos y no podrá ser reelecto hasta las próximas elecciones.

Artículo 39. El Diputado que fuere elegido por dos o más distritos optará a la presentación de la última de sus actas por el distrito que debe representar, entendiéndose vacante su plaza en todos los demás que le hayan elegido. Si alguno fuere elegido Diputado por Puerto Rico habiéndolo sido en la Península y declarado tal por las Cortes, podrá previa renuncia de dicho cargo, aceptar en los términos establecidos en el párrafo anterior, la representación de esta Antilla; pero solo en el caso de que durante el plazo de su elección en la provincia ultramarina no se hubiere tenido conocimiento oficial en ella del resultado de la elección de la Península.

CAPITULO III

DISPOSICIONES GENERALES PARA LAS ELECCIONES COMPRENDIDAS EN ESTE REGLAMENTO

Artículo 40. El derecho electoral y su ejercicio comprende las elecciones de Diputados a Cortes Constituyentes.

Artículo 41. Para acreditar este derecho y poder ejercitarlo se entregará por los Alcaldes a cada elector una cédula talonaria arreglada al modelo núm. 2 que comprenderá dos talones.

No podrá hacerse uso del segundo de ellos sino en los casos que se mencionan en el artículo 68.

Artículo 42. Las cédulas de que se trata en el ar-

título anterior se cortarán de los libros talonarios que con este objeto formarán los Ayuntamientos de los impresos que oportunamente deberán remitirse por el Gobierno Superior Civil, habiendo en cada Municipio tantos como secciones haya en su jurisdicción.

Artículo 43. Las cédulas talonarias se entregarán a domicilio antes de comenzar las elecciones, bajo la responsabilidad de los Alcaldes.

Artículo 44. Ningún elector podrá votar más que en la sección que designe su cédula talonaria.

Artículo 45. Las elecciones de Diputados a Cortes Constituyentes se verificarán en los días 10, 11, 12, y 13 de Mayo próximo.

Artículo 46. La provincia de Puerto Rico elegirá quince Diputados a Cortes Constituyentes.

Artículo 47. El territorio de la Provincia queda dividido para dichas elecciones en los quince distritos que contiene la división acordada por el Gobierno de la Nación en 4 de Febrero de 1871 que se publica a continuación de este Reglamento. Cada distrito elegirá un Diputado a Cortes.

Artículo 48. En virtud de la autorización concedida a este Gobierno Superior por el art. 6 del Real Decreto de 1 de abril de 1861 (sic), queda dividido cada uno de los quince distritos en tantas secciones como pueblos contiene incluso la isla de Vieques.

Artículo 49. Los Ayuntamientos y Juntas Municipales fijarán y publicarán con ocho días de anticipación al designado para empezar las elecciones, el lugar en que hayan de tener lugar en cada Sección.

Artículo 50. En la parte exterior de cada local en que se verifiquen las elecciones, se fijarán dos días antes de que empiecen, una lista certificada de los electores que corresponden a la Sección, la que permanecerá expuesta al público hasta que hayan terminado.

Artículo 51. Las mesas electorales se colocarán de modo que los electores puedan ver el acto de entregar las papeletas y su introducción en la urna.

Artículo 52. Los Presidentes de las mesas cuidarán de que tanto el salón en que se verifican las elecciones, cuanto las avenidas que conduzcan al local, estén siempre despejadas, de manera que los votantes puedan entrar y salir fácilmente.

Artículo 53. Los Presientes tendrán a su disposi-

ción los agentes municipales que consideren necesarios para conservar el orden y hacer respetar su autoridad.

Artículo 54. Todo elector de un distrito municipal tendrá entrada en todas las secciones en que aquel Distrito estuviere dividido y podrá hacer en cualquiera de ellas las protestas y reclamaciones que crea fundadas.

Artículo 55. Los votos se podrán emitir así en pa-
peletas impresas como manuscritas; pero en papel precisa-
mente blanco.

Artículo 56. Nadie podrá entrar en el local de elec-
ciones con palo, bastón ni arma alguna a excepción de los
electores que por impedimento físico necesiten apoyarse en
bastón o muleta, los cuales no podrán permanecer en el lo-
cal más que el tiempo preciso para emitir su voto.

El elector que infringiere este precepto, y adver-
tido, no se sometiere a las órdenes del Presidente, será
expulsado del local y perderá el derecho de votar en aque-
lla elección.

Las autoridades podrán, sin embargo, usar dentro de
la Sección el bastón y demás insignias de su mando.

Artículo 57. Compondrán las mesas tanto interinas
como definitivas un Presidente y cuatro Secretarios escru-
tadores. Son Presidentes de unas y otras los de los respec-
tivos Ayuntamientos y Juntas Municipales.

Artículo 58. Los electores del Ejército y Armada en
servicio activo votarán en el punto donde se hallen el día
de la elección, siempre que lleven dos meses de residencia
continua.

Artículo 59. Los electores de que habla el artículo
anterior acreditarán su derecho por medio de una cédula de
filiación talonaria firmada por el Jefe principal del Cuer-
po o Instituto a que pertenezcan y con el V^oB^o de la Auto-
ridad Superior militar.

Los Jefes de los Cuerpos e Institutos remitirán des-
de luego al Corregidor o Alcalde en que residan y hayan de
votar sus subordinados, relación numérica y por orden alfa-
bético de los mismos y con ocho días de anticipación a las
elecciones, el libro talonario que corresponda a las cédulas
que se les hayan entregado.

Artículo 60. Los Juzgados remitirán a los Ayunta-
mientos y Juntas Municipales del domicilio de los procesa-
dos o incapacitados, ya de oficio, ya a petición de dichas
Corporaciones o de los interesados, testimonio de los autos
de prisión que dicten o de las sentencias ejecutorias que
priven o suspendan el ejercicio del derecho electoral.

Artículo 61. En cada Sección electoral habrá en la mesa una urna rotulada con la palabra "Diputado" a Cortes Constituyentes.

CAPITULO IV

DE LAS ELECCIONES PARA DIPUTADOS A CORTES CONSTITUYENTES

Artículo 62. Las Secciones electorales se abrirán al público a las nueve de la mañana del día 10 de Mayo próximo venidero, para empezar la elección, a cuya hora estará allí el Corregidor, Alcalde o Vocal que deba presidir.

Artículo 63. A cada Sección llevará la Autoridad que deba presidir y colocará sobre la mesa una lista por orden alfabético y numérico de los electores de la misma con dos casillas en blanco para estampar en ellas la palabra "votó". La primera casilla servirá para anotar la votación de la mesa, y la segunda para la de los candidatos.

Artículo 64. A la hora señalada para comenzar la elección, el Presidente ocupará su puesto e invitará a los dos más ancianos y a los dos más jóvenes de los electores presentes, entre los que sepan leer y escribir, a tomar asiento en la mesa para ejercer las funciones de secretarios escrutadores interinos.

Si hubiere reclamaciones sobre la edad que declaren tener los Secretarios escrutadores interinos, se estará a lo que resulte de las cédulas de vecindad que presentarán.

Artículo 65. Después de haber tomado asiento los Secretarios interinos, el Presidente anunciará en alta voz: "Se procede a la votación de Secretarios de la mesa definitiva"

Artículo 66. Las papeletas contendrán los nombres de dos electores de la misma Sección a quienes se designen para Secretarios.

No podrán ser elegidos para estos cargos los que no sepan leer y escribir.

Artículo 67. Los electores irán acercándose uno a uno a la mesa, y presentando sus respectivas cédulas talonarias al Presidente, le entregarán la papeleta doblada con su voto; aquel la introducirá en la urna diciendo:

"Votó el elector N.N."

La cédula talonaria será sellada en el anverso y devuelta al elector después de haber anotado un Secretario en la lista numerada la palabra "votó".

Si hubiere votado con cédula duplicada, se anotará así en la lista para hacer imposible la votación del mismo con la primera o con la de otro a su nombre

Si ocurriere alguna duda sobre la personalidad del elector o sobre la legitimidad de su cédula se identificará en el primer caso con el testimonio de los electores presentes y en el segundo se cotejará la cédula con el talón.

Cuando no se identificase la personalidad del elector o resultase falsa la cédula no se le permitirá votar y la mesa lo hará constar así en el acta tomando las disposiciones convenientes para que el pretendido elector sea entregado inmediatamente a los tribunales de justicia.

Artículo 68. Cuando por omisión o por injusta denegación de los Corregidores y Alcaldes no hubiese sido entregada la cédula a que tenía derecho, o cuando una vez entregada la hubiese perdido, podrá reclamar del Presidente de la mesa (identificando previamente su persona) la entrega del segundo talón de que habla el art. 41, debiendo en este caso votar en el acto con la fórmula "votó con cédula duplicada".

Artículo 69. A las tres en punto de la tarde prohibirá el Presidente en nombre de la Ley, la entrada en el local de la elección, cerrando las puertas del mismo si lo considera preciso.

Continuará después la votación para recibir los votos de los electores presentes, y luego que hubiere votado el último, un Secretario escrutador preguntará tres veces en alta voz. "¿Hay algún elector presente que no haya votado?" No habiendo quien reclame o votando los que falten, el Presidente dirá: "Queda cerrada la votación". No volviéndose después admitir voto alguno y permitiendo de nuevo la entrada en el local.

Artículo 70. Cerrada de esta manera la votación, un Secretario escrutador leerá en alta voz los nombres de los electores que hayan tomado parte en la elección y publicará su número: enseguida el Presidente abriendo la urna dirá: "Se va a proceder al escrutinio".

Artículo 71. Este se verificará sacando el Presidente las papeletas de la urna una a una, desdoblándolas, leyéndolas en voz alta y entregándolas después a uno de los Secretarios para que a su vez las lea en alta voz y las deposite sobre la mesa por el orden en que vayan saliendo.

Los otros Secretarios escrutadores llevarán simultáneamente nota de la votación para Secretarios, cuyas tres notas se confrontarán y en caso de duda se cotejarán con las papeletas que se hayan ido colocando sobre la mesa.

Todo elector tiene derecho a leer por sí, o a pedir se vuelvan a leer, contar y confrontar las papeletas con las notas que hayan llevado los Secretarios escrutadores interinos.

Artículo 72.- Las papeletas cuya validez ofreciese dudas, se dejarán aparte, continuando el escrutinio hasta terminarlo. La mesa examinará después las dudosas y decidirá sobre ellas por mayoría, con arreglo a lo que dispone el artículo siguiente.

Artículo 73. En las papeletas que contuvieren más de dos nombres, se tendrá por valederos los dos primeros y por nulos los demás. Las ilegibles se tendrán por nulas. Y sobre las faltas de ortografía, leves diferencias de nombres y apellidos, inversión de éstos o supresión de algunos la mesa decidirá en sentido favorable, cuando no haya elector alguno de la Sección con quien pueda equivocarse el nombre del contenido en la papeleta; consignando en el acta los hechos, sus resoluciones y las protestas que se hicieren, uniendo en este caso al expediente las papeletas que hubieren sido objeto de cuestión.

Artículo 74. Cuando se encontrasen dobladas juntamente dos o más papeletas, si contuvieran los mismos nombres y por el mismo orden, se contarán por una sola; pero si hubiese entre ellas alguna diferencia esencial, se anularán todas, consignándose así en el acta. Las papeletas solo se apreciarán para confrontar el número de votantes.

Artículo 75. No se admitirá ninguna reclamación ni protesta sobre la edad o la incapacidad del elector ni en el acto de votar ni en el del escrutinio. Todos los electores que se hallen inscritos en las listas electorales y cuya incapacidad no se haya declarado previamente pueden ejercitar su derecho y computárseles sus votos.

Artículo 76. Terminada la lectura de las papeletas dictadas las resoluciones sobre los casos dudosos y admitidas las protestas a que dieren lugar, se procederá al recuento de los votos después de haber preguntado el Presidente: "¿Hay alguna protesta que hacer contra el escrutinio?".

Artículo 77. No habiéndose hecho ninguna protesta o resueltas las que se hagan en la forma que determine la mesa, cada Secretario escrutador verificará el recuento de los votos obtenidos por los candidatos, y si resultase conformidad se extenderá una lista de los que hubiesen obtenido votos por orden de mayor a menor, sin omitir ninguno. En el caso de que no haya conformidad entre los votos anotados a nueva revisión y recuento de las papeletas, ateniéndose

a lo que de esto resulte.

Si hubiese empate entre algunos, lo decidirá la suerte.

Artículo 78. De esta lista se dará lectura en alta voz por uno de los Secretarios escrutadores y concluida, el Presidente de la Sección electoral proclamará Secretarios a los cuatro que hubiesen obtenido mayor número de votos.

Artículo 79. Después de proclamados los elegidos por el Presidente, se recontarán públicamente las papeletas y se quemarán acto continuo, excepto aquellas sobre que se hubiese hecho alguna reclamación las cuales se unirán al expediente.

Artículo 80. Si alguno o algunos de los Secretarios escrutadores elegidos no se hallasen presentes al concluir el escrutinio en el local de la elección, se les avisará a domicilio por el Presidente, y si no se presentase en el término de una hora, se entenderá que renuncian y se tendrán como elegidos los que sigan en la votación inmediata en número si se hallasen en el local. Si alguno de ellos se presentase media hora después, serán reemplazados los que falten por los Secretarios de la mesa interina, sorteándose para cubrir el número de los que no se hayan presentado.

Artículo 81. El Presidente de la mesa interina dará posesión de sus cargos a los Secretarios elegidos, declarando constituida la Sección electoral.

En aquel mismo día los Secretarios de la mesa interina redactarán y firmarán el acta de la elección de la definitiva con arreglo al modelo número 3 que depositarán en la Secretaría del Ayuntamiento o Junta Municipal antes de las once de la mañana del día siguiente, donde podrán examinarla los electores.

Artículo 82. Constituidos en ese mismo día a las 9 de la mañana en la Sección electoral el Presidente y Secretarios escrutadores elegidos, se declarará por el primero en alta voz, "que se empieza la votación para Diputado a Cortes Constituyentes".

Artículo 83. El procedimiento de esta elección se arreglará a los mismo trámites establecidos para la elección de la mesa en los artículos 63 al 70 de este Reglamento.

Artículo 84. Las papeletas contendrán solamente el nombre y apellido de la persona que designe cada elector para el cargo de Diputado a Cortes por el distrito a que

pertenece la Sección; y en caso de que hubiere más nombres se tendrán por nulos todos los que sigan al primero.

Artículo 85. A las cuatro en punto de la tarde se procederá al escrutinio en la misma forma prescrita en los artículos 70 al 79 de este Reglamento.

Artículo 86. Acto continuo la mesa redactará y autorizará el acta parcial, conforme al modelo núm. 4 que conservará en su poder el Presidente para archivarla en la Secretaría del Municipio antes de las ocho de su mañana del día siguiente. De dicha acta se sacarán inmediatamente cuatro certificaciones literales que autorizarán los Secretarios de la mesa con el V^o B^o del Presidente, y remitirán tres al Gobernador Superior Civil por el correo más inmediato y la otra al Corregidor o Alcalde de la cabeza del Distrito electoral en pliegos sellados y cerrados, con el sello del Municipio, en cuya cubierta certificarán también su contenido dos de los Secretarios con el V^o B^o del Presidente de la mesa.

También comunicarán los Presidentes de la mesa al Gobernador Superior Civil por el medio más rápido, al terminar el escrutinio de cada día, un extracto de su resultado, expresando el número de votantes y de los votos obtenidos por cada candidato, por orden de mayor a menor.

A cada acta se unirá una lista de los electores que hayan tomado parte en la elección, la cual se sacará de la numerada en que hayan sido anotados los votos.

Artículo 87. Si alguno de los candidatos que hubieren obtenido voto en la elección del día, o cualquiera elector en su nombre requiriese certificación y lista de los electores votantes y resumen de los votos, se le darán sin demora por la mesa.

Artículo 88. El Presidente y Secretarios cuidarán bajo su más estrecha responsabilidad de que se fijen antes de las nueve de la mañana del día siguiente en la parte exterior de la Sección electoral, las listas con los nombres de los electores que hayan tomado parte en la votación y las de los candidatos con los votos que hubieren obtenido por orden de mayor a menor.

Artículo 89. A las nueve de la mañana de este día se volverá a abrir la Sección electoral sin necesidad de anuncio, y ocupando la mesa el Presidente y Secretarios escrutadores, continuará la votación comenzada en el día anterior.

Si en el primero o segundo día de votación hubieran emitido su sufragio todos los electores, se dará por terminada la votación.

Artículo 90. Concluída la votación, y redactada su acta parcial en los términos referidos en el artículo 86 conforme al modelo núm. 4, se publicarán las listas de los votantes y de los que hubieren obtenido voto y se extenderá el acta general de la Sección, conforme al modelo núm. 5, uniendo a ella los resultados de los escrutinios anteriores con todos los incidentes de la elección.

En esta misma acta se observará todo lo prevenido para las parciales.

Artículo 91. Al día siguiente de concluir la elección en los pueblos en que hubiere más de una Sección se reunirán todas las mesas para practicar el escrutinio general del pueblo.

El Alcalde presidirá esta Junta.

Del escrutinio que practique se levantará la correspondiente acta que firmarán todos los concurrentes y se observará en su redacción lo prevenido para las generales de las Secciones.

Artículo 92. A los tres días de concluída la elección en las Secciones electorales, se instalará en el pueblo cabeza de distrito la Junta de escrutinio del mismo, compuesta de un Secretario Comisionado por cada Sección electoral que será elegido por la mesa después de concluída la votación del último día.

Artículo 93. Si el distrito electoral solo consta de una Sección, serán elegidos para este acto los cuatro Secretarios escrutadores, si constase de dos, cada uno elegirá dos Secretarios escrutadores y si constase de tres la que sea cabeza elegirá dos Secretarios y una cada una de las dos.

Artículo 94. Cuando el distrito electoral conste de más de tres pueblos y en alguno de ellos hubiere más de una Sección, se reunirán todas las del mismo pueblo para hacer la elección del Secretario que le corresponda.

Artículo 95. Los Secretarios Comisionados llevarán a la Junta de escrutinio del Distrito, las copias literales certificadas a que se refiere el artículo 90.

Artículo 96. El Juez de Primera Instancia del pueblo cabeza de Distrito presidirá, pero sin voto, la Junta de escrutinio del mismo.

En la Capital ejercerá dichas atribuciones el Juez decano, y en las cabezas de Distrito donde no haya Juzgado de Primera Instancia, el Juez de paz.

Artículo 97. Constituída la mesa a las 10 de la mañana en el local destinado al efecto, se empezará el

escrutinio con la lectura de los artículos 98 al 104 de este Reglamento, referentes al acto, enseguida se presentarán por el Corregidor o Alcalde de las cabezas de Distrito, las certificaciones de las actas de las Secciones electorales que se le hubiesen remitido con arreglo al artículo 86 y las que trajesen los comisionados de las mismas actas.

Unos y otros documentos serán escrupulosamente confrontados por cuatro Secretarios escrutadores elegidos en el acto por los Comisionados de la Junta de escrutinio, si constare la Junta de un número mayor

El Presidente con los cuatro Secretarios hará el recuento y resumen de los votos obtenidos por cada candidato.

CAPITULO V

DEL ESCRUTINIO DEL DISTRITO PARA DIPUTADOS A CORTES CONSTITUYENTES

Artículo 98. Si no se presentaren en la cabeza de Distrito alguno o algunos de los Comisionados de las Secciones electorales a la hora de las 10 de la mañana marcada en el artículo anterior para constituir la Junta, se hará no obstante, el recuento y resumen de los votos por las certificaciones que hubieren remitido sus Secciones al Corregidor o Alcalde de la cabeza de Distrito.

Artículo 99. La Junta de escrutinio no podrá anular ninguna acta ni voto. Sus atribuciones se limitan a efectuar sin discusión el recuento de los votos emitidos en las Secciones electorales, ateniéndose estrictamente a los que resulten computados por sus respectivas mesas.

Si sobre el recuento ocurriere alguna cuestión, lo decidirá la Junta por mayoría de votos.

Artículo 100. Si respecto al número de votos y de votantes no apareciere conformidad entre las certificaciones presentadas por el Corregidor o Alcalde de la cabeza de Distrito y de los Comisionados de las Secciones, se estará al resultado de los que éstos hubieren presentado y se pasará el tanto de culpa a los tribunales para que procedan en justicia a lo que hubiere lugar.

Artículo 101. Concluido el escrutinio con el recuento y el resumen de los votos, el Presidente proclamará Diputado por el Distrito electoral al que hubiere obtenido el mayor número de votos; levantando enseguida la correspondiente acta, conforme al modelo núm. 6.

Artículo 102. Del acta de escrutinio de Distrito se remitirán tres copias literales certificadas, firmadas por el Presidente y los cuatro Secretarios escrutadores al Gobernador Superior Civil; archivándose el original en la Secretaría Municipal de la cabeza de Distrito con las certificaciones de las actas de las Secciones que se hubiesen remitido al Corregidor o Alcalde del mismo y las que hubieren presentado los Comisionados de las Secciones.

Artículo 103. Terminadas las operaciones de esta Junta de escrutinio, el Presidente la declarará disuelta.

Artículo 104. Inmediatamente que sean recibidas en el Gobierno Superior Civil las tres copias literales certificadas del acta de escrutinio del Distrito, a que se refiera el artículo 102, se expedirá por su Secretaría con el V^o B^o del Gobernador Superior Civil y se remitirá al Diputado proclamado una certificación de la misma en que consten el número de electores que hayan tomado parte en la elección de Distrito, los votos obtenidos por los candidatos, las protestas y sus resoluciones que se hubieren hecho y tomado en las Secciones y su proclamación.

Esta certificación le servirá de credencial para presentarse en el Congreso de los Diputados.

ARTICULOS ADICIONALES

Artículo 1. Los delitos que se cometieren en los actos preparatorios de la elección de Diputados a Cortes y en la elección misma, se castigarán en la forma que establece el Título III de la Ley Electoral de la Península que se inserta a continuación de este Reglamento.

Artículo 2. En casos extraordinarios en que se hallase comprometido el orden público, el Gobierno Superior Civil, de conformidad con lo prevenido en la segunda parte del artículo 25 de las Bases de 4 de Febrero de 1871, podrá suspender en uno o más Distritos los actos de la elección en la forma que expresa el artículo 9 del Decreto de 29 de Agosto de 1870.

Puerto Rico, Abril 17 de 1873.- Rafael Primo de Rivera.

FUENTE: Gaceta de Puerto Rico, 1873, día 17 de Abril.

DECRETO

del Gobernador Superior Civil de Puerto Rico sobre formación de listas electorales.

(7 de octubre de 1875)

"Primero. Los Ayuntamientos con igual número de contribuyentes por más de ocho pesos de contribución directa anual, al de los individuos de que se compone, procederán sin levantar mano a la formación de listas electorales que deberán quedar terminadas y expuestas al público en los parajes de costumbre en cada pueblo a las ocho de la mañana del día diez y seis del corriente.

Segundo. Para su formación se aplicarán los artículos 7º y 8º del Real Decreto de 1 de Abril de 1871.

Tercero. Las listas contendrán clasificado por orden alfabético y en las casillas correspondientes, los nombres y apellidos de todos los que tengan derecho de elección, expresándose la vecindad de cada uno y el concepto por el que son inscritos, con expresión de la cuota que satisfacen, si lo son como contribuyentes. Se excluirán de las listas a los que se creyeren comprendidos en las incapacidades de que trata el artículo octavo del citado Decreto.

Cuarto. Los individuos que se crean con derecho a figurar en dichas listas, podrán reclamar en el plazo de ocho días, ante los Ayuntamientos a que correspondan, la inclusión de su propio nombre en la lista electoral. Solo los electores de cada municipio inscritos en las listas publicadas, tendrán derecho a hacer reclamaciones sobre inclusión o exclusión de otras personas o rectificaciones de errores cometidos en dichas listas.

Quinto. Los Ayuntamientos resolverán acerca de estas reclamaciones en el plazo improrrogable de cuatro días, es decir, desde el 25 al 28 inclusivos.

Sexto. Los interesados que no se conformaren con las resoluciones de los Ayuntamientos, podrán alzarse de ellas dentro del plazo de 15 días ante la Diputación provincial en defensa del derecho de que se crean asistidos.

Séptimo. La Diputación provincial, oyendo a los interesados, resolverá en el plazo de ocho días, es decir, desde el 13 al 20 inclusive de Noviembre las reclamaciones que ante ella presenten los que se creyeren agraviados por los acuerdos de los Ayuntamientos. De estas resoluciones puede entablarse recurso de apelación ante la Real Audiencia, que la sustanciará y determinará oyendo a las partes y al Ministerio Fiscal, en el plazo improrrogable de diez días, debiendo quedar por lo tanto fallados todos los recursos el 30 de noviembre próximo.

Octavo. Los Ayuntamientos en los cuatro días siguientes al 28 del corriente, remitirán a este Gobierno General copia autorizada de las listas por ellos formadas y rectificadas. La Diputación provincial y la Real Audiencia en los dos días siguientes al de la terminación de los plazos que se les concede para resolver, remitirán también a este Gobierno copia autorizada o testimoniada en su caso de las resoluciones o sentencias que hubieren dictado.

Noveno. Con las listas de los Ayuntamientos y las resoluciones de la Diputación y Audiencia, se ultimarán en este Gobierno General las listas electorales, que serán publicadas en la Gaceta y remitidas a los respectivos Ayuntamientos para su fijación al público el día 5 de diciembre próximo, según lo determinado por el Gobierno de S.M.

Diez. Las instancias que se eleven a los Ayuntamientos y Diputación reclamando inclusión o exclusión en las listas electorales se redactarán en papel simple; y los documentos para justificar la edad de los electores y demás circunstancias necesarias en su caso, serán facilitadas gratis y en igual papel por quien corresponda, previa instancia al efecto, sin que después de presentados al Ayuntamiento puedan ser devueltos al interesado. Estos documentos no tendrán más valor y fuerza que el necesario para justificar el derecho electoral.

Once. Los Ayuntamientos tendrán especial cuidado en que figuren en las listas electorales todos los contribuyentes que cuando menos paguen ocho pesos de contribución directa y no deban ser excluidos de ellas por excepción legal. También incluirán como capacidades desde luego:

1. A los funcionarios y empleados públicos de todos los ramos.
2. A los Eclesiásticos.
3. A los que tengan un título académico o literario para ejercer cualquier profesión.
4. A los individuos pertenecientes a Corporaciones consultivas.

Doce. Esta inclusión se entiende bajo la responsabilidad de los Municipios en cuanto a las condiciones legales del individuo, y sin perjuicio del derecho que para reclamar se concede a todo elector.

Trece. Para facilitar la formación del censo, pasarán desde luego al Municipio respectivo los Superiores o Jefes Civiles y los del Ejército y Armada, una relación de todos los individuos que reúnan las condiciones legales para ser electores, comprendiendo respecto al Ejército y Armada a Oficiales, clases, soldados o marineros que sepan leer y escribir y tengan 25 años de edad.

Catorce. En el registro que ha de abrirse para acreditar el concepto de elector como capacidad a los que sepan leer y escribir, ha de hacerse constar de un modo fehaciente, bajo la responsabilidad de los Ayuntamientos, que el elector posee verdaderos conocimientos en escritura y lectura, sin que baste saber escribir su nombre y apellido.

Quince. Para evitar toda confusión en la redacción de las listas, se observarán las reglas siguientes:

1. Las que han de exponerse al público, se escribirán en pliego aboerto por una sola cara.

2. Las copias certificadas que hayan de remitirse a este Gobierno, serán en igual papel en pliego cerrado por ambas caras.

3. Todas las listas serán precisamente numeradas, es decir, cada elector llevará un número.

4. Los electores se inscribirán por orden alfabético riguroso de apellidos, incluyendo a todos los de la jurisdicción Municipal y no separándolos por barrios.

5. Será obligatorio en la columna de vecindad expresar el barrio o la calle en que habita cada elector.

6. Después de la columna de conceptos, se pondrá otra en que se ha de anotar la cuota que paga el que lo sea por contribución.

7. Solo se incluirán en las listas a los que tengan domicilio en el territorio Municipal, excluyéndose a los demás aunque sean contribuyentes o residentes en el mismo.

8. Así mismo incluirán a los que residan accidentalmente o contribuyan en otro término Municipal con tal que estén domiciliados en aquel.

Puerto Rico, 7 de Octubre de 1875.- SANZ"

FUENTE: Gaceta de Puerto Rico.- Suplemento al número 120, correspondiente al jueves 7 de Octubre de 1875

REAL DECRETO

para las elecciones de Senadores y Diputados en las islas de
Cuba y Puerto Rico

(27 de diciembre de 1892)

TITULO PRIMERO

DE LOS DISTRITOS ELECTORALES

Artículo 1. Serán elegidos directamente los Diputados a Cortes por electores en los colegios o secciones en que para tal objeto se subdividirán las circunscripciones y los distritos establecidos o que se establezcan en las islas de Cuba y Puerto Rico.

Después de admitidos en el Congreso de los Diputados, representarán con los de la Península, individual y colectivamente, a la Nación.

Artículo 2. Se elegirá un Diputado a lo menos por cada 50,000 almas, incluyendo toda la población que actualmente tienen las Antillas sin distinción de razas.

Artículo 3. El Gobierno queda autorizado para determinar, en vista del resultado de la estadística de población de las islas de Cuba y Puerto Rico, el número de Diputados que han de elegir, conservando en cuanto sea posible la división actual de las mismas en circunscripciones y distritos y su subdivisión en secciones.

Cada término municipal constituirá una sección, si no excede de 100 el número de electores, dos si no excede de 200, tres si no excede de 300 y así sucesivamente.

Artículo 4. Solo por una ley especial podrá modificarse el número de Diputados que corresponda elegir a las islas de Cuba y Puerto Rico, o variar la demarcación o capitalidad de sus circunscripciones, distritos y secciones.

TITULO SEGUNDO

DE LOS DIPUTADOS

Artículo 5. Para ser admitidos como Diputados en el Congreso se necesita:

1.- Ser español, de estado seglar, haber cumplido 25 años de edad antes del día en que se verifique la elección y gozar de todos los derechos civiles.

Los que habiendo nacido ciudadanos españoles hubieren perdido esta nacionalidad y volvieran a adquirirla con arreglo a las leyes, tendrán que acreditar, para ser admitidos por el Congreso como tales Diputados, que recuperaron su primera condición de españoles un año antes, cuando menos, del día en que fueron elegidos.

2.- Haber sido elegido y proclamado electo en un distrito electoral o en el Congreso con arreglo a las disposiciones de este Decreto y a las del Reglamento del mismo Cuerpo.

3.- No estar inhabilitado por cualquier motivo de incapacidad personal para obtener el cargo.

4.- No estar comprendido en ninguno de los casos que establece la ley de incompatibilidades.

Artículo 6. Están personalmente incapacitados para ser admitidos como Diputados, aunque hubiesen sido válidamente elegidos, los que se hallasen en alguno de los casos siguientes:

1.- Los que por sentencia firme de Tribunal competente hayan sido condenados a las penas, como principales o accesorias, de inhabilitación perpetua absoluta o especial para derechos políticos o cargos públicos, aunque hubiesen sido indultados a no haber obtenido antes de la elección rehabilitación personal por medio de una ley.

2.- Los que por igual sentencia hayan sido condenados a cualquiera de las penas que el Código penal clasifica como afflictivas, si no hubieran obtenido legalmente rehabilitación dos años por lo menos antes de la elección.

3.- Los que habiendo sido condenados por sentencia firme en causa a cualquiera de las otras penas establecidas por el Código penal, no acrediten haber cumplido la condena antes de la presentación en el Congreso del acta de su elección.

4.- Los que por incapacidad física o moral o por sentencia penal se hallaren en estado de interdicción civil.

5.- Los concursados o quebrados no rehabilitados conforme a la ley, y que no acrediten documentalmente haber cumplido todas sus obligaciones.

6.- Los deudores a fondos públicos como segundos contribuyentes.

Artículo 7. También están incapacitados para ser admitidos como Diputados por los votos que hubiesen obtenido en los distritos respectivos los que se hallaren en alguno de los casos siguientes:

1.- Los contratistas de obras o servicios públicos que se costeen con fondos del Estado, de la Provincia o el Municipio; los que de resultas de tales contrataciones tengan pendientes reclamaciones de interés propio contra la Administración, y los fiadores o consocios de dichos contratistas.

Esta incapacidad se entenderá solamente en relación con el distrito o circunscripción en que se haga la obra o servicio público.

2.- Los que desempeñen o hayan desempeñado un año antes en el distrito o circunscripción en que la elección se verifique cualquier empleo, cargo o comisión de nombramiento del Gobierno, o ejercido la autoridad de elección popular, en cuyo concepto se comprenden los Presidentes de las Diputaciones y los Diputados que durante el año anterior hubiesen desempeñado el cargo de individuos de las Comisiones provinciales.

Se exceptúan los Ministros de la Corona y los funcionarios de la Administración Central.

Las incapacidades a que se refiere este número se limitan a los votos obtenidos en el distrito o circunscripción adonde alcance la autoridad o funciones de que haya estado investido el Diputado electo y a los Alcaldes o Tenientes de Alcalde respecto a los votos del Municipio.

Artículo 8. La incapacidad relativa que se establece en el artículo anterior subsistirá hasta un año después de que hubiese cesado por cualquier causa el motivo que la produce a no ser que recaiga sobre persona que durante este término haya ejercido el cargo de Diputado a Cortes por el mismo Distrito.

Artículo 9. En cualquier tiempo en que un Diputado se inhabilitare después de admitido en el Congreso o por cualquiera de las causas enumeradas en el artículo 6, se declarará su incapacidad y perderá inmediatamente el cargo.

Artículo 10. Los que estén ya en posesión del cargo de Diputado a Cortes no podrán ser admitidos en el mismo Congreso en virtud de una elección parcial si no lo hubiesen renunciado antes de la convocación del distrito para dicha elección parcial.

Artículo 11. El cargo de Diputado a Cortes es gratuito y voluntario y se podrá renunciar antes y después de haberlo jurado; pero la renuncia no podrá ser admitida sin la apro-

bación previa del acta de la elección por el Congreso.

TITULO TERCERO

DE LOS ELECTORES Y DEL CENSO ELECTORAL

Capítulo Primero

De los Electores

Artículo 12. Solo tendrán derecho a votar en la elección de Diputados a Cortes los que estuvieren inscritos como electores en las listas del censo vigente al tiempo de hacerse la elección.

Artículo 13. Tendrán derecho a ser inscrito como elector en las listas del censo electoral de la sección de su respectivo domicilio en las islas de Cuba y Puerto Rico todo español que, habiendo cumplido la edad de 25 años, sea contribuyente dentro o fuera del mismo distrito, por la cuota mínima al Tesoro de 5 pesos en Cuba y 10 pesos en Puerto Rico por contribución territorial o por impuesto urbano, industrial o de comercio, siempre que acredite que está satisfaciendo dicha cuota en el momento de solicitar su inscripción en las listas del censo electoral.

Serán acumulables únicamente para los efectos del párrafo anterior, las referidas contribuciones o impuestos que se pagan al Estado.

Artículo 14. Para computar la contribución a los que pretendan el derecho electoral, se tendrán como bienes propios:

1.- Con respecto a los maridos, los de sus mujeres, mientras subsista la sociedad conyugal.

2.- Con respecto a los padres, los de sus hijos de que sean legítimos administradores.

3.- Con respecto a los hijos, los suyos propios de que por cualquier concepto sean sus madres usufructuarias.

Artículo 15. Para los efectos electorales se computará a los socios de compañías que no sean anónimas la contribución que como tales satisfagan, distribuída entre los que la formen en proporción al interés que cada uno tenga en la sociedad, y no siendo éste conocido, en iguales partes.

La existencia de estas sociedades o compañías y la participación en ella de cada socio, así como los caracteres

de los que las constituyen, debe acreditarse por escritura pública inscrita en el Registro correspondiente.

Artículo 16. En todo arrendamiento o aparcería se imputarán, para los efectos de este decreto, los dos tercios de la contribución al propietario y el tercio restante al colono o colonos, siempre que por escritura pública debidamente registrada en su caso se pruebe que existe el arrendamiento o aparcería con un año de antelación.

Los Notarios expedirán en papel de oficio y sin exacción de derechos las copias de los documentos a que se refieren este artículo y el anterior, y los Registradores de la propiedad en su caso extenderán también gratis y en igual papel las certificaciones de anotación o inscripción, expresando unas y otras el objeto al que se destinan los documentos para que no puedan ser presentados ni admitidos en Tribunales, Juzgados ni oficinas a fin distinto al que determina este decreto.

Artículo 17. También tendrán derecho a ser inscritos en las listas electorales, siempre que hayan cumplido 25 años:

1.- Los individuos de número de las Reales Academias Españolas, de la Historia, de San Fernando, de Ciencias exactas, físicas y naturales, Morales y Políticas y de Medicina.

2.- Los individuos de los Cabildos eclesiásticos, y los Curas párrocos y sus tenientes o coadjutores.

3.- Los empleados activos de todos los ramos de la Administración pública, de las Diputaciones y de los Ayuntamientos, que gocen por lo menos 100 pesos anuales de sueldo dos años antes de su inscripción en el censo, y los cesantes y jubilados, cualquiera que sea su haber, así como los Jefes de Administración cesantes, aunque no tengan ninguno.

4.- Los Oficiales Generales del Ejército y la Armada exentos de servicio, y los Jefes y Oficiales militares y marinos retirados con goce de pensión por esta cualidad o por la cruz pensionada de San Fernando, aunque sean de la clase de soldados.

5.- Los que llevando dos años de residencia por lo menos en el término del Municipio, justifiquen su capacidad profesional o académica por medio de título oficial.

6.- Los pintores o escultores que hayan obtenido premio en Exposiciones nacionales o internacionales.

7.- Los Relatores o Secretarios de Sala y Escribanos de Cámara de los Tribunales Supremos y Superiores, y los Notarios y Procuradores, Escribanos de Juzgados y Agentes colegiados de negocios que se hallen en los mismos casos que los del párrafo 5.

Artículo 18. No podrán ser electores los que se hallen en cualquiera de los casos expresados en los párrafos 1, 2, 3 y 4 del artículo 6.

Los individuos a que se refiere el párrafo 2 del caso 1 del artículo 5 del presente decreto solo podrán ejercer el derecho electoral cuando acrediten haber cumplido las mismas condiciones que para su elegibilidad les exige la mencionada disposición.

Capítulo II

Del modo de adquirir y perder el derecho electoral

Artículo 19. Con arreglo a las precedentes disposiciones se completarán las listas electorales, y así formadas constituirán el censo electoral permanente

Artículo 20. Publicadas las listas, el derecho electoral y la inscripción en el censo solo podrán obtenerse y perderse por virtud de declaración judicial hecha a instancia de parte legítima por los trámites que establece este decreto.

Artículo 21. Para hacer esta declaración son competentes, con exclusión de todo fuero, los Jueces de los partidos judiciales comprendidos en el distrito en cuyas listas haya de hacerse la inclusión o la exclusión del elector.

Artículo 22. La acción para reclamar la inclusión o exclusión de los electores en las listas de cada Distrito corresponderá a los ya inscritos en ellas, quienes, lo mismo que los propios interesados, podrán ejercitarlo en cualquier tiempo.

Artículo 23. No se admitirá ni dará curso a ninguna demanda de inclusión que no se presente acompañada de justificación documental del derecho que se pida. Esta justificación deberá ser comprensiva de las tres calidades de edad, contribución o capacidad y vecindad en el pueblo respectivo.

Artículo 24. La justificación documentada de la edad podrá ser suplida por información testifical practicada ante Juez competente.

Artículo 25. El Juez deberá admitir o rechazar la demanda dentro de los ocho días subsiguientes a la presentación de la justificación necesaria.

Admitida la demanda, mandará el Juez que se publique la pretensión por edictos que se fijarán en los sitios acostumbrados del pueblo, cabeza de partido y en los de los domicilios de las personas cuya inscripción se solicite, y se anunciará en

el "Boletín Oficial" de la provincia.

Artículo 26. Dentro del término de veinte días, contados desde la fecha del "Boletín Oficial" en que se hubiese insertado el anuncio, podrán presentarse en oposición de la inclusión los mismos interesados si no fueren los demandantes o cualquier elector.

Artículo 27. Expirado el término del artículo anterior, sin que se haya formulado oposición a la demanda, dictará el Juez dentro de veinte y cuatro horas sentencia razonada definitiva declarando o negando el derecho electoral solicitado. Esta sentencia será apelable en ambos efectos, y si no se apelase quedará el fallo ejecutorio sin necesidad de ninguna declaración, y se procederá a ejecutarlo inmediatamente.

Artículo 28. Si dentro del término del artículo 26 se presentase alguno oponiéndose a la demanda, se dará inmediatamente copia del escrito de oposición a la parte actora y mandará el Juez convocar a las partes a juicio verbal, que se celebrará, lo más tarde, cinco días después de fenecido dicho término, a cuyo juicio podrá asistir con aquellas un hombre bueno o defensor con cada uno para sostener su derecho.

Artículo 29. De este juicio que podrá durar hasta tres días y en que podrán admitirse nuevas justificaciones que no sean de testigos, se extenderá la oportuna acta, que suscribirán con el Juez las partes o sus defensores y el Escribano. Los nuevos documentos que se presentaren se unirán al expediente originales o en testimonio concertado con ellos.

Artículo 30. Concluido el juicio verbal y dentro del siguiente día, el Juez dictará sentencia, que será apelable como en el caso del artículo 27.

Artículo 31. Si un elector inscrito en las listas de un Distrito electoral trasladare su vecindad a otro distrito o diferente sección, bastará para ser inscrito en las listas del nuevo domicilio acreditar éste documentalmente y que estaba inscrito en las correspondientes a la sección de su anterior vecindad; pero se admitirá prueba en contrario si hubiere oposición de parte legítima.

Artículo 32. Si la demanda fuera de exclusión, deberá acompañarla también, para ser admisible, justificación documental negativa del concepto por que figure en las listas el elector, o afirmativa respecto a las circunstancias que producen incapacidad con arreglo al artículo 18.

Artículo 33. Admitida en este caso la demanda, seguirán los trámites que queden prescritos para las de inclusión pero además de la publicación prevenida por el artículo 26 serán siempre citados personalmente los electores cuya exclusión

se solicita. Esta citación se hará por cédula acompañada de copia literal de la demanda y su documentación en la forma dispuesta por los artículos 263 y 264 de la Ley de enjuiciamiento civil vigente en las Antillas, cuya entrega se hará en el domicilio en que el interesado resulte inscrito en las listas.

A éste o a cualquiera otro elector que se presente a sostener su derecho, le bastará justificar la calidad o circunstancia determinada que en la demanda y en su comprobación se le niegue, y sobre este punto resolverá el Juez en su sentencia.

Artículo 34. El que haya sido excluido de las listas del censo electoral por alguna de las causas expresadas en el artículo 18 no podrá volver a ser inscrito en las del mismo ni en las de otro distrito, sin que acredite haber recobrado con posterioridad a su exclusión la actitud necesaria para ser elector.

Artículo 35. No se podrán acumular en una misma demanda reclamaciones de inclusión y exclusión.

Artículo 36. Las apelaciones a que se refieren los artículos 28 y 31 se interpondrán dentro del término de tres días desde la notificación de la sentencia, y serán admitidas de plano, remitiéndose los autos originales a la Audiencia del territorio, con previa citación de las partes para que comparezcan en el tribunal dentro del término de quince días; la apelación podrá interponerse en la misma diligencia de notificación.

Artículo 37. Estas apelaciones se sustanciarán en la forma y por los trámites prescritos por los artículos 1,459 y siguientes de la Ley de enjuiciamiento civil, pero sin formar apuntamiento, en el preciso término de veinte días, y oyendo ante todo al Ministerio Fiscal, a quien al efecto pasarán los autos luego que se persone el apelante para que emita su dictamen escrito dentro de tres días.

Artículo 38. En la instancia de apelación podrá también alegarse nulidad de la sentencia apelada por haberse faltado en la primera a alguno de los trámites prescritos en este decreto; y si el Tribunal estimare la nulidad mandará reponer los autos al estado que tenían cuando se cometió la infracción, con imposición de las costas al Juez o funcionario que apareciere culpable de la falta.

Artículo 39. Contra el fallo definitivo de la Audiencia no se dará recurso alguno.

Artículo 40. Todos los términos fijados en los artículos que preceden son improrrogables y en ellos no se contarán los días en que no puedan tener lugar actuaciones judicia-

les; pero sí los de las vacaciones de los Tribunales que no obstarán al curso y fallo de estos expedientes.

Artículo 41. En ellos podrán las partes ser representadas por Procurador; pero en este caso, si el Procurador representante no fuere elector en el distrito o sección, deberán ser designadas nominalmente en el poder las personas cuya inclusión o exclusión haya de solicitarse y no podrá hacerse la demanda extensiva a otros.

Artículo 42. Todas las actuaciones de estos expedientes judiciales se harán en papel común, sin que se devenguen derechos de ninguna especie.

Las Autoridades judiciales o administrativas y los Curas párrocos expedirán gratis cualquier clase de documentos que necesite el elector o vecino para acreditar su capacidad, o la capacidad o incapacidad de otros electores. Estos documentos se pedirán por medio de solicitud expresiva del objeto a que se les destinen, y no serán admitidos en ningún Tribunal ni oficina sino para acreditar el derecho o incapacidad de los electores.

Los que con otro fin se valiesen de ellos, serán considerados como defraudadores de la renta del papel sellado.

Artículo 43. Todas las cuestiones de procedimiento que no tengan resolución expresa en los artículos que preceden, se decidirán por las reglas generales de sustanciación de la Ley de enjuiciamiento civil.

Artículo 44. Ejecutoriada que sea la sentencia definitiva, se dará testimonio literal de ella a las personas interesadas, que lo pidan, y se le pasará desde luego oficialmente otro testimonio igual, para que conste y tenga efectos el fallo en el Registro del censo electoral, al Gobernador de la Provincia quien acusará el recibo inmediatamente y dispondrá, bajo su más estrecha responsabilidad, la inscripción correspondiente en las listas respectivas.

Capítulo III

Formación y rectificación anual del censo electoral

Artículo 45. En la Secretaría municipal del pueblo cabeza de cada distrito electoral, se abrirá un libro titulado "Registro del censo electoral" dividido en tantas partes fuesen las secciones en que esté dividido el Distrito con arreglo a las disposiciones de este decreto.

Cada una de estas partes del Registro tendrá el rótulo siguiente: (Registro del Censo electoral del Distrito de...)

(el nombre), Sección 1@... (el nombre); y así sucesivamente, con la numeración correlativa de todas las secciones.

Artículo 46. En cada una de estas secciones se anotarán, por orden alfabético de los apellidos, los nombres de todos los electores correspondientes a la misma, en dos listas separadas que comprenderán:

La primera, los electores que lo sean como contribuyentes con arreglo al artículo 13.

La segunda, los electores que lo sean en concepto de capacidad, con arreglo al artículo 17.

Cada una de las listas estará dividida en cuatro columnas verticales, para anotar:

En la primera, el nombre y apellidos paterno y materno del elector.

En la segunda, el concepto de su derecho electoral.

En la tercera, se determinará el punto donde sea contribuyente o adquiriera el título profesional o académico.

En la cuarta, su domicilio dentro de la sección.

Artículo 47. Estas listas constituyen el censo electoral del distrito; y los libros del Registro, como protocolo o matrícula del mismo, estarán bajo la inmediata inspección de una Comisión permanente, que se denominará Comisión Inspectora del censo electoral, compuesta del Alcalde, Presidente, y de cuatro electores que no sean concejales nombrados por el Ayuntamiento cabeza de distrito, los cuales se renovarán por mitad cada dos años, y serán personalmente responsables con el Secretario municipal, que lo será también de la Comisión, de todas las faltas que se cometieren en la formalidad y exactitud de los asientos. Cada concejal solamente podrá nombrar la mitad de los que hayan de ser elegidos.

No podrán formar parte de esta Comisión los electores que expidan o visen documentos encaminados a probar el derecho electoral o que sirvan para justificar la inclusión o exclusión de las listas electorales.

Artículo 48. Todo elector que varíe de domicilio dentro de cada distrito y de cada sección electorales, lo participará por escrito a la Comisión Inspectora del censo, dejando nota de su nueva morada en la Secretaría, para los efectos consiguientes en la rectificación inmediata de las listas.

Artículo 49. Las listas del censo electoral así formadas, tendrán por cabeza la indicación del año en que han de regir, y al pie la certificación que firmarán todos los individuos de la Comisión inspectora, con su Secretario, el día 1^o de cada año, redactadas en los términos siguientes:

"Las listas que preceden, sin omisión ni adicción alguna, comprenden los nombres de todos los electores para diputados a Cortes de este distrito, según los datos auténticos remitidos a esta Comisión hasta esta fecha, y de su exactitud certifican los infrascritos.

(Fecha y Firma)"

Artículo 50. En cuadernos separados de los libros de Registro que se denominarán de "Alta" y "Baja" del censo electoral, correspondiendo uno a cada sección, se anotarán sucesivamente, con el orden y clasificación conveniente, los nombres:

1.- De los electores inscritos en las listas del censo que hubiesen fallecido, con referencia a los estados de Registro civil

2.- De los que hubiesen perdido legalmente su domicilio dentro del territorio del distrito, con referencia a los padrones de la respectiva municipalidad y a las notas de aviso de los interesados, si las hubiere.

3.- De los que hubieren sido incapacitados o mandados excluir de las listas, con referencia a las ejecutorias procedentes de los Juzgados competentes.

4.- De los nuevos electores mandados inscribir por sentencia judicial, también con igual referencia.

Artículo 51. El día 1^o de Diciembre de cada año se publicarán por edictos en todos los Ayuntamientos de cada sección electoral, y se insertarán en el "Boletín Oficial" de la provincia las anotaciones de alta y baja del censo que se hubiesen hecho durante el año, con arreglo al artículo 50 para todo el Distrito.

Artículo 52. Hasta el día 10 del mismo mes de Diciembre admitirá la Comisión Inspectoras las reclamaciones que se hicieren por cualquier elector inscrito en las listas vigentes, o por los interesados en las anotaciones de alta y baja publicadas contra la exactitud de las mismas y las resolverá de plano con vista de sus antecedentes en la Secretaría, notificando en el acto sus resoluciones a los reclamantes.

Artículo 53. Estos podrán hasta el día 20 del propio mes acudir en queja de las decisiones de la Comisión al Juzgado competente, quien resolverá en definitiva, bajo su responsabilidad personal, sobre la reclamación, en vista del expediente que aquella le remitirá con el recurso y de sus antecedentes si los hubiese en el mismo Juzgado, y su resolución se hará saber también desde luego a la parte reclamante y se comunicará, con devolución del expediente, a la Comisión inspectora para que se ajuste a ella.

Para conocer de estos recursos serán competentes en primer término los juzgados de donde procedan las ejecutorias a que se refieren las anotaciones publicadas; a falta de éste, el del pueblo cabeza del distrito electoral; donde hubiese más de un Juzgado, el decano.

Artículo 54. Con arreglo al resultado de las operaciones prevenidas por las disposiciones que preceden, serán rectificadas las listas de electores de cada distrito; y así rectificadas, se inscribirán en el "Registro del Censo Electoral" en la forma dispuesta por los artículos correspondientes.

Artículo 55. Dentro de los ocho primeros días del mes de enero de cada año, se publicarán impresas y se insertarán además por suplementos en el "Boletín Oficial" de la Provincia, las listas del censo electoral de cada Distrito, así ultimadas, y se comunicarán a las secciones de diferente demarcación municipal las copias respectivas rectificadas por el Secretario de la Comisión inspectora, con el V^o B^o del Presidente.

Artículo 56. Las listas electorales, así rectificadas y publicadas, serán definitivas y regirán hasta la nueva rectificación.

Artículo 57. Las listas vigentes servirán de base para los trabajos de las que han de formarse, tan luego como este decreto sea publicado.

Título IV

Procedimiento electoral

Capítulo 1^o

Constitución de los Colegios electorales

Artículo 58. Diez días por lo menos antes del señalado para la elección, el Ayuntamiento del pueblo cabeza de cada sección, anunciará por medio de edictos, que se publicarán en todos los pueblos de la misma sección, la designación del edificio y local en que se ha de constituir el colegio electoral, convocando a los electores para que concurran allí a votar. En los distritos que no comprendan más que un solo Ayuntamiento, éste hará la designación y convocatoria indicada para todas y cada una de las secciones en un solo edicto con igual publicidad. Con la misma anotación se expondrán al público las listas vigentes de los electores de la Sección.

Artículo 59. Las votaciones se harán en cada sección bajo la presidencia del Alcalde del Ayuntamiento cabeza de la misma, asociado al número de Interventores que corresponda, los cuales serán nombrados directamente por los electores, y constituirán con el Presidente la Mesa electoral.

Cuando un distrito municipal comprenda más de una Sección electoral, los Tenientes de Alcalde y Concejales, por su orden, presidirán las Mesas que no pueda presidir el Alcalde.

Artículo 60. La designación de los Interventores para cada Mesa electoral se hará por escrito en cédulas que firmarán los electores de las respectivas Secciones que quieran suscribirlas, o por medio de actas notariales extendidas en papeles de oficio y autorizadas por Notario del Colegio del mismo territorio.

En cada una de esas cédulas y actas no se podrán proponer para interventores más que a dos personas; y si resultaren más de dos los designados, solo se tendrán para propuestos a los dos primeros. También se podrá designar en cada cédula o acta a dos suplentes para reemplazar a los interventores en ella propuestos que por cualquier motivo no pudieran ejercer el cargo.

Tanto los Interventores como los suplentes han de ser precisamente electores de la misma Sección y saber leer y escribir.

Las cédulas se redactarán con arreglo al siguiente modelo:

"Sección de

Los que suscriben proponen para Interventores en la Mesa electoral de esta Sección a los electores de la misma siguientes:

Don

Don

También proponen para suplentes a

Don

Don

(Fecha y Firma)"

A continuación podrán las personas designadas para las personas designadas para Interventores y suplentes declarar bajo su firma que aceptan los cargos.

Las actas notariales se extenderán en la forma ordinaria con arreglo a las leyes y con la misma especificación que queda prevenida para las cédulas.

Artículo 61. Dos de los electores que suscriban la propuesta rubricarán en la margen de todas las hojas de las cédulas, y firmarán sobre el pliego cerrado en que han de presentarlas, esta manifestación

"Sección de

Respondemos de la autenticidad de las firmas de la propuesta contenida en este pliego. (Fecha).

Sin esta garantía no será admisible el pliego.

Las actas notariales serán también presentadas en pliego cerrado, en cuyo sobre, lo mismo que en el texto del acta, el Notario que las autorice dará fe de conocimiento de todos y cada uno de los electores que en ellas figuren como concurrentes a la propuesta, aunque no la suscriban por no saber escribir y será personalmente responsable de la verdad de la misma propuesta,

Artículo 62. El domingo inmediato anterior al día señalado para la elección, a las once en punto de la mañana, la Comisión inspectora del censo electoral se constituirá en sesión pública con arreglo a lo dispuesto en el artículo 96 de este decreto, bajo la presidencia, sin voto, del Juez a quien corresponda, en el local destinado para la instalación del colegio de las cabezas de distrito; y en el acto, y no antes, serán recibidos y depositados sobre la mesa con el debido orden, por secciones, los pliegos de las propuestas para interventores que, según lo dispuesto en el artículo anterior, fueren entregados por los electores.

Artículo 63. A las 12 en punto del mismo día anunciará el Presidente que se va a proceder a la lectura de los pliegos presentados y tendrá ésta efecto empezando por los de la cabeza de Distrito y siguiendo por los de las secciones, según el orden de la numeración correlativa de éstas. El Presidente abrirá y leerá los pliegos y el Secretario escribirá en el acta lo que de ellos resultare.

Artículo 64. Abiertos todos los pliegos de una sección, los nombres de las firmas que suscriban las cédulas y los de los electores que figuren como concurrentes a las actas notariales, serán confrontados con la lista electoral correspondiente y no se tomará en cuenta para ningún efecto los de las cédulas que resultaren inscritas en la misma lista, ni tampoco las de los electores que aparezcan concurriendo simultáneamente en diferentes propuestas, en cuyo caso se pasarán después éstas al Tribunal competente para que proceda en justicia. Hecha esta confrontación se consignarán en el acta el número de pliegos abiertos y admitidos, los nombres de los interventores suplentes designados en cada cédula o acta notarial y el número de electores concurrentes a cada propuesta.

Artículo 65. Si el número total de los interventores propuestos en los pliegos presentados y admitidos para una sección fuere de cuatro o de seis, con la actitud requerida, se tendrán desde luego por nombrados y serán proclamados en el acto todos los designados. Si dicho número fuere mayor, solo se tendrán por nombrados y serán igualmente proclamados los seis que resultaren con más votos en sus propuestas y en caso de empate decidirá la suerte.

Artículo 66. Si en el lugar y hora señalados en el artículo 62 no se presentare pliego alguno de propuesta para una Sección, o si el número total de los designados para interventores no llegare a cuatro, la Comisión inspectora asociada a los ya designados si quisiere completará dicho número con los suplentes si los suplentes si los hubiere o nombrando en otro caso libremente a cualesquiera electores de la misma sección, que reúnan las condiciones de aptitud requeridas.

Artículo 67. Terminadas estas operaciones, los interventores proclamados cuya aceptación no resultare ya en las mismas propuestas, serán llamados para aceptar en el acto el cargo, obligándose a cumplirlo bien y fielmente, y lo mismo harán los suplentes para en su caso y lugar.

Si no estuvieren presentes, se les comunicará en el mismo día su nombramiento, requiriéndoles contestación, dentro de otros dos días, de aceptar o no el cargo.

Si alguno de los interventores así nombrados no aceptare o resultare destituido de las condiciones de aptitud requeridas, será reemplazado por el suplente que corresponda y a falta de suplentes, por cualquiera de los electores que al efecto fuere designado por el otro interventor propuesto en la propia cédula o acta del renunciante o excluido; y si los renunciantes o excluidos fuesen los dos nombrados en un mismo pliego y no hubiese en él suplentes, la mayoría de los individuos de la Comisión inspectora, asociada de los otros interventores, ya proclamados para la propia Sección si los hubiere nombrará libremente otros dos electores a quienes se comunicará su nombramiento en la forma ya prevenida.

Artículo 68. El cargo de interventor de las mesas electorales, después de aceptado, es obligatorio. Si antes del día de la elección se imposibilitare por cualquier accidente imprevisto alguno de los interventores para ejercer el cargo, será reemplazado en la forma dispuesta en el artículo anterior.

Artículo 69. Terminadas todas las operaciones prescritas en los artículos anteriores, se procederá sin levantar mano a redactar el acta que suscribirán todos los individuos de la Comisión inspectora con su Secretario y en ella se insertarán en su caso las protestas y reclamaciones que se hubiesen hecho por los electores concurrentes y las resoluciones

que sobre ellas deberá dictar de plano la misma Comisión. Los autores de las reclamaciones firmarán también, si quisieren, el acta.

El Presidente declarará acto continuo constituidos los Colegios electorales de todas las Secciones de Distrito y citará a los interventores nombrados para la hora en que habrán de empezar las votaciones para la elección, levantándose enseguida la sesión, sin permitir que en ella se trate asunto alguno fuera de los determinados en estas disposiciones.

Artículo 70. El acta original de esta sesión, con los pliegos y documentos a ella anejos, se archivarán en la Secretaría de la Comisión inspectora del censo electoral del Distrito y una copia literal certificada de la misma acta será remitida inmediatamente por el Presidente a la Secretaría del Congreso de los Diputados.

Artículo 71. Al mismo tiempo serán también remitidas a los Ayuntamientos de las cabezas de todas las Secciones del Distrito, certificaciones autorizadas por el Sr. Secretario con el V B del Presidente de la Comisión inspectora, en las cuales, con referencia a la misma acta, se designarán los interventores nombrados para formar las respectivas Mesas electorales.

Capítulo II

De las Votaciones

Artículo 72. En toda convocatoria para la elección de Diputados a Cortes, sea ésta general o parcial, se señalará siempre un domingo para las votaciones.

Artículo 73. La votación se hará simultáneamente en todas las Secciones del Distrito en el domingo designado, comenzando a las ocho en punto de la mañana y continuando sin interrupción hasta las cuatro de la tarde, en que se declarará definitivamente cerrada y comenzará el recuento de los votos emitidos.

Si por alteración material y grave del orden público no pudiese tener lugar la votación en alguna o algunas de las Secciones el día señalado, la suspenderá, anunciándola tan luego como se haya restablecido el orden, para el siguiente inmediato, o sea, veinte y cuatro horas antes de la en que haya de celebrarse la elección.

De esta suspensión y de sus causas se dará en el mismo día conocimiento a la Comisión inspectora del Censo.

Artículo 74. Al efecto se instalará con la anticipa-

ción conveniente la Mesa electoral de cada Sección en el local correspondiente.

Si a la hora prefijada no se hubiese presentado alguno de los interventores o su suplente, no será ésta razón para suspender la votación, la cual comenzará y continuará con los individuos de la Mesa presentes, sin perjuicio de la responsabilidad que incumba a los ausentes que no justificasen causa legítima de su ausencia antes de levantarse la sesión.

En el caso de que faltaren todos o la mayor parte de los interventores, el Presidente de la Mesa completará su número nombrado libremente los que fueren necesarios entre los electores que se hallaren presentes.

Artículo 75. La votación será secreta y se hará en la forma siguiente:

El elector se acercará a la mesa y dando su nombre entregará por su propia mano al Presidente una papeleta de papel blanco doblada, en la cual estará escrito o impreso el nombre del candidato a quien dé su voto para Diputado. El Presidente depositará la papeleta en la urna destinada al efecto, después de cerciorarse en caso de duda, por el examen que harán los interventores de las listas del censo electoral, de que en ellas está inscrito el nombre del votante y dirá en alta voz: "Fulano (el nombre del elector) vota". En todo caso el Presidente tendrá constantemente a la vista del público la papeleta, desde el momento de la entrega hasta que la deposite en la urna. Dos de los interventores anotarán en lista duplicada los nombres de los electores, numerados por el orden con que vayan dando los votos.

Artículo 76. Cuando sobre la identidad personal del individuo que se presentare a cotar como elector ocurriere duda por reclamación que en el acto hiciere públicamente otro elector negándola, se suspenderá la admisión de su voto hasta que al final de la votación decida la Mesa lo que corresponda sobre la reclamación propuesta.

Artículo 77. La Mesa, por mayoría de sus individuos, decidirá sobre la admisión de los votos reclamados que hubiesen quedado en suspenso, según lo dispuesto en el artículo anterior.

En estas reclamaciones será condición necesaria para que pueda ser rechazado el voto de la persona reclamada, que se presente en el acto prueba suficiente de la reclamación. En todo caso se mandará pasar al Tribunal competente el tanto de culpa que resulte para exigir la responsabilidad criminal en que pueda incurrir el que aparezca usurpador del estado de otro, así como el reclamante que hubiese hecho esta imputación.

falsamente.

Artículo 78. A las cuatro en punto de la tarde anunciará el Presidente en alta voz que se va a cerrar la votación y ya no se permitirá a nadie entrar en el local.

El Presidente preguntará si alguno de los electores presentes ha dejado de votar. Se repetirá esta pregunta otra vez con intervalo de un minuto, admitiéndose los votos que se diesen en el acto. Una vez resueltas las reclamaciones, si las hubiere, a que se refieren los dos artículos precedentes, y admitidos los votos que la mayoría de la Mesa decida deben ser admitidos, votarán enseguida los individuos de ésta que deben ser los últimos y se rubricarán por los interventores las listas duplicadas de los votantes a continuación del último votante en ellas suscrito.

Artículo 79. En seguida declarará el Presidente cerrada la votación, y se procederá al escrutinio leyendo el mismo Presidente en alta voz las papeletas, que extraerá de la urna una por una y confrontando los interventores el número de las papeletas así leídas con el de los electores votantes anotadas en las listas numeradas.

Artículo 80. En los distritos que no deban elegir más que un Diputado, cada elector no podrá escribir en su papeleta más que el nombre de un solo candidato.

En los distritos a que corresponda elegir tres diputados, cada elector no podrá dar su voto más que a dos candidatos, pero en una sola papeleta.

En los distritos que deban elegir cuatro o cinco Diputados, cada elector podrá dar su voto en la misma forma a tres candidatos a lo más.

De igual manera, solo podrá cada elector votar en su papeleta cuatro candidatos, si fueren seis los Diputados correspondientes al distrito, o cinco candidatos si fueren siete los Diputados, y a seis candidatos si fueren ocho los Diputados.

Artículo 81. Serán nulas y no se computarán para efecto alguno, las papeletas en blanco, las que no fueren inteligibles y las que no contengan nombres propios de personas.

Cuando alguna papeleta contenga varios nombres en mayor número que el de los candidatos que deba votar cada elector, solo valdrá el voto para los que completen este número por el orden en que estén escritos en la papeleta, teniéndose por no escritos los demás.

Si no fuese posible determinar aquel orden, será nulo el voto en totalidad.

Artículo 82. Cuando sobre el contenido de una papeleta leída por el Presidente manifestase duda algún elector,

tendrá éste derecho, si lo reclamare, a que se le permita examinarla en el acto por sí mismo.

Artículo 83. Terminado el escrutinio, el presidente anunciará en alta voz su resultado, especificando, según las notas que habrán tomado los interventores, el número de papeletas leídas, el de los electores que hubieren votado, y el de los votos que hubieren obtenido cada candidato.

Artículo 84. En seguida se quemarán a presencia de los concurrentes las papeletas extraídas de la urna; pero no serán quemadas las que se especifican en el artículo 83, ni las que hubiesen sido objeto de reclamación por parte de algún elector, las cuales, unas y otras, se unirán originales al acta, rubricándolas al dorso los interventores, y se archivarán con ellas para tenerlas a disposición del Congreso en su día.

Artículo 85. Concluídas todas las operaciones anteriores, el presidente y los interventores de la Mesa firmarán el acta de la sesión, en la cual se expresará detalladamente el número de electores que haya en la sección según las listas del censo electoral, el de los electores que hubiesen votado y el de los votos que hubiere obtenido cada candidato, y se consignarán sumariamente las reclamaciones y protestas que se hubiesen hecho en su caso por los electores sobre la votación o el escrutinio, y las resoluciones motivadas que sobre ellas hubiese adoptado la mayoría de la Mesa, con los votos particulares, si los hubiere, de la minoría de sus individuos.

Esta acta, con todos los documentos originales a que en ella se haga referencia, y las papeletas de votación reservadas según el artículo anterior, será archivada en la Secretaría de la Comisión inspectora del censo electoral del distrito a cuyo Presidente será remitida al efecto antes de las diez de la mañana del día siguiente inmediato al de la votación.

Artículo 86. Una copia literal del acta, autorizada por todos los individuos de la Mesa, será entregada el mismo día de la votación en la administración o estafeta de correos más cercana, en pliego cerrado y sellado, en cuya cubierta certificarán de su contenido dos de los interventores de la Mesa, con el V B de su presidente.

El administrador del correo dará recibo, con expresión del día y hora en que le fue entregado el pliego y lo remitirá inmediatamente a la Secretaría del Congreso.

Artículo 87. Antes de disolverse la Mesa electoral, designará uno de sus interventores para concurrir en representación de la sección a la Junta de escrutinio general.

Esta designación se hará por la mayoría de los individuos de la Mesa, y al designado se le dará la credencial correspondiente de su nombramiento, autorizada por el presidente y dos de los interventores y otra copia literal del acta de la

sesión de votación, igual a la remitida al Congreso, a que se refiere el artículo anterior.

Artículo 88. Antes de las diez de la mañana del día inmediato siguiente al de la votación se expondrán al público, fuera de las puertas del Colegio electoral, copias de las listas numeradas de los electores que hubieren votado y del resumen de los votos obtenidos por los candidatos. Estas copias serán certificadas por el presidente y los interventores de la Mesa, y un duplicado de las mismas será remitido en el propio día al Gobernador de la Provincia, quien mandará publicarla inmediatamente por suplemento en el "Boletín Oficial".

Artículo 89. Si alguno de los candidatos que hubiesen obtenido votos o cualquier elector en su nombre, requiere certificación de listas y resúmenes a que se refiere el artículo anterior, se le dará sin demora por la Mesa.

Artículo 90. El presidente de la Mesa tendrá dentro del colegio electoral autoridad exclusiva para conservar el orden, asegurar la libertad de los electores y mantener la observancia de este decreto.

Las autoridades locales podrán, sin embargo, asistir también, y prestarán dentro y fuera del colegio al presidente los auxilios que éste les pida, y no otros.

Artículo 91. Solo tendrán entrada en los colegios electorales los electores del distrito, además de las autoridades locales y civiles, y los auxiliares que el presidente requiera. El presidente de la Mesa cuidará de que la entrada del colegio se conserve siempre libre y expedita a los electores.

Artículo 92. Nadie podrá entrar al colegio con armas ni palos ni bastón ni paraguas, a excepción de los electores que por impedimento notorio tuvieren necesidad absoluta de apoyo para acercarse a la mesa; pero éstos no podrán permanecer dentro del local más que el tiempo puramente necesario para dar su voto. El elector que infringiere este precepto y advertido no se sometiere a las órdenes del presidente, será expulsado del local y perderá el derecho de votar en aquella elección, sin perjuicio de cualquiera otra responsabilidad que le incumba. Las autoridades podrán, sin embargo, usar dentro del colegio el bastón y demás insignias de su cargo.

En ningún caso la fuerza de cualquier instituto militar podrá estar a la puerta de cualquier colegio electoral, ni menos podrá penetrar en éste, sino en caso de perturbación del orden público y requerida por el presidente.

Capítulo III

De los escrutinios generales

Artículo 93. El domingo inmediato siguiente al de la votación, a las diez en punto de la mañana se instalará en sesión pública en el pueblo cabeza del distrito electoral la Junta de escrutinio general, para verificar el de los votos dados en todas sus Secciones. Si por cualquier causa imprevista de obstáculo insuperable no pudiera reunirse la Junta en el domingo designado, lo hará en el día más inmediato que sea posible, previo señalamiento que hará el presidente, notificándolo a los individuos de la Junta, anunciándolo con la publicidad conveniente.

Artículo 94. Será Presidente de la Junta de escrutinio general el Juez de primera Instancia de la Capital del Distrito electoral, y donde hubiere más de uno, el decano. En los Distritos que comprenden dentro de su demarcación más de una cabeza de partido judicial, presidirá la Junta de escrutinio, a falta del Juez, la de capital el más antiguo de los otros jueces del mismo Distrito.

En ningún caso podrá ser reemplazado el Juez de primera Instancia por un Juez municipal, aunque éste ejerciere accidentalmente su jurisdicción.

Si en algún Distrito electoral no hubiere pueblo que sea cabeza de partido judicial, estuviera vacante el cargo de Juez de primera Instancia o el que lo desempeña enfermo o ausente, el Presidente de la Audiencia territorial designará un Magistrado de la misma, o de la Audiencia de lo criminal que existiese en su territorio, para que presida la Junta general de escrutinio.

Artículo 95. Compondrán la Junta de escrutinio general como Secretarios escrutadores, con voz y voto en sus deliberaciones:

Primero. Todos los individuos de la Comisión inspectora del censo electoral del Distrito.

Segundo. Uno de los interventores por cada una de las mesas electorales de todas las Secciones, según la designación hecha por las mismas mesas, conforme a lo dispuesto en el artículo 89.

Artículo 96. Cualquiera que sea el número de los escrutadores presentes, excediendo de cinco a la hora en que se deba instalar la Junta, declarará ésta constituida el Presidente, que en acto designará cuatro de aquellos escrutadores para que funcionen como secretarios de la misma.

Artículo 97. Uno de éstos, de orden del Presidente dará ante todo lectura de las disposiciones de esta ley referentes al acto, y enseguida comenzarán las operaciones del escrutinio, computándose los votos dados en todas las secciones sucesivamente por el orden de su numeración.

Para esto se pondrán sobre la mesa del Presidente de la Comisión inspectora del censo electoral las actas originales que habrá recibido de las secciones conforme a lo dispuesto en el artículo 87, y el Presidente de la Junta dispondrá que se dé cuenta por uno de los Secretarios de los resúmenes de cada votación, tomando los otros secretarios las anotaciones convenientes para el cómputo total y adjudicación consiguiente de los votos escrutados.

Artículo 98. A medida que se vayan examinando las actas de las votaciones de las secciones, se podrán hacer y se insertarán en el acta de escrutinio, las reclamaciones y protestas a que hubiere lugar sobre la legalidad de dichas votaciones. Solamente los individuos de la Junta de escrutinio podrán hacer estas reclamaciones y protestas.

Artículo 99. La Junta de escrutinio no podrá anular ningún acta ni voto: sus atribuciones se limitarán a verificar sin discusión alguna el recuento de los votos emitidos en las secciones del distrito, ateniéndose estrictamente a los que resulten admitidos y computados por las resoluciones de las mesas electorales, según las actas de las respectivas votaciones; y si sobre este recuento se provocase alguna duda o cuestión, se estará a lo que decida la mayoría de los individuos de la misma Junta.

Artículo 100. Terminado el recuento de votos de todas las Secciones, se leerá en alta voz, por uno de los Secretarios de la Junta el resumen general de sus resultados y el Presidente proclamará en el acto Diputados electos a los candidatos que aparezcan con mayor número de votos de los escrutados en todo el distrito, hasta completar el número de los que al mismo Distrito corresponda elegir.

Artículo 101. En caso de empate, el Presidente proclamará Diputados presuntos a los candidatos empatados, reservándose el Congreso la resolución definitiva que según las circunstancias del caso correspondan.

Artículo 102. De todo lo que ocurriese en la Junta de escrutinio se extenderá por duplicado acta detallada que suscribirán todos los individuos de la misma Junta que hubieren asistido a la sesión.

Uno de los ejemplares de esta acta formará, con los de las votaciones de las Secciones y los documentos originales anejos a una y otros, el expediente de la elección del distrito, que se conservará en la Secretaría de la Comisión inspectora del censo electoral del mismo a disposición del Congreso.

El otro ejemplar del acta será elevado inmediatamente a la Secretaría del Congreso.

Artículo 103. Del acta de escrutinio se expedirán

certificaciones parciales en número igual al de Diputados electos o presuntos proclamados.

Estas certificaciones se limitarán a consignar en relación sucinta el resultado de la elección, con el resumen del escrutinio general y la proclamación del Diputado electo o presunto, y con indicación precisa de las protestas o reclamaciones y sus resoluciones, si las hubiere, o de no haber habido ninguna, en su caso.

Estas certificaciones serán directamente remitidas por el Presidente de la Junta a los candidatos proclamados a quienes servirán de credenciales de su elección para presentarse en el Congreso.

Artículo 104. Terminadas todas las operaciones de la Junta de escrutinio general, el Presidente la declarará disuelta y concluida la elección y mandará devolver a donde corresponda todos los documentos a ella traídos.

La Junta de escrutinio no podrá disolverse sin haber hecho la proclamación.

Artículo 105. Las disposiciones de los artículos 69 y siguientes son aplicables a las sesiones de las Juntas de escrutinio general.

Capítulo IV

De las elecciones parciales

Artículo 106. Solamente por acuerdo del Congreso se podrá proceder a elección parcial de Diputado en uno o más distritos o circunscripciones, por haber quedado vacante su representación en las Cortes.

Artículo 107. Para las circunscripciones que con arreglo a este decreto deben elegir tres o más Diputados, solamente se entenderá que hay vacante en su representación en las Cortes cuando por cualquiera causa faltaren dos por lo menos de sus Diputados.

En estos casos si fuesen dos los Diputados que haya que elegir, no podrá cada elector votar más que a un solo candidato; y si fuesen más, se observará lo dispuesto en el artículo 82.

Artículo 108. El Real Decreto convocando a los Colegios electorales de uno o más distritos para elección parcial de Diputados a Cortes, se publicará en la "Gaceta de Madrid", dentro de ocho días, contados desde la fecha de la comunicación del Congreso.

En el mismo Real Decreto se señalará el día en que

ha de hacerse la elección, y no se podrá fijar este día antes de los veinte ni después de los treinta, contados desde la fecha de la convocatoria.

Simultáneamente se publicará el Real Decreto en las "Gacetas" de la Habana y de Puerto Rico, según los casos, comunicándose al efecto la oportuna orden telegráfica a los respectivos Gobernadores Generales de una y otra Antilla.

Artículo 109. La elección parcial se hará en el día señalado, por los trámites y en forma prescritos por este decreto para las elecciones generales.

TITULO V

PRESENTACION DE LAS ACTAS Y RECLAMACIONES ELECTORALES ANTE EL CONGRESO

Artículo 110. El Congreso, en uso de la prerrogativa que le compete por el artículo 34 de la Constitución, examinará y juzgará de la legalidad de las elecciones por los trámites que determine su Reglamento, y admitirá como Diputados a los que resulten legalmente elegidos y proclamados en los distritos y con la capacidad necesaria.

Artículo 111. En los casos de elección empatada, si uno solo de los candidatos empatados tuviese aptitud legal para ser Diputado, será proclamado y admitido desde luego, una vez aprobada la elección.

También será admitido desde luego y proclamado por el Congreso el que resulte legalmente elegido, si hubiese en el acta protestas que aparezcan justificadas contra la votación del otro u otros Candidatos empatados. A falta de estas diferencias, en igualdad de todas las circunstancias, decidirá la suerte ante el Congreso quién ha de ser proclamado Diputado entre los candidatos empatados; y si el empate fuese de distrito, aunque solo corresponda elegir un Diputado, se declarará nula la elección y vacante el distrito para los efectos consiguientes.

Artículo 112. Los Diputados electos que hubiesen sido proclamados en las Juntas de escrutinio de los distritos, deberán presentar la credencial de su nombramiento en la Secretaría del Congreso antes de que termine el primer mes de sesiones de la segunda Legislatura de las Cortes para que fuesen elegidos, si la elección fue general. Para los elegidos en elección parcial, este plazo será el de la duración de la Legislatura inmediata posterior a su elección.

Se entenderá que renuncia el cargo de Diputado electo o presunto el que no presentase su credencial en el Congreso dentro de los términos prefijados y se declarará en su consecuencia la vacante después de haber resuelto sobre la legalidad de la elección, lo que proceda.

Artículo 113. Si un mismo individuo resultase elegido por dos o más distritos a la vez, optará por uno de ellos antes el Congreso, dentro de los ocho días siguientes a la aprobación de la última de sus actas, si entonces estuviese ya admitido como Diputado, o de treinta días en otro caso.

A falta de opción expresa en uno u otro término decidirá la suerte que el Congreso el Distrito que le corresponda y se declarará la vacante con respecto a los demás.

Artículo 114. Los electores y los Candidatos que hubiesen figurado en una elección, podrán acudir ante el Congreso en cualquier tiempo, antes de la aprobación del acta respectiva, con las reclamaciones que les convengan, contra la validez o el resultado de la misma elección o contra la capacidad legal del Diputado electo antes de que éste haya sido admitido.

Artículo 115. Cuando se reclamare ante el Congreso contra la validez de una elección o la aptitud legal del Diputado electo, antes de que éste hubiese presentado su credencial señalará el Congreso un término para su presentación, y pasado el plazo sin efecto, se acordará lo que corresponda, según las pruebas del acta y de las reclamaciones. El término que en estos casos se señalare para la presentación de la credencial del Diputado electo, empezará a correr desde el día de la sesión pública del Congreso en que se hubiese acordado, sin necesidad de notificación alguna personal.

Artículo 116. Cuando para poder apreciar y juzgar de la legalidad de una elección reclamada ante el Congreso, se estimare necesario practicar algunas investigaciones en la localidad de la misma sección, el Presidente de la Cámara dará y comunicará directamente las órdenes a una de las autoridades judiciales del territorio a quien tenga por conveniente dar comisión al efecto, y dicha autoridad comisionada se entenderá con el mismo Presidente en el desempeño de su cargo, sin necesidad de intervención del Gobierno.

Artículo 117. Después de aprobada por el Congreso una elección y de ser admitido el Diputado electo por ella, no se podrá admitir reclamación alguna, ni volver a tratar sobre la validez de la misma, ni tampoco sobre la actitud legal del Diputado, a no ser por causa de incapacidad posterior a su admisión.

TITULO VI

DE LA SANCION PENAL

Capítulo I

De los delitos

Artículo 118. La falsedad cometida en documentos referentes a las disposiciones de este decreto, de cualquiera de los modos señalados en el artículo 310 del Código penal vigente en Cuba y Puerto Rico, constituye delito de falsedad en materia electoral, que será castigado con las penas establecidas en dicho artículo o en el siguiente, según el carácter de las personas responsables.

Igual delito constituirán, y por las mismas serán castigadas, la ficción total o parcial de tales documentos y la omisión intencionada, en los verdaderos, de nombre o circunstancia que debieran expresar.

Artículo 119. Los Tribunales, sin embargo, rebajarán en uno o dos grados la pena, imponiéndola en el que estimen conveniente, cuando la falsedad no tenga otra trascendencia que la meramente electoral y no hubiese producido grave escándalo.

Artículo 120. Son documentos oficiales, para los efectos de esta ley, el censo y las copias autorizadas, las actas, listas, certificaciones y cuantas emanen de personas a quien la ley encargue su expedición, ya tengan por objeto facilitar o acreditar el ejercicio del derecho electoral o su resultado o garantizar la regularidad del proyecto.

Artículo 121. Serán castigados con la pena de arresto mayor y multa de 500 a 5,000 pesetas cuando las disposiciones del Código penal no señalen otra mayor, los funcionarios públicos que, por dejar de cumplir íntegra y estrictamente los deberes impuestos por este decreto o por las disposiciones que se dicten para su ejecución, contribuyan a alguno de los actos u omisiones siguientes:

1.- A que las listas de electores, ya sean provisionales o definitivas no se formen con exactitud o no estén expuestas al público durante el tiempo o lugar correspondientes.

2.- A cualquier alteración de los días, horas o lugar en que deba celebrarse cualquier acto o a que su modo de designación pueda inducir a error.

3.- A manejos fraudulentos en las operaciones relacionadas con las operaciones del censo, constitución de las Juntas y Colegios electorales, votación, acuerdos o escrutinios y propuestas de candidatos.

4.- A que no se extiendan con la exactitud y expresión debidas o no se firmen oportunamente y por todos los que deban hacerlo, o a que no tengan el curso debido las actas o documentos electorales.

5.- A cambiar o alterar la papeleta de votación que el elector entregue al ejercitar su derecho, o a ocultarla de la vista del público antes de depositarse en la urna.

6.- A que se impida o dificulte a los electores, candidatos o Notarios, que examinen por sí la urna antes de comenzar la votación, y al hacerse el escrutinio, las papeletas que de ella se extraigan.

7.- A la anotación indebida o inexacta, de manera que oscurezca la verdad de los nombres de los votantes en cualquier acto.

8.- Al infiel recuento de votos o lectura de papeletas para favorecer un acuerdo o a un candidato o para perjudicarlo.

9.- A descubrir el secreto del voto o de la elección con el fin de influir en su resultado.

10.- A que se haga proclamación indebida de personas a quien no corresponda.

11.- A que se falte a la verdad en manifestación que deba hacerse en acta electoral o a que por cualquier acto u omisión que tienda a evitar o dificultar el oportuno conocimiento de la verdad electoral.

12.- A suspender sin causa grave y suficiente cualquier acto electoral.

Artículo 122. Los particulares que contribuyan directa a la comisión de alguno de los delitos numerados en el artículo anterior serán castigados con la pena de arresto mayor en grado mínimo, cuando al hecho que ejecutaren o a la omisión en que incurrieren no corresponda pena mayor, con arreglo al Código penal.

Artículo 123. Todo acto, omisión o manifestación contrarios a este decreto o a disposiciones de carácter general dictadas para su ejecución, que no estando comprendidos en los artículos anteriores tenga por objeto cohibir o ejercer presión sobre los electores para que usen de su derecho o lo anaden contra el impulso libre de su voluntad, constituye de-

lito de coacción electoral; y, si no estuviese previsto en el Código penal con sanción más grave, será castigado con multa de 125 a 2,500 pesetas.

Artículo 124. Cometén además delito de coacción electoral, aunque no conste ni aparezca la intención de cohibir o ejercer presión sobre los electores, incurren en la sanción del artículo anterior:

1.- Las autoridades civiles, militares o eclesiásticas que prevengan o recomienden a los electores que den o nieguen su voto a persona determinada y los que, haciendo uso de medios o de agentes oficiales o autorizándose con timbres, sobres, sellos o membretes, que puedan tener este carácter, recomienden o reprueben candidaturas determinadas.

2.- Los funcionarios públicos que promuevan o cursen expedientes gubernativos de denuncias, multas, atrasos de cuentas, propios, montes, pósitos o cualquier otro ramo de la administración, desde la convocatoria hasta que se haya terminado la elección.

3.- Los funcionarios desde Ministro de la Corona inclusive, que hagan nombramientos, separaciones, traslaciones o suspensiones de empleados, agentes o dependientes de cualquier ramo de la Administración, ya corresponda al Estado, a la provincia o al municipio, en el período desde la convocatoria hasta después de terminado el escrutinio general, siempre que tales actos no estén fundados en causa legítima y afecten de alguna manera a la sección, colegio, distrito, partido judicial o provincia donde se verifique la elección.

La causa de la separación, traslación o suspensión se expresará precisamente en la orden y se publicará ésta en la "Gaceta de Madrid" si emanase de la Administración Central, y en el "Boletín Oficial" de la provincia respectiva, si fuese dictada por la provincial, municipal. Omitidas estas formalidades, se considerarán realizadas sin causa.

Se exceptúan de estos requisitos los Reales Decretos u Ordenes relativas a los Gobernadores civiles de las provincias y Jefes militares.

Artículo 125. Es también aplicable la pena señalada en el artículo 123, a no serlo otra mayor por virtud de disposición del Código penal:

1.- A los que por medio de persona reputada criminal o de promesa, dádiva o remuneración, soliciten, directa o indirectamente, en favor o en contra de algún candidato, el voto de algún elector, o lo exciten a la embriaguez para obtener o asegurar su adhesión.

2.- Al que vote dos o más veces en una elección, tome nombre ajeno para votar o lo haga estando incapacitado o te-

niendo suspendido el ejercicio de tal derecho.

3.- Al que a sabiendas consienta sin protesta, pudiendo hacerla, la emisión del voto en los casos del número anterior.

4.- Al que niegue o retarde la admisión, curso y resolución de las protestas y reclamaciones de los electores o no dé resguardo de ellas al que las hiciere.

5.- Al que omita los anuncios y pregones de notificación que ordene este decreto o no expida o no mande expedir tan pronto como éste dispone certificación solicitada de actas electorales.

6.- Al que sin causa legítima deje de concurrir a acto de obligatoria asistencia.

7.- Al que de cualquier otro modo no previsto en este decreto impida o dificulte que un elector ejercite sus derechos o cumpla sus deberes.

8.- Al que suscite maliciosamente o mantenga sin motivo racional dudas sobre la identidad de una persona o sus derechos.

Artículo 126. Los funcionarios públicos que hagan salir de su domicilio o residencia o permanecer fuera de ellos, aunque sea con motivo de servicio público, a un elector en el día de la elección o en el que quiera y pueda efectuar un acto electoral o los que le detuviesen privándole en casos iguales de su libertad, además de las penas señaladas en el artículo 221 en el párrafo 2 del 210 del Código penal, incurrirán en la de la inhabilitación absoluta perpetua.

Artículo 127. Los que impidan o dificulten la libre entrada y salida de los electores en el lugar en que deban ejercer su derecho, su aproximación a las mesas electorales, la permanencia de Notarios, candidatos o electores en los lugares en que se realicen los actos electorales, de manera que les sea fácil ejercitar su oficio o su derecho y completar la regularidad de tales actos, incurrirán siendo funcionarios públicos, en la pena de arresto mayor en su grado mínimo y multa de 500 a 2,500 pesetas; y siendo particulares, en la pena de arresto mayor en su grado mínimo, a no ser que al hecho estuvieran señaladas otras penas más graves en el Código penal, en cuyo caso se aplicarán éstas.

Artículo 128. Los funcionarios públicos que no entreguen o que demoren maliciosamente la entrega de documentos reclamados por comisionado especial, serán castigados como reos de delito de desobediencia grave a la autoridad sin perjuicio de la responsabilidad pecuniaria en que a la vez incurran.

Artículo 129. Los delitos previstos en el Código penal que tengan por objeto la materia electoral se castigarán, cuando no sean aplicables las disposiciones de los artículos precedentes, con las penas que el mismo Código señala y además con una multa de 125 a 1,250 pesetas, en caso de que no correspondiere a aquello pena de esta clase.

Artículo 130. Serán penas comunes para todos los delitos relacionados inmediatamente con las disposiciones de este decreto, ya se hallen en ella previstos o lo estén en otra, la de inhabilitación especial temporal o perpetua para derecho de sufragio, cuando el culpable sea o tenga carácter de funcionario público, y la suspensión del mismo derecho cuando sea particular.

En caso de reincidencia por delito de esta especie, la inhabilitación correspondiente a los funcionarios será absoluta perpetua y a los particulares se impondrá la inhabilitación absoluta temporal, además de las penas correspondientes.

Capítulo II

De las infracciones

Artículo 131. Toda falta de cumplimiento de las obligaciones y formalidades que este decreto o las disposiciones que se dicten para su ejecución impongan a cuantas personas intervengan con carácter oficial en las operaciones electorales será corregida con una multa de 25 a 1,000 pesetas en caso de no constituir delito.

Los funcionarios que por cualquier causa que no sea de absoluta imposibilidad justificada, dejen de cumplir cualquiera de los servicios que les impone este decreto, incurrirán en la expresada multa; que declarará la Comisión inspectora del censo, ante la que el servicio debió prestarse.

Artículo 132. Serán corregidos de igual modo, como ordena el artículo anterior:

- 1.- Los concurrentes a los actos electorales que de un modo que no constituya delito, perturben el orden o falten el respeto debido.
- 2.- Los que no siendo electores de la sección o candidatos o Notarios reconocidos con tal carácter, no abandonaren el local a la primera intimación del Presidente.
- 3.- Los que penetren en un colegio, sección o Junta electoral con armas, palos, bastones o paraguas, no siendo autoridad o no hallándose en el caso del artículo 92.

4.- Los Notarios que intentando ejercer su oficio no den conocimiento previo de su propósito al que presida el acto.

5.- Los funcionarios y los particulares por cuya causa no reciba quien corresponda en los plazos señalados y de la manera establecida en este decreto alguna comunicación, aviso, acta o documento que deba transmitirse, sin perjuicio de lo dispuesto en el número 4 del artículo 125.

6.- Los vocales de las Comisiones inspectoras del censo que sin justa causa no concurrieren a las sesiones para que fueren convocados sin haberse excusado oportunamente.

Serán justas causas para no concurrir a las sesiones:

1.- La ausencia del lugar en que éstas se celebren.

2.- Atenciones preferentes del servicio público.

3.- Motivos de salud personal, de familia u ocupaciones inaplazables.

Capítulo III

De las disposiciones generales

Artículo 133. Para los efectos de este decreto se reputarán funcionarios públicos los de nombramiento del Gobierno y los que, por razón de su cargo, desempeñen alguna función relacionada con las elecciones, así como los presidentes y los vocales de las comisiones inspectoras del censo electoral y los presidentes e interventores de las mesas y de las juntas de escrutinio.

Artículo 134. La jurisdicción ordinaria es la única competente para el conocimiento de los delitos electorales, cualquiera que sea el fuero personal de los responsables.

Para los efectos de las disposiciones de este Título, se entenderá que son delitos electorales los expresamente descritos en este decreto, y los que estándolo en el Código penal, afecten a la materia propiamente electoral.

Artículo 135. Cuando dentro del colegio o Junta electoral se cometiese algún delito, el presidente mandará detener y pondrá a los presuntos reos a la disposición de la autoridad judicial.

La acción penal que nace de los delitos especialmente electorales es pública y podrá ejercitarse hasta dos meses después del término del mandato conferido por la elección. Pa-

ra su ejercicio no se exigirá depósito ni fianza. Los jueces y Tribunales procederán según las reglas del enjuiciamiento criminal.

Artículo 136. No se necesitará autorización para procesar a ningún funcionario.

Las causas en que por sentencia firme se exima de responsabilidad por obediencia debida se remitirán sin dilación al Tribunal que sea competente para proceder contra el que dió la orden obedecida.

El plazo de la prescripción a que se refiere el artículo anterior estará en suspenso respecto a la autoridad o persona obedecida desde que se principió a obedecer hasta el día en que el tribunal competente haya recibido la sentencia firme en que se declare la exención de la responsabilidad de la persona que obedeció.

Cuando la autoridad que dió la orden fuese un Ministro de la Corona, o cuando de cualquier modo resultase indicada su responsabilidad, el tribunal que conozca el proceso remitirá éste sin dilación al Congreso de los Diputados, firme que sea la sentencia en que se declare la exención de responsabilidad sobre los antecedentes que del mismo resultaran que sean indicantes de la responsabilidad del Ministro.

Artículo 137. Las disposiciones generales y especiales del Código penal serán de todo caso aplicables a los delitos previstos en este decreto, en cuanto toca al concepto, grado de ejecución y categoría de los delitos, responsabilidad y al carácter, duración y efectos de las penas y a su aplicación y graduación.

Artículo 138. El Tribunal a quien corresponda la ejecución de las sentencias firmes dispondrá la publicación de éstas en el "Boletín Oficial" de la provincia en que el hecho penado se hubiese cometido, y remitirá un ejemplar de este periódico a la Comisión inspectora del censo electoral correspondiente.

Artículo 139. No se dará curso por el Ministerio de Ultramar ni se informará por los tribunales o por el Consejo de Estado, solicitud alguna de indulto en causa alguna por delitos electorales, sin que conste previamente que los solicitantes han cumplido por lo menos la mitad por lo menos del tiempo de su condena en las penas personales, y satisfecho la totalidad en las pecuniarias y en las costas. Las autoridades y los individuos de Corporación de cualquier orden o jerarquía que infringiesen esta disposición, dando lugar a que se ponga a la resolución del Rey la solicitud de gracia, incurrirán en la responsabilidad establecida en el artículo 363 del Código penal.

De toda concesión del indulto dará conocimiento el

Gobierno a la Junta central del censo de la Península.

Artículo 140. Las correcciones de las infracciones corresponden:

1.- A los Presidentes del acto o sección o sección en que se cometan.

2.- A las Comisiones inspectoras del censo electoral las que se relacionen directamente con los actos en que deban entender ellas o sus presidentes.

Estas comisiones no podrán, sin embargo, acordar corrección contra los Jueces. Cuando éstos cometan algunas de las infracciones previstas en este decreto, a juicio de la Comisión, ésta pedirá la imposición de la multa al Juez de Instrucción o de la Instancia, para que tanto ésta como aquellos la acuerden y hagan efectiva, si lo estimaren procedente.

3.- La imposición de multas se hará en resolución escrita motivada. Las que se impongan a virtud de lo dispuesto en el párrafo primero de este artículo serán reclamables ante la Comisión inspectora del censo electoral correspondiente dentro de los dos días siguientes a la notificación, y la Comisión se limitará a confirmar o revocar el acuerdo.

Las multas impuestas en primera instancia por la Comisión inspectora del censo serán apelables dentro del mismo término ante la Comisión permanente de la Diputación provincial respectiva.

Las que impongan los jueces o las Audiencias serán desde luego ejecutorias.

Artículo 141. Los Alcaldes, los Presidentes del Colegio electoral, los de las Mesas y de las Juntas de escrutinio no podrán imponer multas que excedan de 100 pesetas. Las Comisiones inspectoras del censo electoral podrán imponerla hasta de 500 pesetas. Los Jueces y Audiencias hasta 1,000 pesetas.

Artículo 142. El pago de estas multas se hará en un papel especial que la Hacienda pública emitirá para el caso y entregará a cuenta a las Diputaciones provinciales, cobrando sobre él un derecho de 20 % de su valor. El resto de su importe ingresará en la caja provincial respectiva. Si a los seis días de ser firme el acuerdo no se hiciere efectiva la multa, se exigirá por la vía de apremio.

En caso de insolvencia del multado sufrirá éste un arresto personal a razón de un día por cada cinco pesetas de multa, sin que pueda exceder de diez días cuando fuere impuesta por el Alcalde, Junta municipal o Presidente de la Mesa; de veinte si lo fuere por la Junta provincial, su presidente o por las Juntas de escrutinio y de treinta si lo fuese por la Junta central o su presidente.

Artículo 143. Quedan derogadas las disposiciones vi-

gentes en Cuba y Puerto Rico relativas a la elección de Diputados a Cortes.

Artículo 144. El Gobierno dará cuenta a las Cortes de este Decreto tan pronto como estén reunidas.

Dado en Palacio, a veinte y siete de Diciembre de 1892.- MARIA CRISTINA.-

El Ministro de Ultramar, Antonio Maura."

FUENTE: Gaceta de Puerto Rico, 1892, número 157.

REGLAMENTO PROVISIONAL

PARA LA

ADAPTACION DE LA LEY ELECTORAL DE 26 DE JUNIO DE 1890

A LA ISLA DE PUERTO RICO

TITULO PRIMERO

Capítulo Unico.- Del derecho y del Censo electoral.

Artículo 1.º Son electores para Senadores y Consejeros de Administración los que figuren en las listas a que se refieren los artículos 10 y 18 de la ley Electoral.

Son electores para Diputados a Cortes, Representantes, Diputados provinciales y Concejales, los que se hallen inscritos en el Censo electoral, con arreglo a lo prevenido en los arts. 1.º, 2.º y 3.º de la misma ley.

Los electores que fueren al mismo tiempo voluntarios tendrán en suspenso el derecho electoral cuando estuvieren movilizados.

Art. 2.º Para la revisión del Censo electoral, el día 1.º de Abril de cada año los Jueces municipales remitirán a los respectivos Presidentes de las Juntas municipales lista certificada de los asientos del Registro civil, comprensiva de los electores que hubiesen fallecido durante los doce meses precedentes; y los Jueces de primera instancia e instrucción, también lista certificada de las resoluciones judiciales firmes dictadas durante el mismo período de tiempo que afecten a la capacidad electoral de los inscritos en las listas de cada distrito municipal.

Art. 3.º El día 10 de Abril, a las ocho de la mañana, los Presidentes de las Juntas municipales, bajo su responsabilidad,

harán fijar en el sitio acostumbrado para los edictos y bandos municipales las listas siguientes:

1.^a La definitiva de electores del año anterior, con expresión de la edad, domicilio y profesión actuales de cada uno, y de si sabe o no leer y escribir.

2.^a La de los inscritos en la anterior que desde su publicación hubiesen fallecido o perdido el derecho electoral por incapacidad o pérdida de vecindad, con expresión de la causa.

3.^a La de los que, teniendo en el expresado día adquirida la vecindad con el tiempo de residencia que exige el art. 1.º de la ley Electoral, no consten en la lista primera.

4.^a La de aquellos para quienes se hubiese suspendido el ejercicio del derecho electoral.

A estas listas, de cuya exactitud, con sus necesarias referencias, responderán con certificación en cada pliego el Presidente y el Secretario de la Junta municipal, acompañará el anuncio, que también se repetirá por pregones en donde sea acostumbrado, de que el día 20 del propio mes habrá de reunirse en la Sala de sesiones del Ayuntamiento la Junta municipal del Censo electoral, ante la cual, todo vecino podrá hacer por escrito o de palabra, y justificar documentalmente, cuantas reclamaciones se refieran al derecho de sufragio.

Dichas listas y anuncios permanecerán expuestos en el mismo sitio, bajo igual responsabilidad, hasta el día de la celebración de la Junta a que se refiere el párrafo precedente.

Art. 4.º El día 20 del mismo mes de Abril, a las ocho de la mañana, la Junta municipal del Censo se constituirá en sesión pública en la Sala de sesiones del Ayuntamiento.

El Presidente pondrá sobre la mesa, a disposición de la Junta, las listas a que se refiere el artículo anterior, con sus justificantes, y los documentos de que habla el art. 2.º de este Reglamento.

La Junta oirá cuantas reclamaciones se hagan sobre exclusiones, inclusiones o rectificaciones por sus individuos o por cualquiera otro vecino, y admitirá los documentos, y no otra prueba, que se presenten para justificar dichas reclamaciones.

El Secretario expedirá en el acto recibo de cada una de las reclamaciones y documentos con ellas presentados, y consignará en el acta los nombres de los reclamantes, los de las personas a quienes afecte la reclamación y relación de los documentos con que se pretenda justificar cada una.

Las actas de las sesiones públicas se firmarán inmediatamente por los individuos de la Junta y por los reclamantes, para quienes es igualmente obligatoria esta solemnidad.

Terminada la sesión pública, la Junta procederá inmediatamente a la formación de las listas siguientes:

- 1.^a De los electores que hubiesen fallecido después de la última rectificación.
- 2.^a De los que por incapacidad hubiesen perdido el derecho electoral o se hallaren por otra causa indebidamente inscritos en las listas definitivas.
- 3.^a De los que, teniendo las condiciones de edad, vecindad y residencia necesarias para ser elector, según el art. 1.º de la ley, no consten en las listas definitivas del año anterior.
- 4.^a De los inscritos en las listas del año anterior que hubiesen perdido la vecindad.
- 5.^a De los electores cuyo derecho se hubiese suspendido.
- 6.^a De los electores cuya incapacidad o suspensión hubiese terminado.
- 7.^a De las reclamaciones de inclusión.
- 8.^a De las reclamaciones de exclusión.

En las seis primeras listas no se incluirán otros nombres que los de aquellos que no hubiesen sido objeto de reclamación.

Sobre cada una de las reclamaciones informará la Junta, expresando los fundamentos de sus informes, así como los de los votos de minoría que hubiere.

El Secretario levantará acta expresiva de todos los acuerdos, que será firmada como la de la sesión pública.

En pliegos separados se copiarán del acta las listas de que habla este artículo, a cada una de las cuales acompañarán los documentos e informes correspondientes, y se remitirán al Presidente de la Junta provincial por el primer correo. Todas las hojas de estos pliegos irán rubricadas por el Presidente, por dos individuos de la Junta municipal designados por éste y por el Secretario.

A la vez se enviará nota, acordada por la Junta, de los errores materiales que las últimas listas definitivas contengan, o negativa, en su caso, cuya nota se anunciará al público en la

forma prevenida en el art. 3.º

El pliego será entregado por el Secretario, bajo su responsabilidad, en la estafeta más próxima, de la cual se obtendrá recibo, que se unirá al expediente.

Art. 5.º El día 1.º de Mayo se constituirá en la Audiencia respectiva la Junta provincial del Censo electoral.

La sesión, que será pública, se abrirá a las ocho de la mañana.

El Secretario dará cuenta de las listas recibidas, por orden alfabético de Ayuntamientos, y se aprobarán las que no sean objeto de reclamación. Podrá hacerla quien acredite la cualidad de vecino del distrito electoral respectivo o su representación, o quien sea o haya sido Senador electivo, Diputado a Cortes, Representante o Diputado provincial, formulándola en el acto en términos breves y con los documentos que la apoyen.

Aprobadas las listas que no se impugnen, se examinarán las demás, abriéndose discusión acerca de cada una de las reclamaciones entre las personas a quienes se refiere el párrafo anterior.

Solamente hablará una persona en pro y otra en contra. Los individuos de la Junta, por conducto de su Presidente, podrán obtener los esclarecimientos de hecho que sean pertinentes. No se admitirán declaraciones de testigos.

Terminada la sesión pública, la Junta resolverá, por mayoría de votos, sobre cada inclusión o exclusión, y hará que en Boletín extraordinario se publiquen al día siguiente sus acuerdos, con sucinta expresión de los fundamentos de cada uno y de los votos particulares, si los hubiere.

Art. 6.º Estas resoluciones serán apelables ante la Sala de gobierno de la Audiencia territorial, por cualquiera de las personas que tienen derecho a ser oídas por la Junta provincial, aunque no hubieren reclamado.

El recurso se interpondrá por escrito o por manifestación verbal ante el Secretario de la Junta provincial, dentro de los tres días naturales posteriores a la publicación del acuerdo.

El Secretario dará resguardo de la apelación interpuesta.

En los siguientes tres días se remitirán de una vez al Presidente de la Audiencia territorial los expedientes cuyas resoluciones se apelen.

Pasados a la Sala de gobierno de la Audiencia, ésta señalará inmediatamente día para la vista, que habrá de celebrarse dentro de los seis siguientes, lo cual se hará público en la tabla de edictos del mismo Tribunal.

El expediente quedará de manifiesto a las partes en la Secretaría.

La vista se celebrará precisamente el día señalado, con asistencia del Fiscal y con la del apelante o de Abogado de su designación, si compareciesen. Podrán presentarse en el acto nuevos documentos.

En el mismo día o en el siguiente se dictará resolución irrevocable, que se hará pública en la tabla de edictos, bajo la responsabilidad del Secretario, y se comunicará en el día inmediato, en pliego certificado, con devolución del expediente, al Presidente de la Junta provincial.

Cuando el Tribunal considere temeraria la apelación, podrá condenar en costas al apelante.

En otro caso, serán de oficio.

Todas las cuestiones de procedimiento que se susciten y no se hallen previstas en este artículo, se decidirán por las reglas generales de la ley de Enjuiciamiento civil, en cuanto no se embarace la resolución principal en los plazos marcados, en cuyo caso el incidente que surja se decidirá dentro de ellos, con audiencia verbal de los interesados y del Fiscal.

Art. 7.º Recibidas las correspondientes certificaciones de la Audiencia territorial en la Secretaría de la Junta provincial, se reunirá ésta de nuevo el día 1.º de Junio, y en virtud del contenido de aquéllas y de sus acuerdos no apelados, determinará los nombres de los electores cuyo derecho quede reconocido, y mandará hacer en el Censo electoral las correspondientes inscripciones de los que no lo estuvieren en él, de la manera que previene el artículo siguiente.

Cuando el número de electores de un Municipio resultare mayor de 500, la misma Junta, previo informe de la municipal, acordará, antes del día 8 de Junio, la distribución de aquéllos, según los respectivos domicilios, en cuantas secciones corresponda, por virtud de lo dispuesto en el art. 16, asignando a cada una un número próximamente igual dentro de las condiciones de cada localidad.

Del Censo se copiarán, por orden alfabético, los nombres de los electores de cada Municipio, separándolos por secciones, con exclusión de aquellos cuya incapacidad, suspensión o baja

consten, y las copias constituirán las listas definitivas, que habrán de imprimirse y publicarse en el Boletín oficial antes del día 15 de Julio.

Un ejemplar impreso de la lista correspondiente a cada Municipio, autorizado por el Presidente y por el Secretario de la Junta provincial, y selladas todas sus hojas, se remitirá en pliego certificado al respectivo Presidente de la Junta municipal, el cual dará conocimiento a ésta y hará fijar al público, por espacio de tres días inmediatos, una copia de aquel ejemplar, que quedará archivado. De la exactitud completa de la copia responderán el Presidente y el Secretario de la Junta municipal.

Ejemplares iguales remitirá también en pliego certificado el Presidente de la Junta provincial al del Congreso de los Diputados y al de la Audiencia territorial, y a los Jueces de primera instancia e instrucción y municipales de las referentes a los Ayuntamientos de sus jurisdicciones. Estos funcionarios conservarán dichos documentos en los respectivos Archivos para que puedan ser consultados.

En la Secretaría de la Junta provincial se facilitarán en todo tiempo a cualquier elector, mediante precio módico, ejemplares autorizados de las listas definitivas.

Art. 8.º En las Secretarías de las Juntas provinciales se abrirá un libro, titulado (Censo electoral), dividido en tantas partes cuantos fueren los Municipios de la provincia.

Cada una de estas partes tomará el nombre del Ayuntamiento a que corresponda, y se dividirá a la vez en secciones correspondientes a las electorales.

En cada una de las secciones se inscribirán, según dispone el art. 3.º de la ley, con numeración correlativa y por orden alfabético de primeros apellidos, éstos y los nombres de los respectivos electores, con expresión además de su edad, domicilio y profesión, y de si saben leer y escribir.

Por notas marginales, autorizadas por el Presidente y Secretario de la Junta provincial, con referencia a los respectivos documentos se expresarán las exclusiones y las suspensiones del ejercicio del derecho electoral, y en su caso, la cancelación de estas anotaciones, así como las bajas y altas que se produzcan.

Los libros del Censo se exhibirán gratuitamente en todo tiempo a cualquiera que lo solicite, así como en las Juntas municipales las listas de que habla el artículo anterior.

En el libro del Censo no podrán hacerse raspaduras ni

enmiendas, y las de todo punto indispensables se salvarán por nota que autoricen el Presidente de la Junta provincial y el Secretario, dando el primero conocimiento a la Sala de gobierno de la Audiencia territorial.

Art. 9.º Corresponde a la Junta Central del Censo electoral, con arreglo a lo dispuesto en el art. 18 de la ley Electoral de la Península de 26 de Junio de 1890:

- 1.º Inspeccionar y dirigir cuantos servicios se refieran al Censo, su formación, revisión y conservación.
- 2.º Conservar los ejemplares impresos de las listas definitivas copiadas de los Registros provinciales.
- 3.º Comunicarse por medio de su Presidente con todas las Autoridades y funcionarios públicos.
- 4.º Recibir y resolver, dentro de su competencia, cuantas quejas se le dirijan.
- 5.º Ejercer jurisdicción disciplinaria sobre todas las personas que intervengan con carácter oficial en las operaciones electorales, imponiendo multas hasta la cantidad de 1.000 pesetas, las que, en su caso, exigirán por su orden los Jueces de primera instancia.
- 6.º Dar cuenta al Congreso de los Diputados de cuanto considere digno de su conocimiento.
- 7.º A su vez, la Junta insular del Censo, además de las facultades que le corresponden con arreglo a la primera disposición transitoria de la ley, tendrá la de dar cuenta a la Cámara de Representantes de cuanto considere digno de conocimiento.

Art. 10. Publicada la convocatoria de una elección, los Presidentes de las Juntas municipales harán exponer al público las listas definitivas hasta el día en que aquélla termine. Los Jueces municipales remitirán a dichos Presidentes, el día anterior a la elección, listas certificadas y separadas, correspondientes a las secciones electorales, expedidas por los Secretarios de los Juzgados, con referencia al Registro civil, de los electores incluidos que hubiesen fallecido; y los Jueces de primera instancia e instrucción harán igual envío, con la antelación necesaria, de análogas listas certificadas a los Presidentes de las Juntas municipales de su jurisdicción, o certificación negativa, en su caso, de los electores de su término municipal sobre quienes hubiese recaído desde el día 1.º de Abril último resolución judicial firme que afecte a su capacidad electoral.

Los Jueces de primera instancia e instrucción comunicarán además en pliego certificado, puesto en el correo con la anticipación precisa, al Presidente de la Junta provincial, el contenido de las certificaciones parciales que, en cumplimiento de lo dispuesto en este artículo, remitieren a los Presidentes de las Juntas municipales.

Estos pondrán a disposición de la Mesa electoral, en el momento de su constitución, las expresadas certificaciones, el original de las listas definitivas y cuantos documentos se refieran al derecho electoral, y a la vez, bajo su personal responsabilidad, harán fijar y mantener durante la votación, en el lugar más fácilmente visible, a la entrada del Colegio, lista por ellos autorizada de los electores a cuyo derecho afectan dichas certificaciones.

No tendrán derecho a votar los electores comprendidos en estas listas; pero si insistieren personalmente en ejercitarle, se admitirá su voto, haciéndolo constar en el acta, y se dará noticia del hecho a los Tribunales para lo que corresponda.

Art. 11. Los plazos señalados en las distintas disposiciones de este título son improrrogables, contándose en ellos los días festivos, que serán hábiles.

El funcionario público que deba recibir algún documento o comunicación de otro, si no lo recibiera tan pronto como pueda llegar a su poder, dispondrá, bajo su responsabilidad, que inmediatamente se recoja por comisionado especial, a costa del que hubiera debido enviarle.

Los Presidentes de las Juntas municipales, sin embargo, no podrán expedir comisiones contra los Jueces de primera instancia e instrucción; pero darán cuenta de las omisiones de éstos al Presidente de la Junta provincial del modo más rápido posible. Cuando la Comisión haya de dirigirse, en las cabeceras de partido contra el Juez de primera instancia e instrucción, Presidente de la Junta municipal, podrá cualquier Vocal de la misma indicar el hecho al Presidente de la provincial. En uno y otro caso, éste lo hará por sí, dando cuenta a la Junta provincial para lo demás que corresponda.

En caso de no poderse obtener inmediatamente el documento que hubiere debido remitirse, el comisionado recogerá los datos precisos por ante Notario; y a falta de éste, acompañado de tres testigos electores de la sección respectiva, a costa y bajo la responsabilidad del que hubiere dado lugar a la diligencia.

Las sesiones que deban celebrar las Juntas del Censo electoral en día fijo, no tendrán lugar en otro sino cuando sea indispensable la continuación de la empezada, o cuando haya faltado

número suficiente de individuos para constituirlos.

Estas sesiones durarán diez horas cada día, y podrán prorrogarse cuando lo exija el cumplimiento de un plazo perentorio, siempre que lo acuerden las dos terceras partes de los Vocales.

Si hubiera de continuar más de un día, se dará en cada uno conocimiento del hecho a los Presidentes de la Junta provincial y de la Audiencia territorial respectiva; y no se levantará ninguna sesión sin que se haya deliberado y resuelto sobre todas las reclamaciones de que se hubiera dado cuenta, a cuyo fin se destinarán las tres últimas horas de cada sesión. Esta no podrá suspenderse sino por espacio de una hora, después de transcurridas cinco a lo menos.

La asistencia a las sesiones es obligatoria para los Vocales natos y para los suplentes convocados, los cuales incurrirán en personal responsabilidad cuando sin justa causa no concurren o no se excusaren oportunamente.

Todas las solicitudes, actas, certificaciones y diligencias referentes a la formación y revisión del Censo electoral, así como las actuaciones judiciales relativas a él, serán gratuitas y se usará para ellas papel común.

Las Autoridades y los funcionarios públicos o eclesiásticos encargados de los respectivos Archivos expedirán gratuitamente y en papel común cualquiera clase de documentos que necesite el elector o vecino para acreditar su capacidad, o la capacidad o incapacidad de otros electores. Estos documentos se pedirán por medio de solicitud expresiva del objeto a que se destinan, y no serán admitidos en ningún Tribunal ni oficina sino para acreditar el derecho o incapacidad de los electores.

Los que con otro fin se valiesen de ellos, serán considerados como defraudadores de la renta del papel sellado.

TITULO II.-DISPOSICIONES ESPECIALES PARA LAS ELECCIONES

CAPITULO PRIMERO.-De las elecciones de Senadores y Consejeros de Administración.

Art. 12. Para las elecciones de Senadores se observará lo dispuesto en las leyes de 8 de Febrero de 1877 y 9 de Enero de 1879.

Art. 13. Para las elecciones de Consejeros de Administración se aplicará lo dispuesto en el cap. 4.º de la primera

las leyes citadas en el artículo anterior. La copia y la certificación del acta original, con toda su documentación, a que se refiere el art. 54 de dicha ley, serán remitidas, respectivamente, dentro del término de ocho días, al Secretario del despacho de Gracia y Justicia y Gobernación, y al Consejo de Administración, y además se entregará a cada uno de los Consejeros electos otra copia autorizada por el Secretario de la Diputación provincial, con el Vo.Bo. de su Presidente y el sello de la Corporación, para que le sirva de título de su nombramiento y la presente en la Secretaría del Consejo.

CAPITULO II.-De las elecciones de Diputados a Cortes, Representantes, Diputados provinciales y Concejales.

Sección primera.-De los distritos electorales.

Art. 14. Con arreglo a la cuarta disposición transitoria de la ley Electoral, subsistirá en las islas de Cuba y Puerto Rico la división en distritos electorales para Diputados a Cortes que rige en la actualidad.

Los estatutos harán la división del territorio de las islas en distritos y circunscripciones para la elección de Representantes, con sujeción al art. 11 de la Constitución de Cuba y Puerto Rico. También determinarán los estatutos el número y demarcación de los distritos para las elecciones de Diputados provinciales y Concejales.

Entre tanto, las Juntas insulares del Censo electoral harán la división expresada para las elecciones de Representantes, Diputados y Concejales, y determinarán las secciones de cada distrito o circunscripción.

Art. 15. En los distritos en que deba elegirse un Diputado a Cortes, un Representante, un Diputado provincial o un Concejel, cada elector no podrá dar cálidamente su voto más que a una persona; cuando se elijan más de uno, hasta cuatro, tendrá derecho a votar a uno menos del número de los que hayan de elegirse, a dos menos si se eligieran más de cuatro, y a tres menos si se eligieren más de ocho.

Art. 16. Los distritos se dividirán en secciones electorales. Cada término municipal constituirá una sección, si no excede de 500 el número de sus electores; dos, si no excede de 1.000; tres, si no excede de 1.500, y así sucesivamente.

Sección segunda.-De la constitución de las Mesas electorales.

Art. 17. La Mesa electoral de cada sección se compondrá de

un Presidente y de cuatro Interventores, por lo menos.

Será **Presidente** de la Mesa en cada sección electoral, el **Alcalde**; y si éste no pudiese concurrir o en el término municipal hubiere más de una sección, presidirán los **Tenientes de Alcalde** o **Concejales**, por su orden, o en su defecto los **Alcaldes de barrio**.

No podrán presidir las Mesas electorales los **Alcaldes**, **Tenientes** y **Regidores** que desempeñen sus cargos interinamente por causa de suspensión administrativa de los propietarios, cuando contra éstos no se hubiere dictado auto de procesamiento.

Las suspensiones administrativas de **Alcaldes** y **Concejales** contra quienes no se haya dictado auto de procesamiento, cesarán diez días antes del señalado para la votación.

Art. 18. Tendrán derecho a designar Interventores para las Mesas electorales de las secciones que comprendan el distrito o circunscripción los candidatos siguientes:

A. En las elecciones de Diputados a Cortes:

- 1.º Los ex Diputados a Cortes que hayan representado el mismo distrito u otro cualquiera de la provincia.
- 2.º Los que hubiesen luchado en el mismo distrito en elecciones anteriores y obtenido la quinta parte, por lo menos, del total de votos emitidos.
- 3.º Los ex Senadores elegidos por la provincia a que pertenezca el distrito o la circunscripción.
- 4.º Los candidatos para Diputados a Cortes propuestos por medio de cédulas firmadas por electores del respectivo distrito o circunscripción, o por actas notariales con intervención del funcionario competente, cuyos electores asciendan, por lo menos, a la vigésima parte del total de los comprendidos en la lista ultimada del distrito o circunscripción.

B. En las elecciones de Representantes:

- 1.º Los Diputados a Cortes y ex Diputados a Cortes que hayan representado cualquier distrito o circunscripción de la provincia.
- 2.º Los Senadores y ex Senadores, Consejeros de Administración y ex Consejeros de Administración elegidos por la provincia a que pertenece el distrito o circunscripción.
- 3.º Los ex Representantes que hayan representado cualquier distrito o circunscripción de la provincia.

4.º Los candidatos para Representantes, propuestos por medio de cédulas firmadas por electores del respectivo distrito o circunscripción, o por actas notariales con intervención del funcionario competente, cuyos electores asciendan, cuando menos, a la vigésima parte del total de los comprendidos en la lista ultimada del distrito o circunscripción.

C. En las elecciones provinciales:

1.º Los ex Diputados provinciales que hayan representado el mismo distrito en virtud de elección popular.

2.º Los que hubieren luchado en el mismo distrito en elecciones para Diputados provinciales anteriores, y obtenido la quinta parte, cuando menos, del total de votos emitidos.

3.º Los candidatos para Diputados provinciales propuestos por medio de cédulas firmadas por electores del respectivo distrito, o por actas notariales, con intervención del funcionario competente, cuyos electores asciendan, cuando menos, a la vigésima parte del total de los comprendidos en la lista ultimada del distrito.

D. En las elecciones de Concejales:

1.º Los ex Concejales del mismo Municipio que lo hubieren sido en virtud de elección popular.

2.º Los que hubieren luchado en el mismo distrito municipal en elecciones municipales anteriores, y obtenido la quinta parte, por lo menos, del total de votos emitidos.

3.º Los candidatos para Concejales propuestos por medio de cédulas firmadas por electores del respectivo distrito municipal, o por actas notariales con intervención del funcionario competente, cuyos electores asciendan, cuando menos, a la vigésima parte del total de los comprendidos en la lista ultimada del distrito.

Art. 19. Las solicitudes a la Junta del Censo respectiva, pidiendo la declaración de candidatos, se dirigirán a aquélla hasta el domingo inclusive anterior al señalado para la votación. La fecha de las solicitudes y propuestas será precisamente posterior a la del Real decreto haciendo la convocatoria.

La Junta del Censo declarará cadidatos a cuantos lo soliciten o sean propuestos con arreglo a este artículo, y el efecto de la declaración se entenderá exclusivamente para la facultad de nombrar Interventores de las Mesas electorales.

Cada elector no puede concurrir a más de una propuesta.

Art. 20. El domingo inmediato anterior al señalado para la elección, a las ocho de la mañana, la Junta del Censo respectivo se constituirá en sesión pública, debiendo asistir los candidatos por sí o por medio de apoderados en forma legal.

Dos electores presentarán personalmente cada propuesta, respondiendo de la autenticidad de sus firmas; y leídas éstas y las comunicaciones que se hayan dirigido a la Junta por los designados en los números 1.º, 2.º y 3.º de las clasificaciones A y B, y en los números 1.º y 2.º de las clasificaciones C y D del art 18, se procederá a la proclamación de los que reúnan las condiciones señaladas en dicho artículo, expidiéndoles la correspondiente credencial.

Art. 21. En el mismo acto los candidatos proclamados, o sus representantes debidamente autorizados, podrán hacer la designación de Interventores y de suplentes para cada Mesa de las que en el respectivo distrito hayan de constituirse.

Art. 22. La Junta levantará acta expresiva de los nombres de los candidatos proclamados, y los de sus Interventores y suplentes, y dentro del siguiente día, a más tardar, si se tratare de elecciones de Diputados a Cortes, la comunicará por pliego certificado a la Junta central del Censo electoral, a los Alcaldes de las secciones respectivas y a todos los designados para Interventores y suplentes, citando a éstos para el día y hora en que haya de comenzar la votación. Cuando se trate de elecciones de Representantes o Diputados provinciales, la Junta comunicará dicha acta a los Alcaldes y Presidentes de las Mesas de las secciones respectivas, y notificará sus nombramientos a todos los Interventores y suplentes, citando a éstos para el día y hora en que haya de comenzar la votación.

En las elecciones municipales, el Alcalde, como Presidente de la Junta municipal, deberá, en el mismo día de la sesión, comunicar el acta a los Presidentes de las Mesas de las secciones que él no haya de presidir, y notificará también, en el mismo día, sus nombramientos a todos los Interventores y suplentes, citándolos como dispone el párrafo anterior.

En estos casos, como en cualquier otro de los comprendidos en este Reglamento, si las comunicaciones postales ordinarias no alcanzasen a trasladar, con la debida oportunidad, las resoluciones, se transmitirán éstas telegráficamente, sin perjuicio de hacerlo también por el primer correo.

A los candidatos proclamados o sus representantes que reclamen certificaciones de los nombramientos de Interventores se les facilitará dentro de las veinticuatro horas. Estas certificaciones servirán de credencial a los nombrados para que se les admita como tales, bajo la responsabilidad del Presidente.

Los Interventores designados y sus suplentes que no acepten el nombramiento lo manifestarán por escrito a la Junta municipal antes de la hora señalada para la elección.

Los que en ese tiempo no lo hicieren, se entiende que aceptan y quedan obligados al desempeño del cargo.

Art. 23. Para ser Interventor se requiere ser elector en el Municipio en que haya de constituirse la Mesa y saber leer y escribir.

Art. 24. Si solamente se hubiera proclamado un candidato, éste podrá designar dos Interventores y dos suplentes para cada sección. Si se proclaman dos o más candidatos, cada uno nombrará un Interventor y un suplente para cada sección.

Art. 25. La Junta, además, nombrará para cada Mesa de las secciones que comprenda el distrito o circunscripción dos Interventores que correspondan a la sección respectiva, que sepan leer y escribir, y que, por su edad y circunstancias, ofrezcan garantías de imparcialidad.

Estos dos Interventores habrá de escogerlos la Junta de las listas que puede presentar en el acto cada uno de los candidatos proclamados.

Si hubiere más de una lista, no podrá la Junta tomar los dos Interventores de la propuesta de un mismo candidato. Cada una de estas listas deberá comprender, cuando menos, diez nombres para cada sección. Si los candidatos no usaran de este derecho, nombrará la Junta dichos dos Interventores sin la limitación precedente.

Si no se hubiere proclamado ningún candidato, o en caso de haberlo, éstos no ejercitaran su derecho a proclamar Interventores para todas o algunas de las secciones, la Junta nombrará para todas ellas el número necesario de Interventores y sus suplentes, hasta completar el número de cuatro en cada sección.

La Junta provincial hará el nombramiento de Interventores que a la misma corresponde designar con arreglo a los párrafos precedentes, en la sesión que celebre el domingo anterior al de la votación, teniendo en cuenta el número de que debe componerse cada sección, que es el de cuatro, y los que hayan podido nombrar los candidatos proclamados.

En ningún caso dejará de nombrar la Junta dos Interventores y dos suplentes para cada sección de las que comprende el distrito o circunscripción.

Art. 26. En las elecciones de Diputados provinciales y

Concejales, si los Interventores designados por los candidatos o sus representantes excedieren de seis, invitará la Junta a los proponentes para que se pongan de acuerdo a fin de redactar los Interventores a dicho número. Si no resultase avenencia, se insacularán los nombres de los designados, y los seis primeros que designe la suerte compondrán la Mesa, en unión de los nombrados por la Junta.

Si en el caso del párrafo anterior, tampoco hubiere avenencia para la reducción del número de suplentes, serán desde luego nombrados los propuestos por aquellos candidatos que en la insaculación para Interventores no obtuvieron representación, y si los suplentes propuestos por dichos candidatos excedieren de seis, o si no llegaren a este número, se harán las correspondientes insaculaciones.

Art. 27. La Mesa, compuesta del Presidente y de los Interventores nombrados con arreglo a los artículos precedentes, se constituirá a las siete de la mañana en el local designado para la votación el domingo en que ésta debe tener lugar.

Si a dicha hora faltara algún interventor, así como su suplente, que no se hayan excusado, serán citados inmediatamente por escrito por el Presidente, a fin de que concurran a desempeñar su cometido antes de las ocho de la mañana.

Pasada esta hora, se constituirá la Mesa con los Interventores y suplentes presentes; y si no llegaran a cuatro, se completará dicho número con electores que estén en el local, prefiriendo a los de mayor edad que sepan leer y escribir.

En cualquier momento, después de constituida la Mesa, en que se presenten los Interventores nombrados por la Junta provincial o candidatos proclamados, entrarán en el ejercicio de sus funciones, continuando también los que hubieren tomado asiento en la Mesa.

Sección tercera.-De las votaciones.

Art. 28. La votación se hará precisamente en la Sala capitular de los Ayuntamientos; y en donde hubiere más de una sección, en los locales destinados a Escuelas públicas. Si estos no fuesen en número suficiente, la Junta municipal del Censo designará otros que sean adecuados.

Ocho días antes del señalado para la elección, el Presidente de dicha Junta anunciará por medio de edictos, que se fijarán en todos los pueblos de que conste cada sección, los locales en que hayan de constituirse las respectivas secciones electorales, y a la vez lo comunicará a la Junta provincial, sin que después

pueda variar la designación.

Los locales en donde se verifique la elección se abrirán al público antes de las ocho de la mañana.

Art. 29. Si por alteración material del orden público no pudiese tener lugar la votación en alguna sección el día señalado, que será siempre un domingo, con arreglo al art. 6.º de la ley, la suspenderá su Presidente, anunciándola, tan luego como se haya restablecido el orden, para el día inmediato siguiente en todos los pueblos de que se componga la sección.

De esta suspensión y de sus causas se dará en el mismo día conocimiento a las Juntas provincial y también a la insular y a la central, en su caso.

Art. 30. La votación será secreta, y se hará en la siguiente forma: el Presidente anunciará (empieza la votación). Los electores se acercarán a la mesa uno a uno, y diciendo su nombre, entregarán por su propia mano al Presidente una papeleta blanca doblada, en la cual estará escrito o impreso el nombre del candidato o candidatos a quienes den su voto.

El Presidente depositará la papeleta en la urna destinada al efecto que será de cristal o vidrio transparente, después de cerciorarse, por el examen que harán los Interventores de las listas del Censo electoral, de que en ellas está inscrito el nombre del votante, y dirá en alta voz: (Fulano (el nombre del elector), vota). En todo caso, el Presidente tendrá constantemente a la vista del público la papeleta desde el momento de la entrega hasta que la deposite en la urna. Dos de los Interventores, al menos, anotarán en la lista, numerada, los electores que voten, por el orden con que emitan su voto, confrontarán sus nombres con los de las listas definitivas y expresarán en la anotación el número con que en éstas aparezcan.

Art. 31. El derecho a votar se acreditará únicamente por la inscripción en los ejemplares certificados de las listas.

Cuando sobre la identidad personal del individuo que se presentase a votar como elector ocurriese duda por reclamación que en el acto hiciese públicamente otro elector negándola, se suspenderá la admisión de su voto hasta que al final de la votación decida la Mesa lo que corresponda sobre la reclamación propuesta.

Art. 32. Ningún elector podrá votar en otra sección que aquella a que corresponda según el Censo electoral.

Art. 33. A las cuatro en punto de la tarde anunciará el Presidente en alta voz que se va a concluir la votación, y no se permitirá entrar a nadie más en el local, cerrando las puertas

mismo, si lo considerase preciso. Preguntará si alguno de los electores presentes ha dejado de votar, y se admitirán los votos que se den a continuación.

Inmediatamente, a puerta abierta, la Mesa decidirá por mayoría, en vista de las cédulas de vecindad y del testimonio de los electores presentes, sobre la admisión de aquellos respecto de cuya identidad se hubiese reclamado.

En todo caso se mandará pasar tanto de culpa al Tribunal competente para que exija la responsabilidad del que aparezca usurpador de nombre ajeno, o la del que lo haya negado falsamente. A seguida votarán los individuos de la Mesa y se firmarán por los Interventores las listas de votantes al margen de todos sus pliegos y a continuación del último nombre escrito.

Art. 34. Terminadas estas operaciones, el Presidente declarará cerrada la votación y comenzará el escrutinio, que se verificará leyendo el mismo en alta voz las papeletas, que extraerá una a una de la urna, y poniéndolas de manifiesto a los Interventores, que confrontarán el número de ellas con el de votantes anotados en las listas.

Las papeletas no inteligibles, las que no contengan nombres propios de personas o contuvieren escrito varios, cuyo orden no pueda determinarse, se considerarán en blanco. Cuando haya varios nombres escritos, unos después de otros, sólo se tendrán en cuenta el primero o los primeros, hasta el número de candidatos que, según el art. 15, tenga derecho a votar cada elector, y los demás se reputarán no escritos. Si algún elector presente, Notario o candidato proclamado tuviese dudas sobre el contenido de una papeleta leída por el Presidente, podrá pedir en el acto, y deberá concedérsele, que la examine. En los casos de faltas de ortografía, leves diferencias de nombres y apellidos, inversión o supresión de algunos de éstos, se decidirá en sentido favorable a la validez del voto y a su aplicación en favor del candidato conocido, cuando no figure en la elección otro con quien pueda confundirse. Si sobre esto o sobre la inteligencia de la papeleta no hubiese desde luego unanimidad en la Mesa, se reservará para la terminación del escrutinio la decisión de la duda, y entonces se hará por mayoría.

Art. 35. Hecho el recuento de los votos, según resulte de las operaciones anteriores, preguntará el Presidente si hay alguna protesta que hacer contra el escrutinio, y no habiéndose hecho, o después de resuelto por la mayoría de la Mesa las que se presenten, anunciará en alta voz su resultado, especificando el número de papeletas leídas, el de los votantes y el de los votos obtenidos por cada candidato.

Art. 36. En seguida se quemarán, a presencia de los concu-

rrentes, las papeletas extraídas de la urna, con excepción de aquellas a que se hubiese negado validez o que hubiesen sido objeto de alguna reclamación, las cuales se unirán todas al acta, rubricadas por los Interventores, y se archivarán con ella para tenerlas a disposición de la Cámara, Corporación o Tribunal que haya de resolver sobre la validez o nulidad de la elección.

Art. 37. El resultado del escrutinio se publicará inmediatamente por certificación fijada en la parte exterior del edificio en que se haya verificado la elección, y remitiendo otras iguales a la Junta central del Censo y al Presidente de la Junta provincial, en las elecciones de Diputados a Cortes; al Presidente de la Cámara de Representantes y al de la Junta provincial, en las elecciones de Representantes; al Secretario del despacho de Gracia y Justicia y Gobernación y al Presidente de la Junta provincial, en las elecciones provinciales; y a dicho Secretario y al Presidente de la Junta municipal, en las elecciones municipales.

El resultado de las elecciones de Diputados a Cortes, Representantes y Diputados provinciales se insertará en el primer número que se publique del Boletín oficial, y el de las elecciones municipales se publicará por edicto o en la forma acostumbrada en la localidad.

Estas certificaciones se enviarán en el acto, bajo la responsabilidad del Presidente de la Mesa y de la manera prevenida en los párrafos primero y segundo del art. 39.

Se darán también en el acto las certificaciones del escrutinio que pidan los candidatos presentes, Notarios o electores.

Art. 38. Concluidas todas las operaciones anteriores, y a puerta cerrada, el Presidente y los Interventores de la Mesa firmarán el acta de la sesión, en la cual se expresará detalladamente el número de electores que haya en la sección, según las listas del Censo electoral, el de los electores que hubiesen votado y el de los votos obtenidos por cada candidato, y se consignarán sumariamente las reclamaciones y protestas formuladas en su caso por los electores sobre la votación o el escrutinio, y las resoluciones motivadas de la Mesa sobre ellas, con los votos particulares si los hubiere.

El acta y todos los documentos originales a que en ella se haga referencia, y las papeletas de votación reservadas, según el art. 36, se archivará en la Secretaría de la Junta municipal del Censo, a cuyo Presidente será remitida al efecto antes de las diez de la mañana del día siguiente inmediato al de la votación.

La Mesa librará gratuitamente certificación de lo consignado

en el acta, o de cualquier extremo de ella, a todo elector o candidato que lo solicite.

Art. 39. Para las elecciones de Diputados a Cortes, dos copias literales del acta, autorizadas por todos los individuos de la Mesa, serán entregadas inmediatamente en la Administración o Estafeta más cercana, en pliegos cerrados y sellados, en cuya cubierta certificarán de su contenido todos los individuos de la Mesa.

El Administrador del Correo dará recibo, con expresión del día y hora en que le fueran entregados los pliegos, y certificados los remitirá inmediatamente al Secretario de la Junta central del Censo y al Presidente de la municipal de la cabeza del distrito electoral.

Para las elecciones de Representantes se remitirán dos copias literales del acta; una a la Secretaría de la Cámara respectiva y otra al Presidente de la Junta municipal de la cabeza del distrito electoral.

Para las elecciones de Diputados provinciales se remitirán tres copias: una al Gobernador de la provincia, otra al Presidente de la Junta provincial y otra al Presidente de la municipal de la cabeza del distrito electoral.

Para las elecciones municipales se remitirán dos copias: una para el Secretario del despacho de Gracia y Justicia y Gobernación y otra para el Presidente de la Junta municipal, el cual hará la debida distribución a los respectivos Presidentes de las Juntas de escrutinio.

La entrega de estos pliegos en la Administración de Correos deben hacerla el Presidente de la Mesa y el Interventor nombrado, según el artículo siguiente, siendo ambos responsables de la omisión o retraso que no estén plenamente justificados en el cumplimiento de esta obligación.

Cuando el envío de los pliegos haya de hacerse a Presidentes de Juntas que residan en la misma población que las Mesas electorales, se entregarán personalmente en las respectivas Secretarías.

Todos los candidatos tendrán derecho a que se les expidan certificaciones del resultado de la elección.

Art. 40. Antes de disolverse la Mesa electoral, designará a uno de sus Interventores para concurrir en representación de la Sección a la Junta de escrutinio general.

Esta designación se hará por mayoría de los individuos de la

Mesa, resolviéndose el caso de empate en favor del Interventor de más edad de los que hubiesen obtenido igual número de votos. Al designado se le dará la credencial correspondiente de su nombramiento, firmada por el Presidente y todos los Interventores y copia literal del acta.

En las elecciones municipales, cuando el Municipio tenga una sola sección, no se hará la designación expresada en los párrafos anteriores.

Art. 41. El Presidente de la Mesa tendrá dentro del Colegio electoral autoridad exclusiva para conservar el orden, asegurar la libertad de los electores y mantener la observancia de esta ley. Las Autoridades locales prestarán dentro y fuera del Colegio al Presidente los auxilios que éste les pida, y no otros.

Sólo tendrán entrada en los Colegios electorales los electores de la sección, los candidatos proclamados, los Notarios para dar fe de cualquier acto relacionado con la elección y que no se oponga al secreto de la votación, y los dependientes de la Autoridad que el Presidente requiera. El Presidente de la Mesa cuidará de que la entrada al local se conserve siempre libre y expedita a las personas expresadas.

Los Jueces de instrucción y sus Delegados podrán entrar en los Colegios electorales siempre que lo exija el ejercicio de su cargo.

Art. 42. Las estaciones telegráficas de servicio limitado estarán abiertas desde las ocho de la mañana del domingo en que tenga lugar la elección hasta las doce de la noche del día en que se verifique el escrutinio general.

Art. 43. Nadie podrá entrar en el Colegio con armas, palos ni bastón ni paraguas, a excepción de los electores que por impedimento notorio tuvieran necesidad absoluta de apoyo para acercarse a la Mesa; pero éstos no podrán permanecer dentro del local más que el tiempo puramente necesario para dar su voto.

El elector que infringiere este precepto, y advertido, no se sometiere a las órdenes del Presidente, será expulsado del local y perderá el derecho de votar en aquella elección, sin perjuicio de cualquiera otra responsabilidad en que incurra. Las Autoridades podrán, sin embargo, usar dentro del Colegio el bastón y demás insignias de su cargo.

Art. 44. El escrutinio general de las elecciones, a que se refiere este capítulo, se verificará el jueves siguiente en la capital del distrito electoral.

Art. 45. En las elecciones de Diputados a Cortes, Repre-

sentantes y Diputados provinciales, el escrutinio se verificará ante una Junta, compuesta de los Interventores designados a tenor del artículo 40. Estas Juntas serán presididas en la capital de la provincia por el Presidente de la Junta municipal de la capital de los mismos, o por el funcionario que nombre el Presidente de la Audiencia territorial respectiva.

Los Presidentes de las Juntas de escrutinio requerirán y obtendrán del Juez del partido y de las demás Autoridades el concurso que necesiten para el ejercicio de sus funciones.

Sin su presencia no podrá celebrarse la Junta de escrutinio.

Art. 46. En las elecciones municipales se observarán las siguientes reglas:

1.^a Cuando los Municipios no tengan más que una sección, el escrutinio general se verificará por la misma Mesa ante la cual se hizo la elección.

2.^a Donde haya más de una sección, y éstas no lleguen a seis, el escrutinio general de cada distrito municipal se verificará por una Junta, compuesta de la Mesa de la sección, que presidirá el Alcalde o un Teniente, o quien le sustituyera en aquel acto, y de un interventor de cada una de las secciones del mismo distrito municipal, designado por la manera prevenida en el art. 40.

3.^a Cuando las secciones del distrito municipal excedan de seis, la Junta de escrutinio se compondrá de los Interventores designados a tenor de dicho art. 40.

4.^a Las Juntas de escrutinio serán presididas por los Alcaldes o Tenientes de Alcalde, o quien le sustituya legalmente.

Art. 47. En las elecciones de Diputados a Cortes, Representantes y Diputados provinciales, la Junta general de escrutinio se reunirá a las diez de la mañana precisamente, en la sala principal del Ayuntamiento, o en otro local que el Alcalde ponga a su disposición, que habrá de ser en tal caso igualmente decoroso y más capaz que aquélla; pero no podrá entrar en funciones sin la concurrencia de la mayoría de los Interventores, si el número de secciones en que esté dividido el distrito electoral fuese menor de 50, o sin la concurrencia de 25 en caso de que el número de secciones sea mayor.

Las Juntas provinciales del Censo, teniendo en cuenta la proximidad y medios de comunicación a la cabeza del distrito electoral, determinarán, publicándolo en los respectivos Boletines oficiales, las secciones hasta el número de la mitad más una de las que comprenda el distrito electoral, cuando sean

éstas menos de cincuenta, o hasta el de veinticinco cuando sean más, cuyos Comisionados interventores tengan que concurrir a la Junta de escrutinio, bajo la responsabilidad penal que establece la ley Electoral; la concurrencia de los Comisionados de las demás secciones será voluntaria.

Si no se reuniese hasta las dos de la tarde el número de Interventores exigidos por este artículo, u otra causa imprevista impidiere la celebración de la junta, el Presidente convocará para el día inmediato, notificándolo a los Interventores presentes y al público por anuncio escrito, a la vez que a las Juntas central y provincial del Censo.

En este caso la junta se celebrará el día señalado, cualquiera que sea el número de los concurrentes.

Art. 48. En las elecciones de Concejales, la Junta general de escrutinio del distrito municipal se reunirá a las diez de la mañana en sala de edificio consistorial debidamente capaz, y no estando estos locales disponibles, en otro que el Alcalde ponga a su disposición, y que habrá de ser en tal caso igualmente decoroso y capaz.

No podrá entrar esta Junta en funciones sin la concurrencia de dos terceras partes de los Comisionados interventores cuando el número de secciones no exceda de 10; de la mitad más uno de los Interventores si el número de secciones en que esté dividido el distrito municipal fuere mayor de 10 y menor de 50, y hasta el de 25 cuando sean más.

A los Comisionados interventores que, de no mediar justificada excusa, dejen de concurrir a la Junta de escrutinio, podrá imponerles el Presidente de la Junta, multa que no exceda de 100 pesetas.

También es aplicable a este artículo lo dispuesto en el párrafo 2.º del art. 47, con la única variación de que el parte se ha de dar a la Junta municipal del Censo, en vez de hacerlo a la provincial.

Art. 49. Reunida la mayoría o el número preciso de interventores, y en su caso la misma Mesa ante la cual se verifique la elección, el Presidente declarará constituida la Junta de escrutinio general, y designará a los cuatro Interventores más jóvenes para que actúen como Secretarios.

Uno de éstos, de orden del Presidente, dará ante todo lectura de las disposiciones de la ley Electoral y de este Reglamento, referentes al acto, y en seguida comenzarán las operaciones del escrutinio, computándose los votos dados en todas las secciones sucesivamente, por el orden alfabético de las mismas.

Para esto se pondrán sobre la mesa por el Presidente de la Junta municipal del Censo electoral las actas que habrá recibido de las secciones, conforme a lo dispuesto en el art. 37, y el Presidente de la Junta de escrutinio dispondrá que se dé cuenta por uno de los Secretarios de los resúmenes de cada votación, tomando los otros Secretarios las anotaciones convenientes para el cómputo total y adjudicación consiguiente de los votos escrutados. A medida que se vayan examinando las actas de las votaciones de las secciones, se podrán hacer y se insertarán en el acta de escrutinio, las reclamaciones y protestas a que hubiese lugar sobre la validez de dichas votaciones. Solamente los individuos de la Junta de escrutinio y los candidatos que estuvieren presentes al acto podrán hacer estas reclamaciones y protestas.

La Junta de escrutinio no podrá anular ningún acta ni voto. Sus atribuciones se limitarán a verificar sin discusión alguna el recuento de los votos emitidos en las secciones del distrito, ateniéndose estrictamente a los que resulten admitidos y computados por las resoluciones de las Mesas electorales, según las actas de las respectivas votaciones. Si sobre este recuento se provocase alguna duda o cuestión, se estará a lo que decida la mayoría de los individuos de la misma Junta. La minoría, en su caso, podrá hacer constar en el acta su disenso y las razones en que lo funde.

Art. 50. Terminado el recuento de todas las secciones, se leerá en voz alta por uno de los Secretarios de la Junta el resumen general de los resultados; y el Presidente proclamará en el acto Diputados a Cortes, Representantes, Diputados provinciales o Concejales electos a los candidatos que aparezcan con mayor número de votos de los escrutados en todo el distrito, hasta completar el número de los que al mismo distrito corresponda elegir.

En casos de empate, el Presidente proclamará Diputados a Cortes, Representantes, Diputados provinciales o Concejales presuntos a los candidatos empatados, reservando al Congreso, a la Cámara de Representantes, Diputación provincial o al Ayuntamiento la resolución que corresponda, con arreglo a las leyes o a los estatutos.

Art. 51. Las disposiciones de los arts. 8.º de la ley Electoral y 41 y 43 de este Reglamento son aplicables a las sesiones de la Junta de escrutinio general; pero tendrán derecho a entrar en el local en que se celebre, y en cuanto su capacidad lo permita, los electores del distrito y las demás personas señaladas en dicho art. 41.

Art. 52. En las elecciones de Diputados a Cortes, la Junta de escrutinio extenderá un acta por triplicado, que suscribirán

todos los individuos de la misma que hubiesen asistido a la sesión. De estos ejemplares, uno se remitirá a la Junta municipal para su archivo, y los dos restantes, con los documentos anexos que constituyen el expediente, a la Secretaría de la Junta provincial, la cual archivará uno, y el otro lo remitirá inmediatamente a la Junta central con los documentos anexos.

En las elecciones de Representantes, el acta se extenderá asimismo por triplicado, remitiendo un ejemplar a la Junta municipal para su archivo, y los dos restantes, con los documentos anexos que constituyen el expediente, a la Secretaría de la Junta provincial, la cual archivará uno, y el otro lo remitirá inmediatamente a la Secretaría de la Cámara de Representantes con los documentos anexos.

En las elecciones de Diputados provinciales, se extenderán también tres ejemplares del acta, remitiendo uno al Gobernador de la provincia, otro a la Junta municipal para su archivo, y el tercero, con los documentos anexos que constituyen el expediente, al Presidente de la Junta provincial.

En las elecciones de Concejales, dicha acta se extenderá y autorizará por duplicado, remitiendo un ejemplar, con los documentos anexos a la Secretaría de la Junta municipal, que los archivará, y el otro se remitirá inmediatamente al Gobernador de la provincia.

Art. 53. En las deliberaciones y acuerdos de la Junta de escrutinio sobre cuenta y adjudicación de votos, no tendrá el Presidente más participación que la necesaria para mantener el orden de la sesión.

Art. 54. Del acta de escrutinio general se expedirán certificaciones parciales en número igual al de los Diputados a Cortes, Representantes, Diputados provinciales o Concejales electos o presuntos proclamados.

Estas certificaciones se limitarán a consignar, en relación sucinta, el resultado de la elección, con el resumen del escrutinio general y la proclamación del Diputado a Cortes, Representante, Diputado provincial o Concejal electo o presunto, y con indicación precisa de las protestas o reclamaciones, si las hubiese, o de no haber habido ninguna, en su caso. Estas certificaciones serán directamente remitidas por el Presidente de la Junta a los candidatos proclamados, a quienes servirán de credenciales de su elección.

Art. 55. Terminadas todas las operaciones de la Junta de escrutinio general, el Presidente la declarará disuelta y concluida la elección.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

1.^a La certificación del resultado del escrutinio en las elecciones de Representantes, que debe remitirse, según el art. 37 de este Reglamento, al Presidente de la Cámara de Representantes, y el ejemplar del acta de la Junta de escrutinio, destinado, conforme al párrafo 2.º del art. 52, a la Secretaría de aquélla, se remitirán en las primeras de dichas elecciones al Secretario del Despacho de Gracia y Justicia y Gobernación, cuidando éste de hacerlo a su vez con la debida oportunidad a la Cámara mencionada.

2.^a Las primeras listas de electores que se formen, en cumplimiento de la ley Electoral, no se revisarán, una vez ultimadas, hasta que haya transcurrido el año en que tenga lugar su publicación.

DISPOSICION FINAL

Las disposiciones del presente Reglamento se aplicarán íntegramente a la isla de Puerto Rico; pero a fin de acomodarlas a su población y nomenclatura, se publicarán en reglamento especial para dicha isla.

Madrid 3 de Marzo de 1898. Aprobado por S.M. Moret.

APENDICE II

RESULTADOS POR COLEGIOS Y SECCIONES DE LAS ELECCIONES PARA
DIPUTADOS A CORTES POR LA PROVINCIA DE PUERTO RICO

(1869 - 1898)

<u>CIRCUNSCRIP.</u>	<u>HABITANTES</u>	<u>ELECTORES</u>	<u>VOTANTES</u>	<u>CANDIDATOS</u>	<u>VOTOS</u>
CATITAL	202,881	1,511	1,035	Valdés Linares, Manuel	777
				Fernández Martínez, José Ramón	743
				Machicote, Juan Bautista	725
				Puig, Juan Bautista	700
				Baldorioty de Castro, Román	274
				Alonso Pacheco, Manuel	267
				Pavía, Julián J.	218
				Osende, Benito de	92
				Alva y Guillazo, Joaquín María de	74
				Acosta y Calvo, José Julián	49
				Alonso, Manuel A.	16
				Blanco y Sosa, Jualían	12
				Goico y Sabanetas, Pedro Gerónimo	12
				Pavía, Julián J.	12
				Alba, Joaquín María de	11
				Arvizu Hernández, Juan Antonio	8
				Fernández, Ramón (Marqués)	6
				Balderioty (sic) de Castro, Ramón	6
				Fernández, Ramón	6
				Vizcarrondo y Coronado, Julio	5
				Padilla, José Gualberto	5
				Quiñones, José S.	5
				Giménez y Ramírez, Gabriel	4
				Padial y Vizcarrondo, Luis	4

Goico y Sabanetas, Gerónimo	3
Echagüe, Rafael	3
García Maitín, José	3
Baez, José María	3
Calvetón, Joaquín	3
Zeno y Correa, Jesús de	3
Sirgad, Agustín M.	3
Alonso, Manuel	2
Alonso Pacheco, Manuel	2
Blanco, Julián	2
Acosta, José Julián	2
Acuña, Francisco de Paula	2
González, Manuel N.	2
Puig, José A.	2
Valdés Linares, José	2
Leira, Luis de	2
Fernández, Ramón María	1
Alba, Joaquín	1
Saldaña, Lino D.	1
Agustí, Jaime	1
Alvarez y Ordoño, Joaquín María	1
Sternacher, José	1
Ahedo, Angel	1
Santibañe, Angel	1
Sifre, Venceslao (sic)	1
Rezano y Marín, Pedro	1
Alonso y Pacheco, Juan	1

Alonso, D.N.	1
Alonso, Eduardo	1
Fernández y Martínez Ramón	1
Machicote y Yrizarri, Juan B.	1
Machicote, Juan	1
Puig, R.	1
Pavía, Juan	1
Vizcarrondo, Lorenzo	1
Alameda y Brea, Fray Cirilo	1
Arzobispo de Toledo	1
Escoriaza, Pascasio	1
Marchesi, José M.	1
Quiñones, José	1
Porrata, José María	1
Chávarri, Romualdo	1
Sanz, José Laureano	1
García Castañón, José	1
Borrás, Bartolomé	1
Ostos, Eugenio M.	1
Ostos, Eugenio M. (hijo)	1
Fernández Ramírez, José R.	1
Cachada, P.R.	1
Gutierrez del Arroyo, Pedro	1
Primo de Rivera	1
Pavía y Laci, Juan Julián	1
Castro Valderioti, Román	1
Padial, Luis	1
Romero, Calixto	1

Pavía, Julián Maria	1
Valdrome de Castro, Román	1
Espartero, Baldomero	1
Padre Puig	1
Tapia y Riera, Alejandro	1
Linares, Manuel V.	1
Lugo Viñas, Venceslao	1
Uliviso, Manuel	1
- votos perdidos -	23

ARECIBO	197,853	834	631	
Hernández Arvizu, Juan Antonio				390
Pascasio de Escoriaza, José María				381
Padial, Luis Ricardo				373
Vazquez Queipo, Vicente				252
Navascués, Nicasio				248
Méndez Núñez, Casto				240
Balderioty (sic) de Castro, Ramón				1
Cuchí, José				1
Méndez Núñez, Nicasio				1
Vázquez, Juan J.				1

MAYAGUEZ	211,708	1,373	914	
Escoriaza, José Pascasio				545
Becerra y Delgado, Luis Antonio				530
Vázquez y Oliva, Francisco de Paula				515
Plaja y Vidal, Sebastián				487
Nadal y Cuevas, Ramón				451

Manrique de Lara, Antonio	436
Cabrera y Martínez, Carlos	409
Hostos y Bonilla, Eugenio María	353
Rosich y Más, Miguel	52
Alvizu, Juan Antonio	10
Puig, Juan Antonio	4
Robles, Cipriano	3
Quiñones, José Demetrio	3
Vargas, José Joaquín	2
Tejera, Diego de la	2
Rameri, Dimas	2
Navascués de Sisa, Nicasio	2
Ramos Arroyo, Matías	1
Bello y Espinosa, Domingo	1
Quiñones, José Marcial	1
Mangual, Manuel María	1
Vasallo, Francisco de Paula	1
Prats, Juan	1
Aguayo, Nicolás	1
Coll Britapaja, José	1
Corchado, Manuel María	1
B. de Castro, Román	1
Alba, Joaquín de	1

UENTES: Archivo de las Cortes. Sección de Expediente, Legajo 61, número 18. Archivo Histórico Nacional.
Sección de Ultramar, Legajo 5111/31-32.

<u>DISTRITO</u>	<u>COLEGIO</u>	<u>HABITANTES</u>	<u>ELECTORES</u>	<u>VOTANTES</u>	<u>CANDIDATOS</u>	<u>VOTOS</u>
CAPITAL	San Juan	17,805	2,075	1,631	Sanz y Posse, José Laureano Pastos, Luis María Vida y Palacios, Fernando	869 550 169
"	Sabana del Palmar	5,469	130	112	Pastor, Luis María Sanz y Posse, José Laureano Vida y Palacios, Fernando	87 20 5
"	Naranjito	3,846	106	100	Pastor, Luis María	100
"	Bayamón	9,690	287	231	Pastor, Luis María Sanz y Posse, José Laureano Vida y Palacios, Fernando	143 77 9
"	Toa baja	3,219	97	87	Sanz y Posse, José Laureano Pastor, Luis María Vida y Palacios, Fernando	38 24 2
					OTROS CANDIDATOS	
					Baldorioty de Castro, Román Guillermeti, Fidel	10 1
VEGA BAJA	Vega baja	8,459	200	163	Alvarez Peralta, José Antonio Marqués de Casacaracena	151 12

Vega baja	Vega alta	5,290	82	63	Alvarez Peralta, José Antonio	63
"	Morovis	7,846	207	152	Alvarez Peralta, José Antonio Marqués de Casacaracena	146 6
"	Corozal	9,726	156	131	Alvarez Peralta, José Antonio Marqués de Casacaracena	102 29
"	Toa alta	5,130	---	132	Alvarez Peralta, José Antonio Marqués de Casacaracena	121 11
"	Dorado	3,004	84	59	Alvarez Peralta, José Antonio Marqués de Casacaracena	51 8
OTROS CANDIDATOS						
Gautier, Carlos 1						
Bonet, Francisco María (Pbro). 1						
ARECIBO	Arecibo	20,784	685	561	Padial, Luis Fernández Martínez, José Ramón	347 211
"	Manatí	12,424	334	295	Padial y Vizcarrondo, Luis Fernández Martínez, José Ramón	168 127
"	Ciales	6,662	160	140	Padial y Vizcarrondo, Luis Fernández Martínez, José Ramón	82 58
OTROS CANDIDATOS						
Storer, Carlos Federico 1						

QUEBRADILLAS	Quebradillas	6,014	149	114	Hernández Arvizu, Juan Antonio	111
					Escoriaza, Juan	2
					-en blanco	1
"	Moca	10,456	230	200	Hernández Arvizu, Juan Antonio	200
"	Camuy	8,334	238	159	Hernández Arvizu, Juan Antonio	138
					Cuchí, José	18
					-inútiles	3
"	San Sebastián	10,892	302	272	Hernández Arvizu, Juan Antonio	272
"	Hatillo	7,061	172	92	Hernández Arvizu, Juan Antonio	92
AGUADILLA	Aguadilla	13,101	1,426	1,188	Escoriaza, Eurípides	408
					Planas y Casas, José	110
					García Maitín, Manuel	2
"	Aguada	9,063	267	243	Escoriaza, Eurípides	230
					Planas y Casas, José	13
"	Rincón	5,496	90	80	Escoriaza, Eurípides	80
"	Isabela	12,586	374	346	Escoriaza, Eurípides	328
					Planas y Casas, José	10
					García Maitín, Manuel	6
					OTROS CANDIDATOS	
					Luciano, Juan Ramón	1

MAYAGUEZ	Mayaguez	29,127	1,604	1,193	Corchado y Juarbe, Manuel Nadal, Esteban Baldorioty de Castro, Román	698 484 1
"	Añasco	13,189	350	309	Corchado y Juarbe, Manuel Nadal, Esteban	250 59
SAN GERMAN	San Germán	42,399	1,341	947	Acosta y Calvo, José Julián Fajardo, Carlos -perdidos	778 167 2
SABANA GRANDE	Sabana grande	8,461	242	200	Baldorioty de Castro, Román Elías y Carbonell, José	174 26
"	Yauco	15,404	222	183	Baldorioty de Castro, Román Elías y Carbonell, José Alvarez y Osorio, Aníbal	133 49 1
"	Cabo rojo	15,437		295	Baldorioty de Castro, Román, Elías y Carbonell, José Alvarez y Osorio, Aníbal -perdidos	233 59 1 2
PONCE	Ponce	24,959	1,686	1,303	Baldorioty de Castro, Román Prats, Juan Tirado, Guillermo	835 456 6
"	Peñuelas	9,177	233	211	Baldorioty de Castro, Román Prats, Juan	193 18

Ponce	Guayanilla	6,283	150	123	Prats, Juan	78
					Baldorioty de Castro, Román	44
					OTROS CANDIDATOS	
					Font y Comas, Luis	2
GUAYAMA	Guayama	5,899	327	254	López de Bustamante, Eugenio	173
					Cintrón, José Facundo	70
"	Salinas	2,336	84	75	Cintrón, José Facundo	43
					López de Bustamante, Eugenio	28
"	Cayey	7,445	178	165	Cintrón, José Facundo	93
					López de Bustamante, Eugenio	72
"	Arroyo	3,934	208	176	López de Bustamante, Eugenio	91
					Cintrón, José Facundo	84
"	Patillas	7,666	139	118	Cintrón, José Facundo	84
					López de Bustamante, Eugenio	24
"	Maunabo	3,200	44	37	López de Bustamante, Eugenio	29
					Cintrón, José Facundo	8
"	Yabucoa	8,949	254	228	Cintrón, José Facundo	183
					López de Bustamante, Eugenio	45
"	Santa Isabel	1,721	85	71	Cintrón, José Facundo	59
					López de Bustamante, Eugenio	9

OTROS CANDIDATOS

-715-

Humacao	Vieques	Sanromá, Joaquín María	53
		López Sánchez, Pedro	16
		OTROS CANDIDATOS	
		Colón, Juan A.	1
RIO PIEDRAS	Rio Piedras	Quiñones, Francisco Mariano	66
		Oteiza, Francisco Javier de	59
		Ballesteros, Juan Gualberto	12
"	Guainabo	Quiñones, Francisco Mariano	51
		Oteiza, Francisco Javier de	14
		Ballesteros, Juan Gualberto	4
"	Trujillo alto	Quiñones, Francisco Mariano	52
		Ballesteros, Juan Gualberto	22
		Oteiza, Francisco Javier de	12
"	Trujillo bajo	Oteiza, Francisco Javier de	48
		Quiñones, Francisco Mariano	22
		Ballesteros, Juan Gualberto	5
"	Carolina	Quiñones, Francisco Mariano	74
		Oteiza, Francisco Javier de	24
		Ballesteros, Juan Gualberto	15
"	Loiza	Quiñones, Francisco Mariano	59
		Oteiza, Francisco Javier de	24
		Ballesteros, Juan Gualberto	4

Rio Piedras	Rio grande	5,726	88	78	Oteiza, Francisco Javier de Quiñones, Francisco Mariano Ballesteros, Juan Gualberto	36 36 6
					OTROS CANDIDATOS	
					Ballesteros, Juan Alverto (sic)	1
CAGUAS	Caguas	12,764	285	252	Blanco y Sosa, Julián E. Borrás, Bartolomé Mata, Pedro	144 94 16
"	Aguas buenas	6,656	138	103	Blanco y Sosa, Julián E. Mata, Pedro Borrás, Bartolomé	89 13 1
"	Hato grande	9,783	203	167	Borrás, Bartolomé Blanco y Sosa, Julián E. Mata, Pedro	87 57 23
"	Gurabo	4,556	148	133	Blanco y Sosa, Julián E. Borrás, Bartolomé Mata, Pedro	105 19 9
"	Juncos	6,160	123	106	Blanco y Sosa, Julián E. Borrás, Bartolomé Mata, Pedro	54 26 21

Caguas

OTROS CANDIDATOS

Almodóvar, Genaro 1

COAMO

Coamo	6,176	198	170	Borrell, Félix	102
				Padial, Luis	68

"

Barros	6,703	88	83	Padial y Vizcarrondo, Luis	62
				Borrell, Félix	21

"

Barranquitas		188	169	Padial y Vizcarrondo, Luis	96
				Borrell, Félix	72

"

Juana Díaz	15,006	316	277	Padial y Vizcarrondo, Luis	179
				Borrell, Félix	9

"

Aibonito	2,968	109	97	Borrell, Félix	86
				Padial y Vizcarrondo, Luis	7

"

Cidra	7,023	144	103	Borrell, Félix	52
				Padial y Vizcarrondo, Luis	51

OTROS CANDIDATOS

Padial y Vizcarrondo, Félix (sic) 1

UTUADO

Utuaado	19,547	443	381	Ledesma y Navajas, Gregorio	360
				Plaja, Sebastián	21

Utuario	Lares	14,467	380	230	Plaja y Vidal, Sebastián	177
					Ledesma y Navajas, Gregorio	53
"	Adjuntas	8,243	300	242	Ledesma y Navajas, Gregorio	236
					Plaja, Sebastián	6

FUENTES: Archivo Histórico Nacional (Madrid), Sección de Ultramar, Legajo 5104/27, números 8 y 9 y Legajo 5104/26, números 5 a 8.

<u>DISTRITO</u>	<u>COLEGIO</u>	<u>ELECTORES</u>	<u>VOTANTES</u>	<u>CANDIDATOS</u>	<u>VOTOS</u>
CAPITAL	San Juan	2,801	2,139	Sanz y Posse, José Laureano Fernández de Córdova, Fernando Loredo y Florez, Ricardo Rengifo Palacios, Juan Pérez, Leonardo -en blanco -duplicada -anulados	1,834 274 2 1 1 6 1 2
"	Sabana del P.	130	114	Fernández de Córdova, Fernando Sanz y Posse, José Laureano -anulada	93 20 1
"	Naranjito	106	83	Fernández de Córdova, Fernando	83
"	Bayamón	303	216	Sanz y Posse, José Laureano Fernández de Córdova, Fernando	128 88
"	Toa baja	113	70	Sanz y Posse, José Laureano Fernández de Córdova, Fernando	53 17
VEGA BAJA	Vega baja	206	170	Alvarez Peralta, José Antonio Terol y Ortega, Rafael Diego, Francisco	148 21 1
"	Vega alta	82	72	Alvarez Peralta, José Antonio Terol y Ortega, Rafael -en blanco	65 4 3
					-720-

Vega baja	Morovis	207	187	Alvarez Peralta, José Antonio Terol y Ortega, Rafael	180 7
"	Corozal	156	136	Alvarez Peralta, José Antonio Terol y Ortega, Rafael -anulados	81 40 15
"	Toa alta	171	134	Alvarez Peralta, José Antonio Terol y Ortega, Rafael	103 31
"	Dorado	84	64	Terol y Ortega, Rafael Alvarez Peralta, José Antonio -anulados	36 27 1
ARECIBO	Arecibo	1,481	762	Marqués de la Esperanza Padial, Luis Regipoll, Francisco González Salazar, Jacobo Alvarado y Parra, José Zeno, Manuel Roses, Miguel -en blanco -anulados -ilegible	704 40 1 1 1 1 1 11 1 1
"	Manatí	334	144	Marqués de la Esperanza Padial y Vizcarrondo, Luis -anulado	137 6 1

Arecibo	Ciales	164	94	Marqués de la Esperanza	82
				Padial, Luis	2
				-en blanco	10
QUEBRADILLAS	Quebradillas	91	83	Vida y Palacios, Fernando	83
"	Moca	236	197	Mosquera, Tomás María	197
"	Camuy	238	163	Mosquera, Tomás María	163
"	San Sebastián	307	245	Mosquera, Tomás María	241
				Soria, Arturo	3
				-en blanco	1
"	Hatillo	172	107	Mosquera, Tomás María	107
AGUADILLA	Aguadilla	829	638	Vida y Palacios, Fernando	555
				Borrell, Félix	54
				Ugarte, Pedro	20
				(ilegible)	7
				-en blanco	2
"	Aguada	272	220	Vida y Palacios, Fernando	210
				Bona, Félix de	10
"	Rincón	---	---	-----	---
"	Isabela	374	327	Boba, Félix de	293
				Vida y Palacios, Fernando	33
				Serrano, Zenón	1

MAYAGUEZ	Mayaguez	1,957	1,073	González Llorente, Antonio	789
				Corchado y Juarbe, Manuel	284
"	Añasco	350	238	Corchado y Juarbe, Manuel	154
				González Llorente, Antonio	84
"	Las Marías	---	---	-----	---
SAN GERMAN	San Germán	1,379	445	Sedano, Carlos	430
				Pascasio de Escoriaza, José María	13
				López, Ramón B.	1
SABANA GRANDE	Sabana grande	242	122	Molina y Brotón, José María	101
				Labra, Rafael María de	21
"	Yauco	221	177	Labra, Rafael María de	131
				Molina, José María	46
"	Cabo rojo	334	253	Labra, Rafael María de	154
				Molina y Brotons. José María	99
PONCE	Ponce	1,851	1,267	Becerra, Manuel	724
				Cazurro, Mariano Zacarías	536
				Carreras, Jaime	6
				Tirado, Heraclio	1
"	Peñuelas	233	194	Beserra (sic), Manuel	133
				Cazurro, Mariano	21
"	Guayanilla	156	123	Cazurro, Mariano Zacarías	64
				Becerra, Manuel	59

GUAYAMA	382	285	López de Bustamante, Eugenio	232
			Cintrón, José Facundo	52
			Alonso Villados, Joaquín	1
"	87	68	Cintrón, José Facundo	39
			López Bustamante, Eugenio	27
			Casavedo, Fidel	1
"	186	135	López Bustamante, Eugenio	78
			Cintrón, José Facundo	55
			Colón, Valeriano	1
			-en blanco	1
"	212	180	López Bustamante, Eugenio	99
			Cintrón, José Facundo	78
			-en blanco	3
"	139	119	Cintrón, José Facundo	74
			López Bustamante, Eugenio	44
			-en blanco	1
"	43	34	López Bustamante, Eugenio	31
			Cintrón, José Facundo	3
"	254	170	Cintrón, José Facundo	112
			López Bustamante, Eugenio	58
			Dapena, Aurelio	1
"	---	----	-----	---

HUMACAO	Humacao	86	71	Sanromá, Joaquín María -en blanco	20 1
				Cintrón, José Facundo	53
				López Bustamante, Eugenio	18
"	Luquillo	110	87	Sanromá, Joaquín María	65
				Buxó y Baster, Francisco	22
"	Piedras	152	135	Sanromá, Joaquín María	115
				Buxó y Baster, Francisco	20
"	Naguabo	235	192	Sanromá, Joaquín María	126
				Buxó y Baster, Francisco	65
				Meléndez, Cirilo	1
"	Ceiba	91	80	Sanromá, Joaquín María	71
				Bussó y Baster, Francisco	9
"	Fajardo	239	201	Sanromá, Joaquín María	135
				Bussó y Baster, Francisco	65
				-anulado	1
RIO PIEDRAS	Rio Piedras	204	155	Oteiza, Francisco Javier de	122
				García Maitín, Manuel	29
				Saldaña, Maximino	2
				-en blanco	1
"	Guainabo	83	66	García Maitín, Manuel	35
				Oteiza, Francisco Javier de	26
				-anulados	5

Rio Piedras	Trujillo alto	95	78	Oteiza, Francisco Javier de García Maitín, Manuel -anulados	37 36 4
"	Trujillo bajo	93	79	Oteiza, Francisco Javier de García Maitín, Manuel	74 5
"	Carolina	131	94	Oteiza, Francisco Javier de García Maitín, Manuel	62 27
"	Loiza	119	99	García Maitín, Manuel Oteiza, Francisco Javier de -anulados	57 40 2
"	Rio grande	---	66	García Maitín, Manuel Oteiza, Francisco Javier de	34 32
CAGUAS	Caguas	272	234	Diz Romero, Pedro Blanco y Sosa, Julián Calvo, Joaquín -nulos -en blanco	132 97 2 2 1
"	Aguas buenas	138	113	Blanco y Sosa, Julián Diz Romero, Pedro	72 41
"	Hato grande	204	171	Diz Romero, Pedro Blanco y Sosa, Julián Benítez, Juan -anulados	138 29 2 2

Caguas	Gurabo	148	111	Blanco y Sosa, Julián Diz Romero, Pedro Llorens y Robles, José -anulados	76 32 2 1
"	Juncos	124	113	Blanco y Sosa, Julián Diz Romero, Pedro Saldaña, Eladio -anulados -en blanco	60 50 1 1 1
COAMO	Coamo	200	169	Cortés y Llanos, Bonifacio Torres y Alvarado, Ramón	101 68
"	Barros	88	66	Cortés y Llanos, Bonifacio Torres y Alvarado, Ramón	38 28
"	Barranquitas	---	193	Cortés Llanos, Bonifacio Torres y Alvarado, Ramón	114 79
"	Juana Díaz	345	302	Torres y Alvarado, Ramón Cortés Llanos, Bonifacio Blanco, Pedro -en blanco	156 143 1 2
"	Aibonito	114	100	Cortés Llanos, Bonifacio	100
"	Cidra	154	95	Cortés Llanos, Bonifacio Torres y Alvarado, Ramón	49 46

UTUADO	Uturado	446	154	Gallostra y Frau, José	139
				Ledesma y Navajas, Gregorio	10
				Artan, Miguel	1
				Robert, José	1
				Alvarez Osorio, Anibal	1
				-en blanco	2
"	Lares	380	309	Gallostra y Frau, José	275
				Alvarez Osorio, Anibal	44
"	Adjuntas	300	231	Alvarez Osorio, Anibal	215
				Gallostra y Frau, José	16

FUENTES: Archivo Histórico Nacional (Madrid). Sección de Ultramar, Legajo 5102/1 a 24. Archivo General de Puerto Rico (San Juan). Colección de la Diputación Provincial, Legajo 128, expediente 15.

<u>DISTRITO</u>	<u>COLEGIO</u>	<u>ELECTORES</u>	<u>VOTANTES</u>	<u>CANDIDATOS</u>	<u>VOTOS</u>
CAPITAL	San Juan	2,225	1,173	Sanz y Posse, José Laureano Fernández de Córdova, Fernando Sánchez Manjón, Enrique Céspedes, Carlos Manuel -en blanco -ilegibles	1,166 1 1 1 3 1
"	Sabana del P.	130	97	Sanz y Posse, José Laureano -en blanco -anulados	11 85 1
"	Naranjito	106	86	-en blanco	86
"	Bayamón	299	195	Sanz y Posse, José Laureano -en blanco - anulados	84 110 1
"	Toa baja	113	34	Sanz y Posse, José Laureano Fernández de Córdova, Fernando -anulados	31 2 1
VEGA BAJA	Vega baja	200	144	Alvarez Peralta, José Antonio Walls Beltrán de Lis, Isidoro Venegas, Rafael -en blanco	136 1 1 6

Vega baja	Vega alta	82	73	Alvarez Peralta, José Antonio -en blanco	72
"	Morovis	208	176	Alvarez Peralta, José Antonio Castelar, Emilio	175
"	Corozal	156	97	Alvarez Peralta, José Antonio	97
"	Toa alta	163	108	Alvarez Peralta, José Antonio	108
"	Dorado	84	41	Alvarez Peralta, José Antonio	41
ARECIBO	Arecibo	685	345	Padial, Luis	345
"	Manatí	336	176	Padial, Luis Figuerras, Estanislao Campo, Pablo -en blanco	173
"	Ciales	163	79	Padial, Luis -en blanco	78
QUEBRADILLAS	Quebradillas	149	86	Soria, Arturo -en blanco	85
"	Moca	233	191	Soria, Arturo	191
"	Camuy	238	163	Soria y Mata, Arturo	163
"	San Sebastián	301	177	Soria, Arturo Salguero, Rafael -en blanco -anulados	172

Quebradillas	Hatillo	168	71	Soria y Mata, Arturo -anulados	69 2
AGUADILLA	Aguadilla	761	371	Borrell, Félix Ugarte, Pedro Reguero, Francisco Vida Palacios, Fernando -en blanco	358 5 2 1 5
"	Aguada	264	176	Borrell, Félix Bona, Félix Feijoo, Isidro	173 1 1
"	Rincón	91	83	Borrell, Félix	93
"	Isabela	374	217	Borrell, Félix Bona, Félix de -en blanco	318 4 3
MAYAGUEZ	Mayagüez	1,604	647	Moret y Prendergast, Segismundo Narváez, Ramón María Sanz y Posse, Laureano Nadal, Esteban Serra, Juan -en blanco	633 1 1 1 1 10
"	Añasco	361	239	Moret y Prendergast, Segismundo Vizcarrondo, Julio -en blanco	231 1 7

SAN GERMAN	San Germán	1,341	723	Escoriaza, Eurípides	686
				Espartero, Baldomero	1
				-anulados	36
SABANA GRANDE	Sabana grande	242	177	Labra, Rafael María de	174
				Fernández de Córdova, Fernando	3
"	Yauco	221	135	Labra, Rafael María de	1
				Gasset y Artime, Eduardo	134
"	Cabo rojo	444	300	Labra, Rafael María de	1
PONCE	Ponce	1,982	809	Fernández de Córdova, Fernando	300
				Blanch, Domingo	807
				Ferrer, Manuel	1
"	Peñuelas	233	184	Fernández de Córdova, Fernando	184
"	Guayanilla	185	63	Fernández de Córdova, Fernando	63
GUAYAMA	Guayama	342	118	Cintrón, José Facundo	107
				López Bustamante, Eugenio	9
				-en blanco	1
				-anulados	1
"	Salinas	86	51	Cintrón, José Facundo	49
				-en blanco	1
				-anulado	1
"	Cayey	184	82	Cintrón, José Facundo	82

Guayama	Arroyo	208	86	Cintrón, José Facundo	86
"	Patillas	139	95	Cintrón, José Facundo	89
				Bernier, Modesto	1
				Garrafa, José	1
				Blanco y Sosa, Julián	1
				Gasset y Artime, Eduardo	1
				Cintrón, Marcelino	1
				-en blanco	1
"	Maunabo	43	10	Cintrón, José Facundo	8
				Baldrich y Palau, Gabriel	2
"	Yabucoa	254	172	Cintrón, José Facundo	170
				Ortiz, Lorenzo	2
"	Santa Isabel	89	51	Cintrón, José Facundo	50
				Roda, Juan Nepomuceno	1
HUMACAO	Humacao		217	Sanromá, Joaquín María	208
				Balbás, Casiano	4
				Fuentes, Antonio	1
				Verlanga, Valentín	1
				Carmona, José	1
				González, José	1
				-en blanco	1
"	Iuquillo	110	70	Sanromá, Joaquín María	70

Humacao	Piedras	152	104	Sanromá, Joaquín María	104
"	Naguabo	242	146	Sanromá, Joaquín María	146
"	Ceiba	92	70	Sanromá, Joaquín María	70
"	Fajardo	238	145	Sanromá, Joaquín María	144
				-en blanco	1
"	Vieques (no se constituyó Colegio)				
RIO PIEDRAS	Rio Piedras	153	62	García Maitín, Manuel	62
"	Guainabo	81	51	García Maitín, Manuel	51
"	Trujillo alto	95	61	García Maitín, Manuel	60
				-anulados	1
"	Trujillo bajo	93	36	García Maitín, Manuel	35
				-anulados	1
"	Carolina	128	63	García Maitín, Manuel	63
"	Loiza	119	73	García Maitín, Manuel	72
				-anulados	1
"	Rio grande	101	47	García Maitín, Manuel	47
CAGUAS	Caguas	293	131	Blanco y Sosa, Julián	128
				Jiménez Sicardo, Manuel	1
				Más, Delfín	1
				-anulados	1

Caguas	Aguas buenas	138	78	Blanco y Sosa, Julián Navarro, Manuel	77 1
"	Hato grande	203	100	Blanco y Sosa, Julián	100
"	Gurabo	148	111	Blanco y Sosa, Julián	111
"	Juncos	127	78	Blanco y Sosa, Julián Almovar, Genaro	77 1
COAMO	Coamo	200	71	Mosquera, Tomás María	71
"	Barros	89	50	Mosquera, Tomás María	50
"	Barranquitas	187	101	Mosquera, Tomás María	101
"	Juana Díaz	340	217	Mosquera, Tomás María	216
"	Aibonito	(no se constituyó el Colegio)			
"	Cidra	144	106	Mosquera, Tomás María Castelar, Emilio Bona, Félix de Bona Acevedo, Manuel María Sagasta, Práxedes Mateo	101 2 1 1 1
UTUADO	Utuaado	443	249	Alvarez Osorio, Aníbal	249
"	Lares	380	123	Alvarez Osorio, Aníbal -en blanco	121 2

Utuaado	Adjuntas	302	231	Alvarez Osorio, Anibal	231
---------	----------	-----	-----	------------------------	-----

FUENTE: Archivo Histórico Nacional (Madrid). Sección de Ultramar, Legajo 5102/107 al 174

(1873)

<u>DISTRITO</u>	<u>COLEGIO</u>	<u>ELECTORES</u>	<u>VOTANTES</u>	<u>CANDIDATOS</u>	<u>VOTOS</u>
CAPITAL	San Juan	3,458	1,063	Celis Aguilera, José de	1,042
				Sánchez Manjón, Enrique	3
				Puig Ilagostera, José	2
				Martínez Plowes, Juan	2
				Macías Castelo, Demetrio	1
				Buscaillo, Pedro	1
				Jesús Galván, Manuel de	1
				Ollo Tomatino, Pedro	1
				Salgado, José R.	1
				Berriere y Pérez, José	1
				Pérez, Leonardo	1
				Sanz y Posse, José Laureano	1
				Palma y Ortega, José	1
				-en blanco e inútiles	6
"	Sabana del P.	453	377	Celis Aguilera, José de	377
"	Naranjito	393	289	Celis Aguilera, José de	287
				Jesús Galván, Manuel de	2
"	Bayamón	568	355	Celis Aguilera, José de	355
"	Toa baja	193	(no se constituyó el Colegio)		

VEGA BAJA	Vega baja	536	410	Alvarez Peralta, José Antonio	405
				Walls y Beltrán de Lis, Isidoro	2
				Valencia, Sandalio	1
				Santana y Quintero, Natalio	1
				Gautier, Carlos	1
"	Vega alta	242	213	Alvarez Peralta, José Antonio	197
				Adell, Domingo	6
				Espartero, Baldomero	1
				Fernández, José	1
				Conde de Canga Argüelles	1
				Rivera, José Rafael	1
				Navas, Luis Demetrio	1
				Fernández, Ramón	1
				Guardiola, Nicolás	1
				Cardona, Bernardino	1
				-en blanco	2
"	Morovis	476	383	Alvarez Peralta, José Antonio	326
				Castelar, Emilio	46
				Figueras, Estanislao	3
				Echavarri, Ramón	2
				Santana, Natalio	1
				Sorní, José Cristobal	1
				Chao, Eduardo	1
				Salmerón, Nicolás	1
				Tutau, Juan	1
				Pi y Margall, Francisco	1

Vega baja	Corozal	581	464	Alvarez Peralta, José Antonio	464
"	Toa alta	316	210	Alvarez Peralta, José Antonio	210
"	Dorado	157	99	Alvarez Peralta, José Antonio	99
ARECIBO	Arecibo	1,279	788	Padial y Vizcarrondo, Luis	788
"	Manatí	753	503	Padial y Vizcarrondo, Luis Oreyro y Villavicencio, José	502 1
"	Ciales	609	429	Padial y Vizcarrondo, Luis	429
QUEBRADILLAS	Quebradillas	396	260	Regidor y Jurado, Manuel Soria, Arturo Acosta y Calvo, José Julián Labra, Rafael María de	154 104 1 1
"	Moca	734	578	Regidor y Jurado, Manuel Soria, Arturo -en blanco	570 3 5
"	Camuy	530	327	Soria, Arturo Regidor y Jurado, Manuel -en blanco	309 17 1
"	San Sebastián	721	536	Regidor y Jurado, Manuel Caldé, Manuel González, José Claudio -en blanco	532 1 1 2

Quebradillas	Hatillo	469	251	Regidor y Jurado, Manuel	245
				Soria, Arturo	5
				Torres Feliciano, Francisco	1
AGUADILLA	Aguadilla	931	468	Torre y Mendieta, Nemesio de la	467
				Borrell, Félix	1
"	Aguada	661	415	Torre y Mendieta, Nemesio de la	415
"	Rincón	366	315	Torre y Mendieta, Nemesio de la	315
"	Isabela	880	826	Torre y Mendieta, Nemesio de la	826
MAYAGUEZ	Mayagüez	2,264	1,036	Corchado y Juarbe, Manuel	1,021
				Buil La Plaza, Camilo	6
				Valdivieso, Enrique	1
				Calvo y Alonzo (sic), Manuel	1
				-inútiles	7
"	Añasco	839	641	Corchado y Juarbe, Manuel	641
"	Marías	447	241	Corchado y Juarbe, Manuel	238
				Ferrer y Giran, Fernando	1
				Manor, José	1
				Ramos, Francisco	1
SAN GERMAN	San Germán	2,422	1,370	Quiñones, José Marcial	1,336
				Cabrera y Escandón, Vicente	27
				Quiñones, Francisco Mariano	4
				Quiñones y Vizcarrondo, Eduardo	2
				Montalvo y González, Dolores	1

SABANA GRANDE	Sabana grande	541	415	Labra, Rafael Maria de	415
"	Yauco	1,187	863	Labra, Rafael Maria de Castelar, Emilio	860 2
				-en blanco	1
"	Cabo rojo	940	685	Labra, Rafael Maria de	685
PONCE	Ponce	3,422	1,377	Ayuso y Colina, José Manzano Fernández, Francisco Morales Martí, Francisco Rodríguez Villalón, José Calvela Abadía, Manuel	1,372 2 1 1 1
"	Peñuelas	633	441	Ayuso y Colina, José	441
"	Guayanilla	403	235	Ayuso y Colina, José -en blanco	234 1
GUAYAMA	Guayama	1,008	370	Cintrón, José Facundo Castelar, Emilio Gómez Pulido, Ramón	365 3 2
"	Salinas	214	158	Cintrón, José Facundo Lujan y Herraiez, Juan	157 1
"	Cayey	760	447	Cintrón, José Facundo	447
"	Arroyo	422	234	Cintrón, José Facundo Cantaclaro, Severo	233 1

Guayama	Patillas	469	323	Cintrón, José Facundo	323
"	Guainabo	270	227	Cintrón, José Facundo	227
"	Yabucoa	537	387	Cintrón, José Facundo	387
"	Santa Isabel	117	94	Cintrón, José Facundo -en blanco	93 1
HUMACAO	Humacao	763	522	Sanromá, Joaquín María Soler, Antonio Teniente González Carreras, Gervasio -en blanco	518 1 1 1 1
"	Luquillo	265	233	Sanromá, Joaquín María	233
"	Piedras	472	402	Sanromá, Joaquín María	402
"	Naguabo	345	299	Sanromá, Joaquín María	299
"	Ceiba	168	135	Sanromá, Joaquín María	135
"	Fajardo	413	265	Sanromá, Joaquín María Peares, Juan	264 1
"	Vieques	307	235	Sanromá, Joaquín María	235
RIO PIEDRAS	Rio Piedras	337	83	García Maytín, Manuel	83
"	Guainabo	355	270	García Maitín, Manuel	270

Rio Piedras	Trujillo alto	212	173	García Maitín, Manuel	173
"	Trujillo bajo	260	252	García Maitín, Manuel	201
"				Rodríguez Harreto, Andrés	51
"	Carolina	363	131	García Maitín, Manuel	131
"	Loiza	528	425	García Maitín, Manuel	425
"	Rio grande	260	196	García Maitín, Manuel	196
CAGUAS	Caguas	730	504	Blanco y Sosa, Julián	504
"	Aguas buenas	355	292	Blanco y Sosa, Julián	291
"				Navarro, Manuel	1
"	Hato grande	720	491	Blanco y Sosa, Julián	491
"	Gurabo	326	274	Blanco y Sosa, Julián	274
"	Juncos	367	313	Blanco y Sosa, Julián	313
COAMO	Coamo	521	304	Betancourt, José Ramón	303
"				Braschi, Angulo	1
"	Barros	467	297	Carazo, Marcos Sergio	295
"				Rosaño, Mauricio	2
"	Barranquitas	473	243	Betancourt, José Ramón	239
				Muñoz y Barrios, Luis Ramón	1
				Gómez Pulido, Ramón	1

Coamo	Barranquitas (cont,)		Sanz, José Laureano	1
"	Juana Díaz	1,095	Betancourt, José Ramón	739
			Torres Alvarado, Ramón	15
			Blanco y Sosa, Julián	1
			Lloréns, José	1
			-inútiles	1
"	Aibonito	281	Betancourt, José Ramón	102
			Torre, Simón de la	6
			Gil Sánchez, Manuel	1
"	Cidra	451	Betancourt, José Ramón	306
UTUADO	Utuaado	1,298	Lugo Viña, Wenceslao	934
"	Lares	889	Lugo Viña, Wenceslao	412
"	Adjuntas	730	Lugo Viña, Wenceslao	559

FUENTE: Gaceta de Puerto Rico, 1873, jueves 15 de mayo. Archivo Histórico Nacional (Madrid). Sección de Ultramar, Legajo 5105/1 al 17. Archivo General de Puerto Rico. Colección de la Diputación Provincial, Legajo 128, expediente 15.

(1876)

<u>DISTRITO</u>	<u>COLEGIO</u>	<u>ELECTORES DISTRITO</u>	<u>VOTANTES</u>	<u>CANDIDATOS</u>	<u>VOTOS</u>
CAPITAL	San Juan	2,880	1,035	Fernández Martínez, José Ramón	965
				Sáenz Hermúa, Tomás	30
				Ruiz del Pino, Antonio	4
				Duque de Veragua	1
				Sáenz Hermosa, Tomás	1
				Orcasitas, José	5
				Somalo, Francisco	1
				-inútiles	21
				-en blanco	7
"	Sabana del P.		49	Fernández Martínez, José Ramón	49
"	Naranjito		51	Fernández Martínez, José Ramón	51
"	Bayamón		73	Fernández Martínez, José Ramón	71
				Cubián, Cándido	1
				-en blanco	1
"	Toa baja		92	Fernández Martínez, José Ramón	92
VEGA BAJA	Vega baja	968	98	Martorell y Arabig, Antonio	96
				Padilla, José G.	1
				Barcia, Roque	1
"	Vega alta		50	Martorell y Arabig, Antonio	49
				-en blanco	1

-744-

Vega baja	Morovis	102	Martorell y Arabig, Antonio	102
"	Corozal	153	Martorell y Arabig, Antonio	153
"	Toa alta	96	Martorell y Arabig, Antonio Sáenz Hermúa, Tomás	93 3
"	Dorado	77	Martorell y Aravig, Antonio	77
ARECIBO	Arecibo	241	Albacete, Salvador	241
"	Manatí	178	Albacete, Salvador	178
"	Ciales	82	Albacete, Salvador	82
QUEBRADILLAS	Quebradillas	100	Valera, Juan	100
"	Moca	33	Valera, Juan -en blanco	32 1
"	Camuy	183	Valera, Juan	183
"	San Sebastián	227	Valera, Juan	227
"	Hatillo	165	Valera, Juan	165
AGUADILLA	Aguadilla	458	Duque de Veragua Gil, José	457 1
"	Aguada	133	Duque de Veragua	133

Aguadilla	Rincón	94	Duque de Veragua	94
"	Isabela	129	Duque de Veragua	129
MAYAGUEZ	Mayagüez	817	Torres de Mendoza, Luis	812
		2,556	Martínez Santana, Rafael	3
			Díez Sevilla, Bernardo	1
			-en blanco	1
"	Añasco	202	Torres de Mendoza, Luis	201
			Portilla, Segundo de la	1
"	Marías	183	Torres de Mendoza, Luis	183
SAN GERMAN	San Germán	1,327	Cartagena, José Agustín	1,325
		2,293	-en blanco	2
"	Hormigueros	151	Cartagena, José Agustín	151
"	Maricao	302	Cartagena, José Agustín	302
SABANA GRANDE	Sabana grande	183	Ledesma y Navajas, Enrique	183
		1,233	Ledesma y Navajas, Enrique	263
"	Yauco	263	Ledesma y Navajas, Enrique	319
"	Cabo rojo	319	Pérez Valdivieso, Vicente	450
PONCE	Ponce	457	-inutilizados	1
		2,031	-en blanco	6
"	Peñuelas	158	Pérez Valdivieso, Vicente	158

Ponce	Guayanilla	106	Pérez Valdivieso, Vicente	106
GUAYAMA	Guayama	152	Soler y Bou, Antonio	152
"	Salinas	41	Soler y Bou, Antonio	41
"	Cayey	165	Soler y Bou, Antonio -en blanco	164 1
"	Arroyo	86	Soler y Bou, Antonio Cadórniga, Isidro	85 1
"	Patillas	69	Soler y Bou, Antonio	69
"	Maunabo	48	Soler y Bou, Antonio	48
"	Yabucoa	173	Soler y Bou, Antonio	173
"	Santa Isabel	43	Soler y Bou, Antonio	43
HUMACAO	Humacao	286	Argenti, Nicolás Aspúa, Bartolomé	284 2
"	Luquillo	89	Argenti, Nicolás	89
"	Piedras	57	Argenti, Nicolás	57
"	Naguabo	140	Argenti, Nicolás	140
"	Ceiba	38	Argenti, Nicolás	38

Humacao	Fajardo	130	Argenti, Nicolás	130
"	Vieques	127	Argenti, Nicolás	127
RIO PIEDRAS	Rio Piedras	351	Dacarrete, Angel María	351
"	Trujillo alto	54	Dacarrete, Angel María	50
			Dacarrete, José María	1
			-nulas	3
"	Carolina	233	Dacarrete, Angel María	233
"	Loiza	91	Dacarrete, Angel María	91
"	Rio grande	68	Dacarrete, Angel María	63
			Zechini, Antonio	3
			Sampol, Antonio	1
			-en blanco	1
CAGUAS	Caguas	220	Gaviña y Alvarez, Luis	220
"	Aguas buenas	66	Gaviña y Alvarez, Luis	66
"	Hato grande	174	Gaviña y Alvarez, Luis	174
"	Gurabo	71	Gaviña y Alvarez, Luis	68
			-inútiles	3
"	Juncos	109	Gaviña y Alvarez, Luis	109

COAMO	Coamo	1,011	176	Sanz y Posse, Salustiano	176
"	Barros		105	Sanz y Posse, Salustiano	105
"	Barranquitas		55	Sanz y Posse, Salustiano	55
"	Juana Díaz		181	Sanz y Posse, Salustiano	127
				Castelar, Emilio	2
				Colón y Moraga, Cristino	1
				Colón, Juan	1
				Torres, Ramón	1
				-en blanco	50
"	Aibonito		115	Sanz y Posse, Salustiano	115
"	Cidra		87	Sanz y Posse, Salustiano	86
				-en blanco	1
UTUADO	Utuaado	966	66	Hoppe, Federico	66
"	Lares		287	Hope, Federico	287
"	Adjuntas		61	Hoppe, Federico	57
				Valdivieso, Vicente	2
				-en blanco	2

FUENTE: Gaceta de Puerto Rico, 1876, 22 de febrero.

(1879)

<u>DISTRITO</u>	<u>COLEGIO</u>	<u>ELECTORES DISTRITO</u>	<u>VOTANTES</u>	<u>CANDIDATOS</u>	<u>VOTOS</u>
CAPITAL	San Juan	551	229	Albacete, Salvador Sanz y Posse, José Laureano Cuevas, Manuel S. Alcalá del Olmo, Manuel	213 13 2 1
"	Sabana del Palmar		9	Albacete, Salvador	9
"	Naranjito		4	Albacete, Salvador	4
"	Bayamón		22	Albacete, Salvador Tibot, Antonio Alcalá del Olmo, Manuel	20 1 1
"	Toa baja		12	Albacete, Salvador	12
VEGA BAJA	Vega baja	106	29	Alcalá del Olmo, Manuel Canals, Antonio	23 6
"	Vega alta		12	Canals, Antonio Alcalá del Olmo, Manuel Auriolles y Aguado, Pedro Nolasco -dudoso	6 4 1 1
"	Morovis		12	Canals, Antonio Alcalá del Olmo, Manuel	11 1

Vega baja	Corozal	10	Canals, Antonio	10
"	Toa alta	15	Canals, Antonio	15
"	Dorado	16	Canals, Antonio	15
			Alcalá del Olmo, Manuel	1
ARECIBO	Arecibo	93	Martínez, Diego A.	76
			Ruiz del Arbol, Emilio	17
"	Manatí	40	Martínez, Diego A.	30
			Ruiz del Arbol, Emilio	10
"	Ciales	23	Martínez, Diego A.	23
QUEBRADILLAS	Quebradillas	17	Acosta y Calvo, José Julián	17
"	Moca	26	Acosta y Calvo, José Julián	26
"	Camuy	20	Acosta y Calvo, José Julián	20
"	San Sebastián	34	Acosta y Calvo, José Julián	34
"	Hatillo	22	Acosta y Calvo, José Julián	20
			Corujo, Ignacio	1
			Santos Villalón, Manuel	1
AGUADILLA	Aguadilla	87	Martínez Campos, Miguel	87
"	Aguada	29	Martínez Campos, Miguel	29
"	Rincón	17	Martínez Campos, Miguel	17

Aguaadilla	Isabela	67	Martínez Campos, Miguel	67
MAYAGUEZ	Mayagüez	418	Torres de Mendoza, Luis Alfau y Baralt, Antonio Rosich, Miguel	109 67 1
"	Añasco	52	Torres de Mendoza, Luis Alfau y Baralt, Antonio	40 12
"	Las Marías	30	Torres de Mendoza, Luis Alfau y Baralt, Antonio	25 5
SAN GERMAN	San Germán	237	Portilla, Segundo de la	115
"	Hormigueros	22	Portilla, Segundo de la	22
"	Maricao	53	Portilla, Segundo de la	53
SABANA GRANDE	Sabana grande	182	Ledesma y Navajas, Enrique Labra, Rafael María de Portilla, Segundo de la	37 3 2
"	Yauco	60	Ledesma y Navajas, Enrique Labra, Rafael María de	32 28
"	Cabo rojo	70	Labra, Rafael María de Ledesma y Navajas, Enrique	37 33
PONCE	Ponce	388	Vivar y Gazzino, Antonio Muruve y Galán, Miguel	156 31

Ponce	Peñuelas	42	Vivar y Gazzino, Antonio Muruve y Galán, Miguel	22 20
"	Guayanilla	32	Muruve y Galán, Miguel Vivar y Gazzino, Antonio	17 15
GUAYAMA	Guayama	50	Dausá y Delmas, Agustín Lugo Viñas, Wenceslao	29 21
"	Salinas	21	Lugo Viñas, Wenceslao Dausá y Delmas, Agustín Alcalá del Olmo, Manuel	15 5 1
"	Patillas	12	Lugo Viñas, Wenceslao Dausá y Delmas, Agustín	10 2
"	Maunabo	10	Lugo Viñas, Wenceslao Dausá y Delmas, Agustín	9 1
"	Yabucoa	31	Dausá y Delmas, Agustín Lugo Viñas, Wenceslao	17 14
"	Santa Isabel	5	Lugo Viñas, Wenceslao	5
HUMACAO	Humacao	103	Soler y Bou, Antonio Izquierdo, Luis	68 35
"	Luquillo	15	Izquierdo y Roldán, Luis	15
"	"			

Caguas	Aguas buenas	14	Bastón y Cortón, Francisco	14
"	Hato grande	46	Bastón y Cortón, Francisco	46
"	Gurabo	26	Bastón y Cortón, Francisco	23
			Gimenez y Ramírez, Gabriel	3
"4	Juncos	28	Bastón y Cortón, Francisco	26
			Pascual Pérez, Pedro	1
			-en blanco	1
COAMO	Coamo	161	Sanz y Posse, Salustiano	30
"	Barros	11	Sanz y Posse, Salustiano	11
"	Barranquitas	25	Sanz y Posse, Salustiano	25
"	Juana Díaz	32	Sanz y Posse, Salustiano	32
"	Aibonito	15	Sanz y Posse, Salustiano	15
"	Cidra	11	Sanz y Posse, Salustiano	11
UTUADO	Utuaado	185	Guerrero, Teodoro	13
			Ledesma y Navajas, Enrique	11
			Alonso, Félix Símplicio	4
"	Lares	48	Guerrero, Teodoro	46
			Ledesma y Navajas, Enrique	2

Utuario	Adjuntas	48	Guerrero, Teodoro	40
			Ledesma y Navajas, Enrique	6
			Alonso, Félix Simplicio	2

FUENTES: Gaceta de Puerto Rico, 1879, desde el 29 de abril hasta el 13 de mayo. Archivo Histórico Nacional (Madrid). Sección de Ultramar, Legajo 5116/13. Archivo de las Cortes. Sección de Expedientes, Legajo 85, número 9.

(1881)

<u>DISTRITO</u>	<u>COLEGIO</u>	<u>ELECTORES DISTRITO</u>	<u>VOTANTES</u>	<u>CANDIDATOS</u>	<u>VOTOS</u>
CAPITAL	San Juan	---	272	Angoloty y Merlo, Joaquín	273
VEGA BAJA	Vega baja	102	11	Cabezas de Herrera, José	11
"	Vega alta		10	Cabezas de Herrera, José -en blanco	5 5
"	Morovis		8	Cabezas de Herrera, José	8
"	Corozal		17	Cabezas de Herrera, José	17
"	Toa alta		14	Cabezas de Herrera, José	14
"	Dorado		11	Cabezas de Herrera, José	11
ARECIBO	Arecibo	166	54	Alcalá del Olmo, Manuel Vizcarrondo, Julio Vizcarrondo y Andino, Julio	50 3 1
"	Manatí		30	Alcalá del Olmo, Manuel Baldorioty de Castro, Román	29 1
"	Ciales		13	Alcalá del Olmo, Manuel	13
QUEBRADILLAS	Quebradillas	138	15	Ledesma y Navajas, Enrique	15
"	Moca		21	Ledesma y Navajas, Enrique	21

Quebradillas	Camuy	26	Ledesma y Navajas, Enrique	26
"	San Sebastián	30	Ledesma y Navajas, Enrique	30
"	Hatillo	21	Ledesma y Navajas, Enrique	21
AGUADILLA	Aguadilla	72	Alvarez de Toledo, José	72
"	Aguada	30	Alvarez de Toledo, José	30
"	Isabela	55	Alvarez de Toledo, José	55
"	Rincón	14	Alvarez de Toledo, José	14
MAYAGUEZ	Mayagüez	92	Torre Vega, Juan B. de la	92
"	Añasco	27	Torre Vega, Juan B. de la	27
"	Marías	24	Torre Vega, Juan B. de la	24
SABANA GRANDE	Sabana grande	39	Labra, Rafael María de Cartagena, José Agustín	28 11
"	Yauco	63	Labra, Rafael María de Cartagena, José Agustín	41 22
"	Cabo rojo	77	Labra, Rafael María de Cartagena, José Agustín	62 15

SAN GERMAN	San Germán	196	53	Mellado Fernández, Andrés	53
"	Maricao		39	Mellado Fernández, Andrés	39
"	Hormigueros		10	Mellado Fernández, Andrés	10
PONCE	Ponce	344	149	Vivar y Gazzino, Antonio	149
"	Peñuelas		21	Vivar y Gazzino, Antonio	21
"	Guayanilla		17	Vivar y Gazzino, Antonio	17
GUAYAMA	Guayama	---	42	Cañamaque, Francisco	42
"	Salinas		10	Cañamaque, Francisco	10
"	Cayey		16	Cañamaque, Francisco	16
"	Patillas		13	Cañamaque, Francisco	13
"	Maunabo		5	Cañamaque, Francisco	5
"	Yabucoa		22	Cañamaque, Francisco	22
"	Arroyo		13	Cañamaque, Francisco	13
HUMACAO	Humacao	219	48	Soler y Bou, Antonio	48
"	Luquillo		13	Soler y Bou, Antonio	13
"	Piedras		13	Soler y Bou, Antonio	13

Humacao	Naguabo	19	Soler y Bou, Antonio	19
"	Ceiba	5	Soler y Bou, Antonio	5
"	Vieques	8	Soler y Bou, Antonio	8
"	Fajardo	29	Soler y Bou, Antonio	29
CAGUAS	Caguas	63	Ferrerias, José	63
"	Hato grande	42	Ferrerias, José	42
"	Juncos	28	Ferrerias, José	28
RIO PIEDRAS	Rio Piedras	25	Salinas y Setiem, Adolfo	25
"	Trujillo alto	11	Salinas y Setiem, Adolfo	11
"	Carolina	21	Salinas y Setiem, Adolfo	21
"	Loiza	18	Salinas y Setiem, Adolfo	18
"	Rio grande	9	Salinas y Setiem, Adolfo	9
COAMO	Coamo	21	Muruve, Miguel	21
"	Barros	10	Muruve, Miguel	10
"	Barranquitas	17	Muruve, Miguel	17
"	Juana Díaz	28	Muruve, Miguel	28

Coamo	Aibonito	12	Muruve, Miguel	12
"	Cidra	11	Muruve, Miguel	11
UTUADO	Utuaado	44	Posada Aldaz, Juan de	44
"	Lares	45	Posada Aldaz, Juan de	45
"	Adjuntas	38	Posada Aldaz, Juan de	38

FUENTE: Gaceta de Puerto Rico, 1881, Suplemento al número 108, correspondiente al día 8 de septiembre.

(1884)

<u>DISTRITO</u>	<u>COLEGIO</u>	<u>ELECTORES</u> <u>DISTRITO</u>	<u>VOTANTES</u> <u>DISTRITO</u>	<u>CANDIDATOS</u>	<u>VOTOS</u>
CAPITAL		—	190	Arteaga, Fernando Salmerón y Alonso, Nicolás Despujol, Eulogio	188 1 1
VEGA BAJA		—	63	Acuña Paniagua, Francisco de Paula Suárez, Diego	34 29
ARECIBO		157	128	Alcalá del Olmo, Manuel Colón Bonfiglio, Felipe Navarro y Ramírez, Luis Valle, Rafael del	83 43 1 1
QUEBRADILLAS		144	117	Fernández Capetillo, Manuel Ledesma y Navajas, Enrique —en blanco	81 34 2
AGUADILLA			220	Despujol, Eulogio Corchado y Juarbe, Manuel	123 97
YAGUEZ		300	235	Lastres Juia, Francisco Dominguez, José J. —en blanco	131 102 2

SAN GERMAN	89	González Stefani, Joaquín	70
		Terol Ortega, Rafael	19
SABANA GRANDE	148	Labra, Rafael María de	98
	227	Cano y Cueto, Manuel	49
		-en blanco	1
PONCE	180	Salazar y Schuck, Ermelindo	167
		Vivar y Gazzino, Antonio	12
		-en blanco	1
GUAYAMA	110	Martínez, Diego A.	109
		Cintrón, Melquifades	1
HUMACAO	110	Soler y Bou, Antonio	109
	215	-en blanco	1
RIO PIEDRAS	69	Salto y Huelves, Martín del	69
CAGUAS	72	Guerreiro, Teodoro	71
		Sanz y Peray, José	1
COAMO	93	Mellado y Leguey, Andrés	93
UTUADO	78	Vallejo Miranda, Angel	78

* Resultados globales, por no haber conseguido los de los Colegios

FUENTE: Archivo de las Cortes. Sección de Expedientes, Legajo 96, número 8

(1886)

<u>DISTRITO</u>	<u>COLEGIO</u>	<u>HABITANTES DISTRITO</u>	<u>ELECTORES DISTRITO</u>	<u>VOTANTES</u>	<u>CANDIDATOS</u>	<u>VOTOS</u>
CAPITAL	San Juan	57,594	550*	116	Alcalá del Olmo, Manuel	102
					Ledesma y Navajas, Enrique	14
"	Sabana del P.			7	Ledesma y Navajas, Enrique	7
"	Naramjito			7	Ledesma y Navajas, Enrique	7
"	Bayamón			21	Ledesma y Navajas, Enrique	19
					Vizcarrondo, Julio	1
VEGA BAJA	Vega baja	42,260	106*	18	Celis Aguilera, José de	11
					Terol, Rafael	7
"	Vega alta			12	Celis Aguilera, José de	7
					Terol y Ortega, Rafael	5
"	Morovis			8	Celis Aguilera, José de	5
					Terol y Ortega, Rafael	4
"	Corozal			10	Terol y Ortega, Rafael	6
					Celis Aguilera, José de	4
"	Toa alta			10	Terol y Ortega, Rafael	7
					Celis Aguilera, José de	3
"	Dorado			11	Terol y Ortega, Rafael	7
					Celis Aguilera, José de	3

ARECIBO	Arecibo	54,122	139	74	Bosch y Carbonell Alcalá del Olmo, Manuel	52 22
"	Manatí			17	Alcalá del Olmo, Manuel Bosch y Carbonell, Rafael	14 3
"	Ciales			10	Alcalá del Olmo, Manuel Bosch y Carbonell, Rafael	7 3
"	Barceloneta			7	Alcalá del Olmo, Manuel	7
QUEBRADILLAS	Quebradillas	51,245	147	10	Fernández Capetillo, Manuel	10
"	Hatillo			23	Fernández Capetillo, Manuel	23
"	San Sebastián			30	Fernández Capetillo, Manuel Colón Bonfiglio, Felipe	26 4
"	Camuy			20	Fernández Capetillo, Manuel	20
"	Moca			17	Fernández Capetillo, Manuel	17
AGUADILLA	Aguadilla	45,184	212*	62	Torre y Vega, Juan B. de la	62
"	Agüada			56	Torre y Vega, Juan B. de la	56
"	Rincón			24	Torre y Vega, Juan B. de la	24
"	Isabela			11	Torre y Vega, Juan B. de la	11

MAYAGUEZ	Mayagüez	46,515	253	140	Lastres Juiz, Francisco	74
					Vizcarrondo, Julio	64
					Vizcarrudo (sic), Julio	1
					-en blanco	1
"	Añasco			36	Vizcarrondo, Julio	21
					Lastres Juiz, Francisco	15
"	Las Marías			21	Vizcarrondo, Julio	11
					Lastres Juiz, Francisco	10
SAN GERMAN	San Germán	46,574	231*	61	Acosta y Calvo, José Julián	61
"	Maricao			41	Ojeda Martínez, Guadalupe	38
					Acosta y Calvo, José Julián	3
"	Hormigueros			10	Acosta y Calvo, José Julián	6
					Ojeda Martínez, Guadalupe	4
"	Lajas			5	Acosta y Calvo, José Julián	3
					Ojeda Martínez, Guadalupe	2
SABANA GRANDE	Sabana grande	52,159	181	25	Labra, Rafael María de	20
					-en blanco	5
"	Yauco			28	Labra, Rafael María de	28
"	Cabo rojo			41	Labra, Rafael María de	41

PONCE	Ponce	57,635	388*	141	Vizcarrondo, Julio	83
					Vivar y Gazzino, Antonio	39
					Bermúdez, Eduardo	15
					Santiago, Melitón	1
"	Peñuelas			16	Vivar y Gazzino, Antonio	9
					Vizcarrondo, Julio	7
"	Guayanilla			13	Bermúdez, Eduardo	7
					Vizcarrondo, Julio	4
					Vivar y Gazzino, Antonio	2
GUAYAMA	Guayama	59,827	263*	37	Pérez Galdós, Benito	37
"	Arroyo			12	Pérez Galdós, Benito	12
"	Ceyey			14	Pérez Galdós, Benito	14
"	Salinas			9	Pérez Galdós, Benito	9
"	Maunabo			9	Pérez Galdós, Benito	9
"	Patillas			13	Pérez Galdós, Benito	13
"	Yabucoa			18	Pérez Galdós, Benito	18
HUMACAO	Humacao	66,654	292*	41	Soler y Bou, Antonio	41
"	Isiquillo			11	Soler y Bou, Antonio	11

Humacao	Piedras		15	Soler y Bou, Antonio	15
"	Naguabo		20	Soler y Bou, Antonio	20
"	Ceiba		7	Soler y Bou, Antonio	7
"	Fajardo		15	Soler y Bou, Antonio	15
"	Vieques		8	Soler y Bou, Antonio	8
RIO PIEDRAS	Rio Piedras	28,806	26	Gullón y Dabán, Eduardo	26
"	Trujillo alto		11	Gullón y Dabán, Eduardo	12
"	Carolina		25	Gullón y Dabán, Eduardo	25
"	Loiza		18	Gullón y Dabán, Eduardo	18
"	Rio grande		8	Gullón y Dabán, Eduardo	8
CAGUAS	Caguas	49,930	66	Sanz y Peray, José	51
		220*		Sendras y Burín, Antonio	15
				Taulet, Teodoro	1
"	Hato grande		24	Sanz y Peray, José	16
				Sendras y Burín, Antonio	7
				Taulet, Teodoro	1
"	Juncos		24	Sanz y Peray, José	24

Caguas	Aguas buenas		20	Sanz y Peray, José	16
"	"			Sendras y Burín, Antonio	4
"	Gurabo		4	Sanz y Peray, José	4
COAMO	Coamo	61,036	29	Usera y Martín, Julio	29
"	Juana Díaz		31	Usera y Martín, Julio Rodríguez, Gabriel	26 5
"	Cidra		11	Usera y Martín, Julio	11
"	Barros		7	Usera y Martín, Julio	7
"	Barranquitas		18	Usera y Martín, Julio	18
"	Aibonito		21	Usera y Martín, Julio	21
UTUADO	Utuaado	62,078	34	Suárez Sánchez, Diego Meana, Máximo	33 1
"	Lares		35	Suárez Sánchez, Diego Cáceres Plá, Francisco	28 7
"	Adjuntas		24	Suárez Sánchez, Diego	24

* Datos de Sánchez Ortiz y Berástegui

FUENTES: Gaceta de Puerto Rico, 1886, números 43 al 49. Archivo de las Cortes. Sección de Expedientes,
Legajo 103, número 6

(1891)

<u>DISTRITO</u>	<u>COLEGIO</u>	<u>ELECTORES DISTRITO</u>	<u>VOTANTES</u>	<u>CANDIDATOS</u>	<u>VOTOS</u>
CAPITAL	San Juan	442	184	Gallart y Forgas, José Guillermo y de los Heros, César -inútiles	132 51 1
"	Bayamón		19	Gallart y Forgas, José Guillermo y de los Heros, César	13 6
VEGA BAJA	Vega baja	90	12	Vallejo y Miranda, Angel R.	12
"	Morovis		7	Vallejo y Miranda, Angel R.	7
"	Corozal		14	Vallejo y Miranda, Angel R.	14
"	Toa alta		9	Vallejo y Miranda, Angel R.	9
"	Dorado		4	Vallejo y Miranda, Angel R.	4
ARECIBO	Arecibo	136	41	Ramírez Verger Fabié, Manuel	41
"	Ciales		7	Ramírez Verger Fabié, Manuel	7
"	Manatí		7	Ramírez Verger Fabié, Manuel	7
QUEBRADILLAS	Quebradillas	117	10	Despujol y Rigalt, Ignacio	10
"	Camuy		11	Despujol y Rigalt, Ignacio	11

Quebradillas	Moca	22	Despujol y Rigalt, Ignacio	22
"	Hatillo	24	Despujol y Rigalt, Ignacio	24
"	San Sebastián	14	Despujol y Rigalt, Ignacio	14
AGUADILLA	Aguadilla	43	Torre y Vega, Juan Bautista de la	43
"	Aguada	25	Torre y Vega, Juan B. de la	25
"	Rincón	22	Torre y Vega, Juan B. de la	22
"	Isabela	23	Torre y Vega, Juan B. de la	22
			-en blanco	1
MAYAGUEZ	Mayaguez	169	Lastres Juiz, Francisco	88
			Cortón Toro, Antonio	78
			Sardá y Llavería, Agustín	1
			-inútiles	1
"	Añasco	46	Cortón Toro, Antonio	23
			Lastres Juiz, Francisco	23
"	Las Marías	25	Cortón Toro, Antonio	14
			Lastres Juiz, Francisco	11
SAN GERMAN	San Germán	29	Salcedo y Ruiz, Angel	15
			Escoriaza, Pascasio	14
"	Hormigueros	5	Salcedo y Ruiz, Angel	5

San Germán	Maricao	40	Salcedo y Ruiz, Angel	40
"	Lajas	6	Escoriaza, Pascasio	3
			Salcedo y Ruiz, Angel	3
SABANA GRANDE	Sabana grande	20	Labra, Rafael María de	20
"	Yauco	28	Labra, Rafael María de	28
"	Cabo rojo	20	Labra, Rafael María de	17
			González Stéfani, Joaquín	3
PONCE	Ponce	113	Moya Ojanguren, Miguel	98
			Peris Mencheta, Francisco	15
			-inútiles	3
"	Peñuelas	12	Moya Ojanguren, Miguel	8
			Peris Mencheta, Francisco	4
"	Guayanilla	15	Peris Mencheta, Francisco	15
GUAYAMA	Guayama	55	Martínez Campos, Miguel	55
"	Cayey	24	Martínez Campos, Miguel	24
"	Arroyo	31	Martínez Campos, Miguel	31
"	Maunabo	5	Martínez Campos, Miguel	5

Guayama	Yabucoa	22	Martínez Campos, Miguel	22
"	Santa Isabel	4	Martínez Campos, Miguel	4
HUMACAO	Humacao	228	García Gómez, Juan J. Sanz y Peray, José	54 4
"	Fajardo	28	García Gómez, Juan J. Sanz y Peray, José	23 5
"	Ceiba	4	García Gómez, Juan J. Sanz y Peray, José	2 2
"	Luquillo	10	Sanz y Peray, José	10
"	Piedras	13	García Gómez, Juan J. Sanz y Peray, José	8 5
"	Naguabo	17	García Gómez, Juan J. Sanz y Peray, José	13 4
"	Vieques	14	Sanz y Peray, José García Gómez, Juan J.	11 3
RIO PIEDRAS	Rio Piedras	83	Gullón y Dabán, Eduardo	18
"	Carolina	16	Gullón y Dabán, Eduardo	16
"	Trujillo alto	9	Gullón y Dabán, Eduardo	9

Rio Piedras	Loiza	12	Gullón y Dabán, Eduardo	12
"	Rio grande	9	Gullón y Dabán, Eduardo	9
CAGUAS	Caguas	43	Alfau y Baralt, Antonio Sanz y Peray, José	33 10
"	Juncos	28	Sanz y Peray, José Alfau y Baralt, Antonio	17 11
"	Hato grande	28	Sanz y Peray, José	28
"	Gurabo	6	Alfau y Baralt, Antonio Sanz y Peray, José	3 3
"	Aguas buenas	22	Alfau y Baralt, Antonio	22
COAMO	Coamo	27	Userá y Martín, Julio Fernández Arias, Diego	26 1
"	Aibonito	13	Fernández Arias, Diego Usera y Martín, Julio	7 6
"	Juana Díaz	20	Usera y Martín, Julio Fernández Arias, Diego	12 8
"	Barros	4	Fernández Arias, Diego	4
"	Barranquitas	16	Usera y Martín, Julio Fernández Arias, Diego	12 4

Coamo	Cidra	10	Fernández Arias, Diego	10
TUADO	Utua	113	Martín Sánchez, Francisco	46
			Balbás y Capó, Vicente	4
"	Lares	20	Martín Sánchez, Francisco	20
"	Adjuntas	21	Martín Sánchez, Francisco	21

UENTE: Gaceta de Puerto Rico, 1891, números 16 al 24 (5 de febrero al 24 del mismo mes)

(1893)

<u>CIRCUNSCRIP.</u>	<u>COLEGIO</u>	<u>SECCION</u>	<u>HABITANTES</u> <u>CIRCUNSCRIP</u>	<u>ELECTORES</u>	<u>VOTANTES</u>	<u>CANDIDATOS</u>	<u>VOTOS</u>
CAPITAL	San Juan	1	26,387	100	55	Gullón y Dabán, Eduardo García Molinas, Francisco	55 55
	"	2		100	33	García Molinas, Francisco Gullón y Dabán, Eduardo	33 33
	"	3		100	31	Gullón y Dabán, Eduardo García Molinas, Francisco	30 30
	"	4		100	35	Gullón y Dabán, Eduardo García Molinas, Francisco	35 35
	"	5		100	36	Gullón y Dabán, Eduardo García Molinas, Francisco	36 36
	"	6		100	36	Quijano Fernández, Gilberto Gullón y Dabán, Eduardo García Molinas, Francisco	36 35 1
	"	7		100	40	Gullón y Dabán, Eduardo Quijano Fernández, Gilberto	40 40
	"	8		100	56	Gullón y Dabán, Eduardo Quijano Fernández, Gilberto	56 53
	"	9		68	48	García Molinas, Francisco Quijano Fernández, Gilberto	48 48

"	10	100	78	García Molinas, Francisco	78
"				Quijano Fernández, Gilberto	78
"	11	88	54	García Molinas, Francisco	48
"				Quijano Fernández, Gilberto	48
"	12	70	33	García Molinas, Francisco	33
"				Quijano Fernández, Gilberto	32
Capital	Bayamón	1	15,164	García Molinas, Francisco	59
				Quijano Fernández, Gilberto	59
"	2	55	14	García Molinas, Francisco	14
"				Quijano Fernández, Gilberto	14
"	Naranjito	única	21	García Molinas, Francisco	21
"				Quijano Fernández, Gilberto	21
"	Sabana del P. única	68	6	García Molinas, Francisco	6
"				Quijano Fernández, Gilberto	6
"	Toa baja	única	36	García Molinas, Francisco	35
"				Quijano Fernández, Gilberto	35
"				Alcalá del Olmo, Manuel	1
"	Corozal	única	37	García Molinas, Francisco	37
"				Quijano Fernández, Gilberto	37
"	Dorado	única	19	Gullón y Dabán, Eduardo	19
"				García Molinas, Francisco	19

Capital	Morovis	única	8,172	64	37	Gullón y Dabán, Eduardo	37
"	Toa alta	única	6,711	53	38	Quijano Fernández, Gilberto	37
"	Vega baja	única	10,586	94	70	Gullón y Dabán, Eduardo	38
"	Vega alta	única	5,427	30	--	García Molinas, Francisco	38
"	Carolina	1	10,804	82	53	Gullón y Dabán, Eduardo	53
"	"	2		50	47	García Molinas, Francisco	53
"	Loiza	única	9,549	68	45	Gullón y Dabán, Eduardo	47
"	Rio grande	única	6,150	47	28	Quijano Fernández, Gilberto	47
"	Rio Piedras	única	10,816	95	72	Gullón y Dabán, Eduardo	45
"	Trujillo alto	única	3,965	52	29	Quijano Fernández, Gilberto	45
						Gullón y Dabán, Eduardo	28
						García Molinas, Francisco	28
						Gullón y Dabán, Eduardo	72
						García Molinas, Francisco	70
						Gullón y Dabán, Eduardo	29
						García Molinas, Francisco	29

PONCE	Ponce	1	42,388	---	53	Mellado, Fernando	52
						Gascón, Francisco	47
						Soler y Casajuana, Luis	7
						Sanz de Andino, Juan	1
						Juan C. (sic)	1
						-inútiles	1
	"	2			43	Gascón, Juan F.	40
						Mellado, Fernando	41
						Sanz de Andino, Juan C.	3
						Soler y Casajuana, Luis	1
						Juan C. (sic)	1
	"	3			37	Soler y Casajuana, Luis	33
						Gascón, Juan F.	32
						Sanz de Andino, Juan C.	5
						Juan C. (sic)	5
	"	4			43	Mellado, Fernando	39
						Gascón, Juan F.	37
						Soler y Casajuana, Luis	8
						Sanz de Andino, Juan C.	1
	"	5			32	Mellado, Fernando	32
						Gascón, Juan F.	32
	"	6			35	Mellado, Fernando	34
						Gascón, Juan F.	34
						Soler y Casajuana, Luis	2

Ponce	Ponce	7	13	Mellado, Fernando	8
				Soler y Casajuana, Luis	7
				Gascón, Juan F.	8
				Sanz de Andino, Juan C.	2
				Juan C.	1
	"	8	9	Mellado, Fernando	9
				Gascón, Juan F.	9
	"	9	60	Soler y Casajuana, Luis	58
				Gascón, Juan F.	58
				Sanz de Andino, Juan C.	1
				-en blanco	1
"	Guayanilla	única	34	Soler y Casajuana, Luis	32
		7,790		Gascón, Juan F.	32
				Sanz de Andino, Juan C.	2
"	Sabana grande	única	26	Mellado, Fernando	26
		9,580		Gascón, Juan F.	26
"	Yauco	1	54	Soler y Casajuana, Luis	49
		24,327		Gascón, Juan F.	50
				Sanz de Andino, Juan C.	5
"	"	2	29	Soler y Casajuana, Luis	27
				Gascón, Juan F.	27
				Sanz de Andino, Juan C.	2

Ponce	Yauco	3		16	Soler y Casajuana, Luis Gascón, Juan F.	14 14
"	Peñuelas	única	10,001	80	Mellado, Fernando Soler y Casajuana, Luis	80 80
"	Adjuntas	1	16,288	40	Mellado, Fernando Soler y Casajuana, Luis Sanz de Andino, Juan C.	40 40 12
	"	2		37	Mellado, Fernando Soler y Casajuana, Luis Gascón, Juan F.	37 36 1
"	Juana Díaz	1	20,966	33	Mellado, Fernando Soler y Casajuana, Luis Sanz de Andino, Juan C.	32 2 1
	"	2		17	Mellado, Fernando Soler y Casajuana, Luis Sanz de Andino, Juan C.	16 16 1
	"	3		19	Mellado, Fernando Soler y Casajuana, Luis	19 19
"	Barros	única	11,660	9	Soler y Casajuana, Luis Gascón, Juan F.	9 9

MAYAGUEZ*	Mayaguez	153,814	---	---	Lastres Juiz, Francisco	965
					Torre y Vega, Juan B. de la	946
					Balbás y Capó, Vicente	540
<u>DISTRITOS</u>						
ARECIBO	Arecibo	1	29,557	93	Díaz Caneja y Alonso, Ignacio	42
"	"	2		99	Díaz Caneja y Alonso, Ignacio	42
"	"	3		98	Díaz Caneja y Alonso, Ignacio	62
"	"	4		63	Díaz Caneja y Alonso, Ignacio	13
"	Manatí	1	11,479	52	Díaz Caneja y Alonso, Ignacio	35
"	"	2		56	Díaz Caneja y Alonso, Ignacio	29
"	Barceloneta única		6,183	71	Díaz Caneja y Alonso, Ignacio	40
QUEBRADILLAS	Quebradillas única		5,902	--	Santos y Fernández Laza, José de	23
"	Camuy única		9,130	---	Santos y Fernández Laza, José de	33
"	Hatillo única		9,585	---	Santos y Fernández Laza, José de	47
"	Isabela	1	12,450	--	Santos y Fernández Laza, José de	16
"	"	2		---	Santos y Fernández Laza, José de	16
"	Lares	1	17,097	--	Santos y Fernández Laza, José de	54

Quebradillas	Lares	2	--	26	Santos y Fernández Laza, José de	26
GUAYAMA	Guayama	1	5,908	80	Martínez Campos, Ramón	55
"	"	2		80	Martínez Campos, Ramón	50
"	Arroyo	única	13,472	85	Martínez Campos, Ramón	50
"	Maunabo	única	5,725	39	Martínez Campos, Ramón	31
"	Patillas	única	10,376	61	Martínez Campos, Ramón	21
"	Salinas	única	4,177	29	Martínez Campos, Ramón	11
"	Yabucoa	única	12,862	82	Martínez Campos, Ramón	46
HUMACAO*			58,101	586	García Gómez, Juan José	360
CAGUAS*			48,421	445	Alfau y Baralt, Antonio	154
					Toro y Saldaña, Fernando del	14
					Sanz y Peray, José	2
					Sagasta, Práxedes	1
COAMO	Coamo	1	10,495	85	Corrales Movedo, Enrique	51
"	"	2		67	Corrales Movedo, Enrique	22
"	Aibonito	única	6,329	99	Corrales Movedo, Enrique	64
"	Barranquitas	única	5,735	73	Corrales Movedo, Enrique	26

Coamo	Santa Isabel	única	3,332	38	17	Corrales Movedo, Enrique	1
"	Cidra	única	6,001	72	30	Corrales Movedo, Enrique	3
"	Cayey	1	12,389	62	44	Corrales Movedo, Enrique	4
	"	2		50	32	Corrales Movedo, Enrique	3
UTUADO*			44,157	464	322	Martín Sánchez, Francisco	16
						Gascón y Fernández, Juan F.	15

* Datos globales, por no existir los de los Colegios y Secciones

FUENTES: Gaceta de Puerto Rico, 1893, números 16 al 29 y 48. Archivo de las Cortes. Sección de Expedientes Legajo 107, número 42. Diario de Sesiones de las Cortes, 1890, Apéndice 1 al número 161

(1896)

<u>CIRCUNSCRIPCION</u>	<u>COLEGIO</u>	<u>SECCION</u>	<u>ELECTORES</u>	<u>VOTANTES</u>	<u>CANDIDATOS</u>	<u>VOT</u>
CAPITAL	San Juan	1	87	60	González Rodríguez, Enrique Morlesín Soto, Juan	60
	"	2	88	52	González Rodríguez, Enrique Morlesín Soto, Juan	58
	"	3	78	53	González Rodríguez, Enrique Gullón y Dabán, Eduardo	52
	"	4	84	31	Gullón y Dabán, Eduardo Morlesín Soto, Juan González Rodríguez, Enrique	51
	"	5	---	27	González Rodríguez, Enrique Gullón y Dabán, Eduardo	53
	"	6	94	50	Morlesín Soto, Juan Gullón y Dabán, Eduardo González Rodríguez, Enrique	53
	"	7	94	51	González Rodríguez, Enrique Morlesín Soto, Juan Gullón y Dabán, Eduardo García Molinas, Francisco	26
						21
						15
						27
						27
						40
						40
						10

Capital	San Juan	8	96	57	González Rodríguez, Enrique Gullón y Dabán, Eduardo	57 43
	"	9	65	51	Morlesín Soto, Juan Gullón y Dabán, Eduardo González Rodríguez, Enrique	47 47 4
	"	10	99	50	González Rodríguez, Enrique Morlesín Soto, Juan	50 50
	"	11	85	51	González Rodríguez, Enrique Gullón y Dabán, Eduardo	51 51
	"	12	--	36	Gullón y Dabán, Eduardo Morlesín Soto, Juan González Rodríguez, Enrique	36 30 16
"	Bayamón	1	--	46	González Rodríguez, Enrique Morlesín Soto, Juan	46 46
	"	2	--	14	González Rodríguez, Enrique Morlesín Soto, Juan	14 14
	"	3	--	30	Morlesín Soto, Juan Gullón y Dabán, Eduardo	30 30
"	Comerio	única	--	6	González Rodríguez, Enrique Morlesín Soto, Juan	6 6

Capital	Toa baja	única	--	17	Morlesín Soto, Juan Gullón y Dabán, Eduardo	17
"	Corozal	única	--	35	González Rodríguez, Enrique Morlesín Soto, Juan	35
"	Dorado	única	--	40	González Rodríguez, Enrique Morlesín Soto, Juan	40
"	Toa alta	única	--	19	González Rodríguez, Enrique Gullón y Dabán, Eduardo	19
"	Loiza	única	--	57	González Rodríguez, Enrique Morlesín Soto, Juan	57
"	Rio grande	única	--	44	González Rodríguez, Enrique Morlesín Soto, Juan	44
"	Rio Piedras	única	--	64	González Rodríguez, Enrique Gullón y Dabán, Eduardo	64
"	Trujillo alto	única	--	16	González Rodríguez, Enrique Morlesín Soto, Juan	16
"	Carolina	1	83	35	González Rodríguez, Enrique Gullón y Dabán, Eduardo	35
		2	45	30	González Rodríguez, Enrique Gullón y Dabán, Eduardo	30

Capital	Vega baja	única	--	64	González Rodríguez, Enrique	64
					Gullón y Dabán, Eduardo	64
"	Morovis	única	--	25	Morlesín Soto, Juan	25
					Gullón y Dabán, Eduardo	25
PONCE*	Ponce	1	--	83	Soler y Casajuana, Luis	83
					Cassá y Rouvier, Francisco	45
					Vallejo Miranda, Angel Ramón María	38
"	"	2	395	64	Soler y Casajuana, Luis	64
					Vallejo y Miranda, Angel Ramón María	45
					Cassá y Rouvier, Francisco	19
"	Adjuntas	1	--	51	Cassá y Rouvier, Francisco	51
					Vallejo y Miranda, Angel Ramón María	30
					Soler y Casajuana, Luis	21
"	"	2	--	50	Cassá y Rouvier, Francisco	50
					Vallejo Miranda, Angel Ramón María	50
"	Peñuelas	única	--	40	Vallejo Miranda, Angel Ramón María	40
					Cassá Rouvier, Francisco	31
					Soler y Casajuana, Luis	9
"	Guayanilla	única	--	35	Vallejo Miranda, Angel Ramón María	32
					Cassá y Rouvier, Angel Ramón María	35
					Soler y Casajuana, Luis	3

Ponce	Yauco	1	--	38	Vallejo Miranda, Angel Ramón María	38
					Soler y Casajuana, Luis	14
					Cassá y Rouvier, Francisco	25
					Gascón, Juan Francisco	1
	"	2	--	27	Vallejo Miranda, Angel Ramón María	27
					Cassá y Rouvier, Francisco	17
					Soler y Casajuana, Luis	11
	"	3	--	3	Vallejo Miranda, Angel Ramón María	3
					Soler y Casajuana, Francisco	2
					Cassá y Rouvier, Francisco	1
"	Sabana grande única		--	23	Vallejo Miranda, Angel Ramón María	23
					Cassá y Rouvier, Francisco	23
"	Juana Díaz	1	--	30	Vallejo Miranda, Angel Ramón María	30
					Soler y Casajuana, Luis	20
					Cassá y Rouvier, Francisco	10
	"	2	--	21	Vallejo Miranda, Angel Ramón María	21
					Cassá y Rouvier, Francisco	11
					Soler y Casajuana, Luis	10
	"	3	--	30	Cassá y Rouvier, Francisco	30
					Vallejo Miranda, Angel Ramón María	15
					Soler y Casajuana, Luis	15

Ponce	Barros	única	--	9	Vallejo Miranda, Angel Ramón María	7
					Cassá y Rouvier, Francisco	9
					Soler y Casajuana, Luis	2
MAYAGUEZ	Mayagüez	1	321	157	Canti y Polo, Santiago	157
					Lastres Juiz, Francisco	91
					Balbás y Capó, Vicente	66
	"	2	311	129	Canti y Polo, Santiago	129
					Lastres Juiz, Francisco	80
					Balbás y Capó, Vicente	49
"	Hormigueros	única	--	12	Lastres Juiz, Francisco	12
					Balbás y Capó, Vicente	12
					Canti y Polo, Santiago	10
"	Cabo rojo	única	--	76	Lastres Juiz, Francisco	76
					Canti y Polo, Santiago	65
					Balbás y Capó, Vicente	11
"	Lajas	única	--	31	Lastres Juiz, Francisco	31
					Balbás y Capó, Vicente	24
					Canti y Polo, Santiago	7
"	San Germán	única	--	134	Lastres Juiz, Francisco	134
					Balbás y Capó, Vicente	104
					Canti y Polo, Santiago	30

Mayagüez	Maricao	única	--	102	Lastres Juiz, Francisco Balbás y Capó, Vicente Cantí y Polo, Santiago	40 82 24
"	Las Marías	única	--	41	Lastres Juiz, Francisco Balbás y Capó, Vicente Cantí y Polo, Santiago	40 34 7
"	Añasco	única	--	49	Lastres Juiz, Francisco Balbás y Capó, Vicente Cantí y Polo, Santiago	34 34 30
"	S. Sebastián	única	--	49	Lastres Juiz, Francisco Balbás y Capó, Vicente Cantí y Polo, Santiago	34 34 30
"	Aguada	única	--	116	Lastres Juiz, Francisco Balbás y Capó, Vicente Cantí y Polo, Santiago	116 66 50
"	Aguadilla	única	--	80	Lastres Juiz, Francisco Balbás y Capó, Vicente Cantí y Polo, Santiago	80 57 23
"	Rincón	única	--	50	Lastres Juiz, Francisco Balbás y Capó, Vicente Cantí y Polo, Santiago	50 40 10

Mayagüez	Moca	única	--	16	Balbás y Capó, Vicente	16
					Lastres Juiz, Francisco	11
					Cantí y Polo, Santiago	5

DISTRITOS

ARECIBO**			469	234	Díaz Caneja, Ignacio	234
-----------	--	--	-----	-----	----------------------	-----

QUEBRADILLAS	Quebradillas	única	--	19	López Landrón, Rafael	10
					Santos y Fernández Lazza, José de	9

"	Camuy	única	--	22	López Landrón, Rafael	11
					Santos y Fernández Lazza, José de	11

"	Hatillo	única	--	45	López Landrón, Rafael	45
---	---------	-------	----	----	-----------------------	----

"	Isabela	única	--	32	López Landrón, Rafael	32
---	---------	-------	----	----	-----------------------	----

"	Lares	1	--	52	López Landrón, Rafael	52
---	-------	---	----	----	-----------------------	----

"	"	2	--	41	López Landrón, Rafael	41
---	---	---	----	----	-----------------------	----

GUAYAMA	Guayama	única	--	112	Martínez Campos, Miguel	112
---------	---------	-------	----	-----	-------------------------	-----

"	Arroyo	única	--	23	Martínez Campos, Miguel	23
---	--------	-------	----	----	-------------------------	----

"	Maunabo	única	--	24	Martínez Campos, Miguel	24
---	---------	-------	----	----	-------------------------	----

"	Patillas	única	--	25	Martínez Campos, Miguel	25
---	----------	-------	----	----	-------------------------	----

Guayama	Salinas	única	--	21	Martínez Campos, Miguel	21
"	Yabucoa	única	--	29	Martínez Campos, Miguel	29
HUMACAO **			--	296	García Gómez, Juan José	296
CAGUAS **			--	250	Hoces y Losada, José Ramón de	250
COAMO	Coamo	1	--	39	Corrales Morado, Enrique	39
"	"	2	--	16	Corrales Morado, Enrique	16
"	Aibonito	única	--	68	Corrales Morado, Enrique	63
"	Cayey	1	--	38	Torre y Vega, Juan B. de la	1
					Corrales Morado, Enrique	22
					-en blanco	15
	"	2	49	31	Corrales Morado, Enrique	29
					-en blanco	2
"	Barranquitas	única	--	19	Corrales Morado, Enrique	19
"	Santa Isabel	única	--	22	Corrales Morado, Enrique	22
"	Cidra	única	--	32	Corrales Morado, Enrique	32
UTUADO	Utua	1	--	62	Marín Sánchez, Francisco	62

Utuaao	Utuaao	2	--	62	Martín Sánchez, Francisco	62
	"	3	--	64	Martín Sánchez, Francisco	64
	"	4	--	14	Martín Sánchez, Francisco	61
"	Ciales	1	--	61	Martín Sánchez, Francisco	61
	"	2	--	35	Martín Sánchez, Francisco	35

* Datos incompletos del Colegio de Ponce

** Datos globales del Distrito, por no existir los de los Colegios

FUENTES: Gaceta de Puerto Rico, 1896, números 56 a 74. Archivo de las Cortes. Sección de Expedientes, Legajo 109, número 42.

(1898)

<u>CIRCUNSCRIPCION</u>	<u>ELECTORES</u> <u>CIRCUNSCRIP</u>	<u>VOTANTES</u> <u>DISTRITO</u>	<u>CANDIDATOS</u>	<u>VOTOS</u>
CAPITAL	25,346		García Molinas, Francisco	18,361
			Gullón y Dabán, Eduardo	10,650
			Labra, Rafael María de	8,165
			González Rodríguez, Enrique	3,227
			Martín Sánchez, Francisco	2,066
			Labra, José María	6
			Arzuaga, Pedro	8
			Muñoz Rivera, Luis	6
			Blanco y Sosa, Julián E.	4
			Barbosa, José Celso	4
			Hernández Guevara, Juan	33
			Hernández López, Juan	1
			Mosquera, Enrique	1
			Pi y Margall, Francisco	2
			Salmerón, Nicolás	1
			Canals y Vilaró, Salvador	1
			Costa, Félix	1
			González Beltrán, Enrique	412
			Weyler, Valeriano	1
			Moya, Miguel	2
			Egozcue, Manuel	2
			González y García, Enrique	22

González Rodríguez, Eduardo 208

PONCE*

33,410	Degetau González, Federico	7,407
	Sanz de Andino, Juan Cervantes	7,152
	Díez Perojo, José del	7,150

MAYAGUEZ

33,198	Moya, Miguel	11,594
	Silva, José F.	11,378
	Cortón, Antonio	6,552
	Sardá y Llavería, Agustín	6,151
	Bonafoux, Félix	1,457
	Lastres Juiz, Francisco	844
	Lastre, Francisco	12
	Silva, Antonio F.	9
	Gascón, Francisco	8
	Lastre, Francisco	6
	Lastre Ruiz, Francisco	3
	Labra, Rafael María	2
	Labra, José María de	2
	Labra, José María	1
	Rodríguez Sierra, Miguel	1
	Sardá, Agustín	1

DISTRITOS

ARECIBO*	10,175	6,395	Colón Bonfiglio, Felipe	6,395
----------	--------	-------	-------------------------	-------

QUEBRADILLAS	11,119	8,775	Gascón, Juan Francisco	7,983
			Labra, Ramón María de	720
			López Landrón, Rafael	69
			Peña, Nicanor	2
			Pelegrí Rotger, Francisco	1
GUAYAMA	11,304	7,128	Cortón, Antonio	6,722
			Sardá, Agustín	406
HUMACAO	10,294	6,808	Cintrón, Melquíades	6,807
			García Gómez, Juan José	1
CAGUAS*	10,964	8,640	Sanz de Andino, Juan Cervantes	8,540
COAMO	9,043	8,160	Francos Rodríguez, José	6,894
			Francos y R., José	1
			Sardá y Llavería, Agustín	1,265
UTUADO	10,215	7,708	Méndez Cardona, Ramón	7,687
			Colón Bonfiglio, Felipe	21

* Datos globales, por no existir los de los Colegios y Secciones

NTES: Gaceta de Puerto Rico, 1898, número 87. Archivo de las Cortes. Sección de Expedientes, Legajo 111, número 42. Archivo Histórico Nacional (Madrid). Sección de Ultramar, Legajo 5143/53.

CENSOS ELECTORALES

(1869 - 1871 - 1873 - 1893)

(1869)

<u>CIRCUNSCRIPCION</u>	<u>DISTRITO</u>	<u>SECCION</u>	<u>CONTRIBUYENTES</u>	<u>CAPACIDADES</u>	<u>TOTAL ELECTORES</u>
CAPITAL	Capital	San Juan	229	458	687
	"	Bayamón	27	31	58
	"	Carolina	13	5	18
	"	Dorado	16	3	19
	"	Guainabo	7	3	10
	"	Loiza	9	3	12
	"	Rio grande	16	4	20
	"	Rio Piedras	14	4	18
	"	Toa baja	12	1	13
	"	Trujillo alto	4	4	8
	"	Caguas	26	17	43
	"	Aguas buenas	17	3	20
	"	Cayey	48	10	58
	"	Cidra	0	4	4
	"	Gurabo	17	6	23
	"	Hato grande	6	5	11
	"	Juncos	11	4	15
	"	Sabana del Palmar	--	--	46
	"	Humacao	44	28	72
	"	Ceiba	8	3	11
	"	Fajardo	33	16	49
	"	Yabucoa	27	15	42
	"	Luquillo	7	3	10

<u>CIRCUNSCRIPCION</u>	<u>DISTRITO</u>	<u>SECCION</u>	<u>CONTRIBUYENTES</u>	<u>CAPACIDADES</u>	<u>TOTAL ELECTORES</u>
Capital	Humacao	Naguebo	31	15	46
	"	Piedras	12	6	18
	"	Vieques	5	8	13
"	Guayama	Guayama	28	21	49
	"	Arroyo	32	16	48
	"	Patillas	8	6	14
ARECIBO	Arecibo	Arecibo	65	33	98
	"	Barros	8	3	11
	"	Camuy	17	8	25
	"	Ciales	0	4	4
	"	Corozal	15	3	18
	"	Hatillo	30	5	35
	"	Manatí	48	9	57
	"	Morovis	5	2	7
	"	Naranjito	1	2	3
	"	Quebradillas	11	10	21
	"	Toa alta	15	14	29
	"	Utua	55	10	65
	"	Vega alta	2	6	8
	"	Vega baja	47	7	54
"	Aguadilla	Aguadilla	52	48	100
	"	Aguada	49	14	63
	"	Isabela	54	12	66

<u>CIRCUNSCRIPCION</u>	<u>DISTRITO</u>	<u>SECCION</u>	<u>CONTRIBUYENTES</u>	<u>CAPACIDADES</u>	<u>TOTAL ELECTORES</u>
Arecibo	Aguadilla	Lares	30	8	38
	"	Moca	49	9	58
	"	San Sebastián	49	16	65
MAYAGUEZ	Mayagüez	Mayagüez	237	101	338
	"	Añasco	56	17	73
	"	Cabo rojo	52	15	67
	"	San Germán	217	35	252
	"	Sabana grande	43	10	53
"	Ponce	Ponce	139	90	229
	"	Aibonito	12	3	15
	"	Adjuntas	44	6	50
	"	Barranquitas	33	3	36
	"	Coamo	22	3	25
	"	Guayanilla	36	9	45
	"	Yauco	36	12	48
	"	Juana Díaz	36	14	50
	"	Peñuelas	38	6	44
	"	Salinas	12	10	22
	"	Santa Isabel	0	5	5
	"	Rincón	--	--	21

FUENTE: Gaceta de Puerto Rico, 1869, Suplementos a las Gacetas números 53, 54, 55 y 56

<u>DISTRITO</u>	<u>COLEGIO</u>	<u>POBLACION</u>	<u>ELECTORES</u>		<u>TOTALES</u>	
			<u>CONTRIB.</u>	<u>CAPACID.</u>	<u>PUEBLOS</u>	<u>DISTRITOS</u>
CAPITAL	San Juan	17,805	470	1,605	2,075	'
	Sab. del P.	5,462	44	86	130	'
	Naranjito	3,846	10	96	106	'
	Bayamón	9,690	85	200	285	'
	Toa baja	<u>3,219</u> <u>40,022</u>	<u>29</u> <u>633</u>	<u>84</u> <u>2,071</u>	<u>113</u> <u>2,709</u>	<u>2,709</u>
VEGA BAJA	Vega baja	8,459	77	123	200	'
	Vega alta	5,290	21	61	82	'
	Morón	7,846	35	172	207	'
	Corozal	9,726	49	107	156	'
	Toa alta	5,130	43	123	171	'
	Dorado	<u>3,004</u> <u>39,455</u>	<u>23</u> <u>253</u>	<u>61</u> <u>647</u>	<u>84</u> <u>900</u>	<u>900</u>
ARECIBO	Arecibo	20,784	175	510	685	'
	Manatí	12,424	114	220	334	'
	Ciales	<u>6,662</u>	<u>43</u>	<u>117</u>	<u>160</u>	'
		<u>39,870</u>	<u>332</u>	<u>827</u>	<u>1,169</u>	<u>1,169</u>
Quebradillas	Quebradil.	6,014	27	122	149	'
	Moca	10,456	92	133	230	'
	Camuy	8,334	72	156	238	'
	Pepino	10,892	39	212	301	'
	Hatillo	<u>7,061</u> <u>42,757</u>	<u>59</u> <u>339</u>	<u>113</u> <u>751</u>	<u>172</u> <u>1,090</u>	<u>1,090</u>

<u>DISTRITO</u>	<u>COLEGIO</u>	<u>POBLACION</u>	<u>CONTRIB.</u>	<u>CAPAC.</u>	<u>PUEBLO</u>	<u>DISTRITO</u>
AGUADILLA%	Aguadilla	13,101	94	604	693	'
"	Aguada	9,063	97	167	264	'
"	Rincón	5,496	33	57	90	
"	Isabela	12,586	106	268	374	'
"		<u>40,246</u>	<u>330</u>	<u>1,096</u>	<u>1,426</u>	<u>1,426</u>
MAYAGUEZ	Mayaguez	29,127	423	1,181	1,604	"
"	Añasco	13,189	138	211	349	'
		<u>42,316</u>	<u>561</u>	<u>1,392</u>	<u>1,953</u>	<u>1,953</u>
SAN GERMAN	San Germán	42,399	435	906	1,341	'
		<u>42,399</u>	<u>435</u>	906	1,341	<u>1,341</u>
SABANA GRANDE	Sabana grande	8,461	98	144	242	
"	Yauco	15,404	74	147	221	
"	Cabo rojo	15,437	194	218	412	
		<u>39,302</u>	<u>366</u>	509	875	875
PONCE	Ponce	24,959	432	1,228	1,660	'
"	Peñuelas	9,177	80	153	233	'
"	Guayanilla	6,283	56	94	150	'
		<u>40,419</u>	<u>568</u>	<u>1,475</u>	<u>2,043</u>	<u>2,043</u>
GUAYAMA	Guayama	5,899	125	202	327	'
"	Salinas	2,336	29	55	34	'
"	Cayey	7,445	86	92	178	'
"	Arroyo	3,934	55	153	208	'
"	Patillas	7,666	37	102	139	'

GUAYANIA	Maunabo	3	40	43	'
"	Yabucoa	88	166	254	'
"	Santa Isabel	22	63	85	'
		<u>445</u>	<u>873</u>	<u>1,318</u>	<u>1,318</u>
HUMACAO	Humacao	84	273	357	'
"	Luquillo	24	86	110	'
"	Piedras 4	47	105	152	'
"	Naguabo	48	182	230	'
"	Ceiba	21	70	91	'
"	Fajardo	55	175	230	'
"	Vieques	<u>33</u>	<u>71</u>	<u>104</u>	'
		<u>312</u>	<u>962</u>	<u>1,274</u>	<u>1,274</u>
RIO PIEDRAS	Rio Piedras	49	112	161	'
"	Guainabo	18	67	85	'
"	Trujillo alto	26	69	95	'
"	Trujillo bajo	38	55	93	'
"	Carolina	29	100	129	'
"	Loiza	41	78	119	'
"	Rio grande	<u>19</u>	<u>69</u>	<u>88</u>	'
		<u>220</u>	<u>550</u>	<u>770</u>	<u>770</u>
CAGUAS	CAGUAS	117	153	270	'
"	Agua buenas	40	98	138	'
"	Hato grande	63	140	203	'
"	Gurabo	53	95	148	'
"	Juncos	<u>57</u>	<u>66</u>	<u>123</u>	'
		<u>330</u>	<u>552</u>	<u>882</u>	<u>882</u>

COAMO	Coamo	6,176	57	139	196	'
"	Barros	6,703	23	65	88	'
"	Barranquitas	5,326	89	98	187	'
"	Juana Díaz	15,006	--	--	---	'
"	Aibonito	2,968	40	69	109	'
"	Cidra	<u>6,023</u>	<u>59</u>	<u>85</u>	<u>144</u>	'
		43,202	268	456	724	<u>724</u>
UTUADO	Utuaado	19,547	128	315	443	'
"	Lares	14,467	87	293	380	'
"	Adjuntas	<u>8,243</u>	<u>142</u>	<u>158</u>	<u>300</u>	'
		42,257	357	766	1,123	<u>1,123</u>

FUENTES: Archivo Histórico de Ponce (Puerto Rico), Legajo 72. Archivo Histórico Nacional (Madrid). Sección de Ultramar, Legajo 5104/26. Archivo General de Puerto Rico. Colección de la Diputación Provincial, Signatura 58 - A - 1, Legajo 128, Expediente 27.

CENSO ELECTORAL

(1873)

<u>DISTRITO</u>	<u>SECCION</u>	<u>HABITANTES</u>	<u>ELECTORES</u> <u>CONTRIB.</u>	<u>CAPACID.</u>	<u>TOTAL</u> <u>SECCION</u>	<u>TOTALES</u> <u>DISTRITO</u>
CAPITAL	San Juan	17,305	716	2,742	3,458	'
"	Sabana del Palmar	5,462	367	86	453	'
"	Naranjito	3,846	254	139	393	'
"	Bayamón	9,690	397	171	568	'
"	Toa baja	<u>3,219</u> 40,022	<u>88</u> 1,822	<u>105</u> 3,243	<u>193</u>	' <u>5,065</u>
VEGA BAJA	Vega baja	8,459	402	134	536	'
"	Vega alta	5,290	173	67	242	'
"	Morovis	7,846	356	140	476	'
"	Corozal	9,726	493	88	581	'
"	Toa alta	5,130	249	67	316	'
"	Dorado	<u>3,400</u> 39,455	<u>86</u> 1,739	<u>71</u> 569	<u>157</u>	' <u>2,308</u>
ARECIBO	Arecibo	20,784	691	588	1,279	'
"	Manatí	12,424	483	270	753	'

Arecibo	Ciales	<u>6,662</u>	<u>515</u>	<u>94</u>	<u>753</u>	<u>'</u>
		39,870	1,689	952		2,541
QUEBRADILLAS	Quebradillas	6,014	257	139	396	'
"	Moca	10,456	613	121	734	'
"	Camuy	8,334	339	191	530	'
"	S. Sebastián	10,892	526	195	721	'
"	Hatillo	<u>7,061</u>	<u>329</u>	<u>140</u>	<u>469</u>	<u>'</u>
		42,757	2,064	786		2,850
AGUADILLA	Aguadilla	13,101	350	581	931	'
"	Aguada	9,063	449	212	661	'
"	Rincón	5,496	325	41	366	'
"	Isabela	<u>12,586</u>	<u>616</u>	<u>198</u>	<u>814</u>	<u>'</u>
		40,246	1,740	1,032		2,772
MAYAGUEZ	Mayagüez	29,127	983	1,281	2,264	'
"	Añasco	13,189	608	231	839	'
"	Las Marías	<u>-----</u>	<u>403</u>	<u>44</u>	<u>447</u>	<u>'</u>
			1,994	1,556		3,550

SAN GERMAN	San Germán	<u>42,399</u>	<u>1,729</u>	<u>693</u>	<u>2,422</u>	<u>'</u>
		42,399	1,729	693		2,422
SABANA GRANDE	Sabana grande	8,461	382	159	541	'
"	Yauco	15,404	1,022	165	1,187	'
"	Cabo rojo	<u>15,437</u>	<u>515</u>	<u>425</u>	<u>940</u>	<u>'</u>
		39,302	1,919	749		2,668
PONCE	Ponce	24,959	1,436	1,986	3,422	'
"	Peñuelas	9,177	561	72	633	'
"	Guayanilla	<u>6,283</u>	<u>311</u>	<u>92</u>	<u>403</u>	<u>'</u>
		40,419	2,308	2,150		4,458
GUAYAMA	Guayama	5,899	364	644	1,008	'
"	Salinas	2,336	137	77	214	'
"	Cayey	7,445	495	264	760	'
"	Arroyo	3,934	158	264	422	'
"	Patillas	7,666	320	149	469	'
"	Maunabo	3,200	192	73	270	'
"	Yabucoa	8,948	245	192	537	'
"	Santa Isabel	<u>1,721</u>	<u>71</u>	<u>46</u>	<u>117</u>	<u>'</u>
		41,149	2,083	1,716		3,792

HUMACAO	Humacao	8,251	377	386	763	'
"	Luquillo	3,949	192	73	265	'
"	Piedras	7,217	354	118	472	'
"	Naguabo	7,473	209	136	345	'
"	Ceiba	3,333	97	71	168	'
"	Fajardo	7,021	190	223	413	'
"	Vieques	<u>4,282</u>	<u>98</u>	<u>108</u>	<u>206</u>	'
		41,527	1,517	1,115		<u>2,632</u>

RIO PIEDRAS	Rio Piedras	5,915	198	139	337	'
"	Guainabo	5,783	313	42	355	'
"	Trujillo alto	3,973	169	43	212	'
"	Trujillo bajo	6,288	184	76	260	'
"	Carolina	2,694	128	135	363	'
"	Loiza	7,668	415	113	528	'
"	Rio grande	<u>5,726</u>	<u>201</u>	<u>59</u>	<u>260</u>	'
		38,147	1,608	607		<u>2,215</u>

AGUAS	Caguas	12,764	440	290	730	'
"	Aguas buenas	6,656	296	59	355	'

Caguas	Hato grande	9,783	625	95	720	'
"	Gurabo	4,556	221	105	326	'
"	Juncos	<u>6,160</u>	<u>273</u>	<u>94</u>	<u>367</u>	'
		39,919	1,855	643		<u>2,498</u>

COAMO	Coamo	6,176	367	154	521	'
"	Barros	6,703	363	104	467	'
"	Barranquitas	5,326	351	122	473	'
"	Juana Díaz	15,006	553	542	1,095	'
"	Aibonito	2,968	199	86	281	'
"	Cidra	<u>6,023</u>	<u>313</u>	<u>139</u>	<u>451</u>	'
		43,202	2,142	1,147		<u>3,289</u>

UTUADO	Utuaado	19,547	1,017	281	1,298	'
"	Lares	14,467	585	304	889	'
"	Adjuntas	<u>8,243</u>	<u>585</u>	<u>145</u>	<u>730</u>	'
		42,257	2,187	730		<u>2,917</u>

FUENTE: Archivo General de Puerto Rico (San Juan). Colección de la Diputación Provincial, Signatura 58 -A- 1 Legajo 128, Expediente 15.

<u>CIRCUNSCRIPCION</u>	<u>SECCION</u>	(1893) <u>POBLACION</u>	<u>ELECTORES</u> <u>CIRCUNSCRIPCION</u>
CAPITAL			
	San Juan	26,387	2,173
	Bayamón	15,164	
	Naranjito	6,647	
	Sabana del Palmar	6,623	
	Toa baja	3,253	
	Corozal	9,618	
	Dorado	3,925	
	Morovis	8,172	
	Toa alta	6,711	
	Vega alta	5,427	
	Vega baja	10,586	
	Carolina	10,804	
	Loiza	9,549	
	Rio grande	6,150	
	Rio Piedras	10,816	
	Trujillo alto	<u>3,965</u>	
		<u>143,807</u>	

PONCE

Ponce	42,388	1,775
-------	--------	-------

Guayanilla	7,790	
------------	-------	--

Sabana grande	9,580	
---------------	-------	--

Yauco	24,327	
-------	--------	--

Peñuelas	10,001	
----------	--------	--

Adjuntas	16,288	
----------	--------	--

Juana Díaz	20,966	
------------	--------	--

Barros	<u>11,660</u>	
	143,000	

MAYAGUEZ

Mayaguez	27,901	sin datos
----------	--------	-----------

Hormigueros	3,123	
-------------	-------	--

Cabo rojo	16,659	
-----------	--------	--

Lajas	9,081	
-------	-------	--

San Germán	19,827	
------------	--------	--

Maricao	7,673	
---------	-------	--

Las Marías	9,669	
------------	-------	--

Añasco	12,413	
--------	--------	--

San Sebastián	13,961	
---------------	--------	--

Rincón	5,836	
--------	-------	--

Aguada	9,536	
--------	-------	--

Koca	11,076	
------	--------	--

Layaquez	Aguadilla	<u>16,140</u>	
		152,895	
		<hr/>	

DISTRITOS

ARECIBO	Arecibo	29,557	532
	Panati	11,479	
	Barceloneta	<u>6,183</u>	
		47,219	
		<hr/>	

QUEBRADILLAS	Quebradillas	5,902	sin datos
	Camuy	9,130	
	Hatillo	9,585	
	Isabela	12,450	
	Lares	<u>17,164</u>	
		54,164	
		<hr/>	

GUAYAMA	Guayama	5,908	456
	Arroyo	13,472	
	Maunabo	5,725	
	Patillas	10,376	
	Salinas	4,177	
	Yabucoa	<u>12,862</u>	
		52,520	
		<hr/>	

HUMACAO	Humacao	14,726	586
	Ceiba	4,265	
	Fajardo	8,779	
	Luquillo	6,529	
	Naguabo	9,876	
	Piedras	7,951	
	Vieques	<u>5,975</u>	
		58,101	
		<hr/>	
CAGUAS	Caguas	14,603	445
	Aguas buenas	6,787	
	Gurabo	7,088	
	Hato grande	12,626	
	Juncos	<u>7,317</u>	
		48,421	
		<hr/>	
COAMO	Coamo	10,495	546
	Aibonito	6,329	
	Barranquitas	5,735	
	Santa Isabel	8,332	
	Cidra	6,001	

Coamo	Cayey	<u>12,389</u>	
		44,281	
		<hr/>	
UTUADO	Utuaao	31,209	464
	Ciales	<u>12,948</u>	
		44,157	
		<hr/>	

FUENTE: Gaceta de Puerto Rico, 1892, número 157